LÍNEAS Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SALA DE LO CIVIL 2020

Corte Suprema de Justicia
Centro de Documentación Judicial

San Salvador, 2022

Gerente General de Asuntos Jurídicos
Lcda. Quiriam Geraldina Pinto Quintanilla

Jefa del Centro de Documentación Judicial
Lcda. Evelin Carolina Del Cid Flores

Edición y revisión

Jefe del Departamento de Publicaciones
Lic. José Alejandro Cubías Bonilla

Jefa de la Sección de Diseño Gráfico
Lcda. Roxana Maricela López Segovia

Jefe de la Sección de Producción Offset
Martín Rodolfo Pocasangre Posada

Diagramación y diseño de portada
Mgtr. Andrea Nathalia García Peña

Impresión
Alexis Edgardo Belloso
Jaime Ernesto Cubas Campos
Óscar Arístides Castro

Acabado final
Alexander Adalberto Valdez Castro
Alfonso Carrillo Sánchez
Freddy Armando Gómez Martínez
José Francisco Pérez Hernández
Jorge Alberto Reyes Roque

© Corte Suprema de Justicia
Centro de Gobierno
San Salvador
Impreso en El Salvador.

Corte Suprema de Justicia
2022

Lic. Óscar Alberto López Jerez
PRESIDENTE

Sala de lo Constitucional

Lic. Óscar Alberto López Jerez
PRESIDENTE

Lcda. Elsy Dueñas Lovos
VOCAL

Lic. José Ángel Pérez Chacón
VOCAL

MSc. Luis Javier Suárez Magaña
VOCAL

MSc. Héctor Nahún Martínez García
VOCAL

Sala de lo Civil

Lic. Alex David Marroquín Martínez
PRESIDENTE

Dra. Dafne Yanira Sánchez de Muñoz
VOCAL

MSc. Leonardo Ramírez Murcia
VOCAL

Sala de lo Penal

Lcda. Sandra Luz Chicas Bautista
PRESIDENTA

Lic. Roberto Carlos Calderón Escobar
VOCAL

Lic. Miguel Ángel Flores Durel
VOCAL

Sala de lo Contencioso Administrativo

Dr. José Ernesto Clímaco Valiente
PRESIDENTE

MSc. Sergio Luis Rivera Márquez
VOCAL

Lcda. Paula Patricia Velásquez Centeno
VOCAL

Dr. Henry Alexander Mejía
VOCAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE LO CIVIL
2020

Presidente: Lic. Óscar Alberto López Jerez

Vocal: Dr. Ovidio Bonilla Flores

Vocal: Dra. Dafne Yanira Sánchez de Muñoz

SECCIÓN DE DERECHO SOCIAL
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

Coordinador: Lic. Francisco José Martínez Regalado

Colaboradores: Lcda. Karina María Rodríguez Martínez
Lcda. Sandra Hernández de Vega

SECCIÓN DE DERECHO PRIVADO
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

Coordinadora: Lcda. Lizbeth Avilés de Carrillo

Colaboradores: Lcda. Sandra Bonilla Durán
Lic. Óscar Antonio Canales Cisco
Lic. Manuel Morán

CONTENIDO

PRÓLOGO i

MATERIA: CIVIL Y MERCANTIL 1

MATERIA: FAMILIA 149

MATERIA: LABORAL 179

MATERIA: MERCANTIL 295

MATERIA: MEDIO AMBIENTE 307

El contenido de esta publicación es un extracto literal de las sentencias pronunciadas por la Sala de lo Civil.
Los temas y subtemas son responsabilidad de las Secciones de Derecho Social y de Derecho Privado del Centro de Documentación Judicial.

PRÓLOGO

La presente edición pretende ser, más que un documento informativo, un texto útil para los interesados en conocer y aplicar la jurisprudencia como fuente de derecho.

La recopilación y tratamiento jurídico de la información se lleva a cabo en el Centro de Documentación Judicial, oficina cuyo objetivo fundamental es divulgar este material, tanto a través de las revistas, como mediante el uso de medios automatizados para cuyos efectos cuenta con una base de datos que puede ser consultada por toda la comunidad jurídica nacional e internacional y otras personas interesadas en el quehacer judicial. Con este esfuerzo la Corte Suprema de Justicia, pretende dar a conocer las Líneas y Criterios Jurisprudenciales, que están constituidas por la extracción literal, entrecomillada del punto jurídico relevante, obtenido de la sentencia, después de una lectura integral y profunda, en el que se refleja el aporte del juzgador al análisis del caso sometido a su consideración, sin cortar la idea principal.

En algunos casos, la sentencia puede contener análisis de distintos temas que, aunque relacionados con el principal, se separa en subtemas para que el lector pueda visualizarlos de mejor forma, sin afectar la comprensión general de lo resuelto.

Desde el punto de vista del lector, las Líneas y Criterios Jurisprudenciales representan una información valiosa para conocer, desarrollar o investigar determinados temas jurídicos.

Esperamos con esta edición y las siguientes satisfacer una de las demandas principales de la sociedad, como es la transparencia en el ámbito de la justicia salvadoreña.

LÍNEAS Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SALA DE LO CIVIL 2020

MATERIA: CIVIL Y MERCANTIL

ACCIÓN REIVINDICATORIA

PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO

"3.1 El art. 35 inc. 4° LTODARPRH: establece lo siguiente: A falta del título de propiedad original inscrito, tendrá el mismo valor y fuerza la nueva certificación de acta de remate o adjudicación o el nuevo testimonio que, para reponerlos, expidieren el Juez de 1° Instancia, Alcalde Municipal, Gobernador, Cartulario o Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su caso, siempre que tuviere al pie, extendida por la oficina del Registro, la razón de la inscripción, por certificación.

3.2 A juicio de la recurrente, existe inaplicación de ley, porque las certificaciones literales agregadas al proceso, no prueban el dominio que alega el demandado reconviniente sobre el inmueble objeto de litigio, ya que no estableció en autos la imposibilidad de presentar el título original inscrito a su favor o la reposición de éste.

3.3 En el caso de mérito, consta a folio [...] de la pieza principal, certificación literal de escritura pública inscrita de compraventa, otorgada por la señora [...], a favor del señor [...], presentada junto con la demanda en el proceso declarativo común de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, promovido por la licenciada [...], como apoderada del señor [...], en contra del señor [...].

A folio [...], se encuentra agregada contestación de la demanda en sentido negativo y reconvención de proceso declarativo común de acción reivindicatoria de dominio, promovido por el licenciado [...], como apoderado del señor [...], junto con fotocopia simple del relacionado testimonio de escritura pública de compraventa, otorgado por la señora [...], a favor del demandado reconviniente a fol. [...].

3.4 Al respecto, esta Sala en reiterada jurisprudencia ha sostenido que, la certificación extendida por el Registrador de la Propiedad Raíz e Hipotecas, hace fe para probar el dominio, siempre que se cumpla con la condición o presupuesto establecido en el inc. cuarto y quinto del Art. 35 del Reglamento del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, cuyo nombre ha sido sustituido por el de "Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas", según D.L. N° 838, del 13 de octubre del 2005, publicado en el D..0. N° 224, Tomo 369, del 01 de diciembre del 2005; vale decir, siempre que no se tenga el título original, y que no se haya podido obtener la reposición del mismo; pero esta imposibilidad, debe comprobarse

ante el funcionario que se va a presentar, dicha certificación registral; en otras palabras, la parte interesada, está obligada a demostrar la causa o razón por la que no ha podido presentar el título original o el nuevo testimonio del mismo. (Sentencia bajo referencia 90-C-2004; 270-CAC-2013; 77-CAC-2010)

La Cámara en su sentencia a folio [...], tuvo por acreditada la propiedad del demandado reconviniente con la certificación y fotocopia simple agregadas al proceso.

3.5 En tal virtud, esta Sala concluye que se configura la infracción de ley denunciada por inaplicación del art. 35 inc. 4° LTODARPRH, por lo que se impone casar la sentencia de mérito y se deberá pronunciar la que a derecho corresponda.

V. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

1. En el caso de mérito, la parte actora pretende adquirir por prescripción extraordinaria un inmueble que alega haber poseído de manera pacífica e ininterrumpida por el plazo de treinta años.

Por otro lado, la parte demandada reconviniente pretende reivindicar el inmueble que alega es de su propiedad.

Resulta pertinente establecer que el estudio del presente caso, se realizará a partir de la demanda del proceso declarativo común de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, agregada a folio [...] de la pieza principal, debido a que los restantes folios pertenecen al procedimiento abreviado con él, que se inició el presente juicio, en razón de la alteración del valor del bien litigioso.

2. Aclarado lo anterior, en cuanto a la prescripción extraordinaria de dominio, según lo prescribe el art. 2249 CC., así:

"El dominio de cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse:

1° Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno;

2° Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio;

3° Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias:

1° Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos treinta años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción,

2° Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo."

3. Así, esta Sala observa, que a folio [...], consta la demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, en la cual la parte actora alegó que desde mil novecientos ochenta y siete, posee con total autonomía el inmueble objeto de litigio, con lo cual se cumple con el plazo legal de treinta años, que por tratarse de una cosa susceptible a prescribir y carecer de un título de propiedad, cumple con los presupuestos establecidos en los art. 2231, 745, 2232, 2249, 2241, 2237 y 2245 CC, para adquirir por prescripción.

En ese sentido, se afirma por el actor, que el ingreso a dicho inmueble fue de manera pacífica, debido a una compraventa verbal vía teléfono, por encontrarse en ese entonces la propietaria señora [...], en los Estados Unidos de América.

No obstante lo anterior, de conformidad con el art. 667 CC, la tradición de los bienes raíces y los derechos reales constituidos en ellos, salvo excepciones legales, se efectuarán por medio de un instrumento público, por lo tanto, tal aseveración no será considerada por esta Sala.

4. Ahora bien, en cuanto a la prueba testimonial, la Cámara consideró a folio [...] de la pieza de segunda instancia, que el relato de los testigos no coincidía con el relato fáctico planteado en la demanda, pues dos de los testigos manifestaron que la vendedora estaba personalmente realizando la venta y no en Estados Unidos de América, como se expuso en la demanda; por lo que, concluyó que el juez a quo, observó prueba donde no había.

5. Sin embargo, cabe advertir que las declaraciones relacionadas por la Cámara de los referidos testigos, con relación al lugar donde se encontraba la vendedora no inciden en el objeto de la pretensión, ya que estos únicamente refieren lo siguiente: el testigo [...] expresa "[...] yo fui testigo de la compra que hiso Don [...], fui un testigo de esa compra, estando en mi casa yo mi hermana me habló por teléfono que fuera a la casa de ella ya encontré [...] ahí me dice ella mi hermana [...], le vende a [...], me dijo lo que es el solar de la montaña y quiere suplicarte a ver si vas vos de testigo y yo también a ver, para que me entregue el dinero a mí me dijo, y vamos a ir mañana me dijo ella así verdad, vaya pues le dije yo está bien, ya [...] ya había estado tratando con ella delante mí y de mi hermana y ya quedaron que le iba a entregar el dinero a mi hermana y ya me fui yo [...]" (sic).

Con respecto a la declaración del segundo testigo señora [...], se expresó en lo atinente a la venta: "[...] me consta porque yo vi cuando don [...], compró el terreno y el testigo de él cuando él le entregó el dinero era mi esposo, él falleció yo andaba con él; mi esposo se llama [...]; bueno yo lo que vi que le contaron el dinero a la señora [...], ella vendía, ella le vendió a don [...]; mi esposo, Don [...] lo buscó a él para que él, le fuera testigo de que él le entregaban el dinero a la señora; en la misma posesión donde compraron ahí le entregaron el dinero [...]" (sic).

Esta Sala advierte, de las deposiciones de las testigos antes relacionadas, que la diferencia entre la forma en que se expuso en la demanda de cómo se realizó la venta, estriba únicamente en quién recibió la suma de dinero objeto de la compraventa del inmueble en litigio; ya que de la declaración de los testigos se desprende que el precio se le entregó personalmente a la vendedora señora [...].

Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala considera que el hecho de quién recibió la suma de dinero no afecta a los elementos propios de la pretensión, ya que con dichas deposiciones se logró establecer y comprobar los presupuestos para la prescripción. Primero, el plazo, ya que según los testigos el señor [...], posee el inmueble desde mil novecientos ochenta y cuatro; es decir, a la fecha, lo reconocen por más de treinta años como dueño del terreno; segundo, la buena fe, que desde siempre ha realizado actos públicos de dueño, tales como agricultura, construcción de cercas y limpieza del lugar y que durante todo este tiempo nadie lo ha sacado o reclamado la propiedad de dicho inmueble y con ello la posesión."

RECONVENCIÓN DE ACCIÓN REIVINDICATORIA DE DOMINIO

"De acuerdo con el art. 745 CC, la posesión recae sobre una cosa determinada y su tenencia debe ser material, pacífica y no interrumpida sobre el inmueble por más de treinta años consecutivos, lo cual se ha comprobado con la prueba testimonial antes relacionada, por lo que es procedente decretar la prescripción a favor de la actora de conformidad con los arts. 2231 y 2249 CC.

En cuanto a la reconvención de acción reivindicatoria de dominio, el demandado reconviniente expresó que mediante contrato de compraventa otorgada a su favor por la señora [...], del cual consta agregada fotocopia simple, es legítimo propietario del inmueble objeto de litigio.

De acuerdo a las consideraciones hechas por la Cámara, tuvo por acreditado el derecho de dominio del demandado reconviniente, con la certificación literal de la compraventa antes relacionada, presentada por la parte que pretende la prescripción extraordinaria de dominio.

Al respecto, según lo prescribe el Art. 891 del Código Civil, son tres los presupuestos que deben de establecerse o probarse por la persona que ejerce la acción de dominio o reivindicación: 1) El dominio de la cosa por parte del actor; 2) La posesión de la cosa por el demandado; y, 3) La identificación o singularización de la cosa a reivindicar.

El reivindicador debe probar su derecho de dominio sobre la cosa que pide le sea restituida, ya que este derecho se constituye en el primer supuesto base de la acción reivindicatoria.

En el caso de mérito, la parte demandada reconviniente para probar su derecho de dominio, presentó junto con la reconvención, fotocopia simple de la compraventa inscrita, así como de la certificación literal de la misma, extendida por el Registro de la Propiedad Raíz e hipoteca de la Cuarta Sección de Oriente, con sede en San Francisco Gotera.

En ese sentido, el Art. 35 del Reglamento del Registro de las Propiedad Raíz e Hipotecas, hoy llamada "Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas", establece claramente el supuesto en el cual las certificaciones registrales tendrán el mismo valor y fuerza probatoria que el título de dominio originalmente inscrito, de manera que para poder hacer uso de este medio de prueba, es necesario que el actor establezca procesalmente, la causa o razón por la que no ha podido presentar el título original o el nuevo testimonio del mismo."

LA CERTIFICACIÓN REGISTRAL PRESENTADA NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO PRUEBA IDÓNEA DEL DOMINIO QUE SE PRETENDE REIVINDICAR

"En el caso en examen, la parte que pretende la acción reivindicatoria de dominio, no ha establecido en el proceso la circunstancia de no haber podido obtener la reposición del título original inscrito a su favor, por lo que la certificación registral presentada no puede ser considerada como prueba idónea del dominio que se pretende reivindicar.

Por consiguiente, el actor no ha comprobado legalmente el supuesto más significativo a que se refiere el art. 891 CC, el cual es el dominio del bien reclamado.

De manera que, esta Sala concluye, que la certificación registral presentada no produce los efectos de plena prueba, pues la ley ha condicionado su valor probatorio, por lo que, en consecuencia, al no cumplir con el presupuesto básico respecto del dominio para ejercer la acción reivindicatoria de domino, es procedente desestimar dicha pretensión."

Sala de lo Civil, número de referencia: 286-CAC-2019, fecha de la resolución: 29/10/2020

LA CÁMARA HA INCURRIDO EN LA OMISIÓN QUE SE LE ATRIBUYE, AL NO HABER APLICADO LOS INCISOS 4° Y 5° DEL ART. 35 DE LA LEY RELATIVA A LAS TARIFAS Y OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS

"V. Análisis del motivo de fondo: inaplicación de la norma que regula el supuesto que se controvierte, con infracción del art. 35 de la Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.

La disposición que se alega infringida, establece lo siguiente:

"*Art. 35.- El Registrador expedirá las certificaciones que se le pidan ya sean literales o en relación de los asientos y de los libros que estén a su cargo.*

La solicitud se presentará por escrito y la certificación se extenderá al pie de éste.

En la certificación se *incluirán las notas marginales que tenga el asiento que se certifique.*

A falta del título de propiedad original inscrito, tendrá el mismo valor y fuerza la nueva certificación del acta de remate o adjudicación o el nuevo testimonio que, para reponerlos, expidieren el Juez de 1a. Instancia, Alcalde Municipal, Gobernador, Cartulario o Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su caso, siempre que tuviere al pie, extendida por la oficina del registro la razón de la inscripción, por certificación.

Pero si no se pudiere hacer la reposición del título en los casos y por las autoridades *y cartularios antes* expresados, la *certificación literal que,* a *solicitud* de *parte,* expida *el Registrador de la respectiva acta de inscripción,* tendrá el *mismo valor* y producirá *los mismos efectos que el título primitivo inscrito.*

Respecto de los títulos hipotecarios, se *estará a lo dispuesto por el artículo 1222 Pr".*

1. Los recurrentes afirman que la Cámara inaplicó los incisos 4° y 5°, de la ley antes relacionada, pues el documento con el que se acreditó la propiedad es insuficiente al no cumplir con las formas que esa disposición establece. Alegan que el demandante no presentó el título original inscrito, sino una escritura de rectificación de donación, instrumento que no es idóneo para acreditar el derecho de propiedad, ni puede tener un valor probatorio que la ley no le concede.

2. La Cámara ha consignado en su sentencia, que la escritura de rectificación de donación presentada como prueba de dominio por la parte reivindicante, ha sido correctamente valorada por el tribunal de primera instancia, pues consta en la misma que los otorgantes ratificaron la donación del inmueble en disputa, se corrigió el error cometido en el instrumento de donación respecto del área de la porción a segregar, se corrigió, además, la descripción técnica de dicha porción de terreno a segregar y donar, y se ha ratificado en todo lo demás el contenido expresado en la escritura de donación, "lo que significa que en ésta va inmersa la tradición del derecho de propiedad sobre el inmueble donado a favor de la parte actora el cual está inscrito a su favor en un porcentaje del 100% del derecho de propiedad en la matrícula ********, asiento *** del Centro Nacional de Registros" (sic).

3. En cuanto a este motivo de casación, esta Sala advierte que la parte demandante ha procurado legitimarse como propietaria del bien raíz que pretende reivindicar, con un testimonio de escritura matriz de rectificación de escritura de donación, otorgada en la ciudad de Sonsonate, a las nueve horas del día ocho de julio de dos mil seis, ante los oficios de la notario [...], instrumento en el que se relaciona que el inmueble objeto de la disputa, le fue donado pura y simplemente al señor […], y en el que se procede a corregir el área y descripción técnica del inmueble donado, ratificándose en todo lo demás, el contenido de la escritura de donación pura y simple.

No obstante lo anterior, no se presentó junto con la demanda, la escritura pública de donación y tradición del dominio debidamente inscrita, que permita constatar que la tradición del dominio ha tenido lugar entre los contratantes. Por lo que con el instrumento de rectificación presentado ha quedado acreditado en el proceso la existencia del título traslaticio de dominio, que es la donación, no así del modo de adquirir, que es la tradición del dominio, en favor del señor […].

De lo anterior, se deduce que la escritura pública de rectificación de la donación presentada en el proceso, carece de idoneidad para acreditar el derecho de propiedad del señor […], quien en el supuesto de no contar con el título de dominio original, podía haber procedido de la manera establecida en los incisos 4° y 5° del art. 35 de la Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, y así, reponer su título de dominio.

Al no haber acreditado el señor […], su calidad de propietario del bien objeto del litigio, queda de manifiesto la falta de un presupuesto esencial de la acción reivindicatoria, pues, de conformidad con el art. 895 CC, la acción de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda de la cosa, por lo que ante la existencia del defecto señalado, la demanda presentada por el señor […] es improponible y así deberá declararse.

En virtud de lo anterior, esta Sala concluye, que la Cámara ha incurrido en la omisión que se le atribuye, al no haber aplicado los incisos 4° y 5° del art. 35 de la Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, por lo que procede casar la sentencia de mérito por este motivo y, declarar, mediante la resolución que se deberá justicar, improponible la demanda planteada.

VII. Al proceder la casación de la sentencia impugnada, por infracción al art. 35 de la Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, tal como se concluyó en el considerando V de esta sentencia, se determinó que debía justificarse la resolución declarando improponible la demanda, a continuación pasamos a efectuar tal justificación, en los términos siguientes:

1. En cuanto a la defensa del derecho real de propiedad, el art. 891 CC, dispone que la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de la que no está en posesión y, que ejerce con el fin de que el poseedor de dicha cosa se la restituya.

Complementariamente, el art. 895 CC, establece que la acción reivindicatoria o de dominio, corresponde al que tiene la propiedad plena o nudo de la cosa.

De lo dicho con anterioridad, se desprende que son tres los extremos que debe probar quien ejerce esta acción real, así:

a) En primer lugar, debe establecerse la propiedad, por lo que el actor tiene que probar que es el dueño de la cosa que trata de reivindicar, calidad que se acredita con el título de dominio debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas, respectivo;

b) En segundo lugar, se debe probar que el propietario del bien a reivindicar no está en posesión del mismo, sino que es el demandado quien está poseyendo el inmueble cuya restitución se pretende, ejerciendo un dominio aparente sobre el bien reclamado, razón por la que el demandante se encuentre privado de la posesión de dicho bien; y,

c) Finalmente, la cosa que se reivindica debe ser singularizada, lo que permite identificarla con exactitud, requisito que incide directamente en la restitución del inmueble objeto del litigio."

LA FALTA DE INCORPORACIÓN AL PROCESO DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE ESTABLEZCA LA PROPIEDAD SOBRE EL BIEN A REIVINDICAR, PRESUPUESTO ESENCIAL PARA LA PRETENSIÓN REIVINDICATORIA, DEVIENE EN UNA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA QUE CONSTITUYE UNA DE LAS CAUSAS DE IMPROPONIBILIDAD DE LA DEMANDA

"2. En el caso bajo estudio, el primer requisito que debe cumplir el señor […] al ejercer la acción reivindicatoria, es el relativo a acreditar en el proceso, la propiedad sobre la cosa a reivindicar.

En ese sentido, la parte actora ha presentado como título de dominio una escritura de rectificación, otorgada a las nueve horas del ocho de julio de dos mil seis, ante los oficios de la notario [...], en la que consta que comparecieron a su otorgamiento los señores […] y el señor […].

En dicho instrumento se relaciona que la señora […] le donó al señor […] el inmueble cuya reivindicación se demanda. La escritura pública de rectificación agregada en el proceso, está orientada a corregir el área y descripción técnica consignadas en el instrumento de donación antes relacionado, ratificando en

todo lo demás el contenido de la correspondiente escritura de donación pura y simple que rectifica.

Ahora bien, se advierte que en la escritura de rectificación antes relacionada, no se hizo mención alguna sobre la tradición del dominio del inmueble donado a favor de la parte actora, señor […], ni siquiera por remisión.

Debe tenerse en cuenta que la prueba idónea del derecho de propiedad de un inmueble, en casos como el analizado, es el testimonio de la escritura en la que se hace transferencia del dominio sobre el inmueble, el cual, para que surta efectos contra terceros, debe estar inscrito en el correspondiente registro; y de no constar con tal documento, debe presentarse certificación extendida en los términos dispuestos por el art. 35 de la Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.

Al no haberse presentado dentro del proceso el instrumento de donación y tradición que se ha rectificado, ni algún otro que pruebe la tradición del dominio a favor del señor […], no hay prueba suficiente que determine su calidad de propietario del inmueble que pretende se le restituya por la vía de la reivindicación.

De lo dicho en párrafos anteriores, se evidencia que no se ha acreditado en el proceso el primer requisito indispensable para la procedencia de la acción reivindicatoria -prueba del dominio del inmueble en cuestión-, de conformidad con los arts. 568, 891, 895, 667 y 680 CC; situación que impide realizar un pronunciamiento de fondo de sobre la pretensión.

Ante dicha omisión, se vuelve innecesario entrar al análisis de los siguientes dos elementos de la acción reivindicatoria, quedando por tanto imprejuzgada la pretensión y a salvo el derecho material de la parte actora.

La falta de incorporación al proceso del documento con el que se establezca la propiedad del señor […], sobre el bien a reivindicar, lo cual es un presupuesto esencial para la pretensión reivindicatoria, deviene en una falta de legitimación activa que constituye una de las causas de improponibilidad de la demanda, según lo dispuesto en el art. 277 CPCM, lo que así impone declararse."

Sala de lo Civil, número de referencia: 255-CAC-2018, fecha de la resolución: 17/09/2020

ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA

NO CONSTITUYE UN RECURSO, DADO QUE NO IMPIDE QUE LA RESOLUCIÓN ADQUIERA FIRMEZA, SINO UNA FACULTAD DE CORRECCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES O ACLARACIONES DE CONCEPTOS OSCUROS EN LA SENTENCIA O AUTO DEFINITIVO.

"1. Se advierte que el escrito de mérito se ha interpuesto dentro del plazo que señala el art. 225 inc. 2° CPCM.

2. En cuanto a su contenido, debe tenerse en cuenta que el art. 225 CPCM, establece: "Las sentencias y autos definitivos son invariables una vez firmados.

No obstante, los jueces y tribunales podrán, de oficio, en los dos días siguientes a la notificación, efectuar las aclaraciones de conceptos oscuros que se pongan de manifiesto y corregir los errores materiales que se detecten.

Las partes podrán solicitar, en el plazo establecido en el inciso anterior, las mismas aclaraciones y correcciones, y el juez o tribunal deberá resolver en los dos días siguientes.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente a las omisiones y defectos que se detecten en los antecedentes de hecho o fundamentos de derecho y cuya corrección sea imprescindible para poder proceder a la impugnación o a la ejecución.

Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos en cualquier momento del proceso, aun durante la etapa de ejecución de la sentencia".

3. Se advierte, que para subsanar los errores materiales se ha previsto el procedimiento denominado "aclaración de la sentencia o auto que le pone fin al proceso", por lo que éste no constituye un recurso, dado que no impide que la resolución adquiera firmeza, sino una facultad de corrección y rectificación de errores materiales o aclaraciones de conceptos oscuros en la sentencia o auto definitivo."

DEFINICIÓN DE "ERROR MATERIAL" Y "CONCEPTO OSCURO"

"Al respecto, esta Sala, en su jurisprudencia, ha sostenido que para comprender el alcance del art. 225 CPCM, es necesario definir los conceptos "error material" y "concepto oscuro" a que alude la disposición citada.

El error material, de hecho o aritmético, es aquel cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica por evidenciarse el error directamente, al deducirse con plena certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones.

En cambio, un concepto oscuro es aquel término ininteligible o de comprensión difícil, por ser incierto o poco claro; deficiencia que adolece el concepto o en razón de la expresión u oración en el que ha sido utilizado.

Ahora bien, es importante destacar, que el objeto de la aclaración por oscuridad o errores materiales, está determinado por el principio de invariabilidad de las decisiones judiciales que constituyen una garantía ligada al principio de seguridad jurídica y al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual se encuentra regulado en el art. 2 inc. 10 Cn, lo cual impide que por medio de la solicitud de aclaración pueda obtenerse directa o indirectamente una modificación al fallo o a la parte dispositiva de la resolución.

La aclaración de conceptos oscuros o subsanación de omisiones tiene un carácter excepcional, necesariamente sujeta a una interpretación restrictiva, exclusivamente para salvar meros desajustes o contradicciones patentes de la sentencia, al margen de todo juicio de valor o apreciación jurídica, (Sala de lo Civil, ref. 263-CAC-2017, dictada a las diez horas del día catorce de mayo de dos mil dieciocho)."

NO PUEDE ACEPTARSE LA PRETENSIÓN DE UTILIZAR "LA ACLARACIÓN" COMO UN MEDIO PARA CONTROVERTIR EL AUTO DEFINITIVO, Y MUCHO MENOS, SIN SER ESPECÍFICA, DE ACUERDO A LAS FORMALIDADES EXIGIDAS POR LA LEY

"4. En el caso en estudio, se advierte que la aclaración solicitada por la impetrante, no cumple con los supuestos señalados en el art. 225 CPCM, pues no especifica el "tipo de aclaración" que pretende, si es sobre puntos oscuros en el auto de improcedencia, a efecto de que sean aclarados, o si se trata de errores materiales en el mismo; sino por el contrario, la recurrente por esta Sala, pretende controvertir la decisión, atacando el análisis jurídico realizado dando una serie de argumentaciones encaminadas a una mera inconformidad con la motivación adoptada por esta Sala, que de ninguna manera pueden considerarse como conceptos oscuros o errores materiales, que exijan aclaración por esta vía.

Es decir, no puede aceptarse la pretensión de la licenciada [...], de utilizar "la aclaración", como un medio para controvertir el auto definitivo, y mucho menos, sin ser específica, de acuerdo a las formalidades exigidas por la ley.

Con base en lo antes dicho, esta Sala concluye que la aclaración así solicitada, no cumple los requisitos de interposición, por lo que la misma será declarara sin lugar."

Sala de lo Civil, número de referencia: 93-CAC-2019, fecha de la resolución: 17/12/2020

LA ACLARACIÓN SOLICITADA NO CUMPLE CON LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ART. 225 CPCM

"Para el caso que hoy nos ocupa, el licenciado […], en el escrito que solicita la aclaración, manifestó: "[...] Conforme al art. 225 CPCM, solicito a este honorable tribunal, me ociareis los conceptos vertidos en el motivo de fondo: aplicación errónea del art. 1416 c.c., en el Recurso interpuesto, he sostenido que el art. 1416 c.c., es el fundamento del texto de la cláusula, que el plazo podría prorrogarse por periodos de un año, siempre y cuando los pagos fueren puntuales y se cumplieren todas las cláusulas del contrato, y si no mediare aviso por escrito de dos meses antes de su vencimiento, de parte de los contratantes de darlo por terminado. De la sola lectura de dicha cláusula, se establece que la terminación del contrato no quedó sujeta, a la voluntad de solo una de las partes contratantes, sino de ambas.- En tal sentido que, las partes, tenían que estar de acuerdo, dos meses antes del vencimiento, para dar por terminado dicho contrato [...] En virtud de lo anterior, solicito ... me aclaréis de donde surge la interpretación, que la cláusula segunda "confiere poder a ambas partes contratantes, a efecto de dar por terminado de forma unilateral el mismo" (refiriéndose al contrato de arrendamiento), pues lo que textualmente dice dicha cláusula es "... y si no mediare aviso por escrito de dos meses antes de su vencimiento, de parte de los contratantes de darlo por terminado" como veis la voluntad de dar por terminado el contrato, quedo establecida, como una condición bilateral y no unilateral, su finalización no dependía de una de las partes, sino de ambos [...]". (sic)

3. Se advierte, que para subsanar los errores materiales, se utiliza el procedimiento denominado “aclaración de la sentencia o auto que le pone fin al proceso”, por lo que éste no constituye un recurso, dado que no impide que la resolución adquiera firmeza, sino una facultad de corrección y rectificación de errores materiales o aclaraciones de conceptos oscuros en la sentencia o auto definitivo.

Al respecto, esta Sala en su jurisprudencia, ha sostenido que para comprender el alcance del art. 225 CPCM, es necesario definir los conceptos “error material” y “concepto oscuro” a que alude la disposición citada.

El error material, de hecho o aritmético, es aquel cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al deducirse con plena certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones.

En cambio, un concepto oscuro, es aquél término ininteligible o de comprensión difícil, por ser incierto o poco claro; o la deficiencia que adolece el concepto, en razón de la expresión u oración en el que ha sido utilizado dicho concepto.

Ahora bien, es importante destacar, que el objeto de la aclaración por oscuridad u omisión, susceptibles de aclaración, está determinado por el principio de invariabilidad de las decisiones judiciales que constituyen una garantía ligada al principio de seguridad jurídica y al derecho a la tutela judicial efectiva, contenidos en el art. 2 inc. 10 Cn; lo cual impide que por medio de la solicitud de aclaración, pueda obtenerse directa o indirectamente una modificación al fallo o a la parte dispositiva de la resolución.

La aclaración de conceptos oscuros o subsanación de omisiones tiene un carácter excepcional, necesariamente sujeta a una interpretación restrictiva, exclusivamente para salvar meros desajustes o contradicciones patentes de la sentencia, al margen de todo juicio de valor o apreciación jurídica, (Sala de lo Civil, ref. 263-CAC-2017, dictada a las diez horas del día catorce de mayo de dos mil dieciocho).

En el caso en estudio, la aclaración solicitada por el impetrante, no cumple con los supuestos señalados en el art. 225 CPCM, pues no ha solicitado aclaración sobre puntos oscuros en la sentencia dictada en casación, a efecto de que sean aclarados, o errores materiales en la misma.

Por el contrario el recurrente pretende controvertir el fondo de la decisión, refutando el análisis jurídico realizado, dando una serie de argumentaciones mediante las que expresa una mera inconformidad con la motivación adoptada por esta Sala; los que de ninguna manera pueden considerarse como conceptos oscuros o errores materiales, que exijan aclaración por esta vía.

Es decir, no puede aceptarse la pretensión del licenciado […], de utilizar “la aclaración” como un medio para controvertir el fondo de la sentencia definitiva, y mucho menos sin ser específico.

Con base en lo antes dicho, esta Sala concluye que la aclaración así solicitada, no cumple los requisitos de interposición, por lo que la misma será declarara sin lugar.”

HABIENDO PRECLUIDO EL MOMENTO PROCESAL PARA ALEGAR NULIDADES, Y CONSIDERANDO QUE NO PUEDE SER ALEGADA EN ESTA ETAPA, DEBIDO A QUE LA SENTENCIA HA ADQUIRIDO FIRMEZA, DEVIENE EN IMPROCEDENCIA

"4. El licenciado […], asimismo presentó escrito, en el que denuncia una nulidad procesal insubsanable, de conformidad al art. 232 lit. c) CPCM, supuestamente acontecida en la primera instancia.

De lo anterior, esta Sala advierte, que si la denuncia de nulidad, tiene fundamento en supuestas infracciones cometidas en la audiencia preparatoria, ello implicaría anular todo lo actuado, incluso, la sentencia pronunciada por este tribunal.

En virtud lo anterior, resulta inadmisible la petición formulada por el litigante, dado que el recurso interpuesto por el mismo, fue desestimado mediante sentencia dictada por esta Sala; y de conformidad con el art. 532 CPCM, la resolución impugnada adquirió firmeza, y por ende, procedía devolver el proceso al tribunal *ad quem.*

De ahí que, esta Sala debe advertir que una vez dictada la sentencia en esta sede, la misma queda firme, al no existir otro medio recursivo previsto para este caso, conforme a lo dispuesto en el art. 229 ordinal 1º CPCM.

Además, la denuncia de una nulidad respecto de actuaciones procesales, debió realizarse y argumentarse ante este tribunal, al interponer el recurso de casación, con base a lo previsto en el art. 238 inciso 1º CPCM.

Por consiguiente, habiendo precluido el momento procesal para alegar nulidades, y considerando que no puede ser alegada en esta etapa, debido a que la sentencia ha adquirido firmeza, su improcedencia es legalmente manifiesta, pues la ley no prevé ningún otro medio de impugnación en el que pueda invocarse aquélla."

Sala de lo Civil, número de referencia: 120-CAC-2019, fecha de la resolución: 26/11/2020

APLICACIÓN ERRÓNEA DE LEY

DENTRO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN DE UN RECURSO, POR REGLA GENERAL, SE HACE LA DISTINCIÓN ENTRE LOS DE FORMA Y DE FONDO

"4. Sobre los razonamientos expuestos, esta Sala hace las siguientes consideraciones:

4.1 En lo que atañe a los requisitos de admisión del recurso de apelación, en la sentencia bajo referencia 321-CAM-2019, de las diez horas quince minutos del veintisiete de abril de dos mil veinte, se sostuvo lo siguiente:

"[...] Dentro de los requisitos de admisión de un recurso, por regla general, se hace la distinción entre los de forma y de fondo [...] Los requisitos de forma son el lugar, tiempo y modo, lo cual constituye un trinomio de formalidades para la interposición del recurso, ya que ha de presentarse el escrito en la sede del tri-

bunal que pronunció la resolución impugnada, dentro del plazo establecido en la ley para cada recurso [...] Los requisitos que no constituyen meras formalidades de ejecución del acto impugnaticio, son los de fondo o contenido, en virtud de que con ellos se define el ámbito de conocimiento para resolver las infracciones procesales o de fondo atribuidas al juez o tribunal respectivo [...] Estos requisitos son necesarios para demostrar que, en determinada resolución se configura una infracción, y por ello, por regla general, es razonable que se exprese el tipo o naturaleza de la misma -procesal o de fondo-, que se citen disposiciones jurídicas transgredidas y que se motive la existencia del vicio o bien que se argumente de manera clara, completa y coherente el mismo [...] Con el cumplimiento de tales requisitos, el juez o tribunal que conozca de un recurso, está habilitado para pronunciarse sobre el fondo de la infracción alegada, y tales extremos son los que definen la congruencia, lo cual para el caso de mérito, tiene fundamento en el art. 515 inc. 2° CPCM, el cual establece que: "La sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de adhesión" [...]" (sic).

Y específicamente, en cuanto al requisito que exige el tribunal ad *quem,* relativo a que en el recurso de apelación, debe expresarse "la resolución que se pretende", esto es, que el apelante determine lo que debe resolver el tribunal de alzada, en relación con el caso de mérito, esta Sala, en la sentencia antes citada sostuvo lo siguiente: "[...] Ahora bien, para el caso concreto, en cuanto a la petición y resolución que se pretende, dichos requisitos no están regulados en el art. 511 CPCM, son elementos accesorios que se relacionan con la previsión del art. 160 CPCM [...] En ese sentido, lo relevante en materia recursiva es definir el problema jurídico sobre el cual debe pronunciarse un tribunal, ya que el efecto jurídico o consecuencia de estimar el recurso por infracciones procesales o de fondo, está predeterminado en la ley, y debe completarse con el asunto jurídico analizado en cada recurso [...] Además, en el recurso de apelación, la fundamentación de la infracción debe estar acorde a las finalidades previstas en el art. 510 CPCM, y en cada uno de ellas, es razonable que dentro de la argumentación se exijan caracteres especiales tendientes a demostrar la infracción que se alegue [...] De manera que, la inadmisión de un recurso estará debidamente pronunciada, principalmente, cuando se anide el defecto en la fundamentación de la infracción alegada [...]" (sic).

El precedente anterior se trae a colación, debido a que se regula un asunto igual en el fondo al planteado en este recurso, pues tal como se ha expuesto por el recurrente, en relación con las razones de inadmisión de la alzada en audiencia, se ha exigido como requisito de admisión, que el recurso de apelación contenga "una resolución que se pretende", y por ende, dicho precedente resulta aplicable, para efectos de interpretar los alcances de la norma que se cita como vulnerada.

4.2 Además, debe tenerse en cuenta que el submotivo aplicación errónea de ley se presenta, cuando el juzgador desatiende el tenor literal de la ley, o bien va más allá de su verdadero sentido o puede haberla restringido, a pretexto de consultar su espíritu.

También puede presentarse el submotivo cuando, al consultar el espíritu del legislador, no se concluyó con el verdadero sentido, o porque no se supo resolver la contradicción entre normas, o porque tratándose de una norma sujeta a varias interpretaciones, se escogió la que menos convenía para resolver correctamente, el asunto de que se trata.

4.2 El art. 232 lit. c) CPCM, contiene el principio de especificidad, en virtud del cual: "Los actos procesales serán nulos sólo cuando así lo establezca expresamente la ley. No obstante, deberán declararse nulos en los siguientes casos (...) c) Si se han infringido los derechos constitucionales de audiencia o de defensa".

La Cámara considero a la omisión de la "resolución que pretende" en la alzada, como un supuesto de indefensión en el recurso de apelación.

4.3 Ahora bien, para analizar la situación planteada, resulta indispensable remitirnos al contenido del art. 511 CPCM, el cual, regula la forma en la que debe interponerse el recurso de apelación.

De conformidad con la disposición citada, el recurso debe interponerse ante el juez que dictó la resolución impugnada, y dentro de los cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación respectiva. En el escrito correspondiente, deberá expresarse las razones en que se funda el mismo, haciendo distinción entre las que se refieran a la revisión e interpretación del derecho aplicado, y las que afecten la revisión de la fijación de los hechos y la valoración de las pruebas.

Finalmente, los pronunciamientos impugnados deben determinarse con claridad.

Además, en el inciso tercero del art. 511 CPCM, se extrae que, si se alegare infracción de normas o garantías procesales, se deben citar los siguientes aspectos: a) las normas o garantías infringidas, y, b) alegar la indefensión sufrida, en su caso."

EXIGIR UNA "RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDE", EN EL RECURSO DE APELACIÓN, CONSTITUYE UN REQUISITO NO PROVISTO POR EL LEGISLADOR PARA DICHO MEDIO IMPUGNATIVO

"4.4 Con base en lo dispuesto en el art. 511 CPCM, y lo expuesto en el precedente 321-CAM-2019, exigir una "resolución que se pretende" en el recurso de apelación, constituye un requisito no provisto por el legislador para dicho medio impugnativo.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, la Sala de lo Constitucional, en sentencias de amparo bajo las referencias 637-2016, 32-2019, entre otras, ha establecido que el derecho de defensa procura que cada una de las partes pueda refutar, vía oral o escrita, las argumentaciones de su contraparte que constituyen la base de su pretensión o resistencia; es decir, el derecho en mención confiere la posibilidad de expresar formalmente su punto de vista, de manera que coadyuve a defender su respectiva posición procesal; y se garantice su intervención efectiva dentro del proceso.

La jurisprudencia citada, en cuanto a los alcances del derecho de defensa, permite concluir que la circunstancia invocada por el recurrente, no constituye violación alguna al mencionado derecho, pues la parte contraria no se vio impedida para oponerse al recurso en segunda instancia.

4.5 Como consecuencia de lo expuesto, esta Sala concluye que la Cámara no interpretó correctamente el precepto que el recurrente ha citado como infringido, al haber exigido un requisito en apelación, no previsto por el legislador, y que no genera indefensión."

CONFIGURACIÓN DEL ERROR IN IUDICANDO POR APLICACIÓN ERRÓNEA

"En ese caso la Cámara le ha dado al art. 232 lit. c) CPCM, un alcance que va más allá del que la norma efectivamente tiene, pues la omisión cometida por los apelantes, al no haber consignado cuál es la solución que pretendían, no está prescrita en la ley, tal como se ha analizado.

En atención a lo expuesto, en el caso analizado, se configura el error *in* iudicando por aplicación errónea.

5. Dada la infracción cometida al art. 232 lit. c) CPCM, la cual es de fondo, y de conformidad con el art. 537 inc. 1° CPCM, procede dictar la resolución que corresponde; la cual se hace en los términos siguientes:

En vista de que la Cámara, no continuó con la celebración de la audiencia de segunda instancia, procede ordenar a dicho tribunal que convoque nuevamente a las partes para la celebración de la audiencia respectiva, a efecto de entrar a conocer del fondo del recurso, el cual deberá decidir, de manera motivada, conforme a las potestades resolutivas que rigen su actuación en segunda instancia."

Sala de lo Civil, número de referencia: 21-CAC-2019, fecha de la resolución: 18/08/2020

CIERRE TEMPORAL DE ESTABLECIMIENTO

ESTE PROCEDIMIENTO NO REÚNE LOS REQUISITOS DE UN "PROCESO" EN SU AUTÉNTICO SIGNIFICADO, PUES SON MERAS "DILIGENCIAS", NO ES POSIBLE UBICARLO COMO UN VERDADERO PROCESO ABREVIADO

"Del estudio de las mismas se advierte que el acto que ha dado origen a la sentencia impugnada se encuentra contemplado en el Código Tributario, como una consecuencia frente al incumplimiento de obligaciones reguladas en dicho cuerpo normativo, en tales "diligencias", el juez únicamente autoriza la imposición de una sanción establecida en la referida normativa, para dar cumplimiento al derecho de audiencia de los particulares que se ven afectados, judicializándose de esa manera el procedimiento para imponer y ejecutar la medida de cierre; así como lo establece el art. 257 inciso 4° del Código Tributario.

En ese sentido, dicho procedimiento no reúne los requisitos de un "proceso" en su auténtico significado, pues son meras "diligencias", por lo que no es posible ubicarlo como un verdadero proceso abreviado, al que se refiere el art. 519 ordinal 1° CPCM, debido a que no se han aplicado las etapas procesales de éste en su plenitud, sino solamente se ha realizado una única audiencia para escuchar a las partes, recibir las pruebas pertinentes y dictar la sentencia respectiva, como lo manda el art. 257 del Código Tributario. En definitiva, la sentencia recurrida no ha sido pronunciada en un proceso abreviado como tal, por lo que queda excluida de las sentencias a las que la ley concede el recurso de casación las que ya están establecidas en los arts. 519 y 520 CPCM; y así se ha determinado en reiterada jurisprudencia. Por consiguiente, el recurso deberá declararse improcedente.

Se hace constar que la presente resolución ha sido formada con los votos de los magistrados licenciado Oscar Alberto López Jeréz y doctor Ovidio Bonilla Flores, por su parte la magistrada doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, por considerar razones distintas de improcedencia, relativas a la incompetencia de esta Sala para conocer de las mismas; por tanto, consigna su voto razonado, a continuación de las firmas."

Sala de lo Civil, número de referencia: 317-CAC-2019, fecha de la resolución: 06/10/2020

CONFLICTO DE COMPETENCIA

IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA

"9. La licenciada [...], asimismo al final del escrito, denuncia un conflicto de competencia.

De lo anterior, esta Sala advierte, que la forma de su denuncia no es la forma ni el momento procesal para dirimir un conflicto de esa naturaleza.

En virtud lo anterior, no resulta conforme a derecho, la petición formulada por la impetrante, dado que el recurso interpuesto, fue desestimado mediante auto de improcedencia, dictado por esta Sala, y de conformidad con el art. 532 CPCM, la resolución impugnada adquirió firmeza, y por ende, procedía devolver el proceso al tribunal ad *quem.*

De ahí que, esta Sala debe recalcar que una vez dictada la resolución en esta sede, la misma queda firme al no existir otro medio recursivo disponible para este caso, conforme a lo dispuesto en el art. 229 ordinal 1° CPCM.

Por consiguiente, resulta manifiestamente improcedente la denuncia de "conflicto de competencia."

Sala de lo Civil, número de referencia: 93-CAC-2019, fecha de la resolución: 17/12/2020

COPIAS SIMPLES

VALOR PROBATORIO

"VII. Análisis del motivo de fondo: inaplicación del art. 30 inc. 1º Ley de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras diligencias -LJVOD-.

1. El art. 30 inc. 1º LJVOD, literalmente dice: "En cualquier procedimiento, las partes podrán presentar en vez de los documentos originales, copias fotográficas o fotostáticas de los mismos, cuya fidelidad y conformidad con aquellos haya sido certificado por notario. Esta disposición no tendrá lugar en el caso del juicio ejecutivo o cuando se trate de documentos privados".

2. El concepto de la infracción

2.1 A criterio del impetrante, la infracción se sustenta en que, la Cámara de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, si al haber aplicado el art. 30 inc. 1 de la referida ley, hubiera concluido que las fotocopias presentadas que consiste en: a) fotocopia simple de carta de notificación del acuerdo del Consejo Directivo de la Caja Mutual de [...]; y, b) fotocopia simple de transcripción del acuerdo antes mencionado, en cuyo texto se consigna que se da por terminado el contrato de arrendamiento de parte de la arrendante, no son copias fidedignas de los documentos originales; y ello en virtud de que, su fidelidad y conformidad con las originales, no han sido certificadas por notario; por consiguiente, a su criterio, no hacen fe, y por ende, no tienen valor probatorio para acreditar la pretensión del actor.

3. En virtud de los argumentos dados por la Cámara de mérito y los suministrados por el recurrente, esta Sala advierte lo siguiente:

3.1 Al respecto, como ya se mencionó en el análisis del submotivo anterior, la Cámara sentenciadora, esgrimió que a fs. [...], se encuentra agregada una fotocopia de la comunicación de fecha uno de diciembre de dos mil quince, suscrita por el gerente de la Caja Mutual de [...], por medio de la cual notificó formalmente a la sociedad arrendataria, el acuerdo del Consejo Directivo de la referida Caja, en el que se acordó dar por terminado el contrato de arrendamiento a partir del día uno de marzo de dos mil dieciséis; carta presentada con firma y sello de recibido en original de la sociedad demandada.

En ese sentido afirma el recurrente, que esas fotocopias no constituyen un medio probatorio para acreditar la pretensión del actor de haber dado aviso al demandado, de dar por terminado el contrato de arrendamiento.

3.2 En lo que respecta, sobre las fotocopias simples presentadas por la parte demandante, si bien es cierto, que el Código Procesal Civil y Mercantil, no hace referencia expresamente a ese tipo de prueba (fotocopia simple) esto no significa que carezca de valor probatorio dentro del proceso, para ello, es importante remitirnos al art. 330 inc. 2 CPCM, que regula los medios probatorios imprevistos

por la ley; y literalmente dice: "Los medios no previstos por la ley serán admisibles siempre que no afecten la moral o la libertad personal de las partes o de terceros y se diligenciarán conforme a las disposiciones que se aplican a los medios reglados".

Por lo que, esta disposición establece que la prueba imprevista, podrá producirse por cualquiera de los medios probatorios, establecidos en la ley, lo que se conoce como el principio de la libertad probatoria, siempre y cuando no afecten la moral o la libertad de las partes o terceros.

Por otra parte, el art. 338 CPCM, establece la forma y momento de impugnación de la autenticidad del documento incorporado al proceso; es decir, que se puede hacer en cualquier estado del proceso y deberá probarse en su caso, en audiencia probatoria."

LA SALA ADVIERTE QUE LA PARTE DEMANDADA, TANTO EN PRIMERA COMO EN SEGUNDA INSTANCIA, NO IMPUGNÓ LAS FOTOCOPIAS, SINO A *CONTRARIO SENSU*, DICHOS DOCUMENTOS FUERON OFERTADOS EN ORIGINAL POR LA MISMA PARTE DEMANDADA

"3.3 Ahora bien, de la lectura de la inconformidad planteada por el recurrente en cuanto a que no son copias fidedignas de los documentos originales; y que su fidelidad y conformidad con las originales no han sido certificadas por notario; esta Sala advierte, que la parte demandada, tanto en primera como en segunda instancia, no impugnó tales fotocopias, sino a *contrario sensu*, dichos documentos fueron ofertados en original por la misma parte demandada, con lo cual queda demostrada la fidelidad y conformidad de las mismas con sus originales, por lo que, no cabe duda que dichas fotocopias, constituyen prueba fehaciente de la autenticidad del documento que fue reproducido; y es que en el presente caso la presentación de fotocopias de tales documentos se justifica, ya que consta en autos, que los originales quedaron en poder de la parte demandada.

En consecuencia de lo antes expresado, no se configura la infracción atribuida a la *ad quem*, respecto a la inaplicación del art. 30 LJVYDOD, puesto que la valoración de la prueba aportada, la hizo con relación a la debida incorporación que se hizo de la misma; imponiendo entonces, declarar no ha lugar a casar la sentencia respecto a la infracción de este artículo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 120-CAC-2019, fecha de la resolución: 07/07/2020

DECLARATORIA DE HEREDEROS

LA COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO DE LA DECLARATORIA, AUNQUE NO ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO RESPECTIVO, ES EL DOCUMENTO IDÓNEO PARA PROBAR QUE LA PARTE ACTORA ES HEREDERA LEGÍTIMA DEL CAUSANTE Y, POR LO TANTO, ESTÁ LEGITIMADA PARA INTERVENIR COMO PARTE EN EL PROCESO

"V. Análisis del motivo de fondo: inaplicación del art. 66 inc. 1° CPCM.

1. La norma que se invoca como inaplicada regula lo siguiente: "Tendrán legitimación para intervenir como parte en un proceso los titulares de un derecho o un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión.

También se reconocerá legitimación a las personas a quienes la ley permita expresamente actuar en el proceso por derechos e intereses de los que no son titulares" *(sic)*.

2. Respecto a esta infracción, el recurrente, en el romano IV del escrito interpuesto, manifiesta: "[...] En el caso que nos ocupa, fue sometida a control jurisdiccional la decisión emitida por el A quo, en la cual luego de haber seguido los tramites de ley, emitió un fallo estimatorio a las pretensiones de la parte demandante tomando como base la fotocopia *certificada* de *declaratoria* de *heredero sin estar inscrita,* lo que hace imposible que la demandante, pueda ser parte en el proceso que nos ocupa por no haber acreditado el interés legítimo que posee de acuerdo a las reglas que presupone el articulo 66 CPCM [...] Nótese Honorables Magistrados que el artículo en comento alude a *un interés* legalmente reconocido en *relación con la pretensión,* lo que implica que el procurador de la actora en su intervención inicial debió haber conformado la *relación jurídica procesal* tomando en cuenta los presupuestos procesales suficientes para acreditar el interés que lee asiste a la parte material que representa en iniciar el proceso de mérito, situación que fue obviada, y que fue por parte del Ad quem, objeto de control, ya que esta representación sostiene que no puede reconocerse el interés legítimo a quien no cuenta con el instrumento idóneo para comprobar tal calidad, y más aún con un instrumento que no cumple con los requisitos de procesabilidad que exigen los artículos 567, 669 inc. 1 y 717 C.C., lo que vuelve ineficaz la forma de probar la pretensión del actor [...]" (sic).

3. En lo tocante a esta infracción, esta Sala advierte lo siguiente:

3.1 La parte actora, señora [...], en su carácter de hija legítima, en el año mil novecientos sesenta y siete, fue declarada heredera definitiva junto con su madre y seis hermanos, de los bienes que dejo su padre, señor [...]. Dichos herederos según folio [...] de la pieza principal fueron: [...]

El tres de septiembre de dos mil catorce, el demandado señor [...], en su calidad de hijo legítimo de uno de los hermanos de la parte actora, señor [...], fue declarado heredero, por vía de representación de su padre, sobre los bienes de su abuelo, señor [...]. Inscribió la declaratoria de heredero y enajenó algunos bienes.

3.2 La parte actora, presentó demanda pidiendo la nulidad absoluta y cancelación registral, de la declaratoria de heredero del señor [...], argumentando que ya no tenía derecho a la herencia, porque el padre de este, señor [...] por quien había adquirido vía derecho de representación la herencia, ya había sido declarado con anterioridad heredero del señor [...].

Para probar la legitimidad de su pretensión, la actora presentó junto a la demanda, copia certificada por notario de la certificación de heredero expedida en el año mil novecientos sesenta y ocho, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la cual no está inscrita en el registro correspondiente.

3.3 El recurrente alega, que la referida copia certificada por notario de la declaratoria de heredero sin estar inscrita, no es un instrumento idóneo para reconocer que el actor tiene un interés legítimo para probar su pretensión.

Al examinar la copia certificada que consta en autos a folio [...] de la pieza principal, se verifica que ha sido certificada por notario, y de conformidad al art. 30 de la Ley del Ejercicio de la Jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias, las partes pueden presentar en vez de los documentos originales, copias certificadas por notario. Dichas copias certificadas tienen el mismo valor que el documento original.

Esta copia certificada, contiene la resolución en la que se declara heredero a la parte actora y al padre del demandado.

3.4 La pretensión del actor en el proceso, respectivo es que se declare la nulidad absoluta de una segunda declaratoria de heredero, en la que, se sostiene el de *cujus* es el mismo, respecto de cuya sucesión ya se había declarado heredero definitivo al padre del demandado; y aun así, el hijo de éste, señor [...], inicio diligencias de aceptación de herencia por derecho de representación de su padre, no obstante que ya había sido declarado heredero en mil novecientos sesenta y siete.

En virtud de lo anterior, y considerando la pretensión de la actora, esta Sala considera que la copia certificada por notario de la declaratoria de heredero, es documento idóneo que prueba que la parte actora es heredera legitima del causante [...], por lo que está legitimada para intervenir como parte en este proceso, pues es titular de un derecho hereditario, y tiene un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión.

Respecto a que la declaratoria de heredero no está inscrita en el registro respectivo, la misma es admisible en los tribunales, ya que de conformidad al art. 717 inc. 2° y 3° del Código Civil, la copia certificada, se ha presentado para pedir la nulidad absoluta y la cancelación del asiento en que fue inscrita la segunda declaratoria, en la que se declaró heredero al demandado por vía de representación de su padre.

También es admisible, sin estar inscrita, en perjuicio de terceros, porque con esa copia certificada, se corrobora la existencia de otros títulos o traspasos por ventas posteriores, que realizó el demandado y que ya están inscritas, y que son consecuencia de la segunda declaratoria de heredero, de la cual se pide la nulidad absoluta.

Por consiguiente, esta Sala concluye que el vicio atribuido al ad *quem,* no ha concurrido en el caso analizado; por lo que se impone declarar que no ha lugar, a casar la sentencia por este sub motivo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 399-CAC-2019, fecha de la resolución: 14/12/2020

DECLARATORIA INDEBIDA DE LA IMPROCEDENCIA DE LA APELACIÓN

DIFERENCIA ENTRE CAPACIDAD PARA SER PARTE Y POSTULACIÓN PROCESAL

"1. Análisis del submotivo relativo a haber declarado indebidamente la improcedencia de una apelación, en relación a la supuesta infracción del art. 278 CPCM.

El artículo señalado como infringido dispone lo siguiente:

Art. 278 *"Si* la demanda fuera oscura o incumpliera las formalidades establecidas para su presentación en este código, el *Juez* prevendrá por una sola vez para que en un plazo no mayor de 5 días se *subsanen* tales *imperfecciones. Si* el demandante no *cumple* con la *prevención, se dará por terminado* el proceso declarando inadmisible *la* demanda. *Esta* especie de rechazo *in limine* deja a salvo el derecho material.

El auto por el cual se declara *inadmisible una demanda sólo admite el recurso* de revocatoria".

El recurrente, en lo medular, manifestó que la Cámara infringió dicha disposición, al haber declarado inadmisible el recurso de apelación, por una supuesta falta de capacidad de postulación sin haberle prevenido, siendo éste un defecto procesal subsanable, a la luz de la citada disposición.

2. Por su parte, el tribunal ad quem, en su auto de inadmisibilidad a fol. […], sostuvo lo siguiente: *"[...] esta* Cámara *advierte que al* momento de *interponer el* recurso, *el licenciado* […]*, se encuentra frente al supuesto regulado por los arts.* 1923 *Ord. 8°* C y *73 Ord.* 6° CPCM, por cuanto el poder conferido a dicho abogado *fue* otorgado por el señor […]*, a las* catorce horas *del trece* de *abril* de dos *mil* dieciocho, actuando *en nombre y representación* de *la Asociación* de Desarrollo *Comunal Cantón* ********, *que se* abrevia *DESCOCAZ, y constando que en el mismo el notario autorizante* dio *fe* de la personería del *señor IS, por haber tenido* a la *vista* la constancia *de funcionamiento vigente de la referida* Asociación, extendida *el día treinta* de *agosto* de dos *mil diecisiete y resultando que dentro de los estatutos de dicha Asociación [...]* se *determina que los miembros de la Junta Directiva son electos para dos años, por lo que, el día veintisiete de septiembre del corriente* año -fecha de presentación *del recurso-,* la *representación* otorgada al *señor IS había vencido, [...]" (sic).*

De igual forma, sostuvo que: "[...] no *es posible* conocer el fondo de la alzada, *pues* además *de cumplir* con *los requisitos que refiere el art. 511* CPCM, *resulta necesario que la* misma sea invocada por parte debidamente acreditada *y, siendo evidente que el* poder con *que actúa* el licenciado […] *al momento* de *presentar* el *recurso* ya no era válido, de conformidad a lo *establecido en el art. 65 Inc. 2° CPCM la* incapacidad *para ser parte es insubsanable [...]" (sic).*

4. Esta Sala considera que, previo al estudio del submotivo invocado, respecto del precepto señalado como infringido, es pertinente establecer de manera concreta, la diferencia entre capacidad para ser parte y postulación procesal.

Tanto la capacidad para ser parte como la capacidad de postulación procesal, constituyen manifestaciones de un presupuesto subjetivo del proceso, por lo que no es posible permitir la apertura y desarrollo de un litigio en el que una de las partes carece de tal presupuesto, y si esto tiene lugar, deberá declararse su ineficacia.

Al respecto, el art. 58 CPCM, establece quienes son **partes en el proceso,** siendo el demandante, el demandado y quienes puedan sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada. En ese sentido, la capacidad para ser parte hace referencia a la aptitud para ser titular de las obligaciones, cargas y derechos que

se deducen de la tramitación del proceso y del desarrollo de la relación jurídico-procesal.

La capacidad de ser parte va más allá del interés procesal que está en juego y por el cual el titular de ese interés se constituye como parte procesal. En efecto, esta Sala ha sostenido que *"[...] la capacidad de ser parte se corresponde con la capacidad jurídica, de modo que si la capacidad jurídica significa aptitud genérica para ser sujeto de derechos y deberes, la capacidad para ser parte, como manifestación particular de aquella, supondría la aptitud genérica para ser titular, ya sea como demandante o como demandado, de los derechos, deberes y cargas que dimanan del proceso [...]".* (Auto de las diez horas del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. ref: *252-CAM-2017)*

En suma, según el procesalista colombiano doctor Jaime Azula Camacho, la capacidad para ser parte: "Es la aptitud para poder asumir la calidad de parte o *ser* sujeto de la relación *jurídico-procesal.* Al decir *parte* se emplea este *término en su* más amplia acepción, esto es, *que se refiere tanto* a la permanente como a la *transitoria, a la original* como a la *interviniente, a* la constituida por un *simple* particular o por *un* funcionario *público,* como es el agente del *ministerio público en los* procesos penales, etc. [...] La capacidad para ser parte se identifica con la capacidad material o sustancial, puesto que en los procesos se *ventilan relaciones de esta* naturaleza y, por ende, los llamados a concurrir son *sus titulares".* (Manual de Derecho Procesal, tomo I, teoría general del proceso, undécima edición, pag. 246)

En el caso de las personas jurídicas, también tienen capacidad de contraer derechos y obligaciones, con facultades de actuar judicial y extrajudicialmente, a través de sus representantes legales, tal como lo dispone el art. 61 CPCM; para lo cual, es necesario que se encuentren constituidas en legal forma, es decir, con los requisitos y condiciones legales para obtener personalidad jurídica."

LA LEGITIMACIÓN DE LA PERSONERÍA APARECE ENTONCES COMO UN PRESUPUESTO PROCESAL PARA EL VÁLIDO PLANTEAMIENTO DE LA DEMANDA; ES DECIR, APARECE COMO UNA CONDICIÓN DE ADMISIBILIDAD QUE POSIBILITA ENTRAR POSTERIORMENTE AL EXAMEN DE LA PRETENSIÓN

"5. Ahora bien, con relación a la postulación, de acuerdo a lo prescrito en el art. 67 CPCM, en los procesos civiles y mercantiles, será preceptiva la comparecencia por medio de procurador, nombramiento que habrá de recaer en un abogado de la República. Así el procurador debe acompañar con su primer escrito o gestión, los documentos que acrediten su personería de acuerdo a la ley, sin lo cual, no se admitirá su representación. Ya que a éste le corresponden las funciones que configuran lo que la doctrina denomina el patrocinio en juicio, a saber, la de representar a las partes en los actos procesales y la de dirigir las peticiones ante el tribunal, obrando en nombre ajeno, puesto que la parte es quien actúa en nombre propio.

La legitimación de la personería aparece entonces como un presupuesto procesal para el válido planteamiento de la demanda; es decir, aparece como una condición de admisibilidad que posibilita entrar posteriormente al examen de la pretensión. En tal sentido, este presupuesto es necesario para el válido desarrollo del proceso, por lo que debe ser examinado de oficio por el juez previo a la admisión de la demanda.

Esta Sala considera, que el presupuesto procesal de la legitimación de la personería jurídica, se encuentra vinculado a la capacidad para comparecer en el proceso, y específicamente, al instituto de la debida postulación para pedir, que aparece como una hipótesis de representación convencional, ya que la intervención en el proceso por medio de procurador, requiere necesariamente que la parte celebre con quien ostente dicha calidad un acto de apoderamiento para postular en el proceso, bien activa o pasivamente.

En términos generales, en materia civil, para la constitución de procurador se requiere el otorgamiento de un poder, de carácter formal, a fin de acreditar la representación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 CPCM; en virtud de que al apoderado o procurador se le otorgan todos los derechos concedidos a las partes, salvo en aquellos en que la ley requiere autorización o poder especial; y porque además éste se obliga con su poderdante a representar y defender diligentemente sus intereses en el proceso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 69 y siguientes CPCM.

6. Ahora bien, según las consideraciones de la Cámara, esta declaró inadmisible el recurso por encontrarse frente al supuesto regulado en los arts. 1923 ord. 8° CC, y 73 ord. 6° CPCM, en tanto que había vencido el período para el cual fue nombrado representante legal de la Asociación de Desarrollo Comunal, Cantón ********, que se abrevia "ADESCOCAZ"; y como consecuencia de ello, también había vencido el poder otorgado por aquel; es decir, otorgado por ADESCOCAZ, a favor del licenciado […], como representante procesal de conformidad con lo regulado en el art. 65 inc. 2° CPCM, el cual establece que la incapacidad para ser parte es insubsanable."

Al respecto, resulta necesario tener en cuenta que el art. 65 inc. 2° CPCM, contiene regulaciones sobre la falta de capacidad para ser parte, la cual debe entenderse, como ya se indicó, como un presupuesto subjetivo del proceso, que no se puede suplir, y que permite la apertura y desarrollo del litigio."

> TRATÁNDOSE DE UN PRESUPUESTO SUBJETIVO QUE ENCUADRA EN UN DEFECTO PROCESAL SUBSANABLE, ES PROCEDENTE ASIMILAR TAL SITUACIÓN A LO PRESCRITO EN EL ART. 278 CPCM, COMO UNA CAUSA PARA PREVENIR; POR TANTO, ES PROCEDENTE CASAR EL AUTO IMPUGNADO POR HABERSE CONFIGURADO EL MOTIVO INVOCADO.

"En el caso de mérito, dado que la Asociación de Desarrollo Comunal, Cantón ********, está debidamente acreditada como persona jurídica constituida con los requisitos y condiciones legales establecidos, de conformidad con el art. 61 CPCM; y su comparecencia por medio de quien ostente su representación legal, fue acreditada al inicio del proceso.

Concerniente a la falta de postulación del recurrente, es preciso destacar que el art. 73 ord. 6° CPCM, contempla el cese del vínculo representativo por vencimiento del plazo para el cual fue otorgado el poder.

En tal caso debía respetarse la fecha establecida en el mismo, cuyo cumplimiento obligará o bien ratificar al mismo procurador en lo que resta de contienda mediante nuevo poder, o a la designación de otro profesional. En el caso de mérito, nada se ha dicho sobre algún plazo establecido en el poder otorgado a favor del referido procurador.

Ahora bien, lo dispuesto en el art. 1923 ord. 8° CC, establece como regula la causa de terminación del mandato, la cesación de las funciones del mandante; y en la parte final de dicho ordinal dispone que: "en cuanto a *los asuntos judiciales, en que haya intervenido el mandatario, se observará lo dispuesto en el* código de procedimientos *civiles".*

Cabe advertir que, actualmente, el Código Procesal Civil y Mercantil, no contempla la figura de la postulación como lo hacía anteriormente el Código de Procedimientos Civiles, en tanto que este era más específico en establecer cada procedimiento para cada caso en particular; tal es el caso de mérito, en el que la Cámara declaró preliminarmente inadmisible el recurso de apelación, por falta de postulación por parte del abogado recurrente, que manifestó que tal defecto procesal es subsanable, y por tanto, previo a la declaratoria de inadmisión debió prevenirle; es en ese sentido, que el Código de Procedimientos Civiles, en su art. 1131 disponía que, "[...] el juez *o* tribunal *deberán proceder a* petición *de parte o de oficio a declarar* la *nulidad del proceso,* siempre que, requerido el *sujeto* procesal *no* legitime *su personería o no se* ratifique *lo actuado por* quien tiene *derecho a* hacerlo, dentro *de* tercer *día* del requerimiento" (sic).

En ese sentido, al no existir norma expresa que regule tal situación en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y tratándose de un presupuesto subjetivo que encuadra en un defecto procesal subsanable, es procedente asimilar tal situación a lo prescrito en el art. 278 CPCM, como una causa para prevenir, por una sola vez para que en un plazo no mayor de cinco días, se subsanen tales imperfecciones; por tanto, es procedente casar el auto impugnado por haberse configurado el motivo invocado.

En consecuencia, se ordenará a la Cámara, realice dicha prevención, en aplicación del principio de defensa y contradicción de las partes, de conformidad con el art. 4 CPCM; y así evitar violaciones a derechos de las partes, tal es el caso, a recurrir de resoluciones que les resulten gravosas a sus intereses, art. 501 CPCM.

Finalmente, cabe aclarar que siendo que se estimará el motivo de forma aludido, de conformidad con el art. 535 CPCM, es innecesario un pronunciamiento respecto del motivo de fondo denunciado, en razón de los efectos que aquél produce."

Sala de lo Civil, número de referencia: 370-CAC-2019, fecha de la resolución: 08/09/2020

EN LA PROVIDENCIA OBJETO DE APELACIÓN SE HA RECHAZADO INDEBIDAMENTE EL RECURSO EN FORMA LIMINAR, CONSECUENTEMENTE ES PROCEDENTE CASAR EL AUTO DEFINITIVO Y ORDENAR EL TRÁMITE DE LA ALZADA DE MÉRITO

"1.3 Analizadas las razones de inadmisión del tribunal ad *quem* y la argumentación proporcionada por el recurrente para sustentar el análisis erróneo del recurso de apelación, esta Sala advierte lo siguiente:

1.3.1 El doctor […] en su escrito de apelación, en cada uno de sus fundamentos de apelación respecto a las infracciones a los arts. 510 y 511 CPCM, desarrolla concretamente cuál ha sido la finalidad prevista de la alzada y ha delimitado cómo -a su criterio-, ha tenido ocurrencia la configuración de las cinco variantes de las infracciones a las precitadas disposiciones, lo cual comprende lo necesario para realizar el examen liminar del recurso.

Además, se observa que en la parte conclusiva de cada uno de ellos, clara e inequívocamente contiene lo que se pretende resuelva el tribunal de segunda instancia; es decir, que se revoque la sentencia impugnada, declare que no ha lugar la ejecución de mérito y absuelva a la sociedad demandada, lo que es reiterado en la parte final del petitorio que contiene el recurso de apelación.

Véase pues, que en dicha parte final, pide la admisión del recurso y que en el momento procesal oportuno, en análisis de los argumentos planteados, se revoque la sentencia de primera instancia, se estimen los motivos de oposición planteados, se declare sin lugar la pretensión ejecutiva y se absuelva a la sociedad demandada.

Ahora bien, es de señalar, que dado que la o las peticiones que forman parte del recurso de apelación no implican la delimitación del objeto del proceso que tiene lugar previamente al establecimiento de la *litis,* aunque es deber del impugnante la concretización ordenada, lógica y puntual de dichas peticiones, el planteamiento de las mismas en los términos generales realizados, no implica menoscabo de ésta al momento de analizarse la decisión.

Por tanto, en virtud de que el juzgador es conocedor del derecho, perfectamente está facultado para suplir las imprecisiones jurídicas incurridas por el apelante-recurrente, de forma que, el tribunal ad quem, al momento de decidir lo pertinente, deberá analizar los mismos en orden lógico procesal, empezando por los puntos de apelación que atacan a la pretensión, y que atañen a la declaratoria de improponibilidad de la pretensión, y en caso hipotético, que de éstos resulten desestimados, pasar al análisis de los siguientes motivos de apelación en apego a esa dinámica de orden lógico, resolviéndose -desde luego- lo que conforme a derecho corresponda, en tanto, no sean incompatibles o incongruentes entre sí.

Partiendo de los argumentos antes relacionados, este tribunal ha constatado que en el recurso de apelación, no obstante, por cada uno de los puntos apelados, no fue expresado de forma concreta la consecuencia jurídica pretendida, sí se planteó el reclamo en términos generales, de tal forma, que esta Sala concluye, que no han sido inobservados de forma sustancial los requisitos de admisibilidad, y en ese sentido, resulta injustificado el rechazo de la apelación por razones formales.

Bajo dicha línea de pensamiento, se estima que en la providencia objeto de apelación, se ha rechazado indebidamente el recurso en forma liminar, lo cual constituye una variante contenida en el vicio de forma haberse declarado indebidamente la improcedencia de la apelación estatuida en el art. 523 ordinal 13° CPCM, consecuentemente, esta Sala estima procedente casar el auto definitivo y ordenar el trámite de la alzada de mérito."

3.4 En el presente caso, el tribunal ad *quem* declaró inadmisible el recurso de apelación por falta de requisitos formales, por estimar -en síntesis-, que el apoderado de la parte demandante, mediante el escrito de apelación interpuesto, no cumplió con las exigencias formales, dado que -a su criterio-, ante el planteamiento de cada uno de los puntos de apelación no se concretaron la peticiones correspondientes (declaratoria de improponibilidad de la demanda y la estimación de la oposición de prescripción extintiva y su declaratoria), sino que se requirió la desestimación de la pretensión y la absolución a favor del demandado, por lo que, paró dicho tribunal, tal incongruencia y falta de concreción petitoria, no puede -ser suplida, ya que la pretensión y la disposición de la misma pertenece a las (partes procesales).

En ese orden, al analizar íntegramente el recurso de apelación que consta de fols. […] de la pieza de segunda instancia, se ha identificado que, el demandado-recurrente ha incorporado los fundamentos de los diferentes puntos de apelación, pero la consecuencia jurídica requerida por cada uno, se ha planteado de forma genérica, pues tanto en el cuerpo del recurso como en la parte conclusiva y petitoria del mismo, se ha solicitado la declaratoria de no ha lugar a la pretensión y la absolución de la sociedad bancaria demandada.

De ahí, que es de advertir, que en cada uno de los puntos apelados se expone claramente cuáles son los hechos que corresponden a diferentes presupuestos normativos que no han sido citados expresamente, respecto de los cuales se denuncia inaplicación o requiere revisión de la prueba, en ese sentido, es plausible concluir de forma inequívoca, cuáles constituyen las normas inaplicadas que debieron emplearse para resolver el objeto litigioso, y que se requiere sean verificados en apelación, por lo que, deberá de analizarse si el planteamiento de la apelación en tales términos ha derivado en incumplimiento de los requisitos técnicos formales estatuidos en el art. 51 1 CPCM.

Así pues, cabe significar, que tanto en las partes conclusivas de cada razonamiento objeto de apelación, como en el petitorio del recurso, se pide a la Cámara ad *quem,* revoque la resolución de primera instancia impugnada, se estimen los motivos de oposición que fueron planteados, y en consecuencia se declare sin lugar la pretensión ejecutiva, absolviéndose a la parte demandada.

Dicha petición, a criterio de esta Sala, si bien, es de naturaleza genérica, no soslaya la congruencia que debe regir entre la parte expositiva y conclusiva de los recursos, pues no obstante, no fueron plasmadas las consecuencias jurídicas inmediatas pretendidas; es decir, las declaratorias de improponibilidad de la demanda y prescripción de la acción, cada una se deduce del desarrollo de los puntos apelados en forma respectiva, cuestión de derecho que perfectamente puede ser suplida por el juzgador."

LOS JUZGADORES A FIN DE POTENCIAR EL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, AL MOMENTO DE ANALIZAR UN RECURSO, DEBEN HACER CASO OMISO A RIGORISMOS FORMALES EXCESIVOS

"En ese orden, es pertinente acotar, que los juzgadores a fin de potenciar el derecho de defensa y contradicción, al momento de analizar un recurso, deben hacer caso omiso a rigorismos formales excesivos, por lo que se encuentran en la obligación de hacer un esfuerzo intelectivo en su conjunto, tanto de la parte expositiva como de la parte conclusiva petitoria de aquél; en ese sentido, no es posible fundar el rechazo de un recurso de apelación con base en la valoración rígida de peticiones de naturaleza genéricas, cuando las peticiones concretas se encuentran contenidas en las mismas, y que se puedan deducir de los argumentos y fundamentaciones planteados por la parte apelante.

En ese sentido, este tribunal no encuentra elementos contradictorios entre la fundamentación jurídica del recurso de apelación y la petición realizada, que puedan dar lugar al rechazo liminar de dicho recurso.

A juicio de esta Sala, no obstante, que la petición se realizó en forma genérica, tal planteamiento no implica una falta de concreción petitoria que conlleve al incumplimiento de requisitos formales, pues en aplicación del principio iura *novit* curia, el juzgador se encuentra facultado para suplir dicha falta de precisión petitoria, cuando ésta se comprendida en una petición de naturaleza genérica, y para el caso, de la parte expositiva de cada punto de apelación puede deducirse la consecuencia jurídica inmediata pretendida.

En ese contexto, esta Sala debe acoger la denuncia casacional invocada respecto a haberse declarado indebidamente la apelación, por la transgresión a los arts. 218 inc. 3° y 14 inc. 1° parte final CPCM."

Sala de lo Civil, número de referencia: 237-CAM-2019, fecha de la resolución: 24/06/2020

DECLARATORIA INDEBIDA DE LA INADMISIBILIDAD DE UNA APELACIÓN

ESTA SALA CONSIDERA QUE EL APELANTE FUNDAMENTA SUS AGRAVIOS EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, ALEGANDO QUE FUE ADMITIDA, PERO NO VALORADA POR EL A QUO

"1. El art. 511 inc. 2° y 3° CPCM, regula lo siguiente: "En el escrito de interposición del recurso se expresarán con claridad y precisión las razones en que se funda el recurso, haciendo distinción entre las que se refieran a la revisión e interpretación del derecho aplicado y las que afecten a la revisión de la fijación de los hechos y la valoración de las pruebas. Los pronunciamientos impugnados deberán determinarse con claridad [...] Si se alegare la infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia, se deberán citar en el escrito las que se consideren infringidas y alegar, en su caso, la indefensión sufrida [...]" *(sic).*

2. La Cámara, en el auto de inadmisión de la apelación advirtió lo siguiente: "[...] En el caso en examen, esta Cámara encuentra que en el recurso presentado por el Licenciado […], no se ha especificado la finalidad por la cual ha presentado el recurso; es decir, no ha articulado de manera clara y separada, el motivo o motivos por los cuales impugna la sentencia pronunciada, de los regulados en el Artículo 510 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque como ya se dijo cada motivo contendrá la especificación de cual se trata, y en el presente caso no invocó ninguno de los regulados en la disposición referida [...] Por otra parte, debió especificar que ese agravio que aduce; es decir, que ese acto lesivo de desestimarle la pretensión de nulidad absoluta de título supletorio, fue contrario a la ley, ya que si bien es cierto alega que fue introducida al debate prueba documental y que esta no fue valorada por la juzgadora en la sentencia recurrida, el apelante no especifica qué hechos estableció con esa prueba; pues no basta con citar la prueba ofrecida y decir que hubo por parte del juzgador falta de valoración de la misma [....] En otra palabras, el recurrente no manifiesta en qué consiste la supuesta infracción cometida por la Jueza sentenciadora, lo cual debe realizar de manera clara y precisa. Y es que la parte recurrente debe fundamentar los hechos alegados de tal forma que a este Tribunal le quede claro de qué manera se vulneró la norma, cuya infracción se pretende demostrar; situación que no acontece en el caso de que se trata, puesto que el apelante no argumentó ninguno de los requisitos disciplinados para la admisibilidad del mismo.- Arts. 510 y 511 incisos 2° y 3° CPCM [...]" (sic).

3. Por su parte, el recurrente alega que se le ha inadmitido el recurso de apelación, por no haber identificado como motivos de impugnación los contenidos en el artículo 510 CPCM; y alega que para él, son finalidades del recurso y no motivos como equívocamente los considera la Cámara.

Agrega que: "[...] el CPCM no exige, como pena de inadmisibilidad, que se le dé a las finalidades de la apelación el carácter de motivos de la misma, y que por ende deban mencionarse expresamente en el libelo impugnativo[...]" (sic).

Y continua diciendo: "[...] El no haber mencionado que la "razón o razones" expresadas se refieren a una u otra "finalidad", no se sanciona expresamente con inadmisibilidad, y reitero, es un asunto meramente formal que puede perfectamente ser suplido por el juzgador, quien conoce el derecho y sabe por ende a que finalidad dicha razón o razones se refieren" (sic).

4. Respecto de la infracción denunciada, esta Sala advierte:

En el presente caso, corresponde analizar si el escrito de apelación, cumple con los requisitos legales para ser admitido.

Al estudiar el escrito de apelación interpuesto, se advierte que el apelante ha consignado un apartado denominado: "A) RAZONES EN QUE SE FUNDAMENTA EL RECURSO"; y luego expone sus razonamientos en dos numerales.

En el numeral 1), argumenta así: selección arbitraria de medios probatorios, lo cual deviene en una fundamentación insuficiente e ilegítima de la sentencia.

Luego menciona siete pruebas documentales, y argumenta, que esos medios probatorios, que no obstante fueron admitidos e introducidos al debate, no fueron valorados por el a quo, constituyendo un evidente menosprecio y selección arbi-

traria de dichas pruebas, y considera que el a quo, tiene la obligación legal de pronunciarse sobre el valor probatorio de todos los medios de prueba, de conformidad al art. 216 y 217 CPCM.

En el numeral 2), que denomina, expresa lo siguiente: *"Errónea* aplicación de *las Reglas* de *la* Sana Critica, específicamente, las *reglas* de la *lógica, la Experiencia* y el *Sentido* común"; argumenta, que no obstante haberse admitido prueba documental diversa, el a *quo,* pondera de forma aislada, la declaración de parte contraria, olvidando hacer una interrelación de los demás medios probatorios, los cuales debieron ser apreciados en su conjunto. Que de haberlo hecho el a *quo,* hubiera arribado a una conclusión distinta, a la que llegó.

En virtud de lo anterior, esta Sala considera que el apelante fundamenta sus agravios en la valoración de la prueba, lo cual es acorde a una de las finalidades prescritas en el art. 510 n° 2 CPCM, alegando que fue admitida, pero no valorada por el a quo, lo cual está debidamente argumentado en el escrito de apelación interpuesto.

Y considerando, que habiendo cumplido con los demás requisitos de ley, como procedencia, tipo de resolución judicial impugnada, legitimación procesal, plazo, competencia del juez a quo para recibir el escrito, arts. 508, 511 y 512 CPCM; se concluye la necesidad de casar el auto recurrido, y devolverlo el caso al tribunal ad *quem,* para que se continúe con el trámite de la apelación, hasta dictar sentencia, si así fuere el caso."

Sala de lo Civil, número de referencia: 183-CAC-2019, fecha de la resolución: 12/11/2020

DENEGACIÓN INDEBIDA DEL RECURSO DE APELACIÓN

PROCEDE CASAR EL AUTO RECURRIDO, LA EXPOSICIÓN DEL AGRAVIO CONSTITUYE UNO DE LOS PRESUPUESTOS DE LEY QUE DETERMINAN LA PROCEDENCIA DEL RECURSO, NO DE SU ADMISIÓN, COMO LO HA EXIGIDO EL AD QUEM.

"De lo expuesto, se concluye que los argumentos expuestos por el doctor […], describen el agravio causado por la sentencia impugnada; en lo principal, ya que ha alegado una supuesta falta de citación de su representado para la práctica de la diligencia de remedición y sobre la carencia de idoneidad del perito; así como, la fijación de los hechos e interpretación del derecho, en tanto que describió la ubicación y situación respecto del objeto litigioso, al igual que citó y explicó por qué considera que debieron aplicarse tales disposiciones, que en definitiva encuadro en el inc. 2º del art. 511 CPCM.

5. Por otro lado, también se ha señalado la infracción del art. 513 inc. 1º CPCM, el cual regula lo siguiente:

art. 513 inc. 1º *"Inmediatamente después de recibido el recurso por el tribunal superior, éste examinará su admisibilidad. Si fuese inadmisible, lo rechazará, expresando los fundamentos de su decisión y condenando al que hubiere abu-*

sado de su derecho, al pago de una multa de entre dos y cinco salarios mínimos urbanos vigente más alto [...]" (sic).

6. El recurrente, al respecto, ha argumentado que la Cámara infringió dicha disposición, al haber realizado valoraciones sobre el fondo de las cuestiones planteadas, y no sobre los requisitos formales de interposición, que corresponde a la etapa inicial del recurso.

Por otra parte, el recurrente expuso que la Cámara argumentó que en el recurso no se manifestó el agravio causado por la sentencia impugnada; no obstante. A su criterio, el agravio implica una valoración, lo cual no cabe verificarlo en la fase de admisión, sino en sentencia.

7. De lo expuesto, se advierte que efectivamente la Cámara argumentó que el recurrente no manifestó el agravio causado por la sentencia impugnada.

Al respecto, debe tenerse en cuenta en primer término, que la exposición del agravio constituye uno de los presupuestos de ley que determinan la procedencia del recurso, no de su admisión, como lo ha exigido el *ad quem.*

Según la práctica y teoría general de los recursos, la procedencia es lo primero que se verifica, y está conformada, además del agravio, por la legitimación de las partes, la competencia del tribunal y la recurribilidad de la resolución impugnada.

En cambio, los requisitos de admisión, se revisan solo superada la procedencia del recurso, entre ellos se encuentran los de forma y de fondo o contenido.

Los primeros están integrados por el plazo, lugar y modo -art. 511 inc. 1º CPCM-, y los segundos, que se extraen de lo regulado en el art. 511 inc. 1º, 2º y 3º CPCM, son la indicación de un tipo de infracción cometida, la argumentación o motivación para demostrar el vicio, ya sea procesal o de fondo, y además, el señalamiento de normas jurídicas transgredidas, esto último según se trate bien de la revisión del derecho aplicado o de la revisión de normas y garantías procesales.

Ahora bien, el agravio debe concurrir como expresión de un perjuicio que causa la resolución, lo cual se verifica en el fallo o parte resolutiva, ya sea que se trate de una sentencia o un auto, por lo tanto, únicamente debe exigirse que el fallo sea contrario a las pretensiones del interesado.

De ahí que sea imperioso recalcar, que dicho presupuesto es determinante de la procedencia del recurso, no de su admisión y tampoco deben exigirse dentro del mismo, más requisitos, entre ellos que la resolución sea contraria a la ley o que cause un daño tangible a la esfera de los derechos de las partes, ya que tales extremos constituirían, en todo caso, los puntos impugnados vinculados a cuestiones procesales o materiales, a efectos de examinar la efectividad del daño.

En ese sentido, entendido el agravio como un presupuesto vinculado a la procedencia del recurso, el cual habilita o legitima el derecho a recurrir en caso de algún perjuicio ocasionado por un pronunciamiento judicial, no siendo viable alegar su omisión como fundamento para decretar la inadmisión de un recurso.

Por consiguiente, es procedente declarar que la Cámara efectivamente cometió la infracción denunciada respecto del art. 511 inc. 2º y 513 inc. 1º CPCM; y por tal razón, debe casarse el auto impugnado."

Sala de lo Civil, número de referencia: 362-CAC-2019, fecha de la resolución: 19/02/2020

DILIGENCIAS DE PAGO SUJETO A CONDICIÓN

POR SU NATURALEZA REPRESENTA UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE NO EXISTE CONTENCIÓN DE PARTES

"Por otra parte, esta Sala observa que los peticionarios plantean su pretensión, como diligencias varias de pago sujeto a condición, vía que por su naturaleza representa un procedimiento en el que no existe contención de partes, sino, más bien involucra la aplicación de la normativa correspondiente al trámite de la solicitud, tal como se establece el inciso segundo del artículo 17 CPCM, al tratar el ámbito material de la aplicación del código; circunstancia que en el presente caso no ocurre, puesto que entre el Ministerio de Salud y la Central de Seguros y Fianzas, S. A., existe contención respecto de la exigencia del pago de la fianza de mérito; se concluye, por lo tanto, que existe error en la vía utilizada.

EXISTENCIA DE UNA IMPROPONIBILIDAD DE CARÁCTER SUBJETIVO, ES UN REQUISITO DE LEY QUE EL PAGO DEBA SER HECHO DE FORMA PURA Y SIMPLE, PUES SI ESTÁ SUJETO A PLAZO O BAJO CONDICIÓN SUSPENSIVA, DEBE HABER EXPIRADO DICHO PLAZO O DEBE HABERSE CUMPLIDO LA CONDICIÓN

"Además, es necesario acotar, que la naturaleza del contrato de fianza, implica una garantía entre la afianzadora y el contratante, en este caso La Central de Seguros y Fianzas, S. A., y el Ministerio de Salud; por lo que no existe legitimación de la primera para exigir de la segunda, la aceptación del pago sujeto a condición del resultado del proceso contencioso que está en trámite; es decir, también existe una improponibilidad de carácter subjetivo en las diligencias de mérito, pues tal como ya lo dijo la Cámara sentenciadora, con base al artículo 1470 CC, es un requisito de ley que el pago deba ser hecho de forma pura y simple, pues si está sujeto a plazo o bajo condición suspensiva, debe haber expirado dicho plazo o debe haberse cumplido la condición; esto es así, porque al estipular tales modalidades se le está quitando certeza a la función liberatoria del pago para el deudor.

Así las cosas, los argumentos utilizados para fundamentar la solicitud en primera instancia, como al artículo 35 de la LACAP, principios de buena fe, indemnizatorio, subrogatorio, de inocencia, etc., no son atinentes para demostrar la proponibilidad de las diligencias intentadas; pues esta Sala considera que la

solicitud de mérito no cumple con los requisitos necesarios para ser conocida por el órgano judicial, por lo que debe ser rechazada por improponible; y siendo que el auto definitivo está dictado en el mismo sentido, procede su confirmación."

Sala de lo Civil, número de referencia: 5-APC-2019, fecha de la resolución: 07/07/2020

DILIGENCIAS DE REMEDICIÓN DE INMUEBLE

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, PUESTO QUE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN APELACIÓN, EN LOS CASOS DE OPOSICIÓN A LA REMEDICIÓN, AUN BAJO LOS TRÁMITES DE UN PROCESO COMÚN, NO PRODUCE LOS EFECTOS DE COSA JUZGADA SUSTANCIAL

"Sin embargo, previo al examen de admisibilidad del mismo, es pertinente hacer el estudio de la procedencia de la impugnación.

4. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, en el fondo, estamos frente a unas diligencias de remedición, las cuales tienen fundamento en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. En su trámite hubo oposición y tal como lo estatuye el art. 2 de dicho cuerpo normativo, la notario a cargo de las referidas diligencias, las suspendió, absteniéndose de seguir conociendo, por lo que remitió el asunto al tribunal competente.

Bajo dicha premisa, esta Sala advierte que, si bien el proceso se ha desarrollado siguiendo el trámite legal previsto para el proceso común, la naturaleza de lo decidido en el mismo no está definiendo ningún derecho de fondo, puesto que los fallos únicamente han versado sobre la continuidad o no, de unas diligencias de remedición.

Es así como, la sentencia pronunciada en apelación en este tipo de casos, de oposición de remedición, aún bajo los trámites de un proceso común, no produce los efectos de cosa juzgada sustancial, en virtud que los opositores pueden intentar nuevas acciones contra dicha remedición, y por ende, lo resuelto no define el derecho de propiedad de quien ejerce la acción.

Debe tenerse en cuenta que, aunque en apariencia, de conformidad al art. 519 N° 1 CPCM, se regule que se admite la casación de las sentencias pronunciadas en los procesos comunes, prevalece la naturaleza de la pretensión y el resultado del proceso mismo, el cual, como se ha dicho, no provoca los efectos de la cosa juzgada material, y por ende, por tratarse en el fondo de diligencias de remedición fundadas en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias, resulta aplicable lo estipulado en el art. 520 CPCM, en cuanto a que el recurso se rechazará cuando se interponga contra resolución dictada en ese tipo de diligencias.

Por consiguiente, esta Sala concluye que el recurso es improcedente, lo que así impone declararse."

Sala de lo Civil, número de referencia: 117-CAC-2020, fecha de la resolución: 12/11/2020

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE FUNCIONARIO PÚBLICO

SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN PROCESAL DE FALTA DE CONGRUENCIA, POR LO CUAL ESTA SALA ESTIMA EL PUNTO IMPUGNADO, DEBIDO A QUE LA DEMANDADA NO OSTENTÓ NINGÚN CARGO PÚBLICO, SIENDO IMPROCEDENTE APLICARLE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN

"Primera finalidad: infracción procesal

IV.1. En virtud de lo dicho, se advirtió que la única **infracción procesal** denunciada que fue admitida, está relacionada con **la falta de congruencia por haberse otorgado cosa distinta,** la cual fue advertida en el recurso interpuesto por los licenciados [...] y [...], en interés de la señora MARDC, relativa a que la demandada fue inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público durante el plazo de diez años.

Para sostener dicha transgresión, se suministraron dos razones, así:

a) La infracción del art. 218 CPCM, al haberse otorgado más de lo pedido por el actor ya que, en la demanda, no se observa que se haya solicitado tal inhabilitación y tampoco ello aparece en los escritos realizados tras las prevenciones formuladas por la Cámara de mérito.

b) Por otro lado, se señala la infracción del art. 21 LEIFEP, conforme al cual se requiere que el procesado sea o haya sido funcionario público, lo que no aplica, a criterio de los apelantes, ya que la demandada no ha ostentado esa calidad funcionarial.

Esta segunda razón se analiza más adelante, dada su conexión intelectiva con la revisión del derecho aplicado.

IV. 2. En la sentencia impugnada, a fs. […], se expresó que se estimaría la pretensión incoada en la demanda, con las consecuencias legales enmarcadas en los arts. 20 y 21 LEIFEP.

Los preceptos jurídicos mencionados, estipulan lo siguiente:

Art. 20. *Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al Estado o al Municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente.*

Art. 21. *En todo caso la sentencia condenatoria ejecutoriada, el funcionario o empleado público culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, durante el plazo de diez años.*

Al respecto, como se ha relacionado *supra y* en el acta de audiencia, las partes consideraron que efectivamente se cometió la infracción procesal de falta de congruencia, por lo cual esta Sala estimó el punto impugnado, debido a que la demandada no ostentó ningún cargo público, siendo improcedente aplicarle la sanción de inhabilitación aludida."

ES INADMISIBLE LA PRUEBA PROPUESTA FUERA DE LA ETAPA PROCESAL ESTABLECIDA PARA SU PROPOSICIÓN Y/O ADMISIÓN

"Segunda finalidad: prueba inadmitida

V. 1. El siguiente punto impugnado se relacionó con la **inadmisión de prueba en primera instancia,** lo cual ha sido consignado en el recurso interpuesto en interés del demandado ERCU.

Según los apelantes se rechazaron los medios probatorios siguientes:

a) fotocopia simple de versiones taquigráficas que contienen la discusión y aprobación del proyecto de la Constitución de la República de 1983, del archivo de la Asamblea Legislativa (tomo VIII).

Se indicó por los apelantes que este documento fue rechazado en audiencia preparatoria.

b) fotocopia simple de acuerdo clasificado con código de seguridad, nivel de protección reservado, emitido por el entonces presidente de la República, EASG, mediante el cual se nombró a ERCU, colaborador del presidente para el manejo de los gastos reservados y secretos.

Se expresó que dicho documento fue agregado por la representación fiscal mediante certificación del expediente administrativo remitido por la Secretaría General de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante oficio Ref. SP 336/2016, de fecha 21-X-16, del informe sobre el análisis realizado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por el ex secretario.

De este documento se advierte que no fue rechazado, sino que hubo ausencia de pronunciamiento, no obstante haber sido ofertado en la contestación de la demanda y propuesto en la audiencia preparatoria.

En relación con ambos documentos, se expresa que se dejó constancia de la inconformidad sobre los medios probatorios rechazados, para interponer el recurso de apelación de mérito y, por cada uno, se argumenta el agravio sufrido por la falta de admisión.

c) informe pericial elaborado por el licenciado Hugo Alberto Aquino Ramos, a efecto de acreditar inconsistencias en el peritaje judicial, en relación con las conclusiones concernientes a la cuantificación del supuesto incremento patrimonial de la parte demandada, así como el mecanismo utilizado para determinar el balance negativo a que se hizo referencia;

d) declaración de propia parte del señor ERCU, con el fin de desvirtuar afirmaciones realizadas por el perito judicial, al igual que para explicar puntos relacionados con el manejo de los fondos y contradecir el peritaje, desvanecer

observaciones y conclusiones generadas en el mismo, específicamente el uso y destino de los fondos.

Se advirtió por los apelantes que estos dos últimos medios probatorios fueron propuestos vía incidental mediante escrito del 18-XII-2017, un día antes de la audiencia probatoria, los cuales fueron rechazados al inicio del referido acto procesal.

e) posterior a la interposición del recurso de apelación en interés del señor ERC, esta Sala recibió escrito presentado por el licenciado [...], por medio del cual sostuvo que ofertó como parte de los puntos de apelación, prueba documental, consistente en el dictamen de acusación formulado por la Fiscalía General de la República en el proceso penal que ésta seguía contra el demandado.

Además, advirtió que dicha documentación fue obtenida posterior a la interposición del recurso de apelación y que cumplía los requisitos del art. 514 CPCM, a efecto que se admitiera, por ser útil e idónea, para comprobar que los hechos con los cuales la parte demandante pretendía justificar su pretensión, eran los mismos que fundamentaron la acusación penal.

j9 también posterior a la audiencia probatoria, dictada la sentencia de primera instancia e interpuesto el recurso de apelación, los abogados en interés del señor ERCU, expresaron que fueron dictadas cinco resoluciones judiciales -que, se entiende, estarían vinculadas al caso-, las cuales son:

sentencia pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, a las 14.00 horas del 21-X1-2018.

· sentencia pronunciada por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, a las 08.38 horas del 05-VII-2019.

· sentencia pronunciada por la Sala de lo Penal, a las 14.40 horas del 20-XII2019.

· auto dictado por la Sala de lo Penal, a las 08.20 horas del 10-11-2020, en el que se declaró no ha lugar la aclaración solicitada por la defensa de los imputados.

· acta de audiencia de práctica de cómputo de plazo de condena del señor ERCU, celebrada por la Jueza Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, a las 09.00 horas del 15-VI2020.

V.2. Sobre los primeros cuatro documentos, esta Sala consideró que la objeción sobre inadmisión de prueba, en puridad, era un supuesto de infracción procesal vinculada al derecho de defensa y, por ende, necesario que la argumentación para demostrar la configuración del vicio fuese clara, precisa y completa, cuyo contenido debía incluir lo siguiente: **a)** señalar la norma infringida; ***b)*** argumentos sobre el cumplimiento del plazo y forma de proposición, legalidad, pertinencia y utilidad de la prueba; ***e)*** demostrar la inconformidad de su rechazo en el proceso; y, ***d)*** indefensión sufrida.

Lo anterior, con sustento en el art. 511 Inc. 3° CPCM, el cual estipula que cuando se trata de infracción de normas y garantías procesales deberá, además de citarse la disposición legal infringida, argumentarse sobre la indefensión sufrida, para efectos de ponderar la afectación al derecho de defensa y prueba.

V. 3. Bajo dicha premisa, se analizó en audiencia, respecto a las fotocopias de versiones taquigráficas que contienen la discusión y aprobación del proyecto de la Constitución de la República de 1983, del archivo de la Asamblea Legislativa (tomo VIII), advirtiendo la Sala que no se expuso la indefensión sufrida.

Por otro lado, también se indica que dicho documento se vincula a un asunto de interpretación de normas jurídicas, lo cual no es objeto de prueba por exclusión de lo dispuesto en el art. 313 CPCM.

En efecto, con base a dicha disposición jurídica, lo que puede ser objeto de prueba, en principio, son las afirmaciones expresadas por las partes sobre los hechos controvertidos, por tanto, las alegaciones que se realicen sobre el derecho no forman parte del cuadro fáctico, sino del jurídico, cuyo otorgamiento de sentido es privativo del aplicador de justicia.

Bajo dicha premisa, debe tenerse en cuenta que la invocación del derecho no es vinculante para el juzgador, ya que para este opera el principio *aura novit curia,* según el cual se establece que los casos pueden resolverse con fundamento en normas jurídicas distintas a las invocadas y argumentos jurídicos diferentes.

De ahí pues que, si se ha excluido como objeto de prueba el derecho que debe aplicarse, no resultó admisible el documento ofrecido pues, tal como se dijo, el mismo no estaba destinado a probar las afirmaciones sobre hechos, con los cuales debe formarse el cuadro fáctico de la sentencia y cuyo paso es previo a la fundamentación jurídica.

Con base en lo anterior, dicho documento no se admitió.

V. 4. La fotocopia simple de acuerdo clasificado con código de seguridad, nivel de protección reservado, emitido por el presidente de la República, EASG, mediante el cual se nombró a ERCU, colaborador del presidente para el manejo de los gastos reservados y secretos, se admitió en audiencia, debido a que el mismo se vinculaba con uno de los puntos impugnados, precisamente el relativo a la prescripción.

V. 5. Respecto a los restantes medios probatorios propuestos, cuya petición de admisión también fue planteada a este tribunal, siendo el informe pericial y declaración de parte contraria, se advirtió lo siguiente:

Teniendo en cuenta que la finalidad invocada era el haberse denegado en primera instancia la prueba documental -art. 510 Ord. 4° CPCM-, la cual se relaciona al supuesto de análisis de admisión y práctica de prueba en segunda instancia, regulado en el art. 514 Ord. 1° CPCM, cuyo texto expresa: “Además de la documental dicha, sólo podrá proponerse prueba: [...] 1° Cuando la prueba hubiera sido denegada indebidamente en primera instancia”; dicho supuesto es distinto a los demás previstos en el Inc. 2° de esta última disposición, que se refiere a documentos que no existían durante el proceso, sino después de las audiencias de prueba en los procesos declarativos, o que no estaban disponibles para las partes, quienes deben alegar causa justa; y, también es disímil a los otros dos supuestos regulados en los Ordinales 2° y 3° de la misma norma, relativos a la falta de práctica de prueba por causa no imputable a las partes y hechos nuevos o prueba no conocida por las partes, acaecidos después de iniciado el plazo para dictar sentencia.

De ahí que, en el caso de mérito, valorando, como se ha señalado *supra,* que la argumentación necesaria para analizar la admisión de prueba en segunda instancia debe incluir el cumplimiento del plazo y forma para la aportación de prueba, se advierte que el supuesto de infracción se refirió a los rechazos de prueba dados en audiencia preparatoria puesto que, tal como se expuso en el párrafo anterior, todos los demás supuestos encierran casos de proposición de prueba en segunda instancia y no tienen como base de análisis el rechazo de prueba, al cual se refiere al supuesto invocado.

En cuanto a este requisito, los recurrentes propusieron un informe pericial o *contraperitaje,* así como la declaración de propia parte del señor ERCU, debido a que el peritaje judicial y su complemento fueron elaborados, introducidos y reproducidos en fecha posterior a las alegaciones iniciales (demanda y contestación) y a la audiencia preparatoria, constituyendo tal informe y complemento un documento nuevo conforme el art. 308 CPCM.

El art. 308 Inc. 1° CPCM regula lo siguiente: "Las partes podrán aportar en la audiencia preparatoria los documentos o informes de peritos que se revelen necesarios a la vista de las alegaciones iniciales de la parte contraria. También podrán presentar los que deriven de las precisiones, aclaraciones y concreciones efectuadas al amparo de las disposiciones de este código. Si el tribunal considerare improponible el planteamiento, lo rechazará mediante auto motivado" (subrayado suplido del texto).

Del precepto jurídico transcrito se establece una excepción a la preclusión para la aportación de informes periciales, señalándose que pueden ser aportados, específicamente, en la audiencia preparatoria, lo cual no se cumplió, según lo expuesto por los abogados apelantes, pues expresan que fue propuesto vía incidental, un día antes de la audiencia probatoria.

Aunado a lo anterior, el art. 377 CPCM establece lo siguiente: "Cada una de las partes tiene derecho a designar su propio perito y a que se elabore privadamente el dictamen correspondiente, el cual se acompañará a las respectivas alegaciones, en los momentos determinados por este código".

De ahí que resultó manifiestamente inadmisible la prueba propuesta fuera de la etapa procesal establecida para su proposición y/o admisión, ya que los momentos determinados por la norma adjetiva son: la contestación de la demanda y en audiencia preparatoria tanto, el demandante como el demandado, conforme los arts. 289 Inc. 2° y 308 Inc. 1° CPCM, respectivamente.

Por consiguiente, esta Sala sostuvo que la prueba señalada no se justificaba en ninguno de los supuestos legales para que fuera propuesta en esta instancia, con el fin de reconsiderar su admisión, por lo tanto, se declaró inadmisible, por extemporaneidad.

Aunado a lo anterior, en audiencia los apelantes desistieron de la declaración del demandado debido, ha de entenderse, a la admisión de las tres copias de resoluciones judiciales, ya detalladas.

V. 6. Respecto al dictamen de acusación formulado por la Fiscalía General de la República, ofrecido por el licenciado [...], según escrito presentado el tres de julio de dos mil dieciocho, se expresa que fue ofrecido como parte de los puntos de apelación.

Sobre ese punto, la Sala advirtió que lo expuesto por el abogado recurrente era inexacto dado que, en el recurso únicamente se ofertaron los medios de prueba arriba analizados. Además, tampoco expresó de manera concreta a cuál de los puntos de apelación estaría vinculado dicho dictamen.

Por consiguiente, esta Sala rechazó el anotado ofrecimiento, por no haberse efectuado la proposición de la prueba en debida forma.

V.7. Finalmente, acerca del ofrecimiento de cinco resoluciones judiciales, tal como se ha relacionado, fueron admitidas tres, cuya pertinencia estuvo dada por el punto impugnado relativo a la litispendencia, y el rechazo de las dos inadmitidas ya fue fundamentado por esta Sala en esta sentencia."

SE PRESUME ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CUANDO SE DA UN AUMENTO DEL CAPITAL DEL FUNCIONARIO O EMPLEADO, DESDE LA FECHA EN QUE HAYA TOMADO POSESIÓN DE SU CARGO, HASTA AQUÉLLA EN QUE HAYA CESADO EN SUS FUNCIONES

"Tercera finalidad: hechos probados que se fijaron en la resolución y valoración de la prueba

V. 1. Uno de los puntos impugnados en común, en tanto revisar los hechos probados y la valoración de la prueba, fue lo concerniente a que no se tomó como hecho incontrovertido que se desconocía que el origen de los fondos fuese público [de las irregularidades señaladas por la Sección de Probidad].

Para fundamentar este punto se expresaron tres razones, así: **a)** que no se aplicó la excepción legal de generación de prueba cuando se admiten hechos por ambas partes; ***b)*** que se alteró la fijación del objeto de la prueba, derivando un fallo incongruente; y, *e)* que se lesionó el principio de legalidad y defensa.

Lo que se expresa, literalmente, es que: «[...] para la parte demandada, está de acuerdo, y sostiene que comparte la afirmación única realizada en la demanda por parte de la Fiscalía General de la República que ella desconocen el origen de los fondos [...]» (sic).

De ahí que, a criterio del inconforme, lo anterior quedó acreditado como hecho no controvertido y, por ende, ambas partes fueron liberadas de la generación de prueba para esclarecer cuál sería el supuesto origen de los fondos.

Cada recurso especifica ciertas irregularidades, así: el interpuesto por los licenciados [...] y [...], en interés del señor CU, se refieren las identificadas como números 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 16, consistentes en movimientos bancarios y abonos a varios productos financieros, desconociéndose la procedencia o el origen de los fondos con los cuales se realizaron; y, por otro lado, en la alzada que interpusieron los abogados en interés de la señora de C, se indican las irregularidades números 9, 14 y 15.

VI. 2. Esta Sala advierte que, para la Cámara, no se desvirtuó la presunción legal de enriquecimiento ilícito, a costa de la Hacienda Pública, ya que no se presentó ninguna prueba que justificara la procedencia del dinero y bienes que fueron señalados en las distintas irregularidades del informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Respecto a la conclusión realizada por el tribunal *a quo,* debe tenerse en cuenta que el proceso de enriquecimiento ilícito tiene asidero constitucional, siendo estipulado en el art. 240 Cn., bajo los términos siguientes:

"Los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes.

Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se considerarán en conjunto.

Los funcionarios y empleados que la ley determine están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con los incisos anteriores, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que tomen posesión de sus cargos. La Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo. Al cesar en sus cargos los funcionarios y empleados aludidos, deberán hacer nueva declaración del estado de sus patrimonios. La ley determinará las sanciones por el incumplimiento de esta obligación.

Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento" (subrayado propio).

VI. 3. En este caso, tal como sostuvo la Corte en Pleno mediante resolución de las 12.30 horas del 13-X-2016, en la que se declaró la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito del señor ERCU, se expuso que se estableció un procedimiento dividido en dos fases: administrativa y jurisdiccional.

Según la construcción normativa del anotado procedimiento, en la fase administrativa los funcionarios tienen la obligación de presentar la declaración de sus bienes, tanto al tomar posesión de su cargo como al cesar en su ejercicio.

Lo anterior tiene como objetivo que los funcionarios expongan y justifiquen su situación patrimonial; es decir, demostrar que la procedencia de sus haberes es lícita, y, por ende, lo relevante es que desde dicha fase administrativa se imponga la obligación de justificar el patrimonio del funcionario.

En ese sentido, si la fase jurisdiccional es instada con fundamento en los resultados que proporciona la investigación realizada en aquélla fase, cuya finalidad es analizar las irregularidades que se encuentren en la exposición y justificación del patrimonio dentro de la misma, con mayor rigor el funcionario estará en obligación de acreditar en ésa segunda fase, pues, la procedencia patrimonial.

De ahí que, en el proceso declarativo común de enriquecimiento ilícito se apliquen reglas especiales, sin perder de vista que el postulado de justificación patrimonial adquiere mayor amplitud; en consecuencia, resulta palpable que se aplique la presunción prescrita en la Constitución de la República, replicada en el art. 7 Inc. 1° LEIFEP, así:

"Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se considerarán en conjunto".

En efecto, debe tenerse en cuenta que dicho precepto jurídico regula una presunción que se utiliza como regla de prueba para este tipo de procesos, tal como lo ha dicho la Sala de lo Constitucional en sentencia de inconstitucionalidad referencia 133-2015, de las 12.41 horas del día 09-IV-2018, en la cual expuso que:

«[...] las presunciones pueden ser legales (normativas) o judiciales. Las presunciones legales, mejor llamadas presunciones normativas -pues no todas están contenidas en una ley formal- son el resultado de la tipificación que hace el ente emisor de una norma jurídica de aquellas circunstancias que usualmente son representativas de una relación causal o de la existencia de un hecho que normalmente debería tener que probarse. Hay diversos ejemplos de ellas. La Constitución misma contiene una presunción en el tema del enriquecimiento ilícito (art. 240 Cn.), tal y como distintos códigos también tienen presunciones (ej., arts. 3 y 414 del Código de Trabajo, arts. 65, 141 y 160 del Código de Familia y art. 751 del Código Civil) [...1» (sic). (el subrayado es de esta Sala).

De ahí que, en el presente proceso, resulte exigible por imperativo constitucional que desde la fase administrativa el funcionario público esté en la obligación de justificar su situación patrimonial y, derivado de ello, que demuestre la legalidad de la misma tras los hallazgos cuestionados por la Sección de Probidad."

LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL DEMANDADO, QUIEN TIENE LA OBLIGACIÓN DE JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS QUE INGRESAN A SU GRUPO FAMILIAR

"VI. 4. Con base en las premisas descritas, debe tomarse en cuenta que la Sala de lo Constitucional, mediante sentencia de inconstitucionalidad ref. 146-2014/1072017, de las 12.30 horas del día 28-V-2018, determinó que el art. 240 Inc. 2° Cn. prevé una presunción que se compone de tres elementos:

El hecho base, que son los indicios que se deben probar; *el hecho presunto,* que es lo conjeturado; y *la conexión entre ellos,* que es un enunciado general cuya aceptación autoriza el paso de uno a otro hecho (sentencia de 9-IV-2018, Inc. 133-2015).

Para la Sala de lo Constitucional, en el caso de esta norma específica, el hecho base es la calidad de funcionario o empleado público y el aumento notablemente superior, injustificable, del patrimonio de los sujetos mencionados en el art. 240 Inc. 2° Cn. -el funcionario o empleado público, su cónyuge y sus hijos-; mientras que el hecho presunto es el enriquecimiento ilícito.

Ahora bien, las presunciones eximen a una de las partes de la carga de la prueba de los hechos presumidos y de la argumentación respecto de ellos (sentencia de Inc. 133-2015, ya citada); por tanto, la presunción del art. 240 Inc. 2° Cn. tiene la función de eximir a la Fiscalía General de la República de probar el hecho presunto, siempre y cuando haya acreditado la existencia del hecho base de la presunción.

VI. 5. Bajo la conclusión de la Sala de lo Constitucional, queda claro que la carga de la prueba corresponde al demandado quien, como se dijo en párrafos anteriores, tiene la obligación de justificar la procedencia de los fondos que integran su situación familiar y, por lo tanto, no puede alegarse posterior, máxime en la fase jurisdiccional, que no se tiene tal carga probatoria.

Además, en este tipo de supuestos materiales también resultan aplicables las denominadas *cargas probatorias dinámicas,* las cuales suponen un complemento a las reglas de distribución de la carga de prueba, que atienden a la clase de hechos que se afirman como existentes.

Así pues, la Sala de lo Constitucional, en sentencia de inconstitucionalidad ref. 44-2011, de las 14.41 horas del 20-11-2017, expuso que dichas reglas complementarias: «[...] vendrían a sostener que la carga de la prueba debe desplazarse hacia aquella posición procesal que se encuentra en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva. Así lo ha sostenido esta sala, al afirmar que "... hay casos en los que la carga de la prueba debe desplazarse hacia aquella parte procesal que se encuentra en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva. A esto se le conoce como cargas probatorias dinámicas" - resolución de 8-V-2013, Amp. 3102013-. Hay razones para sostener que en determinados casos es necesario invertir la carga de la prueba, a fin de mitigar el rigor que supondría aplicar a ultranza las reglas de las cargas probatorias tradicionales. Entre ellas están las siguientes: la igualdad material y el principio de buena fe procesal. [...]» (sic).

Naturalmente, se esté o no en presencia de una norma de presunción, por regla general la "mejor posición probatoria" debe probarse. Quien pretenda el desplazamiento de la carga de la prueba deberá probar, aunque sea indirectamente, que la parte contraria está o estaba en mejores condiciones para aportar y producir la prueba. Esta inversión implica trasladar un mayor peso probatorio sobre una de las partes, provocando al mismo tiempo el aligeramiento en la carga probatoria de la otra. Por ello, quien pretenda el desplazamiento de la carga probatoria, moderando la carga que le compete, habrá tenido que probar, aun indirectamente, que su contraria está o estaba en mejores condiciones de probar. No es suficiente sostener que una de las partes se encuentra en la situación privilegiada antedicha sino que, de igual forma, es necesario poner

en evidencia -probar- que quien argumenta dicha circunstancia no tiene [otro] modo de producirla.

En ese sentido, esta Sala considera que la presunción bajo estudio es la regla aplicable en la materia, con exclusividad de cualquier otra prevista en el derecho procesal común.

Dicha norma de presunción beneficia al Ministerio Público Fiscal, por cuanto le facilita la prueba, pero queda claro que no exonera a nadie de la necesidad de probar, de allí que la parte beneficiada tendrá siempre, como mínimo, que probar el hecho base.

Para el presente caso, la calidad de funcionario y el incremento patrimonial superior, cuyos extremos se predica son los que integran el hecho base de la presunción, han sido establecidos en el proceso de mérito.

Tal como lo relacionó el tribunal *a quo,* en el apartado 5.7 relativo a las consideraciones sobre el enriquecimiento ilícito, pág. 130, que en cuanto al demandado ERCU, consta en autos el acto administrativo por el cual se le nombró como secretario privado de la Presidencia de la República para el período comprendido del 1 de junio de 2004 al 31 de mayo de 2009; y, en cuanto a la demandada MARDC, como cónyuge del primero, ello se definió con la certificación de la partida de matrimonio. Ambas calidades no fueron negadas por la parte demandada.

Además, el incremento patrimonial ha sido acreditado tanto con la certificación del expediente administrativo remitido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 21-X-2016, como con la certificación de la resolución de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, dictada a las 12.30 horas del 13-X-2016, cuyo monto ascendía a *dieciocho millones setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares ochenta y cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América,* sobre el cual, prácticamente, no se aportó prueba para justificar el origen de dichos fondos, sino que tal extremo no fue controvertido.

Debe de tomarse en cuenta que ambos, tanto el ex funcionario como su cónyuge estuvieron en todo momento en mejor posición de probar el origen de los fondos y no lo hicieron.

En ese sentido, la Sala advierte que el hecho presunto recogido en la normativa tanto constitucional como en la LEIFEP, quedó acreditado, pues la parte pudo oponerse en el proceso a dicha conclusión, indistintamente que la Fiscalía desconociera el origen de los fondos como públicos, los demandados tenían la carga de probar que el incremento de su situación patrimonial era lícito, en consecuencia, que no provenía por afectación de la hacienda pública o municipal.

De ahí que no resultaba adecuado oponerse a la negación del hecho presunto por desconocerse el origen de los fondos, puesto que el mismo es innegable por ministerio de ley, se trata de un imperativo categórico que solo admite oposición por ataque del hecho base; es decir, por controvertirse las causas de pedir de la demanda, que están integradas por las irregularidades de la situación patrimonial de los demandados.

En conclusión, esta Sala desestima el punto impugnado, por la prevalencia que tiene la regla de presunción bajo estudio, por sobre cualquier otra regla probatoria, incluidas las que rigen la formación del cuadro fáctico de la sentencia."

INEXISTENCIA DE LITISPENDENCIA, EN RAZÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN DEL PROCESO CIVIL DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

"VII. 1. Excepción de litispendencia: errónea valoración del requerimiento fiscal

Otro punto impugnado, relativo a defectos en la formación del cuadro fáctico de la sentencia, fue la comprobación de la excepción de litispendencia alegada por los procuradores de los demandados.

En ese sentido, expresaron los apelantes que no se realizó un análisis propio del contenido del requerimiento fiscal, ni que se haya analizado nada de lo que dice, solo se expresó que *se valoraba,* sin profundizar en ello.

Desde el punto de vista de los recurrentes, se acredita que en la acción civil del proceso penal también existía una pretensión relativa a la restitución del dinero objeto de las irregularidades porque, según la representación fiscal -sostienen-, es dinero del Estado y, por ello, no se ha valorado correctamente la prueba, lo cual se demuestra con la omisión de describir motivadamente las operaciones valorativas del requerimiento fiscal.

En conexión a lo anterior, también se estableció otro punto de impugnación, relativo a no tener por acreditado que se trata de la misma pretensión de restitución., de la acción civil establecida en el proceso penal, con la del presente proceso.

Se realizó esbozo de cada irregularidad indicada como números 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 y 13, argumentándose que las mismas son parte del proceso penal.

En conclusión, advierten los recurrentes que los montos de dinero cuya restitución se pretendió en el proceso penal a través del ejercicio de la acción civil, ascienden a la misma restitución de dinero cuya condena ha sido objeto su representado en el proceso civil.

VII. 2. En lo referente a este tema, tal como se relacionó al inicio, la Cámara desestimó dicha excepción, bajo argumentos estrictamente jurídicos, orientados principalmente a demostrar la especialidad del proceso de mérito.

Ahora bien, respecto de los argumentos dados por los recurrentes, esta Sala considera lo siguiente:

En principio, debe tenerse en cuenta que se ha invocado una finalidad para revisar el cuadro fáctico de la sentencia, **por errores de apreciación de la prueba,** dentro de los que hay que distinguir dos actividades, las cuales deben realizarse para determinar la formación de los hechos, probados o no.

En primer término, tuvo que describirse el resultado de los medios probatorios incorporados al proceso, pues de allí podrían suscitarse errores de apreciación probatoria por cuestiones materiales o comprensivas, esto es, que no se haya tenido en cuenta un medio probatorio admitido y practicado en el proceso -error material-, o bien, que siendo apreciado no se haya interpretado correctamente su resultado para tener por establecido el objeto de la prueba -error de

comprensión-, lo cual puede provocarse por diversas razones, entre ellas el que no se haya considerado lo que propiamente se extrae del medio -tergiversación- o que habiéndose estimado el contenido íntegro se haya comprendido mal -error de alcance, por ende, de argumentación-.

En segundo término, una vez descritos los medios de prueba y su resultado conforme a lo que se introdujo en el proceso, debe darse la argumentación valorativa, esto es, justificar el mérito de cada medio probatorio, lo cual implica que tiene que darse una apreciación conforme al sistema de la sana crítica o la denominada prueba tasada o tarifa legal -mérito probatorio preestablecido por la ley- y, en consecuencia, pueden provocarse en este apartado errores de valoración propiamente tal, por el quebranto de algunos de los preceptos que regulan cualquiera de los sistemas mencionados.

VII. 3. Ahora bien, se advierte que la Cámara, en cuanto a la motivación que resolvió la litispendencia, no apreció el requerimiento fiscal y argumentó cuestiones de estricto derecho, tratándose de consideraciones que partieron de los **hechos admitidos por las partes** y que, por lo tanto, con base al ord. **1°** del art. 314 CPCM, están exceptuados de prueba.

Efectivamente, en el punto impugnado se expresa que el requerimiento fiscal no fue valorado y por ello el asunto podría incardinarse en un vicio de materialidad, por no haberse visto prueba incorporada al proceso, negándosele la lectura comprensiva adecuada para probar *una determinada afirmación de hecho,* pero se advierte que la misma tiene que ser objeto de prueba para atribuir un error de apreciación.

Si ello es así, debe tenerse en que cuenta que, dentro del cuadro fáctico de la sentencia, se sostuvo como hecho admitido por las partes y, por lo tanto, **que no requiere prueba alguna,** que las irregularidades 2, 3 y 5 señaladas por la Corte Suprema de Justicia, son las mismas que sirvieron de fundamento para la acción civil que se siguió en sede penal contra el demandado ERCU.

De ahí que no tenga real cabida el punto impugnado, por errónea valoración del requerimiento fiscal, pues la queja que se enmarca en el mismo, radica en la revisión de un medio de prueba para comprobar una afirmación de hechos que no requiere prueba, precisamente **porque fue admitido por ambas partes.**

En ese sentido, esta Sala concluye que el punto impugnado carece de fundamento efectivo, lo cual no pudo apreciarse liminarmente, puesto que era necesario revisar el contenido del cuadro fáctico de la sentencia, relativo a la excepción de litispendencia, con lo cual queda evidenciado que resultó imposible atribuir un error de apreciación [de la prueba] al requerimiento fiscal, debido a la aceptación de la partes respecto de lo que con el mismo se pretendía probar, por la comunidad probatoria de aquél.

VII. 4. Lo que debe tenerse en cuenta es que, siendo configurado así el cuadro fáctico de la sentencia, solo requería aplicación de normas legales, lo cual realizó la Cámara *a quo* bajo argumentos estrictamente jurídicos, los cuales también han sido impugnados y, por lo tanto, es en dicho apartado donde se analizó el asunto de mérito.

En conclusión, por las razones expuestas, se consideró desestimar la alzada, en cuanto a este motivo de impugnación.

VI. 5. Por otra parte, sobre el no tener por acreditado que se trata de la misma pretensión de restitución, tanto en la acción civil ejercida en el proceso penal con el presente proceso, esta Sala advierte que no se ha señalado ningún medio de prueba sobre el cual se atribuya un error de apreciación y, dada la conexión que tiene con lo precedentemente dicho, no procede su estimación."

LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ES IMPROCEDENTE, DADO QUE EL PROCESO SE INICIÓ ANTES DE TRANSCURRIR DIEZ AÑOS DEL CESE EN SU CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO

"VII. I. Excepción de prescripción: no tener por acreditado el doble cargo del demandado ERCU

En lo tocante a la excepción de prescripción, los apelantes advierten que no se tuvo por acreditado el doble cargo del señor CU como delegado para el manejo de fondos, considerando únicamente su calidad de secretario privado.

Advierten que con el acuerdo de nombramiento como colaborador de la Presidencia de la República para el manejo de los gastos reservados y secretos que abarcan todas las actividades relativas a la inteligencia del Estado, el aludido doble nombramiento constituye un hecho probado.

Los recurrentes señalan que dicho *acuerdo de nombramiento* obra en la prueba documental admitida, consistente en certificación del expediente administrativo remitido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 21-X2016.

Por otro lado, los recurrentes sostienen que en la sentencia impugnada no se consideró y **se omitió la valoración de dicho doble nombramiento,** cuya importancia estriba en el hecho que todas y cada una de las irregularidades atribuidas en la demanda conciernen precisamente al manejo de fondos de carácter reservado, lo cual solamente fue posible por medio de la existencia de tal designación.

VIII. 2. Referente a la excepción de prescripción, la Cámara de mérito advirtió, en lo medular, lo siguiente:

Que los procuradores de la parte demandada señalaron, acerca del demandado **ERCU,** que este no solo tenía el cargo de secretario privado de la Presidencia, en el período comprendido del 2004 al 2009, sino que también fungió como delegado para el manejo de fondos públicos, cuyo encargo último finalizó el 16-111-2005, por lo que al haberse presentado la demanda hasta el 29-XI-2016, consideran que la acción había prescrito en atención a los arts. 2253 y 2256 C.

Dicha afirmación se acreditó -sostuvieron- con el Reglamento para el Manejo, Control y Fiscalización de los Fondos Públicos, Gastos Reservados y Secretos de la Presidencia de la República Destinados a las Actividades de Inteligencia, Clasificación, Manejo y Protección de Información y Deber de Guardar Secreto de los Colaboradores Designados para el Manejo de Gastos Reservados y Secretos -en adelante, el Reglamento para el manejo de fondos públicos-, emitido

por el señor EASG, cuyo encargo terminó el dieciséis de marzo de dos mil cinco.

Bajo dicha acreditación probatoria la Cámara *a quo,* tras un análisis jurídico de validez del reglamento, concluyó que por falta de publicación en el Diario Oficial no podía ser invocado como fundamento de sus argumentaciones, por un lado, y por otro, de haberse publicado resultaba irrelevante la acreditación de dicho cargo, ya que no perdió su calidad de funcionario público sino hasta el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, y dado que la demanda fue presentada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, la acción aún no había prescrito.

VIII. 3. Respecto de los argumentos suministrados, tanto por los recurrentes como por la Cámara, esta Sala pasó a considerar lo siguiente:

Como finalidad del recurso, inmersa en la petición bajo análisis, se tuvo el revisar una prueba documental que, según los impetrantes, no fue apreciada por la Cámara para tener por establecido el doble cargo que ostentó el demandado señor **C U1-finilla,** tanto como secretario privado de la Presidencia, como delegado del presidente de la República para el manejo de fondos públicos.

La orientación de la defensa en este punto radicó en que, como secretario privado de la Presidencia, lo cual fungió con base a atribuciones establecidas en el art. 51 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, no tenía el manejo, administración o contacto alguno con fondos públicos, por lo tanto, **dicho cargo no implicó la administración de recursos.**

En cuanto a este terna, resultó imperativo remitirse a lo sostenido por la Sala de lo Constitucional en sentencia de inconstitucionalidad referencia 146-2014/1072017, de las 12.30 horas del día 28-V-2018, cuando dijo lo siguiente:

«[...] El art. 240 inc. 1° Cn. establece que "[1]os funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes" [...]. A partir de este enunciado se puede colegir lo siguiente: (i) Los posibles sujetos activos del enriquecimiento ilícito son los funcionarios o empleados públicos, para lo cual no es imprescindible que administren, manejen, autoricen o custodien fondos pertenecientes a la Hacienda Pública o Municipal; lo determinante, entonces, es que se ocupe un cargo público "cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento" (art. 240 Cn), independientemente de la forma o el medio que se utilice para tal violación constitucional. En consecuencia, **no podrá invocarse como eximente de responsabilidad civil el hecho de no administrar directamente fondos públicos [...]»** (sic) (el subrayado y resaltado es de esta Sala).

De ahí que, las alegaciones de los recurrentes en cuanto a que era necesario apreciar el acuerdo de nombramiento del Presidente, con el cual se delegó al demandado para administrar fondos públicos, no tienen fundamento jurídico, debido a que, el máxime intérprete de la Constitución ha determinado que indistintamente se administre o no directamente fondos públicos, no es posible invocar dicha condición como eximente de responsabilidad civil.

Ese discernimiento es conforme a lo resuelto por la Cámara de mérito, al establecer que resultaba irrelevante la acreditación de dicho cargo, ya que no

perdió su calidad de funcionario público sino hasta el día 31-V-2009 y, dado que la demanda fue presentada el 29-XI-2016, la acción aún no había prescrito.

Por otra parte, al haberse admitido en audiencia la fotocopia simple de acuerdo clasificado con código de seguridad, nivel de protección reservado, emitido por el entonces presidente de la República, EASG, mediante el cual se nombró a ERCU como colaborador del presidente para el manejo de los gastos reservados y secretos, se dio por acreditado que no tuvo un doble cargo y ha resultado inexacto el pretender deslindar su condición funcional en dos rubros, puesto que el único cargo válidamente conferido fue en calidad de Secretario Privado de la Presidencia, y en razón de ello asumió la responsabilidad para el manejo de cuentas específicas, así mismo, dicho acuerdo no relevó del cargo original por el que fue nombrado y juramentado.

Con base en lo expuesto, esta Sala desestimó el recurso por el anotado motivo de impugnación, lo que así impone declararse."

PROCEDENTE MODIFICAR LA CUANTÍA DE LA CONDENA IMPUESTA, AL REALIZAR LA INTEGRACIÓN DEL PERITAJE CONTABLE

"IX. 1. Excepción de falta de enriquecimiento ilícito: errónea valoración del dictamen pericial

Se expusieron dos razones para sostener la errónea valoración del dictamen pericial:

a) Los magistrados de Cámara se apartaron de la conclusión del perito argumentando, en síntesis, que debieron considerarse las cantidades de dinero que ingresaron en la cuenta de ahorros del demandado, en especial la que tiene que ver con la irregularidad #3 de la Sección de Probidad.

Al respecto, a consideración de los recurrentes, el alejamiento de la conclusión dada por la perito resultó equivocada, debido a que la carga de probar corresponde al demandante y si este había delimitado el punto de pericia a *determinar* el incremento patrimonial, no hay justificación para que la Cámara vaya más allá, a especular si hay o no un incremento patrimonial mayor o no, al dictaminado en el examen técnico.

En ese orden, los impetrantes advierten que la conclusión es clara y la pericia concluyó que el incremento patrimonial era por **doscientos noventa y seis mil ciento cincuenta y dos dólares cuarenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América.**

Por consiguiente, siempre de acuerdo a los recurrentes, **si el hecho controvertido era determinar a cuánto ascendió el incremento patrimonial del demandado,** no podía el tribunal *a quo* apartarse de dicha conclusión, pues, los magistrados no son conocedores de las normas técnicas contables utilizadas para la determinación del aumento patrimonial.

b) Los recurrentes expresan que no se valoró la prueba en su conjunto, debido a que los magistrados reconocieron que el dinero que ingresó a la cuenta del Banco Cuscatlán N° *********-7, se destinó a rubros de alquiler de maquinaria, así como para servicios de gobierno, importación de bienes y otros egresos, lo que implica expresa aceptación que dichos fondos se destinaron a operaciones

de inteligencia del Estado, sin que ello implique un incremento patrimonial -en beneficio- del funcionario.

Aunado a ello sostuvieron que, de haberse admitido como prueba la fotocopia simple del acuerdo mediante el cual se nombró al demandado para el manejo de los gastos reservados y se le diera valor al Reglamento respectivo, se hubiere concluido que estaba habilitado legalmente para ingresar los montos de dinero que venían de la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público, para determinar que no existe incremento patrimonial.

IX. 2. En cuanto a la valoración del dictamen pericial, la Cámara de mérito sostuvo lo siguiente:

Que en el presente caso se han cumplido los requisitos de forma y de fondo del peritaje judicial, ya que el nombramiento no fue impugnado, así como el documento en el que consta el informe pericial reunió las formalidades y solemnidades, por un lado y, por otro, el dictamen se circunscribió a los puntos propuestos como objeto de análisis técnico, a cuyo medio probatorio se le aplican las reglas de la sana crítica con base al art. 389 CPCM.

Ahora bien, tras haber analizado cada una de las irregularidades que constituyeron el fundamento de la demanda, en relación con el resultado del peritaje, la Cámara expuso lo siguiente:

«[...] sobre las consideraciones finales a las que arribó la perito judicial, especialmente en lo concerniente al monto señalado como el equivalente al incremento patrimonial de los demandados, es menester señalar que, si bien es cierto la premisa sobre la que descansa la pretensión de enriquecimiento ilícito es el aumento notable de patrimonio que haya experimentado el funcionario público, este como ya vimos, no se trata únicamente de un incremento en sus activos o del dinero que pase a formar parte de su capital y se quede ahí por un tiempo, pues también puede referirse a una disminución de sus pasivos, o puede reflejarse en ventajas para terceras personas, bajo ese contexto, la perito fue nombrada para que con base a sus conocimientos contables estableciera o determinara el origen y destino de fondos señalados dentro de las irregularidades y si estos tenían una justificación legal de su obtención, lo que así fue realizado por la perito para cada una de las irregularidades. [...]» (sic) (el subrayado es de esta Sala).

Dicho tribunal advirtió, en relación con lo que debe entenderse como incremento patrimonial que -la perito-: «[...] al establecer la suma a la que ascendía el incremento patrimonial de los demandados concluyó que este era por el monto de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y al ser interrogada en la audiencia probatoria por los apoderados de la parte demandada sobre dicha conclusión, manifestó que una cosa era todo lo que ingresa en efectivo por medio de cheques o notas de abono a una cuenta bancaria y los egresos que se han tenido, y otra es el puro patrimonio que se conforma por bienes muebles, inmuebles e inversiones. De igual forma, manifestó que no le era posible determinar si el dinero que ingresaba y salía de las cuentas bancarias constituía enriquecimiento ilícito, pues no se tenía la certeza del destino de esos fondos. [...1» (sic) (subrayado de esta Sala).

Además, la Cámara observó:

«[...] Y es así que, podemos denotar que la perito construyó su conclusión del incremento patrimonial, tornando como base las declaraciones de patrimonio presentadas ante la Sección de Probidad y los demás documentos aportados al proceso sobre los cuales recaería la pericia financiera-contable, sin incluir las cantidades señaladas en cada una de las irregularidades, pues ella no tenía la certeza de si se trataba de un verdadero incremento patrimonial al desconocerse el destino o el uso del dinero que salía de las cuentas del demandado señor ERCU y su cónyuge la señora MARDC, lo que nos parece acertado de su parte, pues no se le podía exigir que investigara por su cuenta ese aspecto, siendo en este punto donde debió intervenir la parte demandada aportando los medios de prueba idóneos con los que se evidenciara el origen legal y destino de esas cantidades de dinero, y que las mismas no fueron utilizadas para inversiones, cubrir negocios propios o para beneficio de su grupo familiar [...]» (sic) (subrayado de la Sala)

Bajo tales premisas, el tribunal *a quo* ultimó:

«[...] Por consiguiente, dado que la perito no incluyó dentro de la cuantía del incremento patrimonial de los demandados las sumas de dinero señaladas dentro de las dieciséis irregularidades nos apartamos de esa conclusión, pues estimamos que sí debió considerarse parte del incremento patrimonial aunque no se mantuviese en el tiempo, dado que aunque ingresare un solo día a sus cuentas personales, con ello ya se entiende que puede disponer de él como mejor le convenga sin ningún tipo de reparo, por lo que no pueden excluirse de la cuantía de enriquecimiento ilícito., debiendo configurarse dicho monto por la sumatoria de todas las cantidades que no han sido justificadas por la parte demandada y a las que ya hemos hecho alusión para cada una de las irregularidades [...]» (sic) (subrayado efectuado por la Sala).

IX. 3. Respecto de este punto de impugnación, en relación con lo que comprende la prueba pericial, en la obra española “La Prueba pericial de parte en el proceso civil”, el jurista Ignacio Flores Prada la concibe como una actividad que principalmente estriba en “la aplicación de los conocimientos del experto a un supuesto concreto, emitiendo un parecer, evacuando una opinión o facilitando una información”. (Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2006)

Partiendo de las motivaciones jurídicas expresadas por la Cámara, es de significar que en lo que atañe a la finalidad de la prueba pericial, ésta, tal como sostiene el procesalista español José María Ascencio Mellado, no consiste en la fijación de hechos y convencer al juzgador acerca de su realidad y existencia, sino al contrario, recae sobre hechos que ya han sido objeto de fijación mediante otros medios de prueba, sirviendo éste (el dictamen) para aportar máximas de experiencia que el juez no posee y que por tal razón coadyuvan a una correcta y adecuada apreciación de los hechos en su total y debida dimensión. (Derecho Procesal Civil. Parte Primera. Tercera Edición. Editorial Titant lo Blanch. Valencia, 2008, p. 263)

En lo que se refiere a los dictámenes periciales de parte, el juez, conforme el sistema de la sana crítica, puede valorarlos sin que sea imperativo sujetarse a

ellos pero, desde luego, deben cumplir los requisitos que impone la ley para su validez y, así, estar debidamente motivados y acordes a los fines que se persiguen a través de su realización.

En tal sentido, ha de tenerse en cuenta que, tal como lo advirtió la Cámara, esta probanza se valora con base a las reglas de la sana crítica, lo cual impone una carga de argumentación para justificar el mérito que le corresponde, ya que no tiene asignado por el legislador una ponderación sobre otros medios probatorios.

Con base en lo dicho esta Sala consideró que, efectivamente, el juzgador puede apartarse de las conclusiones que da un perito, pero las razones que se suministren para justificar tal alejamiento, deben ser suficientes, puesto que la prueba pericial parte de la premisa de una acreditación sobre un conocimiento especializado en una materia determinada.

En ese sentido, esta Sala advierte que la motivación dada por la Cámara de mérito, no fue suficiente para justificar apartarse de la conclusión pericial pues, tal como sostienen los apelantes, si el hecho controvertido era determinar a cuánto ascendía el incremento patrimonial del demandado, y si el resultado provino del estudio de la especialista, no podía llegarse a una conclusión distinta, precisamente por haberse incorporado al proceso los datos que revelan el incremento patrimonial por un monto específico.

De ahí que, el informe de peritaje complementario agregado de fol. 11,337 al 11,446 de las piezas 57 y 58, el cual fue realizado por la contadora pública Laura del Pilar Marroquín de Álvarez y presentado al tribunal de primera instancia el 30-XI2017, en lo tocante a su desarrollo y conclusiones, tras realizar el análisis patrimonial del señor ECU, observó que, al comparar los ingresos con los egresos se obtenía un valor negativo de $710, 339.19, diferencia para la cual el demandado no había tenido una fuente económica de ingresos con la cual soportar dicha diferencia.

Tal desarrollo es conteste con la conclusión dada en el referido informe, cuyo monto se ratifica, lo cual evidencia que no existe contradicción dentro del estudio patrimonial del demandado.

De esa manera, esta Sala concluyó que fue errónea la valoración del tribunal *a quo,* por lo que procedió a modificar la cuantía de la condena impuesta al demandado, según se sostiene adelante, por tener conexión este punto con el relativo a la litispendencia, en específico por los montos cuyo reconocimiento expreso realizó el ministerio público fiscal, relativos a las irregularidades 2, 3 y 5, que fundamentaron la demanda para este proceso."

EL FUNCIONARIO O PERSONA ACUSADA CARGA CON LA OBLIGACIÓN DE PROBAR QUE, AÚN SIN MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS, EL INCREMENTO PATRIMONIAL DETECTADO NO TIENE COMO FUENTE EL CARGO QUE HA DESEMPEÑADO

"Cuarta finalidad: revisión del derecho aplicado

X. 1. Errores de interpretación de los arts. 240 Cn., 21 y 26 LEIFEP, y 2083 CC.

En los recursos interpuestos por los licenciados [...] y [...], se pidió la revisión del derecho aplicado, específicamente el que se interpuso en interés del señor **CU,** señalando un error de interpretación del art. 240 Cn.

La única razón admitida para en el caso de este demandado, es la que, desde e punto de vista de los apelantes, la expresión “a costa de la hacienda pública o municipal”, significa que el enriquecimiento sólo es aquel que se produce a consecuencia de incrementar un patrimonio con bienes de la hacienda pública. Se sostiene pues, que no es una acción para determinar cualquier enriquecimiento, ni para determinar el desvío de fondos públicos.

Dentro la argumentación se hizo referencia, para respaldar la interpretación propuesta, a las “versiones taquigráficas que contiene la discusión y aprobación del proyecto de la Constitución de la República de 1983”, a su vez, se solicitó que fueran admitidas como prueba las afirmaciones realizadas para demostrar su interpretación.

Por conexión en el tema, se incluyeron en este apartado los argumentos suministrados en el recurso interpuesto en interés de la demandada **RDC,** para sostener la infracción del art. 21 LEIFEP, tal como se indicó en el auto de admisión del recurso; los recurrentes en lo medular sostienen que para la aplicabilidad de dicho precepto, se requiere que el procesado sea o haya sido funcionario público, lo que no aplica, a su consideración, ya que la demandada *no ha sido funcionaria pública.*

Bajo dicha línea argumentativa, también se sostuvo la interpretación errónea del art. 26 LEIFEP, replicando los impetrantes que sólo se puede pedir la restitución a costa de la hacienda pública con la condición que se trate de un funcionario público, por lo que la cónyuge del funcionario no debió ser emplazada, mucho menos condenada a *restituir dinero que no se sabe que sean o hayan sido propiedad del Estado.*

Finalmente, siempre dentro de los argumentos del recurso en interés de la señora RDC, se señaló la interpretación errónea del art. 2083 CC, en relación a que no ha sido funcionaria pública y, por ello, la relación de la demandada y la parte actora, que justifique la inserción de la misma en este proceso, *deriva de una relación extracontractual, por lo tanto, se le aplica el término prescriptivo de tres años, lo cual fue alegado vía excepción.*

X.2. En lo que respecta a esta temática, la Cámara de mérito partió de la premisa que algunas circunstancias propias del enriquecimiento sin causa no tienen aplicación en este caso, bajo los siguientes conceptos:

«[...] estamos ante una acción diferenciada y que tiene a su base una presunción legal que desplaza o exonera al actor de la prueba de ciertos presupuestos que en una acción de restitución por enriquecimiento sin causa fuera de la mencionada ley, sí estaría obligado a probar, y nos estamos referimos a los requisitos del empobrecimiento y del nexo causal entre éste y el enriquecimiento [...] Y es que, si estarnos claros que la pretensión de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos se acuña en una presunción legal, es lógico pensar que no se le puede exigir al actor en el presente caso, que acredite el empobrecimiento sufrido por la administración pública., por la razón que es la misma ley la que nos dice que se presume enriquecimiento ilícito, cuando el incremento patrimonial del funcionario o empleado público fuere notable[mente] superior al que pudo obtener de acuerdo a sus ingresos legales [...] El porqué

de la anterior justificación se origina en el hecho de que los mandatarios de la parte demandada, en sus alegaciones iniciales, expresaron que la pretensión de enriquecimiento ilícito requería que la parte demandante acreditara el empobrecimiento sufrido por la Hacienda Pública, sin lo cual no podría entablarse la presente acción; sin embargo, como ya hemos dicho, si se tratare de una acción normal de restitución, conforme los lineamientos establecidos doctrinariamente, es dable afirmar que sí debería requerirse la acreditación de un empobrecimiento de quien se presente a incoar la acción, no obstante, en casos como el presente, no se exige porque queda suplido por la presunción establecida en la ley [...]» (sic) (el subrayado es de esta Sala).

X.3. Dadas las razones suministradas por el tribunal *a quo,* esta Sala concurre con dicha glosa, por su conexión con el punto relativo a la revisión de hechos probados y valoración de la prueba, concerniente a la aceptación de los demandados respecto del desconocimiento de la procedencia de fondos, si eran públicos, remitiéndose a lo expuesto y se agrega lo siguiente, en cuanto al significado de la expresión "a costa de la hacienda pública o municipal", así:

En sentencia pronunciada por esta Sala, referencia 9-APC-2017, pronunciada por los magistrados suplentes licenciados Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Ramón Narciso Granados y doctor Ramón Iván García, se sostuvo lo siguiente:

«[...] El inc. 1° del art. 240 de la Constitución de la República, dispone que: *"Los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes".*

En ese sentido, el supuesto hipotético de dicha disposición, cuando se expresa lo relativo al enriquecimiento sin justa causa *a costa de la Hacienda Pública o Municipal,* significa que se perjudica el erario estatal, cuya disminución proviene de un enriquecimiento sin justa causa por un funcionario o empleado público -por la vía de la comisión delictiva-; por otro lado, se presume tal afectación pecuniaria -y, en sentido inverso, el empobrecimiento del Estado-, cuando no se justifica el aumento patrimonial de parte de dichos sujetos.

Por lo tanto, dicha expresión jurídica se refiere no solo a la calidad del funcionario, sino también al ejercicio de ella, pero únicamente cuando el funcionario lo hace a costa de la Hacienda Pública o Municipal -es decir en la administración de esos bienes- y, precisamente por ello, se trata de un juicio de carácter eminentemente civil de enriquecimiento sin causa del funcionario o empleado público.

En efecto, el texto constitucional dice: "Los funcionarios y empleados púbicos que se enriquecieren sin justa causa, a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio, lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes".

Lo anterior supone tres aspectos fundamentales: [a] Que el juicio civil por enriquecimiento sin causa solo tiene procedencia cuando el funcionario lo hace acrecentando su patrimonio a costa de la Hacienda Pública o Municipal, ello es, porque tiene la administración de esos bienes; por ende, este juicio no tiene

vinculación con otros tipos de enriquecimiento ilícito, como el de carácter penal, que sí puede también corresponderse con el abuso de la función pública, aunque no se administren bienes, y por ello es que el precepto constitucional dice "[...] sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes".

[b] Que aunque el enriquecimiento ilícito sea de orden civil, por afectar la Hacienda Pública o Municipal, la forma de afectación puede ser diversa, en cuanto la administración de bienes es un acto complejo y no solo debe entenderse apropiación o distracción de los bienes administrados, pueden concurrir otros aspectos, que afecten los bienes de carácter estatal o municipal; empero, sí es presupuesto *sine qua non* para el juicio civil de enriquecimiento sin causa, que el funcionario tenga la administración de bienes de la Hacienda Pública o Municipal, porque la responsabilidad civil se erige sobre el enriquecerse sin justa causa a costa de dichas haciendas.

[c] Por el contrario, si del juicio resulta que el enriquecimiento del funcionario o empleado tuvo como componente una conducta delictiva, entonces, al tratarse de un hecho estrictamente penal, ello dará lugar a este tipo de procedimiento, puesto que además del enriquecimiento ilícito civil, por un superlativo aumento del patrimonio del funcionario, que teniendo a su cargo bienes de carácter estatal o municipal, no pudo explicar satisfactoriamente su acrecimiento, concurren conductas especificas constitutivas de delito, por las cuales deberá responder.

En resumen, el juicio por enriquecimiento sin causa, que es de orden estrictamente civil, se limita a enjuiciar el aumento del patrimonio del funcionario o empleado -incluido su grupo familiar-, cuando el funcionario o empleado lo hace a costa de la Hacienda Pública o Municipal, es decir, cuando administra bienes, sin que pueda explicar razonablemente el aumento de su patrimonio. [...]» (sic).

No obstante, debe tenerse en cuenta que la Sala de lo Constitucional, en la citada sentencia ref. N° 146-2014/107-2017, adoptó interpretación distinta a la proporcionada por la Sala reemplazante, de la siguiente forma:

«[...] El art. 240 inc. 1° Cn. establece que "[l]os funcionarios *y* empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes" [...] A partir de este enunciado se puede colegir lo siguiente: (i) Los posibles sujetos activos del enriquecimiento ilícito son los funcionarios o empleados públicos, para lo cual no es imprescindible que administren, manejen, autoricen o custodien fondos pertenecientes a la Hacienda Pública o Municipal; lo determinante, entonces, es que se ocupe un cargo público "cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento" (art. 240 Cn), independientemente de la forma o el medio que se utilice para tal violación constitucional. En consecuencia, no podrá invocarse como eximente de responsabilidad civil el hecho de no administrar directamente fondos públicos [...]» (sic) (subrayado por esta Sala)

De manera que, la regla de interpretación constitucional transcrita, en virtud del efecto *erga omnes* que provoca una sentencia de inconstitucionalidad,

el cual ha de regir para su aplicación en casos futuros -el presente lo es-; si bien asume un sentido disímil al otorgado por la Sala de lo Civil reemplazante en el caso que se cita, refuerza lo ahora sostenido -por las propias particularidades del caso de mérito-, en cuanto que la razón de promover un proceso dentro de cuya finalidad básica se encuentre el reclamo civil por afectación al erario público, *no requiere que el funcionario -o persona demandada/acusada- administre fondos públicos,* por lo cual dicho sujeto habrá de cargar con la obligación de probar que, con o sin gestión/manejo de los mismos, el incremento patrimonial detectado no tiene como fuente el cargo que ha desempeñado [imperativo que alcanza a las *Pep"s* -personas políticamente expuestas, como ha sido el caso de la señora RDC-, que no han asumido rol de servidores públicos, pero sí están comprendidos en el entorno cercano a quien ostentó tal calidad, según los arts. **VI.1** literales d) y e), XI y XII de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 2 lit. a), 3.2, 28, 31 Nos. 8 y 9, y 52.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, relacionados con el art. 144 Cn., entre otras disposiciones legales concurrentes].

En definitiva, por las razones que se consignan, se desestimó este punto de impugnación, por no configurarse un error de interpretación, en relación con el art. 240 Cn."

LA CONFIGURACIÓN DEL LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, EN LOS SUPUESTOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO, ESTÁ DETERMINADO POR LA LEY

"X. 4. Ahora bien, en lo referente a la interpretación errónea de los arts. 21 y 26 LEIFEP, cuya infracción ha sido deducida en el recurso de interés de la señora **RDC,** se advierte lo siguiente:

Esta Sala considera que la demandada, como cónyuge del ex secretario de la Presidencia de la República, tuvo legitimación pasiva para figurar como tal en el proceso de mérito, con base en los arts. 240 Cn., 2 lit. a), 20 y 52.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -esta última disposición expresamente se refiere a *familiares-,* **1** párrafo 3°, VI.1 lit. d), IX y XII de La Convención Interamericana contra la Corrupción, 7 y 26 LEIFEP, pero estos últimos sólo en su sentido interpretativo -en virtud del principio de adecuación que impera en los instrumentos de derecho internacional-.

En tal orden de ideas, se parte de la premisa constitucional establecida en el art. 240 Inc. 2° Cn., que de igual manera se encuentra en el art. 7 LEIFEP, el cual nuevamente obliga citar: *"Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se considerarán en conjunto".*

Es del último enunciado normativo de donde claramente se extrae la legitimación pasiva del cónyuge y los hijos del funcionario o empleado público, ya que el examen del incremento patrimonial debe realizase de forma inescindible o por separado a cada miembro del grupo familiar, lo cual tiene como propósito evitar que se separe la pretensión en procesos distintos, en atención a la posible fragmentación de la indebida riqueza.

Lo que no estaría permitido por la ley sería que el Estado, en uso de su poder coercitivo en la investigación ya sea administrativa o judicial, deje por fuera de intervención tanto a los hijos o al cónyuge del funcionario investigado, porque se tiene que tornar en cuenta que sí el incremento se presume o detecta en el peculio de estas otras personas, a ellas se les debe dar intervención de ley en el proceso para garantizar su derecho de defensa.

El párrafo P del art. 58 CPCM, dice que «[s]on partes en el proceso el demandante, el demandado y quienes puedan sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada». La dicción del legislador parece obvia. Sin embargo, la dilucidación de quién ocupará cada lugar en el proceso requiere el análisis de las circunstancias propias de cada caso, especialmente desde la perspectiva de quiénes puedan sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada.

A la señora **RDC,** también se le demandó por presumir un favorecimiento al incrementarse su peculio en el tiempo que su esposo fue funcionario del Estado. Consecuentemente, a ella eventualmente, el Estado de El Salvador podrá exigirle la restitución de ese incremento. Puede afirmarse, entonces, que tal potencial consecuencia, hará que la señora **RDC** sufra los efectos materiales de la cosa juzgada, ya que sus derechos se perderán, como consecuencia directa de la orden de restitución que en una eventual sentencia firme se determine.

Que, consiguientemente, el presupuesto procesal de los sujetos en este caso tiene que colmarse mediante la integración de un litisconsorcio pasivo necesario, que se compondrá por la intervención de la señora **RDC.** Si ella está persuadida de que el incremento en su patrimonio no proviene de las gestiones realizadas por su cónyuge en el tiempo que fungió como secretario privado de la presidencia, mal haría en no defenderse en esta causa.

Entonces, la configuración del litisconsorcio pasivo necesario, en los supuestos de enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público, está determinado por la ley, el cual según el art. 76 CPCM corresponde: *"Cuando una relación jurídica indivisible pertenezca a varias personas, de modo que la sentencia extenderá sus efectos a todas ellas, deberán demandar o ser demandadas de forma conjunta";* por lo tanto, el escrutinio patrimonial designado por la Constitución de la República y la LEIFEP configura una relación jurídica indivisible, objeto de actividad probatoria, cuyo resultado provoque las consecuencias jurídicas que han de ser pronunciadas en un solo fallo, contra todos aquellos sujetos a quienes la ley determina el estudio paralelo al del servidor público.

Como complemento de lo anterior, el art. 26 LEIFEP proporciona otra regla que legitima pasivamente a la cónyuge del ex secretario de presidencia de la República, lo cual ocurre: *"Cuando de la información seguida por la Corte Suprema de Justicia o del juicio que de ella se derivare, apareciere que el cónyuge o hijos*

del funcionario o empleado público encausado, se han enriquecido sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, se les citará o emplazará, según el caso tomando la información o el juicio en el estado en que se encontraren, sin poderlos hacer retroceder, pero si ya hubiere comenzado a correr el término probatorio de la Primera Instancia, se prorrogará por diez días y si el proceso se encontrare en Segunda Instancia, se le concederá un término de diez días, ambos para el solo efecto de que puedan defender sus derechos".

De ahí que, en el presente caso, se ha relacionado en la motivación de la decisión del Pleno de la Corte, que de la señora **RDC** se obtuvo información indiciaria sobre un enriquecimiento sin causa, haciendo énfasis la ley que pueden ser citados o emplazados al proceso de mérito, lo cual garantiza su derecho de audiencia, contradicción y defensa, permitiéndosele intervenir en las fases de alegación, a efecto de justificar el incremento que le es indicado en la demanda.

Ahora, sobre la interpretación errónea del art. 2083 CC., esta Sala consideró lo siguiente:

El precepto señalado como infringido establece: *"Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto".*

Dicha regla se aplica a la responsabilidad civil extracontractual, lo cual es un supuesto diferente al enriquecimiento ilícito de servidores públicos y extensivamente a sus familiares, previsto en la Constitución de la República, por consiguiente, no resulta aplicable al caso de autos.

En conclusión, no se estimó el punto impugnado relativo a los errores de interpretación de los arts. 240 Cn., 21 y 26 LEIFEP, y 2083 C."

LA ACCIÓN DE RESTITUCIÓN DE BIENES AL ERARIO PÚBLICO DEBE PROMOVERSE EN SEDE CIVIL, NO PENAL, PUESTO QUE EN ESTE PROCESO EL DEMANDADO DEBE JUSTIFICAR EL INCREMENTO PATRIMONIAL, LO CUAL ES DISTINTO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL A LA QUE ALUDE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Y TAMBIÉN ES DIFERENTE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE PROVIENE DE LA COMISIÓN DE UN DELITO

"XI. 1. Litispendencia y prejudicialidad: inaplicación de los arts. 48 y 109 CPCM

Otro punto de refutación, vinculado con la excepción de litispendencia, es la inaplicabilidad en el caso de los arts. 109 y 48 CPCM. Respecto al primer precepto, que entre otras cosas regula la litispendencia, debe tenerse en cuenta lo expuesto en el apartado VII de esta sentencia, relativo a la errónea valoración del requerimiento fiscal.

El precitado punto de impugnación fue desestimado debido a que no podía atribuirse un error de apreciación sobre un medio probatorio vinculado a un hecho admitido por el Ministerio Público Fiscal, consistente en que tres de las irregularidades que fundaron el proceso de mérito, también fundamentaron la acción civil en el proceso penal que se siguió contra el demando **ERCU.**

Así las cosas, habiendo subsistido el cuadro fáctico de la sentencia fundamentada en un hecho admitido, correspondía únicamente aplicar el derecho al caso de mérito, sobre lo cual también los procuradores del referido demandado han impugnado su falta de aplicación, bajo los conceptos siguientes:

a) Referente a la inaplicación del art. 109 CPCM los recurrentes advierten, del contenido de dicho precepto legal, dos reglas: la primera, que basta el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, por lo que no tiene razón el tribunal *a quo* al sostener que el demandado debe ser condenado penalmente previamente, ya que únicamente se exige un riesgo. La segunda, a juicio de los apelantes, que la ley exige sean las mismas partes en relación a la misma pretensión, advirtiendo que si la Cámara tuvo por acreditado que hay identidad de partes y causa de pedir, debió aplicar el art. 109 CPCM, pues cuando la ley exige la misma pretensión, no está exigiendo que sea la misma cosa.

b) Por otro lado, en lo que concierne a la inaplicación del art. 48 CPCM, se expusieron dos razones para sostener ese punto de apelación, así:

Primero, lo recurrentes afirman que el juez tiene facultad de adecuar los hechos probados o acreditados al derecho aplicable y, por lo tanto, si la Cámara tuvo por establecido con la *litispendencia* que se trataba de las mismas personas y causas de pedir, debió buscar, dentro de las normas aplicables, aquella donde dichos extremos podrían subsumirse.

En tal sentido, los apelantes advierten que se cumplen los elementos del art. 48 CPCM, entre ellos el momento para acordar la suspensión por prejudicialidad: la acreditación de la causa penal y que la decisión del tribunal con competencia penal pudiera tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil o mercantil.

Segundo, los impetrantes sostienen que la representación fiscal expresamente pidió prejudicialidad en el proceso penal, como consta en el requerimiento, el cual obra en esta causa y que es anterior a la demanda que dio lugar a la misma; se expuso que lo reclamado en el proceso penal era sobre la base de irregularidades detectadas por la Sección de Probidad y, por tratarse de un delito, no había competencia inmediata de la judicatura civil.

XI. 2. En lo medular, la Cámara de mérito parte de la premisa que la única acción que puede acumularse al proceso penal es aquella que contenga como *causa petendi* los mismos hechos que están en la base de la acción penal.

Bajo dicha razón, según el tribunal *a quo,* el daño debe tener como causa única e inmediata el hecho criminal que se investiga primero y luego podrá ser juzgado, dado que se encamina a indemnizar los perjuicios directamente derivados de ella.

Otra premisa afincada para desestimar la excepción en comento, fue que la naturaleza de las acciones ejercidas es diversa pues, a juicio de la Cámara, primero se determina la culpabilidad y luego se entra a considerar la procedencia de la responsabilidad civil, la cual tiene lugar cuando del hecho delictivo se derivan daños y perjuicios que además resultan probados.

Asimismo, se sostiene por el tribunal de mérito, que la acción de enriquecimiento ilícito no versa sobre una responsabilidad civil, ya que no se requiere

acreditar un daño o perjuicio, sino ordenar *la restitución de lo obtenido ilícitamente.*

Se continúa con otra premisa con la que se expresa que no hay doble juzgamiento, dado que no se atribuyó el delito de enriquecimiento ilícito, pues sólo al tratarse del mismo supuesto de hecho, *la responsabilidad civil podría consistir en la restitución de lo obtenido de esa manera.*

Finalmente, la Cámara concluye que, aunque se trata de un hecho no controvertido que las irregularidades 2,3 y 5 son las mismas que sirven de fundamento para la acción civil en sede penal, ese hecho no impide que se entre a conocer de las mismas, por tratarse de un *proceso de naturaleza especial.*

XI. 3. Ante las razones suministradas por los litigantes y los fundamentos jurídicos expuestos por la Cámara de mérito, esta Sala consideró lo siguiente:

Previo, resultó necesario tomar en cuenta la cronología de las resoluciones pronunciadas en sede penal, junto con la precitada sentencia de inconstitucionalidad 146-2014, en relación con la interposición del recurso de apelación y que están vinculadas al punto objetado, así:

a) La sentencia impugnada en esta sede judicial es de 24-1-2018.

b) El recurso de apelación interpuesto por los licenciados [...] y [...], en interés del señor ERCU, lo fue el 08-11-2018.

c) La sentencia de inconstitucionalidad 146-2014/107-2017, emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de la que se extraen una serie de reglas de interpretación que están vinculadas a las causas de enriquecimiento ilícito, es de las 12.30 horas del día 28-V-2018.

d) La sentencia de primera instancia en sede penal, pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, también es del 28-V-2018.

e) La sentencia de segunda instancia en materia penal, pronunciada por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, es del 05-VII-2019.

f) La sentencia de casación, pronunciada por la Sala de lo Penal, fue el 20-XII2019.

Con lo anterior, queda evidenciado que la causa penal, donde hubo pronunciamiento sobre la responsabilidad civil del demandado, a la fecha se encuentra firme, cuyo conocimiento es absoluto y notorio.

Además, se tuvo la sentencia de inconstitucionalidad que debe observarse para resolver el punto bajo estudio.

Para finalizar, debe advertirse que, aunque los argumentos sobre la litispendencia y prejudicialidad penal, dado los resultados de la causa penal, puedan considerarse sin fundamento actual, por ser anacrónicos con la naturaleza del vigente proceso penal, ello no implica de automático que fuera necesaria su aplicación al presente caso, siendo sobre ello que recayó el análisis de mérito.

XI. 4. En la citada sentencia de inconstitucionalidad, la cual sirvió de base para resolver otros puntos de impugnación; en lo que se vincula al presente caso, se advierte de su contenido lo siguiente:

«[...] la Constitución deja abierta la posibilidad de que existan otras responsabilidades determinadas de conformidad con la ley, entre las que puede figurar la responsabilidad penal cuando se trate de actos que constituyan delito, la responsabilidad civil cuando haya afectación a derechos patrimoniales concretos

de personas determinadas o determinables y la responsabilidad administrativa cuando se transgredan normas administrativas sancionatorias. [...]» (sic) (el subrayado es de esta Sala).

De ello se advierte que, junto con el enriquecimiento ilícito civil de empleados y funcionarios públicos, puede haber concurso de responsabilidades, ya sea penal, civil o administrativa, debiéndose aclarar que, en cuanto a la responsabilidad civil, la acción que provoca daños y perjuicios ha de tener una relación de causalidad sobre el patrimonio de personas determinadas o determinables, lo cual implica que dada la sustracción de fondos del erario público y su puesta en circulación dentro del tráfico comercial, por los negocios que pueden acordarse con terceros de buena fe, estos pueden ser afectados, provocándoles daños y perjuicios indemnizables -actualmente, por lo regulado en el art. 3 de la Ley de Reparación por Daño Moral-, consecuencia de una acción concreta relacionada al enriquecimiento injusto de la Hacienda Pública o Municipal.

Bajo tal premisa, la responsabilidad civil que proviene de un hecho criminal es más amplia que la anterior, puesto que no comprende solo dicho supuesto, sino que engloba otras valoraciones sobre el daño que puede provocarse a raíz del delito.

Ahora, en cuanto al orden de promoción de las acciones, esta Sala en la sentencia referencia 9-APC-2017, del 20-X-2017, sostuvo que:

«[...] Por el contrario, si del juicio resulta que el enriquecimiento del funcionario o empleado tuvo como componente una conducta delictiva, entonces, al tratarse de un hecho estrictamente penal, ello dará lugar a este tipo de procedimiento, puesto que además del enriquecimiento ilícito civil, por un superlativo aumento del patrimonio del funcionario, que teniendo a su cargo bienes de carácter estatal o municipal, no pudo explicar satisfactoriamente su acrecimiento, concurren conductas especificas constitutivas de delito, por las cuales deberá de responder [...]» (sic).

De lo anterior, puede concluirse que, dada la especialidad de la materia, la acción de restitución de bienes al erario público debe promoverse en sede civil, no penal, puesto que en este proceso el demandado debe justificar el incremento patrimonial, lo cual es distinto a la responsabilidad civil a la que alude la Sala de lo Constitucional, y también es diferente a la responsabilidad civil que proviene de la comisión de un delito."

CONDICIONES QUE SUBYACEN EN CUANTO A LA SIMULTANEIDAD DE LOS PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO

"En relación con lo dicho, la sentencia de inconstitucionalidad 146-2014/1072017, expuso lo siguiente:

«[...] al tratarse de los sujetos mencionados en el art. 240 Cn. y del supuesto ahí previsto -enriquecimiento sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, o por cualquier motivo con ocasión del cargo-, es jurídicamente posible la promoción simultánea o sucesiva, tanto de la acción de enriqueci-

miento ilícito como la de extinción de dominio, cuando en ambos procesos judiciales se discuta el origen o destinación ilícitos de diferentes bienes. Es decir, para promover la acción de extinción de dominio no es presupuesto o condición indispensable el agotamiento del proceso por enriquecimiento ilícito, ni viceversa [...] Sin perjuicio de lo anterior, no será posible la persecución simultánea o sucesiva por enriquecimiento ilícito y extinción de dominio, cuando los bienes en discusión sean los mismos en ambos procesos judiciales, en virtud que la Constitución prevé la prohibición de doble juzgamiento, que se manifiesta en la cosa juzgada y la litispendencia (art. 11 Cn.) [...]» (sic) (subrayado y resaltado de esta Sala)

Se puede concluir de lo transcrito, que hay ciertas condiciones que subyacen en cuanto a la simultaneidad de los procesos de enriquecimiento ilícito y extinción de dominio.

La razón de traer a colación el precedente anterior tiene sentido dado que *mutatis mutandi* podría considerarse que, si la causa de pedir en el enriquecimiento ilícito se corresponde con la responsabilidad civil que proviene de un delito, atendiendo a la eficacia restitutoria que provoca cada una de ellas, sobre los mismos bienes del erario público o municipal, sin hacer distinción, ***ello provocaría una doble persecución,*** la cual está prohibida tal como expuso la Sala de lo Constitucional; lo que resulta connatural a la expresa prohibición del art. 43 Inc. 1° del Código Procesal Penal -CPP-: "En los delitos de acción pública, la acción civil contra los partícipes del delito será ejercida conjuntamente con la acción penal. Sin perjuicio de que pueda intentarse ante los tribunales civiles o mercantiles, pero no se podrá promover simultáneamente en ambas competencias".

XI. 5. Por otra parte, esta Sala considera que las estructuras típicas del enriquecimiento civil y la responsabilidad civil, efectivamente, no son aplicables al caso de mérito; el problema derivó del hecho que la Fiscalía, sin ningún sustento razonable, estableciera la misma pretensión en dos competencias distintas, sin motivo justificante que la habilitase, lo que, como ha ocurrido, llevó a la determinación de dos condenas en responsabilidad civil, exactamente por los mismos supuestos materiales.

Como sostuvo la Cámara, en cuanto a los elementos del enriquecimiento ilícito, principalmente la existencia y relación de patrimonios incrementados y acrecentados, una causa injusta -como lo es no tener causa justa- y un desplazamiento patrimonial sin fundamento, se presume este último elemento con base al art. 240 Cn.

Por otro lado, en lo que pertenece a la responsabilidad civil, siendo aplicables los principios y normas de la extracontractual, en sede penal, se tiene como arquetipo la concurrencia de una acción u omisión que provoca un daño real y efectivo, debiendo existir una relación de causalidad entre ellos, así pues, los elementos acción, daño y causalidad, tienen que probarse para determinar dicha responsabilidad.

De ahí que, en este caso, debe enfatizarse pues, que la causa de pedir en la demanda que dio lugar a este proceso y que algunos hechos de la misma también fundaron la acción civil en sede penal, tienen como única fuente *ídem*

acción atribuida al demandado, derivaron en circunstancias idénticas que no pueden obviarse, aunque se haya tratado de procesos de diversa naturaleza.

La razón atinente a esa fuente única de acción que emerge en ambas, hace que no sean aplicables *en puridad* los elementos típicos aludidos y, por ello, que puedan analizarse de manera simultánea o concurrente."

LA CULPA EXTRACONTRACTUAL O *AQUILIANA,* ES LA QUE SUBYACE EN LA ELABORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO

"XI. 6. Ante la particularidad del caso, esta Sala no niega que el proceso de mérito tiene un carácter especial para efectos de dar cumplimiento a la acción restitutoria contenida en el art. 240 Cn. pero, dado que se admitió por la representación fiscal que las irregularidades 2, 3 y 5 -lo cual es detallado adelante-, fundaron la demanda de enriquecimiento ilícito en esta causa y son, asimismo, la base de la responsabilidad civil reclamada en sede penal, por el resultado obtenido en ésta, el efecto restitutorio que se persiguió y logró, tiene eficacia primaria, firme, según se apuntó.

Sobre los alcances de la responsabilidad civil que regula la legislación penal y procesal penal, se tiene que el art. 42 CPP establece que la acción civil se ejercerá, por regla general, dentro del mismo proceso penal. Esto significa que en el proceso penal se acumulan dos pretensiones: por una parte, la pretensión punitiva del Estado, que es pública, y por otra, se encuentra la pretensión resarcitoria, que en principio es ejercida por el Estado en representación de la víctima, a cargo de la Fiscalía, cuando aquélla no se ha constituido en parte querellante. Si la intervención de la víctima es por medio de la querella, le corresponderá al abogado querellante el ejercicio de dicha acción, como inequívocamente define el párrafo 2° del art. 43 CPP.

La acumulación de pretensiones en el proceso penal supone que son diferentes las fuentes de las obligaciones que dan base a las responsabilidades penal y civil. En este último caso subyace en la normativa penal material la obligación *aquiliana* o extracontractual de reparar los daños causados. La doctrina enseña que «la responsabilidad civil derivada del delito tiene una naturaleza estrictamente civil, de hecho, su fundamento sería el mismo que el de la responsabilidad aquiliana, y el único motivo por el que queda contenida en el Código Penal es una razón histórica. De aquí que deba trasladarse al Código Civil su regulación. Naturalmente, este cambio de ubicación de las normas no tiene por qué afectar a la cuestión procesal, y perfectamente podría seguir manteniéndose el sistema de exigencia conjunta de la responsabilidad penal y la civil en el mismo proceso penal, salvo que el perjudicado hiciese reserva de acciones.» (Molina Blázquez, Concepción, *La aplicación de las consecuencias jurídicas del delito,* Editorial Bosch, S.A., la edición, Barcelona, España 2005, p. 232).

La culpa extracontractual o *aquiliana* es la que subyace en la elaboración de la responsabilidad civil derivada por la comisión de un delito, es decir, la que tiene por fuente precisamente un comportamiento desvinculado de un contrato

válidamente celebrado. En la doctrina se apunta que «el concepto de culpa aquiliana se especifica principalmente en la violación de los deberes de abstención, y sólo excepcionalmente, cuando la ley lo prevea, en la violación de los deberes de actuar. Y estas previsiones legales pertenecen, principalmente, al ordenamiento penal». (Vissintini, Giovanna, *Tratado de la responsabilidad civil,* torno I, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1999, p. 80).

Será civilmente responsable la persona que, de acuerdo con el Código Penal, deba responder por los daños y perjuicios causados por el delito. El art. 116 Pn. condiciona la procedencia de la responsabilidad civil en contra de la persona imputada, que en sentencia definitiva es hallada responsable penalmente, cuando del hecho se derivan daños o perjuicios, ya sean éstos de carácter moral o material. Si no se produce ningún daño, entonces no procede la pretensión civil resarcitoria. La intelección de la norma apuntada es en el sentido de que cualquier carga que se imponga sobre la persona señalada como autora de un delito o falta en concepto de responsabilidad civil, sólo procederá en el momento de definir la responsabilidad penal. Condición para que proceda aquélla, en consecuencia, es que ésta esté definida. No es otra cosa lo que se deduce del término «persona responsable penalmente» que emplea el legislador penal al inicio del párrafo 1° del art. 116 Pn.

En este proceso se demostró la existencia de una condena penal firme, que pesa sobre uno de los demandados en este proceso. En concreto, el art. 115 Pn. enumera cuatro contenidos de la responsabilidad civil. En algunos casos es posible que todos sean procedentes, pero en otros no. En el presente, está plenamente establecido que en el proceso penal donde se dictó sentencia condenatoria, a la fecha firme, también existió pronunciamiento sobre responsabilidad civil circunscrita a la restitución patrimonial."

EL TÉRMINO «RESTITUCIÓN» PRESUPONE LA DEVOLUCIÓN A FAVOR DEL DAMNIFICADO DE LA COSA QUE FUE DESPOSEÍDO, O SU VALOR

"El término «restitución» presupone la devolución a favor del damnificado de la cosa que fue desposeído, o su valor. El hecho que el legislador haya hablado de «cosa» sin ningún agregado, conlleva a entender que son objeto de la restitución bienes tanto muebles como inmuebles y, entre los primeros, los valores. «La obligación puede proyectarse bien sobre cosas muebles (por ejemplo, que han sido sustraídas), bien sobre inmuebles (por ejemplo, que han sido usurpados)». (Quintero Olivares, Gonzalo, *Manual de Derecho penal Parte General,* p. 685). Es esa la causa por la que el instituto tiene la connotación patrimonial, de ahí que aparezca vinculado con ilícitos de afectación del peculio del damnificado. La restitución supone enmendar el desplazamiento que ha habido desde el patrimonio del titular de la cosa o valor, hacia el patrimonio de otro.

Al respecto surgiría la interrogante de si dentro del valor que se pretende restituir es legítima la pretensión de reclamar los intereses que haya podido producir el valor que representa la cosa o, si el objeto material del delito es dinero, los intereses del dinero mismo. La doctrina se decanta por responder afirmativamente

esta interrogante. «Problema más complicado es el de los "frutos" del dinero, esto es, las ganancias que con él haya obtenido el autor del delito, ganancias que pueden ir desde intereses percibidos (por ejemplo: extratipo bancario conseguido por mantener el dinero durante un tiempo en una cuenta), hasta cualquier suerte de beneficio obtenido. No parece trasladable sin más la idea de que se trata de frutos de la cosa, ni esa es la interpretación que puede desprenderse del Código Civil [...]. Por lo tanto, será más prudente estimar que esas ganancias han de incluirse en lo previsto, en calidad de consecuencia accesoria, en el art. 127 Código Penal». (Quintero Olivares, Gonzalo, op. cit., p. 686, sin perder de vista que el art. 127 Pn. citado por el autor es el de España. En ese mismo sentido se pronuncian Landrove Díaz, Gerardo, *Las consecuencias jurídicas del delito,* editorial Tecnos, 6a edición, Madrid, España, 2005, p. 151; y Rueda García, Luis, Moreno Carrasco, Francisco, *Código Penal de El Salvador comentado,* p. 460)."

LA PRETENSIÓN «INDEMNIZATORIA», COMPRENDE EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL COMPORTAMIENTO QUE SE REPUTA DELICTIVO

"La pretensión «indemnizatoria», por otra parte, comprende el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por el comportamiento que se reputa delictivo. Los criterios empleados por el legislador para su cuantificación, según la dicción del último párrafo del art. 116 Pn., son tres: la entidad del perjuicio, las necesidades de la víctima y el beneficio obtenido por la comisión del delito. Estos son los que distinguen a la indemnización de la restitución. Con base a lo previsto en el art. 1427 CC, además de la rentabilidad obtenida por el imputado, puede incluirse entre los reclamos indemnizatorios el daño emergente, sin perjuicio de que también se le conmine a que reintegre aquella rentabilidad al patrimonio social.

Ahora bien, el art. 240 Inc. 1° Cn. **refiere únicamente el término "restituir",** mismo verbo que contiene el art. 115 N° 1 Pn., y es precisamente esa consecuencia civil a la que los ahora demandados fueron condenados en materia penal, colmando con ello la *identidad de pretensiones* como consecuencia jurídica ahora reclamada por la vía de este proceso civil especial.

El tema de los intereses, frutos y aspectos indemnizatorios que la conforman, así como el daño moral, lucro cesante y lucro emergente, no fueron planteados por los demandantes en esta instancia y, por ello, estuvieron fuera de discusión.

En ese sentido, la Sala considera que en este proceso y dada la particularidad de admisión de hechos por la representación fiscal -y, aunque no lo hubiere sido, la identidad en el reclamo hubiera llevado a la misma conclusión-, debió acogerse la excepción de litispendencia pues, a pesar de tratarse de procesos de distinta naturaleza, el primero que se inició tendría efectos en el posterior, tal como ha ocurrido, al haberse ordenado en responsabilidad civil la "restitución" [de lo sustraído] en el proceso penal.

Por tales razones, esta Sala estimó la infracción por inaplicación del art. 109 CPCM, la cual mutó a cosa juzgada, pero no con carácter absoluto, sino relativo o parcial pues, tal como queda dicho, se encontró básicamente vinculada a la

admisión de hechos por parte de la representación fiscal, al reconocer que las irregularidades 2, 3, y 5 fueron el análogo fundamento para el ejercicio de la acción civil en materia penal y, por ende, la restitución que era de interés en aquél proceso ya ha sido ordenada y sujeta a una resolución firme, en este último; arribar a conclusión diferente implicaría obligar que el sujeto pasivo en dichos procesos tenga que asumir la misma responsabilidad -civil- dos veces, por la misma Causa, lo cual confrontaría lo establecido en el art. 11 Inc. 1° parte final Cn.: "Ninguna persona... puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa" y, además, se contrapone a los arts. 6 Inc. 1° literal i) y 16 LEDAB.

La anterior conclusión se constata con el escrito presentado por fiscalía el 16I-2017, cuyo objeto era subsanar prevenciones realizadas por la Cámara competente, en concreto, que "se especifique con claridad y precisión las irregularidades que sirven de base para la acción civil que se está ejercitando en sede penal", lo cual fue asumido de la forma siguiente:

«[...] La acción civil ejercida en el citado proceso penal en contra del señor CU, se refiere únicamente a los abonos recibidos en sus cuentas personales del citado Ex Funcionario N° *********-7 y **********3, del Banco Cuscatlán, S.A. hoy Banco Citi, S.A., realizado con fondos proveniente de las cuentas bancarias Institucionales del Tesoro Público. En ese sentido las irregularidades que sirve de base para el ejercicio de la acción civil en el proceso penal, son las que en este proceso han sido identificadas de la siguiente manera: [...] **IRREGULARIDAD NUMERO 2:** DEPOSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE N° *********-7 DEL BANCO CUSCATLAN, S.A., A NOMBRE DEL SEÑOR ERCU, POR UN MONTO DE $1,659.041 [...] **IRREGULARIDAD NUMERO 3:** DEPOSITOS POR EL SEÑOR ERCU EN SU CUENTA CORRIENTE PERSONAL N° *********-7 DEL BANCO CUSCATLAN, S.A., REALIZADOS A TRAVES DE CHEQUES A NOMBRE DE EASG QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE $15, 056, 249.00, LOS CUALES PROCEDEN DE LA CUENTA INSTITUCIONAL SUBSIDIARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA N° *********7 DEL MISMO BANCO, DESCONOCIENDO EL MOTIVO Y USO DE ÉSTOS [...] **IRREGULARIDAD NUMERO 5:** DEPOSITOS EN LA CUENTA CORRIENTE PERSONAL DEL SEÑOR ERCU, NUMERO *********3 DEL BANCO CUSCATLAN, S.A., REALIZADOS POR MEDIO DE CHEQUES A NOMBRE DEL SEÑOR EASG QUE ASCIENDEN A $375, 000.00 Y DE GASTOS OPERATIVOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR UN MONTO DE $207, 275.00, HACIENDO UN TOTAL DE $582, 275.00, QUE PROCEDEN DE LA CUENTA INSTITUCIONAL SUBSIDIARIA DEL TESORO PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA N° N° *********7 DEL BANCO CUSCATLAN S.A., DESCONOCIENDO EL MOTIVO DE ESTOS [...] 3.- Las restantes irregularidades relacionados en la presente demanda y que constituyen hechos que forman parte de nuestra causa de pedir, no guardan relación con los hechos que han servido de base en la acción civil que se ejerce en el proceso penal en cuestión. [...]» (sic).

Ese expreso reconocimiento de la representación fiscal tiene congruencia con la sentencia del Tribunal Segundo de Sentencia de esta ciudad, en el apartado relativo a la responsabilidad civil y costas procesales -folios 1394 al 1408

según numeración de la misma-, se alude que la base de la condena para el demandado está relacionada a información financiera de las Cuentas Institucionales Subsidiarias del Tesoro Público de la Presidencia de la República, de donde se obtiene lo siguiente:

«[...] se ha determinado mediante prueba pericial consiste en Pericia Financiera Contable, la cuantificación del daño real ocasionado al Estado de El Salvador en el presente caso, siendo cantidad significativa, concluyendo los peritos en el punto de pericia número dieciséis "que dentro del monto ejecutado por la Presidencia de la República, durante el período uno de junio de dos mil cuatro al treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se liquidó sin poder documentar las obligaciones que se pagaron, mediante 593 cheques que fueron emitidos de las Cuentas Institucionales Subsidiarias del Tesoro Público, que fueron abonadas a las cuentas bancarias contenidas en el punto pericial número 15 y cuatro cheques más, que fueron cobrados en efectivo, totalizando en ambas modalidades, la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE DOLARES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR [...] suma de dinero que conforme el Art. 115No. 2 Pn., consideran éstos jueces- debe ser reparada al Estado de El Salvador, como consecuencias civiles de los delitos cometidos [...] debe tomarse en cuenta también la calidad de funcionario o empleado público que cada uno de los acusados ostentaba en el momento de la comisión de los hechos [...] ERCU, en el mismo periodo fungió como Secretario Privado de la Presidencia [...] se condenan de forma -mayoritaria- a los imputados al pago de la responsabilidad Civil al Estado de El Salvador, en concepto de reparación por el daño causado [...] 2) ERCU, de QUINCE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA [...]» *(sic).*

Por consiguiente, esta Sala advierte que la cuantía de las irregularidades 2, 3 y 5 están prácticamente comprendidas en la condena producto del ejercicio de la acción civil en materia penal, cuya fuente de desfalco coincide con la de este proceso -cuentas institucionales subsidiarias del tesoro público- haciendo un total de: quince millones setecientos siete mil quinientos veinticuatro dólares de los Estados Unidos de América ($15,707,524.00).

No obstante, en la sentencia de la Sala de lo Penal, pronunciada el 20-XII-2019, el monto es disímil al anterior, puesto que asciende a "quince millones diecisiete mil setecientos treinta y siete dólares con sesenta y siete centavos de dólar" ($15, 017,737.67), pero ello no afecta el nuevo monto a determinarse en esta sentencia, puesto que se tomó como base el resultado de la prueba pericial.

En ese orden de ideas, según el resultado de la prueba pericial, al compararse los ingresos con los egresos del señor **CU,** resultó un valor negativo de "setecientos diez mil trescientos treinta y nueve dólares con diecinueve centavos" **($710, 339.19)** y el de su esposa **MADC,** un valor negativo de "doscientos un mil seiscientos noventa y cinco dólares con cincuenta y un centavos" **($201, 695.51),** siendo procedente modificar únicamente la cuantía del demandado, debido a que en el caso de la segunda demandada, se incrementaría el monto en relación con el fallo de primera instancia, resultando perjudicada y, además, lo relativo a

la litispendencia únicamente fue impugnado en interés del primer demandado, debiendo observarse los límites de la *non reformatio in peius.*

Se reitera pues, que, dado que la causa penal en la que se ventiló de manera simultánea la acción civil fundada en algunos de los mismos hechos base de la demanda civil del proceso de mérito, procede **modificar** la condena en lo concerniente a la cuantía y cabe agregar lo que a continuación se argumenta.

XL 7. La reflexión sobre este punto también tiene fundamento en los arts. 42 y 43 del Código Procesal Penal, en los cuales se regula lo relativo a la acción civil y la forma de ejercerla, así:

Art. 42.- La acción civil derivada de los hechos punibles, se ejercerá por regla general dentro del proceso penal, contra los autores y partícipes del delito y en su caso contra el civilmente responsable.

Art.43.- En los delitos de acción pública, la acción civil contra los partícipes del delito será ejercida conjuntamente con la acción penal. Sin perjuicio de que pueda intentarse ante los tribunales civiles o mercantiles, pero no se podrá promover simultáneamente en ambas competencias.

El fiscal ejercerá la acción civil en la respectiva acusación; pero si el ofendido o su representante legal ejerciere la acción penal por medio de querella, se entenderá que también ejerce la acción civil a menos que expresamente renunciare a ella. En el caso de renuncia expresa de la acción civil por el querellante, sólo se podrá ejercerla acción penal.

De lo anterior y como ya quedó establecido, se colige la concurrencia de la pretensión punitiva y resarcitoria en ambas materias (penal y civil), lo que está directamente vinculado a los arts. 114 y 115 del Código Penal; en ese orden, este tribunal consideró que, si bien puede haber diferencia entre la responsabilidad por enriquecimiento ilícito y la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, en el caso de autos la propia Fiscalía indujo el pronunciamiento de dos fallos condenatorios que implicaron una misma pretensión de naturaleza pecuniaria.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en este proceso y en la causa penal, se tuvo como objeto de comprobación el desfalco a la Hacienda Pública o, como expresó la Sala de lo Constitucional, el aprovechamiento del cargo para enriquecerse ilícitamente.

Bajo dicha premisa, se tiene como primera opción de reclamo la jurisdicción civil que, por su naturaleza, es la que debe conocer de este tipo de procesos; pero, si bajo cobertura de la acción civil se ejerce la misma pretensión en sede penal, por delito vinculado -peculado, lavado de dinero y activos, etc.-, la Fiscalía debe ponderar si el reclamo restitutorio y/o indemnizatorio lo insertará de consuno en la acción penal, o si va a deslindar ambas acciones, tal como establece la LEIFEP, incluso podría estimar si es procedente ejercer la acción en extinción de dominio. Lo anterior, para no colisionar con las disposiciones penales, de la LEIFEP y de extinción de dominio.

Además, se debe tener presente que los referidos arts. 114 y 115 Pn., expresan tres categorías: indemnización, reparación y restitución, donde claramente se comprende la posibilidad que el daño civil derivado de un hecho de enrique-

cimiento ilícito pueda ser reclamado en las instancias penales; así por ejemplo, si el desfalco en perjuicio del Estado fuere por un millón de dólares, deberá devolverse dicha cantidad -por ser el detrimento material, directo- pero, si en razón al tiempo que esta persona tuvo ese dinero o, por haberlo sustraído, aparte generó un perjuicio a la sociedad o al Estado mismo, como el que se haya dejado de atender obligaciones sociales u otro tipo de inversiones, según se ha reflexionado de forma amplia en la presente sentencia, naturalmente generará otro tipo de daño; por lo que sería válido no solamente condenarlo a *restituir,* sino también a *indemnizar* más allá del millón de dólares, todo lo cual debe ser objeto de prueba."

CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE NON BIS IN ÍDEM, SE CONCULCÓ EL DERECHO QUE TIENE TODA PERSONA A NO SER OBJETO DE DOS DECISIONES QUE AFECTEN DE MODO DEFINITIVO SU ESFERA JURÍDICA POR UNA MISMA CAUSA.

"XI. 8. Así las cosas, el daño ocasionado por el demandado **CU,** según fue deducido en sede penal, se definió amparado en algunos de los mismos hechos fundantes de la pretensión en sede civil, forma de actuación procesal que está constitucional y legalmente prohibida, puesto que no *puede haber doble persecución* y, tal como se dijo en la sentencia de inconstitucionalidad 146-2014/107-2017: «[...] no será posible la persecución simultánea o sucesiva por enriquecimiento ilícito y extinción de dominio, cuando los bienes en discusión sean los mismos en ambos procesos judiciales, en virtud que la Constitución prevé la prohibición de doble juzgamiento, que se manifiesta en la cosa juzgada y la litispendencia (art. 11 Cn.) [...]» (sic) (subrayado y resaltado de esta Sala).

Ello es aplicable al caso de mérito pues, si bien la sentencia se refirió a materias distintas, resulta obvio que sobre unos hechos que fundan la misma pretensión no pueden concurrir dos condenas; así, debe tomarse en consideración, bajo una razonable modulación del *non bis in ídem,* la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que ha señalado que la prohibición de doble juzgamiento implica vedar la duplicidad de decisiones respecto de un mismo hecho, más cuando sea en relación a una misma persona. *(Líneas y Criterios Jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional 2007, pp. 148y 149, Corte Suprema de Justicia).*

De manera que, se tiene que de unos mismos hechos, en este caso, tal como se ha dicho, se ha condenado dos veces a restituir una semejante cantidad de dinero; pero, se insiste, únicamente sobre tres irregularidades patrimoniales detectadas por la Sección de Probidad, corroboradas pericialmente. Por ello, sobre tales montos se ha entendido concurrente la figura de *cosa juzgada,* pero no de manera completa, pues sobre el resto de observaciones no hubo justificación del incremento patrimonial, lo cual coincide con las alegaciones analizadas, en específico, lo relativo al desconocimiento del origen de los fondos, base de la estrategia de defensa que, al no probar o justificar, permitió acreditar el enriquecimiento ilícito por la cantidad remanente.

Así las cosas, esta Sala consideró la aplicación de dicho principio; el vocablo *enjuiciado* se refiere a la operación racional y lógica del juzgador a través de la cual se decide el fondo del asunto que se trate, mientras que la frase *misma causa* alude la identidad de pretensiones.

Entonces, al confrontar que tres de las causas de pedir en el proceso de mérito, que integran el elemento material o de fondo de la pretensión, también fueron deducidas en el proceso penal, con lo que se hizo efectivo el *doble conocimiento de la causa,* por lo que se configuró la violación al principio constitucional de *non bis in ídem,* por ende, se conculcó el derecho que tiene toda persona a no ser objeto de dos decisiones que afecten de modo definitivo su esfera jurídica *por una misma causa.*

En conclusión, al haberse condenado en sede penal a restituir las cantidades *supra* relacionadas, la responsabilidad civil ventilada vació la pretensión de enriquecimiento ilícito de aquellos hechos, ya sometidos a debate en sede penal, resultando injusto e ilegal confirmar un monto símil a aquél.

Consecuencia de lo anterior, procede confirmar el fallo en todo lo que no haya sido objeto de restitución en sede penal; y, sobre lo establecido en los literales b) y c) del fallo de primera instancia, procede modificar el monto bajo los términos que se dejan expuestos.

Habiéndose estimado el punto impugnado y dada la conexión que tiene con la prejudicialidad penal, ya que la alegación de éste último fue por eventualidad procesal de la litispendencia, se remite la resolución a dicho asunto procesal, que principalmente dio origen a su alegación."

IMPOSIBILIDAD QUE LOS BIENES SUJETOS AL PROCESO CIVIL DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO PASEN A LA ORDEN DE LOS JUZGADOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

"XII. 1. Lo relativo a la prescripción: inaplicación del art. 11 LEIFEP

Acerca de la inaplicación del art. 11 LEIFEP, los procuradores del demandado **ERCU** reiteraron que él ostentó más de un cargo, pues también fungió como colaborador para el manejo de fondos reservados y, en tal calidad, realizó su último acto el día 16-111-2005, por lo que al dejar de ejercer dicha función en esa fecha, transcurrió el plazo de diez años, estando prescrita la acción.

XII. 2. Respecto a este punto, la Sala advierte que el mismo, tras haberse resuelto lo relativo al error de valoración de la prueba sobre la ostentación del doble cargo del demandado, se expresó que no tiene fundamento tal acreditación, en virtud de la interpretación constitucional dada al art. 240 Cn., por lo que de igual manera se desestimará por la misma razón, al no existir conexión con el precitado error de configuración del cuadro fáctico y, en consecuencia, al no tener sustento el primero, resulta inoperante entrar a realizar otras consideraciones al respecto.

XIII. 1. Otro de los puntos impugnados en común, estuvo vinculado al pronunciamiento dado por el tribunal de origen, relativo a la orden de poner a disposición del Juzgado de Extinción de Dominio los bienes sujetos a medida cautelar por la Corte Suprema de Justicia y por la Cámara, en el proceso de mérito.

Acerca de tal argumento, se esgrimieron tres razones para fundamentar la impugnación, así:

a) Por existir vulneración del derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa ya que, según los abogados apelantes, existe contravención de lo dispuesto en el art. 11 Cn.; ya que, por un lado se inició la acción civil y, luego, la acción de extinción de dominio, de manera que el resultado de la sede civil no tendrá incidencia en la de extinción de dominio, generándose un nuevo proceso que recaerá sobre los mismos bienes, es decir, un doble cobro o coerción procesal sobre el patrimonio de los demandados en dos ocasiones distintas.

b) Por existir infracción a los requisitos internos de la sentencia, pues se otorgó más de lo pedido por el demandante, siendo dicho fallo incongruente por *extra petita,* en contravención a lo regulado en el art. 218 CPCM.

Los apelantes advierten que en la demanda no se realizó ninguna petición, cuyo contenido les permitiera oponerse en el momento procesal oportuno y, por ello, se vulneró el derecho de defensa.

c) Incompatibilidad de la Ley de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita -LEDAB-, con las reglas del proceso civil, ya que aquella tiene aplicación cuando los bienes son obtenidos por un ilícito -criminal-, inobservándose el art. 5 de dicho cuerpo normativo.

2. Respecto del punto impugnado, los recurrentes advirtieron que no hay motivación alguna para haber puesto a disposición del Juzgado de Extinción de Dominio los bienes sujetos a medida cautelar.

Al revisar la sentencia se constata que, efectivamente, no hay motivación alguna sobre tal pronunciamiento y, en lo que respecta al punto impugnada, la Sala sostuvo en la sentencia 9-APC-2017, que:

No era procedente consentir una petición del Juzgado de Extinción de Dominio, en cuanto a que se transfirieran bienes cautelados en el proceso de enriquecimiento ilícito, debido a la naturaleza -y eficacia- de las medidas cautelares decretadas sobre bienes de los demandados, lo cual se extrae de los arts. 452 CPCM, 6 lit. i) y 16 LEDAB, 16y 20 LEIFEP.

Bajo esa misma premisa, los bienes cautelados se encuentran -en este caso-sujetos al proceso de mérito. En tal sentido, no es jurídicamente válido *transferir* los bienes cautelados en una Causa a otra donde, si bien estarán en la misma condición, obedecerían a pretensión distinta; consecuentemente, los bienes sobre los que recayeron medidas de coerción procesal real en razón de la presente Causa, han de seguir bajo disposición de la Cámara sentenciadora, quien deberá desarrollar el trámite concerniente al proceso de ejecución.

De lo contrario, se asumiría el riesgo de configurar -de nueva e injustificada cuenta- una doble persecución (que, en este caso, sería *triple* persecución), en detrimento de lo establecido por los arts. 16 LEIFEP, 10 Inc. 2° -aplicable extensivamente- y 16 LEDAB, ya que el propósito del aseguramiento de los bienes en cualquier proceso, con mayor énfasis en los de naturaleza civil, es afianzar el resultado de la sentencia, que en este caso fue de condena y, como consecuencia, deba resarcirse al Estado una específica cantidad dineraria; en cambio, en los procesos de extinción de dominio, la finalidad es privar el aparente o configurado

derecho de propiedad sobre bienes de origen o destinación ilícita, así como de aquellos que impliquen incremento patrimonial que no se puede justificar -y que, naturalmente, provengan de una infracción penal para el caso de los servidores públicos, por cuanto el supuesto de mérito podría ser un caso de excepción al art. 6 lit. c) LEDAB-, con el fin de que también pasen a dominio del Estado.

Además, debe señalarse que la aplicación de la LEDAB, en estricto sentido, no rige para el ámbito del juicio de enriquecimiento sin causa de carácter civil, porque este procedimiento no necesariamente tiene fuente en un hecho ilícito criminal, mientras la LEDAB generalmente se ocupa de hechos ilícitos o enriquecimiento sin causa para cualquier persona, lo que se aleja de los presupuestos del art. 240 Cn.

Lo anterior se colige de la *ratio legislatoris* incluida en los seis considerandos de la LEDAB, en los cuales se alude a ilicitudes provenientes de la criminalidad -sin que se juzguen delitos-; lo cual resulta patente en el art. 5 de la citada ley, que establece su alcance y debe ser interpretado de forma integral, en el sentido que las actividades ilícitas, de la cuales se ocupa la jurisdicción de extinción de dominio, son las que tienen como fuente el hecho ilícito de carácter penal, no el civil, ni el administrativo, ni el laboral, ni otros hechos de ilicitud, que pueden ocurrir en la realidad, porque ello significaría un desbordamiento de los ámbitos de la LEDAB que, al ser así, podría ocuparse de cualquier hecho o actividad contraria a la ley.

Por consiguiente, se estima el punto de impugnación, lo que implica dejar sin efecto la disposición de los bienes sujetos a medida cautelar en este proceso, a la orden del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, debiendo la Cámara sentenciadora proveer lo que legalmente corresponda a su final ejecución.

XIV. Sobre la posibilidad de interponer recurso contra la presente decisión, esta Sala no desconoce lo resuelto por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, según providencia de las 10.00 horas del 08-111-2018, Ref. 3-C-2017, acerca de la declaratoria de *improcedencia* del recurso de casación; sin embargo, tampoco puede pasar por alto lo regulado en los arts. 27 Ord. 2° y 519 N° 1 CPCM, aunado a la diferente composición subjetiva de ese Máximo Tribunal, por cuanto aún no son concurrentes los supuestos de la doctrina legal, art. 522 Inc. 3° CPCM. De allí que, serán las partes y el Tribunal Superior quienes habrán de pronunciarse en sus respectivos ámbitos de interés y competencia."

Sala de lo Civil, número de referencia: 4-APC-2018, fecha de la resolución: 08/12/2020

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA SENTENCIA

PROCEDE CASAR LA SENTENCIA AL NO CITAR LAS NORMAS DE DERECHO QUE RESUELVEN LOS CASOS, NI JUSTIFICAR LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS MISMAS

"IV. Análisis del submotivo de forma: infracción de los requisitos externos de la sentencia, por falta de fundamentación jurídica y oscuridad en la redacción del fallo, con infracción al art. 217 inc.3° y 4° CPCM.

1. El recurrente sostiene que existe falta de fundamentación jurídica, dado que al dar lectura a la sentencia impugnada se observa que se ha omitido completamente relacionar e indicar en cuáles disposiciones legales se fundamenta la misma, no se cita la jurisprudencia para fundamentar dicha resolución, y solo se narra lo sucedido en la audiencia de apelación y el fallo que se dictó en ese momento.

Por tanto, el impetrante reclama que no se citan las disposiciones legales aplicables a la sentencia, mucho menos la norma sustantiva que fundamenta el caso sometido a su conocimiento; por lo que concluye que adolece de una falta de fundamentación jurídica y ello deriva también, en que la misma sea oscura en el contenido del fallo.

2. La Cámara por su parte ha expresado en la sentencia impugnada: «[...] examinando el folio ciento cuarenta y cuatro como dice la sentencia y, efectivamente es encontrado un reconocimiento judicial, en el que el Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de esta ciudad [...] se constituyeron a ese lugar, y estando en ese lugar dice el acta que el juez manifestó que el objeto de esa diligencia es verificar si los demandados son los que se encuentran en posesión en el inmueble; por lo que se ve que ese reconocimiento fue realizado a las nueve horas del día siete de diciembre del año dos mil dieciséis, por un juez distinto al que sentenció, en el acta de la audiencia preparatoria porque así dice que es una audiencia preparatoria, abre la curiosidad entonces de preguntar ¿de dónde salió la orden del reconocimiento? si es en la audiencia preparatoria que se ordena todo lo que se va inmediar, pero logrando descifrar eso, se concluyó que en el año dos mil dieciséis se había realizado otra audiencia preparatoria y que esto conforme al artículo catorce del Código Procesal Civil y Mercantil debe darle sentido y darle orden porque si el juez recibió los procesos acumulados tenía que, a partir de dónde recibió el proceso acumulado, ir ordenando todas las diligencias que corresponden a la acumulación del proceso y no ir haciéndolo separadamente como si fuesen dos procesos separados para diligenciarlos[...] haciendo ésta Cámara [...]el análisis o la medición o el método de las reglas de la sana critica, no resiste [...]el análisis de valoración para llegar a una conclusión, como dice el juez, que se consideran probados los hechos de posesión, porque por otro lado como dice la Sala es que lo idóneo es probarlo con testigos, o por un reconocimiento judicial es como que el acto se va a hacer ahí es como tomar una fotografía, es de un momento determinado lugar no lo dice que los hecho narran en la demanda, porque simplemente se llegan a constatar quienes están, que desde qué año a que año han estado en posesión eso es labor de los testigos y es por eso que la Sala de lo Civil, dice que la prueba idónea son los testigos, Como no hubo más que se sometió a análisis de éste Tribunal no habrá pronunciación al respecto[...]» (sic).

3. Conforme lo expuesto por el recurrente y lo considerado por la Cámara, es pertinente invocar lo que se ha señalado en anterior jurisprudencia dictada por esta Sala, en cuanto a que los principios de congruencia y de motivación de las sentencias, están contenidos en los arts. 216 y 218 CPCM, respectivamente.

Dichos principios, efectivamente están contenidos en los art. 216 y 218

CPCM, y los mismos imponen deberes a los titulares responsables de la administración de justicia los cuales consisten, sintéticamente, en resolver las peticiones formuladas por las partes en las distintas instancias, y que su respuesta sea justificada; es decir, que las decisiones contenidas en las distintas resoluciones deben ser claras, expresas, completas y lógicas.

4. Asimismo, esta Sala ha sostenido en el precedente de referencia 295-CAC-2013, de las nueve horas cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil quince, respecto a la infracción requisitos externos de la sentencia, que una sentencia debidamente motivada debe contener lo siguiente:

«[...] (i) Fundamentación fáctico, que consiste en la descripción de los hechos aportados por las partes y que se hayan controvertido, con ello se define cuál es el caso que se debe resolver [...] (ii) Fundamentación probatoria, que tiene una doble vertiente, de carácter descriptivo y otro de índole intelectivo, así, con el primero debe describirse el contenido de aquellas probanzas que sean pertinentes para tener por acreditados los hechos; y el segundo, exige una carga argumentativa sobre la apreciación y valoración de la prueba bajo los principios que determinan los poderes del juez para tales efectos, ya sea por las reglas de la sana crítica o prueba tasada [...] (iii) Fundamentación jurídica, será aquélla parte en la que se apliquen las normas de derecho que resuelven el caso, imponiéndose la tarea de justificar su aplicación e interpretación según sea el caso [...] Naturalmente, el fallo o parte dispositiva debe ser claro y congruente con las peticiones formuladas por los litigantes [...]» (sic).

5. Dichas exigencias se recogen en los arts. 216 y 217 inc 4° CPCM, el cual regula los fundamentos de derecho, y concreta que deben estar, según se ha sostenido en la sentencia de esta Sala, bajo ref. 295- CAC-2013, de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince: «[...] igualmente estructurados en párrafos separados y numerados, contendrán los razonamientos que han llevado a considerar los hechos probados o no probados, describiendo las operaciones de fijación de los hechos y valoración de las pruebas y, también debidamente razonadas, las bases legales que sustentan los pronunciamientos del fallo, especialmente cuando se hubiera producido debate sobre cuestiones jurídicas, con expresión de las normas jurídicas aplicables y, en su caso, de su interpretación. Los fundamentos de derecho habrán de contener una respuesta expresa y razonada a todas y cada una de las causas de pedir, así como a las cuestiones prejudiciales y jurídicas necesarias para la adecuada resolución del objeto procesal [...]» (sic).

6. En el presente caso, el recurrente ha invocado la infraccióna los requisitos externos de la sentencia, con infracción al art. 217 inc. 3° y 4° CPCM, por falta de fundamentación jurídica y oscuridad en la redacción del fallo. Sin embargo, explica que el vicio se presenta porque la Cámara omitió relacionar disposiciones legales que fundamentan la sentencia.

Debe tomarse en consideración que si bien el art. 523 ord. 14 CPCM, enuncia como ejemplos de infracción a los requisitos externos de la sentencia, los siguientes: la omisión en la relación de hechos probados, o en la fundamentación jurídica, o la oscuridad en la redacción del fallo; la falta de fundamentación constituye un vicio distinto a una incongruencia omisiva, ya que en esta última el punto contro-

vertido no ha sido enjuiciado y, por tanto, no hay modo de reconocer un pronunciamiento positivo o negativo del mismo, ni en los fundamentos, ni en el fallo.

De tal manera que, aun cuando hubiera falta de motivación, podría haber expresión de la decisión adoptada en la parte dispositiva de la resolución, o ésta se infiere del tratamiento que se hace sobre otros aspectos de la pretensión conectados con aquél; pero falta la necesaria explicación del razonamiento judicial y sin él, no es posible entender cabalmente la decisión adoptada, lo que la hace inválida.

En suma, la falta de fundamentación es el vicio en la sentencia, ocasionado ya sea por la falta de fundamentación fáctico; por el defecto en el resumen de la prueba o referencia a la prueba documental, lo cual ocasiona la falta de fundamentación probatoria descriptiva; omisión de la valoración de la prueba, lo que produce falta de fundamentación probatoria intelectiva.

Si se omite la cita e interpretación de normas jurídicas, conllevará a la falta la fundamentación jurídica del fallo, lo cual produce la infracción a los requisitos externos de la sentencia, circunstancia que ha sido indicada por el recurrente.

7. Por lo anterior, al dar lectura íntegra a la sentencia impugnada, esta Sala concluye que la fundamentación que ha dado no se aprecia el razonamiento de los hechos que se tienen como probados o no, según la valoración que haya realizado el referido tribunal.

Además, se advierte que no se cita ni se hace interpretación de normas jurídicas, en las cuales se fundamenta el fallo, bien estimando o desestimando las pretensiones planteadas por las partes.

Finalmente cabe señalar que no se estructuraron los fundamentos de derecho en párrafos separados y numerados tal como se exigen en la ley; por lo que no se dio cumplimiento a la exigencia del art. 217 CPCM.

En suma, la redacción realizada en la sentencia solamente es narrativa, la cual podría ser equiparable a la que se hace cuando se elabora un acta de un acto procesal, pero no contiene los elementos suficientes que den cumplimiento a lo que el legislador ha dispuesto en el art. 217 CPCM, dado que al haberse omitido los fundamentos de derecho, no ha expresado y razonado todas y cada una de las causas de pedir del recurrente.

En el caso de estudio, puntualmente existe ausencia de falta de fundamentación jurídica, porque no se citó las normas de derecho que resuelven los casos, no se justificó la aplicación e interpretación de las mismas.

En conclusión, procede casar la sentencia pronunciada en apelación, por la Cámara de mérito, siendo pertinente conferir el efecto procesal consignado en el art. 537 inc.2.° CPCM, el cual estipula que “Si se casare por vicio de forma, se anulará el fallo y se devolverá el proceso al tribunal correspondiente, a fin de que se reponga la actuación desde el acto viciado”.

De manera que, cuando la ley dispone que deberá anularse el fallo, dentro de la declaratoria que dispone “casar” el mismo, se comprende su anulación, por lo que al devolverse los autos, al tribunal de alzada, deberá resolver los puntos impugnados en apelación, lo cual deberá hacerlo de manera motivada, en la forma prevenida en esta resolución.”

Sala de lo Civil, número de referencia: 349-CAC-2019, fecha de la resolución: 06/10/2020

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

TRATÁNDOSE DE PROCESOS EJECUTIVOS, EL RECURSO SOLO SERÁ ADMITIDO CUANDO SU NATURALEZA ATAÑE A LA MATERIA MERCANTIL Y, EL DOCUMENTO BASE DE LA PRETENSIÓN SEA UN TÍTULO VALOR

"Previo al análisis del motivo alegado por el impetrante, es necesario establecer si el recurso de casación cumple con los requisitos de procedencia establecidos por la ley.

En primer término, debe tenerse en cuenta que la sentencia pronunciada en el proceso civil ejecutivo, no produce los efectos de cosa juzgada material y deja expedito el derecho de las partes para controvertir en un proceso distinto, la obligación que causó la ejecución (art. 470 CPCM).

Aunado a lo anterior, el art.519 ordinal 1° del CPCM dispone, que se admitirá el recurso de casación contra las siguientes providencias: "En materia civil y mercantil, las sentencias y los autos pronunciados en apelación en procesos comunes y en los ejecutivos mercantiles cuyo documento base de la pretensión sea un título valor; asimismo las sentencias pronunciadas en apelación, en los procesos abreviados, cuando produzcan efectos de cosa juzgada sustancial".

En lo concerniente a los procesos ejecutivos, se ha regulado que solo serán admitidos cuando su naturaleza ataña a la materia mercantil y agregándose el elemento adicional que tal pretensión derive de un título valor.

En el caso analizado, se trata de un proceso ejecutivo civil cuya pretensión se funda en una escritura pública de mutuo hipotecario, otorgada ante los oficios del notario Jorge Alberto Ramos Pineda, en la ciudad de Metapán, el quince de marzo de dos mil trece, por el señor MNRM, a favor del señor AEF.

Como consecuencia, este supuesto no encaja con los supuestos de impugnación casacional, debido a la exclusión contenida en el precitado artículo, razón suficiente para determinar que este es improcedente."

Sala de lo Civil, número de referencia: 174-CAC-2020, fecha de la resolución: 22/12/2020

INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

PROCEDE CUANDO NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO RELATIVO AL PLAZO DE INTERPOSICIÓN

"4.1 Respecto al primer motivo de forma invocado de "[...] QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS ESENCIALES DEL JUICIO; siendo el motivo especifico HABERSE DECLARADO INDEBIDAMENTE LA IMPROCEDENCIA DE UNA APELACIÓN, de conformidad al ordinal 13 del Art. 523 CPCM, por vía de la errónea aplicación de los Arts. 510 y 511 inc. Segundo del CPCM, así como por la inobservancia del artículo 18 del CPCM. [...]", se advierte que:

Los impetrantes, al inicio del escrito, manifiestan que recurren de la sentencia dictada por la Cámara de la Tercera Sección del Centro, del departamento de San Vicente, a las dieciséis horas del día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Sin embargo, según el desarrollo del concepto de la infracción, se denota que la providencia recurrida es el auto dictado por dicha Cámara, el día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante el que únicamente fueron admitidos en apelación, dos motivos: el de errónea aplicación del art. 277 CPCM y la inobservancia del art. 14 CPCM. Por, tanto se inadmitió el resto de los motivos; y es con relación a tal situación que se ha interpuesto el recurso de casación.

Dicho auto les fue notificado el día veintisiete del mismo mes y año, venciéndose el plazo para interponer el recurso de mérito el día dieciocho de junio de dos mil diecinueve.

En consecuencia, no es cierto que la ratificación que hace la ad *quem* con respecto a la inadmisibilidad del recurso, habilite al recurrente para impugnar en casación, ya que la ratificación impone la firmeza de criterio con respecto a tal extremo, incluso la Cámara pudo guardar silencio en relación a tal punto en el segundo auto y en nada cambiaría los efectos de la inadmisibilidad, por lo que al recurrente le precluyó el derecho a interponer el recurso de casación al dejar pasar el plazo señalado en el art. 526 CPMC.

La anterior situación conduce a concluir que no se cumplió con el requisito de forma relativo al plazo de interposición del recurso, regulado en el art. 526 CPCM, por lo que el recurso en relación a ese submotivo deviene en inadmisible.” [...]

PROCEDE AL DENUNCIAR LA INFRACCIÓN DE UN CONJUNTO DE NORMAS JURÍDICAS DISTINTAS ENTRE SÍ, FUNDAMENTANDO EL MOTIVO EN ARGUMENTOS COMUNES Y NO INDIVIDUALIZADOS

“4.3 Como cuarto motivo de fondo han invocado: “[...] LA INOBSERVANCIA TOTAL DE LOS ARTICULOS, 1427 INCISO PRIMERO, 1430, REGLA SEGUNDA, 2253 Y 2256, TODOS DEL CODIGO CIVIL [...]”

Al respecto, según el art. 528 ord. 2. ° CPCM, se vuelve una exigencia formal que se enuncie no solo un motivo por cada precepto infringido, sino que, además, se debe especificar el concepto de cada una de las infracciones por separado, en relación con cada motivo enunciado.

En consecuencia no puede invocarse infracción de un conjunto de normas jurídicas distintas entre sí, fundándose el motivo en argumentos comunes a todas.

Asimismo de la lectura del recurso, se advierte que al enunciar la inobservancia de los artículos 1427 inc. 1, 1430, regla segunda, 2253 y 2256 todos del Código Civil; además de no individualizarlos, (es decir que los recurrentes no desarrollan de forma separada cada disposición que consideran infringida, en párrafos separados, razonando y estableciendo la pertinencia y fundamentación, que se exige como requisito de forma en el art. 528 N° 2 CPCM), citan

parte de los argumentos del tribunal de primera instancia, cuando el objeto del recurso de casación es examinar la legalidad de la sentencia de segunda instancia.

Como consecuencia de lo expuesto, se advierte que los recurrentes han inobservado las formalidades que caracterizan al recurso de casación, pues el desarrollo del concepto del motivo invocado, ha sido de carácter general, y, por otra parte, no hacen referencia a lo actuado por la Cámara sentenciadora.

Por lo tanto, al no haberle dado cumplimiento a los requisitos que establecen los arts. 525 y 528 CPCM, con relación al motivo que se analiza, el recurso deviene en inadmisible, respecto del mismo.

Debe tenerse en cuenta que la casación es un recurso extraordinario, de admisibilidad restringida, que exige el cumplimiento de ciertas formalidades para ser admitido, en el que se verifiquen los elementos esenciales para que prospere el mismo.

Finalmente, con base en el art. 220 inc. 2° CPCM, se deja constancia que la presente resolución, en cuanto a la improcedencia del motivo de forma invocado, es decir por infracción a los requisitos internos y externos de la sentencia, ha sido conformada con los votos de los magistrados licenciado [...] y doctor [...], no así por parte de la magistrada doctora [...], quien razonará su voto por no estar de acuerdo con dicha improcedencia; no obstante dicha magistrada si concurre con la decisión relativa a la declaratoria de inadmisión respecto a los motivos: a) de forma por haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación, “por vía errónea de aplicación de los arts. 510 y 511 inc. 2 ° del CPCM, así como la inobservancia del art. 18 Cn”; y b) de fondo: “inobservancia total de los arts. 1427 inc. 1°, 1430 regla 2°, 2253 y 2256 todos del CC”

Sala de lo Civil, número de referencia: 310-CAC-2019, fecha de la resolución: 11/03/2020

SE ORIGINA CUANDO EL RECURRENTE INVOCA UNA EXPRESIÓN QUE NO COMPRENDE UN SUBMOTIVO TIPIFICADO EN LA LEY DE CASACIÓN

***“c) selección correcta de norma aplicable, calificación y apreciación correcta* de *hechos, conclusión en el fallo que razonadamente no corresponde, respecto del art.* 2256 CC.**

Con relación a la “selección correcta de norma aplicable, calificación y apreciación correcta de hechos, conclusión en el fallo que razonadamente no corresponde”, claramente se advierte por esta Sala que la anterior expresión, no comprende un sub motivo tipificado en la ley de casación.

En consecuencia, esta Sala estima que no cumple con el deber de establecer un concepto correlacionado con el motivo especifico de infracción que requiere la referida ley, por lo que sin mayor estudio deberá declararse inadmisible el mismo.”

Sala de lo Civil, número de referencia: 330-CAC-2019, fecha de la resolución: 18/03/2020

INAPLICACIÓN DE LEY

AUSENCIA DE LA INFRACCIÓN ALEGADA

"VII. Análisis del motivo de fondo: inaplicación del art. 751 CC

1. El art. 751 CC, prescribe lo siguiente: "La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros la mala fe deberá probarse".[...]

3. Respecto de esta infracción, esta Sala considera:

La recurrente manifiesta que en el escrito de apelación alegó que la a quo había interpretado mal el art. 751 CC, porque no había presumido la buena fe, tal como lo establece la norma infringida. Agrega, que la Cámara sentenciadora no resolvió este punto apelado.

Por consiguiente, el motivo que pudo haber invocado en casación la recurrente es el relativo a incongruencia, por haber omitido resolver una de las causas de pedir; y no inaplicación de ley como equivocadamente lo ha argumentado la impetrante.

En esa virtud, esta Sala concluye que la infracción de inaplicación de ley denunciada, no ha sido cometida por la Cámara sentenciadora, razón por la que deberá declararse, no ha lugar a casar la sentencia por este motivo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAC-2019, fecha de la resolución: 12/11/2020

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 399-CAC-2019, fecha de la resolución: 14/12/2020

INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA

AUSENCIA DE LA INFRACCIÓN ALEGADA, LA REFERENCIA AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL AUTO OBJETO DE IMPUGNACIÓN NO CONSTITUYE PARTE DEL FUNDAMENTO JURÍDICO DEL MISMO

"2. Infracción de los arts. 417 inciso 1° y 523 inciso penúltimo CPCM

El art. 417 inciso 1° CPCM preceptúa lo siguiente: "[...] La sentencia que deba resolver todas las cuestiones planteadas en el proceso, se dictará dentro de los quince días siguientes al pronunciamiento oral del fallo y será notificada a las partes en un plazo que no excederá los cinco días desde que se dictó [...]"

El art. 523 inciso penúltimo del CPCM, a la letra dispone: "[...] Hay infracción de los requisitos internos cuando la sentencia es incongruente o tiene disposiciones contradictorias. Se entenderá que existe incongruencia en los casos siguientes: haber otorgado el juez más de lo pedido por el actor, menos de los resistido por el demandado o cosa distinta a la solicitada por am-

bas partes; o haber omitido resolver alguna de las causas de pedir o, alguna cuestión prejudicial o jurídica, necesaria para la resolución del proceso [...]"

2.1 El tribunal de segunda instancia aduce, que el juzgador no puede suplir la falta de determinación en la pretensión del recurso impugnativo de mérito, ello dada la imposición legal regulada en el art. 6 CPCM, respecto a que la delimitación de la pretensión y la disposición de la misma atañe solo a las partes procesales, de tal forma, que al no determinarse una petición clara de lo que se pretende en el recurso -citamos literalmente-, se "repercute seriamente con el principio de congruencia de la sentencia, regulado en el Art. 417 CPCM, pues (...) el juzgador no podría darle respuesta a la misma, pudiendo incluso incurrir en suposiciones y en errores que podrían llevarnos a dar más o menos de lo pretendido o incluso una cosa distinta y violentar el principio de imparcialidad que todo juzgador debe aplicar.

2.2 El recurrente sostiene que la Cámara ad *quem* ha infringido los preceptos citados previamente, dado que pretende otorgar al principio de congruencia, un alcance que no tiene, puesto que, por una parte, al haber pedido con absoluta claridad que se revocara la sentencia impugnada, que se estimara cada uno de los motivos de oposición planteados en primera instancia y en consecuencia se declarara sin lugar la pretensión ejecutiva, no existe forma alguna en que la omisión petitoria pueda poner en riesgo la vulneración al principio de congruencia; y por otra parte, al no ser aplicable la categoría "pretensión" en un escrito recursivo, no es posible vulnerar el principio de congruencia por una supuesta modificación en la "pretensión".

2.3 Con respecto a esta denuncia casacional en análisis, esta Sala, tiene claridad de que la mención del principio de congruencia en el auto recurrido, se ha realizado a manera de obiter *dictum,* considerando la lectura de la cita textual realizada en el párrafo precedente, se advierte, que la Cámara ad *quem,* hace referencia al aludido principio, en términos de que éste, a raíz de la indeterminación de la petición en los términos anteriormente relacionados, podría ser influído o afectado en sus efectos al momento de verificarse la sentencia definitiva, pues ante dicha indeterminación el juzgador no cuenta con los elementos para decidir del recurso, pudiendo configurarse la incongruencia en cualquiera de sus variantes, lo cual también podría derivar en la transgresión al principio de imparcialidad del Juez.

En ese sentido, resulta palmario que la referencia al principio de congruencia en el auto objeto de impugnación, no constituye parte del fundamento jurídico del mismo, por lo que, la transgresión bajo la concepción del recurrente, no se ha configurado, por tal razón, esta Sala concluye, que la Cámara ad *quem* no infraccionó los arts. 417 inciso 1° y 523 CPCM, por lo que, deberá declararse sin lugar el recurso de que se trata."

Sala de lo Civil, número de referencia: 237-CAM-2019, fecha de la resolución: 24/06/2020

INFRACCIÓN DE DOCTRINA LEGAL

IMPOSIBILIDAD DE ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN, AL NO TENER CLARIDAD BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIA SE FIJÓ AXIOMA DE LA MÁXIMA INVOCADA

"c) violación de doctrina legal respecto de la aplicación del principio de preclusión.

Respecto a la violación de doctrina legal, el recurrente refiere que no se tomó en cuenta por el ad quem, el principio de preclusión en una petición respecto a una petición formulada por la parte contraria durante la primera instancia, al solicitar la interrupción de la rebeldía, la contestación en sentido negativo y la petición de indemnización, lo cual fue declarado sin lugar por el juez a quo, por ser estas peticiones extemporáneas.

Sin embargo, esta Sala advierte que ya que expresa una máxima de la cual no puede entenderse, si la misma ha sido una declaración directa de la Sala Casacional o bajo qué contexto se encuentra vinculada la aludida máxima. No obstante que, esta Sala debe estar consciente de su propia jurisprudencia y, a pesar que la resolución que se impugna, no se ha señalado las tres sentencias consecutivas donde se establezca la doctrina legal violada, el inconveniente del planteamiento estriba esencialmente en no tenerse claridad, bajo qué circunstancia se fijó el axioma de la máxima invocada, lo que conlleva a una inconsistencia que resulta en el incumplimiento del requisito formal de pertinencia del recurso para efectos de su admisión."

PARA INVOCAR ESTA INFRACCIÓN, NO BASTA CON SEÑALAR REMOTAMENTE UNA SENTENCIA EN QUE SE ABORDE EL TEMA PARTICULAR, SINO QUE DEBE CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CONCURRIR LAS TRES PROVIDENCIAS QUE HACEN LA DOCTRINA LEGAL, CONFORME AL TEMA AL QUE SE ALUDE

"Asimismo, cabe agregar que, sobre el estudio procesal de la preclusión, esta Sala aún no tiene en sus registros una jurisprudencia respecto a la preclusión procesal, en al menos tres sentencias consecutivas e ininterrumpidas, con relación a este tema. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que de acuerdo a los precedentes expuestos por esta Sala, como el caso 77-CAM-2012 de fecha treinta de enero de dos mil trece, la inobservancia de la doctrina legal se refiere a : [...] en lenguaje forense debe entenderse como jurisprudencia, pero circunscrita a la del más alto tribunal de la nación, el que unifica la interpretación de las leyes a través de la casación; y es esa doctrina legal la que interesa a los fines de esta institución [...] así, según la Ley de la materia, que haya sido establecida en tres sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, siempre qué lo resuelto sea en materias idénticas en casos semejantes [...]" (sic).

Es así que, no basta con señalar remotamente una sentencia en que se aborde el tema de la preclusión, sino que debe cumplir con el requisito de concurrir las tres providencias que hacen la doctrina legal conforme al tema al que se alude.

En ese sentido, esta Sala estima que el impetrante no cumple con los requisitos previstos para invocar la infracción de doctrina legal, a efecto de lograr configurar el referido vicio que le atribuye a la Cámara de segunda instancia, y por consiguiente, incumple con el requisito interno de formalización del recurso." *Sala de lo Civil, número de referencia: 330-CAC-2019, fecha de la resolución: 18/03/2020*

IMPOSIBILIDAD DE CASAR LA SENTENCIA POR ESTE SUBMOTIVO, LAS SENTENCIAS RELACIONADAS TRATAN SOBRE LAS CERTIFICACIONES REGISTRALES, CUANDO NO SE CUENTA CON LOS ORIGINALES Y, DENTRO DEL PROCESO NO SE HA PRETENDIDO HACER VALER NINGUNA DE ELLAS EN SUSTITUCIÓN DEL TÍTULO ORIGINAL

"VI. Análisis de la infracción de doctrina legal con supuesta violación de la siguiente jurisprudencia:

a) sentencia pronunciada en proceso declarativo común reivindicatorio de dominio, con referencia 86-CAC-2016, de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis;

b) sentencia pronunciada en el juicio civil ordinario de nulidad de compraventa, cancelación de inscripción registral y reivindicatorio de dominio, con referencia 363-CAC-2014, de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis;

c) sentencia pronunciada bajo referencia 270-CAC-2013, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete;

d) sentencia pronunciada con referencia 230-CAC-2009, de fecha trece de julio de dos mil once; y,

e) sentencia con referencia 1241-2003, de fecha veintinueve de enero de dos mil tres.

1. La infracción de doctrina legal está definida en el art. 522 inc. 3° CPCM, y de acuerdo con tal disposición, aquella se configura "cuando se hubiera violado la jurisprudencia establecida por el tribunal de casación, surgida de la aplicación e interpretación de las leyes y que esté contenida en tres o más sentencias constantes, uniformes y no interrumpidas por otra doctrina legal".

Sobre el particular, esta Sala ha sostenido, en el precedente con referencia 301-CAC- 2014, de las nueve horas siete minutos del veintidós de julio de dos mil dieciséis, lo siguiente: «[...]para configurar la infracción de la doctrina legal, hay que identificar dentro de las sentencias -que han de ser constantes y uniformes-, el caso -la causa de pedir, hechos o fundamentación fáctica- que se está regulando con las sentencias, relacionado a la aplicación de una norma jurídica que ha sido interpretada en un sentido determinado, exponiendo la semejanza del asunto, con otros casos resueltos de la misma forma -constantes- y bajo el mismo criterio -uniformes- […]» (sic).

2. En el caso que nos ocupa, en el que se invoca infracción de doctrina legal, con vulneración a las sentencias de referencias 86-CAC2016, 363-CAC-2014, 270-CAC-2013, 230-CAC-2009 y 1241-2003, afirman los recurrentes que estas resoluciones son constantes y uniformes en la interpretación de la pertinencia de la prueba del dominio sobre bienes inmuebles, estableciendo los supuestos

en los cuales se debe presentar la prueba documental idónea para acreditar el derecho de propiedad sobre bienes inmuebles.

Sostienen los recurrentes, que de haberse aplicado la doctrina legal contenida en esas sentencias, se habrían acatado las reglas contenidas en el art. 35 de la Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de a la Propiedad Raíz e Hipotecas, y la Cámara habría advertido que en el presente caso la parte que ha incoado la acción reivindicatoria no presentó el título de propiedad original inscrito, consistente en la escritura de donación pura y simple y, que, además, no consta en el proceso la imposibilidad para presentar el titulo original debidamente inscrito.

3. Sobre las alegaciones planteadas, esta Sala advierte que las sentencias que los recurrentes estiman que constituyen doctrina legal, tratan el tema atinente a que las certificaciones registrales presentadas en tales juicios no suplen la obligación de presentar el documento original de propiedad, y que estas certificaciones sólo son válidas al justificarse la imposibilidad de reponer el título original.

Como puede advertirse, el razonamiento invocado por los recurrentes en tales resoluciones, no tiene aplicación al caso sub júdice, debido a que dentro del proceso no se ha pretendido hacer valer, ninguna certificación registral en sustitución del título original, para comprobar el dominio del bien inmueble que se disputa, sino que lo que se pretendió fue un asunto diferente al contenido de las sentencias citadas.

De lo dicho se concluye que no procede casar la sentencia de mérito por el motivo y resoluciones invocadas y así se declarará."

Sala de lo Civil, número de referencia: 255-CAC-2018, fecha de la resolución: 17/09/2020

INFRACCIÓN DE REQUISITOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SENTENCIA

EL RECURSO DE CASACIÓN DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE POR ESTE SUBMOTIVO, CUANDO LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DENUNCIADA NO RECAE EN UNA SENTENCIA, SINO EN EL AUTO DEFINITIVO DE IMPROPONIBILIDAD LA PRETENSIÓN

"4.2 En relación al segundo y tercer motivo de forma, invocados: "[...] QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS ESENCIALES DEL JUICIO; siendo el motivo específico: POR INFRACCIÓN DE LOS REQUISITOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SENTENCIA, de conformidad al ORDINAL 14 DEL ART. 523 CPCM, POR VÍA DE LA INOBSERVANCIA DEL ART. 217 INCISOS PRIMERO Y CUARTO DEL CPCM y QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS ESENCIALES DEL JUICIO; siendo el motivo específico: por INFRACCIÓN DE REQUISITOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SENTENCIA, de conformidad al ORDINAL 14 DEL ART. 523 CPCM, POR VIA DE LA ERRADA INTERPRETACION Y APLICACIÓN DEL ART. 127 INCISOS PRIMERO Y CUARTO DEL CPCM, QUE HACE QUE DICHA SENTENCIA SEA INCONGRUENTE Y CONTENGA DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS.[...]" [...]; se advierte:

Por regla general, esta Sala, realiza el análisis formal del recurso de casación, de manera independiente respecto de cada precepto señalado como infringido. En el caso analizado, dada la convergencia en la fundamentación del motivo y preceptos señalados como infringidos, y con el fin de evitar incurrir en razonamientos redundantes, se realizará un mismo argumento para el mismo.

Mediante este recurso de casación, se impugna el auto definitivo mediante el que la ad *quem,* desestimó la pretensión contenida en el recurso de apelación y, como consecuencia de ello, confirmó el auto de primera instancia, por medio del que se declaró improponible la pretensión de existencia de obligación y pago de la misma e indemnización de daños y perjuicios.

Los recurrentes invocan como motivo infringido por la ad *quem,* el quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, y como submotivos los siguientes: "por infracción de los requisitos internos y externos de la sentencia, de conformidad al ordinal 14 del art. 523 CPCM, por la inobservancia del artículo 217 incisos 1° y 4° CPCM, y la errada interpretación y aplicación del art. 127 incisos 1° y 4° CPCM."

Al respecto, esta Sala estima imperioso precisar que el submotivo invocado por los recurrentes, relativo a *infracción de los requisitos internos y externos de la sentencia,* establecido en el art. 523 ord. 14 ° CPCM, debe ir orientado a atribuir a la Cámara de segunda instancia, una infracción en una sentencia.

El art. 212 CPCM, clasifica las resoluciones, de la siguiente manera: decretos, autos y sentencias. Los autos son simples y definitivos. Se considera auto definitivo el que le pone fin al proceso haciendo imposible su continuación en la instancia o por vía de recurso; y las sentencias que deciden el fondo de la controversia.

Bajo ese contexto, el legislador consideró que, para los fines del recurso de casación, el vicio invocado por los recurrentes, únicamente puede concurrir respecto de sentencias, ya que en ella se conoce del fondo del asunto debatido, sobre las pretensiones alegadas, expuestas y probadas por las partes, que es lo pertinente para determinar si hay infracción en la sentencia.

Los autos definitivos, resuelven aspectos que no son atinentes a la solución de la controversia entre las partes.

El criterio anterior ha sido aplicado en los precedentes de casación, bajo *referencias 14-CAC-2019 mediante resolución de las once horas veintinueve minutos del día trece* de marzo de dos *mil diecinueve y 40-CAM-2019, de las nueve horas veinte minutos del* día *dos de octubre de dos mil diecinueve,* por consiguiente, dado que el motivo invocado no recae respecto de una sentencia, sino en contra de un auto definitivo, el recurso respecto a este motivo deviene en improcedente."

Sala de lo Civil, número de referencia: 310-CAC-2019, fecha de la resolución: 11/03/2020

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LEY

PROCEDE ADMITIR EL RECURSO POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ART. 2253 CC

***"a) interpretación errónea del art. 2253* CC**

Siguiendo el orden expuesto, al analizar lo concerniente al submotivo por interpretación errónea del art. 2253 CC, se estima que el recurrente en síntesis alega que el Código Civil no establece limitación alguna relativa al tipo de acción sujeta a prescripción extintiva o liberatoria, y donde la ley no limita, tampoco lo puede hacer el juzgador, es decir que, la prescripción extintiva o liberatoria goza de plena aplicación a cualquier tipo de acción judicial.

El impetrante refiere, que contrario a lo que razonó la Cámara ad quem, considerando que la prescripción liberatoria ha estado vinculado a la idea de una relación obligacional, ésta no tomó en cuenta todas las fuentes de las obligaciones y la limitó a las obligaciones de carácter contractual en su interpretación del artículo infringido.

Por tal razón, el recurrente asegura que la Cámara de Segunda Instancia, "habría interpretado restrictivamente el citado artículo, concluyendo en el fallo dictado por medio del que se revocó la sentencia de primera instancia, en lo que respecta a la declaración ha lugar a la prescripción extintiva de la acción reivindicatoria iniciada por la parte demandada"

En cuanto a lo planteado por el impugnante, sobre la interpretación errónea de lo dispuesto en la norma invocada, esta Sala estima que se ha fundamentado suficientemente el sentido en que la Cámara restringió la misma dándole una errada interpretación, al estimarse que la acción reivindicatoria no era sujeta ser prescrita, por lo que es viable admitir el recurso por la infracción señalada para su análisis oportuno."

Sala de lo Civil, número de referencia: 330-CAC-2019, fecha de la resolución: 18/03/2020

LETRA DE CAMBIO

PROCEDE DECLARAR NO HA LUGAR A CASAR LA SENTENCIA, LA CÁMARA APLICÓ DE FORMA CORRECTA LA DISPOSICIÓN DENUNCIADA, EN CUANTO A TENER POR INOBSERVADOS LOS REQUISITOS ESENCIALES DE CONSTITUCIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO COMO BASE DE LA ACCIÓN CAMBIARÍA INICIADA

"4.1 La doctrina latinoamericana en general, concuerda en cuanto al tratamiento que ha de darse a la formulación de un título valor. Particularmente, en lo que se refiere a la letra de cambio, su formación distingue los elementos o requisitos esenciales llamados intrínsecos y extrínsecos.

Los intrínsecos, son los comunes a todo negocio jurídico, tales como, capacidad, declaración de voluntad, objeto idóneo y causa lícita.

Los extrínsecos, se refieren al modo mediante el cual debe manifestarse la declaración cambiarla para constituir el documento. Ahora bien, los requisitos extrínsecos se dividen, a su vez, en dispositivos y naturales.

Los naturales, pueden estar ausentes del texto del documento porque su omisión es subsanada y suplida por la ley, a través de una presunción *iuris et de iure,* lo que quiere decir, que a falta de éstos, hay una norma que lo regula, así tenemos el caso de aquella letra a la que falte la fecha de vencimiento para el pago de la obligación, en cuya virtud el art. 706 inc. 2° CCom, dispone la manera de suplir tal ausencia.

(i) En cuanto a los requisitos extrínsecos dispositivos, deben figurar necesariamente en la redacción del texto y en caso de ausencia de alguno de ellos, no hay letra de cambio; sin que implique, desconocerle a la misma la calidad de mero documento probatorio.

De ahí que uno de los elementos extrínsecos dispositivos para la constitución del título valor en cuestión, es el requisito relativo a la fecha en que la letra de cambio ha sido creada.

Lo anterior, está contemplado en el art. 702 romano II CCom, que regula el deber de expresarse en la letra de cambio, el lugar, día, mes y año en que se suscribe. Se trae a colación dicha norma, en virtud que si bien es cierto el impetrante hizo alusión únicamente como infringido el artículo 625 CCom, por la ad *quem,* es importante destacar que el título valor que nos ocupa, corresponde a una letra de cambio, y ésta tiene su especial regulación en el art. 702 CCom, artículo que no es potestativo, al contrario, es formalista, estableciendo requisitos de validez de la letra de cambio.

Tal necesidad estriba, en que, del lugar de emisión podrá determinarse la competencia de la ley aplicable; y por otro lado, la indicación de la fecha (día, mes y año), resolverá los problemas concernientes a la capacidad de las partes, al fijar el vencimiento en los casos de letras giradas a un plazo fecha, y determinar el límite de presentación en el caso de giro de letras a la vista o a un plazo vista, elementos que como hemos analizado, no pueden faltar en la redacción del texto del documento, pues la ley no suple su ausencia.

Por consiguiente, la expresión de la fecha de emisión, es ineludible, puesto que la ley no establece una forma de cómo suplirla. En cuanto a fijar el vencimiento en los casos de letras giradas a un plazo fecha, determinan el límite de presentación para su pago que es propio de ésta, art. 732 CCom, y en caso que se omita, puede considerarse como letra a la vista o a un plazo vista. Siendo este último un ejemplo en los que la ley expresamente permite se subsane la omisión de un requisito previamente establecido. No así el caso que nos ocupa.

4.2 En el caso *sub* examine, la acción cambiaria entablada por la demandante señora MCGE, es con base a una *letra de cambio* a favor de ella, en cuyo título figura como librado el señor JRGV, de quien se reclama el importe de la letra.

No obstante, del texto de la misma, esta Sala puede advertir, que según los requisitos antes mencionados y contemplados en la citada disposición, la misma cumple con algunos de éstos, como lo es la denominación del tipo de título de crédito, cantidad, fecha de vencimiento, aceptación, etc.

Sin embargo, no puede verificarse la fecha de suscripción de la letra, lo que implica la falta de cumplimiento de un requisito esencial para su validez, cuyo destino en el comercio tiende a la circulación de la misma, siendo dicha fecha

vital para el funcionamiento de la naturaleza del título en estudio; y por cuyo motivo, pierde la acción cambiarla directa que se ha pretendido ejercer, lo que a juicio de esta Sala Casacional, hace pertinente el rechazo de la pretensión resuelta por la Cámara Ad quem, en la aplicación ajustada del art. 625 CCom.

4.3 Sustancialmente, es preciso reparar que en efecto, dicha aplicación de parte de la Cámara, fue apropiada al caso concreto, debido a que la regla de la cuestionada disposición, es imperativa al igual que el art. 702 romano II CCom, norma atinente al título valor en cuestión, en cuanto a los requisitos esenciales para la constitución de una letra de cambio, como la que fue presentada por la parte actora, de la cual se encuentra ausente el requisito del día, mes y año en que fue suscrita.

Dicha omisión afecta la validez del documento que es esencialmente formal, ya que por ley, está sujeta a ciertas formalidades que sin su cumplimiento, perjudicará la acción cambiarla que deriva de ésta, tal como ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

Es importante destacar que la aceptación y la suscripción son diferentes, pues la fecha de la suscripción atañe al nacimiento de la obligación contenida en el título valor, y la aceptación se refiere al nacimiento de la acción cambiarla.

4.4 Ahora bien, es preciso también referirnos respecto al argumento del recurrente, que la fecha de suscripción del título ejecutivo de este proceso, debe entenderse que es el veintitrés de diciembre de dos mil quince, fecha consignada en la parte izquierda de la letra de cambio; es decir, la parte destinada en el formulario impreso utilizado, para la firma del aceptante, que en este caso es el mismo librado; puesto que a su entender no especifica la ley en qué lugar se pondrá la fecha de suscripción.

A este respecto, es importante recordar que una letra de cambio no tiene necesariamente que ser completada en un formato ya impreso, habida cuenta que el legislador no ha determinado un tamaño y diseño de aquél, por lo que podría ser en cualquier forma, mientras que de su lectura se cumpla con los requisitos propios de su naturaleza señalados para su debida constitución; ya que la misma ante su incumplimiento constituye un título que contiene una obligación, sobre el cual debe tener lugar la ejecución.

Sin embargo, tal como se ha dicho antes, no puede entenderse que la fecha de aceptación constituye la fecha de suscripción de la letra de cambio, pues, si bien pueden concurrir, es indispensable que éstos consten en el documento base de la pretensión.

En el entendido que el título es la prueba preconstituída, la cual confiere certeza al juzgador de la simple lectura, la existencia de la obligación líquida, exigible, acreedor, deudor y mora.

4.5 En correspondencia a lo anterior, esta Sala considera que en el caso *sub* judice, no existe la aplicación errónea del precepto relacionado, tal como se ha dejado establecido en el análisis de la anterior infracción, pues, el tribunal ad quem, la aplicó correctamente en cuanto a tener por inobservados los requisitos esenciales de constitución de la letra de cambio como base de la acción cambiaría iniciada.

De manera específica, en cuanto a la fecha de su emisión, por lo cual la mencionada infracción del art. 625 CCom, no se ha producido en el sub lite, y

en cuyo caso no habrá lugar a casar por el motivo denunciado, lo que así habrá de declararse.

Se agrega que los argumentos considerados en esta decisión, tienen como base el criterio adoptado en los precedentes jurisprudenciales aplicables al presente caso, tales como los incidentes casacionales bajo los números de referencias: 332-CAM-2013, de fecha *quince* de *junio* de dos *mil* dieciséis; *320-CAM-2018, de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve; y, 81-CAM-2008,* de fecha veinticuatro de noviembre de dos *mil nueve."*

Sala de lo Civil, número de referencia: 191-CAM-2019, fecha de la resolución: 23/06/2020

NULIDAD DE TÍTULO MUNICIPAL

REQUISITO PARA QUE EL JUZGADOR DECLARE LA NULIDAD DE OFICIO

"esta Sala comparte el criterio de la Cámara ad quem, en cuanto ha interpretado correctamente el art. 1553 CC, ya que la declaratoria oficiosa de nulidad absoluta, está concedida únicamente para el juez, en el sentido que dicha nulidad absoluta sea notoria, clara, indiscutible y evidente; de tal manera que el juzgador, no tenga que recurrir a ningún medio probatorio para establecer su existencia.

En el caso en estudio, el demandante, hoy recurrente, que actúa en su carácter personal, por ser abogado de la República, al incoar la demanda, pidió que se declarara la nulidad absoluta manifiesta de un título municipal y su cancelación registral, fundado en el art. 1553 CC.

En ese sentido, invocó una serie de errores que según él, se cometieron cuando se realizaron las diligencias de esa titulación municipal. Entre los vicios que invocó, se encuentran los relacionados a la denominación catastral, la omisión de la resolución de admisibilidad del título municipal, el no haber publicado la admisión de solicitud por tres veces en el diario oficial; y, haber realizado la inspección del inmueble sin la respectiva citación de los colindantes.

Para sustentar su pretensión de nulidad absoluta manifiesta, presentó las diligencias de titulación municipal, las cuales deberían ser analizadas por el juzgador, para establecer la existencia de los vicios denunciados, y así poder declarar la nulidad absoluta solicitada.

Para que la nulidad absoluta sea declarada de oficio, de conformidad al art. 1553 CC, el juzgador debe concluir de la simple vista de las diligencias de titulación municipal, que los vicios contenidos en ellas, son evidentes, notorios e indiscutibles, de tal manera que no tenga que relacionar ni analizar ninguna prueba al respecto, para declarar la nulidad absoluta.

Por consiguiente, si es necesario analizar la tramitación de un procedimiento, tal como lo ha invocado el recurrente en el presente caso, entonces, la nulidad deja de ser manifiesta, ya que debe derivarse del análisis de las diligencias de titulación presentadas.

De ahí que, no estamos ante un caso de nulidad absoluta manifiesta, y por ende, cualquiera que pretenda la nulidad absoluta del título municipal, debe legitimar su derecho o interés en la causa, tal como lo ha razonado la Cámara sentenciadora.

En virtud de lo anterior, esta Sala concluye que el vicio denunciado no ha sido cometido por el tribunal ad *quem,* por lo que se impone declarar que no ha lugar a casar las sentencia de mérito y así se pronunciará."

Sala de lo Civil, número de referencia: 365-CAC-2019, fecha de la resolución: 12/11/2020

LA DEMANDA ES IMPROPONIBLE POR FALTA DE LEGITIMIDAD PARA INTERVENIR COMO PARTE EN EL PROCESO

"VIII. Siendo que la sentencia será casada por el motivo de fondo de aplicación indebida del art. 1329 CC, esta Sala procederá a pronunciar la sentencia que conforme a derecho corresponde.

La señora [...], por medio de su apoderado licenciado [...], interpuso demanda en contra de la señora [...].

La pretensión de la parte actora consiste en que en sentencia definitiva, se declare nulo el título municipal inscrito, a favor de la demandada, por la razón de adolecer del vicio de mala fe, y haber sido "producido" (sic) por una causa y objeto ilícitos; y que se ordenara a la demandada, restituir la posesión y dominio del inmueble que se había titulado según ella, fraudulentamente.

La actora es heredera testamentaria de los bienes que dejó su padre señor [...], quien falleció en el año mil novecientos noventa y uno, en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América.

Para fundamentar su pretensión, presentó una escritura inscrita, a favor del causante bajo la matrícula ********, fol. [...], y su respectivo traspaso por herencia, fol. [...].

La parte actora pretende la nulidad de un título municipal, que contiene la titulación de un inmueble que según ella, considera es de su propiedad; inmueble que es descrito en la escritura con matrícula ********, que presentó con la demanda; y que se identifica como inmueble primero, situado en el ********, ********** de la ciudad de Santiago Nonualco. Alega, que el mismo fue titulado municipalmente en forma fraudulenta por la demandada, señora [...].

Al estudiar el informe del historial registral, emitido por el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección del Centro, respecto del inmueble que reclama la actora, inscrito bajo la matrícula ********, documento agregado a fol. ***, 2° pieza principal, se advierte que desde el año mil novecientos cuarenta y seis, el señor [...], tenía inscritos dos inmuebles de naturaleza urbana, situado el primero en el ********, de la ciudad de Santiago Nonualco, departamento de La Paz, de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON SESENTA Y SIETE CENTÍMETROS; del cual se hicieron dos segregaciones, la primera de CUATROCIENTOS ******** METROS CUADRADOS CATORCE

CENTÍMETROS, inscrita al número ******** del libro ********, propiedad del departamento de La Paz, a favor de los señores [...] y [...], inscrito el veintidós de abril de mil novecientos cincuenta y dos; y la segunda, de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS CINCUENTA Y TRES CENTÍMETROS CUADRADOS, al número *** folio *** y siguiente del libro ********, propiedad del departamento de La Paz, a favor de la señora [...] conocida por [...] e inscrita el seis de mayo de mil novecientos cincuenta y dos; quedando con estas segregaciones agotada la cabida registral del primer inmueble. Con respecto al segundo inmueble, situado **********, de la misma ciudad de Santiago Nonualco, se constató que fue adquirido por la actora, [...], según declaratoria de heredera testamentaria, emitida por el Juzgado de lo Civil de Zacatecoluca, a las doce horas veinte minutos del veinticinco de septiembre de mil novecientos ********, e inscrita a su favor a las quince horas doce minutos del catorce de octubre de dos mil nueve.

La demandante procura la nulidad de un título municipal que contiene el traspaso de un inmueble que alega es de su propiedad, inmueble cuya cabida fue agotada, debido a que hubieron dos segregaciones antes de que fuera declarada heredera testamentaria, tal cómo se ha expresado en el párrafo anterior; lo cual significa entonces, que no heredó dicho inmueble, y que no forma parte de su patrimonio.

En ese sentido, está pretendiendo que se le restituya el dominio de un inmueble que no es de su propiedad, ya que no es titular del derecho que reclama; por consiguiente, de conformidad al art. 66 CPCM, no está legitimada para intervenir como parte en el proceso. Consecuentemente, la pretensión que se declare la nulidad del título municipal, es imposible de resolver, pues no es titular del derecho que reclama ni ha probado tener un interés legítimo en la causa, por lo que de conformidad al art. 277 CPCM, se vuelve imperativo declarar improponible la demanda y así deberá pronunciarse."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAC-2019, fecha de la resolución: 12/11/2020

SE CONFIGURA EL VICIO DE APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS DISPOSICIONES DE CÓDIGO CIVIL INVOCADAS, EN VIRTUD QUE EL TÍTULO MUNICIPAL ES UN ACTO SUJETO AL DERECHO ADMINISTRATIVO, YA QUE ES PRODUCTO DE UNA DECLARACIÓN UNILATERAL DEL ALCALDE MUNICIPAL QUE LO EXPIDE, PREVIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

"IV. Análisis del motivo de fondo relativo a la aplicación indebida del art. 1316 ord. 3° y 4° CC.

1. El art. 1316 ord. 3° y 4° CC, textualmente regula lo siguiente: "Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario [...] 3° Que recaiga sobre un objeto lícito [...] 4° Que tenga una causa lícita [...]".

2. La Cámara cita una sentencia de la Sala de lo Civil, con referencia 219-CAC-2009, pronunciada a las doce horas del cuatro de junio de dos mil diez; en la que, en lo medular, se consigna que las causas de nulidad de los actos o contratos, en los que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para que sean válidos y surtan efectos legales, deben cumplirse. Que la omisión de estos

requisitos o formalidades que las leyes prescriben, son causa de nulidad absoluta, arts. 1551 y 1552 del Código Civil.

En ese orden de ideas, la Cámara seguidamente concluyó, que para que se otorgara la declaratoria del título municipal en legal forma, era necesario que existiera una causa y objeto lícitos, que constituyen los requisitos de validez, previstos en el art. 1316 ord. 3° y 4° CC, requisitos que, a criterio de dicho tribunal, no se cumplieron en el presente caso.

Por otra parte, el ad quem agregó lo siguiente: "[...] el título municipal cuya nulidad se solicitó debido a que es un título que se adquirió de forma ilícita por no existir la buena fe por parte de la señora [...], de conformidad con el art. 1552 C.C. acarrea nulidad absoluta, esto en virtud de que se trata de una irregularidad a las formalidades prescritas por la ley, esto en atención a la naturaleza del acto y no a la calidad de las partes interesadas, derivando por consiguiente, en un título de propiedad que carece de validez legal y como ese instrumento nulo perjudica intereses del actor o de terceros, es procedente declarar su nulidad absoluta y mandar a cancelar la inscripción registral correspondiente, de conformidad al art. 723 N° 2 C.C. [...]"(sic).

3. Alega la recurrente que: "[...] La Cámara ad quem señala en la sentencia impugnada que en el titulo municipal que fue impugnado por la parte demandante en primera instancia, debían cumplirse requisitos de validez regulados en el art. 1316 ord. 3° y 4° c. c., siendo necesaria la existencia de una causa y un objeto lícitos, pero ocurre, que la causal de nulidad que fue alegada en la primera instancia por la parte demandante jamás fue porque existiera algún vicio en la causa del título o en el" objeto, sino que se orientó a la supuesta mala fe con que la demandada había poseído el inmueble que había titulado a su favor por la vía municipal, como puede observarse, ni de la alegación del demandante y mucho menos de la ley, puede inferirse la existencia de una DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ENTRE DOS PERSONAS, ya que la tramitación de un título municipal es realizada por una persona que se dice ser señora y dueña de un inmueble y que cumpliendo requisitos legales de plazo y posesión, se procede a dicha titulación, en ningún momento se hace necesaria la declaración o adquisición de obligaciones reciprocas entre dos personas, como sí ocurre en los actos y contratos emanados de dos partes, en donde una se obliga para con otra, situación que NO ocurre en el presente caso, razón por la cual resulta totalmente inaplicable la citada disposición sustantiva [...]"(sic).

En síntesis, la recurrente argumenta que en la tramitación de una titulación municipal, no existe declaración de voluntad entre dos personas, pues dicha tramitación es realizada por una persona que quiere ser dueña de un inmueble, y para ello solo debe cumplir los requisitos legales de plazo y posesión, y que en ningún momento, se hace necesaria la declaración o adquisición de obligaciones reciprocas entre dos personas, como ocurre en los actos y contratos emanados de dos partes, en donde una se obliga para con la otra, situación que no ocurre en el presente caso.

En otras palabras, la recurrente está argumentando que la titulación municipal son diligencias a las que no es aplicable el art. 1316 ords. 3° y 4° CC,

porque esta norma solamente es aplicable a declaraciones de voluntad entre dos personas, y la causal de nulidad qué fue alegada en primera instancia por la demandante, fue por la supuesta mala fe con que la demandada había poseído el inmueble que tituló a su favor por la vía municipal; y esta nulidad no tiene relación con el artículo 1316 CC, citado como infringido."

EL TÍTULO MUNICIPAL ES UN INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONFORMIDAD AL ART. 331 CPCM

"5. Ahora bien, los instrumentos públicos y privados, contienen actos jurídicos. Asimismo, hay actos y declaraciones de voluntad unilaterales y bilaterales.

El título municipal es un instrumento público de conformidad al art. 331 CPCM, el cual contiene un acto jurídico, que surte efectos legales y que es producto de una declaración unilateral del funcionario que lo expide, en aplicación de Ley Sobre Títulos de Predios Urbanos, es decir, del Alcalde Municipal respectivo, previo procedimiento administrativo. (arts. 1 al 6 de la Ley antes mencionada).

En consecuencia, es un acto sujeto al Derecho Administrativo, por lo que no le resulta aplicable el art. 1316 ordinales 3° y 4° del Código Civil.

En consecuencia, es obligado concluir que la Cámara aplicó indebidamente el art. 1316 ord. 3° y 4° CC, por lo que procede casar la sentencia por este motivo."

EL ARTICULO 1329 CC NO ES APLICABLE A UN TÍTULO MUNICIPAL, ES PROCEDENTE CASAR LA SENTENCIA POR APLICACIÓN INDEBIDA DE ESTA DISPOSICIÓN

"4.1 El art. 1329 CC, como todo el Código Civil, regula relaciones privadas. Expresamente alude a los contratos, tal como sostiene la recurrente, pero su aplicación se extiende también a las declaraciones unilaterales de voluntad, sujetas al derecho privado, como fuente de obligaciones.

Precisamente, el art. 1329 CC trata al dolo como vicio que puede concurrir en el consentimiento de quien otorga un contrato o una declaración unilateral de voluntad creadora de obligaciones, en el ámbito privado. En este sentido, establece que "El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado".

Por tanto, el articulo 1329 CC no es aplicable como tal, a un título municipal, ya que el mismo está contemplado en una certificación extendida, por un Alcalde Municipal, después de seguido un procedimiento administrativo. Se trata de un verdadero acto administrativo.

En consecuencia, ha existido una aplicación indebida del art. 1329 CC, por lo que procede casar la sentencia por este motivo."

INEXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN ALEGADA CUANDO EL TRIBUNAL AD QUEM RESUELVE LA NULIDAD SOLICITADA

"V. Análisis del motivo de fondo concerniente a la aplicación indebida del art. 1553 CC.

1. El art. 1553 CC, regula lo siguiente: "La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley: y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de treinta años."

2. El ad *quem,* a fol. [...] de la sentencia manifestó: "[...] Esta Cámara considera, que el art. 1553 C.C., obliga al Juzgador a declarar de oficio las nulidades absolutas, a las que la misma disposición se refiere; entre ellas está la nulidad producida por falta de requisitos de validez del acto jurídico". Y agrega a fs. [...]: "[...] para que existiera la declaratoria del Título Municipal de forma legal es necesario que existiera una causa y objeto lícitos" (sic).

3. Por su parte, la impetrante argumentó: "[...] La Cámara de segunda instancia, aplica el Art. 1553 C.C., que se refiere a que el Juez puede declarar de oficio las nulidades que aparezcan de manifiesto en el acto o contrato, pero sucede que en el caso que nos ocupa, la sentencia de primera instancia que estaba siendo analizada por segunda vez debido a la apelación interpuesta, lo era precisamente porque ésta había declarado una NULIDAD QUE HABIA SIDO ALEGAGA por la parte demandante por la existencia de una "supuesta mala fe" por parte de la demandada, y habiendo sido acogida dicha causal de nulidad por parte del Aquo, la Cámara debía limitarse a analizar la existencia o no de la causal de nulidad que estaba siendo impugnada por el apelante en el recurso respectivo, pues no era necesaria una declaratoria de oficio de una nulidad que ya había sido declarada por una causal "supuestamente probada" en la primera instancia, por lo tanto la aplicación del citado Art. 1553 C.C., lo fue indebidamente [...]*"(sic).*

4. En lo tocante a esta infracción, esta Sala advierte:

La recurrente alega que la Cámara declaró una nulidad absoluta que el actor no había alegado en la demanda.

Al examinar la demanda, se constató que a fol. [...], la parte actora en el romano iv) del petitorio, manifestó lo siguiente: [...] iv) Que en sentencia definitiva se declare nulo el Titulo Municipal obtenido en forma fraudulenta, de mala fe y haber sido producido por una causa y objeto ilícito inscrito a favor de la señora [...], en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de este departamento, bajo la matrícula antes mencionada y consecuentemente se ordene la cancelación de esta inscripción [...]"(sic).

Asimismo, se constató que en el folio [...] de la demanda, el actor argumentó esa petición.

En virtud de lo anterior, esta Sala concluye que la infracción denunciada no ha sido cometida por la Cámara sentenciadora, pues esta resolvió lo que el actor había pedido en la demanda; por consiguiente, se deberá declarar que no ha lugar a casar la sentencia por este motivo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 151-CAC-2019, fecha de la resolución: 12/11/2020

PETICIÓN DE HERENCIA

LA PREVIA DECLARATORIA DE HEREDERO ES UN REQUISITO ESENCIAL PARA QUE, POSTERIORMENTE Y COMPROBADO UN MEJOR DERECHO, SE DECIDA SOBRE LA PRETENSIÓN

"2. En vista que el impetrante ha argumentado conjuntamente aplicación indebida de los artículos 98 y 100 ordinal 2º del Código Procesal Civil y Mercantil, este tribunal analizará en esa misma forma la infracción aludida a los dos artículos en mención. Con tal finalidad se hacen las siguientes consideraciones:

a) En primer lugar debe tenerse en cuenta que el acápite en el que se encuentran los artículos en comento, es el capítulo tercero, del libro primero del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que se regula la acumulación de pretensiones.

Sin embargo en el caso en estudio, existe una sola pretensión que es la petición de herencia. La petición que ha hecho el actor, de declarársele previamente heredero de la señora ¨[…], normalmente es concebida como perteneciente a la jurisdicción voluntaria, por lo que no puede haber acumulación de pretensiones como lo sostiene la Cámara ad quem.

b) El peticionario, en su demanda no ha mencionado nada en relación a la acumulación de pretensiones, por lo que la Cámara no se ha circunscrito a lo que dice el artículo 515 inc. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil, que a la letra dice: "La sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y en su caso en el escrito de adhesión".

c) La Cámara ad quem ha razonado escuetamente, en el sentido que las pretensiones son contrarias entre sí, y que se excluyen mutuamente, pero, antes bien, este tribunal considera que en el caso planteado, la previa declaratoria de heredero, es un requisito esencial para que, posteriormente y comprobado un mejor derecho, se decida sobre la petición de herencia.

Por las razones anteriores, esta Sala considera que el auto definitivo recurrido debe casarse por aplicación indebida de los artículos 98 y 100 ordinal 2º del Código Procesal Civil y Mercantil, y pronunciarse la que fuere legal."

PARA INICIAR LA ACCIÓN NO ES NECESARIA LA CALIDAD DE HEREDERO, SINO COMPROBAR TENERLA, ES DECIR, QUE EL ACTOR DEMUESTRE SU VOCACIÓN SUCESORAL

"V. Análisis del motivo de fondo: interpretación errónea del artículo 1186 del Código Civil

La norma jurídica señalada como infringida, artículo 1186 del Código Civil, a la letra dice: "El que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias tanto corporales como incorporales; y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc. y que no hubieren vuelto legítimamente a sus dueños".

1. El recurrente considera que este agravio consiste en la interpretación distorsionada que hace la Cámara de segunda instancia, en el sentido y alcance del artículo 1186 del Código Civil, cuando considera que para ejercer la acción de petición de herencia es indispensable haber sido declarado primeramente como heredero.

Estima dicha Cámara que el demandante […], no ha sido declarado heredero de los bienes que dejó a su defunción la causante señora […]; por lo que la falta de tal acreditación lo vuelve "pasivo" por no haberle nacido el derecho legítimo para presentar demanda, pretendiendo la restitución de la herencia que ostenta la demandada señora […], no entendiendo por ello el porqué de la decisión de la Cámara seccional correspondiente.

2. La Cámara, en el numeral 13 de su sentencia, efectivamente considera que es indispensable haber sido declarado heredero previamente; pero que el demandante señor […], no ha sido declarado heredero de los bienes, que a su defunción dejó la señora […]; ya que solo consta en el proceso la cesión de derecho hereditario, que, en abstracto, otorgó la señora en calidad de prima hermana de la causante antes mencionada, a favor de […]. La falta de dicha acreditación de heredero lo vuelve pasivo por no haberle nacido el derecho legítimo para presentar la demanda.

3. Después del estudio correspondiente, esta Sala llega a las conclusiones siguientes: de la letra del artículo 1186 del Código Civil, que se ha transcrito, tiene claro que el actor en la petición de herencia, debe comprobar el título que tiene para reclamar la herencia de que se trate, así sea el testamento o el hecho de ser padre, cónyuge, hijo o cualquier pariente de la persona de cuya sucesión se trata.

En este caso el documento que habilita al actor […], es su calidad de cesionario de los derechos hereditarios que le transfirió la señora […], en su calidad de prima hermana de la causante […].

A juicio de este tribunal, no es necesaria la calidad de heredero, sino comprobar tenerla, ya que por razones de urgencia, tal calidad la comprobará el interesado, en el juicio de petición de herencia; ya que el heredero putativo, según su criterio, puede enajenar los bienes sucesorales, si se exige que previamente debe tramitar las diligencias de aceptación de herencia, o sea, que la petición de declaratoria de heredero va imbíbita dentro de la acción o pretensión de petición de herencia. Tal sucede como cuando iniciamos una acción reivindicatoria que requiere el reconocimiento previo del dominio de la cosa que se pretende reiniciar, el cual va imbíbito en la acción.

Dicho en otras palabras, lo que el artículo 1186 del Código Civil requiere, para iniciar la acción de petición de herencia, es que el actor demuestre su vocación sucesoral, lo cual se comprueba en el presente proceso con la cesión del derecho hereditario que en la mortual de la señora […], tenía la señora […], documento que aparece agregado a folios […] y será en el desarrollo del proceso que el actor comprobará que es heredero preferente de la señora […], y en la sentencia que recaiga en tal proceso, se declarará, en su caso, que el actor es heredero preferente y desplazará de su lugar a la heredera declarada señora […].

4. Tal criterio ha sido sostenido por la sentencia pronunciada por la Cámara de tercera instancia, en sentencia pronunciada, a las diez horas del nueve de noviembre de mil novecientos veintinueve, con referencia a la acción de petición de herencia, la cual en su enunciado VI dice: "Para promover una acción de petición de herencia, no es necesario que el actor presente como base de ella la declaratoria de heredero a su favor, basta que pruebe por otro medio legal en el juicio, su derecho a la herencia reclamada y pida la respectiva declaratoria en la sentencia definitiva."

Y en sus consideraciones finales, siempre en relación a dicha sentencia, dicho tribunal consideró: "Demás está decir que no tiene fundamento legal la exigencia de la parte reo sobre que la demandante, para promover el presente juicio, ha debido presentar su declaratoria de heredero del difunto don RV, porque precisamente para obtener esa declaratoria se ha impugnado y discutido en este asunto la calidad de heredero de la demandada, probando la actora su derecho a la herencia, que es lo único que exige a este respecto el citado artículo 1186 C." (sic).

Por tanto resulta claro, que no es necesario que el señor […], sea declarado heredero previo al ejercicio de la acción de petición de herencia.

Por las razones dichas se deberá casar el auto definitivo, pronunciado por la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, a las diez horas treinta y cinco minutos del día quince de agosto del año dos mil dieciocho, debiendo el tribunal de primera instancia admitir la demanda presentada, al cumplirse los demás requisitos exigidos por el legislador a tales efectos."

Sala de lo Civil, número de referencia: 314-CAC-2018, fecha de la resolución: 31/01/2020

POSTULACIÓN PRECEPTIVA

AUSENCIA DE LA INFRACCIÓN ALEGADA POR FALTA DE POSTULACIÓN DEL ABOGADO RECURRENTE

"1- Las disposiciones señaladas como infringidas disponen lo siguiente:

"Art. 18 "Las disposiciones de este código deberán interpretarse de tal modo que se procure la protección y eficacia de los derechos de las personas y la consecución de los fines que consagra la constitución, dentro del respecto al principio de legalidad. En consecuencia, el juez deberá evitar el ritualismo y las interpretaciones que supediten la eficacia del derecho a aspectos meramente formales".

Art. 67 "En los procesos civiles y mercantiles será preceptiva la comparecencia por medio de procurador, nombramiento que habrá de recaer en un abogado de la República, sin cuyo concurso no se le dará trámite al proceso [...]".

2- El recurrente en lo medular manifestó que la Cámara infringió el art. 67 CPCM, al haber declarado inadmisible el recurso, sin considerar que dicha disposición contempla dos funciones específicas, la primera, la representación judicial de las partes y, la segunda, la defensa jurídica de las partes dentro del proceso, de ahí la exigencia de la procuración preceptiva por medio de abogado.

Sin embargo, a criterio de impugnante, la figura contractual del mandato como un contrato en virtud del cual una persona le delega a otra la realización de uno o más negocios, según lo previsto en el art. 1875 CC, no prevé como factor limitarte para su aceptación que se ostente determinada profesión, art. 1878 CC.

De ahí que, el recurrente advierte que el señor [...], inicialmente otorgó poder general judicial y administrativo con cláusula especial, a favor de su hija [...], quien no es abogado, pero si tiene facultades para sustituirlo.

Por otro lado, dicho recurrente, textualmente argumentó lo siguiente: "[...] al otorgarse un poder general judicial y administrativo con cláusula especial a favor de una persona que no es abogado, se rompe con la posibilidad de su ejercicio, ya que al no poseer la calidad de abogado el mandatario se le coloca en una posición de incapacidad de ejercicio del mismo directamente, empero al otorgársele la facultad de sustituir el poder, se le concede la potestad de delegar la postulación en un abogado [...] en el caso de mérito el poder con el que ejercita la procuración el suscrito no presenta ningún defecto que conlleve a una postulación o falta de legitimación procesal, pues al poseer la señora [...] la facultad de sustituir el poder se le extrae de la relación procesal que surge entre los demandados y el demandante señor [...], quien fue representado legalmente por mi persona quien postula en nombre del mandante original, y en consecuencia no existe la falta de legitimación aducida desde un inicio [...]". (sic)

3. Por su parte, el tribunal ad *quem,* inicialmente previno al licenciado [...], a fin de que presentara fotocopia certificada notarialmente de la tarjeta de abogado de la señora [...], debido a que tanto en el poder general judicial y administrativo con cláusula especial, como en el acta de sustitución, no consta la profesión de la señora [...], siendo la legitimación procesal un requisito de admisibilidad; posteriormente, mediante auto de inadmisibilidad a [...], la Cámara sostuvo lo siguiente:

"[...] En efecto, mediante prevención se requirió al Lic. [...], para que presentara debidamente certificada ante notario, la tarjeta de abogado de la señora [...], por aparecer que el Poder Judicial con el cual dicho profesional actuó en primera instancia y pretende intervenir en ésta, fue otorgado a favor de dicha señora y después sustituido por ésta a su favor, desconociéndose si era Abogado de la República, por no haberse consignado ese dato en tales instrumentos [...] Que el referido profesional manifiesta su incapacidad de presentar dicho documento aduciendo que la señora [...], no es profesional del derecho, por lo que queda corroborado la ilegitimidad de lo actuado por el abogado [...]". (sic)

En resumen, la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Occidente, declaró inadmisible el recurso de apelación, en lo principal, por falta de postulación, en razón de que, la señora [...], como mandataria original según poder general judicial y administrativo con cláusula especial otorgado por el señor [...], y posteriormente sustituido a favor del licenciado [...], no es abogada de la República; por tanto, no está habilitada para ejercer la defensa técnica o representación judicial de su mandante, y consecuentemente, tampoco está facultada para sustituir dicho poder, de conformidad con el art. 67 CPCM."

EL MANDATO, ES UN CONTRATO PREPARATORIO QUE TIENE POR OBJETO HABILITAR A UNA PERSONA LLAMADA MANDATARIO PARA QUE CELEBRE UNO O MÁS ACTOS JURÍDICOS EN REPRESENTACIÓN DEL MANDANTE

"4. Esta Sala estima pertinente traer a colación que, dado que el recurrente hace alusión al mandato, que éste, es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera; artículo 1875 del Código Civil.

El Mandato, es un contrato preparatorio que tiene por objeto habilitar a una persona llamada mandatario para que celebre uno o más actos jurídicos en representación del mandante. Es el contrato que permite obrar por medio de la representación. El Mandato, es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que corren por cuenta y riesgo de la primera.

La formación y validez del contrato de mandato, según la ley y la doctrina, no se exige ninguna formalidad en particular, por tal razón se dice que es un contrato consensual, pues es suficiente con el consentimiento o acuerdo o voluntades de las partes, en estos dos puntos: el mandante hace el encargo y el mandatario lo acepta; por lo que se dice que para que nazca el contrato de mandato el encargo debe ser aceptado de manera que se reputa perfecto por la simple aceptación del mandatario, por el solo acuerdo de ambas partes, pudiendo dicha aceptación ser expresa o tácita, según dispone el art. 1884 C.C.

Con relación al objeto del mandato, debe recaer exclusivamente sobre actos jurídicos que deben ser posibles, lícitos y de tal naturaleza que puedan ejecutarse por el mandatario, a quien se le encarga, ordena, manda la ejecución de un negocio, siempre y cuando no se oponga a las leyes.

Así es como el art. 1878 CC, establece que, los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, se sujetan a las reglas del mandato, como válidamente lo afirma el impetrante; no obstante, es de considerar que dentro del mandato civil en general, se encuentran entre otros, el mandato para procurar, por el cual se representa al mandante en sede judicial, el mandato o poder especial para realizar un encargo especialísimo, como el de vender; y el mandato de administración, el cual no confiere naturalmente al mandatario la facultad de efectuar sino actos de administración conforme lo indica el art. 1982 C.C.

5. En el caso de mérito, consta a [...], de la pieza principal, un poder general judicial y administrativo con cláusula especial, otorgado por el señor [...], a favor de la señora [...], en el cual, dentro de las facultades conferidas a la mandataria, textualmente dispone:

[...] I) CLAUSULA JUDICIAL: 1) Para que represente Judicial y Extrajudicialmente en todas los asuntos que de alguna manera tuviere interés, facultándole para iniciar, seguir y fenecer toda clase de juicios, diligencias varias y gestiones ya sea en materia Civil, Constitucional, Penal Laboral, de Inquilinato, Administrativa, Mercantil y de Tránsito y de cualquier otra naturaleza que fueren ya sea pendientes y futuros; 2) Para que intervenga en su nombre y representación como actor, como demandado, o en otras calidades ante toda oficina, autoridad

o tribunal de la República, todas las instancias, incidentes o recurso, sean ordinarios o extraordinarios, inclusive en el de casación, los cuales podrán interponer, desistir o concluir; [...]" (sic)."

LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y LA DEFENSA JURÍDICA DE LAS PARTES, AMBAS DEBEN SER CONFIADA Y EJERCIDAS POR UN ABOGADO

"6. De lo expuesto, se extrae que la intención del mandante o comitente, era no solo que la señora [...], lo representara como parte material en sede judicial, sino que le confirió facultades dirigidas a su defensa técnica y representación judicial, las cuales son compatibles con lo dispuesto en el art. 67 CPCM.

No obstante lo anterior, de lo expuesto por el recurrente en cuanto a que dicha disposición contempla dos funciones, la representación judicial y la defensa jurídica de las partes, ambas deben ser confiada y ejercidas por un abogado, puesto que dicho artículo es claro al establecer que en los procesos civiles y mercantiles, será preceptiva la comparecen por medio de procurador, nombramiento que habrá de recaer en un abogado de la República.

7. Tal situación, resulta más evidente cuando el mandante separa la representación como parte material y la representación por postulación, establecido en el numeral 1 y 2 del romano uno del citado poder; aunado a ello, en el numeral 3, se consignó lo siguiente:

"[...] 3) Para que al actuar en su nombre y Representación pueda en materia Civil y Mercantil conciliar, desistir y allanarse, sin conferir más facultades que las mencionadas, todo de conformidad al artículo sesenta y nueve del Código de Procedimientos Civiles y mercantiles, ya que el otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad y no se presume la existencia de facultades no conferidas explícitamente; [...]" (sic). [...]

Lo anterior, reafirma el hecho que el mandante otorgó y confirió a la apoderada primigenia, facultades para que lo representara judicialmente, ejerciendo la defensa técnica de conformidad con el art. 67 CPCM, por lo que, no cumple con la exigencia legal, en tanto que, no es abogada, tal como lo ha expresado el impetrante en el recurso de mérito.

Debe tenerse en cuenta que, la capacidad procesal hace referencia a la aptitud que debe tener la persona que comparece al proceso por sí mismo y que existe cuando se presentan ciertas circunstancias intrínsecas al mismo arts. 59 y siguientes CPCM."

LA POSTULACIÓN ES UNA FACULTAD DE LOS ABOGADOS PARA REALIZAR PETICIONES JURÍDICAMENTE RELEVANTES, COMO REPRESENTANTE DE LAS PARTES O ASISTIENDO A ÉSTAS

"En cambio, la postulación es una facultad de los abogados para realizar peticiones jurídicamente relevantes, como representante de las partes o asistiendo a éstas. Se fundamenta en que en la realización de los actos procesales, debe intervenir un técnico que conozca la manera de desarrollar el proceso para evitar omisiones y errores.

De manera que, la postulación es distinta a la capacidad procesal, porque una persona con capacidad procesal no puede siempre gestionar por sí misma ciertos actos procesales, sin estar asesorada de un abogado.

8. En conclusión, la señora [...], al no ser abogada de la República, incumple con la condición legal contemplada en el art. 67 CPCM. Por consiguiente, no tiene facultades para sustituir el poder que se le confirió, en la persona del recurrente, tal como lo sostiene la Cámara, lo que hace que su razonamiento sea acertado, al haber rechazado el recurso de apelación, por falta de postulación del abogado recurrente.

Y como consecuencia de lo antes dicho, esta Sala estima que no se cometió la infracción alegada respecto de dicha disposición, y consecuentemente tampoco se vulneró el art. 18 CPCM, en tanto que se ha comprobado que la decisión adoptada por el ad *quem,* es conforme a derecho; por consiguiente, no ha lugar a casar el auto impugnado y así deberá declararse."

Sala de lo Civil, número de referencia: 172-CAC-2019, fecha de la resolución: 09/06/2020

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO

NO HA SIDO APLICADA ERRÓNEAMENTE LA NORMA LEGAL INVOCADA, LA POSESIÓN FUE EJERCIDA EN CIERTO LAPSO DEL TIEMPO POR PERSONAS QUE AÚN NO TENÍAN LA CAPACIDAD PARA EJERCER DERECHOS, NI ADQUIRIR OBLIGACIONES POR SÍ MISMAS

"4. Para el análisis de la situación planteada resulta necesario tener en cuenta los alcances del submotivo in iudicando invocado, el cual se produce, cuando el juzgador aplica la norma legal que debe aplicar al caso concreto, pero lo hace dando a la norma una interpretación equivocada.

La aplicación errónea de ley, se produce cuando el juez acierta en la selección de la norma que resuelve el caso planteado, pero se equivoca en la elaboración de sus deducciones y establece conclusiones a la norma no contenidas en ella.

4.1 El art. 2250 CC, en lo medular, establece que "El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción -extraordinaria-es de treinta años contra toda persona".

Cabe mencionar que dicha disposición legal se encuentra comprendida en el Titulo XLII Capítulo I denominado "De la prescripción en general", del Código Civil, en el cual, el art. 2231 del mismo cuerpo de leyes, establece el concepto de prescripción, así: "La *prescripción es un* modo de *adquirir las* cosas ajenas, o de *extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse* poseído *las* cosas o no haberse ejercido *dichas acciones y derechos durante* cierto *lapso* de *tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción""*

EL DERECHO A ADQUIRIR POR LA FIGURA DE LA PRESCRIPCIÓN, SE RELACIONA CON LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA POSESIÓN

"Por otra parte es necesario tener en cuenta que el derecho a adquirir por la figura de la prescripción, se relaciona con los elementos constitutivos de la posesión: el ánimo, el cual es el elemento subjetivo e interno, en el cual se infieren los actos ejecutados como señor y dueño; y, el elemento objetivo o material, la posesión, la cual está subordinada a la posesión de la cosa como tal.

Dichos requisitos ineludiblemente deben concurrir en personas con la capacidad suficiente para ejercitarlos.

Por lo tanto, la capacidad a la que se alude, es la de obrar o de ejercicio, no se requiere únicamente la capacidad jurídica, de goce o adquisitiva -la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones-, sino que es necesaria la aptitud legal de la persona para poder ejercer personalmente, por sí mismo los derechos que le competen.

Bajo dicha premisa, resulta necesario que los actos posesorios que requiere la prescripción adquisitiva, sean ejercidos por personas con capacidad de obrar, desde el inicio del plazo del referido modo de adquirir el dominio."

CAPACIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS NATURALES

"En cuanto a la capacidad de ejercicio de las personas naturales, el inc. final del art. 1316 CC, dispone: "La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra."

De ahí que, en el caso de mérito, la incapacidad de ejercicio, que concurre en la persona de las actoras mientras fueron menores de edad, es de carácter absoluto.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1318 CC, el cual expresa: "Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable".

Para el caso bajo estudio, el art. 26 CC., complementa el contenido de la anterior disposición, al regular que se considera impúber "el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce años; menor adulto, el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos".

Lo anterior se trae a colación, dado que según el cuadro fáctico de la demanda, si bien las actoras dejaron de ser impúberes, el plazo completo de treinta años que han computado a su favor, solo puede contabilizarse desde que adquirieron la mayoría de edad.

En relación con lo anterior, tal como se relacionó *ut supra,* la Cámara advirtió lo siguiente: "[...] las señores […], nacieron y crecieron en el inmueble que pretenden adquirir por prescripción, por lo que ellas, consideran que han poseído y cuidado del mismo desde hace más de treinta años, ya que la primera, nació el veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, y la segun-

da, el día veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, argumentando que desde esas fechas hasta este momento, han sido poseedoras de buena fe, del referido inmueble en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, por más de treinta años [...]" (sic).

Así las cosas, se infiere que el tiempo de la posesión continuada de cada una de las señoras […], debió ser contabilizado a partir del cumplimiento de la mayoría de edad, cuya condición en nuestro ordenamiento jurídico faculta el ejercicio válido de cualquier acto de posesión, tal como lo dejó establecido la Cámara sentenciadora.

Por lo tanto, en el caso de la […], considerando la fecha de su nacimiento, sumaría veintidós años de estar en posesión de los inmuebles, y la señora […], tendría veinticuatro años de estar en posesión de los mismos.

Además, tampoco se afirmó en la demanda, que se haya aplicado la habilitación de la edad que se regulaba en el art. 296 CC, derogado, así: "La habilitación de edad es un privilegio concedido a un menor para que pueda ejecutar todos los actos judiciales y extrajudiciales, y contraer todas las obligaciones de que son capaces los mayores de veintiún años, excepto aquellos actos u obligaciones de que la ley le declara incapaz".

Bajo dichas premisas, esta Sala concluye que no ha sido aplicada erróneamente la norma legal invocada, pues en el caso analizado, la posesión, fue ejercida en cierto lapso del tiempo de la posesión invocada, por personas que aún no tenían la capacidad para ejercer derechos ni adquirir obligaciones por sí mismas, ni por la excepción legal antes dicha, razón por la cual, no se configura el vicio que se atribuye al tribunal de alzada, quien ha interpretado correctamente dicha norma, en relación con los preceptos legales referidos a la capacidad, por lo que no procede casar la sentencia por el motivo indicado.

Finalmente, se omite la condena en costas del recurso, debido a que no hay parte contraria perjudicada con el trámite del recurso de mérito."

Sala de lo Civil, número de referencia: 300-CAC-2019, fecha de la resolución: 18/08/2020

PRESCRIPCIÓN

INTERRUPCIÓN CIVIL DE LA PRESCRIPCIÓN

"IV. Análisis del recurso por el submotivo aplicación errónea de los arts. 2242 ord. 1° y 2257 inc. 3° ambos del CC

1. El recurrente argumenta que el criterio jurisprudencia) de esta Sala que cita la jueza de primera instancia, conforme a las sentencias 170-CAM-2008, 14-CAM-2010, entre otras, establece que en procesos cuya normativa aplicable era el Código de Procedimientos Civiles derogado, se interpretaba que en el proceso ejecutivo el término de la prescripción se interrumpía con el acto del emplazamiento o su equivalente.

Dicho razonamiento obedecía a la interpretación armónica que se realizaba de los arts. 222 PrC (derogado), y 2242 CC, sobre el acto interruptivo, pues, la primera de tales disposiciones expresamente disponía que la citación o emplazamiento para contestar la demanda interrumpía la prescripción conforme al Código Civil, y la segunda, distingue tres casos en que excepcionalmente se entenderá no haber sido interrumpida por la demanda, mencionando en el primero de dichos casos, "Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal".

Sin embargo, el impetrante aclara que ese supuesto no está contemplado en la normativa Procesal Civil y Mercantil vigente, por lo que se vuelve imperativo tomar en cuenta, única y exclusivamente lo establecido en el inciso final del art. 2257 CC; es decir, que a menos que concurran las excepciones contempladas en el art. 2242 CC, el plazo de la prescripción se interrumpe con la demanda judicial.

A consideración del recurrente, la Cámara sentenciadora ha interpretado erróneamente los arts. 2242 y 2257 CC, pues considera que el lapso de la prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda seguida de un emplazamiento válido. Afirma que la intención del legislador, al establecer la prescripción extintiva como instituto fue la de dar seguridad jurídica a las personas; pero que si una demanda es presentada, y puede diferirse su emplazamiento válido indefinidamente, el fin propio de la prescripción no se cumpliría.

2. Respecto a los arts. 2242 ord. 1° y 2257 ambos CC, el tribunal ad *quem* consideró: *«[...] se vuelve* imperativo tomar *en cuenta única y exclusivamente lo establecido en el inciso final* del art. *2257 del* Código *Civil antes* citado, es decir, que a menos *que concurran las* excepciones contempladas en el art. *2242* CC, *el término* de la *prescripción se interrumpe con* la demanda *judicial [...]» (sic).*

3. La interrupción civil de la prescripción, está reglada tanto en el art. 2242 CC, como en el 2257 CC. El primer precepto se refiere a la adquisitiva, mientras que el segundo, a la extintiva.

En tal virtud, precisamente el art. 2257 CC, será el objeto principal de análisis, pues dicha norma regula la prescripción extintiva, cuyo contenido remite al art. 2242 CC, el cual textualmente establece:

"Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor.

Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aun él en los casos siguientes:

1° Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal; 2° Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia;

3° Si el demandado obtuvo sentencia de absolución.

En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda.

Tampoco la interrumpe el juicio conciliatorio"

Como se expresó anteriormente, la norma transcrita se refiere a la prescripción adquisitiva, y ha sido plenamente aplicable a la prescripción extintiva de largo tiempo, en cuanto el artículo 2257 inciso tercero CC, dispone: "Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2242".

Ahora bien, respecto a la interrupción de la prescripción, debe tenerse en cuenta que en la sentencia del recurso de Ref. 175-CAM-2019, la cual fue dictada a las once horas del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se hizo un estudio de la jurisprudencia y doctrina respecto a este tema, interpretándose, en la cual se determinó, a partir de cuándo se interrumpe la prescripción.

En la referida sentencia se concluyó, que atendiendo a lo dispuesto en el art. 2257 CC, se interrumpe civilmente la prescripción extintiva de las acciones judiciales, por la interposición de la demanda; que la ley, solo exige que la presentación de la demanda se realice dentro del plazo en que pueda hacerse valer la acción, y que no es obligatorio que la notificación o emplazamiento se realice dentro de ese plazo."

LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA INTERRUMPE LA PRESCRIPCIÓN, CON LA ACLARACIÓN DE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEBE REALIZARSE EN FORMA LEGAL

"Dicho criterio no contraviene lo dispuesto en el artículo 2242 numeral 1 CC, el cual dispone que no se puede alegar la interrupción, cuando la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal, pues dicha circunstancia, no desvirtúa la regla general del art. 2257 CC, en el que solo se exige la presentación de la demanda para que opere la interrupción, dado que notificada en legal forma, la misma surte efecto, el cual se retrotrae a la fecha de su presentación.

Asimismo, se dejó establecido en la sentencia en comento, que el primer efecto procesal de la presentación de la demanda, es dar comienzo al proceso; y, que, bajo la denominación de litispendencia, si es admitida la demanda, se despliegan todos los efectos determinados en las leyes, art. 92 CPCM.

Entre tales efectos, encontramos la perpetuación de la competencia, la prohibición de cambio de la demanda (salvo que se trate de añadir nuevas pretensiones complementarias), perpetuación de la legitimación, la prohibición de un nuevo proceso con el mismo objeto y la preclusión de los hechos, arts. 93 y 94 CPCM.

Asimismo, se despliegan efectos materiales o extraprocesales, los cuales derivan del hecho de la presentación y admisión de la demanda, según el caso, tales como: interrupción de la prescripción extintiva, constitución de la mora del deudor, la obligación de pagar intereses que no hayan sido pactados, y que el objeto de la demanda adquiere la condición de bien litigioso.

4. De ahí que, esta Sala comparte el criterio de la Cámara, que en el caso de autos, la presentación de la demanda es la que interrumpió la prescripción, con la aclaración de que la notificación de la admisión de la demanda debe haberse realizado en forma legal; pero no es indispensable que la notificación se realice dentro del plazo que pueda estar pendiente para que opera la prescripción, pues, el acto de la notificación, no está dentro de las facultades del demandante, por lo que no debe cargársele a esa parte procesal, la responsabilidad de que se realice tal notificación en tiempo.

Por las razones antes expuestas, esta Sala concluye que no se configura la infracción de ley denunciada, consistente en la aplicación errónea de los arts. 2242 ord.1° y 2257 ord. 3° ambos del Código Civil, y por ende, no procede casar la sentencia impugnada y así debe declararse."

Sala de lo Civil, número de referencia: 44-CAM-2019, fecha de la resolución: 18/08/2020

PRETENSIÓN PROCESAL

EL ARTÍCULO 90 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, CUANDO MENCIONA OTRA CLASE DE SITUACIONES JURÍDICAS, SE REFIERE A CUALQUIER OTRA SITUACIÓN JURÍDICA EN RELACIÓN CON LAS PRETENSIONES DE MERA DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA O ALCANCE DE UN DERECHO O UNA OBLIGACIÓN

"1. Inicialmente, es de acotar, que con base en la Constitución y los principios procesales establecidos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, es que le asiste a los tribunales de justicia la facultad de rechazar una demanda si esta no cumple con los requisitos de ley; es decir, la garantía de audiencia y acceso a la justicia, no contiene una obligación per *sé* de admitir todas las demandas, o como en este caso, las solicitudes recibidas.

Además, es una de las obligaciones del juzgador, verificar un análisis de procedencia en cuanto a los aspectos formales y los requisitos que tienen que ver con el fondo de lo reclamado; es decir, la posible existencia de defectos en la pretensión que vuelva a la misma inviable al grado que no prosperaría en ese proceso, tal como establece el artículo 277 CPCM.

2. Así las cosas, los impetrantes alegan que la Cámara aplicó indebidamente el artículo de la improponibilidad, debido a que dicho tribunal realizó una interpretación errónea del artículo 90 CPCM, pues según ellos, la pretensión puede, entre otras, consistir en "otras situaciones jurídicas".

3. Ante tal alegato, esta Sala advierte, que el referido artículo 90 CPCM, nos habla de las clases de pretensiones, mencionando primeramente las de **mera declaración** de existencia o alcance de un derecho, obligación o cualquier otra situación jurídica; luego, la **declaración de condena** al cumplimiento de determinada prestación; continuando con las pretensiones de **constitución, modificación o extinción** de actos o situaciones jurídicas; también están, las **de ejecución** de lo dispuesto en los títulos establecidos por la ley, la **adopción de medidas cautelares,** y cualquier otra **clase de protección** expresamente prevista por la ley.

4. Al analizar el libelo recursivo, este tribunal denota que los impetrantes no han sido concretos al exponer a cuál de las clases de pretensión pertenece, ya que solamente mencionan que puede encajarse en "otras situaciones jurídicas", lo que nos lleva a concluir que yerran en tal afirmación, porque esa parte del primer inciso del artículo dicho, se refiere a cualquier otra situación jurídica en relación a **las pretensiones de mera declaración** de la existencia o alcance

de un derecho o una obligación; es decir, al hablar de otra situación jurídica, el legislador no lo hace de forma aislada y amplia como quieren hacer ver los abogados recurrentes."

Sala de lo Civil, número de referencia: 5-APC-2019, fecha de la resolución: 07/07/2020

PREVENCIONES

FRENTE A LA INEXISTENTE REGULACIÓN DE LAS PREVENCIONES EN MATERIA RECURSIVA, NO SE TRANSGREDE EL ACCESO AL RECURSO POR PARTE DE LOS TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA, YA QUE NO OBSTACULIZAN CON ELLO EL EJERCICIO DEL DERECHO

"5. Por otra parte, el impetrante en el recurso de casación, específicamente en la pág. [...], alude que la Cámara al comprender los vicios alegados en el recurso de apelación, cuestionó la finalidad asignada a cada uno de los motivos, de impugnación; que frente a ese defecto, de conformidad a los arts. 2 Cn, 1, 2, 14 y 18 del CPCM, que respectivamente regulan el derecho a la protección jurisdiccional, principios de dirección y ordenación del proceso; dicha Cámara debió prevenir a los apelantes, a fin de subsanar la finalidad perseguida.

Al respecto, esta Sala, trae a colación el precedente bajo referencia 258-CAC-2018, de las diez horas cuarenta y siete minutos del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se sostuvo lo siguiente:

«[...] Cabe destacar, a manera de ejemplo, en cuanto al tema de las prevenciones reguladas en la derogada Ley de Casación, un precedente jurisprudencia) de la Sala de lo Constitucional, proveído en un proceso de amparo bajo referencia 51-2011, de las diez horas diez minutos del día quince de febrero de dos mil trece, en el cual se expresó lo siguiente [...] debe señalarse que si bien el art. 12 de la Ley de Casación dispone claramente la posibilidad de efectuar una prevención cuando se hubieran incumplido las formalidades contenidas en el art. 10 de la misma ley, especialmente (aunque no exclusivamente), cuando hubiera insuficiencia de copias del recurso presentado, esta es una potestad conferida a la Sala de lo Civil como directora del recurso de casación sometido a su conocimiento y, por consiguiente, el relacionado tribunal, en ejercicio de sus competencias, está facultado para efectuar prevenciones cuando lo considere procedente [...] En ese sentido, la Sala de lo Civil, en ejercicio de su facultad de interpretación de las disposiciones que el legislador establece para la sustanciación del recurso de casación, es la encargada de analizar cuándo un caso objeto de su conocimiento se ha admitido en forma indebida, estando, por consiguiente, facultada legalmente para desestimarlo según el art. 16 de la Ley de Casación [...] En consecuencia, el haber omitido efectuar una prevención de la naturaleza apuntada en el transcurso del trámite del recurso, no implica de parte de la autoridad demandada una afectación al derecho a recurrir de la parte actora, sino que, por el contrario, reafirma la idea de que la interpretación y aplicación de las disposiciones que regulan los presupuestos y

requisitos establecidos por el legislador para la válida promoción de los medios impugnativos corresponde a la jurisdicción ordinaria Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, se concluye que, en este caso concreto, la declaratoria de inadmisibilidad de la Sala de lo Civil, emitida sin la realización de una prevención que permitiera a la parte recurrente corregir la irregularidad formal detectada, no vulneró el derecho a recurrir de esta [...]» (sic).

De manera que, frente a la inexistente regulación de la prevención en materia recursiva, no se transgrede el acceso al recurso por parte de los tribunales de segunda instancia, ya que no se obstaculiza con ello el ejercicio del derecho, lo cual sí tiene relevancia jurídica cuando se limita de forma irrazonable o por excesos interpretativos al analizar los presupuestos o requisitos de admisión del recurso."

Sala de lo Civil, número de referencia: 388-CAC-2019, fecha de la resolución: 26/11/2020

PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA

SIN MODIFICAR LOS HECHOS PLANTEADOS COMO PRESUPUESTOS NORMATIVOS, ALEGACIONES O INTERPRETACIONES EXPUESTOS EN EL RECURSO; EL JUZGADOR DEBE VALERSE DEL CONOCIMIENTO EN EL DERECHO PARA MODIFICAR O SUBSANAR AQUELLAS OMISIONES EN LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, INCLUSIVE, EN LA CORRECCIÓN DE ERRORES JURÍDICOS

"3. Infracción de los arts. 218 inciso 3° y 14 inciso 1° parte final ambos del CPCM.

El art. 218 inciso 3° dispone lo siguiente: "(...) Sin alterar la pretensión, y con respecto a los hechos alegados por las partes como base de sus causas a pedir, el juzgador podrá emplear los fundamentos de derecho o las normas jurídicas que considere más adecuadas al caso, aunque no hubieran sido invocados por las partes."

El art. 14 inciso 1° parte final CPCM, desarrolla el principio de dirección y ordenación del proceso, el cual preceptúa a la letra: "(...) En consecuencia, deberá conducir los procesos por la vía procesal ordenada por la ley, no obstante que la parte incurra en error. (...)"

3.1 Esta Sala advierte que el tribunal de segunda instancia, fundó su resolución en la falta de correlación entre lo expuesto en la parte expositiva del recurso de apelación y lo pedido en el petitorio del mismo, pues tal como se relacionó *ut supra,* la parte demandada-apelante habla de prescripción de la acción, pero en su petitorio jamás solicita se declare prescrita la acción, asimismo que habla de legitimación, falta de ejecutividad del documento y de falta de ejecutividad del mismo, pero en ningún momento solicita la declaratoria de la improponibilidad de la demanda, sino que solo se limita a solicitar sea declarada sin lugar la pretensión, es decir, que no tiene ninguna congruencia el petitorio con los puntos apelados.

3.2 Por su parte el recurrente considera que los arts. 218 inciso 3° y 14 inciso 1° parte final CPCM, constituyen concreciones del principio *iura novit curia,* el cual habilita al juzgador a emplear los fundamentos de derecho que se consideren más adecuadas al caso, aunque no hubieran sido invocados por las partes, pues a su juicio, un recurso no posibilita la alteración de hechos y pretensiones planteadas en un proceso por las partes.

En ese sentido apunta el recurrente, que si la Cámara ad quem considera, que lo que pidió es la improponibilidad de la demanda y no la absolución, con base al referido principio estaba obligada a emplear los fundamentos de derecho relativos a la improponibilidad, aunque no hubieren sido invocados en el recurso.

En consonancia con lo anterior, refiere el recurrente, que el art. 14 inciso 1° parte final CPCM, prescribe que el juez deberá conducir los procesos por la vía procesal ordenada por la ley, no obstante que la parte haya incurrido en error. De ahí que, el doctor […], se remita a jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, relativa a tal principio para sostener que, el juzgador debe de superar cualquier clase de rigidez o formalismo técnico a fin de conservar el respeto del debido proceso y evitar que éstos se conviertan en una finalidad en sí mismos, y por tanto, el objeto del principio iura novit *curia,* es facultar al juez de suplir los errores pertenecientes a derecho, siempre que haya cumplido con los requisitos mínimos exigidos por la ley.

3.3 Sobre las normas que se estiman inaplicadas en el auto definitivo apelado; es decir, los arts. 218 inciso 3° y 14 inciso 1° parte final CPCM, éstos desarrollan el principio *iura* novit *curia,* que para el caso, no es más que la facultad en que se encuentra el juzgador, de corregir los fundamentos jurídicos defectuosos invocados u omisiones jurídicas incurridas por las partes, en sus intervenciones procesales sean éstas orales o escritas; en otras palabras, tal principio conlleva a que el juez que decide determinado objeto litigioso, supla errores o deficiencias de las partes si pertenecen al Derecho, más no podrá corregir o suplir las mismas, en los hechos o -en su caso- en las pruebas presentadas; pues ello indubitablemente constituiría un exceso en la función jurisdiccional en soslaye del principio legal de aportación, regulado en el art. 7 CPCM, y el principio de congruencia contemplado en el art. 218 CPCM derivado del derecho de petición y respuesta previsto en el art. 18 Cn.

El principio procesal de congruencia se ve informado por el *iura* novit curia, lo cual implica que el órgano jurisdiccional se encuentra legalmente habilitado para corregir fundamentos jurídicos citados erróneamente, o bien, suplir -para el caso-, las omisiones a los mismos, de forma que, es al juzgador, a quien le corresponderá definir, cuáles son las normas aplicables al caso en concreto, sin sobrepasar los límites impuestos por la congruencia, dicho en otras palabras, el juzgador, a partir de los hechos narrados por las partes, tendrá que determinar el razonamiento jurídico en el que encajen los mismos.

En consecuencia, sin modificar los hechos planteados como presupuestos normativos, alegaciones o interpretaciones expuestos en el recurso, el juzgador debe valerse del conocimiento en el derecho para modificar o subsanar aquellas omisiones en la fundamentación jurídica que se dejó relacionada por la parte

recurrente, inclusive, en la corrección de errores jurídicos, de manera que, tal deficiencia no sea óbice para dar acceso al derecho a recurrir y a la jurisdicción, y así, sea factible conocer de los puntos apelados, siempre y cuando no implique conocer en exceso de lo pedido o en completa ausencia del derecho."
Sala de lo Civil, número de referencia: 237-CAM-2019, fecha de la resolución: 24/06/2020

PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE DESTITUCIÓN DEL INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

LA SENTENCIA DICTADA EN LOS PROCESOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY REGULADORA DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS NO COMPRENDIDOS EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA, NO ADMITE RECURSO DE CASACIÓN

"El recurso de mérito, ha sido interpuesto en relación a una sentencia dictada por el tribunal ad *quem,* en un proceso de autorización de despido de cargo o empleo, mismo que ha sido llevado a cabo bajo el imperio de la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa, cabe observar que en este tipo de casos se pretende que la sede judicial de primera instancia, autorice a la sección de la administración pública de que se trate, a que despida a un empleado que haya sido contratado para prestar servicios técnicos o profesionales en virtud de lo prescrito en el art. 83 de las Disposiciones Generales de Presupuestos.

Es menester señalar que la ley adjetiva que regula el caso en cuestión, tiene por finalidad regular un proceso garante de los derechos constitucionales, por medio del que se pueda obtener, cuando las circunstancias así lo exijan, la autorización necesaria para llevar a cabo el despido de un empleado público que debido a la modalidad bajo la que fue contratado, se encuentre excluido no solo de la Carrera Administrativa en base al art. 4 de la Ley del Servicio Civil, sino también del espectro procesal del Código de Trabajo, con base en el art. 2 del mismo.

En cuanto a la procedencia del recurso bajo examen, es necesario remarcar que en la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa, no se estableció que se confiera recurso de casación, a las partes dentro de los procesos que en base a la misma se lleven a cabo, ya que, el art. 5 de dicho cuerpo normativo brinda el único recurso disponible a las partes, es decir el de revisión y en cuanto a la resolución que lo dirime, el art. 6 inciso 2° dispone: "De lo resuelto por la Cámara de lo Civil no habrá recurso alguno, ni corresponderá su conocimiento a la Jurisdicción contencioso administrativa".

Motivo por el que, el presente recurso deviene en improcedente, por no encontrarse dentro de la legislación adjetiva correspondiente, norma que le brinde a las partes el recurso ordinario de apelación y mucho menos el extraordinario de casación.

Finalmente, con base en el art. 220 inc. 2° CPCM, se deja constancia que la presente resolución, en cuanto a las razones de improcedencia del recurso de casación, ha sido formada con los votos de los magistrados licenciado Oscar Alberto López Jerez y doctor Ovidio Bonilla Flores, no así por parte de la magistrada doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, quien razonará su voto, por no estar de acuerdo con la fundamentación de la misma, por considerar razones distintas de improcedencia, relativas a la competencia de esta Sala para conocer de las mismas, por lo que expone a continuación su voto razonado."

Sala de lo Civil, número de referencia: 93-CAC-2019, fecha de la resolución: 29/09/2020

PROCESO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

AUSENCIA DE INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LEY, CONSIDERANDO QUE NO SE TRATA DE UNA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, PUES LA PARTE ARRENDATARIA AL SUSCRIBIRLO CONSINTIÓ LA TERMINACIÓN CON EL PREAVISO DE LA NO PRÓRROGA DEL MISMO

"3. El concepto de la infracción

Previo se advierte que el recurrente denomine el motivo de la casación como interpretación errónea de ley, el mismo corresponde la aplicación errónea, en el cual se examinan, precisamente, los errores de interpretación.

3.1 A criterio del impetrante, la infracción se sustenta en que, la Cámara de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, aplicó erróneamente el art. 1416 CC, puesto que el texto de la cláusula está claro, cuando dice que serían los contratantes, de común acuerdo, los que deberían darlo por terminado y no una de las partes, como equivocadamente lo ha interpretado la honorable Cámara.

Además, el recurrente argumenta que la interpretación errónea hecha por la Cámara, en su sentencia, respecto de la cláusula segunda del contrato, es que considera que dicha cláusula le confiere poder a la parte arrendante, para dar por terminado unilateralmente el contrato, y menciona, que no es necesario que esa decisión (de dar por terminado) sea de común acuerdo entre las partes.

Y continúa sosteniendo que, el art. 1416 CC, es el fundamento de la cláusula II del contrato, cuando de su texto dice: "(...) y si no mediare aviso por escrito de dos meses antes de su vencimiento de parte de los contratantes de darlo por terminado (...)" (sic); por lo que, debe interpretarse, que ambas partes, tienen que ponerse de acuerdo dos meses antes del vencimiento para dar por terminado el contrato.

En otras palabras, el impetrante considera que la terminación del contrato de arrendamiento, no está sujeto a la voluntad de una de las partes contratantes.

4. En virtud de los argumentos dados por la Cámara de mérito y los suministrados por el recurrente, esta Sala advierte lo siguiente:

4.1 Que la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y la sociedad MAVERICK SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, suscribieron un contrato de arrendamiento, en documento privado autenticado el día uno de marzo de dos mil trece, cuya duración fue determinada para el plazo de un año, prorrogable, contado a partir del día del otorgamiento, por el precio de "cuarenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América", pagaderos por medio de doce cuotas mensuales, anticipadas, vencidas y sucesivas de "tres mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América", los días uno de los meses comprendidos dentro del plazo o sus prórrogas.

Se estipuló en la cláusula SEGUNDA, que el plazo podría prorrogarse por períodos de un año, siempre y cuando los pagos fueren puntuales y se cumplieren todas las cláusulas del contrato, y si no mediare aviso por escrito de dos meses antes de su vencimiento, de parte de los contratantes de darlo por terminado.

Que el día uno de diciembre de dos mil quince, se dio aviso a la sociedad arrendataria de la no renovación del contrato de arrendamiento, por medio de carta firmada por el gerente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, la que fue recibida por el gerente financiero de la sociedad arrendataria, con lo que se cumple el requisito del aviso con dos meses antes del vencimiento de la tercera prorroga, es decir que el contrato terminaría el uno de marzo de dos mil dieciséis.

Así las cosas, la parte actora pidió la terminación del contrato de arrendamiento por el vencimiento del plazo, cabe destacar que la parte actora, previo a la tramitación del presente proceso, reconvino judicialmente a la arrendataria a restituir el inmueble objeto del arrendamiento.

La sociedad arrendataria considera que la arrendante, ha incumplido la cláusula segunda del contrato al haberle dado por terminado unilateralmente al mismo.

4.2 En virtud de lo anterior, la norma señalada como objeto de errónea aplicación, que se traduce a cuestiones de interpretación, ha sido el art. 1416 CC, en el que subyace el principio de irrevocabilidad contractual, y regula que: "Todo contrato legalmente celebrado, es obligatorio para los contratantes, y sólo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de éstas o por causas legales".

Respecto del motivo bajo estudio, esta Sala en su jurisprudencia ha dicho que: "[...] deben atribuirse errores sustanciales sobre el significado de una expresión contenida en las disposiciones jurídicas, ya sea que se ubiquen en la actividad interpretativa para atribuir dicho significado, o justamente que el yerro resida en esa conclusión -producto-. En otro orden, puede suceder que en dicha labor de interpretación se asignen efectos o consecuencias que la norma no causa, que le son contrarios o extraños a su contenido [...]". *(Ref. 127-CAC-2016. Sentencia de casación civil de las nueve horas cuarenta minutos del día veintiocho de octubre de dos mil dieciséis).*

4.3 En este caso, el problema jurídico radica en la interpretación del prenotado art. 1416 CC, cuyo enunciado interpretado -producto- significa, que la fuerza obligatoria del contrato no se limita a esa fórmula normativa de obligación, sino que "cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de éstas o por causas legales", incluyéndose entre las causas que la ley autoriza "la terminación unilateral".

En virtud de lo anterior, esta Sala considera que en dicha norma se enmarcan otras figuras cercanas a la que fue incluida, como (i) la resolución y terminación del contrato conforme el art. 1360 CC, (ii) el retracto o desistimiento, por ejemplo, el que se da en la compraventa -art. 1629 inc. 2.º CC-, o en el contrato de obra material -art. 1787 inc. 2.º CC-, (iii) la renuncia, que se confiere en el mandato -art. 1923 ord. 4.º CC-, (iv) la revocación, nuevamente en el mandato -art. 1923 ord. 3. CC.-, o en la donación según el art. 1122 CC, y en el testamento tal como dispone el art. 998 CC, (y) la rescisión del art. 1438 ord. 7.º, en relación al 1551 CC; finalmente, (vii) el mutuo disenso o resciliación del art. 1438 inc. 1.º CC."

CONTRATO DE "EJECUCIÓN SUCESIVA"

"Ahora bien, esta Sala ha sostenido en su jurisprudencia, y asimismo la retoma la Cámara sentenciadora, que estamos en presencia de un contrato de "ejecución sucesiva", con prestaciones que se producen escalonadamente en el tiempo, cuya duración puede ser definida o indefinida.

Por otro lado, dentro del contrato de mérito se estipuló una cláusula que confieren poder a ambas partes contratantes, a efecto de dar por terminado de forma unilateral el mismo.

Así, pues, en la cláusula segunda se estableció que el plazo del contrato es de un año, el cual podrá prorrogarse por períodos de un año, siempre que se configuren dos condiciones de aplicación, que son: a) pagos puntuales y cumplimiento de todas las cláusulas del contrato; y, b) si no mediare aviso por escrito de dos meses antes de su vencimiento de parte de los contratantes de darlo por terminado; por lo que dicha cláusula permite la terminación del contrato, pero con la obligación del preaviso.

Asimismo contiene la típica condición resolutoria, cuya consecuencia es condicional, precisamente, por la hipótesis de incumplimiento del pago o de las demás clausulas.

Por consiguiente, se considera, que no tendría objeto el preaviso de la no prórroga del contrato, si tuvieran que ponerse de acuerdo para darlo por terminado.

El sustento de la cláusula en comento, a criterio del *ad quem*, son los principios de autonomía de la voluntad, la libertad de contratación y la buena fe contractual, concluyendo que en el contrato de mérito, la cláusula en comento le confiere poder a la parte arrendante para dar por finalizado el contrato de arrendamiento, no siendo necesario el común acuerdo, ya que no puede limitarse el derecho de propiedad.

4.4 Esta Sala considera, que el fundamento esgrimido por la Cámara es pertinente, pues prácticamente no hay impedimento alguno de dar por finalizado

el contrato de arrendamiento, en virtud de que las partes de muto acuerdo acordaron al suscribir el contrato, dar un preaviso dos meses antes del vencimiento, de la intención de no prorrogarlo, por lo que se ha respetado la voluntad de las partes, pues así fue estipulado.

En consecuencia, no puede afirmarse que es una terminación del contrato de arrendamiento, de forma unilateral, ya que la parte arrendataria, consintió la terminación del contrato al suscribir el contrato objeto de este proceso, con el preaviso de la no prórroga del mismo.

Por lo tanto, no se configura el vicio atribuido, encontrándose debidamente fundamentada la interpretación del art. 1416 CC, que incluye a la terminación unilateral del contrato por la sola voluntad del arrendante, en cuanto a no prorrogar el mismo, bastando el previo aviso de conformidad a lo estipulado en el contrato, tal como ya se dijo, no siendo procedente casar la sentencia de que se ha hecho mérito. [...]"

AUSENCIA DE LA INFRACCIÓN ALEGADA RESPECTO DE LA INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1435 INCISO 1º DEL CÓDIGO CIVIL, PUESTO QUE LA CÁMARA HIZO UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LO PACTADO POR LAS PARTES CONTRATANTES

"VIII. Análisis del motivo de fondo: inaplicación del art. 1435 inc. 1º CC.

1. La precitada disposición dice: "Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad"

2. El concepto de la infracción

2.1 Aduce el recurrente que dicha norma fue infringida por el tribunal *ad quem*, en tanto que de haber aplicado lo dispuesto en tal precepto, hubiese entendido el contrato en diferente forma dando la interpretación correcta a la cláusula segunda, en tanto que los contratantes han sabido diferenciar cuando las acciones o decisiones que afecten al contrato se deben tomar en forma conjunta o individual, y así para dar por terminado el plazo del contrato, se estipuló en la cláusula segunda, que debería ser por ambas partes, es decir por mutuo consentimiento; y cuando fuera para desistir del contrato, claramente se estipulo que lo haría la parte arrendataria, salvo acuerdo entre partes.

Que al pactar el dar por terminado el contrato por mutuo consentimiento, era para salvaguardar los derechos de los subarrendadores.

Para el recurrente, lo anterior demuestra la necesidad de relacionar las cláusulas unas con las otras con el fin de dar sentido a cada una en relación a todo el contrato, por lo que de haberse aplicado esta norma, se hubiese entendido que la terminación del contrato debería ser de común acuerdo y no de forma unilateral.

3. De la lectura del contrato, los argumentos dados por la Cámara de mérito y los suministrados por el recurrente, esta Sala advierte lo siguiente:

3.1 El art. 1435 CC., impone la interpretación armónica de las cláusulas contractuales; es pues que las cláusulas del contrato deben, interpretarse de manera que haya entre todas ellas armonía, así por ejemplo: la cláusula 4) de un contrato debe interpretarse en forma tal que esté en armonía con la cláusula 3).

Del examen de las cláusulas contractuales en todo su contexto, se colige, que no es cierto lo afirmado por el recurrente, respecto a que los contratantes han sabido diferenciar cuando las acciones o decisiones que afecten al contrato se deben tomar en forma conjunta o individual.

3.2 Para el caso de mérito, la cláusula segunda -que es la controvertida- establece la estipulación del plazo y sus posibles prórrogas, pero de la lectura se comprende que no son automáticas, sino bajo dos condiciones ya explicadas en esta sentencia; y la cláusula décima, que es la que el recurrente expone como ejemplo de armonía, se refiere a que en caso de desistimiento de la arrendataria, tendría una penalidad, que consiste en el pago del canon, de lo que reste del plazo, salvo que hubiere un acuerdo entre las partes; debiendo entender este último acuerdo de las partes únicamente para el pago de la penalidad y no para el desistimiento.

De manera que, la armonía a que se refiere la norma en discusión, es que, si en el contrato se ha regulado una cláusula que establece un plazo determinado para la terminación del contrato, todas las demás cláusulas que hagan referencia a: incumplimiento, terminación por diferentes razones, subarrendamiento, desistimiento del contrato, deberán tomar en cuenta el plazo ya convenido; así por ejemplo en la cláusula sexta del contrato de arrendamiento que discutimos, dice literalmente:

"[...] en caso de subarrendamiento, la arrendataria no podrá contratar plazos mayores a los estipulados en el contrato, y deberá pactar en los respectivos contratos de subarrendamientos, que estos se entenderán extinguidos al vencimiento del plazo [...]" (sic).

Por consiguiente, debe entenderse que la armonía radica claramente en que la cláusula sexta deberá tomar en cuenta el plazo ya estipulado y convenido voluntariamente en la cláusula segunda; es decir, no entender otro plazo; y asimismo, la cláusula novena hace referencia a que la sociedad arrendataria se obliga a entregar el inmueble en el plazo o sus prórrogas, en la misma forma que lo recibe, entendiéndose que se debe respetar el plazo de la cláusula segunda. Y así, todas esas se cláusulas que hacen referencia al plazo se entiende que comprenden tanto el plazo original como sus prórrogas.

Ahora bien, en todo el recurso el impetrante es bastante enfático en que el contrato de arrendamiento, objeto de este proceso, únicamente puede cesar sus efectos por mutuo consentimiento.

Dicha afirmación ha sido mal interpretada por el recurrente, ya que de su lectura, se deduce que no es más que una cláusula que establece el plazo y prórroga del contrato; pero, cuando el impetrante expresa que para dar por finalizado el contrato debe ser de muto acuerdo, basado en la referida cláusula, se equivoca, ya que la misma expresamente dice que el plazo del contrato podrá prorrogarse por periodos de un año, siempre y cuando los pagos fueren puntua-

les, se cumplan las condiciones del contrato y no mediare aviso por escrito de dos meses antes de su vencimiento de parte de los contratantes de darlo por terminado, lógicamente basado en "el principio de la autonomía de las partes", se refiere a que unilateralmente puede cada contratante al vencimiento del plazo no estar en la disposición de querer continuar con el arrendamiento. Y "el muto consentimiento" que tanto menciona, se refiera al mutuo disenso o resciliación del contrato, situación totalmente diferente a la argumentada.

En ese sentido, esta Sala considera que no se configura tampoco la infracción respecto a la inaplicación del art. 1435 inc 1 CC, en virtud que la *ad quem*, hizo una correcta interpretación de lo pactado por las partes contratantes, siendo esa la voluntad plasmada en el referido contrato, por lo que no habrá lugar a casar por el motivo denunciado, lo que así habrá de declararse."

Sala de lo Civil, número de referencia: 120-CAC-2019, fecha de la resolución: 07/07/2020

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LOS PROCESOS QUE CONOCE ESTA INSTITUCIÓN NO GENERAN EL RIGOR REQUERIDO PARA HACERLAS VALER EN UN PROCESO CUYA PRETENSIÓN SEA INDEMNIZATORIA

"5. Llegados a este punto, no obstante las carencias técnicas observados en el libelo recursivo, es imperioso pronunciarse sobre la siguiente afirmación hecha por el agraviado: "[...] A este respecto cabe señalar nuevamente, que la honorable Cámara, ha omitido mencionar en qué disposición legal fundamenta tal afirmación, y ante dicha omisión la honorable Cámara, ha incumplido a una decisión fundada, principios básico del debido proceso legal y garantía de NO ARBITRARIEDAD [...]" (sic).

Y es que, en resumen, ese es el verdadero motivo del rechazo de la pretensión de daños planteada; pues la Cámara en manera alguna niega el origen constitucional de la Procuraduría, ni pone en duda las funciones encomendadas a la misma en su ley de creación; tampoco que el documento en que consta la recomendación de la misma, sea un instrumento público; pero ello no es suficiente para dar por establecido que la conclusión a la que llega, luego de todos los procedimientos que realiza, plasmada en la recomendación, tenga fuerza vinculante.

Al respecto, el artículo 32 LPDDH, establece: "Cuando en la resolución se hicieren recomendaciones a ser cumplidas por la persona, autoridad o entidad responsable; si en el plazo razonable señalado por el Procurador no se tomaren las medidas o no se informare de las razones para no adoptarlas, emitirá censura pública, sin perjuicio de hacer del conocimiento de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del caso y las recomendaciones sugeridas".

En tal sentido, de la disposición transcrita, se colige que las recomendaciones dadas en los procesos de que conoce la Procuraduría para la Defensa de los

Derechos Humanos, no generan el rigor requerido para hacerlas valer en un proceso como el que nos ocupa, ya que la consecuencia prevista por el legislador, ante el incumplimiento de las sentencias, consiste en emitir una censura pública.

Debe tenerse en cuenta que dicha censura pública es la última ratio que posee la PDDH, para tratar de hacer cumplir sus decisiones, pero con un carácter moral, ello debido a la falta de coercibilidad para ejecutar una resolución de responsabilidad emitida por dicha institución, y que tenga por objeto restituir o indemnizar a la víctima del derecho que le ha sido violado.

No se trata por tanto de la fuerza o un valor vinculante de las resoluciones de responsabilidad emitidas por la referida institución, sino que la única potestad prevista en la ley, radica en un llamamiento público para el cumplimiento de los proveídos por el procurador, lo cual excluye el carácter coercitivo y sancionatorio para materializar las resoluciones en comento, puesto que se reitera, en el art. 33 LPDDH, que el procurador podrá publicar la resolución, y si lo estimare conveniente emitir censura pública, ello ante la imposibilidad de hacer valor sus resoluciones. Así pues, no se configura la infracción alegada sobre la omisión de un fundamento legal, debido a que no existe una disposición jurídica que haya sido inobservada para acceder a lo solicitado.

No obstante lo anterior, la Cámara a folios [...] vuelto del auto definitivo de mérito, en el punto 2.7 hace referencia al inciso primero del artículo 172 Cn, que determina que la Corte Suprema de Justicia, las Cámara de Segunda Instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias, integran el Órgano Judicial, al cual le corresponde exclusivamente la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, así como en las otras que determine la ley.

Lo anterior denota una fundamentación coherente al ordenamiento jurídico, la cual tiene conexión con lo antes apuntado, relativo a la falta de coercibilidad de las resoluciones de la PDDH, puesto que dicho atributo ha sido reconocido por el constituyente exclusivamente para los órganos jurisdiccionales, y no hay ni siquiera indirectamente un supuesto en el que los proveídos de la referida institución, constituyan un título de ejecución para garantizar la eficacia de los mismos, o que sirvan de fundamento para una pretensión indemnizatoria.

En consecuencia, debe concluirse que el documento que acompaña la demanda de mérito, no es un instrumento idóneo ni apto para hacer efectivo un reclamo de daños como el pretendido, ya que tal como se ha dicho, no hay previsión legal que conceda acceso a la jurisdicción para ejecutar las resoluciones de la PDDH.

Por consiguiente, siendo que la razón de rechazo de la demanda de mérito, invocada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, no ha sido desvirtuada en el presente recurso, procede confirmar el auto definitivo apelado.

Finalmente, con base en el art. 220 inciso 2° CPCM, se deja constancia que la parte resolutiva de la presente providencia judicial ha sido adoptada con los votos de todos los magistrados propietarios de esta Sala. No obstante, la magistrada doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, a continuación, razonará su

voto, mediante el cual considera que la motivación para confirmar el auto definitivo impugnado en apelación, debió ser diferente a la expuesta en la presente resolución."

Sala de lo Civil, número de referencia: 17-APC-2019, fecha de la resolución: 18/12/2020

RECURSO DE APELACIÓN

AUSENCIA DE LAS INFRACCIONES ALEGADAS

"1. Inicialmente, es de acotar, que con base en la Constitución de la República y en los principios procesales establecidos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, es que le asiste a los tribunales de justicia, la facultad de rechazar una demanda si a su criterio no cumple con los requisitos de ley; es decir, la garantía de audiencia y el acceso a la justicia, no contiene una obligación per sé de admitir todas las demandas recibidas, no existiendo inseguridad jurídica por ello.

Además, es una de las obligaciones del juzgador, verificar un análisis de procedencia en cuanto a los aspectos formales y los requisitos relacionados con el fondo de lo reclamado; es decir, la posible existencia de defectos en la pretensión que vuelva a la misma inviable, al grado que no prosperaría en ese proceso, tal como establece el artículo 277 CPCM.

2. Esta Sala advierte, que en los motivos del recurso, el impetrante invoca dos finalidades; la primera, contenida en el literal a, de folios [...], la cual no está comprendida en el artículo 510 CPCM, puesto que el licenciado [...], expresa, que el presente recurso tiene por finalidad que la Sala revise las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de los hechos probados que se fijaron en ellas y la valoración de tales resoluciones; circunstancia que escapa a las atribuciones conferidas por dicho artículo, para este tribunal, debido a que no se está conociendo en grado de apelación de lo resuelto por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sino que, nos corresponde conocer en grado superior de lo proveído por la Cámara ad *quem.*

Además, el apelante agrega: "[...] que tales resoluciones se originan en una autoridad de rango constitucional, por lo que estamos en presencia de un documento público o auténtico, según el artículo 1570 CC [...]" *(sic).*

Sobre éstas últimas alegaciones, en cuanto a la categoría o rango constitucional de la institución y la naturaleza del documento presentado por el actor, no se advierte que la Cámara sentenciadora contradiga tales aspectos; aclarando esta Sala, que la clasificación de documentos como auténticos, a tenor del artículo 331 CPCM, ya no existe, porque con la entrada en vigencia del dicho código, se le confirió calidad de instrumento público a los expedidos por autoridad o funcionario público, en el ejercicio de su función.

En cuanto a la segunda finalidad contenida en el literal b), de folios 2 frente, del recurso de apelación, se expresa: "[...] La aplicación del derecho que resolvió las cuestiones objeto del debate; aspectos que explico en los siguientes apar-

tados: si bien es cierto, se establecen como motivos de apelación, los hechos probados que se fijaron en las resoluciones, la valoración de las pruebas; y la aplicación del criterio que resolvió las cuestiones objeto del debate, debido al tipo de resolución pronunciada no está fundamentada fehacientemente[...]"(sic).

Con relación a esta segunda finalidad, aplicación del derecho que resolvió las cuestiones objeto del debate, el apelante manifiesta que está referido a la aplicación errónea del artículo 127, e inaplicación de los artículos 331, 334 y 341, todos de CPCM; y procede a explicarlos.

3. Así las cosas, extraña a este tribunal, que invoque como agravio la aplicación errónea, es decir, se aplicó, pero de manera incorrecta, el artículo 127 CPCM, que se refiere a la finalización anticipada del proceso por existir una improponibilidad sobrevenida, circunstancia que no ha ocurrido en el proceso de marras, tal como él mismo reconoce al exponer: "[...] ante una demanda presentada el juez solo puede resolver en los siguientes sentidos: ...y 3) desecharla por improponible. En cuanto a este último punto, si bien es cierto el rechazo puede ser liminar, también puede ser in persequendi Litis, en este último caso, si bien es cierto existen razones que pueden determinar el archivo de las actuaciones sin que haya terminado el proceso (por la carencia de algún presupuesto del proceso, que hace inviable su continuación) también es cierto que dicha situación no es la que acontece en el caso de autos [...]" (sic) .

Por tanto, en el caso analizado, la Cámara no aplicó el art. 127 CPCM, en consecuencia no se configura la infracción alegada.

Por otra parte, igualmente que en el párrafo anterior, es incorrecto que el apelante invoque motivos que justifiquen sus agravios, alegando finalidades como la aplicación del derecho que resolvió las cuestiones objeto del debate, cuando él mismo expresa que en los casos en que se declara la improponibilidad, no puede entrarse a conocer el objeto del proceso. Precisamente, en el caso de autos, no se ha conocido del fondo de la pretensión, al haberse rechazado *in limine* la misma, siendo por ello que tampoco han existido hechos probados, ni valoración de pruebas sobre el objeto del debate.

4. Ahora bien, en cuanto a la inaplicación de los artículos 331, 334 y 341 CPCM, el actor-apelante expone a qué se refiere cada uno de ellos, haciendo consideraciones sobre el acceso a la jurisdicción (sic), derecho de oposición o defensa y el de aportación de pruebas; concluyendo que cuando una de las partes aporta pruebas al proceso, es obligación decidir sobre su pertinencia, utilidad y legalidad.

Debe tenerse en cuenta que no es posible atribuir una infracción de tal carácter, debido a que lo alegado es susceptible de revisión cuando hay pronunciamiento expreso en las instancias sobre dichos asuntos, pero en este caso, no se conoció del fondo del asunto planteado, puesto que se rechazó *in limine* la demanda.

De ahí que no sea congruente atribuir una infracción eventual o contingencial -que pudo darse-, sino que procede la revisión de las disposiciones legales que

tras su análisis se haya concluido aplicarlas o no, pero no por considerarse que en el caso hay suficientes elementos para decidir y por ende, que debían considerarse normas jurídicas aplicables.

Por tal razón, y dado que no se llegó a la etapa procesal en la que proceda analizar la aplicación de las normas que se consideren infringidas, no se configura la infracción alegada."

Sala de lo Civil, número de referencia: 17-APC-2019, fecha de la resolución: 18/12/2020

IMPOSIBILIDAD DE CONFIGURARSE LA VIOLACIÓN EN EL DERECHO APLICADO POR EL JUEZ, CUANDO DEL ANÁLISIS NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE INFRACCIÓN COMETIDA EN LA SENTENCIA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN

"4.2 Infracción del art. 510 ord. 3° CPCM.

Los recurrentes expresan que han cumplido con los requisitos formales, ya que en el recurso de apelación expresaron los argumentos y justificaciones por las cuales consideran que no era aplicable la interrupción de la prescripción, argumentando en dicho escrito, que los actos considerados por el a quo, para decretarla, no encajan en los motivos establecidos en los arts. 2241 y 2242 CC; y la razón del por qué no operaba dicha figura, citando como normas infringidas las ya mencionadas, por lo que sí se refirieron en el escrito de alzada, a la revisión del derecho aplicado por el a *quo,* para resolver las cuestiones objeto del debate.

En ese sentido, consideraron los recurrentes, que sí sometieron a revisión las normas que sirvieron de base a la decisión impugnada.

Al estudiar el escrito de apelación, se advierte a fol. [...] de la pieza del incidente de apelación, que los impetrantes solamente han señalado, tal como lo dice la Cámara, las normas que consideran infringidas por el a quo, pero en el respectivo análisis no especifican, el tipo de infracción que se comete en la sentencia, si es una interpretación errónea, aplicación indebida o una inaplicación de dichas normas, para su respectiva revisión.

En ese sentido, esta Sala concluye que no se configura la infracción del art. 510 ord. 3° CPCM, imponiéndose entonces, declarar no ha lugar a casar la sentencia por violación a dicho precepto legal."

Sala de lo Civil, número de referencia: 388-CAC-2019, fecha de la resolución: 26/11/2020

PROCEDE SU ADMISIÓN AL CONSTATARSE QUE LOS RECURRENTES PIDIERON QUE SE REVISARA LA FALTA DE VALORACIÓN RESPECTO DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS EN SU CONJUNTO, SIENDO QUE LA POSESIÓN NO FUE DESVIRTUADA CON LOS OTROS MEDIOS DE PRUEBA PRESENTADOS

"4.1 Infracción del art. 510 ord. 2° CPCM

Con base en lo antes dicho, al estudiar el escrito de apelación, se constató que los apelantes en los folios [...], de la pieza de segunda instancia, pidieron

que se revisara la falta de valoración respecto de todos los elementos probatorios en su conjunto, ya que la resolución se basó en la interrupción de la posesión; siendo que, la posesión en ningún momento fue desvirtuada por la prueba testimonial ni documental presentada.

Alegan los recurrentes, que existe una afectación en la sentencia dictada por el a *quo,* por la forma en la que hizo la valoración de las pruebas; específicamente al considerar interrumpida la posesión, por el hecho que la demandante permitiera al demandado, señor [...], realizar supuestas visitas a sus hijos, en el inmueble que se pretende adquirir por prescripción; tomando el aguo, esa acción como actos de señor y dueño, ya que han sido consentidos tácitamente por la demandante; sin tomar en cuenta la prueba testimonial aportada de parte de la actora en el proceso. Por lo que, consideran los apelantes, que habiéndose probado los elementos que configuran la acción de prescripción adquisitiva de dominio, no se tomó en cuenta la prueba en su conjunto.

Al respecto, es de advertir, que en vista, que el acto impugnado ha decidido la inadmisión de la apelación, no corresponde a esta Sala estudiar el fondo del asunto; es decir, no puede emitir valoración sobre si respecto del anterior argumento del impetrante le asiste la razón o no; sino que únicamente se estudia si se configuró la infracción de parte de la ad *quem,* con relación a la admisión del recurso.

Por consiguiente, esta Sala concluye que el recurso de apelación debe ser admitido, respecto a la finalidad contemplada en el numeral 2° del art. 510 CPCM; y continuar con el proceso hasta pronunciar la sentencia que ha derecho corresponda."

Sala de lo Civil, número de referencia: 388-CAC-2019, fecha de la resolución: 26/11/2020

RECURSO DE CASACIÓN

IMPOSIBILIDAD DE CASAR LA SENTENCIA AL NO DEMOSTRAR UN ERROR DE INTERPRETACIÓN, SINO DE UN SUPUESTO QUE ATAÑE A UN MOTIVO DISTINTO DEL INVOCADO

"VI. Análisis del motivo de fondo: aplicación errónea del art. 341 CPCM.

1. El art. 341 CPCM, literalmente dice: "Los instrumentos públicos constituirán prueba fehaciente de los hechos, actos o estado de cosas que documenten; de la fecha y personas que intervienen en el mismo, así como del fedatario o funcionario que lo expide.

Los instrumentos privados hacen prueba plena de su contenido y otorgantes, si no ha sido impugnada su autenticidad o ésta ha quedado demostrada. Si no quedó demostrada tras la impugnación, los instrumentos se valorarán conforme a las reglas de la sana crítica".

2. El concepto de la infracción

El impetrante, argumenta que la aplicación errónea de la norma mencionada hecha por la *ad quem,* radica en que el demandante-arrendante, para probar

que dio aviso al arrendatario de dar por terminado el contrato de arrendamiento, presentó dos documentos, uno es la fotocopia simple de carta de notificación del acuerdo del Consejo Directivo de la Caja Mutual de […]; y, dos, una fotocopia del acuerdo antes mencionado, en cuyo texto se consigna que se da por terminado el contrato de arrendamiento de parte del arrendante.

Por lo que, a criterio del impetrante, la Cámara le otorgó valor probatorio a unas fotocopias simples que no son documentos públicos ni privados, sino fotocopias que la ley no les otorga ningún valor probatorio, y que por dicha razón, la Cámara ha visto prueba donde no hay, infringiéndose el art. 341 CPCM, ya que le ha dado un alcance que no tiene al otorgarle valor a esas fotocopias simples.

En ese sentido, para el impetrante, las referidas copias no constituyen un medio probatorio para acreditar la pretensión del actor. Por consiguiente, el hecho alegado no ha sido probado, como erróneamente lo ha considerado la Cámara.

3. En virtud de los argumentos dados por la Cámara de mérito y los suministrados por el recurrente, esta Sala advierte lo siguiente:

3.1 Que la Cámara, en la pag. [...] de la sentencia, ciertamente hizo alusión a las fotocopias agregadas a fs. [...], que consisten en la notificación que hizo la arrendante a la sociedad arrendataria, de la no prórroga del plazo del contrato de arrendamiento, que con firma y sello de recibido en original de la sociedad demandada, que constan en el proceso.

Por lo que, al darle valor probatorio a esas fotocopias, concluyó que la condición del preaviso, estipulada en la cláusula II del contrato de arrendamiento fue debidamente cumplida por la parte actora, con la carta de fs. [...].

3.2 Al respecto, esta Sala considera, que el impetrante descalifica el valor probatorio de las fotocopias presentadas, tanto de la carta de notificación del aviso que contiene el acuerdo del Consejo Directivo de la Caja Mutual de [...], en cuyo texto se consigna que se da por terminado el contrato de arrendamiento; así como, de la fotocopia de dicho acuerdo que se adjuntó con el aviso.

No obstante lo anterior, y atendiendo a lo que jurisprudencialmente se entiende por el vicio en cuestión, éste tiene ocurrencia cuando el juzgador acierta en la selección de la norma que resuelve el caso planteado, pero yerra en la interpretación, ya sea que se otorgue un sentido y/o alcance que no tiene, lo que conlleva a la aplicación de las consecuencias jurídicas del o los presupuestos normativos de la disposición legal denunciada como infringida, que pueden o no encontrarse contenidas en la misma.

De ahí que, ante el planteamiento recursivo casacional del impetrante, referente a que las fotocopias en alusión, no constituyen ni instrumento público ni instrumento privado, susceptible de valor probatorio conforme las regulaciones adjetivas legales, resulta palmario deducir, que dicho precepto en lo que a tales documentos se refiere, no debió ser aplicado, lo cual -indubitablemente- se abstrae del supuesto de configuración arriba apuntada.

Por consiguiente, al no demostrarse un error de interpretación, sino de un supuesto que atañe a un motivo distinto del invocado, no procede casar la sentencia de mérito."

Sala de lo Civil, número de referencia: 120-CAC-2019, fecha de la resolución: 07/07/2020

RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS

MÉTODO PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES

"6. Por otra parte, ante el evidente desconocimiento de la impetrante del proceso deliberatorio, en las resoluciones en los tribunales colegiados, esta Sala, advierte lo siguiente:

Primeramente el art. 220 inc. 1° CPCM, determina las reglas de votación para la decisión, en una resolución, fijados con base a criterios numéricos que permite entender que el tribunal ha decidido, cuando establece: "Concluida la deliberación se procederá a votar, comenzando por el magistrado de nombramiento más reciente. El presidente votará en último lugar. Las decisiones requerirán del voto unánime de los magistrados que integran el tribunal, salvo cuando la Corte Plena conozca en casación".

Pero, la mencionada disposición ha sido superada, en virtud que la Sala de lo Constitucional ha reconocido el aspecto práctico de la regla mayoritaria, con relación a la votación, al establecer un método más adecuado para la adopción de decisiones en los tribunales colegiados, y al respecto ha manifestado en su jurisprudencia:

"[…] que cuando los jueces deciden como parte de órganos colegiados, el sistema de deliberación y debate instaurado por la Constitución implica que su independencia, conocimiento técnico, experiencia y trabajo en común son determinantes para el contenido de las decisiones que se tomen (Resolución de Admisión de la Inc. 15-2011, del 6-VI2011). En efecto, la fragmentación del poder de decidir entre varias personas les otorga una interdependiente capacidad de influencia —de freno y contrapeso— sobre el resultado final, sin que ninguno pueda determinarlo por sí mismo, pero tampoco impedirlo. De esta manera, aunque es razonable esperar que los Jueces impriman al análisis del asunto una dirección o un carácter relacionado con su propia manera de pensar, la vinculación al Derecho, la búsqueda imparcial de la mejor solución disponible y el carácter deliberativo del proceso decisorio los someten por igual a una estructura argumentada que genere el mayor consenso posible respecto a las connotaciones fácticas y jurídicas del caso concreto. 3. Sin embargo, el diálogo deliberativo no puede continuar por siempre. La apertura pluralista a la diferencia de opiniones no debe paralizar o impedir la decisión. Además, tratándose de decisiones judiciales, su emisión razonada y oportuna es una exigencia derivada del derecho fundamental a la protección jurisdiccional en la conservación y defensa de los demás derechos (art. 2 Cn.),

que de esta forma condiciona no solo el modo (fundamentado), sino también el tiempo ("pronto") en el que los jueces deben decidir. Decidir es cenar o zanjar una discusión y para ello se requiere, por tanto, de un instrumento que convierta los criterios de los jueces en la resolución común del tribunal. Esto se realiza mediante las reglas de votación (Resolución de Admisión de la Inc. 152011, del 6-VI-2011). Mediante la votación se transita de las opiniones particulares de los Magistrados a la resolución única o común del tribunal. Las reglas de votación fijan un estándar cuantitativo a partir del cual se considera que la decisión está tomada y es innecesario proseguir la deliberación […] El acuerdo de la mayoría de un colegio de jueces no debe excluir, ocultar o silenciar las voces disidentes. El voto particular —tanto discrepante como concurrente— materializa las virtudes liberales y democráticas del disenso. Mediante la libre exposición de su punto de vista, la minoría presiona sobre el rigor analítico del acuerdo mayoritario, transparenta el proceso de la decisión y entrega al "mercado de las ideas" una perspectiva distinta, quizá profética, para la solución de problemas similares en el futuro. […] Finalmente, el carácter pluralista, dialógico y deliberativo de la decisión judicial colegiada determina que la votación no es un método para decidir, sino solo un instrumento para cerrar el proceso deliberativo o argumentativo que genera la decisión. La votación es una salida a la tensión entre la deliberación como método y la exigencia de una respuesta oportuna. Esto significa que la exigencia de una votación máxima o unánime (todos los votos posibles) a favor de una solución no viene impuesta por la naturaleza del proceso decisorio, sino por algún otro tipo de consideración externa que, para ser válida, debe ser objetivamente justificada, en relación con el diseño institucional del órgano que decide. […] Tomando en consideración la justificación contenida en esta sentencia, el art. 220 inc. 1° frase 3 del Código Procesal Civil y Mercantil deberá entenderse que solo aplica para las Cámaras de Segunda Instancia, no así para la Sala de lo Civil ni cualquier otra Sala —por la aplicación supletoria a que se refiere su art. 20—, pues en este último caso tal interpretación también estaría descartada como efecto de la inconstitucionalidad declarada[..]" (sic).

7. Lo antes transcrito, fueron los fundamentos de la sentencia de inconstitucionalidad bajo ref. 78-2011, de las doce horas del uno de marzo de dos mil trece, jurisprudencia en la que se declaró parcialmente inconstitucional, por conexión, de un modo general y obligatorio, el art. 14 inc. 2° de la Ley Orgánica Judicial, en lo relativo a la regla de votación de las decisiones de la Sala de lo Civil y de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque dicha regla comparte el vicio de inconstitucionalidad examinado en esa sentencia, en el sentido de que carece de justificación suficiente en relación con el carácter pluralista y deliberativo de la decisión judicial colegiada y con el derecho a una decisión judicial fundada y oportuna, de modo que contradice los arts. 2 y 186 inc. 3° Cn.

8. En razón de lo antes expuesto, es que el auto de las ocho horas veintiséis minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veinte, ha sido dictado y deliberado por esta Sala, conforme a derecho, no existiendo dos resoluciones

como lo hace ver la impetrante; entiéndase que la resolución es una, la que ha sido formada por mayoría de votos, la cual goza de la peculiaridad de contener un voto razonado.

En virtud lo anterior, se declarará no ha lugar a las solicitudes planteadas por la impetrante, por carecer de fundamento y tecnicismo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 93-CAC-2019, fecha de la resolución: 17/12/2020

REVISIÓN DE SENTENCIA FIRME

REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y DE INTERPOSICIÓN

"1. Debe tenerse en cuenta, en principio, que la revisión de sentencias firmes, constituye una verdadera novedad dentro de la actual legislación procesal civil y mercantil.

2. El Código Procesal Civil y Mercantil, establece requisitos de fondo para sustentar la revisión, los cuales se clasifican en motivos generales y motivos especiales.

3. La revisión es un proceso que tiene su propia y especial tramitación, resultado de una mezcla de los procesos declarativos.

Así, el artículo 547 CPCM, ordena que la demanda de revisión y su correspondiente contestación o defensa, se deben presentar con los requisitos y formalidades previstos para el proceso común, según lo disponen los artículos 277 y 284 CPCM.

Superadas tales alegaciones, el artículo 548 CPCM, determina que proseguirá con la tramitación establecida para el proceso abreviado, lo que implica la celebración de única audiencia, artículo 425 y siguientes del CPCM.

4. Podemos agregar, que esta figura procesal, no procede respecto de todas las sentencias dictadas en materias civil y mercantil; pues, por ejemplo, no procede contra las sentencias firmes que por disposición legal, carezcan de efectos de cosa juzgada (inciso segundo del artículo 540 CPCM).

5. Por lo tanto, su procedencia obedece a la probable existencia de algún o algunos de los motivos generales establecidos en el art. 541 CPCM, o a la concurrencia de los motivos específicos de la sentencia dictada en rebeldía, Art. 542 CPCM.

6. Constituyéndose además, como requisito indispensable de procedencia, que al momento de incoar la demanda, se encuentre el interesado dentro del plazo general o del plazo especial para su interposición, determinados en los arts. 544 al 546 CPCM.

7. Debe tenerse en cuenta que, solamente procede dicha revisión, respecto de sentencias pronunciadas en procesos tramitados a partir de la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil; esto es, desde el uno de julio de dos mil diez.

8. Para concluir esta parte identificativa del proceso que nos ocupa, debe tenerse en cuenta que, dicha institución procesal impugnativa, no implica una instancia más de conocimiento en un proceso determinado, ya que no se trata de una revisión en el sentido amplio de la palabra, sino, un nuevo análisis bajo las circunstancias concretas preestablecidas en la ley.

9. El artículo 541 del Código Procesal Civil y Mercantil, al establecer los motivos generales que determinan la procedencia de la revisión de sentencia, en los términos siguientes: "Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme: 1º Si, después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiera podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado la sentencia. 2º Si se hubiera pronunciado en virtud de documentos declarados falsos en proceso penal, o cuya falsedad fuera declarada después. 3º Si se hubiera pronunciado en virtud de prueba testimonial o pericial y los testigos o peritos hubieran sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. 4º Si el caso se hubiera ganado injustamente por cohecho, violencia o fraude".

10. Además, el artículo 543 de dicho cuerpo legal, al determinar cómo se establece la legitimación activa en la revisión, nos indica que puede pedir la revisión, quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada.

III. Motivo invocado.

En el libelo de mérito, a folios [...] vuelto, la peticionaria expresó que el fundamento del recurso está basado en una sentencia ganada de manera fraudulenta, artículo 541 ordinal 4º CPCM.

IV. Plazo de Interposición.

En atención exclusivamente al motivo invocado por la interesada, la ley establece el plazo especial de interposición de tres meses, como requisito de procedencia para acceder a tramitar la demanda de revisión; por lo que es necesario verificar si dicha profesional al ocurrir a esta Sala, se encontraba dentro de dicho plazo.

El artículo 545 CPCM, en lo pertinente, establece: "[...]Tampoco procederá la revisión cuando hubiera transcurrido el plazo de caducidad de tres meses, contados desde el día siguiente a aquél en que se hubieran descubierto los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude[...]" (sic).

Así las cosas, este tribunal advierte que la impetrante, no hace referencia alguna en el cuerpo de su demanda, al cumplimiento del requisito mencionado, por lo que a fin de fallar con mayor acierto, es necesario prevenir a dicha profesional se pronuncie al respecto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 3-REC-2020, fecha de la resolución: 29/10/2020

SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO

ANALOGÍA JURÍDICA

"IV. Análisis del motivo de fondo que consiste en: "aplicación indebida de la norma que regula el supuesto que se controvierte, con infracción del art. 840 CC".

"Art. 840.- Las servidumbres legales son relativas al uso público, o a la utilidad de los particulares.

Las servidumbres legales relativas al uso público son:

El uso de las riberas en cuanto sea necesario para la navegación o flote.

Y las demás determinadas por los reglamentos y ordenanzas respectiva".

1. Los recurrentes manifiestan que la Cámara ha aplicado indebidamente el art. 840 CC, al considerar que la naturaleza de la servidumbre que la parte reconviniente pretende ganar por prescripción, es legal.

Argumentan los recurrentes, que la Cámara no menciona cuál es la ley que regula esta clase de servidumbres, pero que la única que existe sobre el tema es la Ley de Constitución de Servidumbres para las Obras de Electrificación Nacional, cuerpo legal que establece el procedimiento para la constitución de servidumbres de electroducto a favor de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), y que "establece como único sujeto activo que puede solicitar la servidumbre por dicha ley a CEL" (sic). Que por tanto, la ley aludida no aplica para ninguna otra entidad, incluyendo a las distribuidoras de energía eléctrica de carácter privado.

La Cámara, ciertamente ha sostenido que la servidumbre que se pretende adquirir por prescripción es legal, y no una servidumbre contínua y aparente, como se ha planteado; por tratarse de un servicio de electroducto, por lo que no se impone por vía judicial, sino que debe ser determinada por la legislación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 840 CC; y, agrega que al ser una servidumbre de uso público, no puede ser objeto de la prescripción alegada.

2. Sobre la situación antes expuesta, esta Sala hace las consideraciones que se exponen a continuación.

La Ley de Constitución de Servidumbres para las Obras de Electrificación Nacional, fue aprobada por decreto legislativo número un mil tres, de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y siete y publicado en el Diario Oficial número setenta y seis, tomo trescientos treinta y cinco, dé fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete, en el marco de la reestructuración del sector eléctrico en El Salvador, habiéndose verificado, con fecha posterior a esta ley, la venta de las distribuidoras eléctricas, al sector privado.

El art. 1 del precitado cuerpo legal, dispone que el objeto del mismo es establecer el procedimiento para la constitución de servidumbres de electroducto a favor de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), cuando éstas no puedan constituirse por contratación directa.

Referente a la disposición legal antes aludida, la Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia con referencia 143-2013, de las quince horas del cinco

de julio de dos mil diecisiete, ha sostenido que la Ley de Constitución de Servidumbres para las Obras de Electrificación Nacional, es aplicable por analogía, a los casos en los que la servidumbre de electroducto a constituirse, ya no es a favor de CEL, sino en beneficio de un operador de energía diferente, pero con los mismos alcances establecidos para CEL, pues a pesar de que dicha normativa está dirigida "a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa -CEL- regula el derecho a instalar postes, torres, cables, etc., es decir, redes de transmisión e infraestructura eléctrica en propiedad privada"."

En lo tocante al tema de la aplicación analógica de la ley, Eduardo García Maynez, ha expresado que "la analogía jurídica o, mejor dicho, el razonamiento jurídico por analogía, supone un previo juicio de valor sobre dos situaciones de hecho, la prevista y la imprevista. Lo que justifica la aplicación de la disposición de una ley, a un caso no previsto en su supuesto no es la simple analogía de situaciones, sino la existencia de razones iguales para resolver uno y otro del mismo modo" (Eduardo García Maynez, Introducción al Estudio del Derecho, pág. 369 y 370, Editorial Porrúa, trigésimo cuarte edición, 1982).

El criterio sostenido por la Sala de lo Contencioso Administrativo en la sentencia relacionada supra, es congruente con el hecho de que en la actualidad, y por efecto de la privatización del sector de energía eléctrica, son las distribuidoras privadas de electricidad las que ejecutan las obras necesarias para el establecimiento de la infraestructura eléctrica sobre propiedad privada, habiendo relación y semejanza entre tales actividades con lo regulado por la Ley de Constitución de Servidumbres para las Obras de Electrificación Nacional.

En el caso que nos ocupa la SOCIEDAD AES CLESA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA DE CAPITAL VARIABLE, se encuentra vinculada a lo establecido por la ley en mención, para la constitución de la servidumbre de electroducto."

LA LEY DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES PARA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN NACIONAL HABILITA EL ESTABLECIMIENTO DE DICHO GRAVAMEN, AÚN SIN EL CONSENTIMIENTO DEL PROPIETARIO, EN BENEFICIO DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, QUE SON DE INTERÉS PÚBLICO; SE CONCLUYE QUE LA NATURALEZA DE LA SERVIDUMBRE QUE SE INTENTA ADQUIRIR POR PRESCRIPCIÓN, ES DE TIPO LEGAL

"De acuerdo con el art. 4 Ley de Constitución de Servidumbres para las Obras de Electrificación Nacional, el operador de energía eléctrica debe intentar, en primer lugar, la contratación directa de los derechos de servidumbre con el particular, y en caso que esta opción no sea viable, esa la ley especial establece la posibilidad de acudir a un proceso judicial, con el fin de establecer la servidumbre aludida, para lo cual esa misma ley regula el procedimiento a seguir.

Al ser la Ley de Constitución de Servidumbres para las Obras de Electrificación Nacional, la que habilita el establecimiento de dicho gravamen, aún sin el consentimiento del propietario, en beneficio de los servicios eléctricos, que son de interés público; se concluye que la naturaleza de la servidumbre que se intenta adquirir por prescripción, es de tipo legal.

En consecuencia, el art. 840 CC, ha sido aplicado debidamente por la Cámara, desvirtuándose el argumento de los recurrentes mediante el cual afirman que no existe una ley que regule la constitución de servidumbres de electroducto.

Además, en el presente caso, no cabe la aplicación del art. 884 inciso 2° CC, que establece la adquisición por prescripción de las servidumbres continuas y aparentes, ya que estos tipos de servidumbres son de naturaleza voluntaria. Por tanto, no procederá casar la sentencia por este motivo, y así se declarará."

Sala de lo Civil, número de referencia: 255-CAC-2018, fecha de la resolución: 17/09/2020

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA DOCTORA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

INFRACCIÓN DE REQUISITOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SENTENCIA

EL CONTROL EN CASACIÓN DE LA MOTIVACIÓN JURÍDICA NO PUEDE RESTRINGIRSE ÚNICAMENTE A LAS SENTENCIAS

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, en mi calidad de magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, a continuación, expongo mi voto disidente en forma parcial, por no estar de acuerdo con la improcedencia del recurso de mérito, en lo que respecta al motivo de forma, relativo al quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, específicamente "por infracción de requisitos internos y externos de la sentencia"; bajo las razones que expongo a continuación.

1. En principio, considero que en el caso que se analiza, la potestad resolutiva de improcedencia ha sido aplicada indebidamente, dado que la misma está delimitada a la falta de concurrencia de presupuestos procesales subjetivos y objetivos del recurso, ya sea que el defecto sea por incompetencia de este Tribunal, que las partes no tengan legitimación para recurrir, que no sea recurrible la resolución, o que la misma no cause agravios. Dicha manera de entender la procedencia del recurso ha sido apuntada expresamente por este órgano jurisdiccional en los autos de las referencias siguientes: 386-CAM-2018, 258-CAC-2018 y 407-CAC-2018, entre otros.

Al analizar el contenido de la resolución, de referencia, la limitación decidida por la mayoría de esta Sala, se debe a que el motivo jurídico invocado por infracción de requisitos internos y externos de la sentencia, regulado en el art. 523 ord. 14º. del Código Procesal Civil y Mercantil -en adelante, CPCM-no puede articularse por dicha causa al tratarse de un auto definitivo, impugnado en casación.

Sin embargo, esa falta de correspondencia, sobre la cual no estoy de acuerdo, provocaría la consecuencia de inadmisión del recurso, pues si aquel motivo no es pertinente, dada la naturaleza de la resolución, tal inconsistencia se configura entre los requisitos de contenido -motivo, normas jurídicas y fundamentación-, lo cual es un asunto de admisión, no de procedencia bajo los términos antes acotados.

Véase que en el auto de esta Sala, se inadmite el recurso por el submotivo relativo a haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación, "por vía errónea de aplicación de los arts. 510 y 511 inc. 2 ° del CPCM, así como la inobservancia del art. 18 Cn", interpuesto como motivo de forma, y por inobservancia de los arts. 1427 inc. 1°,1430 regla 2", 2253 y 2256 todos del CC, lo cual está dentro de un motivo de fondo. Y por ende, dado el tipo de resolución impugnada, queda claro que la misma no se ha pronunciado sobre el fondo de la pretensión, y sin embargo, no objeto su procedencia, pues de lo contrario, y como lo entiende la mayoría de esta Sala, tendría que declararse por completo improcedente el recurso, dada la impertinencia del motivo invocado con la naturaleza de la resolución cuestionada.

2. Por otro lado, considero que el rechazo del recurso no es procedente constitucionalmente, ya que el motivo jurídico invocado está diseñado tanto para sentencias, como para autos definitivos, sobre todo en casos como el presente, en el que mediante este pronunciamiento en apelación se confirmó la decisión con la cual se ha terminado de forma anticipada el proceso en primera instancia.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que si bien la ley procesal determina literalmente que puede configurarse la infracción de falta de requisitos internos y externos de la "sentencia", ya sea por incongruencia, cuando se omita relacionar hechos probados, por falta de fundamentación jurídica y oscuridad de la redacción del fallo; constitucionalmente también resulta exigible el deber de motivación también para los autos definitivos, y su confirmación en segunda instancia.

No debe perderse de vista que en el caso específico se está limitando el trámite completo de la demanda, y por ende que la pretensión queda imprejuzgada.

El control en casación de la motivación jurídica no puede restringirse únicamente a las sentencias, pues tal como lo establece el art. 216 CPCM, a excepción de los decretos de sustanciación, todas las resoluciones serán debidamente motivadas, ello implica que sean claras y completas, con sustratos fácticos y jurídicos suficientes, y en el caso de la sentencia, pues deberá contener lo relativo a la fijación de hechos probados y valoración probatoria.

Por ello las infracciones reguladas en el art. 523 No 14.° CPCM, conllevan implícitamente una función impugnativa, pues los mecanismos de defensa previstos para controlar el deber en comento son precisamente los recursos, y por ende, si en apelación es posible revisar esa garantía constitucional tanto de sentencias como de autos definitivos, mediante la finalidad prevista en el art. 510 ord. 1.° CPCM, también debe permitirse su control en casación, pues dicho motivo está diseñado para examinar el cumplimiento de una garantía constitucional, la cual de no cumplirse en segunda instancia se deja en indefensión a las partes.

3. En cuanto a situaciones semejantes, en el anterior régimen procedimental, a pesar de no estar expresamente regulado el deber de motivación, en el incidente de casación bajo referencia 270-CAM-2018, en primera instancia se declaró inepta la demanda, y en segunda instancia se confirmó dicha decisión, pero por otras razones jurídicas de contenido procesal. El recurso de casación

fue admitido por violación del art. 421 del Código de Procedimientos Civiles, en cuyo concepto de infracción se sostiene la falta de fundamentación de la resolución proveída en segunda instancia.

De manera que, con dicho precedente no se limitó el examen de la fundamentación o motivación a las sentencias, sino que se extendió a los autos definitivos pronunciados en apelación, por lo que si antes que no estaba expresamente el deber en comento, se confirió acceso al recurso, no parece razonable !imitarlo actualmente, pues está determinado dicho derecho constitucional.

Finalmente, me parece pertinente destacar que esta Sala ha interpretado de forma amplia otros motivos de casación, con el objetivo de permitir el acceso, a supuestos que no están literalmente previstos. Por ejemplo en los casos de improcedencia de apelaciones bajo el motivo regulado en el art. 523 ord. 13.° CPCM, también se admite el recurso de casación cuando en segunda instancia se declara la inadmisibilidad de la apelación (Autos de referencia: 63-CAC-2016, 149-CAC-2014, 1-CAC-2013, 409-CAC-2012, 177-CAM-2015, 315-CAM-2018) .

Dicho resultado interpretativo ha permitido examinar distintos rechazos de la apelación, bajo cualquiera de las dos consecuencias jurídicas antes mencionadas; por ende, un asunto que limita el acceso a los recursos, como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional, también puede ser aplicado a la garantía constitucional de motivación comprendida dentro del ámbito del mencionado derecho.

En conclusión, considero que la limitación establecida por la mayoría de esta Sala, en cuanto a la aplicación del motivo alegado; únicamente a las sentencias, no constituye una interpretación conforme a la Constitución, la cual exige el deber de motivación no solo a ese tipo de resolución, sino que también comprende su observancia en los autos definitivos, lo cual es suficiente para admitir el recurso por tal infracción de orden procesal.

Así, mi voto,"

Sala de lo Civil, número de referencia: 310-CAC-2019, fecha de la resolución: 11/03/2020

VOTO RAZONADO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA DOCTORA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

CIERRE TEMPORAL DE ESTABLECIMIENTO

EL RECURSO DE CASACIÓN ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE COMPETENCIA MATERIAL DE LA SALA DE LO CIVIL, YA QUE EL CONOCIMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS DEBE SER VENTILADA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

"VOTO RAZONADO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de esta Sala, expreso mi voto razonado a pronunciar el auto anterior, en lo referente a la improcedencia del recurso de casación, agregando las razones siguientes:

Esta Sala por medio de auto de las diez horas cinco minutos del nueve de marzo de dos mil veinte, ha pronunciado auto declarando la improcedencia del recurso de casación interpuesto por el licenciado […], actuando en su carácter de apoderado general judicial del señor […], quien es propietario del […], en las diligencias de cierre temporal de establecimiento, promovidas por la licenciada Erika Lissette García, en su calidad de agente auxiliar del fiscal general de la República, en representación del Estado de El Salvador, contra el ahora recurrente.

Antes de emitir pronunciamiento sobre la procedencia del recurso, realizo las consideraciones siguientes:

En el presente caso, el recurrente invocó como causa genérica, lo concerniente al quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, regulada en el art. 523 CPCM, por el submotivo concerniente a haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación, en el que se señaló como preceptos legales infringidos los arts. 511 inciso 2° y 2 CPCM, impugnando la resolución pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en las diligencias de cierre temporal de establecimiento.

Por lo anterior, resulta necesario realizar un análisis de la disposición correspondiente establecida en el Código Tributario, artículo 257, para poder determinar si las actuaciones judiciales impugnadas en el presente caso son o no función administrativa.

El artículo que se comenta dispone lo siguiente "El cierre temporal de establecimientos, empresas, locales, negocios y oficinas, es la sanción que se impone *a las personas naturales o jurídicas propietarias de aquellas o* aquellos, que reincidan en *la* comisión *de las* infracciones *tipificadas en los* artículos *239 de este Código. [...]* El cierre *temporal se decretará por* un *plazo* mínimo de cinco a *diez días* continuos, *excepto cuando proceda* duplicar *la sanción conforme* las *disposiciones de* este mismo *artículo. [...] Cuando la* infracción *se haya cometido en* una *o más de las empresas, establecimientos, locales, negocios u oficinas del contribuyente, la sanción se aplicará únicamente en aquella o* aquellas en que *se haya cometido la infracción,* salvo *cuando por cualquier causa, no pudiere ejecutarse la* sanción *de* cierre *decretada por el Juez en el lugar* en el que *se cometió la* infracción, *caso en el cual, a* solicitud *de la Fiscalía General de la República,* el Juez de la *causa podrá ordenar* el cierre de cualquier otro negocio *o establecimiento* en el que *el contribuyente* infractor realice actividades *económicas,* sin que ello requiera que *el proceso* se inicie nuevamente. (2) [...] En *caso de reincidencia la* Administración Tributaria certificará los *antecedentes y* las pruebas que amparen la reincidencia, lo remitirá a *la* Fiscalía General *de* la *República, para* que ésta solicite al Juez *de lo* Civil *o* en su *defecto al Juez que tenga competencia en materia* civil *de la* jurisdicción en la que *se cometió* la infracción, que *proceda a la* imposición *de la* sanción *del cierre temporal del* establecimiento, *empresa, local, negocio* u oficina. El juez dentro *de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la* certificación de los *antecedentes, las* pruebas que sustenten la *reincidencia y la* solicitud *de cierre, fijará audiencia para escuchar a las partes y* recibir las *pruebas* pertinentes, *al* finalizar la audiencia el *juez dictará de manera inmediata* la *resolución* respectiva. (2) [...] El cierre

temporal del establecimiento, empresa, local, negocio u oficina, será ordenado por el Juez que lo *decretó y ejecutado por la* Fiscalía *General de la* República *con participación de delegados de* la Administración Tributaria, *acto en el que se impondrá sellos oficiales con* la *leyenda* "CERRADO TEMPORALMENTE POR INFRACCIÓN FISCAL", *los cuales* también deberán *ser autorizados por el Juez competente con el sello del Juzgado y la indicación* "POR ORDEN *JUDICIAL". [...]* Si el contribuyente *se resiste, viola los sellos* oficiales *o por* cualquier *otro medio abre o utiliza la empresa, establecimiento, local, negocio u oficina cerrado se le sancionará duplicando el plazo fijado inicialmente.* Si *con posterioridad a la imposición y ejecución de la sanción de* cierre temporal, la Administración Tributaria *constata que dicho* contribuyente ha incurrido *nuevamente* en *la* infracción *de no* emitir *o de* no entregar *factura o documento equivalente legal autorizado, la sanción de cierre se decretará por* un *plazo de veinte a treinta días continuos, cada vez que* se *compruebe* un *nuevo incumplimiento. El trámite a seguir en estos casos para la Administración Tributaria, Fiscalía General de la República y Juez competente será el mismo aplicado para proceder a la sanción de cierre en casos de reincidencia, previsto* en *el* inciso *cuarto de este artículo. (2)* f....) *Cuando el lugar cerrado temporalmente* fuere *a su vez casa de habitación, se permitirá el acceso de las* personas que *lo* habitan, *pero en el no podrán efectuarse operaciones mercantiles o el desarrollo de actividades, profesión u oficio, del sujeto pasivo sancionado, por el tiempo que dure la sanción. [...] Cuando se trate de* centros *hospitalarios o educativos, la* Administración Tributaria *no aplicará la sanción de cierre prevista* en *este artículo, sino* que *aplicará la multa equivalente al cinco por ciento de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último mes calendario* anterior *a la* fecha en *que se configuró la reincidencia. [...] El cumplimiento de la* sanción *de cierre no libera al infractor de la* obligación *del pago de las prestaciones laborales a sus dependientes".*

Y el art. 239 del Código Tributario, define las infracciones a que se refiere la disposición citada, en los siguientes términos: "Constituyen incumplimientos con relación a la obligación de emitir y entregar documentos: [...] a) Omitir la emisión o la entrega de los documentos exigidos por este Código. Sanción: Multa equivalente al cincuenta por ciento del monto de la operación por cada documento, la que no podrá ser inferior a dos salarios mínimos mensuales. (14) [...] Igual sanción se aplicará cuando los valores consignados en los documentos emitidos por los contribuyentes no coincidan con los documentos en poder de los adquirentes de bienes o prestatarios de servicios. (2) [...] b) Emitir los documentos obligatorios sin cumplir con uno o más de los requisitos o especificaciones formales exigidos por este Código. Sanción: Multa equivalente al treinta por ciento del monto de la operación por cada documento, la que no podrá ser inferior a dos salarios mínimos mensuales. (14) [...] c) Emitir comprobante de crédito fiscal por la transferencia de alimentos y víveres a contribuyentes cuyo giro ordinario no sea la venta de comida en restaurantes o empresas similares. Sanción: Multa equivalente al diez por ciento del monto de la operación, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual; [...] d) Emitir documentos con numeración duplicada y no declarada. Sanción: Multa

equivalente al veinticinco por ciento del monto de la cantidad u operación no declarada por cada documento, la que no podrá ser inferior a cuatrocientos noventa colones; [...] e) Utilizar máquinas registradoras o sistemas computarizados o electrónicos, no autorizados por la Administración Tributaria, para emitir tiquetes en sustitución de facturas. Sanción: Multa de tres salarios mínimos mensuales por cada máquina registradora o Sistema no autorizado. Lo anterior, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar por emitir documentos sin cumplir con los requisitos establecidos por este Código. (14) [...] Igual sanción se aplicará en caso de que se efectúen traslados de máquinas registradoras o sistemas computarizados o electrónicos, sin previa autorización de la Administración Tributaria. (14) [...] f) Mantener Máquinas Registradoras o Sistemas para control interno en los establecimientos en que tengan Máquinas Registradoras autorizadas, o emitir Factura Simplificada en establecimientos o negocios sin estar obligado por este Código para su utilización. Sanción: Multa de cinco salarios mínimos mensuales por cada Máquina registradora o Sistema no autorizado. Lo anterior sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar por emitir documentos sin cumplir los requisitos establecidos por este Código. (2) [...] g) Emitir y entregar facturas que sustenten operaciones de diferentes adquirentes de bienes o prestatarios de servicios, ya sea que la factura se denomine consolidada, abierta, de resumen u otro nombre que se le confiera. Sanción: Multa equivalente al cincuenta por ciento de la sumatoria que ampara dicho documento, la que no podrá ser menor a dos salarios mínimos mensuales. (14) [...] h) Utilizar máquinas registradoras, sistemas computarizados o similares, que hayan sido desautorizados por la Administración Tributaria por no cumplir los requisitos legales estipulados por el presente Código, en establecimientos comerciales para emitir tiquetes en sustitución de facturas u otros documentos equivalentes. Sanción: Multa de tres salarios mínimos mensuales por cada máquina registradora o Sistema autorizado que no cumpla los requisitos. (14) [...] i) No retirar dentro del plazo legal las máquinas registradoras u otros sistemas computarizados que se ha ordenado su retiro. Sanción: Multa de tres salarios mínimos mensuales por cada máquina registradora o sistema computarizado, la cual se incrementará en diez por ciento de la referida multa por cada día de atraso en el retiro en las máquinas registradoras o sistemas computarizados. Por su naturaleza a esta sanción no le es posible aplicar la respectiva atenuación (14)".

Por tanto, se advierte que, en virtud de las anteriores disposiciones, el legislador ha facultado a los jueces de lo civil o con competencia en materia civil, para que impongan la sanción de cierre temporal del establecimiento, empresa, local, negocio u oficina, en los casos previstos por el legislador.

No debe perderse de vista que el mismo legislador, reconoce en el artículo 257del Código Tributario, la categoría de sanción al cierre que se faculta imponer a los jueces de referencia, en los siguientes términos:"[...] *En* caso de *reincidencia* la *Administración Tributaria certificará* los antecedentes y las *pruebas* que amparen la *reincidencia,* lo *remitirá* a la Fiscalía General de la República, para que ésta solicite al Juez de lo Civil o en su defecto al Juez que tenga compe-

tencia *en* materia *civil* de la jurisdicción en la *que* se cometió la infracción, que proceda a la imposición de la *sanción del cierre* temporal del establecimiento, empresa, local, negocio u oficina (...)".

Sin embargo, para concluir sobre la naturaleza de la potestad mencionada, en vista que la misma se confiere al Órgano Judicial, debe partirse en primer lugar de la concepción de administración pública que se ha desarrollado en nuestro sistema legal.

A nivel de legislación secundaria, la disposición legal que sentó las bases relativas a los órganos que integran la Administración pública en nuestro ordenamiento jurídico es el art. 2 de la LJCA de 1978, el cual es del contenido siguiente: "Art. 2.- Corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa el *conocimiento de las* controversias que se susciten en relación *con la legalidad de los actos de la* Administración *Pública. Para los efectos de esta ley se entiende por* Administración Pública: a) *el* Poder *Ejecutivo y* sus *dependencias,* inclusive las *instituciones autónomas, semiautónomas y demás entidades descentralizadas del Estado;* b) *los Poderes Legislativo y* Judicial y los organismos independientes, en *cuanto realizan excepcionalmente actos* administrativos; y, *c) el Gobierno Local".*

De la disposición citada se concluye que nuestro legislador, atiende a un criterio objetivo tanto para la delimitación de los órganos que conforman la Administración pública, como para la definición del acto administrativo; ya que atiende a la naturaleza de la actividad, independientemente del órgano que la realice; situación ya concebida así por el Constituyente, tal como se expondrá en párrafos posteriores.

Partiendo de la anterior aclaración, también debe tenerse en cuenta que, en nuestro medio pueden distinguirse, por una parte, órganos que por esencia tienen encomendado el ejercicio de función administrativa, tal como sucede con el Órgano Ejecutivo, las Instituciones oficiales autónomas y las municipalidades; y, por otra parte, el artículo 2 LJCA, antes citado creó una categoría de órganos a los que llamó "organismos independientes", que son todos aquellos que, no perteneciendo a ninguno de los órganos fundamentales del Gobierno, y no teniendo personalidad jurídica propia, ejercen función administrativa, algunos como función esencial y otros de manera excepcional. Entre estos se encuentran, por ejemplo, las comisiones de servicio civil, el Tribunal de Servicio Civil, las juntas de vigilancia de las distintas profesiones médicas, las juntas de la carrera docente y el Tribunal de la Carrera Docente, y el Comité de Apelaciones del Sistema Financiero, entre otros.

Además, el legislador, partiendo de la concepción mencionada, incluyó entre los órganos que realizan función administrativa y que por tanto dictan actos administrativos, controlables en sede jurisdiccional contencioso administrativa, a los Órganos Legislativo y Judicial en cuanto excepcionalmente emiten actos administrativos.

Esa misma concepción de Administración pública es la adoptada por el legislador en la LJCA vigente a partir del 31 de enero de dos mil dieciocho, cuando determina en el art. 2 que "La jurisdicción contencioso administrativa será competente para conocer de las pretensiones que se deriven de las actuaciones u omisiones

de la Administración pública sujetas al derecho administrativo". Y al realizar el reparto de competencias entre los juzgados, Cámaras y Sala de lo Contencioso Administrativo, incluye el conocimiento de las actuaciones del Órgano Judicial y del Legislativo y de organismos independientes, en cuanto estén sujetas al derecho administrativo, entre otros (arts. 12 al 14 de la LJCA vigente).

Por su parte, la Ley de Procedimientos Administrativos, en adelante LPA, aprobada mediante Decreto Legislativo número ochocientos cincuenta y seis, de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial número treinta, tomo cuatrocientos dieciocho, del día trece de febrero de dos mil dieciocho; define como ámbito de aplicación de la misma el siguiente: "art. 2.La presente ley se aplicará al Órgano Ejecutivo y sus *dependencias, a* las entidades autónomas y demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación se califique de carácter especial; y a las municipalidades, en cuanto a los actos administrativos definitivos o de trámite *que* emitan y a los procedimientos que desarrollen. Asimismo, se aplicará a los Órganos Legislativo y Judicial, la Corle de Cuentas de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la *República,* el Consejo Superior de Salud Pública, el Tribunal *Supremo* Electoral y, en *general, a* cualquier *institución* de carácter público, cuando excepcionalmente ejerza potestades sujetas al derecho administrativo. Esta ley será aplicable a los concesionarios de la Administración Pública".

Coincide con el criterio adoptado en nuestro ordenamiento jurídico para definir a la Administración pública, con relación a la función administrativa atribuida a los órganos fundamentales del Estado, el tratadista Miguel S. Marienhoff sostiene que "Cada uno de los órganos esenciales -legislativo, *ejecutivo y* judicial-, *aparte de* sus propias funciones *especificas,* ejerce *o realiza* otras *de la misma naturaleza que aquellos que caracterizan a los demás órganos.* El *Congreso* legisla, *juzga, ejecuta o* administra. Igual *cosa ocurre con el órgano judicial: juzga* sin perjuicio *de realizar actos de naturaleza* legislativa, y *otros donde actúa* ejecutivamente *o como* administrador. *De modo* que *la* función administrativa no está circunscripta a uno solo de *los expresados órganos:* si *por* principio *constituye la* función *específica del ejecutivo, es en cambio compartida por los órganos* legislativo y judicial. *Pero* el carácter substancial y distintivo de *estas actividades no se modifica,* cualesquiera fuesen los organismos que *la produzcan o* el *procedimiento* que *se* utilice para su *producción.* Es *por eso que* en los estudios científicos *del derecho* administrativo predomina *la concepción* "objetiva" de Administración Pública, en cuyo mérito pertenece a la órbita *del* derecho administrativo la regulación de cualquier *acto de* función administrativa, aunque *no sea* cumplido por el llamado "Poder Ejecutivo". (Marienhoff, Miguel S., *Tratado* de Derecho Administrativo, *tomo I, Teoría* General, quinta Edición, *Abeledo-Perrot,* Buenos Aires, Argentina, 2003, pág. 44).

En lo concerniente a las funciones atribuidas al Órgano Judicial, debemos comenzar afirmando que, en nuestro sistema legal, la Constitución de la República, en adelante Cn., asigna al Órgano Judicial como función esencial la potestad

de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, art. 172 Cn.: *"la* Corte Suprema de *Justicia,* las Cámaras de Segunda *Instancia y* los demás *tribunales que* establezcan *las leyes secundarias, integran el Órgano Judicial.* Corresponde exclusivamente a *este Órgano la potestad* de *juzgar* y hacer *ejecutar lo* juzgado *en materias constitucional, civil,* penal, *mercantil,* laboral, agraria y de lo contencioso *administrativo, así* como en *las otras* que determine la ley". Es decir que la función que el *Constituyente atribuye como actividad esencial al Órgano Judicial, es la función jurisdiccional.*

No obstante, el mismo Constituyente ha atribuido a Órgano Judicial, el ejercicio de función administrativa. Por ejemplo, las potestades conferidas en el art. 182 números 9, 10, 12 y 240 Cn.

Entre estas potestades encontramos la relativa a la aplicación del régimen disciplinario a todo el personal de la Corte Suprema de Justicia, y a los miembros de la carrera judicial (art. 182 n° 9 Cn). La administración de la carrera judicial, que también es función administrativa, la comparte, en algunos aspectos con el Consejo Nacional de la Judicatura.

Por otra parte, el legislador secundario, también ha concebido en leyes especiales, tal como sucede con el Código Tributario, que el Órgano Judicial ejerza función administrativa.

La aplicación de todo régimen sancionatorio administrativo constituye ejercicio de función administrativa, independientemente del órgano que la realice. Debe tenerse en cuenta que todo régimen disciplinario encaja en la categoría de sancionatorio.

Por ejemplo, la misma Constitución de la República confiere potestades disciplinarias respecto del personal de la Corte, y de los miembros de la carrera judicial, así como respecto de abogados y notarios, entre otros (artículo 182, atribuciones 9° y 12°, por ejemplo).

Es así como el legislador secundario desarrolla algunas de las potestades constitutivas de función administrativa atribuida al Órgano Judicial, esencialmente a través de la Ley de la Carrera Judicial.

Los tratadistas García de Enterría y Fernández, sobre la potestad disciplinaria sostienen que: "[...] la Administración, para mantener "la disciplina" interna de su organización, ha dispuesto siempre de un poder disciplinario correlativo en virtud del cual puede imponer sanciones a sus agentes, *sanciones atinentes normalmente al régimen funcionarial de los* sancionados. *[...]* La *peculiaridad* de esta especie de *sanciones administrativas residen en* dos caracteres: el *reconocimiento de una especie de titularidad natural de la Administración, derivada del actual* de *su* propio *ámbito interno* o *doméstico tutelando su* propia *organización y funcionamiento por* una parte; y en *segundo término,* la *estimación* como *ilícitos* sancionables de conductas valoradas con criterios deontológicos más que estrictamente *jurídicos [...]".* (García de Enterría, Eduardo, y Fernández, Tomas-Ramón, Curso de Derecho Administrativo II, novena edición, Editorial Civitas, Madrid, 2004, págs. 169 y 170).

Pero también el legislador secundario ha atribuido otras potestades propiamente administrativas al Órgano Judicial, tal como sucede con aquella de la que

surgieron los actos cuya naturaleza se analiza en el presente voto, y a la que se refiere el recurso en estudio. Se trata precisamente de un régimen sancionatorio cuya aplicación ha sido atribuida a tribunales con competencia en materia civil, establecido por el Código Tributario (artículo 257 Código Tributario).

Es decir que la función que ejercen los tribunales con competencia en materia civil, a partir de las potestades que les confiere el Código Tributario, para el cierre de establecimientos, empresas, locales, negocios u oficinas, constituye verdadera función administrativa.

Consecuentemente las resoluciones que emiten dichos tribunales en este tipo de procedimiento, tienen el carácter de actos administrativos, al configurarse como declaraciones de voluntad emitidas de manera unilateral, por la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria; en materia de personal al servicio de la Administración pública, específicamente, relativas al régimen disciplinario.

Como es sabido, el acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, productora de efectos jurídicos, dictada por la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria (Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de las ocho horas del día diecinueve de noviembre de dos mil tres, pronunciada en el juicio con referencia 79-B-2001, entre otras).

Es necesario reiterar que la aplicación de todo régimen sancionatorio administrativo, (por tanto, el relativo al régimen para el cierre de establecimientos, empresas, locales, negocios y oficinas, que confiere el art. 257 del Código Tributario, a los tribunales con competencia en materia civil) constituye ejercicio de función esencialmente administrativa.

Y aunque es un elemento de menor relevancia, puede advertirse que el art. 257 código tributario, se encuentra en el capítulo VIII, “Régimen sancionatorio”. Sección tercera “Infracciones y Sanciones”, aplicables a las personas jurídicas.

Es decir que la función que realizan los jueces con competencia en materia civil a partir de las potestades que le confiere el Código Tributario, en los términos tantas veces expresados, se enmarca en el ejercicio de la función sancionatoria atribuida a la Administración pública. Por tanto, no constituye función jurisdiccional.

En esa misma línea debe tenerse en cuenta que la decisión pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro al conocer en recurso de la decisión del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de esta ciudad; también es un acto administrativo, pues la materia de que ha conocido es de esa naturaleza.

Sobre el concepto de acto administrativo debe destacarse que la LPA, en su esencia, recoge el mismo concepto de acto administrativo adoptado por la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo: “art. 21.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, productora de efectos jurídicos, dictada por la Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa *distinta* a *la reglamentaria”,* (en ese mismo sentido, sentencia 79-B- 2001, de las

ocho horas del día diecinueve de noviembre del año dos mil tres, entre otras).

De ahí que los actos emitidos en ejercicio de la potestad conferida a los tribunales en el art. 257 del Código Tributario, y el conocimiento del correspondiente recurso constituyen actos administrativos, emitidos por el Órgano Judicial.

Tal como se dijo al inicio del presente voto, el mismo art. 257 del Código Tributario, califica como sanción al cierre temporal de establecimientos, empresas, locales, negocios y oficinas: es la sanción que se impone a las personas naturales o jurídicas que reincidan en la comisión de las infracciones tipificadas en el art. 239 del Código Tributario. Por tanto, se trata de una actividad sancionatoria sujeta al derecho administrativo ejercida por tribunales, y sujeta al control jurisdiccional contencioso administrativo.

En ese sentido, se trata de una sanción originada en el ordenamiento administrativo tributario; en ese contexto, el cierre se constituye en el ejercicio de una potestad administrativa, específicamente, materia sancionatoria administrativa.

Como consecuencia, las actuaciones pronunciada por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de esta ciudad, a las diez horas del cinco de julio de dos mil diecinueve; y por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, a las ocho horas veinticinco minutos del nueve de agosto de dos mil diecinueve, en ejercicio de la potestad que se comenta; deben estar sujetas al control de la jurisdicción contencioso administrativa; por tanto, esta Sala debe declararse incompetente para conocer del recurso de mérito.

Con base en las razones expresadas, a mi juicio, este recurso resulta improcedente, pero no por las razones expresadas en el auto dictado por esta Sala a las ocho horas cuarenta y dos minutos del seis de octubre de dos mil veinte; sino porque la legalidad de los actos impugnados, debe ser ventilada en la jurisdicción contencioso administrativa, y no vía recurso de casación civil.

Así, mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 317-CAC-2019, fecha de la resolución: 06/10/2020

VOTO RAZONADO DE LA MAGISTRADA DOCTORA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE DESTITUCIÓN DEL INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

EN VISTA QUE LA SOLICITUD FUE PROMOVIDA EL UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE ES APLICABLE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, magistrada de esta Sala, expreso mi voto razonado a pronunciar el auto anterior en lo referente a la improcedencia del recurso de casación, agregando las razones siguientes:

Esta Sala por medio del auto de las ocho horas veintisiete minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veinte, ha pronunciado auto declarando

la improcedencia del recurso de casación interpuesto por la licenciada [...], en su calidad de apoderada del señor [...], impugnando el fallo pronunciado por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con sede en San Salvador, en las DILIGENCIAS DE AUTORIZACIÓN DE DESTITUCIÓN DE CARGO O EMPLEO, promovidas por el licenciado [...], en su calidad de apoderado de la parte actora, INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER, que se abrevia ISDEMU, en contra del señor [...].

Soy del criterio que es a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, a la que corresponde conocer de las controversias que puedan suscitarse, con relación a los actos pronunciados en los procedimientos seguidos ante los tribunales con competencia en materia civil, en las diligencias de autorización de destitución de cargo o empleo. Específicamente las diligencias que dieron origen al recurso de casación, fueron iniciadas en el mes de noviembre de dos mil quince. En consecuencia, lo resuelto por la Cámara de lo Civil, debería conocerse en los términos establecidos por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, emitida el catorce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, publicada en el Diario Oficial número doscientos treinta y seis, tomo número doscientos sesenta y uno, de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, en adelante LJCA (vigente hasta el 30 de enero de dos mil dieciocho).

En primer término, debe aclararse que la Ley Reguladora de Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa, en adelante LRGAEPNCCA, es aplicable a los servidores de la Administración pública, precisamente, no comprendidos en la carrera administrativa, esto es, los mencionados en los artículos 2 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, y 4 de la Ley del Servicio Civil.

El art. 4 de la LRGAEPNCCA, exige que la autoridad o el superior que pretenda remover o destituir a un empleado no comprendido en la carrera administrativa, deberá “comunicar por escrito en original y copia, al Juez de Primera Instancia que conozca en materia civil, de la jurisdicción donde el demandado desempeñe el cargo o empleo, su decisión de removerlo o destituirlo, expresando las razones legales que tuviere para hacerlo, los hechos en que la funda y proponiendo prueba”.

La letra c) del art. 4, que se comenta, establece una medida que puede adoptar la autoridad administrativa antes de la decisión del juez de lo civil, y así prescribe que “En los casos de falta grave podrá suspenderse del cargo al funcionario público infractor, quien deberá ser restituido si el juez competente fallare que no hay lugar a su despido”.

Aclarado lo anterior procede hacer algunas consideraciones relativas a la naturaleza de las potestades que ejercen los jueces de lo civil, según el caso, y la Cámara de lo civil en aplicación de la LRGAEPNCCA.

En el caso analizado el legislador ha facultado a los tribunales que conocen en materia lo civil, para determinar si hay lugar al despido que pretende realizar “la autoridad” o “el superior” respectivo.

Para concluir sobre la naturaleza de la potestad atribuida por el legislador a los tribunales de referencia, en la disposición citada, debe partirse en primer lu-

gar de la concepción de Administración pública que el legislador ha desarrollado en nuestro sistema legal.

A nivel de legislación secundaria, la disposición legal que sentó las bases relativas a los órganos que integran la Administración pública en nuestro ordenamiento jurídico, es el art. 2 de la LJCA de 1978, el cual es del contenido siguiente: "Art. 2.- Corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de las controversias que se susciten en relación con la legalidad de los actos de la Administración Pública. Para los efectos de esta ley se entiende por Administración Pública: a) el Poder Ejecutivo y sus dependencias, inclusive las instituciones autónomas, semiautónomas y demás entidades descentralizadas del Estado; b) los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos independientes, en cuanto realizan excepcionalmente actos administrativos; y, c) el Gobierno Local".

De la disposición citada se concluye que nuestro legislador, atiende a un criterio objetivo tanto para la delimitación de los órganos que conforman la Administración pública, como para la definición del acto administrativo; ya que atiende a la naturaleza de la actividad, independientemente del órgano que la realice; situación ya concebida así por el Constituyente, tal como se expondrá en párrafos posteriores.

Partiendo de la anterior aclaración, también debe tenerse en cuenta que, en nuestro medio pueden distinguirse, por una parte, órganos que por esencia tienen encomendado el ejercicio de función administrativa, tal como sucede con el Órgano Ejecutivo, las instituciones oficiales autónomas y las municipalidades; y, por otra parte, el artículo 2 LJCA, antes citado creó una categoría de órganos a los que llamó "organismos independientes", que son todos aquellos que, no perteneciendo a ninguno de los órganos fundamentales del Gobierno, y no teniendo personalidad jurídica propia, ejercen función administrativa, algunos como función esencial y otros de manera excepcional. Entre estos se encuentran, por ejemplo, las comisiones de servicio civil, el Tribunal de Servicio Civil, las juntas de vigilancia de las distintas profesiones médicas, las juntas de la carrera docente y el Tribunal de la Carrera Docente, y el Comité de Apelaciones del Sistema Financiero, entre otros.

Además, el legislador, partiendo de la concepción mencionada, incluyó entre los órganos que ejercen función administrativa y que por tanto dictan actos administrativos, controlables en sede jurisdiccional contencioso administrativa, a los Órganos Legislativo y Judicial en cuanto excepcionalmente emiten actos administrativos.

Esa misma concepción de Administración pública es la adoptada por el legislador en la LJCA vigente a partir del 31 de enero de dos mil dieciocho, cuando determina en el art. 2 que *"La jurisdicción contencioso administrativa será competente* para conocer de *las pretensiones que se deriven de las actuaciones u omisiones* de *la Administración* pública *sujetas al derecho administrativo".* Y al realizar el reparto de competencias entre los juzgados, Cámaras y Sala de lo Contencioso Administrativo, incluye el conocimiento de las actuaciones del Órgano Judicial y del Legislativo, y de organismos independientes, en cuanto estén sujetas al derecho administrativo, entre otros (arts. 12 al 14 de la LJCA vigente).

Por su parte, la Ley de Procedimientos Administrativos, en adelante LPA, aprobada mediante Decreto Legislativo número ochocientos cincuenta y seis, de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial número treinta, tomo cuatrocientos dieciocho, del día trece de febrero de dos mil dieciocho; define como ámbito de aplicación de la misma el siguiente: "art. 2. La presente ley se aplicará al Órgano Ejecutivo y sus dependencias, a las entidades autónomas y demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación se califique de carácter especial; y a las municipalidades, en cuanto a los actos administrativos definitivos o de trámite que emitan y a los procedimientos que desarrollen. Asimismo, se aplicará a los Órganos Legislativo y Judicial, la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el Consejo Superior de Salud Pública, el Tribunal Supremo Electoral y, en general, a cualquier institución de carácter público, cuando excepcionalmente ejerza potestades sujetas al derecho administrativo. Esta ley será aplicable a los concesionarios de la Administración Pública".

Coincide con el criterio adoptado en nuestro ordenamiento jurídico para definir a la Administración pública, con relación a la función administrativa atribuida a los órganos fundamentales del Estado, el tratadista Miguel S. Marienhoff, sostiene que "Cada uno de los órganos esenciales -legislativo, ejecutivo y judicial-, aparte de sus propias funciones específicas, ejerce o realiza otras de la misma naturaleza que aquellos que caracterizan a los demás órganos. El Congreso legisla, juzga, ejecuta o administra. Igual cosa ocurre con el órgano judicial: juzga sin perjuicio de realizar actos de naturaleza legislativa, y otros donde actúa ejecutivamente o como administrador. De modo que la función administrativa no está circunscripta a uno solo de los expresados órganos: si por principio constituye la función específica del ejecutivo, es en cambio compartida por los órganos legislativo y judicial. Pero el carácter substancial y distintivo de estas actividades no se modifica, cualesquiera fuesen los organismos que la produzcan o el procedimiento que se utilice para su producción. Es por eso que en los estudios científicos del derecho administrativo predomina la concepción "objetiva" de Administración Pública, en cuyo mérito pertenece a la órbita del derecho administrativo la regulación de cualquier acto de función administrativa, aunque no sea cumplido por el llamado "Poder Ejecutivo". (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Teoría General, quinta Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, pag. 44).

En lo concerniente a las funciones atribuidas al Órgano Judicial, debemos comenzar afirmando que, en nuestro sistema legal, la Constitución de la República, en adelante Cn, asigna al Órgano Judicial como función esencial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, art. 172 Cn: *"la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y los* demás *tribunales que establezcan las* leyes *secundarias, integran el Órgano Judicial. Corresponde exclusivamente* a *este Órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil,* laboral, *agraria* y de *lo contencioso administra-*

tivo, así como en las otras que determine la ley". Es decir que la función que el Constituyente atribuye como actividad esencial al Órgano Judicial, es la función jurisdiccional.

No obstante, el mismo Constituyente ha atribuido a Órgano Judicial, el ejercicio de función administrativa. Por ejemplo, las potestades conferidas en el art. 182 números 9, 10, 12 y 240 Cn.

Entre estas potestades encontramos la relativa a la aplicación del régimen disciplinario a todo el personal de la Corte Suprema de Justicia, y a los miembros de la carrera judicial (art. 182 n° 9 Cn). La administración de la carrera judicial, que también es función administrativa, la comparte, en algunos aspectos con el Consejo Nacional de la Judicatura.

Por otra parte, el legislador secundario, también ha concebido en leyes especiales, tal como sucede con la LRGAEPNCCA, que el Órgano Judicial ejerza función administrativa.

La función relativa a la administración de personal, sin lugar a dudas, es materia sujeta al derecho administrativo. Las potestades atribuidas por el Constituyente, mencionadas con anterioridad, así como las que confieren la Ley de la Carrera Judicial, Ley del Servicio Civil, Ley de la Carrera Docente, y Ley de la Carrera Administrativa Municipal, entre otras, constituye potestades de carácter administrativo como regla general, y el ejercicio de las mismas constituye función administrativa.

Como parte de la función administrativa que despliegan los diferentes órganos que conforman el Estado, se encuentra precisamente la aplicación del régimen de personal, el cual encaja en el denominado régimen disciplinario como manifestación de la potestad sancionadora que ejerce la Administración pública respecto de los empleados y funcionarios que la componen.

Es así como el legislador secundario desarrolla algunas de las potestades constitutivas de función administrativa atribuida al Órgano Judicial, esencialmente a través de la Ley de la Carrera Judicial. Sin embargo, además, confiere al mismo Órgano Judicial, otras potestades de naturaleza administrativa, relativas a regímenes disciplinarios, tal como sucede con la atribuida en el art. 4 LRGAEPNCCA, respecto de los tribunales de lo civil, relativa a "autorizar" la sanción de despido que pretendan ser impuestas al personal a quienes resulta aplicable la ley antes mencionada.

Los tratadistas García de Enterría y Fernández, sobre la potestad disciplinaria sostienen que: [...] la Administración, para mantener "la disciplina" interna de su organización, ha dispuesto siempre de un poder disciplinario correlativo en virtud del cual puede imponer sanciones a sus agentes, sanciones atinentes normalmente al régimen funcionaria! de los sancionados. [...] La peculiaridad de esta especie de sanciones administrativas residen en dos caracteres: el reconocimiento de una especie de titularidad natural de la Administración, derivada del actual de su propio ámbito interno o doméstico tutelando su propia organización y funcionamiento, por una parte; y, en segundo término, la estimación como ilícitos sancionables de conductas valoradas con criterios deontológicos más que estrictamente jurídicos (García de Enterría, Eduardo, y Fernández, Tomas-Ra-

món, Curso de Derecho Administrativo II, novena edición, Editorial Civitas, Madrid, 2004, págs. 169 y 1 70).

Debe precisarse que la LRGAEPNCCA, fue emitida para llenar un vacío legal relativo a la necesidad de garantizar la audiencia y defensa respecto de funcionarios y empleados no comprendidos en la Ley del Servicio Civil, "en los que se carece de la ley secundaria que regule las obligaciones y deberes de los empleados públicos, así como en donde se establezcan las causas y procedimientos para su destitución", (considerando III LRGAEPNCCA).

Es decir que la función que realizan los tribunales con competencia en materia civil, a partir de las potestades que les confiere la LRGAEPNCCA, constituye un requisito *sine quo non* para el despliegue de una actividad disciplinaria que ejerce la autoridad municipal, para remover o destituir a empleados municipales; en tal sentido, es un requisito para hacer cumplir el régimen disciplinario aplicable a los funcionarios y empleados no comprendidos en la carrera administrativa.

Es decir que la autoridad municipal, necesita de autorización de tribunales con competencia en materia lo civil, (los cuales actúan en tales condiciones, de manera excepcional como Administración pública), para que se lleve a cabo la destitución o despido. Estos tribunales están llamados por ley, a constatar el cumplimiento de las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico, para que proceda el despido o destitución; actuación que sólo constituye un eslabón en el procedimiento de despido.

De lo resuelto por el Juzgado de lo Civil y Mercantil, o con competencia en materia civil, procede la interposición de recurso, siempre de carácter administrativo, para ante la Cámara de lo civil: *"[...]* La *parte vencida podrá recurrir en revisión del fallo* para ante la Cámara de lo Civil *competente [...]"* En este caso, la Cámara de lo civil conocerá también como Administración pública, del recurso que pueda interponerse de la decisión del juez correspondiente.

Consecuentemente las resoluciones que emiten dichos tribunales en este tipo de procedimiento, tienen el carácter de actos administrativos, al configurarse como declaraciones de voluntad emitidas de manera unilateral, por la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria; en materia de personal al servicio de la Administración pública, específicamente, relativas al régimen disciplinario.

Como es sabido, el acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, productora de efectos jurídicos, dictada por la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria (Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de las ocho horas del día diecinueve de noviembre de dos mil tres, pronunciada en el juicio con referencia 79-B-2001; entre otras.

Como consecuencia, **las actuaciones realizadas por los juzgados y Cámaras antes mencionados en el ejercicio de la potestad que se comenta, deben estar sujetas al control de la jurisdicción contencioso administrativa,** pues en un Estado de derecho no pueden existir ámbitos de actuación de la Administración pública exentos del control jurisdiccional.

Desconociendo la naturaleza de las actuaciones como las que han sido impugnadas a través del recurso de casación presentado, así como los alcances

del derecho a la protección jurisdiccional, el legislador estableció en el artículo 6 inciso final de la LRGAEPNCCA, que "De lo resuelto por la Cámara de lo Civil no habrá recurso alguno, ni corresponderá su conocimiento a la jurisdicción de lo contencioso administrativo".

La disposición citada, resulta, por tanto, inconstitucional, por lo que no debe ser aplicada por los tribunales; en consecuencia, las decisiones a las que se alude en la presente resolución, son impugnables en sede contencioso administrativa; ya que mediante la misma, el legislador ha excluido la posibilidad de control jurisdiccional, de las actuaciones administrativas de los juzgados de lo civil, y de la Cámara de lo civil, a las que se refiere el presente voto, con la consecuente vulneración al derecho de protección jurisdiccional.

Como consecuencia, la resolución emitida por el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, y por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro con sede en San Salvador, no pueden ser del conocimiento de esta Sala, y debe declararse incompetente para conocer del recurso de mérito.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el art. 6 inc final LRGAEPNCCA, dispone que "De lo resuelto por la Cámara de lo Civil no habrá recurso alguno, ni corresponderá su conocimiento a la Jurisdicción contencioso administrativa".

Por tanto, la disposición transcrita, en cuanto impide el control contencioso administrativo de las decisiones administrativas adoptadas por los tribunales con competencia en materia civil dictadas en aplicación de dicha ley, relativas a la procedencia de la remoción o destitución de los funcionarios y empleados a quienes resulte aplicable la LRGAEPNCCA; resulta violatoria del derecho a la protección jurisdiccional (artículos 2 y 11 Cn), respecto de las decisiones de referencia. En consecuencia, no debe ser aplicada por los tribunales respectivos, en ejercicio de la potestad que confiere a todos los tribunales el art. 185 Cn, el cual instituye el control difuso de constitucionalidad.

Cabe dejar claro también que los procesos iniciados en la Sala de lo Contencioso Administrativo hasta antes del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, deben ser conocidos por esa Sala como tribunal de única instancia; según el esquema competencial salvadoreño. Con la vigencia de la LJCA adoptada en 1978, la Sala de lo Contencioso Administrativo, se configuró como único tribunal con competencia para conocer de esa materia.

Además, debe tenerse en cuenta que, en vista de que la demanda de las diligencias de destitución de cargo promovidas por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, fue planteada el 1 de noviembre de dos mil quince, le es aplicable la LJCA de 1978; por lo que debe ser remitida a la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Con base en las razones expresadas, a mi juicio, este recurso resulta improcedente, pero no por las razones expresadas en el auto dictado por esta Sala a las ocho horas veintisiete minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veinte; sino porque la legalidad de los actos impugnados, debe ser ventilada en la jurisdicción contencioso administrativa, y no vía recurso de casación civil.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 93-CAC-2019, fecha de la resolución: 29/09/2020

VOTO RAZONADO DE LA MAGISTRADA DOCTORA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

OMISIÓN EN LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA SENTENCIA, AL NO CITAR LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE DETERMINAN EL ALCANCE DE LAS DECISIONES PRONUNCIADAS POR LA INSTITUCIÓN

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, en mi calidad de magistrada de la Sala lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, a continuación, expongo mi voto razonado, por no estar de acuerdo con las motivaciones de la resolución que antecede.

En el presente caso, el impetrante, a folios [...] frente de su libelo, ha argumentado la falta de fundamentación de la decisión impugnada, de la siguiente manera: "[...] Por otro lado, la Honorable Cámara en las conclusiones de su Resolución, declara que "La recomendación emitida por la Procuraduría no origina el nacimiento de una pretensión indemnizatoria por daños, pues no deriva de una autoridad jurisdiccional que deje expedito tal Derecho, es decir que la intervención de la aludida institución de ningún modo supone un poder para reclamar en sede judicial el cumplimiento de su recomendación". A este respecto cabe recordar nuevamente, que la Honorable Cámara, ha omitido mencionar en que disposición legal fundamenta tal afirmación, y ante dicha omisión, la Honorable Cámara, ha incumplido también a una decisión fundada, principio básico del debido proceso Legal y garantía de NO ARBITRARIEDAD [...]"(sic) [...].

Al respecto, tal como puede advertirse de la lectura de la sentencia de la Cámara, de la que se conoce en apelación, se advierte claramente que dicho tribunal no citó los artículos 32 y 33 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que son las disposiciones legales que establecen los alcances de los efectos de las decisiones de la mencionada institución; y, por tanto, los efectos de las mismas.

Debe mencionarse la Cámara, en su sentencia, únicamente citó el artículo 172 de la Constitución de la República, en los siguientes términos: "[...] Pero en el ejercicio de la función jurisdiccional, el poder judicial es soberano, y los jueces actúan con independencia en el ejercicio de sus funciones, sin el temor de que sus decisiones puedan ocasionar responsabilidad al Estado, por cuanto éste en su faceta de juzgador, se encuentra amparado en lo dispuesto en el Inc. 1° del Art. 172 Cn. El cual determina que la Corte Suprema de Justicia, las Cámara de Segunda Instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias, integran el Órgano Judicial, al cual le corresponde exclusivamente la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso- administrativo, así como en las otras que determine la ley [...]" (sic).

Y Agrega en el apartado 2.9 del auto impugnado lo siguiente: "[...] Así las cosas, en el caso de la actuación lícita del poder judicial, donde la actividad a

desarrollarse a veces requiere la obligación de dictar medidas restrictivas de la libertad y de la disponibilidad de los bienes durante el curso del proceso, los daños en tales casos deben ser soportados por quienes los padecen, ya que sostener lo contrario, implicaría que cualquier demandante o demandado que se le haya desestimado su pretensión, tendría el derecho de reclamarle daños directamente a los funcionarios que pronunciaron la sentencia y subsidiariamente al Estado, lo que iría en contra del ejercicio legítimo de la potestad de juzgar [...]" (sic).

Es importante tener en cuenta el art. 172 de la Constitución de la República, dispone que "La Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias, integran el Órgano Judicial. Corresponde exclusivamente a este Órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, así como en las otras que determine la ley."

Sin embargo, si bien esta disposición constitucional destaca algunas características de la función jurisdiccional, no comparto el criterio sostenido en la sentencia respecto de la que disiento en su fundamentación en lo concerniente a este aspecto; en cuanto se afirma, en lo relativo a la fundamentación de la Cámara, que el contenido del art. 172 Cn, denota "(...) una fundamentación coherente al ordenamiento jurídico, la cual tiene conexión con lo antes apuntado, relativo a la falta de coercibilidad de las resoluciones de la PDDH, puesto que dicho atributo ha sido reconocido por el constituyente exclusivamente para los órganos jurisdiccionales, y no hay ni siquiera indirectamente un supuesto en el que los proveídos de la referida institución, constituyan un título de ejecución para garantizar la eficacia de los mismos, o que sirvan de fundamento para una pretensión indemnizatoria."

Considero que no es posible aceptar o asumir como fundamento de la decisión de la Cámara, una comparación con las características de la función jurisdiccional, establecidas en el artículo 172 de nuestra Constitución, las cuales, dicho sea de paso, no están en discusión.

Lo anterior, a pesar de que no hay disposición de rango constitucional que establezca las connotaciones de las resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Tal como se verá a continuación, son disposiciones de rango legal, las que se encargan de establecer los alcances de las decisiones de esa institución.

Los artículos en los que la Cámara debió fundamentar su decisión son los siguientes:

Art. 32 LPDDH: "Cuando en la resolución se hicieren recomendaciones a ser cumplidas por la persona, autoridad o entidad responsable; si en el plazo razonable señalado por el Procurador no se tomaren las medidas o no se informare de las razones para no adoptarlas, emitirá censura pública, sin perjuicio de hacer del conocimiento de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del caso y las recomendaciones sugeridas".

Y el art. 33 de la misma ley dispone la siguiente consecuencia: “El Procurador podrá publicar la resolución, si lo estimare conveniente o emitir resoluciones de censura pública en casos graves, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, por falta de colaboración u obstaculización en sus actuaciones o por incumplimiento de sus recomendaciones y en las demás situaciones que determine. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”.

Además, no debe perderse de vista que hay decisiones de otras autoridades, distintas a los jueces y magistrados, pero que, no obstante, gozan de las características de ejecutividad y ejecutoriedad, tal como sucede, por ejemplo, con los actos administrativos. Así lo disponen los artículos 30 y 31 de esa misma Ley de Procedimientos Administrativos. Por lo que tal situación, también deja de manifiesto, la insuficiente fundamentación jurídica que representa la cita del art. 172 Cn, en el caso analizado.

Es así como, definitivamente, no puede constituir fundamento de la decisión de la Cámara, en cuanto a los alcances y naturaleza de las decisiones de la PDDH, el art. 172 Cn, ya citado.

Por tanto, se advierte claramente que existió omisión por parte de la Cámara en la fundamentación de la sentencia de la que se conoce en el presente recurso; al no haber citado las disposiciones legales que determinan los alcances de las decisiones pronunciadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; a pesar de ser este el aspecto central en la motivación de su sentencia, según el pronunciamiento que hizo en el correspondiente fallo.

En consecuencia, resulta claro que ha existido omisión en la fundamentación jurídica de la sentencia objeto de este recurso.

Tanto es así que en la sentencia a la que se refiere el presente voto se han realizado las siguientes afirmaciones.

“Al respecto, el artículo 32 LPDDH, establece: “Cuando en la resolución se hicieren recomendaciones a ser cumplidas por la persona, autoridad o entidad responsable; si en el plazo razonable señalado por el Procurador no se tomaren las medidas o no se informare de las razones para no adoptarlas, emitirá censura pública, sin perjuicio de hacer del conocimiento de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del caso y las recomendaciones sugeridas”. En tal sentido, de la disposición transcrita, se colige que las recomendaciones dadas en los procesos de que conoce la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, no generan el rigor requerido para hacerlas valer en un proceso como el que nos ocupa, ya que la consecuencia prevista por el legislador, ante el incumplimiento de las sentencias, consiste en emitir una censura pública. Debe tenerse en cuenta que dicha censura pública es la última ratio que posee la PDDH, para tratar de hacer cumplir sus decisiones, pero con un carácter moral, ello debido a la falta de coercibilidad para ejecutar una resolución de responsabilidad emitida por dicha institución, y que tenga por objeto restituir o indemnizar a la víctima del derecho que le ha sido violado (...)” (sic).

Es decir, que el verdadero fundamento legal son los artículos 32 y 33 de la LPDDH, los cuales fueron omitidos en la sentencia de la Cámara."

POSIBILIDAD QUE LA SALA DE LO CIVIL, CONOCIENDO EN APELACIÓN, CORRIJA LA MOTIVACIÓN JURÍDICA DE LA SENTENCIA QUE HUBIERE PRONUNCIADO EL TRIBUNAL INFERIOR

"Por tanto, lo que corresponde legalmente en el caso analizado, es que esta Sala se pronuncie en tal sentido, y proceda a motivar debidamente la sentencia impugnada.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si bien no existe disposición legal que prevea de manera específica tal posibilidad para el recurso de apelación, no puede privarse al tribunal que conoce por vía del mismo, del ejercicio de esta potestad. En una posición contraria, se estaría vedando la posibilidad de que el tribunal de apelación pueda pronunciarse sobre errores que pertenecen al derecho, y corregir así la fundamentación jurídica de la sentencia que hubiere pronunciado el tribunal inferior.

En todo caso, el derecho debe interpretarse de manera sistemática y atendiendo a la finalidad prevista por el legislador en cada caso.

La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en la sentencia pronunciada a las ocho horas y veintisiete minutos del día veintiséis de junio del año dos mil quince, en el juicio con referencia número 53-20CM2-2015, se pronunció en el sentido de que el art. 538 CPCM, que permite la corrección de la motivación en casación, también es aplicable a la apelación. Lo hizo en los términos siguientes: "En cuanto a la falta de fundamentación, el art. 538 CPCM., no obstante está referido a la casación, pero contiene un principio aplicable a la apelación, y es la corrección de motivación jurídica, es decir, que el recurso de apelación, procede ser desestimado aun cuando no existiera la motivación o no fuere la atinente, por lo que debe confirmarse la sentencia, estableciendo la Cámara la motivación correspondiente (...)" Criterio que comparto, según he explicado con anterioridad.

Asimismo, la Sala de lo Civil, al conocer en apelación, en la sentencia pronunciada a las a las diez horas cincuenta minutos del veinte de octubre de dos mil diecisiete, también procedió a corregir la motivación jurídica del tribunal de primera instancia proceso con referencia 9-APC-2017).

Es por las razones antes expuestas que, en el aspecto analizado, no comparto la fundamentación jurídica de la sentencia autorizada por mis colegas magistrados, puesto que en la misma se parte de la base de que la Cámara sí motivó suficiente y debidamente la sentencia que se ha conocido en apelación por esta Sala.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 17-APC-2019, fecha de la resolución: 18/12/2020

VOTO RAZONADO

EN LOS VOTOS RAZONADOS EL MAGISTRADO NO TIENE POR QUÉ PRONUNCIARSE SOBRE ASPECTOS DE LA RESOLUCIÓN CON LOS QUE ESTÁ DE ACUERDO

"5. La licenciada [...], asimismo, en el mismo escrito, solicita con base en el art. 226 CPCM, "la subsanación de la omisión de pronunciamientos", específicamente, en cuanto a la denuncia de nulidad cometida por el Tribunal de Primera Instancia, por la razón que dicho tribunal no fundamentó el rechazo de la aportación de la prueba. Alega que la magistrada doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, en su voto razonado, no se pronunció sobre la referida nulidad.

Al respecto, se advierte que, en el auto dictado por esta Sala, en el que se declaró la improcedencia del recurso de casación, previo a dicha declaratoria, fue resuelta la nulidad alegada por la impetrante; y al final de la misma, antes de la parte resolutiva se dijo: "con base en el art. *220 inc. 2°* CPCM, se deja constancia que la *presente* resolución, en cuanto a las razones de improcedencia del recurso de casación, ha sido formada con los votos de los magistrados licenciado Oscar *Alberto* López Jerez y doctor *Ovidio Bonilla Flores,* no así por *parte de la* magistrada doctora *Dafne Yanira Sánchez de Muñoz*, *quien razonará* su voto, por no estar de acuerdo con la fundamentación de la *misma,* por considerar razones *distintas* de improcedencia, relativas a la competencia de esta Sala para conocer de las mismas, por lo *que* expone a continuación su voto razonado".

De lo anterior denota que la razón por la cual la doctora Sánchez de Muñoz, no estuvo de acuerdo con ser parte de la decisión de improcedencia, fue la fundamentación adoptada por sus colegas magistrados, y la consecuente decisión de improcedencia; pero únicamente respecto a tal decisión. Siendo lógico y coherente que estuvo de acuerdo con las demás argumentaciones de la decisión respecto a la nulidad alegada por la impetrante.

En consecuencia de ello, no tiene por qué pronunciarse en el voto razonado de algo que perse, está de acuerdo, así funciona; y dicho proceder no tiene nada qué ver con el principio de congruencia que menciona la impetrante, ya que como se ha transcrito la parte final del dicha resolución, la magistrada Sánchez de Muñoz, aclaró que su voto razonado sería únicamente respecto a la fundamentación y consecuentemente, con la decisión que al respecto se adoptó; en cuanto a la improcedencia, que al respecto se adoptó; mas no mencionó nada con relación a la nulidad, por estar de acuerdo.

Por lo anterior, no se configura tampoco la omisión de pronunciamiento sobre alguna petición, regulada en el art. 226 CPCM; en consecuencia se declarará no ha lugar."

Sala de lo Civil, número de referencia: 93-CAC-2019, fecha de la resolución: 17/12/2020

MATERIA: FAMILIA

APLICACIÓN ERRÓNEA DE LEY

DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD, SE ADVIERTE UNA SIMPLE INSATISFACCIÓN CON LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, CON LOS QUE PRETENDIERON DEMOSTRAR LA PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS POR CADA CÓNYUGE DENTRO DEL MATRIMONIO

"En primer lugar los recurrentes, alegan como motivo de fondo, la aplicación errónea del art. 38 CF; por haber confirmado la ad quem la desestimación de la pretensión de "reintegro" de gastos del hogar solicitada por el señor […], en contra de la señora […], los que ascienden a la cantidad de ($96, 413.88).

Sostienen que la Cámara: sentenciadora, fundamentó su decisión, bajo el siguiente argumento: "[...] el señor […] ha alegado la falta de aportación para sufragar los gastos de familia por parte de la señora […], en ese sentido se ha probado en aplicación del 314 C.P.C.M., con lo dicho por ambas partes materiales que la señora […], aún y cuando no se desempeñaba laboralmente, ha aportado monetariamente al hogar conyugal lo obtenido por el arrendamiento de un bien inmueble del cual ella es la nuda propietaria; a lo anterior se suma el hecho que, dicha señora era quien se encargaba del cuidado de los hijos de ambos, lo cual puede ser considerado también como su contribución a sufragar los gastos de la familia, según lo regulado en el art. 38 C.F., en dicho artículo también se equipara el cuidado de los hijos como equivalente a la contribución para sufragar los gastos aportados por el otro cónyuge, por lo que no puede decirse, tal como lo ha pretendido el señor […], que la señora […], no ha contribuido con sus aportaciones al hogar conyugal y mucho menos que por tal incumplimiento el haya adquirido las deudas con instituciones financieras.[...] "sic.

Asimismo, los recurrentes sostienen que la infracción de ley específicamente en la errónea aplicación, se configura cuando el tribunal sentenciador da a la norma seleccionada, un sentido que realmente no tiene, debido a diferentes causas que lo llevan a darle una interpretación equivocada, rígida, y !imitadora al acceso a la justicia, independientemente de toda cuestión de hecho; lo que a su juicio, sucedió en este caso al no aplicar debidamente el art. 38 CF; en primera y segunda instancia.

Los recurrentes argumentan que la errónea aplicación del art. 38 CF, radica en que el tribunal ad quem, aun habiéndose tenido por probado en este proceso que ambos cónyuges acordaron el estilo de vida que tendrían como familia y la educación que se le daría a los hijos, no se acordó, que el desempeño de uno de ellos sería el cuido de los hijos y del hogar.

Asimismo enfatizan los impetrantes que ha quedado probado en el proceso, el apoyo en el desarrollo integral de su patrocinado para con sus hijos en todo momento y circunstancia, que a principios del matrimonio, ambos cónyuges se desempeñaron laboralmente, siendo que a sus inicios, la señora […], trabajó

como odontóloga, tanto en su clínica particular como en el hospital Militar; que, al mismo tiempo, dicha señora recibía el canon de arrendamiento, por la suma aproximada de dos mil dólares, de un inmueble del que tiene la nuda propiedad, ingresos que mensualmente aportaba al hogar, destinado para pagar la Escuela Americana de sus hijos así como otros compromisos financieros adquiridos dentro del matrimonio, situación que consta en el expediente.

Sin embargo, en la sentencia que hoy recurren nada se dijo de eso, que tanto la jueza de primera instancia como la Cámara, le dieron un sentido a la norma que no es, porque se probó por parte de los recurrentes en la audiencia de sentencia, por medio de la declaración de propia parte y de parte contraria, que la señora […] aportaba al hogar el monto antes expresado, pero que dejó de hacerlo, desde mediados de dos mil trece.

Insisten los recurrentes en el párrafo segundo de la página seis de su recurso, que la errónea aplicación del art. 38 CF, consiste, en sostener que la señora […], no se desempeñaba laboralmente; a pesar de que, consta en autos, que ella sí laboró durante el matrimonio, y además aportaba el cuantioso canon de arrendamiento del inmueble que es de su propiedad. Que la ad quem no tomó en cuenta que dicha aportación fue hasta mediados del año dos mil trece. Aseguran, que tanto con la declaración de propia parte como la prueba documental que consta en el expediente, se estableció que las deudas del señor […], incrementaron, a partir de la falta de aportación monetaria que hizo la señora […].

Consideran los abogados impetrantes que el criterio de la Cámara sentenciadora, es errado en cuanto sostienen que el que la señora […], encargara del cuidado de los hijos de ambos, equivale a su contribución para sufragar gastos de familia; debido a que ambos cónyuges, al inicio del matrimonio, trabajaban y cuidaban a los hijos. Asimismo, argumentan que la Cámara no tomo en consideración el aporte económico que el hogar dejo de percibir de parte de la señora […], y que tal situación provocó que en su poderdante recayera todo el soporte económico de la familia, que incluyen créditos ya existentes y nuevos. Que la errónea aplicación del art. 38 CF; es porque tal disposición obliga a los cónyuges a aportar económicamente al hogar en proporción a sus ingresos, como lo hacía la señora […] al aportar el canon de arrendamiento; que al dejar de hacerlo, se configura el supuesto enmarcado en el precepto infringido.

Esta Sala ha sostenido, de manera reiterada, que el motivo de casación de infracción de ley, por aplicación errónea, tiene cabida cuando la Cámara sentenciadora ha aplicado la disposición que se considera infringida, la cual es acorde al conflicto formulado, pero al analizarla, le da un alcance distinto, errado al efecto de la misma previsto por el legislador.

Es decir, que al recurrir en casación amparado bajo este motivo, es necesario argumentar claramente en el escrito de impugnación, que la Cámara ha aplicado el precepto legal que se considera infringido, el que es pertinente al caso, pero que, sin embargo, hizo un razonamiento distorsionado al respecto; debiendo expresar de manera clara el supuesto yerro.

El art. 38 C.F., literalmente expresa: “Los cónyuges deben sufragar en proporción a sus recursos económicos, los gastos de la familia. Si uno de ellos no

tuviere bienes ni gozare de emolumento alguno, el desempeño del trabajo del hogar o el cuidado de los hijos se estimará como su contribución a tales gastos, con el mismo significado que las aportaciones del otro. Si alguno de los cónyuges, por incumplimiento del otro se hubiere visto obligado a contraer deudas para sufragar gastos de la familia, éste será solidariamente responsable de su pago. El juez, en este caso podrá moderar la cuantía de los gastos, atendiendo a las condiciones de vida de la familia y a la razonabilidad de los mismos."

Al analizar el escrito de interposición del recurso, se advierte que se ha omitido precisamente argumentar, la aplicación errónea del art. 38 del código de familia, en la sentencia impugnada; ya que de lo expuesto por los recurrentes, se advierte una simple insatisfacción con la valoración de los medios probatorios con los que pretendieron demostrar la proporción de los recursos económicos aportados por cada cónyuge dentro del matrimonio; y los cuales, a su juicio no fueron tomada en cuenta para aplicar al reintegro de gastos dentro del hogar; que, en consecuencia fue mal estimado el desempeño del hogar y cuido de los hijos como su contribución a los gastos de familia.

Por tanto lo expuesto por los recurrentes no va encaminado a señalar el yerro cometido por la ad quem al interpretar dicha disposición, es decir no se expresó de qué forma se interpretó mal esa disposición legal.

Asimismo, debe tenerse en cuenta, que el tener por acreditado o establecido, con el desfile probatorio, la desmejora o capacidad económica del señor […], y que la señora […], únicamente se dedicó al cuido de los hijos y del hogar, no es un asunto de aplicación errónea, sino un tema de valoración probatoria, que puede desembocar en otro vicio.

Por lo tanto no se puede entrar al examen del vicio que se analiza, debido a que no se ha determinado en qué sentido se restringió o amplió el contenido del art. 38 CF.

Al no haberse cumplido con la técnica casacional, al desarrollar el concepto de la infracción, por no existir coherencia entre el motivo alegado y la norma considerada como infringida; se advierte que el recurso fue indebidamente admitido por ese submotivo.

2. En segundo lugar, se ha invocado como vicio cometido por la ad quem, la inaplicación del artículo 56 de la Ley Procesal de Familia.

Sostienen los impetrantes, que dicha disposición fue infringida por la Cámara sentenciadora, al no haberse apreciado toda la prueba que consta en el expediente; que no se le dio el valor que realmente tiene, pues no se analizó la capacidad económica del señor [...]; por tanto consideran que no se aplicó la sana crítica.

Al respecto esta Sala, advierte que lo expresado por los recurrentes, es una mera inconformidad con la valoración de la prueba, que hizo la Cámara sentenciadora, dando como resultado la desestimación de la reconvención, respecto al reintegro de gastos. Los recurrentes no han desarrollado un concepto de inaplicación de ley, específicamente del art. 56 LPF. En ese sentido, no plantean argumentos que fundamenten el motivo invocado, sino un desacuerdo con la decisión de la Cámara, que puede encajar en el supuesto de otro motivo, consi-

derándose que debieron los recurrentes desarrollar otro vicio, en virtud de haber previsto el legislador como motivo de forma, numeral 14 del artículo 523 CPCM, la infracción a los requisitos internos de la sentencia, al concebir como tal al omitir la relación de los hechos probados, lo cual constituye la supuesta infracción que señalan, debiéndose rechazar asimismo el estudio respecto a esta causal.

3. En consecuencia, después de analizar el motivo invocado, los argumentos de los impetrantes y lo expresado por la Cámara, se concluye que el recurso fue indebidamente admitido, respecto a la aplicación errónea del artículo 30 del Código de Familia y en relación a la inaplicación del art. 56 de la Ley Procesal de Familia, por lo que vuelve imposible el estudio del recurso de casación."

Sala de lo Civil, número de referencia: 171-CAF-2019, fecha de la resolución: 17/01/2020

INAPLICABILIDAD DE LA LEY

LOS RECURRENTES NO HAN DESARROLLADO UN CONCEPTO DE INAPLICACIÓN DE LEY, ESPECÍFICAMENTE DEL ART. 56 LPF

"2. En segundo lugar, se ha invocado como vicio cometido por la ad quem, la inaplicación del artículo 56 de la Ley Procesal de Familia.

Sostienen los impetrantes, que dicha disposición fue infringida por la Cámara sentenciadora, al no haberse apreciado toda la prueba que consta en el expediente; que no se le dio el valor que realmente tiene, pues no se analizó la capacidad económica del señor […]; por tanto consideran que no se aplicó la sana crítica.

Al respecto esta Sala, advierte que lo expresado por los recurrentes, es una mera inconformidad con la valoración de la prueba, que hizo la Cámara sentenciadora, dando como resultado la desestimación de la reconvención, respecto al reintegro de gastos. Los recurrentes no han desarrollado un concepto de inaplicación de ley, específicamente del art. 56 LPF. En ese sentido, no plantean argumentos que fundamenten el motivo invocado, sino un desacuerdo con la decisión de la Cámara, que puede encajar en el supuesto de otro motivo, considerándose que debieron los recurrentes desarrollar otro vicio, en virtud de haber previsto el legislador como motivo de forma, numeral 14 del artículo 523 CPCM, la infracción a los requisitos internos de la sentencia, al concebir como tal al omitir la relación de los hechos probados, lo cual constituye la supuesta infracción que señalan, debiéndose rechazar asimismo el estudio respecto a esta causal.

3. En consecuencia, después de analizar el motivo invocado, los argumentos de los impetrantes y lo expresado por la Cámara, se concluye que el recurso fue indebidamente admitido, respecto a la aplicación errónea del artículo 30 del Código de Familia y en relación a la inaplicación del art. 56 de la Ley Procesal de Familia, por lo que vuelve imposible el estudio del recurso de casación."

Sala de lo Civil, número de referencia: 171-CAF-2019, fecha de la resolución: 17/01/2020

REQUISITOS A CONSIDERAR PARA QUE PROCEDA EL VICIO ALEGADO

"Análisis del recurso

-Argumentos del recurrente, respecto del motivo de infracción de ley, por inaplicación del art. 357 CPCM

El impugnante señala que: "En el presente caso, la Cámara de Familia inaplicó lo establecido en el Art. 357 CPCM, lo cual se asevera sobre el fundamento de que la testigo ********, manifestó que a ella le constaban los actos de infidelidad de su padre por el hecho de que una de las empleadas de la empresa (sin determinar quiénes, cuándo o el modo) le indicaron que ellas tenían una relación con su padre; este dicho la Cámara lo toma por cierto, puesto que indica que en reiteradas sentencias, han tomado en cuenta que es difícil comprobar los hechos de infidelidad, y que con este dicho, se puede acreditar"(sic).

Establece el recurrente, que no se tomó en consideración lo establecido en el artículo 357 CPCM, siendo que los testigos deben indicar cómo obtuvieron la información, careciendo -a juicio del recurrente- de valor su dicho cuando sean de referencia; así sostiene que la testigo ********, expresó que fueron las empleadas quienes le manifestaron que su padre mantenía una relación extramarital, hecho que para la ad quem, indiciariamente comprueba la falta al deber de fidelidad del señor ********.

Agrega el profesional [...], que con la valoración de la prueba testimonial aportada por la testigo ********, el tribunal sentenciador está omitiendo en su totalidad lo establecido en el artículo 357 del Código Procesal Civil y Mercantil, ello en virtud de que el hecho que el señor ********, saliera con mujeres distintas a la señora ********, no es un hecho que haya sido presenciado de forma directa por dicha testigo.

Asimismo, sostuvo el impugnante, que lo anterior propicia vulneración del señalado artículo 357, por parte del ad quem, ya que ésta le dio total credibilidad a tal declaración, siendo que claramente la declarante señora ********, mencionó que los hechos únicamente le constan por referencia, y que consecuentemente su testimonio carece de credibilidad, por lo tanto el divorcio por el motivo de vida intolerable, debió declararse no ha lugar.

-Análisis de la inaplicación del art. 357 CPCM

La norma invocada como transgredida, es del contenido siguiente: **"Razón del conocimiento. Testigo de referencia Art.357.-El** testigo siempre deberá dar razón de su dicho, con explicación de las formas y circunstancias por las que obtuvo conocimiento sobre los hechos. No hará fe la declaración de un testigo que no tenga conocimiento personal sobre los hechos objeto de la prueba o cuando los hubiera conocido por la declaración de un tercero".

Así, el examen de legalidad que ha de realizar este tribunal, irá encaminado a verificar si efectivamente la Cámara sentenciadora omitió la aplicación de esta disposición al calificar la prueba testimonial; y si tal inaplicación causó un perjuicio al momento de resolver.

Para el análisis de esta infracción, es necesario citar el contenido del pasaje de la sentencia impugnada, en la cual la ad quem hace consideraciones relativas

a la deposición de la testigo en comento, lo cual consta a fol.[…] de la pieza de segunda instancia; y en la que expresó lo siguiente: “Asimismo, la falta al deber de fidelidad de parte del señor ********, ha sido recurrente, lo cual se ha probado con la declaración de la señora ********, quien es hija de los señores ******** y ********, y quién además trabajó en la empresa ******** S.A. de C.V. (empresa familiar), habiendo manifestado que las empleadas de dicha empresa le expresaban que como tenían una relación con el padre de la testigo, ésta no podía darles órdenes” (sic).

Además, la ad quem sostuvo: “En este sentido, respecto a los argumentos del recurrente referentes a que la señora ******** es un testigo de referencia, es importante establecer que respecto a los actos propios de infidelidad (relaciones sexuales con terceras personas), se ha sostenido en pretéritas sentencias por este Tribunal de Alzada, que tales hechos no pueden ser probados de forma directa, sino a través de prueba indiciaria, en razón de la naturaleza misma de las relaciones sexuales, las cuales por estar dentro de la vida íntima de las personas no se realizan a la vista de los demás, por lo que dada la comprobación de ciertos indicios de la existencia de tales actos de infidelidad se puede concluir que la persona a quien se le atribuyen tales hechos los ha cometido en realidad, así pues para el caso en comento la señora ******** manifestó que las empleadas le habían manifestado que tenían una relación extramarital con su padre, lo que indiciariamente comprueba la falta al deber de fidelidad del señor ********” (sic).

Debe tenerse en cuenta que la inaplicación de ley tiene lugar cuando se ha ignorado la norma jurídica adecuada para la solución del caso.

Por tanto, para que proceda a casarse la sentencia en la que se alega esta infracción, deben concurrir dos requisitos:

1.-Que la norma que se cita como transgredida, sea aplicable al caso que se controvierte. Es decir, que en el caso analizado, debe establecerse si la testigo ********, es de referencia, y por tanto, su deposición no debió tener valor probatorio, y se deberá verificar si la ad quem incurrió en un error al valorar dicho testimonio, para tener por establecida la infidelidad que se atribuye al señor ********.

2.- Es indispensable establecer si la norma que se cita como infringida, era esencial para resolver el caso controvertido. Así, la Ley de Casación derogada, tratándose de una violación de ley, que es la figura jurídica que se asemeja a la inaplicabilidad comprendida en el Código Procesal Civil y Mercantil, imponía el siguiente requisito “cuando esta afecte el verdadero fondo del asunto de que se trate”.

En anteriores resoluciones, esta Sala ha sostenido respecto del motivo de inaplicación que ésta “tiene cabida, cuando concurren los elementos necesarios que demuestran la pertinencia de la disposición a la solución del caso, y que la ad quem haya hecho caso omiso de la misma. Así, quien recurre en casación amparado bajo este motivo, deberá señalar en el concepto de la infracción, la relación entre la norma infringida y la necesaria aplicabilidad en el asunto”, Ref. 51-CAC-2016, pronunciada a las nueve horas veintiocho minutos del veinte de mayo de dos mil dieciséis.”

EL VICIO ALEGADO NO SE CONFIGURA RESPECTO AL ART. 357 CPCM, CUANDO LA PRUEBA TESTIMONIAL EN CONTROVERSIA NO ES LA ÚNICA FUENTE DE PRUEBA, POR LO QUE EN NADA MODIFICA LA DECISIÓN, NO SIENDO LA DISPOSICIÓN ESENCIAL PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA

"Así, este tribunal, en el caso de autos, tratándose del primero de los requisitos citados, debe verificar si la declaración testimonial de la señora ********, encaja en la norma infringida, que obliga a descartar el valor probatorio de la declaración del testigo que no tenga conocimiento personal sobre los hechos objeto de la prueba, o cuando los hubiere conocido por la declaración de un tercero.

En el *sub lite,* la inaplicación de dicha norma, que se alega, se centra en lo declarado por la testigo ********, en relación a la infidelidad de su padre.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que ese tipo de hechos, que determinan una infidelidad, difícilmente pueden ser presenciados, tal como la ad quem lo ha sostenido, por ser relativos a la esfera de intimidad de una persona.

En tal virtud, lo relatado por la mencionada testigo, debe retomarse en conjunto con el resto de elementos analizados, lo cual es viable por el sistema de la sana crítica que rige los asuntos de familia.

Cabe recordar que en el proceso de familia, la apreciación de las pruebas se realiza mediante el sistema de la sana crítica, art. 56 de la Ley Procesal de Familia (LPF), que consiste en la libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia que, según el criterio del juez, sean aplicables al caso, observadas a la luz de la justicia, apreciando los hechos que puedan conducir a decidir de qué parte está la razón.

En ese sentido, en jurisprudencia de esta Sala, se ha sostenido que en este sistema de valoración, todos los indicios y probanzas se incluyen en un receptáculo, para que, tomando el caso en su conjunto, el juzgador se ilustre suficientemente. Sin embargo, esto no implica ignorar que hay pruebas que no tienen los elementos necesarios, bajo la lógica, para aportar la comprobación que se busca.

Así, la declaración de la señora ********, respecto de la infidelidad del demandado, debe considerarse en todo el contexto de su dicho, en consideración al conjunto de preguntas y afirmaciones que surgieron en la audiencia respectiva, y si bien, dicha señora hizo alusión a situaciones referidas por otras personas, las cuales recaen en testimonio de referencia, por no haber sido específica para revelar ciertos datos, esto no implica que se deje inadvertido que también declaró sobre circunstancias contundentes, de las que ha tenido conocimiento directamente, mismas que demuestran la infidelidad que le atañe al señor ********, como lo es el hecho que ha manifestado la referida testigo, que "tiene un hermano concebido por su padre fuera del matrimonio quien fue incluido en el seno familiar desde pequeño" lo cual constituye un elemento determinante, que acompañado con otros elementos dan la certeza al juzgador del hecho que se pretende demostrar.

Con relación a la anterior situación, corre agregado al proceso, tal como la misma Cámara sentenciadora lo ha expuesto, la certificación de la partida de nacimiento del señor ********, con lo cual se tiene por acreditada la infidelidad del demandado, criterio que es compartido por esta Sala, por haber procreado el señor ********, en mil novecientos ochenta y dos, un hijo con otra mujer que no era su esposa; fecha en la cual, las partes materiales de este proceso ya estaban unidas en vínculo matrimonial, pues contrajeron matrimonio en mil novecientos setenta y cinco, hecho éste que viene a complementarse con lo dicho por parte de la testigo ********, otorgándole por ello, total credibilidad probatoria a esta última.

Por tanto, esta Sala concluye que el testimonio brindado por la señora ********, no puede ser considerado como de referencia en su totalidad, pues de su deposición también se establecen directamente circunstancias que han demostrado la infidelidad que señala ha cometido el señor ********, tal como ha quedado evidenciado en párrafos anteriores. Es así como no debía se desechada o no merecer fe.

Por consiguiente, la norma citada como infringida, no tenía aplicación en el caso de autos, resultando por ello imposible, que ser cometiera el vicio alegado, ya que no puede ser inaplicada una norma que no es pertinente al caso que se conoce.

En relación a la segunda condición, que requiere este motivo de casación para que se configure el vicio, es decir, que la disposición legal sea elemental para resolver el asunto sometido a decisión; es evidente que esta condición no se cumple, debido a que es notorio que aun restándole todo valor probatorio a la deposición de la testigo en comento, extrayéndola del material desfilado en juicio, ha quedado acreditada la infidelidad del señor ********; principalmente a través de la certificación de la partida de nacimiento del hijo procreado fuera del matrimonio, el cual como se dijo, nació ya estando unidos bajo este vínculo la señora ******** y el señor ********.

En otros términos, la prueba testimonial que se pretende impugnar, no constituyó la única fuente de prueba para determinar la infidelidad. Por consiguiente, el tomar o no en cuenta el testimonio referido, en nada modifica la decisión establecida en los fallos de primera y de segunda instancia. Por tanto, la disposición señalada como inaplicada, no constituye una norma esencial para resolver la controversia, por el contrario resulta irrelevante para ese fin.

Es de señalar, que la vida intolerable como causal de divorcio en el *sub lite,* ha sido acreditada, además en cuanto a la violencia económica, como respecto a la violencia psicológica y también en relación la falta al deber de fidelidad del señor ******** hacia la señora ********. Por tanto, esta Sala no procederá a declarar ha lugar casar la sentencia impugnada, pues como se ha establecido, la norma que se alega infringida no fue inaplicada por la Cámara de segunda instancia, y tampoco constituye una disposición relevante que sea determinante para resolver el asunto controvertido. Requisitos indispensables para que la infracción invocada motivara anular el fallo recurrido.

Finalmente, con base en el art. 220 inc. 2 CPCM, se deja constancia que la presente sentencia, ha sido formada con los votos de los magistrados licenciado Oscar Alberto López Jerez y doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, no así por parte del magistrado doctor Ovidio Bonilla Flores, quien razonará su voto por no estar de acuerdo con la decisión."

Sala de lo Civil, número de referencia: 322-CAF-2018, fecha de la resolución: 07/02/2020

NULIDAD POR INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES APLICABLES SEGÚN LOS HECHOS CONTROVERTIDOS

EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO DE DIVORCIO DEBE TRAMITARSE CONFORME A LA LEY CON LA QUE SE INICIÓ Y SENTENCIÓ EL CASO, AUN CUANDO LA LEY SE ENCUENTRE DEROGADA

"Asimismo, el recurrente requiere la inaplicación del art. 519 numeral 2° CPCM, por considerar que transgrede la Constitución de la República al establecer dicha disposición que sólo se puede recurrir en materia de familia respecto de las sentencias, y señala como causal de casación el motivo de forma, por haberse declarado indebidamente la improcedencia del recurso de apelación art. 523 n° 13 CPCM, señalando como vulnerado el art. 511 CPMC; e invoca el motivo de fondo por aplicación errónea del art. 236 del mismo cuerpo normativo, e inaplicación de los arts. 7 literal d) de la Ley Procesal de Familia (LPrF) y 516 CPCM. Esta Sala procederá a resolver en, su orden, lo relativo a la primera nulidad planteada.

ANÁLISIS DE LA NULIDAD ALEGADA -Nulidad por aplicar ley derogada

Este tribunal advierte, que el impetrante ha alegado una transgresión a los derechos constitucionales de defensa y del debido proceso. Respecto de los mencionados derechos, debe tenerse en cuenta que ambos están íntimamente ligados, sin embargo, el primero de ellos, hace referencia a la facultad que tiene toda persona para velar por su protección, y ser oída, con las debidas oportunidades, previo al reconocimiento o restricción de alguno de sus derechos u obligaciones; y el debido proceso implica que tanto quien pretende hacer valer un derecho como al que se le exige una responsabilidad, puedan ser oídos, tengan las mismas oportunidades de actuación y dentro de un plazo razonable, sea resuelta su controversia por la autoridad competente y bajo la ley aplicable.

Si bien el caso que nos ocupa, por ser materia de familia, se rige bajo una ley especial, es decir, la Ley Procesal de Familia, supletoriamente se aplica también la ley que regula el proceso civil, máxime en casos como este, en el que implica también la aplicación de normas relativas al embargo de bienes.

Ahora bien, en el particular, es necesario hacer notar que se trata de una ejecución de sentencia de homologación del acuerdo de divorcio, que tuvo lugar

a las catorce horas del veinte de noviembre de dos mil tres, en la cual se fijó determinada cantidad de dinero en concepto de alimentos a favor de los tres hijos procreados por los señores ********** y **********, siendo aquellos de nombres: **********, ********** y **********, todos en aquél entonces, menores de edad.

Es de hacer notar que la solicitud de ejecución se presentó el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, no habiendo sido reabierto el caso desde el dos mil tres, hasta con la presentación de solicitud de ejecución que se interpuso a través de su apoderada, los señores **********, ********** y ********** de apellidos **********, ya siendo todos mayores de edad, en la cual solicitaban la ejecución de la sentencia de divorcio de sus padres, en la que se les otorgaba el derecho para exigir alimentos al señor **********, alegando que había cumplido con cierta parte de su compromiso, dejando fuera el pago de contrato de seguro de vida o médico para sus hijos, el pago de medicamentos y la actualización de tasa que año con año fue acordada, haciendo un detalle de lo pagado y de la deuda actual la cual afirman asciende-a_ cuarenta y nueve mil ciento veintiocho dólares con ochenta y un centavos de- -dólar de los Estados Unidos de América, suma que, posteriormente, plantearon que fuera incrementada. Los demandantes requieren que se decrete formal embargo en el salario que devenga el referido señor ********** y también sobre el derecho del cien por ciento de usufructo de un inmueble propiedad del señor **********, de conformidad al art. 671 CPCM.

En ese orden de ideas, esta Sala advierte, que por auto de las nueve horas veinte minutos del once de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado Segundo de Familia de San Salvador, decidió que el proceso se tramitara conforme al Código de Procedimientos Civiles, tal como lo establece el art. 706 CPCM.

Asimismo, consta a fol. […] de la primera pieza, la contestación de la demanda y la reconvención por cese del pago de la obligación de pagar alimentos, y el auto por el que se resolvió la misma, junto con otros aspectos del proceso a fol. […], en la que se advierte la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles, específicamente del art. 595.

Con lo anterior, esta Sala ha corroborado que efectivamente, la juez a quo, no solo determinó que era aplicable el Código derogado, en el auto de admisión de la solicitud de ejecución, sino que tal normativa también ha sido aplicada como norma supletoria.

Por tanto, es necesario verificar si en casos como el que nos ocupa, es viable utilizar la ley derogada, por haber sido dictada la sentencia que dio lugar al derecho que se reclama, antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, o si por el contrario, es aplicable éste último.

Sobre el particular, resulta necesario aclarar que este tribunal, ha sostenido que la ejecución de las sentencias, por ser parte del proceso, se debe tramitar conforme a la ley con la que se resolvió la controversia.

Y es que el art. 706 CPCM, determina que los procesos, procedimientos y diligencias que estuvieren en trámite cuando entró en vigencia dicho cuerpo normativo, se continuarán y concluirán conforme a la normativa con la que se

iniciaron, por tanto, este tribunal considera que la ejecución de la sentencia, siendo parte del proceso, debe tramitarse conforme a la ley con la que se inició y sentenció el caso.

Lo anterior tiene sustento en el principio de ultractividad de la ley, que establece que una ley derogada puede seguir produciendo efectos para algunos casos concretos, principalmente en lo relativo a las leyes procesales, debido a que todas las actuaciones, trámites y diligencias que se inician antes de la entrada en vigor de una nueva ley, deben concluirse con la aplicación de la normativa con la que fueron iniciados, de lo contrario sería transgredir el principio de legalidad y de seguridad jurídica.

En tal sentido, esta Sala concluye que no se ha configurado el vicio señalado por el recurrente, y que por ende, no existe afectación al derecho de defensa y debido proceso, que implique la declaratoria de nulidad, por haber actuado el juez a quo conforme a la ley, al determinar que la normativa aplicable a la ejecución, es la que corresponde según la ley con la que se conoció del proceso, es decir, el Código de Procedimientos Civiles.

En consecuencia, este tribunal desestimará la nulidad alegada en cuanto a este primer aspecto denunciado.

-Nulidad por inobservancia de disposiciones aplicables según los hechos controvertidos

(Respecto a este apartado, en que el recurrente en lo medular ha indicado que la ad quem al negarse a conocer sobre la nulidad y los motivos de apelación, inobserva el art. 253 CF, en el cual se establece la obligación de dar alimentos desde que los necesita el alimentario, y que se deberán desde la fecha de interposición de la demanda; sin embargo afirma, que desde la sentencia de divorcio, hasta la demanda de ejecución no había existido ninguna demanda sobre los mismos, lo que a criterio del impetrante, significa que no los requerían los demandantes, y no se debían por no haber sido reclamados; sumado a ello, agrega que los alimentarios ya tenían veintidós, veinticinco y veintiséis años de edad, viéndose desnaturalizada la institución de los alimentos, que lo que busca es satisfacer necesidades urgentes no tener un ánimo de lucro y poner una carga insoportable al alimentante. Asimismo, expresa el recurrente, que cuando se exigen alimentos a personas mayores de dieciocho años, se deben establecer y probar ciertos presupuestos materiales.

En cuanto a esta denuncia de nulidad, esta Sala advierte que de lo expuesto no se concluye la existencia de un vicio que genere nulidad, por tratarse de alegatos de instancia, debiéndose desestimar lo relativo a ello.

Y es que en la denuncia de nulidad, se debe dejar claro, la actuación viciada y la vulneración que se ha ocasionado con ello, es decir, el error o la omisión por parte de un tribunal y la afectación que con ello se genera, lo cual debe encajar en los principios que se deben cumplir para dictaminar esta sanción, los cuales son el de especificidad y trascendencia.

En este último aspecto que señala de nulidad el impetrante, no ha cumplido con ello, debido a que su reclamo va encaminado a señalar su criterio sobre la procedencia de los alimentos, sin que de ello se infiera un error que implique una nulidad.

Por otro lado, en razón de haberse desestimado la nulidad respecto del primer señalamiento, esta Sala determina que todos los demás aspectos señalados en el recurso de casación, es decir, lo tocante a la solicitud de inaplicación del art. 519 ord. 2) CPCM, y los motivos de casación invocados, devienen en inadmisibles, por haberse fundamentado en la ley actual, es decir, en el Código Procesal Civil y Mercantil, que tal como se dijo, no puede ser la normativa supletoria aplicable al caso, por ser la ley aplicable la derogada, debido a que al haberse iniciado el proceso cuya ejecución se pretende, antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, subsiste la aplicación del Código de Procedimientos Civiles al caso de mérito. Siendo en consecuencia, imposible emitir consideraciones relativas a los aspectos antes mencionados."

Sala de lo Civil, número de referencia: 160-CAF-2019, fecha de la resolución: 27/01/2020

RECURSO DE CASACIÓN

IMPROCEDENCIA CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN LA MODALIDAD DE EMBARGO, RELACIONADO A CUOTA DE ALIMENTOS IMPUESTA EN SENTENCIA PROVEÍDA EN PROCESO DE DIVORCIO

"Respecto al análisis inicial del recurso, esta Sala hace las siguientes **CONSIDERACIONES:**

Al respecto, esta Sala advierte que el presente recurso versa respecto de la etapa de ejecución de sentencia en la modalidad de embargo, relacionado a la cuota de alimentos impuesta a favor de la niña**********, sentencia proveída dentro del proceso de divorcio por separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos y por reconvención de pérdida de autoridad parental, siendo necesario traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 520 CPCM, el cual manda a rechazar el recurso de casación, cuando se interponga contra resolución dictada en asuntos de jurisdicción voluntaria o en procesos especiales, cuando la sentencia de la que se recurre no produzca efectos de cosa juzgada en sentido material.

En consecuencia, siendo el sub lite, un proceso en etapa de ejecución y además versa sobre la cuota de alimentos y por ende, ésta puede ser modificada, el recurso de casación deviene en improcedente."

Sala de lo Civil, número de referencia: 23-CAF-2020, fecha de la resolución: 28/02/2020

SENTENCIA FIRME

IMPROCEDENCIA DE LA REVISIÓN AL ADVERTIRSE UN DEFECTO EN LA PRETENSIÓN, YA QUE NO SE PUEDE ALEGAR FRAUDE ARGUMENTANDO QUE SE OBTUVO UNA SENTENCIA FAVORABLE MEDIANTE ENGAÑOS, CUANDO SE HA TENIDO ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA DEMANDA

"En primer término, es necesario analizar si la demanda de revisión de sentencia cumple con los requisitos exigidos para su interposición, según los arts. 540 inc. 2. °, 541, 543 y 544 CPCM. Al respecto se hacen las siguientes consideraciones:

Esta Sala, según referencia 1-REL-2016, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, ha sostenido que "[...] 5. La revisión de una sentencia, es un proceso independiente que consiste en una acción impugnativa autónoma, mediante la cual la parte que se considera perjudicada, interpone una pretensión constitutiva de anulación de una sentencia firme, basada en los motivos contemplados por la ley y que alega injusta por haberse fundado la misma, en el desconocimiento del juzgador de hechos relevantes y con incidencia en el proceso que no pudieron presentarse oportunamente, ya sean estos hechos declarados penalmente falsos, o por haber dictado el juez la sentencia bajo la influencia de vicios del consentimiento. 6. El objetivo de la revisión, dado por los motivos generales en que puede fundamentarse, es el restablecimiento del valor Constitucional de la Justicia, que la Tutela Judicial sea realmente efectiva, y que se le otorgue la razón a quien la tiene, y no a quien utilizó estrategias según su conveniencia, dentro del proceso [...]".

Lo que pretende la licenciada [...], con la demanda de revisión de sentencia firme presentada, es que se rescinda la sentencia firme, dictada por el Juzgado Segundo de Familia de Santa Ana, en el proceso de divorcio, por separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos, entre los señores ********* y *********, por el motivo de fraude, que se encuentra regulado en el art. 541 n° 4 CPCM.

Manifiesta la referida abogada, que dentro del mencionado proceso de divorcio, en el que su representada era demandada, fue debidamente emplazada el día uno de diciembre de dos mil diecisiete, por medio de suplicatorio a través del Consulado General de El Salvador, en Dallas Texas, Estados Unidos de América. Agrega que le explicaron que podía nombrar abogado y contestar la demanda, y que caso contrario, el proceso continuaría. Que sin embargo, la señora *********, no contestó la demanda, por desconocer, según manifiesta, qué procedimientos debían seguirse frente al proceso de divorcio, y que además, por razones laborales se le dificultaba brindarle tiempo a ese tipo de trámites.

Dice la licenciada [...], que el día veintidós de agosto de dos mil diecinueve, por parte del referido consulado, se le notificó a la señora *********, la sentencia proveída por el Juzgado Segundo de Familia de Santa Ana, a las quince horas

del día dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en el que se decretó el divorcio por la causal arriba mencionada.

Que su representada, al leer la copia de la sentencia descubrió que tanto en los considerandos como en el fallo, no había pronunciamiento respecto a sus hijos adolescentes procreados dentro de dicho matrimonio, de nombres: ********** y **********.

Manifiesta la impetrante que su representada, no se percató en el momento del emplazamiento de la demanda, que el señor *********, había omitido mencionar al juzgado sobre la procreación de los hijos menores de edad ya mencionados.

Las razones que dan pie a la demanda planteada radican, en que la señora *********, fue demandada en el aludido proceso de divorcio, en el que el demandante señor *********, omitió según la impetrante, de forma maliciosa, mencionar que dentro del matrimonio procrearon a los hijos ********* y *********, ambos de apellidos *********, y que aún son menores de edad.

En el caso sub judice, la impetrante de manera general, en el romano "V" del escrito de interposición de su demanda, expresa que la razón por la cual interpone la revisión de sentencia firme, radica en que el señor *********, dentro del proceso de divorcio, "puso al descubierto un fraude de ley," al omitir mencionar que procreó dos hijos más con la señora *********.

Por lo que, alega como motivo, el art. 541 N° 4° CPCM, que literalmente dice: "[...] Habrá lugar a la revisión de sentencia firme: 4°. Si el caso se hubiera ganado injustamente por cohecho, violencia o fraude [...]"

Para el análisis de la demanda de revisión de sentencia firme, presentada, debe tenerse en cuenta que tal petición está sujeta a las mismas reglas previstas para la demanda en el proceso común, así lo dispone claramente el 547 inc.1° CPCM, esta Sala, hace las siguientes consideraciones:

De lo expresado por la solicitante, se deduce que los hechos planteados en la demanda de divorcio, no constituyen hechos que se encontraban en el desconocimiento de su representada, ya que ella misma ha manifestado en el escrito de interposición de la demanda de revisión que hoy nos ocupa, que fue legalmente emplazada, es decir, que tuvo conocimiento de la demanda de divorcio; y debe entenderse que también de los hechos vertidos en la misma.

Por lo que no puede configurarse el motivo de fraude invocado.

Al respecto debe tenerse en cuenta que el fraude regulado en el art. 541 N° 4 CPCM, se refiere a aquel acto que produzca o genere un engaño acontecido en el desarrollo del proceso en sus diferentes instancias.

Asimismo, son conductas o maquinaciones consideradas fraudulentas cometidas por la contraparte para inducir a engaño al tribunal de la causa que dictó la sentencia o para dejar fuera del pleito a su contrario.

Esta maquinación fraudulenta sancionada en la norma legal consiste en el empleo de ardides, argucias, artilugios, o maniobras artificiosas tendientes a impedir, dificultar u obstaculizar la defensa del adversario, para asegurar el éxito de la demanda.

Pero, para el caso que nos ocupa, si bien es cierto que de la demanda puede estimarse que ha habido actividad engañosa, para obtener el resultado procesal pretendido, la misma pudo haberse desvirtuado, en vista que la señora *********, en el proceso de divorcio, tuvo acceso a la demanda y por ello la posibilidad de utilizar las herramientas procesales convenientes y necesarias, a fin de encauzar al juez en la decisión de la sentencia, respecto de sus hijos, por lo que no hubo obstáculo para su defensa; asimismo, no es válido expresar que no hizo uso del derecho de defensa, por desconocer qué procedimiento debía seguir frente al proceso de divorcio, y además argumentar que carece de responsabilidad al no contestar la demanda, por desconocimiento y múltiples ocupaciones, ya que en la cita que le hizo el Consulado, le fueron explicados todos los efectos del emplazamiento; recordemos que nadie puede alegar ignorancia de la ley, según el art. 8 CC.

En consecuencia, esta Sala advierte de la lectura de la demanda de revisión de sentencia firme presentada, que existe un contrargumento, en la misma, ya que la demandante por un lado invoca como motivo el fraude, es decir, que se obtuvo una sentencia favorable mediante engaño, y por otro, a su vez, acepta que tuvo conocimiento de la demanda de divorcio al ser debidamente emplazada, quedando claro in limine, que no puede invocar el motivo de engaño, ya que tuvo acceso a toda la información contenida en la demanda, y por ende, supo que sus dos hijos aludidos no fueron incluidos dentro de la demanda de divorcio.

Se ha sostenido en múltiples precedentes jurisprudenciales, tanto de ésta Sala como de las Cámaras con competencia en materia civil, que la facultad-deber de los jueces de rechazar ab initio una demanda o solicitud, tiene su fundamento inmediato en los principios de dirección y economía procesal, con la finalidad de evitar el inútil dispendio de la actividad jurisdiccional.

La figura procesal de la improponibilidad, explicada en doctrina suramericana; bajo la cual autores como Jorge W. Peyrano en su obra “El Proceso Atípico”, nos ilustra diciendo que “[...] Liminarmente debe subrayarse que la improponibilidad objetiva que padece una pretensión siempre nace de alguna patología sufrida por el objeto de ésta y a resultas de la cual concurre un “defecto absoluto en la facultad de juzgar”... en el tribunal interviniente, defecto que provocará la emisión de una respuesta jurisdiccional discordante en cuya virtud rechazará in limine la demanda interpuesta [...]”“[...] Si el juicio de proponibilidad resulta desfavorable “... el tribunal emitirá una respuesta jurisdiccional discordante (es decir, contraria a la expectativa de tramitación con que contaba el demandante) disponiendo el rechazo ab initio de la pretensión y el archivo de las actuaciones [...]”. Agrega “[...] que el juicio desfavorable de proponibilidad se producirá “... cuando el tribunal se encontrara en la imposibilidad de juzgar el objeto de la pretensión propuesta (...) o cuando se produce lo que en la doctrina se conoce como defecto absoluto en la facultad de juzgar (...) habrá improponibilidad objetiva de la pretensión cuando el órgano jurisdiccional se encuentra absolutamente imposibilitado para juzgarla [...]”.

De la lectura del escrito de interposición de la demanda que hoy nos ocupa, se tiene claramente que la señora *********, si leyó la demanda de divorcio, lo que hace por su propio dicho, que indiscutiblemente la sentencia no pueda ser revisada, pues no hay fraude según ella.

Por lo que con base a las razones expuestas y estando facultado este tribunal, con base en el art. 277 CPCM, para rechazar liminarmente la demanda de revisión de sentencia firme, al advertir un defecto en la pretensión por considerar absurdo e inexistente el argumento sobre el cual se invoca el motivo de fraude y reconocer al mismo tiempo que se tuvo conocimiento de la demanda de divorcio, pudiendo encauzar y sustraer del yerro al juez de la causa, deviene en improponible.

A mayor abundamiento, la hoy demandante, inclusive, tuvo la oportunidad y posibilidad de apelar de la sentencia, que como ya se dijo, le fue debidamente notificada, para que se revirtiese la omisión dicha, sin embargo, no hizo uso de tal recurso.

Finalmente, con base en el art. 220 inc. 2° CPCM, se deja constancia que la presente resolución, ha sido formada con los votos de los magistrados licenciado Oscar Alberto López Jerez y doctor Ovidio Bonilla Flores, no así por parte de la magistrada doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, quien razonará su voto por no estar de acuerdo con la declaratoria de improponibilidad in limine litis, de la demanda de revisión de sentencia firme, por considerar que si es admisible".

Sala de lo Civil, número de referencia: 7-REF-2019, fecha de la resolución: 16/03/2020

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN CUANDO SE INTERPONE CONTRA RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN ESTOS PROCESOS

"Respecto de la procedencia del recurso, esta Sala advierte lo siguiente:

La Ley contra la Violencia Intrafamiliar, en su artículo 32, establece «[...] Las resoluciones pronunciadas por el juez o jueza en las que se imponga a la persona agresora medidas preventivas cautelares o de protección, o se absuelva al denunciado o denunciada serán apelables ante las Cámaras de Familia, aunque sean pronunciadas por un juez de paz.

El tribunal de alzada resolverá el recurso con sólo la vista del proceso, dentro de los ocho días hábiles después de haberlo recibido; **esta resolución no admitirá recurso de casación [...] »** (sic). (la negrita es nuestra).

En razón de lo anterior, la resolución dictada en el proceso de violencia intrafamiliar, por la ad quem, no admite recurso de casación por lo que el recurso de casación interpuesto deviene improcedente, y así se impone declararlo.

En consecuencia, siendo por precepto de ley improcedente el recurso de casación en materia de violencia intrafamiliar, y habiendo sostenido este tribunal en anteriores ocasiones, tal es el caso de las resoluciones ref. 113-CAF-2013 pronunciada a las once horas del doce de febrero de dos mil catorce, ref. 165-CAF-2015 de fecha doce de noviembre de dos mil quince, el recurso de casación interpuesto deviene improcedente y así se impone declararlo."

Sala de lo Civil, número de referencia: 70-CAF-2020, fecha de la resolución: 25/03/2020

VOTO DISIDENTE DE LA DOCTORA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

SENTENCIA FIRME

PROCEDE LA REVISIÓN CUANDO LAS PARTES INCURREN EN UNA CONDUCTA FRAUDULENTA DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO, ACTUANDO MEDIANTE ENGAÑO, LO QUE GENERA UNA AFECTACIÓN EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA

"No concurro con la decisión adoptada en el anterior auto definitivo, en cuanto declara improponible, in limini litis, la demanda de revisión de sentencia firme, con base en el art. 541 n° 4° CPCM, interpuesta, por medio de la licenciada [...], como apoderada de la señora *********, quien a su vez representa a sus hijos adolescentes ********* y ********* ambos de apellidos *********; mediante la cual se pretende revisión de la sentencia pronunciada a las quince horas del día dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por el Juzgado Segundo de Familia de Santa Ana, en el proceso de divorcio por separación durante uno o más años, promovido por el señor ********* a través de sus apoderados la licenciada [...], el cual fue continuado por el licenciado [...], en contra de la hoy demandante señora *********.

La demanda de revisión de sentencia firme, ha sido fundamentada en el supuesto regulado en el art. 541 n° 4 CPCM, en virtud del cual, habrá lugar a la revisión de una sentencia, "Si el caso se hubiera ganado injustamente por cohecho, violencia o fraude".

En la mencionada demanda, específicamente se plantea, que en la demanda de divorcio por separación durante uno o más años, presentada por la licenciada [...], se omitió relacionar a sus hijos adolescentes ********* y *********, ambos de apellidos *********.

Por tanto, parten de la base de que se ocultó información fundamental al tribunal que conoció del proceso, para decidir en sentencia lo que correspondía conforme a derecho, en lo concerniente a los hijos procreados en el matrimonio.

Los colegas magistrados, en la sentencia de la cual disiento, exponen los siguientes razonamientos: "(...) De lo expresado por la solicitante, se deduce que los hechos planteados en la demanda de divorcio, no constituyen hechos que se encontraban en el desconocimiento de su representada, ya que ella misma ha manifestado en el escrito de interposición de la demanda de revisión que hoy nos ocupa, que fue legalmente emplazada, es decir, que tuvo conocimiento de la demanda de divorcio; y debe entenderse que también de los hechos vertidos en la misma. Por lo que no puede configurarse el motivo de fraude invocado. Al respecto debe tenerse en cuenta que el fraude regulado en el art. 541 N° 4 CPCM, se refiere a aquel acto que produzca o genere un engaño acontecido en el desarrollo del proceso en sus diferentes instancias. Asimismo, son conductas o maquinaciones consideradas fraudulentas cometidas por la contraparte para inducir a engaño al tribunal de la causa que dictó la sentencia o para dejar fuera del pleito a su contrario. Esta maquinación fraudulenta sancionada en la norma legal consiste en el empleo de ardides, argucias, artilugios, o maniobras artificiosas tendientes a impedir, dificultar u obstaculizar la defensa del adversario, para asegurar el éxito de la demanda."

Después de la anterior, exposición, sostienen lo siguiente "(...) Pero, para el caso que nos ocupa, no ha habido actividad engañosa, para obtener el resultado procesal pretendido, en vista que la señora *********, en el proceso de divorcio tuvo acceso a la demanda y por ello la posibilidad de utilizar las herramientas procesales convenientes y necesarias, a fin de encauzar al juez en la decisión de la sentencia, respecto de sus hijos, por lo que no hubo obstáculo para su defensa; asimismo, no es válido expresar que no hizo uso del derecho de defensa, por desconocer qué procedimiento debía seguir frente al proceso de divorcio, y además argumentar que carece de responsabilidad al no contestar la demanda, por desconocimiento y múltiples ocupaciones, ya que en la cita que le hizo el Consulado, le fueron explicados todos los efectos del emplazamiento; recordemos que nadie puede alegar ignorancia de la ley, según el art. 8 CC, negligencia manifiesta e inequívoca(...)" (el subrayado es nuestro).

Concluyen, como consecuencia, que se "advierte de la lectura de la demanda de revisión de sentencia firme presentada, que existe un contrargumento, en la misma, ya que la demandante por un lado invoca como motivo el fraude, es decir, que se obtuvo una sentencia favorable mediante engaño, y por otro, a su vez, acepta que tuvo conocimiento de la demanda de divorcio al ser debidamente emplazada, quedando claro in limine, que no puede invocar el motivo de engaño, ya que tuvo acceso a toda la información contenida en la demanda, y por ende, supo que sus dos hijos aludidos no fueron incluidos dentro de la demanda de divorcio (...)"

Y finalmente, establecen que la demanda de revisión resulta improponible; bajo el siguiente razonamiento: "De la lectura del escrito de interposición de la demanda que hoy nos ocupa, se tiene claramente que la señora *********, si leyó la demanda de divorcio, lo que hace por su propio dicho, que indiscuti-

blemente la sentencia no pueda ser revisada, pues no hay fraude según ella. Por lo que con base a las razones expuestas y estando facultado este tribunal, con base en el art. 277 CPCM, para rechazar liminarmente la demanda de revisión de sentencia firme, al advertir un defecto en la pretensión por considerar absurdo e inexistente el argumento sobre el cual se invoca el motivo de fraude y reconocer al mismo tiempo que se tuvo conocimiento de la demanda de divorcio, pudiendo encauzar y sustraer del yerro al juez de la causa, deviene en improponible. A mayor abundamiento, la hoy demandante, inclusive, tuvo la oportunidad y posibilidad de apelar de la sentencia, que como ya se dijo, le fue debidamente notificada, para que se revirtiese la omisión dicha, sin embargo, no hizo uso de tal recurso (...)"

Sobre los anteriores razonamientos, debe tenerse en cuenta que, respecto de la casual de revisión de sentencia firme, invocada por el demandante (art. N°4 CPCM) el legislador únicamente exige que "(...) el caso se hubiera ganado injustamente por cohecho, violencia o fraude".

Por tanto, para invocar la revisión de sentencia, con base en la causal de referencia, basta que la demanda se fundamente en que el tribunal que sentenció, decidió algunos aspectos, a consecuencia de un engaño acaecido en el desarrollo del proceso; es decir, a consecuencia de conductas (acciones u omisiones) cometidas por la contraparte para inducir a engaño al tribunal; y que, en efecto, al decidir, el tribunal haya realizado u omitido algún pronunciamiento, a consecuencia de tal conducta fraudulenta de una de las partes.

Es decir, basta que se invoque que una de las partes incurrió en una conducta fraudulenta durante el desarrollo del proceso, y que tal actuar engañoso, haya afectado la sentencia pronunciada por el tribunal.

Es por las razones antes expuestas que soy del criterio que en el caso que se analiza, ha sido debidamente invocada la causal de revisión de sentencia firme, consistente en que "el caso se hubiera ganado injustamente por cohecho, violencia o fraude" (artículo 541 n° CPCM); por tanto, tal situación viabiliza la tramitación del proceso de revisión de sentencia firme.

Lo anterior, debido a que el juez segundo de familia de Santa Ana, sentenció, influido por la conducta fraudulenta del actor, la cual consistió en omitir la existencia de dos hijos menores de edad, procreados dentro del matrimonio; por lo que no hizo consideración ni pronunciamiento alguno al respecto.

Como consecuencia del análisis expuesto, no comparto el razonamiento de mis colegas, en el sentido que advierten "(...) un defecto en la pretensión por considerar absurdo e inexistente el argumento sobre el cual se invoca el motivo de fraude y reconocer al mismo tiempo que se tuvo conocimiento de la demanda de divorcio, pudiendo encauzar y sustraer del yerro al juez de la causa (...)"; y concluyen que la demanda "(...) deviene en improponible (...)", y así la declaran.

Así mi voto."

Sala de lo Civil, número de referencia: 7-REF-2019, fecha de la resolución: 16/03/2020

VOTO RAZONADO DEL MAGISTRADO DOCTOR OVIDIO BONILLA FLORES

RECURSO DE CASACIÓN

LÍMITES DE LA COGNICIÓN DEL TRIBUNAL CASACIONAL Y LOS EFECTOS DE SUS DECISIONES

"No concurro con mi voto en la resolución de la Sala de lo Civil de las diez horas tres minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en donde se resuelve que no ha lugar a casar la sentencia emitida por la Cámara de Familia de la Sección del Centro, de esta sede, por las razones siguientes:

La Sala desconoce la naturaleza de este recurso extraordinario, y sus finalidades, confundiendo el rol de tribunal casacional y la técnica casacional, al entrar a conocer del fondo del asunto -en su función casacional- como si fuese un tribunal de instancia, pues, únicamente puede realizar este ejercicio -verificar los hechos-, sí y solo sí, anula la sentencia recurrida, y que la infracción alegada y casada sea un motivo de fondo, de conformidad al art. 537 Código Procesal Civil y Mercantil, en adelante CPCM.

Es por ello que considero oportuno clasificar en tres partes el presente voto. En la primera de ellas, es necesario realizar un estudio sobre lo que es el recurso de casación y sobre sus finalidades, retomando lo sostenido por la doctrina, a efectos de establecer los límites de cognición del tribunal casacional y los efectos de sus decisiones; en la segunda parte, una vez dilucidado sobre dicha temática, abordar los errores que, a mi juicio, respetuosamente, han sido cometidos por la Sala en el tratamiento del *sub lite;* y, finalmente, puntualizar algunas reflexiones sobre la necesidad de cumplir con el deber uniformador de todo tribunal casacional.

I.-Es lugar común en nuestra doctrina y en la jurisprudencia definir el recurso de casación como un medio de impugnación extraordinario, del que conoce la Sala de lo Civil (art. 28 ord. 2° CPCM), y, también, excepcionalmente, la Corte Suprema de Justicia en Pleno (art. 27 ord. 2° CPCM); que se interpone exclusivamente por los motivos tasados en la Ley y contra las resoluciones judiciales expresamente previstas por ella.

Se debe afirmar que la casación es un auténtico recurso, una fase más del proceso, del que conoce un auténtico órgano jurisdiccional, precisamente el que culmina y está en la cúspide de la organización judicial, sobre estos asuntos. Por otro lado, hay que insistir en el carácter extraordinario que tiene el recurso de casación, por estar limitados los motivos, pero, sobre todo, también por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puede interponerse.

Igualmente, clásica es la atribución de dos finalidades esenciales: la protección de la norma jurídica, del "ius constitutionis", desdoblada en las funciones nomofiláctica y uniformadora, y la protección del derecho de los litigantes, del "ius litigatoris".

Sobre todo, en lo que ahora nos interesa, es tradicional enseñar que el recurso de casación no constituye una tercera instancia, esto es, un tercer examen judicial de la relación sustancial o de fondo debatida en el pleito. Esta afirmación se ha apoyado en dos presupuestos clásicos sobre la casación: que es una jurisdicción de derecho, no de hecho, y que es fundamentalmente negativa, esto es, anula la resolución recurrida pero no resuelve el caso concreto, salvo en aquellos casos en que el legislador nuestro ha regulado que el propio tribunal casacional tiene la potestad para hacerlo como veremos adelante -art. 537 CPCM-.

La primera de las proposiciones mencionadas en el párrafo anterior, nos lleva a la cuestión de los límites de la cognición del tribunal; la segunda, a los efectos de sus decisiones y, en algunos casos, al reenvío.

De ahí que es importante analizar los límites de la cognición del tribunal casacional, examinando hasta donde se extienden sus poderes en relación a las cuestiones de hecho y de derecho. Y adviértase desde ahora que, siendo los problemas de enorme trascendencia en orden a la configuración y eficacia del funcionamiento de esta institución, es de advertir la alarmante dispersión y variedad de criterios jurisprudenciales emanados por este tribunal, producto quizá de la parquedad de preceptos, y la escasa atención dispensada por el legislador a los mismos, carencia que debería solucionarse a través de las medidas legislativas oportunas."

FINALIDAD

"En ese orden de ideas, conviene entonces estudiar sobre los poderes de control del tribunal casacional y fines de la casación. Así, cuando el tribunal se enfrenta al examen de un recurso de casación es obligado plantearse cuáles pueden o deben ser los límites de su cognición respecto al mismo.

La propia estructura y regulación del recurso han dado lugar a que se haya hecho típica, y casi podrá decirse tópica, una afirmación válida con carácter general: ***el recurso de casación es medio para denunciar las infracciones jurídicas en los casos establecidos en la Ley, por lo que el tribunal casacional es juez del derecho aplicado y nunca juez de los hechos, a los cuales no puede extender su conocimiento.***

Respecto del control de derecho cabe señalar también que ya no responde al ámbito tradicional asignado al recurso de casación, puesto que también cabe dudar de una estricta pervivencia de la exclusión de principios tal como "iura novit curia- -art. 536 CPCM-.

Es al fijar todos estos límites cuando cobra sentido la afirmación que el recurso de casación no es una tercera instancia. Esto depende más de la extensión del conocimiento del tribunal que del hecho que la jurisdicción sea "positiva" o "negativa" en relación a los vicios que afectan al fondo de la relación sustancia controvertida. En otras palabras, la positiva faculta al tribunal casacional a que una vez anulada la sentencia de alzada, pronuncie la que corresponde (no reenvío), y la negativa, a contrario sensu, solo faculta al tribunal casacional a anular la sentencia recurrida y ordenar al inferior pronunciar nuevamente lo que conforme a derecho corresponde (reenvío).

Si bien es cierto que la jurisdicción negativa, esto es, con reenvío, caracterizó el recurso de casación desde sus orígenes dada la prohibición de conocer del fondo del asunto, no es menos cierto que, en realidad, lo que se prohibía al tribunal de casación era solucionar el litigio de fondo; quiere decirse que, una vez cumplida la función propiamente casacional, es decir, anulada la sentencia, el litigio de fondo queda sin solución y para proporcionársela se optó por reenviar a otro órgano jurisdiccional.

Pero, que la solución se dé por un juez de reenvío o por el propio tribunal casacional es conceptualmente indiferente para la casación, porque en este supuesto el tribunal ya no actúa como órgano casacional, sino que hace lo que haría otro juez de instancia. Y, en estos términos, la supresión del reenvío atribuyendo al tribunal casacional jurisdicción "positiva" con poder para solucionar directamente la cuestión de fondo no hace a la casación una tercera instancia: nuestra casación se ha caracterizado desde muy pronto por haber suprimido el reenvío en los casos de casación sobre el fondo del asunto y a nadie se le ha ocurrido que, por ello, el órgano casacional sea un tribunal de tercera instancia ni la casación la tercera instancia sobre el asunto concreto.

Debe insistirse en que mientras más se interne el tribunal casacional en el control de la apreciación fáctica efectuada en las instancias más cerca estará de convertirse en otra más, en un órgano que examine otra vez, la tercera, la cuestión de fondo en sus aspectos jurídicos y fácticos aportando la propia solución sobre tales extremos.

Pero un examen adecuado de los límites de cognición del tribunal casacional no puede hacerse sin una referencia a los fines de la casación en el ordenamiento jurídico actual.

La casación navega entre dos aguas bien distintas: la satisfacción del interés del recurrente en la solución concreta del caso específico y el interés general en una jurisprudencia uniforme.

Para el profesor y jurista Vicente C. Guzmán Muja, en su obra: "El Recurso de Casación Civil", pág. 25, afirma: "[...] la primordial finalidad que debe acometer y satisfacer el recurso de casación en la actualidad es la de *uniformar la jurisprudencia, con el objeto de salvaguardar el principio de igualdad ante la (aplicación e interpretación de la) ley, así como los principios de seguridad y de certidumbre jurídicas.* A ese fin esencial debe ajustarse la finalidad nomofiláctica. Por otro lado, un correcto entendimiento del aludido fin esencial nos lleva a establecer su perfecto engarce con la finalidad de proteger al "ius

La conclusión que debe extraerse de la exposición anterior es que el control ejercido por el tribunal casacional debe ser un control de derecho y que, por lo tanto, su cognición debe estar limitada a las solas cuestiones de derecho relativas al caso concreto resuelto por la sentencia objeto de recurso.

En el recurso de casación no se trata de formar un nuevo juicio jurisdiccional para dar solución a una controversia jurídica, sino de controlar uno ya realizado con carácter definitivo y al que se reputa viciado por alguno de los errores determinados por la ley como motivos de casación.

En esa tarea, el tribunal casacional, disecciona, parcialmente o en su totalidad, el juicio, lo analiza y descompone con el fin de detectar la efectiva existencia del vicio denunciado sin exceder los límites de su función: se desmonta el juicio para depurado de sus fallos jurídicos y lógicos (de razonamiento). Luego, en un segundo momento y siempre en relación con las casaciones que afectan al fondo del asunto, el tribunal casacional podrá emitir la nueva sentencia que sustituya la anulada (iudicium rescisorium), en lo que ya no puede considerarse actividad jurisdiccional en sentido estricto; en este caso, lo que se hace "volver a encajar" las piezas antes separadas, desechando las que estaban afectadas por un vicio y reemplazándolas por otras nuevas.

Para Vicente Fluja, "el recurso de casación no puede orientarse hacia la permisión del control de los hechos atinentes a la relación de fondo con el objetivo de poder efectuar su propia apreciación o valoración Táctica, sustitutiva de la efectuada en las instancias. Además de invadir un terreno que corresponde a la soberanía de los jueces de fondo, la casación se convertiría en un recurso orientado directa y prioritariamente a enjuiciar el caso concreto y a corregir la injusticia (o ratificar la justicia). Para resolver el problema de graduación entre interés general e interés particular, se partiría y atendería a lo que es propio y peculiar de cada caso, a lo que resulte más justo para ese supuesto concreto" (obra citada, pág. 143).

Continua el jurista afirmando que: "Por contra, debe contenerse el poder de control del tribunal casacional dentro de las cuestiones jurídicas, permitiendo solo en muy restringido examen de las circunstancias fácticas de la relación de fondo sin que, bajo ningún pretexto, le lleve a efectuar su propia constatación, determinación, apreciación y valoración de tales hechos".

Finja, de igual manera advierte que, debe prestarse mayor detenimiento a que la fatal evolución del recurso de casación hacia su conversión en una tercera instancia es un peligro plenamente actual, y debe atribuirse la culpa a la existencia de un deslizamiento, más o menos encubierto (y más o menos ocasional), hacia el conocimiento y enjuiciamiento pleno de los hechos que caracterizan la relación material debatida. Es por ello, que el tribunal de casación no suele vacilar en aprovechar la oportunidad que le brinda la necesidad de controlar la motivación fáctica para entrar abiertamente en el examen pleno de la cuestión de hecho.

Distinto es que, una vez realizada la labor de controlador del derecho y no proceda el reenvío, el tribunal casacional decide sobre el fondo del asunto, y utiliza a groso modo dos elementos: el elemento de hecho, que toma directamente de cómo haya resultado en la instancia, y el elemento jurídico proporcionado por el ejercicio de la estricta función casacional en sustitución del que haya debido ser anulado. *Por tanto, debe saberse diferenciar los dos roles que asume el tribunal casacional en el conocimiento del recurso, cuando no hay reenvío. En este segundo rol, la casación no se convierte en una instancia más, sino que el tribunal casacional asume la posición en defecto del de segunda instancia, con las mismas atribuciones que el juzgador*

de alzada. Es hasta entonces que el tribunal está facultado para conocer del fondo del asunto.

II-Ahora bien, se ha intentado mostrar en las líneas precedentes que el hecho que el tribunal casacional entre a conocer del fondo del asunto -en su fase de apreciación del recurso de casación-, valorando pruebas, es un elemento desnaturalizado de lo que debe ser el recurso de casación y de las finalidades que debe cumplir.

Dicho esto, conviene señalar los errores que considero han sido cometidos por la Sala en la resolución del caso que nos ocupa.

El recurso de que se trata fue admitido por el motivo de infracción de ley por inaplicación del art. 357 CPCM, el cual versa sobre un supuesto error de la *ad quem* en considerar la deposición de una testigo, que llevó a concluir la declaratoria de divorcio por vida intolerable.

La inaplicación de dicha norma, que se alega, se centra en lo declarado por la testigo **********, en relación a la infidelidad de su padre. Para la Sala, "lo relatado por la mencionada testigo, debe retomarse en conjunto con el resto de elementos analizados, lo cual es viable por el sistema de sana crítica que rige los asuntos de familia". Así, sostiene la Sala que, "Cabe recordar que en el proceso de familia, la apreciación de las pruebas se realiza mediante el sistema de la sana crítica, art. 56 de la Ley Procesal de Familia (LIT), que consiste en la libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia que, según el criterio del juez, sean aplicables al caso, observadas a la luz de la justicia, apreciando los hechos que puedan conducir de qué parte está la razón".

En ese contexto, la Sala se da la tarea de analizar el dicho de la testigo en referencia, y concluye: " y si bien, dicha señora hizo alusión a situaciones referidas por otras personas, las cuales recaen en testimonio de referencia, por no haber sido específica para relevar ciertos datos, esto no implica que se deje inadvertido que también declaró sobre circunstancias contundentes, de las que ha tenido conocimiento directamente, mismas que demuestran la infidelidad que le atañe al señor ********, como lo es el hecho que ha manifestado la referida testigo, que "tiene un hermano concebido por su padre fuera del matrimonio quien fue incluido en el seno familiar desde pequeño" lo cual constituye un elemento determinante, que acompañado con otros elementos dan la certeza al juzgador del hecho que se pretende demostrar". De ahí que, la Sala afirma: "con relación a la anterior situación, corre agregado al proceso, tal como la misma Cámara sentenciadora lo ha expuesto, la certificación de la partida de nacimiento del señor ******** [...]"

De estas líneas se resalta lo siguiente: En un primer momento, la Sala reconoce expresamente que la testigo ha sido de referencia, que es precisamente el motivo del presente recurso, sin embargo, acto seguido, la Sala advierte que existen otros medios probatorios que, analizados en su conjunto con lo dicho por la testigo, "dan la certeza al juzgador del hecho que se pretende demostrar".

Precisamente, en lo señalado en el párrafo anterior, se resume y se centraliza los errores de la Sala.

En efecto, la testigo **********, de su deposición se advierte que desconoce directamente sobre los hechos que declara respecto de la supuesta infidelidad de su padre. De la lectura de su testimonio se acota que manifestó que su padre, en la empresa familiar ********, "se involucraba con secretarias, impulsadoras, obreras y hasta amistades de su mamá", y cuando se le cuestionó cómo conocía lo dicho, contestó que ella lo presenciaba, y al preguntarle ¿cómo lo presenciaba?, contestó que "porque las empleadas le decían a ella que tenían una relación con su padre por lo que nos les tenía que dar órdenes, su madre recibía anónimos por parte de algunas de ellas, su hermano también se enteraba porque le manejaba el sistema de cómputo a su padre y veía las cartas que recibía de mujeres de Honduras".

LA FUNCIÓN PROPIAMENTE CASACIONAL ES LA DE VERIFICAR LA EXISTENCIA O NO DEL POSIBLE VICIO, EN CUANTO A LA NORMA DE DERECHO, SIN ENTRAR A LOS HECHOS

"Pues bien, de lo anterior, y retomando lo expuesto por la doctrina sobre el recurso de casación, caben las siguientes consideraciones.

Se afirma que el control ejercido por el tribunal casacional debe ser un control de derecho, y que, en consecuencia, su cognición está limitada a las solas cuestiones de derecho relativas al caso concreto. Y esto se debe, precisamente por el objetivo esencialmente uniformador de la casación, necesidad que surge respecto de la posibilidad de repetición de situaciones que pueden producirse divergencias en la solución de los litigios. Esto significa que, un error en la aplicación e interpretación del derecho por el juez de instancia, es susceptible de reproducirse en caso futuros, porque de lo que se trata es precisamente en advertir que la norma jurídica está pensada para regular situaciones o supuestos de hecho, de ahí que el rol del tribunal casacional sea controlar el derecho no los hechos.

En el caso de estudio, la misma Sala colige que la testigo incumple con lo establecido en el art. 357 CPCM, y también lo hacemos nosotros al transcribir en esencia lo dicho por ella, y que demuestra con claridad que no encuadra en el supuesto legislativo, pues es evidente que la testigo no tiene conocimiento personal sobre lo declarado.

Entonces, el interés como tribunal casacional es identificar, señalar y corregir el error del tribunal de alzada, o sea, que la función propiamente casacional es la de verificar la existencia o no del posible vicio en cuanto a la norma de derecho, -sin entrar a los hechos- y si de su estudio se advierte tal infracción, es obligación del tribunal casacional decirlo y pronunciarse en ese sentido, para que luego surtan los efectos de su decisión, es decir, anular la sentencia, y según el vicio -de forma o de fondo-, proceder a su reenvío o pronunciar la sentencia que corresponde.

En otras palabras, la Sala debió limitarse únicamente al control de derecho, y si la testigo es de referencia por no constarle personalmente lo declarado, y si la *ad quem* le hizo fe ese dicho, es evidente la existencia de la infracción de ley, en contra del art. 357 CPCM señalado como infringido, y, en consecuencia, conforme a la naturaleza, finalidad y técnica casacional, la Sala debió anular la sentencia venida en casación, y sobre la base del art. 537 inc. 1° CPCM, pronunciar la correspondiente.

De esa manera la Sala hubiese dado cumplimiento con lo que sostiene el jurista Guzmán Finja, en el sentido que la primordial finalidad que debe acometer y satisfacer el recurso de casación es la de uniformar la jurisprudencia, con el objeto de salvaguardar el principio de igualdad, así como los principios de seguridad y de certidumbre jurídicas. Si la Cámara cometió un error en la aplicación del derecho, es obligación de la Sala advertirlo y corregirlo, con el objetivo que no vuelva a ocurrir y que de igual manera otros tribunales de instancia cumplan con la misma línea jurisprudencial, que para este caso sería que los testigos de referencia no merecen fe conforme al art. 357 CPCM.

No obstante, ello, la Sala comete un error de técnica, puesto que habiendo advertido y sostenido que "si bien, dicha señora hizo alusión a situaciones referidas por otras personas, las cuales recaen en testimonio de referencia, por no haber sido específica para revelar ciertos datos", cae en la tentación de convertirse en tribunal de instancia y entrar a conocer el fondo del asunto al analizar hechos, mientras ejerce de tribunal casacional, (lo cual ha quedado claro en la primera parte de este voto, que la doctrina critica en el entendido que este recurso que nos ocupa no es una tercera instancia).

Así la. Sala, afirma que lo dicho por la testigo "acompañado con otros elementos, dan la certeza al juzgador del hecho que se pretende demostrar", y de esa manera procede a realizar una acotación de prueba documental consistente en la certificación de la partida de nacimiento del señor ********.

Al respecto, debemos tener claro que el vicio por el que fue admitido el recurso se trata de inaplicación, y no referido a aspectos de valor probatorio, como para dilucidar, como lo hace la Sala, que, en materia de familia, cabe el sistema de la valoración conjunta de la prueba, y de esa manera facultarse a escudriñar el expediente para identificar otros medios probatorios que puedan salvar el dicho de la testigo. Esto último, es propiamente labor del juez que conoce del fondo, del juez de instancia, pero no del tribunal casacional, pues éste tiene una función extraordinaria, especial, y su esfera de conocimiento se circunscribe al aspecto meramente del derecho, no de los hechos, como reiteradamente se ha venido denunciando.

En esa línea, la Sala contradice lo sostenido por Fluja, quien afirma que debe contenerse el poder de control del tribunal casacional dentro de las cuestiones jurídicas, y que solo le está permitido un muy restringido examen de las circunstancias Tácticas de la relación de fondo sin que, "bajo ningún pretexto, le lleve a

realizar su propia constatación, determinación, apreciación y valoración de tales hechos".

Es de insistir y recordar que el tribunal casacional tiene una doble personalidad. por así describirlo. Una, como órgano contralor del derecho, función propiamente casacional; y, la otra, como juez de instancia, que como consecuencia del ejercicio de la primera función anule la sentencia recurrida, y en el caso de no existir reenvío - por motivos de fondo- entonces, tiene una jurisdicción positiva, y se convierte en el juzgador de alzada, pues el litigio de fondo queda sin solución y que, para proporcionarla, el legislador optó por facultarle a resolverlo. Es hasta entonces, que el tribunal casacional, sí está facultado para conocer del fondo del asunto, y en consecuencia de los hechos.

Debo afirmar que sí comparto el análisis probatorio de la Sala que consta en la resolución que razono, pero ese pronunciamiento debió hacerse únicamente al anular la sentencia del *ad quem,* y luego, conforme al art. 537 inc. 1°, proceder a realizar el correspondiente estudio del fondo. En este caso, la Sala, sin anular la sentencia de instancia, decide actuar como tribunal de alzada cuando se encontraba desempeñando su función casacional.

Es decir, que el objeto de este razonamiento, es advertir que debemos limitarnos a actuar según sea el rol que la ley nos impone, ya sea como tribunal casacional o como tribunal de instancia -siempre que se haya casado la sentencia recurrida por un motivo de fondo-.

En resumen, el error de la Sala estriba en haber confundido dichos roles, y estando en el ejercicio de la Función casacional, conocer del fondo, lo cual es contrario, como ya se dijo, a la esencia propia del recurso de casación. La Sala, al advertir la existencia de la infracción de ley alegada por el recurrente, debió casar la sentencia, anularla en consecuencia, y luego pronunciar la correspondiente; y es hasta entonces que sí estaba facultada a conocer de los hechos.

Este desconocimiento o confusión de roles, conlleva la injusticia de no haber conocido sobre los hechos del asunto, ya que, al negarse la anulación de la sentencia recurrida, en virtud del vicio cometido por la *ad quem,* la Sala, ya como tribunal de instancia, hubiese advertido que lo que estaba en juego además de la terminación de la relación matrimonial, también se debatía sobre la imposición de la pensión compensatoria.

Y afirmo que se trata de una injusticia, porque -como se viene insistiendo- ya superado el control de derecho de la norma infringida, y que resulta en anulación de la sentencia de alzada, y abierta la facultad de pronunciarse como tribunal de instancia, se acota en el caso de estudio que lo litigado trata sobre la sentencia de divorcio por la causal de ser intolerable la vida común entre los cónyuges señora ******** y el señor ********; y, la pensión compensatoria a favor de la señora **********, por la suma de cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América, en un solo pago y efectivo, pagaderos en un plazo de treinta días hábiles posteriores de ejecutoriada la sentencia, así como el pago en concepto de indemnización por daños de carácter moral, la cantidad de cincuenta mil dólares

de los Estados Unidos de América, efectivos en un solo pago, una vez ejecutoriada la sentencia decretada.

Respecto del divorcio, basado en la infidelidad del señor **********, tal y como afirma la Sala, existen elementos suficientes para advertir que la causal es procedente, sin discusión alguna. Sin embargo, respecto sobre la pensión compensatoria, amén del monto impuesto, debo señalar que no comparto la forma de pago, pues difiere del contenido del texto y del espíritu contenido en el art. 113 del Código de Familia, en adelante CF.

En una breve referencia a lo dispuesto en dicho artículo, debe advertirse que el legislador establece causas de extinción del derecho a recibir la pensión compensatoria -art. 113 inc. 4° CF- y a su vez, causas de extinción de la obligación compensatoria art. 113 inc. 5° CF-.

Ahora bien, al establecerse un monto pagadero en un solo pago, como sucede en el presente caso, se le niega al deudor acceder a cualquiera de estas vías de extinción, y se violenta el derecho a la libertad contractual establecido especialmente en el inciso quinto del artículo citado, pues el legislador, regula tanto la opción de los interesados a llegar a un acuerdo mutuo, como también la del deudor de pedir justificadamente al juez de la causa, se le considere la oportunidad de ofrecer cualquier modo legalmente señalado en dicho artículo, para satisfacer su obligación compensatoria

De ahí que la Sala, pierde y niega la oportunidad para establecer un precedente jurisprudencial importante sobre este asunto, y de corregir un error que posiblemente se esté cometiendo con frecuencia por los tribunales de instancia.

III.-Por ello, es que como expuse en la primera parte del presente voto, que la esencia del recurso respecto de sus finalidades es la de uniformar. Esta necesidad no debe perderse de vista por este tribunal casacional, nuestro ideario debe ser el cumplimiento estricto de proteger la norma jurídica, tanto en su función nomofilática y uniformadora, como la protección del derecho de los litigantes.

Al olvidar lo anterior, se permite que los errores en la aplicación e interpretación del derecho se reproduzca en casos futuros, y que esos errores además de provocar la injusticia en el caso concreto debido a la trasgresión de la norma por el juez, trasciendan y reproduzcan la misma injusticia para casos futuros semejantes, pues es una aplicación e interpretación normativa que se fija con aptitud de realizarse para casos futuros.

En consecuencia, es oportuno que la Sala, en unanimidad, defina con claridad su propio rol como tribunal casacional y -excepcionalmente- como tribunal de instancia, a fin de garantizar igualdad y seguridad jurídica a los justiciables, y certidumbre a los juzgadores respecto de los precedentes jurisprudenciales y doctrina emitidas por este órgano casacional. Finalmente, es oportuno considerar el compromiso de promover las propuestas de reforma normativa respecto del recurso de casación, a diez años próximos de su vigencia, con el objeto de evitar, o cuando menos disminuir, la diversidad de criterios en la práctica.

Por tanto, de conformidad con las disposiciones citadas y análisis efectuado, soy de la opinión que lo procedente fue casar la sentencia que se recurre por el motivo de infracción de ley por inaplicación del art. 357 CPCM, y pronunciar la sentencia que conforme a derecho corresponde, art. 537 inc. 1° CPCM."

Sala de lo Civil, número de referencia: 322-CAF-2018, fecha de la resolución: 07/02/2020

MATERIA: LABORAL

ABANDONO DE LABORES

EL TRABAJADOR, INICIADA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, RENUNCIA A SU DERECHO A SEGUIR OCUPANDO SU PUESTO DE TRABAJO Y LO DEJA DEFINITIVAMENTE, LO QUE SUPONE UNA DECISIÓN LIBRE DE SU VOLUNTAD, SIGUE UN ESTADO DE SEPARACIÓN DEFINITIVA DE SUS LABORES

"Error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, art. 461 CT

5. Sobre la infracción alegada, la impetrante en resumen expresó, que la Cámara claramente valoró la prueba testimonial mediante el sistema de la prueba tasada o tarifa legal, es decir, un sistema de valoración de la prueba, diferente al ordenado por el Código de Trabajo en su art. 461, cuando en su sentencia expuso, que los señores MNCF y JAHL, fueron claros y contestes, y que con su testimonio se probó plenamente el abandono de labores del trabajador demandante. No obstante, la recurrente considera que tal apreciación de la prueba testimonial fue arbitraria, abusiva o absurda, ya que no es cierto que los testigos mencionados hayan sido claros y contestes en sus declaraciones, sino que por el contrario existen incongruencias en sus deposiciones, de modo que no generan convicción y certeza de que los hechos atribuidos al trabajador, ocurrieron como lo plasmó su contraparte; pues su poderdante no abandonó sus labores, sino que fue despedido injustamente antes de llegar a la fecha que estableció cuando se apegó a la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. Así también estima la impetrante que, el tribunal de segunda instancia conforme a las reglas de la sana crítica estaba obligado a fundamentar sus sentencias y expresar las razones por las cuales le concedía eficacia probatoria a la prueba mencionada anteriormente.

La Cámara Segunda de lo Laboral, en lo que respecta a la prueba testimonial, sostuvo: "[...] y en definitiva tenemos que con la prueba testimonial de descargo de fs. [...], en especial la de los señores MNCF y JAHL, se tiene plenamente comprobado el abandono de labores por parte del trabajador en la forma descrita en el escrito de fs. [...], y es que los testigos ya citados, son claros y contestes al decir que el actor se retiró y se ausentó voluntariamente de sus labores desde el día doce de marzo del presente año, y que hasta la fecha ya no se presentó a sus labores, generando convicción y la certeza de que los hechos atribuidos al trabajador, ocurrieron como lo plasmó la defensa de la parte demandada, y por esto es que tenemos por establecida la excepción relacionada, por lo tanto, no es viable para esta Cámara que el despido haya sucedido como lo plantea el actor en su demanda [...] puesto que según el preaviso y renuncia voluntaria agregados de fs. [...], la fecha estipulada en la que surtiría efectos el retiro, era el día seis de abril del corriente año, pero según la prueba ya dicha, el trabajador

no esperó tal fecha, y abandonó su cargo para la empresa, el día doce de marzo del presente año" (sic).

Esta Sala en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que el error de derecho en la prueba testimonial sólo puede darse, cuando el juzgador analiza el medio probatorio mediante un argumento que carece de sentido o que es contrario a la razón, es decir, absurdo; cuando la apreciación es excesiva o indebida se le denomina abusiva; y cuando al actuar sigue su voluntad a capricho sin ajustarse a las leyes o a la razón, es arbitraria. (Resolución del cinco de julio de dos mil diecisiete, con referencia número 72-CAL-2017)

8. Esta Sala advierte que el ad quem se limitó a establecer en su sentencia, que los testigos fueron claros y contestes, generando certeza y convicción con relación a que el trabajador demandante se retiró y ausentó voluntariamente de sus labores desde el día doce de marzo de dos mil diecinueve, tal y como lo manifestó la defensa de la demandada. Al respecto es menester analizar las declaraciones de los testigos señores CF y HL, en aras de determinar si la Cámara incurrió en el vicio invocado.

9. A folios [...]de la pieza principal, consta el acta correspondiente a la audiencia en la que declararon los testigos de descargo, siendo que la señora MNCF quien manifiesta ser la jefe de Recursos Humanos de la sociedad demandada, en lo relativo al tema en cuestión expuso que el trabajador se presentó a su oficina el doce de marzo, entre las once u once y media de la mañana y le expresó su molestia, posteriormente se retiró y algunos días después la llamó vía telefónica y el preguntó por su salario, y ella le respondió al actor, que no había llegado a trabajar pero que ahí se lo tenían; continuó acotando la testigo, que el trabajador sin presentar justificación alguna ya no llegó, ni regresó a trabajar, ni le volvió a contestar las llamadas telefónicas. Por su parte, el testigo señor JAHL, quien expone ser el jefe de agencias de la demandada y haber sido el jefe inmediato superior del trabajador, en lo referente al punto bajo análisis manifestó que se convocó al actor a una reunión de trabajo el día doce de marzo de dos mil diecinueve, a la cual asistió y le asignaron tareas, sin embargo, a las doce del mediodía abordó al referido trabajador en un pasillo y le preguntó que pasaba, pero lo "dejó con la palabra en la boca" y solo se fue.

10. Analizadas las declaraciones de los testigos relacionados, esta Sala no logra colegir los elementos por medio de los cuales el tribunal de segunda instancia estableció de manera inequívoca el abandono de labores alegado por la parte demandada.

11. Sobre tal aspecto es necesario establecer, que el abandono de labores consiste en que el trabajador, iniciada la prestación del servicio, renuncia a su derecho a seguir ocupando su puesto de trabajo y lo deja definitivamente, lo que supone una decisión libre de su voluntad a la que sigue un estado de separación definitiva de sus labores.

12. En esa línea de pensamiento debe tenerse en cuenta, que cuando se habla de una decisión libre de voluntad por parte del trabajador, tal circunstancia implica que es éste quien manifiesta su decisión de no continuar con el vínculo laboral, sin que la misma se vea afectada por ningún tipo de presión o coacción,

tal como sucede en el caso de la renuncia voluntaria, a la que sigue una separación definitiva de sus labores, por parte del trabajador.

13. En tal sentido, cuando la parte demandada opone la excepción de abandono de labores, en contra de la acción de pago de indemnización por despido injusto, existe en la misma, la afirmación de parte del empleador, de que fue el propio trabajador quien dio por terminado el contrato de trabajo, renunciando a su derecho de continuar prestando el servicio convenido y dicha situación, deberá comprobarse.

14. En consecuencia, considerando la característica de decisión de libre voluntad que impera en el abandono de labores, a juicio de esta Sala, con las declaraciones de los testigos presentados por el sujeto pasivo de la pretensión, no se logró comprobar tal aspecto, mismo que es determinante, ya que las declaraciones de los testigos se circunscriben a señalar que el trabajador se fue del lugar de trabajo el doce de marzo de dos mil diecinueve, alrededor del mediodía y que sin mediar justificación alguna ya no regresó a trabajar; sin embargo, no ilustran en cuanto a la intención del trabajador de abandonar sus labores. Además, en la sentencia impugnada no consta proceso lógico e intelectivo, que la Cámara llevó a cabo para fallar como lo hizo, pues dicho tribunal no expuso porqué lo depuesto por los testigos le generaba convicción y certeza en cuanto a los hechos sobre los que testificaron, requisitos que exige el sistema de valoración de la sana crítica contemplado en el art. 461 CT. Por lo que, la sentencia será casada por el error de derecho alegado, con relación a la norma que se cita infringida; y se procederá a pronunciar la sentencia correspondiente.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

Conforme a lo antes expresado, esta Sala pronunciará la sentencia que conforme a derecho corresponde, relacionada directamente con la infracción planteada por la recurrente.

Esta Sala advierte que el demandado fundamentó sus agravios en apelación, en el hecho de que el a quo desestimó la excepción de abandono de labores interpuesta por su parte.

Sobre el aspecto mencionado, esta Sala ya se manifestó en el párrafo número diez de los fundamentos de derecho de esta sentencia, advirtiendo que de las declaraciones de los testigos de descargo mencionados, no se coligen los elementos mínimos para que se comprobara el abandono alegado, circunstancia que motivó la casación de la sentencia impugnada, por lo que tal situación no se analizará nuevamente".

DADO QUE EL DESPIDO SE PRESUME, EN CONSECUENCIA, ES PROCEDENTE CONDENAR A LA DEMANDADA AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO, VACACIÓN Y AGUINALDO PROPORCIONAL

"En esa línea de pensamiento, habiéndose establecido que no se ha acreditado el abandono de labores por el trabajador JCLA, la justificación de esta

sentencia está dirigida a determinar si en el proceso, se acreditó el despido injustificado alegado por la parte actora, en su demanda de folios 1.

5. En la demanda de referencia, el trabajador expuso que ingresó a laborar para y a las órdenes de la demandada, el dos de septiembre de dos mil dieciséis, hasta el once de marzo de dos mil diecinueve, fecha en la que fue despedido por el señor JAHL.

6. Del análisis de las circunstancias expuestas, se advierte que se han cumplido los requisitos para aplicar la presunción legal de despido contenida en el art. 414 CT, ya que, en primer lugar, la demanda fue presentada dentro de los quince días hábiles siguientes al hecho del despido. En segundo lugar, de la lectura del acta correspondiente que corre agregada a folios [...], se advierte que, aunque el representante de la sociedad demandada compareció a la audiencia conciliatoria, no estuvo dispuesto a conciliar, ya que la jueza del Juzgado Cuarto de lo Laboral le propuso que pagara el cincuenta por ciento de la cantidad reclamada, y el apoderado de la demandada no aceptó. En tercer lugar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 CT se presume la calidad de representante patronal del señor JAHL, quien efectuó el despido, de acuerdo a lo expuesto por el demandante; pues el referido señor en su declaración de testigo, que se documentó mediante formato digital y video, que corre agregado a folios [...]; expuso que ostenta el cargo de jefe de agencias, y que era el jefe inmediato superior del trabajador; que entre sus funciones se encontraba la de dirigir al personal; que en conjunto con el área de recursos humanos toman la decisión de despedir empleados, de modo que se colige, que ejerce funciones de administración en la empresa demandada. Y, en cuarto lugar, la relación de trabajo se ha acreditado debidamente, puesto que no ha sido un punto en contienda en el presente juicio, sino que la parte demandada ha aceptado que el demandante trabajó para y bajo sus órdenes.

Dadas las razones expuestas, el despido se presume y, en consecuencia, es procedente condenar a la demandada al pago de indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional.

En cuanto al pago de salarios adeudados por días laborados y no remunerados, desde el día uno de marzo de dos mil diecinueve, al día once de ese mismo mes y año, debe advertirse que consta en el proceso, específicamente a folios [...], prueba de que los mismos, fueron cancelados al trabajador demandante".

Sala de lo Civil, número de referencia: 347-CAL-2019, fecha de la resolución: 27/01/2020

APLICACIÓN INDEBIDA DE LEY

EL VICIO ALEGADO NO SE CONFIGURA CUANDO NO SE LOGRA ESTABLECER QUE EL AD QUEM HAYA ENMARCADO LOS HECHOS DEL CASO CONCRETO EN LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN LA NORMA, ES DECIR, QUE HAYA APLICADO EL ART. 414 DEL CÓDIGO DE TRABAJO

"Aplicación indebida del art. 414 del Código de Trabajo

Respecto de este submotivo la licenciada […] expresó que la Cámara aplicó, indebidamente, el art. 414 del Código de Trabajo; a pesar de que, la presunción

establecida en dicha norma fue desvirtuada por su mandante, a través de la causal tercera del art. 50 del Código de Trabajo.

Sobre el vicio invocado, debe tenerse en cuenta que en sentencia 471-Cal-2018, de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, entre otras, este tribunal estableció que, "la aplicación indebida de ley, es el resultado del proceso lógico-jurídico que verifica el juzgador, a fin de establecer si el caso particular está o no contenido en la norma, concluyendo que lo está a pesar de que la norma que fue aplicada no era relevante para resolver el caso y sin embargo fue aplicada".

Del análisis de la sentencia de la Cámara Segunda de lo Laboral, y tomando en consideración la jurisprudencia citada, no se logra establecer que el ad quem haya enmarcado los hechos del caso concreto en la hipótesis contenida en la norma, es decir, que haya aplicado el art. 414 del Código de Trabajo, ya que únicamente se advierte que se limitó a confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia.

En tal sentido, en el caso de mérito no se cumplen los presupuestos establecidos para la causal casacional de aplicación indebida de ley; por tanto, esta Sala no casará la sentencia por este motivo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 118-CAL-2019, fecha de la resolución: 29/10/2020

ASISTENTES DE GRUPOS PARLAMENTARIOS

CÓDIGO DE TRABAJO APLICABLE A ESTOS TRABAJADORES

"Asimismo, la Cámara hace alusión a que la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa, tiene por objeto que ningún empleado público sea privado de su empleo o cargo sin ser previamente oído y vencido en juicio con arreglo a la ley, para los casos no comprendidos en la Ley de Servicio Civil o en los casos que carece de la ley secundaria que regule las obligaciones y deberes de los empleados públicos, así como en donde se establezcan las causas y procedimientos para su destitución.

Dadas las consideraciones de la Cámara en relación a la competencia para sentenciar el caso, este tribunal, en relación a la normativa aplicable al trabajador, hace las consideraciones siguientes:

En primer lugar se debe mencionar que no consta agregado al proceso el contrato de trabajo del demandante señor, FEHV; por ende, no se conoce la naturaleza jurídica de la relación laboral que mantenía con la Asamblea Legislativa.

Por otra parte, el art. 2 literal b) inciso 1° CT, cuando cita las exclusiones relativas a las personas que prestan servicios por medio de contrato, exceptúa de su ámbito de aplicación específicamente aquellas relaciones de trabajo que emanan de un contrato para la prestación de servicios profesionales o técnicos; los cuales se encuentran regulados en el art. 83 de las Disposiciones Generales de Presupuestos en adelante DGP y que sólo pueden darse bajo las condiciones

que en dicho precepto se establecen, en otras palabras: a) que la labor a realizar sea propia de la profesión o técnica del contratista; b) que las labores a realizar sean de carácter profesional o técnico, no de índole administrativa; c) que no pertenezcan al giro ordinario de la institución, es decir, que sean de carácter eventual o temporal, no permanente; y, d) que no haya plaza vacante con iguales funciones que las que se pretende contratar en la Ley de Salarios,

En ese sentido, el trabajador no está excluido de la aplicación del CT, pues según la información proporcionada en la demanda y otros documentos agregados al proceso; se advierte, que se desempeñaba como asistente; y entre sus funciones se encontraba la de conducir vehículos, y dar asistencia general.

Por su parte, el apelante sostiene que el trabajador está sujeto al régimen legal de la ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa; no obstante, no es aplicable al caso de autos, dado que según el considerando del decreto de creación, su ámbito de materialización se circunscribe a los casos no comprendidos en la Ley de Servicio Civil o en los que se carece de la ley secundaria que regule las obligaciones y deberes de los empleados públicos, así como en donde se establezcan las causas y procedimientos para su destitución. Y si bien es cierto, de conformidad art. 4 literal m) inciso 3° de la Ley de Servicio Civil, el trabajador demandante está excluido de la carrera administrativa por haber prestado sus servicios para la Asamblea Legislativa, también se ha explicado que no está excluido de la normativa del CT, por ende sí hay ley secundaria aplicable, es decir el Código de Trabajo.

En definitiva, la ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa, no es aplicable al trabajador debido a que esta sólo rige cuando el vínculo que une al trabajador con el Estado es de naturaleza pública. Sin embargo, en este caso se ha concluido que la relación de trabajo está sujeta al Código de Trabajo.

Por consiguiente, no tiene razón el recurrente al argumentar que la Cámara no tenía competencia para conocer de la demanda, pues efectivamente sí la tiene, tal como este tribunal lo fundamenta.

10. Continuando con el análisis de los puntos apelados, el agente auxiliar del Fiscal sostiene que la prueba documental aportada por el demandante, la nota de no renovación de contrato folios [...] de la pieza principal, no prueba los extremos de la demanda tal como lo afirmó la Cámara, pues a su juicio necesariamente se requería de otros elementos probatorios, como la prueba testimonial.

11. En ese sentido, para el apelante la valoración del ad quem es errónea pues de acuerdo a su contenido en ninguna parte está consignada la palabra “DESPIDO”, sino mas bien se refiere a la no renovación de los contratos a partir del uno de enero de dos mil diecinueve. Por ello sostiene, que no se dan los presupuestos necesarios para establecer los extremos de la demanda, particularmente en lo que respecto al despido.

Así también, el apelante sostiene que el inciso segundo del art, 28 CT, dispone que al existir plazo en los contratos laborales, deberá respetarse para la

terminación del contrato, como en el presente caso, que expiró el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho,

Esta Sala al analizar la prueba agregada al proceso, específicamente la certificación de folios [...]de la pieza principal, a través de la cual el señor Carlos Reyes, coordinador del grupo parlamentario ARENA comunicó al señor Norman Noel Quijano González, quien ostentaba el cargo de presidente de la Asamblea legislativa, la no renovación del contrato de trabajo del señor FEHV, demandante, a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, se advierte que efectivamente el señor R solicitó la terminación del contrato de trabajo del trabajador demandante, quien estaba a sus órdenes,

Además, es irrelevante que no se le haya consignado la palabra "DESPIDO", puesto que el hecho de no renovar un contrato de trabajo bajo el pretexto del vencimiento del plazo constituye un despido, es decir el objetivo es el mismo, dar por terminada una relación de trabajo sin justificación.

Sin embargo, para el apelante el contrato no se renovó dado que finalizó su vigencia.

No obstante para esta Sala, de la prueba documental agregada al proceso, folios [...] de la pieza principal, se advierte, que el trabajador realizaba labores permanentes en la Asamblea Legislativa; por tanto, no pueden ser calificadas de transitorias, temporales o eventuales y el plazo contenido en el contrato, se tiene por no puesto, de conformidad a lo establecido en el art. 25 CT, entendiéndose así, que fue celebrado por tiempo indefinido, así: "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa, se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se señale plazo para su terminación". (sic).

De conformidad a la anterior disposición legal, el plazo fijado en los contratos en los que las labores son de carácter continuo y permanente, carece de validez y debe tenerse por no puesto, entendiéndose el contrato de carácter indefinido. De tal forma, se le reconoce al personal contratado por la administración pública el derecho a la estabilidad laboral aunque se haya fijado plazo para la terminación del contrato de trabajo, cuando este haya desarrollado tareas correspondientes al personal permanente, como el caso particular del demandante, que entre sus funciones estaba la de conducir vehículos.

Lo anterior es respaldado por el principio del contrato realidad que rige en materia laboral, en el sentido que los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen, en tanto se reconoce que dichos trabajadores, tienen estabilidad laboral no obstante el plazo consignado en sus contratos. Sentencia de apelación, de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del nueve de abril de dos mil catorce, referencia 5-Apl-2012.

Por tal motivo, esta Sala al igual que el ad quem estima que el despido está debidamente acreditado. Sentencia de apelación, del trece de junio de dos mil catorce, con referencia 16-Apl-2013.

Así también, el art. 55 Inc. 2° CT, regula de forma específica los sujetos que pueden realizar la ruptura del vínculo laboral de forma unilateral por decisión del empleador, es decir los representantes patronales. De conformidad al art. 3

CT, se presume de derecho que son representantes del patrono, los directores, gerentes, administradores, caporales y, en general, las personas que ejercen funciones de dirección o de administración en la empresa, establecimiento o centro de trabajo; por tal razón este tribunal afirma que la representación patronal del señor Carlos Reyes, coordinador del grupo parlamentario de ARENA se encuentra plenamente probada.

Igualmente se encuentra plenamente acreditada la existencia de la relación laboral con la constancia de trabajo agregada a folios [...], extendida por el señor PMGD, gerente de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, en la cual se relaciona que el trabajador señor FEHV, laboró desempeñando el cargo de asistente, desde el tres de abril de dos mil diecisiete hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, devengando un salario mensual de quinientos dólares de los Estados Unidos de América. En consecuencia, de conformidad al art. art. 20 CT, se presume el contrato de trabajo.

Por lo anterior, en definitiva, para este tribunal la terminación del contrato fue sin causa legal, por lo cual es procedente confirmar la condena de pago de indemnización por despido injusto, declarada por la Cámara Primera de lo Laboral".

Sala de lo Civil, número de referencia: 10-APL-2019, fecha de la resolución: 20/01/2020

CONCILIACIÓN

DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD CUANDO EL RECURRENTE NO RECLAMÓ LA SUBSANACIÓN DE LA FALTA DE CITACIÓN LEGAL, HACIENDO USO OPORTUNO Y EN TODOS SUS GRADOS DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS POR LA LEY

"Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por falta de citación legal a conciliación

Precepto infringido art. 386 CT

Respecto al vicio alegado, el recurrente fundamentalmente expuso: "[...] En el caso que nos ocupa, fue señalada en la respectiva demanda el lugar para citar y emplazar a los entonces demandados en: **********, JURISDICCION DE TAMANIQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; siendo el caso, que tal como consta en el informe del notificador, el cual se encuentra a folio […] de la respectiva causa en primera instancia, la diligencia de la notificación de la respectiva cita, que a su vez sirve de emplazamiento hacia los demandados, estos no fueron encontrados en el lugar señalado para citarlos y emplazarlos, por lo que fueron citados, notificados y emplazados por medio del señor […], quien manifestó ser el Administrador de dicha Lotificación ********. (...) Adviértase además que en caso que nos ocupa, no se realizaron las debidas diligencias para la respectiva localización de los demandados.

No omito manifestar que mis representados tuvieron conocimiento de la existencia de la causa venida en grado, por medios de terceras personas y hasta mu-

cho tiempo después de la declaratoria de rebeldía respectiva (la cual también fue notificada al señor […], quien manifestó ser el Administrador de dicha Lotificación ********). No omito manifestar, además, que no consta en el proceso ningún acto de notificación en forma realizada a los representados, sino hasta que el suscrito se mostró parte en el mismo [...]" (sic).

Inicialmente se analizará el sub- motivo referente a la falta de citación legal a conciliación en virtud de tratarse de un error "in procedendo". De conformidad al art. 590 CT, para admitir el recurso por quebrantamiento de forma, es indispensable que quien lo interponga haya reclamado la subsanación de la falta, haciendo uso oportunamente y en todos *sus* grados de los recursos establecidos por la ley, salvo que el reclamo fuere imposible.

En este sentido, este tribunal verificó en pieza de primera instancia, que el recurrente no hizo reclamo ninguno de subsanación de la falta que alega, sino hasta folios. […] de la pieza de apelación, en donde alegó vulneración del derecho de defensa de sus representados, en razón de la falta de citación legal a la audiencia conciliatoria. De lo anterior, es factible advertir que el impetrante hizo uso del recurso de apelación para subsanar la falta que ahora señala; y no lo alegó en todos sus grados, como lo exige el art. 590 CT, incumpliendo con ello un requisito obligatorio de admisión para el vicio invocado, razón suficiente para inadmitir dicho submotivo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 158-CAL-2020, fecha de la resolución: 30/11/2020

CONFESIÓN

LA PRESUNCIÓN ESTABLECIDA EN EL ART. 347 CPCM, QUE OPERA AL NO HABER COMPARECIDO LA PERSONA QUE DEBIÓ DE REALIZAR LA DECLARACIÓN DE PARTE CONTRARIA, NO SE PUEDE ENMARCAR DENTRO DE LA FIGURA DE CONFESIÓN, POR LO QUE EL VICIO ALEGADO NO SE CONFIGURA

"Infracción de ley por el submotivo de error de hecho en la confesión cuando haya sido apreciada sin relación a otras pruebas, arts. 400 y 465 CT, con relación al art. 347 CPCM

1. Cabe señalar, que el error de hecho consiste, principalmente, en el juicio u opinión que de la prueba se ha formado el juzgador, al haberla apreciado mal, por no haber considerado la eficacia probatoria de la misma, por haber obviado elementos probatorios de un documento; cuando una confesión fue apreciada sin relacionarla con otras pruebas, o simplemente cuando el juez ignora la prueba que consta agregada al proceso. (Sentencia de las once horas diez minutos del diez de junio de dos mil diecinueve, bajo la casación con referencia 56-CAL-2019).

2. En cuanto al vicio invocado, la recurrente argumentó lo siguiente: "[...] Cometiste POR ERROR DE HECHO EN LA CONFESIÓN CUANDO HAYA SIDO APRECIDA SIN RELACIÓN A OTRAS PRIUEBAS. ART. 400 Y 465 C.T. CON

RELACIÓN Art. 347 CPRCM, el cual se evidencia cuando decís en los fundamentos de derecho numeral 8 """" En síntesis, esta Cámara concluye que con la inasistencia del trabajador demandante a la audiencia de declaración de parte contraria solicitada por la parte patronal, se acredito el abandono del trabajador a sus labores, haciendo imposible tener por establecida la presunción del art. 414 del Código de Trabajo (...) El yerro se evidencia cuando tú cámara valoraste la confesión llanamente, sin considerar los documentos que están agregados y que benefician al trabajador en el sentido de desvirtuar el abandono de labores alegado como excepción (...) Si tú honorable cámara hubieses valorado dichos documentos y apoyando un razonamiento en el Art. 465 del Código de Trabajo, el cual brinda otra presunción a favor del trabajador, hubieses desestimando la excepción planteada, por no haber documentos que desacreditan el supuesto abandono el día veintitrés de julio de dos mil diecinueve, ya que esos documentos son la prueba directa y con valor de plena prueba tal como lo establece el Art. 402 del Código de Trabajo, que demuestran que mi representado si laboró ese día, en síntesis tu sentencia se basó únicamente en la confesión presunta del Art. 347 CPRCM sin relacionar los documentos que de haber sido relacionados tu sentencia hubiese sido confirmar la condena en la sentencia, pues desacreditaba el abandono alegado el veintitrés de julio de dos mil diecinueve por medio de la confesión ficta del Art. 347 CPRCM (...)" (sic).

3. Sobre la situación expuesta por la recurrente, se debe tener en cuenta que la parte final del inciso 1 del art. 347 CPCM, referente a que: "(...) Si la parte citada para ser sometida al interrogatorio en audiencia, no comparece sin justa causa, se tendrán por ciertos los hechos personales atribuidos por la contraparte, salvo prueba en contrario (...)", es una presunción legal que no constituye un medio de prueba, sino por el contrario, dispensa la prueba de un supuesto hecho, al cumplirse ciertos requisitos que conforman premisas o presupuestos legales, tales como, que la diligencia se haya solicitado oportunamente con las formalidades de ley, y que se hayan establecido de manera clara y precisa, los hechos que se comprobarán con la realización de la misma.

4. Bajo ese contexto, la presunción que establece el art. 347 CPCM, y que opera al no haber comparecido la persona que debió de realizar la declaración de parte contraria, no se puede enmarcar dentro de la figura de confesión, y consecuentemente, con ésta no se puede configurar el error de hecho en la confesión cuando fue apreciada sin relacionarla con otras pruebas, ya que, la presunción aludida no se puede convertir en una confesión.

5. En consideración de lo anterior, el submotivo alegado por la recurrente no será admitido, ya que no existe la posibilidad que el ad quem haya cometido el error de hecho invocado".

Sala de lo Civil, número de referencia: 75-CAL-2020, fecha de la resolución: 23/03/2020

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

PRESUPUESTOS NORMATIVOS PARA SU EXISTENCIA

"Interpretación errónea del art. 17 CT

2.8. Esta Sala, en reiterada jurisprudencia; v.g., la sentencia con referencia 429-CAL-2016, de fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete, ha establecido, que el motivo de casación por interpretación errónea se comete, cuando el juzgador aplica la norma correcta al caso, pero lo hace dándole a la misma una interpretación equivocada, ya sea ampliándola, restringiéndola o cambiando su sentido, por consiguiente alterando los efectos jurídicos legalmente previstos por el legislador; por lo tanto, este tribunal tiene la labor de establecer, si la Cámara sentenciadora dio un alcance o limitación que el precepto señalado infringido no tiene, y contrastarlo con la supuesta interpretación correcta sugerida por el recurrente.

2.9. Asimismo, esta Sala ha determinado que para que exista interpretación errónea de ley, deben darse tres presupuestos: 1) que la norma señalada como infringida, haya sido aplicada en la sentencia por el juzgador; 2) que sea la norma aplicable al caso, es decir, que contemple el supuesto de hecho respectivo; y, 3) que no obstante haber aplicado la norma que correspondía aplicar, le haya dado un sentido o alcance que no es el verdadero.

2.10. En el caso de autos, el recurrente reclama que la Cámara sentenciadora interpretó erróneamente la disposición señalada como infringida, al exigir más requisitos que la ley ya establece, ampliando su sentido, exigiendo que para que exista el contrato individual de trabajo definido en el art. 17 CT, debe acreditarse la prestación efectiva de servicios a los demandados en forma conjunta y al respecto, principalmente expresó:" (...) Habéis cometido interpretación errónea de ley del artículo 17 C.T., al establecer una alcance que no tiene dicho artículo al caso en concreto por tratarse de una norma vigente que si bien es cierto es aplicable respecto de mi patrocinado con la parte empleadora pero establecisteis que debía probarse respecto de los patronos en conjunto, y no obstante se habían cumplido los presupuestos legales de operatividad que de una relación de trabajo, es decir la parte empleadora al ofrecer el reinstalo seguidamente asumiendo la relación de trabajo tácitamente por ende la subordinación salario y prestación de servicios respecto de mi representado en el presente juicio (...) porque según tu interpretación del referido artículo no se cumplía un requisito según tu sentencia y por el contrario exiges más requisitos de los cuales la ley ya establecía en tal sentido que el reinstalo puede ofrecerse aún en litis consorcio pasivo puesto que en ese momento procesal es una audiencia de conciliación(...)". (sic).

2.11. Respecto al punto discutido, la Cámara sentenciadora, estableció lo siguiente: "(...) En casos como el presente, la parte actora está obligada a acreditar las condiciones y estipulaciones alegadas por el trabajador MAPG en su demanda, entre estas la prestación efectiva de servicios para ambos demandados en su conjunto, pues dicho extremo es el que le da origen a la

prestación reclamada. 3. Si bien es cierto, consta intervención de la señora KSRS por medio de su apoderado Licenciado [...], y que éste ofreció un reinstalo; del análisis minucioso de autos, se constata que no consta incorporado al proceso, ningún medio probatorio tendiente a demostrar la existencia de una relación laboral que de igual forma lo vinculara al actor con el señor JUA (…)----el licenciado [...], en sus escritos de intervención de fs. [...] de la pieza principal, ha argumentado que el señor JUA nunca ha sido patrono del trabajador demandante, extremo que se ha acreditado por medio del contrato individual de trabajo que corre agregado a fs, [...]de la pieza principal (...) 5. El contrato de trabajo alegado por la parte actora es uno -el trabajador para con dos- los patronos demandados- de conformidad con el Art. 17 del Código de Trabajo; en ese sentido, no constando prueba alguna en autos, que acredite una prestación efectiva de servicios para con los dos demandados señores KSRS y JUA, en su conjunto, resultaría incongruente absolver a uno y condenar al otro (...)". (sic).

2.12. De acuerdo a la lectura de la sentencia y libelo del recurso se colige, que la Cámara sentenciadora concluyó, que en el caso particular discutido, era necesario probar la prestación de servicios para ambos demandados para acreditar la existencia del contrato individual de trabajo.

Ante ello, es necesario citar el precepto señalado como infringido: "Art. 17.-Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, es aquél por virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra, o a prestar un servicio, a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase, bajo la dependencia de éstos y mediante un salario. Quien presta el servicio o ejecuto la obra se denomina trabajador; quien lo recibe y remunera, patrono o empleador. No pierde su naturaleza el contrato de trabajo, aunque se presente involucrado o en concurrencia con otro u otros, como los de sociedad, arrendamiento de talleres, vehículos, secciones o dependencias de una empresa, u otros contratos innominados y, en consecuencia, les son aplicables a todos ellos las normas de este Código, siempre que una de las partes tenga las características de trabajador. En tales casos, la participación pecuniaria que éste reciba es salario; y si esa participación no se pudiere determinar, se aplicarán las reglas del Art. 415".

2.13. De la lectura de la disposición se determinan claramente los presupuestos normativos para la existencia de un contrato individual de trabajo. Estos son los siguientes: que la prestación de servicio de una persona debe ser bajo dependencia o subordinación y mediante el pago de un salario, características ampliamente reconocidas por el ad quem en su sentencia respecto de la señora KSRS, no así con el otro demandado, señor JUA. Sin embargo, esta circunstancia no desnaturaliza la existencia del contrato individual de trabajo; pues no es posible negar que el demandante puso su fuerza de trabajo a favor de la señora RS y no puede privársele de sus derechos laborales que conforme la ley le corresponden; por lo que la Cámara sentenciadora debió hacer un esfuerzo para determinar si efectivamente procedía

absolver a los demandados, y no desviarse a un análisis meramente civilista conforme al art. 76 CPCM".

PROCEDE CASAR LA SENTENCIA, LA CAMARA SENTENCIADORA AMPLIÓ EL CONTENIDO DEL ART. 17 CT

"2.14. Expuesto lo anterior y del análisis de la sentencia de la Cámara sentenciadora, esta Sala advierte, que dicho tribunal amplió el contenido del art. 17 CT, al considerar, que no obstante acreditarse en el proceso las características de subordinación de la prestación de servicios del demandado, bajo un salario; no era suficiente para determinar la existencia del contrato individual de trabajo; argumentando que al no haberse acreditado en forma conjunta, para ambos demandados, no era posible establecer la relación laboral.

2.15. Conforme los argumentos que preceden, no existe duda, que la Cámara sentenciadora, amplió el contenido del precepto señalado como infringido, al atribuirle un sentido que no corresponde a su texto. En consecuencia el ad quem cometió el vicio denunciado, por lo que la sentencia será casada y así deberá declararse.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

3.1. Habiéndose concluido que la sentencia controvertida debe ser casada, este tribunal, pronunciará la que a derecho corresponde, directamente vinculada a los puntos planteados por el apelante y apelado en el recurso de alzada".

ESTABLECIDO EL INCUMPLIMIENTO DEL REINSTALO DEL TRABAJADOR, CONFORME LAS PRUEBAS APORTADAS, SE PRESUME EL DESPIDO DE ACUERDO AL INCISO 3° DEL ART. 414 CT

"3.2. El defensor público laboral, licenciado [...], manifestó que la sentencia de primera instancia, causó agravios a su representado, y circunscribió su recurso a los reclamos siguientes: a) que el a quo realizó una valoración indebida de la prueba testimonial rendida por los testigos de cargo, al desestimarlos por no ser conformes en cuanto tiempo, modo y lugar, respecto del incumplimiento del reinstalo ofrecido al trabajador, ya que a su entender, debieron ser valorados individualmente sus dichos y determinar si generaban convicción o no; y b) que el juzgador omitió en la fundamentación de su sentencia la valoración de la declaración de propia parte rendida por el trabajador demandante, conforme la sana crítica, cuando dicho tribunal estaba obligado a incluirla en el análisis probatorio para resolver el caso planteado, tal como lo relaciona el art. 216 CPCM, que determina que deben incluirse los razonamientos fácticos y jurídicos relativos a la valoración de la prueba.

Con base al recurso de alzada, el apelante solicitó se revocara la sentencia controvertida por considerar que no fue conforme a derecho pues infringe, a su juicio, el principio de congruencia y la sana crítica como sistema de valoración de prueba.

3.3. Por su parte, el licenciado [...], apoderado de la demandada RS, al hacer uso de su derecho en el recurso de alzada, manifestó que el actor no logró acre-

ditar la representación patronal de la persona a quien se le atribuyó la realización del despido, ni el despido mismo. Asimismo manifestó, que en la audiencia conciliatoria realizada conforme al art. 391 CT, se acordó el reinstalo; que, sin embargo, fue el trabajador quien nunca se presentó a reanudar sus labores. Que los testigos presentados por el demandante para atribuir a su representada la responsabilidad del incumplimiento del reinstalo, conforme al inciso 3° del art. 414 CT, no merecieron fe al juzgador por el hecho que no fueron conformes en su declaración respecto de donde sucedió la negativa al reinstalo, pues uno manifestó que fue dentro de la oficina del centro de trabajo y el otro, que fue fuera de esta.

También el apelado manifestó que no se acreditó en el proceso la calidad de la persona a quien se atribuyó la realización del despido frente a su representada señora RS, y menos las facultades de un representante patronal; por lo que solicitó se confirme la sentencia por estar conforme a derecho.

3.4. Previo análisis de los puntos apelados, esta Sala considera necesario analizar algunos hechos, relativos a la relación de trabajo, así se advierte, que a folio uno de la pieza principal, se consignó que el trabajador PG, empezó a laborar para los señores: KSRS y JUA, el dieciocho de junio de dos mil trece; el apoderado de la demandada RS agregó al proceso fotocopia del contrato individual de trabajo a folios [...]de la pieza principal, que vinculaba al demandante únicamente con su representada, en el que consta que el tiempo de servicio se computaría a partir del dieciocho de junio de dos mil trece; circunstancia que fue consentida con el ofrecimiento del reinstalo en la audiencia conciliatoria y que consta en acta de folio [...]de la pieza principal.

También se advierte que ambos demandados fueron declarados rebeldes y se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo. Sin embargo, dicha rebeldía únicamente fue interrumpida por parte de la demandada RS, por medio de su apoderado [...], que es quien realizó todo un esfuerzo probatorio, tendente a establecer la inexistencia del despido alegado en la demanda y el incumplimiento del reinstalo por parte del demandante.

3.5. Expuesto lo anterior, se analizará el punto relativo a la apreciación indebida de la prueba testimonial, específicamente en cuanto al incumplimiento del reinstalo por parte de los demandados.

Se advierte que el a quo en su sentencia determinó que con la declaración de parte contraria rendida por la señora RS, y con el ofrecimiento del reinstalo, robustecido con prueba documental, relativa al contrato individual de trabajo; se tuvo por establecida la relación laboral con la demandada. Sin embargo, dicho juzgador desestimó la prueba testimonial rendida por los testigos de cargo, señores JEMM y APM, por considerar que no fueron conformes al señalar el lugar donde sucedió la negativa al reinstalo del demandante.

3.6. Considerando lo anterior, esta Sala procede al análisis de la prueba testimonial, la cual resulta necesario relacionar con la declaración de parte contraria rendida por la demandada RS y, la declaración de propia parte rendida por el trabajador PG, - segundo punto apelado- todas en formato digital y video, vinculados a los extremos alegados; con el objeto, de determinar si procede la

presunción de despido establecida en el inciso 3° del art. 414 CT, y establecer además, si está acreditada en el proceso, la responsabilidad de ambos empleadores en el despido injustificado alegado en la demanda.

3.7. Con el fin de ubicar el objeto de prueba, relativo al tiempo, modo y lugar sobre el que versará el análisis probatorio, se determina que el demandante estableció que laboró en el centro de trabajo denominado como [...], Ubicado en *********, Cumbres de la Escalón y que fue despedido aproximadamente a las nueve horas de la mañana del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el señor JUA, en la dirección señalada; sin embargo, consta a folios 8 de la pieza principal, que el apoderado de la demandada, señora RS, ofreció el reinstalo en su empleo al demandante en las mismas condiciones que las venía desarrollando, señalándose las ocho horas del día jueves ocho de noviembre de dos mil dieciocho, y que sería recibido por KSRS.

3.8. Asimismo, esta Sala considera conveniente aclarar que los extremos relativos a la relación de trabajo, calidad de la persona alegada en la demanda que realizó el despido, salario y demás condiciones han sido aceptadas por la parte demandada; pues sería contrario a la lógica considerarlos de manera diferente, ya que ningún empleador ofrecería el reinstalo a alguien que no le haya prestado los servicios laborales anteriormente. Por lo que, el proceso quedará reducido a acreditar el cumplimiento o no del reinstalo ofrecido y aceptado por el trabajador, y deducir conforme las pruebas, la responsabilidad conforme a la ley.

En el caso en análisis, el demandante afirmó que el reinstalo no fue posible por responsabilidad de la demandada, señora RS, y al efecto aportó prueba testimonial y ofreció como testigos a los señores JEMM y APM. Previo a continuar con el análisis, esta Sala no pasa por inadvertido que al no haberse contestado la demanda, los demandados fueron declarados rebeldes, tal como consta a folio [...] de la pieza principal. Sin embargo, la rebeldía únicamente fue interrumpida por la demandada KSRS, (folio 25 pieza principal) por lo que, la posible responsabilidad determinada conforme el sustrato probatorio, incluirá a ambos demandados; pues de los autos, y precisamente de las intervenciones del apoderado de la demanda RS (folio [...]del incidente de apelación) y el contrato individual de trabajo del demandante, contenido a folio [...] de la pieza principal, no es posible determinar que el centro de trabajo sea exclusivamente propiedad de la señora RS.

3.9. Resulta lógico para este tribunal que, al no haberse dado el reinstalo, el extremo procesal a acreditar por parte del actor es la responsabilidad de los demandados, por lo que resulta conveniente proceder al análisis de la prueba testimonial (Formato DVD) de cargo, contenida en las declaraciones de los señores JEMM y APM, debido a que el ad quem, efectivamente realizó una apreciación parcial de la prueba aportada al proceso y particularmente los testimonios vertidos por los testigos de cargo.

El primer testigo, señor MM, al minuto 03:00 minutos de su declaración, ubicó correctamente el centro de trabajo donde se acordó se realizaría el reinstalo del demandante, así como la hora correcta a los minutos 03:40; y señaló a los minutos 04:07 y 05:30, que la demandada RS, no se presentó al centro de trabajo,

pero los atendió la señora RR encargada de planillas (05:05minutos); asimismo, expresó el testigo, que esperaron a la demandada en la acera del taller durante 45 minutos y que nunca entró (minutos 06:52 y siguientes) también quedó constancia que el licenciado [...], apoderado de la demandada, señora RS, aseguró al deponente a los minutos 07:18, que en la acera donde estaban esperando a su representada habían cámaras de vigilancia.

El segundo testigo, señor PM, a partir de los minutos 11:52 y siguientes, expresó que acompaño al demandante al centro de trabajo en la hora y fecha acordada para el reinstalo; declarando que los atendió la señora RR (minutos 14:30), quien les manifestó que los señores no se presentarían a dicho lugar, sin embargo los esperaron aproximadamente 45 minutos; también quedó constancia a los minutos 16:04, que a repreguntas del apoderado de la demandada, licenciado [...], el testigo manifestó que fueron atendidos por la señora RR, en la entrada de la oficina dentro del taller.

3.10. Analizadas las declaraciones, para esta Sala dichos testigos merecen fe en sus dichos y con los cuales se determina que el incumplimiento del reinstalo fue responsabilidad de la demandada, señora KSRS, pues ambos testigos ubicaron tiempo modo y lugar donde se realizaría el reinstalo del demandante y el hecho que el testigo MM manifestó que esperaron en la acera y el testigo PM que entraron al taller y en la entrada de la oficina los atendió la señora RR, encargada de planilla, hechos también confirmados con la declaración de propia parte rendida por el demandante, en la que a repreguntas del licenciado [...], manifestó que la señora RR, los atendió fuera de la oficina, según consta a los minutos 04:35; por lo que, la supuesta contradicción de los testigos de cargo, señaladas por el apoderado de la empleadora, es insuficiente para desestimarlos; además del hecho que el apoderado de la señora RS, no realizó ningún esfuerzo por acreditar que el incumplimiento fue responsabilidad del trabajador demandante; y únicamente consta a folios [...] de la pieza principal, la declaración de parte contraria rendida por la demandada RS, quien se limitó a manifestar que el lugar, día y hora señalado para el reinstalo estuvo presente. Asimismo, dicho apoderado aseguró que en la acera del centro de trabajo había cámaras de seguridad y sobre ello no existe evidencia en el proceso; ni consta declaración alguna de la señora que atendió al demandante juntamente con los testigos relacionados.

3.11. La demandada, señora KSRS, al rendir - declaración de parte contraria, no aportó elementos suficientes que determinen que estuvo presente a las ocho horas del día jueves ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el centro de trabajo, señalado para el reinstalo del trabajador, pues a los minutos 02:40, únicamente manifestó haber estado presente y a los minutos 3:00 negó que el demandante y testigos hayan sido atendidos por la señora RR y que ella les haya manifestado que los demandados no se presentarían al centro de trabajo.

3.12. Establecido el incumplimiento por parte de la demandada al reinstalo del trabajador, conforme las pruebas aportadas, se presume el despido de

acuerdo al inciso 3° del art. 414 CT; resulta procedente condenar a los demandados conforme a las pretensiones ejercidas en la demanda".
Sala de lo Civil, número de referencia: 352-CAL-2019, fecha de la resolución: 24/02/2020

CUANDO EL FALLO OMITIERE RESOLVER PUNTOS PLANTEADOS

EL VICIO ALEGADO NO TIENE LUGAR, CUANDO EL AD QUEM ESTABA IMPOSIBILITADO DE CONOCER DE UNA PRESTACIÓN QUE NO FUE RECLAMADA EN LA DEMANDA

"FUNDAMENTOS DE DERECHO
Cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados
Precepto infringido, art. 394 del Código de Trabajo en adelante CT
Con relación al vicio alegado la recurrente, al desarrollar el concepto de la infracción, expresó lo siguiente: " (...) RESPECTO DE LA EXCEPCIÓN DE PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE AL 12 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ART 394 CT. El juez A quo ha omitido resolver en el incidente de apelación la excepción de pago planteada respecto del aguinaldo reclamado por el trabajador demandante del periodo del 13 de diciembre de dos mil diecisiete al 12 de diciembre de dos mil dieciocho lo cual ha sido violatoria de los derechos de mi mandante puesto que ya ha sido cancelado de forma electrónica a través de banco Davivienda. Del cual se encuentra agregado las planillas originales en el debido proceso y las fotocopias de los depósitos electrónicos, y el mismo únicamente resolvió sobre la excepción de pago de las vacaciones reclamadas por el demandante, omitiendo resolver sobre la excepción de pago del aguinaldo en mención, por lo que la excepción de pago fue alegada en tiempo y forma antes del cierre del proceso. Por lo cual el juez A quo resolvió que la excepción fue alegada antes del cierre del proceso el cual se dio el día veinte de septiembre de dos mil diecinueve teniendo la parte contraria oportunidad para pronunciarse sobre la excepción alegada y no lo hicieron en ese sentido. Por lo que lo resuelto por el Juez A quo, ha omitido resolver la excepción planteada respecto del pago de aguinaldo reclamado a fin de la misma es acreditar que se ha cumplido con el pago de las prestaciones laborales a los trabajadores, el cual en este caso ha quedado demostrado que dichas obligaciones fueron canceladas en su momento. Se solicita se case lo resuelto por el Juez A quo por no estar apegado a derecho y ser violatorio del derecho de defensa de mi mandante al omitir resolver este punto planteado (...)" (sic).

La Cámara en las consideraciones de la sentencia expresó lo siguiente: "(...) En cuanto a la Excepción De Pago, alegada por la parte apelante en primera instancia y la cual fue alegada antes del cierre del proceso, esta excepción fue declarada sin lugar por improcedente por la Juez A quo, ya que no fue alegada con la contestación de la demanda; en ese sentido es oportuno citar el Art. 394 C.T. el cual dice "Las demás excepciones de cualquier clase podrán oponerse en el momento en que, de acuerdo con este Código, resultare oportuno, en

cualquier estado del juicio y en cualquiera de las instancias; y su oposición deberá hacerse en forma expresa". Esta excepción puede ser alegada en cualquier etapa del proceso siempre que sea antes del cierre del proceso, en ese sentido esta excepción fue presentada el día ocho de julio de dos mil diecinueve y fue admitida el treinta y uno de julio del mismo año después de haber subsanado prevenciones que le fueron hechas; el auto donde consta que fue ofrecida la excepción le fue notificado a la parte contraria el dos de agosto del presente año, es decir antes del cierre del proceso el cual se dio el día veinte de septiembre del dos mil diecinueve, en ese sentido la parte contraria tuvo la oportunidad para pronunciarse sobre la excepción alegada y no lo hizo, en ese sentido no se le está violentando el derecho de defensa, por lo tanto es procedente pronunciarnos sobre la excepción alegada. Por vía de excepción la parte apelante ofrece una nota de abono a una cuenta en el banco Davivienda la cual está a nombre del trabajador[…]y en la cual le depositaban su salario, el depósito es por ciento setenta y siete dólares con cuarenta y seis centavos de dólar, con los cuales demuestran que le fue pagada al trabajador la vacación completa del periodo del uno de enero del dos mil diecisiete al uno de enero del dos mil dieciocho, lo cual es complementada con la planilla de pago, lo cual consta a fs.[…] del proceso, en ese sentido y por merecer fe para los suscritos los recibos de abono presentado por la parte demandada y por no haber sido reargüidos de falsos estos recibos, como bien lo hace ver la parte apelante, es procedente absolver del pago de la vacación del periodo del uno de enero del dos mil diecisiete al uno de enero del dos mil dieciocho, por ser lo que a derecho corresponde (...)" (sic).

En el caso de autos, la recurrente sostiene que, en el incidente de apelación se omitió resolver la excepción de pago planteada respecto del aguinaldo reclamado por el trabajador demandante del período del trece de diciembre de dos mil diecisiete al doce de diciembre de dos mil dieciocho, la que fue alegada en virtud de la cancelación de mismo de forma electrónica.

Al verificar la sentencia del ad quem, esta Sala advierte que en el considerando 5 párrafos 8 y 9 de la misma, se analizó lo relativo a la excepción de pago alegada en primera instancia y que fue declarada sin lugar por improcedente. El ad quem, estimó que la excepción fue presentada en tiempo, por lo que era procedente pronunciarse al respecto.

En razón de lo anterior, a continuación, efectuó el análisis de la prueba documental presentada por la demanda, nota de abono a una cuenta en el banco Davivienda a favor del trabajador […], cuyo depósito es por la cantidad de ciento setenta y siete dólares cuarenta y seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América; documento con el cual, la Cámara concluyó que se acreditaba la cancelación de la vacación completa al trabajador, del período del uno de enero de dos mil diecisiete al uno de enero de dos mil dieciocho, agregada a folios […] de la pieza principal. En consecuencia, absolvió a la sociedad demandada del pago de vacación completa del período relacionado, y confirmó la sentencia en lo demás, por estar conforme a derecho.

Ahora bien, como la queja de la recurrente es en relación a que el ad quem, no resolvió lo relativo a la excepción de pago planteada respecto del aguinaldo

reclamado por el trabajador demandante del período del trece de diciembre de dos mil diecisiete, al doce de diciembre de dos mil dieciocho, se ha verificado en autos, y efectivamente la apoderada de la sociedad demandada, opuso y alegó, la excepción de pago respecto de la vacación del período del uno de enero de dos mil diecisiete, al treinta de abril de dos mil dieciocho, y aguinaldo del trece de diciembre de dos mil diecisiete, al doce de diciembre de dos mil dieciocho.

Sin embargo, se advierte que el reclamo de aguinaldo del relacionado período, no es parte de la pretensión; pues el trabajador demandante no reclamó en la demanda el pago de aguinaldo completo, sino únicamente aguinaldo proporcional; así también, en la sentencia de primera instancia, se constata que no existe condena en tal concepto, sino únicamente por vacación y aguinaldo proporcional, complemento de vacación completa, indemnización por despido injusto, horas extraordinarias diurnas y nocturnas y salarios caídos correspondientes a dicha instancia.

En atención a ello, se advierte, que la abogada recurrente no ha dado fiel cumplimiento al principio de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal, art. 13 del Código Procesal Civil y Mercantil, CPCM, debido a que conocía el contenido de la sentencia de primera instancia, y en consecuencia, que no existía condena para su representada en concepto de aguinaldo completo; es decir, que no había afectación para la demandada. Por haber faltado a la buena fe en el planteamiento la ahora recurrente; la omisión de la Cámara en ese aspecto, no puede conducir a su anulación.

En principio, respecto del punto analizado, la Cámara debió pronunciarse, precisamente en los términos que lo ha hecho la Sala, pues en virtud del principio de congruencia, art. 419 CT, estaba imposibilitada para resolver sobre una prestación no reclamada en la demanda; sin embargo sí se pronunció respecto de la excepción de pago, tal como se desarrolla en los párrafos precedentes de esta sentencia.

Por consiguiente, este tribunal concluye, que el ad quem, no cometió la infracción señalada por la recurrente, relativa a que el fallo hubiere omitido resolver puntos planteados, art. 394 CT; dado que la prestación de aguinaldo completo, no fue reclamada en la demanda; por lo que no procede casar la sentencia de mérito".

Sala de lo Civil, número de referencia: 1-CAL-2020, fecha de la resolución: 30/11/2020

PROCEDE CUANDO EL AD QUEM OMITE ANALIZAR PARTE DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, EN VIRTUD QUE NO HIZO PRONUNCIAMIENTO ALGUNO SOBRE LA FALTA DE CREDIBILIDAD ALEGADA POR EL NEXO FILIAL DEL TESTIGO CON EL TRABAJADOR DEMANDANTE

"Omisión de resolver puntos planteados.

2.1 El submotivo de casación a que hace referencia el recurrente, contenido en el art. 588 ord. 7° CT, cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados, se configura cuando el juzgador omite resolver asuntos sometidos a su

conocimiento, propuestos en la etapa procesal correspondiente, por lo que es requisito indispensable que quien lo alegue, exprese en forma puntual el reclamo planteado en tiempo y forma, y la posible razón de la ausencia de pronunciamiento del tribunal sentenciador; lo anterior coincide con lo establecido en el art. 419 CT, disposición que impone a los administradores de justicia, resolver los asuntos planteados y debatidos en el proceso, sentencia de 09-X-2019, 86-CAL-2019.

2.2 Con relación al submotivo planteado, el recurrente expresó lo siguiente: "[...] en el escrito de expresión de agravios se alegaron los siguientes argumentos: "1) errónea aplicación del derecho y violación al principio procesal que el juez está obligado a resolver las cuestiones debatidas en el proceso; 2) aplicación incorrecta de las presunciones del artículo 414 CT y omisión de valoración de la prueba sobre los hechos controvertidos; 3) error de derecho en la valoración de la prueba testimonial conforme al artículo 461 del código de trabajo respecto del testigo GCM; 4)aplicación incorrecta de los artículos 410 del CT y 348 y 350 del Código Procesal Civil y Mercantil en la forma de interrogar a los testigos y a la declaración de propia parte en el proceso; 5) **error de derecho en la valoración de las declaraciones de parte contraria conforme al artículo 461 del código de trabajo".** De lo anterior se advierte, que la Cámara únicamente resolvió el quinto punto, por tanto no entró a resolver puntos procesarles como el hecho de que varios testigos no tuvieron conocimiento personal sobre el hecho del despido, por lo cual de entrar a resolver estos puntos se pudieran entrar en contradicción con el argumento que motivó la confirmación del juez cuarto de lo laboral. [...]" (sic).

2.3 Con el propósito de ilustrar sobre las consideraciones de la Cámara se transcriben los pasajes siguientes: "[...] Esta Cámara procede con lo dicho en agravios al examen de la causa, y concluye lo siguiente: 1°) La a quo se refiere en su sentencia a una extorsión que supuestamente se le hizo a la demandada donde se vio involucrado el señor […] y su hermano […], a raíz de la venta de un vehículo que lo dedicaba la señora […] al negocio del transporte público, negocio en el cual trabajaba el requirente como motorista, en compañía de su hermano. 2°) Al relatar los hechos que motivan el despido impetrado, el Licenciado […] actuando en su carácter de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial de la señora […], demandada como […], dice en su escrito de fs. […] de la pieza principal, que tal conducta dio lugar a una pérdida de confianza, y por ende el trabajador demandante se situó en el predicado del ordinal 3° del Art. 50 Tr., que es una causal de terminación de contrato sin responsabilidad para el patrono. 3°) Sin embargo para el ad quem, lo mismo que para la Jueza de la causa, esto lo desvirtúa personalmente la demandada cuando en su declaración de parte contraria, categóricamente expresa en el juicio que el despido no fue por falta de confianza, sino porque el negocio no era rentable, lo que está en línea cuando se justifica en la audiencia conciliatoria (fs. […]), no estar en buenas condiciones económicas y ofrece únicamente conciliar con un mil dólares. 4°) El formato digital de fs. […] contentivo de esta declaración de parte contraria, al ser examinado

por los suscritos Magistrados, no refleja que la declarante fue objeto de un trato discriminatorio y de condiciones vejatorias a su condición de adulto mayor, y además “que la señora C no entendía del todo las preguntas que la Procuradora PAMELA DENISSE realizaba y que la Jueza a quo sin consideración y tolerancia le callaba e interrumpía junto con la Procuradora respecto de las respuestas que ella pretendía aportar;”, siendo entonces una declaración fiable y concluyente respecto a lo que en verdad ha sucedido. 5°) Por todo ello, bajo el reconocimiento expreso de un despido de hecho que no se ha podido desvirtuar procede el pago de lo que se reclama conforme los Arts. 58, 187 y 202 Tr., y se impone confirmar el fallo alzado, no sin antes adicionar el pago de los salarios caídos de esta instancia. [...]” (sic).

2.4 En síntesis, el recurrente sostiene que sometió a consideración de la Cámara, cinco puntos de agravio, de los cuales únicamente resolvió el último. No obstante, tal como se indicó en la admisión del. recurso, el ad quem sí se pronunció sobre el primer planteamiento, por tanto únicamente se analizará del punto dos al cuatro, así: aplicación incorrecta de las presunciones del art. 414 CT, y omisión de valoración de la prueba sobre los hechos controvertidos; error de derecho en la valoración de la prueba testimonial, conforme al art. 461 CT, respecto del testigo […] y aplicación incorrecta de los arts. 410 CT, 348 y 350 CPCM, en la forma de interrogar a los testigos y la declaración de propia parte en el proceso; inconformidades planteadas en el recurso de apelación, folios […] del incidente.

2.5 Del estudio y análisis de la sentencia de la Cámara se advierte que, en relación al despido, consideró que existía un reconocimiento expreso del mismo, y que era un hecho no desvirtuado, por lo que procedió a confirmar la sentencia condenatoria; en consecuencia, no hizo pronunciamiento alguno sobre la presunción de despido establecida en el art. 414 CT, en virtud que estimó probado el mismo de forma distinta, es decir a través del reconocimiento que hizo la demandada, señora […], en la audiencia de declaración de parte contraria; en ese sentido, no era viable que hiciera referencia a la relacionada presunción, pues el ad quem consideró que la demandada había reconocido el despido del trabajador. Por tanto, el argumento del recurrente carece de fundamento.

2.6 Por otra parte, se advierte que la Cámara fue omisa con relación al error alegado por el apelante en cuanto a la valoración de la prueba testimonial, de conformidad a la sana crítica, art. 461 CT, agravio contenido en el literal c) del escrito de apelación, o punto número tres; yerro advertido en virtud que el análisis del ad quem se centró en lo expresado por la demandada en la declaración de parte contraria y en la audiencia conciliatoria; y no hizo pronunciamiento alguno sobre la falta de credibilidad alegada por el nexo filial del testigo con el trabajador demandante.

Lo antes expuesto hace concluir a este tribunal que, el ad quem, también dejó de lado pronunciarse acerca del literal d), o punto número cuatro de la apelación, en el cual se alegó aplicación incorrecta de los arts. 410 CT, 348 y 350 CPCM; en virtud que la defensora pública laboral interrogó a los testigos y realizó

el interrogatorio en la declaración de parte contraria a la demandada, señora […], leyéndoles las preguntas del cuestionario, a pesar de existir prohibición para ello.

No obstante, la Cámara sí resolvió el punto número uno del recurso de apelación, referente a errónea aplicación del derecho y violación al principio procesal, que el juez está obligado a resolver las cuestiones debatidas en el proceso; esto en virtud que, en los fundamentos de derecho, numeral III, realizó las consideraciones relativas a la causal de pérdida de confianza alegada por la demandada, pues precisamente el apelante manifestó que el juez aquo no había conocido de los hechos objeto de la excepción ni la había resuelto.

El ad quem concluye en su sentencia que la causal 3ª del art. 50 CT, fue desvirtuada personalmente por la demandada en su declaración de parte contraria, al haber manifestado que el despido no fue por falta de confianza, sino porque el negocio no era rentable.

Por tanto, sí hubo pronunciamiento por parte de la Cámara, es más en su mayor parte los considerandos de la sentencia se refieren precisamente al análisis de la excepción. Por consiguiente, el primer planteamiento del recurso de apelación fue resuelto por el ad quem.

2.7 En consecuencia de lo anterior, y dada la omisión de la Cámara por no haber resuelto en su sentencia los agravios a que se hace referencia en el párrafo 2.6 de esta sentencia, se concluye, que evidentemente sí se cometió la infracción señalada por el recurrente; por lo que corresponde declarar ha lugar a casar la sentencia, y pronunciar la que conforme a derecho corresponde, art. 537 CPCM.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA.

3.1 En vista que la sentencia será casada, esta Sala se vuelve tribunal de instancia y de conformidad a la congruencia que debe caracterizar a las sentencias judiciales analizará el único submotivo admitido en relación con las infracciones planteadas ante la Cámara por el recurrente, doctor […] y no resueltas.

3.2 En primer lugar se tratará lo relativo al error atribuido al ad quem en la valoración de la prueba testimonial, descrito en el literal c), del recurso de apelación, en el sentido que la Cámara le otorgó valor probatorio al testigo, señor […], a pesar de existir un vínculo filial con el trabajador demandante por ser hermanos; circunstancia que a juicio del recurrente no lo hacía creíble, pues de conformidad a la sana crítica, demostró un inclinado interés en favorecer a la familia.

El abogado recurrente también alegó que el señor […] no era testigo directo de los hechos, pues el cargo que desempeñaba no era administrativo, sino de motorista, lo que le imposibilitaba estar pendiente de la administración del negocio. Por ello, sostiene que hay error por parte de la Cámara en cuanto estimó probada la relación de trabajo y las condiciones de trabajo, con la declaración del referido testigo.

3.3 Es importante advertir que el testigo es un tercero, es decir, una persona ajena al proceso, que aporta al mismo, declarando sobre ello, unos hechos que ha presenciado (visto u oído), o que le han contado. (Juan Montero Aroca y otros, en su obra “El Nuevo Proceso Civil” 2» Edición, página 380. Se debe aclarar,

que el testigo de referencia carece de valor probatorio de conformidad al art. 357 CPCM.

Con relación a la prueba testimonial mediante sentencia del 11-IV-2018, 277-CAL-2017, este tribunal determinó que de conformidad a la sana crítica, art. 461 CT, el parentesco -por consanguinidad o afinidad- por sí solo no es suficiente para negar eficacia a la deposición de un testigo, pues objetivamente no es posible determinar si esa circunstancia "el parentesco" los induce, necesariamente, a dejar de manifestar la verdad.

3.4 En el precedente citado en el párrafo anterior, también se estableció que tal postura tiene amparo o justificación en que pueden ser los parientes del demandante los únicos hábiles o capaces para declarar, ya sea porque según la naturaleza y condiciones de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos hayan sido sólo aquéllos los que tuvieron conocimiento al respecto; o cuando los compañeros de labores del trabajador demandante tengan motivos personales o de coacción por parte del empleador para comparecer como testigos, entre algunos supuestos en los que la deposición de los parientes del demandante puede resultar necesaria. De ahí que, no es menos importante mencionar que el parentesco como regla general *per* se, no es causa de parcialidad en la deposición del testigo.

3.5 Esta Sala, ha verificado la declaración del testigo, folios […] pieza principal, que consta en video formato DVD, de la cual se advierte que hace fe, pues en su deposición manifestó que era compañero de trabajo del demandante, y que se desempeñaba como motorista; así también expresó las circunstancias y condiciones bajo las cuales realizaban su trabajo; es decir, la relación de trabajo está debidamente acreditada con el referido testigo. Asimismo dicho extremo procesal está probado con la declaración de parte contraria rendida por la demandada, folios […] pieza principal.

Por lo anterior, se concluye que el testigo no mostró ningún interés en favorecer al trabajador demandante, pues respondió de forma clara y concreta únicamente lo que le fue preguntado en el interrogatorio; por otra parte, de su declaración se evidencia que le constan los hechos de manera directa, por haber descrito las circunstancias por medio de las cuales obtuvo conocimiento de ello; entre estas, el lugar y hora a la que iniciaban el trabajo, el recorrido de la ruta y el número de la misma; la actividad que realizaba el trabajador, es decir, que era motorista porque conducía un microbús de transporte colectivo; por ello, el cargo que desempeñaba el testigo, en el caso particular no es relevante, puesto que acreditó que conocía lo relativo a la relación de trabajo, en ese sentido no era indispensable que fuera un trabajador del área administrativa.

3.6 Por otra parte, el recurrente alega aplicación incorrecta de los arts. 410 CT, 348 y 350 CPCM, en virtud que la defensora pública laboral interrogó a los testigos y realizó el interrogatorio en la declaración de parte contraria a la demandada, señora […], leyéndoles las preguntas del cuestionario, a pesar de existir prohibición para ello. Al respecto, es necesario aclarar que en la declaración de parte contraria, art. 345 CPCM, y el desarrollo del interrogatorio, art. 350 CPCM, la parte que propone la prueba si puede consultar apuntes o documentos, si la

naturaleza de la pregunta lo exigiera y el Juez lo autoriza, y a los cuales deberá tener acceso la parte contraria.

De conformidad con el inciso último de esta disposición, la misma también resulta aplicable a la práctica del interrogatorio de testigos.

3.7 Al examinar el interrogatorio de los testigos, se puede advertir que, la licenciada [...], defensora pública laboral, realizó el interrogatorio directo al testigo de la parte demandante, señor […], y también en la declaración de parte contraria rendida por la señora demandada; y al respecto se observa, que preguntó al testigo lo relacionado con las condiciones de trabajo del demandante y al despido alegado en la demanda, sin leer las preguntas del cuestionario base del interrogatorio (folio […] pieza principal); así mismo, el abogado de la demandada objetó por la forma del interrogatorio, no obstante, la jueza se pronunció al respecto y denegó la misma en virtud que advirtió que no se trataba de una lectura literal de las preguntas.

Por otra parte, se debe señalar que dicho interrogatorio se efectúa con el propósito de obtener un relato descriptivo de los hechos, a modo de narración de lo acontecido, por tanto el límite al mismo lo constituyen las preguntas sugestivas, las cuales están permitidas únicamente en el contrainterrogatorio.

En definitiva, del análisis tanto del interrogatorio del testigo como de la declaración de parte contraria, no se evidencia infracción alguna a los arts. 410 CT, 348 y 350 CPCM, pues la defensora realizó el interrogatorio directo, tal como la ley lo permite.

3.8 Por último se resolverá lo relativo a la aplicación incorrecta de la presunción del art. 414 CT, y la omisión en la valoración de la prueba sobre los hechos controvertidos.

3.9 El recurrente sostiene que las presunciones tienen lugar salvo prueba en contrario; sin embargo, el a quo omitió valorar la declaración de propia parte de la señora […] (demandada), respecto de los puntos siguientes: que la prestación de servicios del trabajador inició desde el año dos mil siete, que el cargo que desempeñó era de cobrador y no motorista, y que el salario era de dieciocho dólares diarios si realizaba seis viajes.

En consecuencia a juicio del recurrente se perjudicó a su representada en cuanto al cálculo de la indemnización y demás prestaciones, al no valorar la prueba en contrario respecto de los hechos imputados en la demanda.

3.10 En cuanto a lo alegado por el apelante, en cuanto a que existió omisión en la valoración de la prueba sobre los hechos controvertidos, y que con los mismos se destruye la presunción del art. 414 CT, debe mencionarse que al verificar el interrogatorio de la declaración de parte contraria de la demandada, esta respondió de forma clara y categórica que había despedido al trabajador; y alegó la excepción contenida en la causal tercera del art. 50 CT, relativa a la pérdida de confianza del patrono en el trabajador. Por tanto se procederá a analizar si el despido es justificado.

3.11 A folios […], de la pieza principal, consta agregado el escrito a través del cual el apoderado de la demandada alegó que la relación contractual se dio

por terminada dado que el trabajador fue descubierto “poniéndose de acuerdo” con miembros de grupos delincuenciales para facilitar el pago de la renta en detrimento de su representada; señala el abogado […], que cuando el trabajador se percató que la demandada iba a vender un vehículo, le comentó que la delincuencia le cobraría “renta” y que él tenía la capacidad de negociar con ellos para que la cantidad a pagar fuera menor y no de seis mil dólares, que arriesgaba su vida por el cariño y alto grado de gratitud que le tenía; que el día veinticuatro de enero de dos mil diecinueve su representada realizó compraventa de vehículo, de lo cual entregó al trabajador la cantidad de tres mil dólares de los Estados Unidos de América, para que junto a su hermano realizaran la presunta entrega a miembros del grupo delincuencial que operaba en el centro de la ciudad de Tonacatepeque, agrega que días después su representada se enteró que el trabajador tenía amistad cercana con dichos miembros, y por tanto decidió prescindir de sus servicios.

3.12 Para acreditar los hechos atribuidos al trabajador, la parte demandada presentó prueba testimonial y la declaración del trabajador demandante, ésta última no aportó ningún elemento probatorio, pues únicamente expresó que se le acusaba injustamente de mediar la renta con los mareros, lo que negó categóricamente.

3.13 Esté tribunal concluye que con la declaración de los testigos de descargo no se estableció la pérdida de confianza alegada por la parte demandada, dado que, el primer testigo MECP, en su deposición manifestó que el trabajador y su hermano “son presuntos colaboradores de la mara salvatrucha, porque no le consta”; y si bien es cierto también señaló sobre la entrega de dinero al trabajador por parte de la empleadora para que éste efectuara la entrega de forma directa a grupos delincuenciales, no necesariamente esta actividad implica una actitud de deslealtad hacia la empleadora.

Por su parte el segundo testigo, WAAS, declaró sobre aspectos generales del negocio y problemas que la misma demandada tenía y le comentaba cuando la visitaba, como por ejemplo circunstancias que pasaba en relación a la extorsión que pagaba a los grupos delincuenciales por la ruta de microbuses, así mismo declaró sobre la entrega de tres mil dólares al trabajador en concepto de renta para que se entregara a grupos delincuenciales; sin embargo, de su declaración se evidencia que no le constan los hechos de manera directa, por no haber descrito las circunstancias por medio de las cuales obtuvo conocimiento de ello, sino por el contrario manifestó que la demandada le comentaba lo que sucedía cuando platicaba con ella al visitarla; en conclusión no expuso ningún hecho que vinculara directamente al trabajador demandante con la pérdida de confianza alegada por la parte demandada.

Debe tenerse en cuenta que de conformidad al art. 357 del Código Procesal Civil y Mercantil, no hace fe la declaración de un testigo que no tenga conocimiento personal sobre los hechos objeto de la prueba.

3.14 Además, la causal de pérdida de confianza implica un incumplimiento grave al deber de fidelidad al patrono, y es aplicable cuando el trabajador, con su

conducta, genera dudas al empleador respecto de su lealtad o fidelidad para con el cumplimiento de los objetivos patronales.

En estos casos, el hecho desleal debe ser fehacientemente probado por el empleador, por elementos objetivos y concretos que permitan concluir que la decisión del empleador es fundada. La prueba de la justa causa del despido, debe ser de tal trascendencia que no quede en el juzgador la menor duda, precisamente por las graves consecuencias que tal medida -el despido como máxima sanción- le ocasiona al trabajador. (sentencia de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, del 30 de agosto de 2017. Recurso de Casación Ref. 289-CAL-2016)

3.15 Con base en lo expuesto, a juicio de este tribunal, no hay suficientes elementos que acrediten la excepción alegada.

3.16 Por otra parte, en lo que respecta a la queja del recurrente, en el sentido que el aguo omitió valorar la declaración de la señora CHGVDR, en cuanto a los elementos relacionados en el párrafo 3.9, este tribunal hace las consideraciones siguientes:

La declaración rendida por la demandada fue solicitada por la defensora pública laboral, escrito de folios […] de la pieza principal, a efecto de establecer hechos tales como la fecha del inicio de labores del trabajador, uno de diciembre del año dos mil uno, el cargo que desempeñaba, motorista de coaster, el salario que devengaba, seiscientos treinta dólares de los Estados Unidos de América, entre otros.

Sin embargo, del interrogatorio se advierte que la demandada no reconoció esos hechos, pero sí el despido del trabajador; en ese sentido, no pueden tomarse como veraces.

Sumado a ello, debe manifestarse que en principio y con carácter general, en la declaración de parte se pide el interrogatorio del contrario - sea actor o demandado- con el fin de que reconozca determinados hechos que le son desfavorables y que, precisamente por admitir su existencia, se toma como expresión de veracidad. Código Procesal Civil y Mercantil Comentado, segunda edición, página 408.

En consecuencia, no pueden tomarse como ciertos los hechos declarados por la demandada que le son favorables; por ello no tiene razón el recurrente al aseverar que el juez a quo omitió valorar la prueba en contrario que fue producida en dicha declaración, como por ejemplo que el inicio de labores fue en el año dos mil siete y que el cargo que desempeñó el trabajador era de cobrador y no de motorista, entre otros, pues no podían tomarse como veraces por el motivo de ser contrarios a lo manifestado por el trabajador en su demanda.

3.17 Por tanto, sí se cumplían los presupuestos para la aplicación de la presunción de despido del art. 414 CT. Sin embargo, en virtud que la demandada, en la audiencia de declaración de parte contraria admitió que despidió al trabajador, y por otra parte, alegó la terminación del contrato por pérdida de confianza, y no la probó; la presunción, en el caso de autos, está demás.

3.18 En síntesis, y una vez determinado que el despido no fue justificado, procede condenar a la demandada al pago de indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional reclamados en la demanda.

3.19 En cuanto al reclamo de vacación completa del uno de diciembre de dos mil diecisiete al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se absuelve a la demandada en virtud que el trabajador no acreditó la prestación de servicios por más de doscientos días de forma continua y efectiva, en el año que reclamó, tal como lo prescribe el art. 180 CT".

Sala de lo Civil, número de referencia: 386-CAL-2019, fecha de la resolución: 22/09/2020

DEBIDO PROCESO

DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD CUANDO EL RECURRENTE NO DESARROLLA DE QUÉ MANERA LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA FUERON VULNERADOS POR EL AD QUEM

"Violación del art. 11 Cn.

1. Esta Sala en el auto pronunciado a las nueve horas treinta y ocho minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve, en la casación con referencia 355-CAL-2018; sostuvo que para que tenga lugar la violación de ley debe considerarse: "(...) el hecho que el juzgador haya omitido aplicar en la sentencia la norma jurídica correcta que hubiera podido resolver el asunto sometido a su consideración. Esta infracción es de las llamadas directas, porque atañen a la premisa mayor del silogismo jurídico, es decir, a la norma misma. No se trata pues, de cualquier vulneración de normas jurídicas, pues violación como sinónimo de vulneración va implícita en cualquiera de los submotivos (...)".

Para este vicio el recurrente argumentó lo siguiente: "(...) los honorables Magistrados de la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, declararon no ha lugar el recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Juez de lo Civil de la Unión. Esto, le genera perjuicio a nuestra representada porque no tuvo la oportunidad, de exponer las razones y argumentos de manera específica y puntual, que demostraran que la sentencia de primera instancia fue dictada contraria a derecho. También porque dicha sentencia no expone argumentos ni fundamentos de las razones que motivaron para concluir en tal decisión. Únicamente hacen referencia a que "en la expresión de agravios" no se especificó puntualmente en qué consistía dicho agravio. Es que, la Honorable Cámara ni siquiera había notificado la admisión del recurso. Con ello, violaron el Art. 86 Inc. Último Cn. porque se atribuyeron más facultades que las expresamente les otorga el Art. 575 CT. Tal atribución consiste en considerar que "uso del derecho" del Art. 575 CT es el momento procesal para expresar agravios y le agregan a dicha norma jurídica un plazo de cinco días -que no está expresamente legislado- para que la apelada controvierta dichos agravios (...)" (sic).

Cabe señalar que el precepto que el recurrente cita como infringido contiene el derecho constitucional al debido proceso, el cual, en términos sencillos hace alusión a que toda persona tiene derecho a determinadas garantías mínimas tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso; a la

oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez, y a no ser juzgado en más de una ocasión por la misma causa.

4. En lo referente al debido proceso, la Sala de lo Constitucional en auto de las ocho horas y treinta y ocho minutos del día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, correspondiente al amparo con referencia 703-2016, sostuvo: "(...)Con relación al derecho al debido proceso la jurisprudencia de esta Sala, -verbigracia sentencia pronunciada el día 12-X1-2010 en la Inc. 40-2009- con el concepto de debido proceso o proceso constitucionalmente configurado se pretende hacer alusión a un proceso equitativo, un haz de derechos filiales que cobran vigencia en todos los órdenes jurisdiccionales y en las diferentes etapas de un proceso, v. gr. en los actos de iniciación y en mayor medida en los actos de desarrollo (actos de prueba y alegación) y que juegan un papel protagónico los derechos de audiencia, defensa, a un proceso sin dilaciones indebidas y a recurrir. --- En ese orden de ideas, el debido proceso no se constituye como un derecho autónomo, sino que implica que el procedimiento se estructure y, además, que este respete integralmente un conjunto de derechos constitucionales tanto de contenido material como los de contenido procesal. ---- En lo relativo al derecho de audiencia, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala -verbigracia, las sentencias de amparo 228-2007, 307-2005, 782-2008 y 210-2009 de fechas 4-11-2011, 11-VI-2010, 14-1V2010 y 18-V111-2011, respectivamente-, es un concepto amplio en virtud del cual se exige que toda persona, antes de limitársele o privársele de uno de sus derechos, debe ser oída y vencida dentro de un proceso o procedimiento tramitado de conformidad con las leyes. ---- Por otra parte, respecto al derecho de defensa, la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido -verbigracia la sentencia de fecha 12-XI-2010 pronunciada en la Inc. 40-2009-, que una de las manifestaciones del debido proceso o proceso constitucionalmente configurado es el derecho de defensa (Art. 12 Cn.), el cual tiene un arraigo más limitado con relación al derecho de audiencia en la medida que se manifiesta ante la configuración de una contienda donde exista la necesidad de argüir y presentar elementos probatorios tendentes al desvanecimiento de los alegatos incoados por la contraparte (...)" (sic).

5. En consideración a lo expresado, se advierte que el concepto expuesto por el recurrente en relación al vicio invocado es demasiado ambiguo, no hay un argumento mediante el que se exponga de qué forma la aplicación de la disposición considerada como vulnerada, era la que resolvía el caso, precisamente, por la falta de claridad y precisión en el concepto expuesto.

En otras palabras, no se logra identificar la vinculación del art. 11 Cn, con el fundamento de la violación de ley alegada, debido a que, no se desarrolló de qué manera las manifestaciones del debido proceso, entiéndase los derechos de audiencia y de defensa, fueron vulnerados por el ad quem, ya que los mismos no han sido controvertidos de manera independiente ni específica.

Ante tal planteamiento, a juicio de esta Sala el fundamento del submotivo es insuficiente, ya que no explicó, de qué forma el precepto que cita infringido, resolvía el caso de que se ha hecho mérito; en consecuencia, dado que el im-

petrante no desarrolla el concepto de la infracción, en relación a lo que debe entenderse como tal, el submotivo es inadmisible y así se declarará".
Sala de lo Civil, número de referencia: 31-CAL-2020, fecha de la resolución: 17/02/2020

DECLARACIÓN DE PARTE CONTRARIA

INEXISTENCIA DE ARBITRARIEDAD AL REALIZAR SU VALORACIÓN

"Error de derecho en la apreciación de la prueba, relativa a la declaración de parte contraria

Precepto infringido el art. 353 CPCM en relación al art. 461 CT

2.7. Sobre el vicio invocado el recurrente, expresó: "(...) El ad quem realiza la valoración de la prueba de declaración de parte contraria de la representante legal de la sociedad demandada en una forma arbitraria y distinta a la establecida en el artículo, no teniendo por cierto el hecho del abandono del trabajador demandante a partir del día quince de agosto de dos mil dieciocho, tal como lo manifestó en su declaración, debido a que supedita la eficiencia probatoria de este medio a " otros medios de prueba que la potencien, la amplíen o desarrollen". Empero, este artículo únicamente establece para la valoración de la declaración de parte contraria, que se podrán considerar ciertos los hechos siempre y cuando a tal reconocimiento no se oponga el resultado de las otras pruebas, no establece que deberán haber otros medios de prueba (...) para otorgarles valor; y dentro del proceso no ha habido prueba de cargo o descargo que se oponga a lo declarado por la representante legal (...) También el ad quem realiza la valoración conforme a las reglas de la sana crítica en forma absurda al momento de valorar la declaración de parte contraria de la representante legal de la sociedad demandada, ya que como se manifestó en párrafos anteriores, la Cámara juzgadora realiza una confusión en cuanto a la excepción de abandono planteada como ausencias injustificadas, y como consecuencia de ello no deja sin efecto la presunción legal de despido del art. 414 del Código de Trabajo (...) "(sic).

2.8. De lo citado, es claro que el recurrente reclama a la Cámara sentenciadora, que realizó una apreciación arbitraria y absurda de la declaración de parte contraria, rendida por la representante legal de la sociedad demandada, señora JLLDH, al no dar por reconocido el abandono del trabajador demandante a partir del quince de agosto de dos mil dieciocho, a pesar de haberlo declarado y no existir prueba en contrario; asimismo, que dicho tribunal al analizar la declaración relacionada conforme a la sana crítica lo hizo de forma absurda pues confundió la excepción de abandono por ausencia injustificada, por lo que no dejó sin efecto la presunción de despido establecida en el art. 414 CT.

2.9. Respecto al punto discutido, la Cámara sentenciadora, expresó: "(...)4. Ahora bien, el recurrente señala como punto de agravio que la declaración de parte contraria de la representante Legal de la demandada señora JLLDH, constituye prueba en contrario de la presunción legal de despido del Art. 414 del Có-

digo de Trabajo, por haber afirmado que el trabajador no había sido despedido sino que el dejó de presentarse a laborar, realizando de esta forma la señora Juez A quo, una interpretación arbitraria del medio de prueba en contravención a los Arts. 409 y 461 del referido cuerpo legal. 4.1. El medio de prueba que según el recurrente es prueba en contrario de la presunción legal de despido del Art. 414 del Código de Trabajo, la constituye la declaración de parte contraria rendida por la Representante legal de la demandada señora JLLDH, registrada en formato digital de audio y video (DVD) de fs. [...] de la pieza principal, pues esta al ser cuestionada sobre si actualmente sigue trabajando el trabajador demandante para empresa contestó: "(....) que no, desde el quince de agosto -2018- el señor HIPP, dejó de presentarse a laborar para la compañía (....)". 4.2. La declaración antes relacionada no constituye prueba en contrario de la presunción legal de despido en el sentido que para que esta tenga eficiencia probatoria el hecho que la trabajadora no se haya presentado a laborar para la compañía, necesita otros medios de prueba que la potencien, la amplíen, o desarrollen, volviéndose necesario analizar los demás elementos de prueba con el objeto de verificar tal contexto (...) al escuchar las declaraciones de forma conjunta estas no arrojan elementos convincentes que puedan reforzar o potenciar la declaración de la representante legal de la demandada o que constituyen prueba en contrario para destruir la presunción legal de despido por las razones siguientes: 4.3.1. Los testigos de cargo señores LR y GM, a lo largo de su declaración no se advierte que éstos hayan expresado que el trabajador dejó de presentarse a laborar al centro de trabajo. En cuanto a los testigos de descargo señores RR y GA, con respecto al primero el licenciado FGJR, no logró extraer información pertinente y útil que establezca que el trabajador no se ha presentado a prestar sus servicios al centro de trabajo y en cuanto a la segunda testigo al preguntársele si el trabajador sigue laborando para la empresa contesto: "(...) el ya no se presentó el ya no está laborando (...) el catorce de agosto y a partir de esa fecha hasta hoy no se ha vuelto a presentar y a partir del día quince ya no se hizo presente (. ..)" (sic).

2.10. Previo a continuar con el análisis se vuelve indispensable citar el precepto señalado infringido: "Art. 353.-El Juez o tribunal podrá considerar como ciertos los hechos que una parte haya reconocido en la contestación al interrogatorio, si en ellos hubiere intervenido personalmente, siempre que tal reconocimiento no se oponga el resultado de las otras pruebas. En lo demás, el resultado de la declaración se apreciara conforme a las reglas de la sana crítica".

En ese sentido, este tribunal es del criterio, que el juzgador debe dar por cierto, lo reconocido en la declaración de parte contraria, si estos hechos son perjudiciales al declarante o a su representada y haya cumplido los demás presupuestos establecidos en el art. 353 CPCM; pues la disposición señalada como infringida claramente establece, que el juzgador "podrá considerar como ciertos los hechos que una parte haya reconocido"; por lo que, carece de lógica, que se tengan por ciertos, per se, hechos que favorezcan al declarante, sino que es indispensable que se pondere de acuerdo a la experiencia o a la razón; de lo

contrario desnaturaliza el principio de defensa y contradicción que debe imperar en los procesos judiciales.

Continuando con el análisis, este tribunal advierte que el ad quem precisamente al utilizar la sana crítica determinó que el dicho de la representante legal, de que el trabajador abandonó su empleo, debía ser respaldado por los demás medios probatorios, conclusión muy acertada a la que llegó el tribunal relacionado; y es que, el reconocimiento de hechos a que se refiere el art. 353 CPCM, pueden tenerse por ciertos, si estos fueren perjudiciales o desfavorables al declarante o a su representada; circunstancia ausente en el caso discutido; ya que, la representante legal de la sociedad demandada, señora JLLDH, declaró que el trabajador abandonó el empleo a partir del día quince de agosto de dos mil dieciocho, con el agravante que fue a ella, a quien se le atribuyó realizó el despido del trabajador demandante, el cual sucedió como a las dieciséis horas del día catorce de agosto de dos mil dieciocho; por lo que no habían razón suficiente para dar por cierto el reconocimiento del abandono relacionado.

2.11. En tal sentido, en el caso analizado, no puede advertirse que la Cámara fue arbitraria al apreciar la declaración de parte contraria, pues los fundamentos obedecen a circunstancias lógicas y conforme a la experiencia humana, claramente documentadas en el proceso; ni puede considerarse que haya sido absurda, es decir, contraria a la lógica o la razón, lo cual ha sido ampliamente descrito en los párrafos precedentes.

2.12. Finalmente, respecto al reclamo del recurrente, que no se consideró la declaración de parte contraria rendida por la representante legal de la demandada, como prueba en contrario de la presunción de despido establecida en el art. 414 CT; este tribunal, es del criterio, que si lo dicho en la declaración de parte contraria, no podía respaldarse con la demás prueba vertida en el proceso, no era posible considerarse prueba en contrario; por tanto, la Cámara sentenciadora no tenía más opción que concluir que la presunción relacionada era aplicable al caso concreto.

2.13. De acuerdo a lo anterior, esta Sala concluye que el ad quem, no cometió el vicio que se le atribuye, por tanto se impone declarar no ha lugar a casar la sentencia también por este submotivo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 355-CAL-2019, fecha de la resolución: 12/05/2020

DESPIDO DE HECHO

PROCEDENCIA

"Al proceder la casación de la sentencia recurrida, esta Sala con base al art. 534 del Código Procesal Civil y Mercantil, pronunciará la que a derecho corresponde, directamente vinculada con las disposiciones consideradas vulneradas,

y las infracciones planteadas por el apelante en la exposición de agravios del recurso de apelación ante la Cámara, en los términos siguientes:

Los licenciados […], en calidad de apelantes, fundamentaron sus agravios en varios puntos, entre estos: a) la falta de valoración del documento denominado "carta compromiso por préstamos personales a empleados de Editorial […];", y al acta notarial de las once horas con treinta minutos del catorce de agosto de dos mil dieciocho; b) la errónea valoración en la prueba documental ofrecida por la demandada, c) infracción al art. 461 del Código de Trabajo; d) rechazo indebido de la excepción opuesta y alegada por la demandada específicamente la contenida en la causal tercera del art. 50 del Código de Trabajo; y la aplicación indebida del art. 414 del Código de Trabajo.

Expuestos los aspectos de inconformidad, se procede a analizar en primer lugar el rechazo indebido de la excepción opuesta y alegada por la demandada específicamente la contenida en la causal tercera del art. 50 del Código de Trabajo, por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador, dado que toda la prueba que presentaron giró en torno a ella.

[...]

Es oportuno señalar que esta Sala en sentencia pronunciada a las ocho horas del veintiséis de julio de dos mil diecisiete con referencia 341-Cal-2016, sentó doctrina legal respecto del art. 394 del Código de Trabajo, y expresó:"(...) que la excepción, es el mecanismo de defensa del demandado frente a la pretensión del actor o demandante, con el objeto de evitar el triunfo de lo pretendido; en este sentido, si en la demanda se expresan los hechos en forma puntual y específica para fundamentar las pretensiones ejercidas, el demandado podrá ejercer una defensa y contradicción en igualdad de condiciones; por lo tanto, no puede exigírsele menos, al demandado cuando interpone una excepción, pues la parte actora, también tiene el derecho de conocer en forma específica los hechos y circunstancias que el demandado erige en su defensa, pues, de no lograrse tal condición en el proceso, lesiona sin lugar a dudas los principios de igualdad procesal, defensa y contradicción, regulados en los arts. 4 y 5 CPCM; principios congruentes con la garantía constitucional de un derecho a un proceso constitucionalmente configurado, art.11 de la Constitución de la República de El Salvador (...) ya que, cuando se invoca una excepción, esta debe expresar de forma clara y precisa, los hechos que se le imputan al trabajador, para que sea el juzgador quien valore dicho cuadro fáctico en relación a la pertinencia y conducencia de la prueba aportada al juicio, a efecto de establecer la existencia o no de las acciones u omisiones atribuidas" (sic).

Así mismo, es de advertir que cuando se alega la causal de despido supra, esta debe ser probada de forma conducente, es decir, acreditar que la misma deriva de una conducta activa u omisa del trabajador en razón al cargo que desempeña, y que la gravedad sea tal, que justifique la ruptura inmediata de la relación laboral.

En ese sentido debe de considerarse, que si bien la recurrente señala que el 15 de febrero de 2018 se reportó una alerta por la encargada de Control de Gestión de Editorial […] y que producto de esa alerta se realizó una auditoría

del período 2016 a marzo 2018; y que el trabajador demandante realizó por más de quince veces aplicaciones contables indebidas; para esta Sala los hechos atribuidos al trabajador demandante son expuestos de forma genérica; es decir, la recurrente expresa de forma imprecisa cuándo, cómo y dónde ocurrieron los hechos; es más, para este tribunal, el argumento vertido va dirigido a narrar hechos genéricos; en ese sentido, la excepción alegada por la demandada contenida en la causal tercera del art. 50 del Código de Trabajo, por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador, no fue razonada en los términos de la doctrina legal descrita en párrafos que preceden; de tal manera que, a juicio de esta Sala resulta inoficioso conocer de la prueba vertida para acreditar la causal supra.

Partiendo de lo anterior, esta Sala concluye que en el caso bajo análisis puede acreditarse un despido de hecho con responsabilidad patronal, con base a los presupuestos procesales del art. 414 del Código de Trabajo, ya que se constata que la demanda se presentó dentro de los quince días hábiles siguientes en que sucedió el despido, ya que la misma fue presentada el treinta de agosto de dos mil dieciocho, y el hecho generador tuvo lugar el catorce de ese mes y año; así mismo, en la audiencia conciliatoria la demanda no ofreció medida alguna, en cuanto a la prestación de servicios implícitamente se reconoce al haber alegado la demandada la excepción justificativa de despido sin responsabilidad patronal, específicamente la contenida en la causal tercera del artículo 50 del Código de Trabajo, por pérdida de la confianza del empleador al trabajador.

Bajo estas circunstancias es procedente condenarla al pago de la indemnización reclamada por el trabajador demandante, no así a su: accesorias, en virtud de que la defensora pública en representación de trabajador demandante manifestó en la demanda que éstas ya fueron canceladas".

Sala de lo Civil, número de referencia: 118-CAL-2019, fecha de la resolución: 29/10/2020

DIRECTIVOS SINDICALES

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL MIENTRAS DURE EL FUERO SINDICAL

"3.1 De acuerdo a lo expuesto en el párrafo 10, que precede, la justificación de esta sentencia debe estar encaminada a determinar si al trabajador demandante le asiste la garantía del fuero sindical y los derechos inherentes al mismo. También este tribunal debe pronunciarse acerca del despido, las excepciones alegadas y la vigencia del contrato de trabajo.

3.2 En virtud que el fuero sindical constituye un presupuesto de la libertad sindical, es indispensable referirnos a este derecho que faculta a los patronos y trabajadores, sin distinción alguna, a asociarse libremente para la defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales y sindicatos. Así, este derecho es reconocido a los trabajadores públicos, incluyendo a los de las instituciones

oficiales autónomas y municipales. Sentencia de fecha 29-11-2016, pronunciada en el Amp.628-2013.

3.3 Estas organizaciones, a su vez, tienen derecho a ejercer libremente sus funciones de defensa de los intereses comunes de sus miembros, a gozar de personalidad jurídica y a ser debidamente protegidas en el ejercicio de sus funciones (art. 47 inc. 4 Cn.). Dicho derecho es de carácter complejo, pues su titularidad se atribuye tanto a sujetos individuales como a colectivos y requiere de los sujetos obligados, tanto actuaciones concretas como simples deberes de abstención.

3.4 Este derecho también lo protege el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, en su art. 2, el cual señala que "Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas".

3.5 Prerrogativa además reconocida en el art. 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece la obligación de los Estados partes, de garantizar "el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos". Y el art. 1.a. del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) expone que los Estados parte deben procurar "el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses".

3.6 Entre otras fuentes internacionales en materia de derechos sindicales, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prescribe en el art. 23.4, que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el art. 22 establece el derecho a la libertad de asociación.

3.7 Por otra parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que la libertad sindical exige ser garantizada frente a todos aquellos sujetos que atenten contra ella. Una de las garantías constitucionales frente al empleador es el fuero sindical; y al respecto expuso que se encuentra constituido por el conjunto de medidas que protegen al dirigente contra cualquier perjuicio que pueda sufrir en ejercicio de su actividad sindical, (art. 47 inc. 6° Cn.).

3.8 En razón de lo anterior sostuvo, que el fuero sindical es el derecho protector y la libertad sindical es el derecho protegido. Por ello, el fuero sindical no es una simple garantía contra el despido de una persona, sino contra todo acto atentatorio de la libertad sindical -u gr., desmejora en las condiciones de trabajo, traslado a otro establecimiento de la misma empresa sin causa justificada, etc.-,

ya que, si bien el despido se erige como la sanción de consecuencias más graves, no es la única que puede utilizarse en contra de los directivos sindicales. Sentencia de fecha 29-11-2016, pronunciada en el Amp.628-2013.

3.9 La Constitución establece como un derecho fundamental de los trabajadores privados, sin ninguna distinción, el derecho de formar sindicatos para la defensa colectiva de sus intereses. La efectividad de los derechos de sindicación, requiere protección para aquellos trabajadores que integran una junta directiva sindical a fin de garantizar la estabilidad -conservación y mantenimiento de su puesto de trabajo, sin variación de las condiciones o del lugar en que este se realiza- laboral y por consiguiente el derecho de asociación sindical. El mismo derecho tendrán los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas, los funcionarios y empleados públicos y los empleados municipales, art. 47 Cn.

3.10 Por su parte, el Código de Trabajo en su art. 248 establece: “Los miembros de las Juntas Directivas de los Sindicatos con personalidad jurídica o en vías de obtenerla no podrán ser despedidos, trasladados ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni suspendidos disciplinariamente durante el período de su elección y mandato; y hasta después de transcurrido un año de haber cesado en sus funciones, sino por justa causa calificada previamente por autoridad competente” .

3.11 Determinada la esfera de protección de la libertad sindical y las consideraciones en relación a la estabilidad laboral de los miembros de juntas directivas de sindicatos; se procederá a analizar la prueba aportada por la parte demandante con la cual ha pretendido probar el despido alegado en los términos de la demanda.

3.12 El trabajador demandante presentó a los testigos, […], folios 174-177 de la pieza principal, con cuyas declaraciones, a juicio de este tribunal, se acredita el despido del trabajador por las razones siguientes:

3.13 Dichos testigos expresaron circunstancias como fecha del despido, veintiuno de diciembre de dos mil doce; hecho ocurrido en las oficinas de […], y comunicado por el ingeniero […]. Además, manifestaron que en esa fecha también ellos fueron despedidos, por no haberles renovado el contrato; es decir, los declarantes eran compañeros de trabajo del demandante y pertenecían al mismo sindicato.

3.14 El cargo que desempeñaba el señor […], persona que efectuó el despido, se acredita plenamente con la declaración de parte contraria de la representante legal de la Corporación […], la señora […], folio [...], quien manifestó que era gerente del puerto […].

3.15 Igualmente, se ha probado que el trabajador demandante ostentó el cargo de secretario general en la junta directiva Seccional por Empresa […], durante el período comprendido entre el 17/11/2012 al 16/11/2013.

La anterior situación fue probada con la credencial presentada en original y agregada a folios [...]; y con la copia certificada por notario, que corre agregada a folios [...], así como con la certificación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de (folios [...]); ambos de la pieza principal, en los cuales consta que des-

empeñaba el referido cargo durante el período comprendido del 17 de noviembre de 2012 al 16 de noviembre de 2013.

Por tanto la garantía del señor […] en cuanto a la estabilidad laboral, tenía vigencia hasta un año después de la expiración del período en el que fungió como directivo sindical; es decir, hasta el 16/11/2014, de conformidad a los arts. 47 inciso 6° Cn y 248 CT.

3.16 Debe aclararse que en los casos de despido de un directivo sindical, durante el período antes expresado, el mismo no produce efectos, en virtud del fuero sindical; salvo excepciones legales.

3.17 De conformidad al art. 248 inc. 1° CT, los miembros de las juntas directivas de los sindicatos pueden ser despedidos únicamente por justa causa calificada previamente por autoridad competente. En ese sentido, la garantía de estabilidad laboral no es absoluta, pues de existir "justa causa" calificada por autoridad competente la ley habilita para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad para el empleador, art. 50 CT.

Para el caso analizado, el contrato de trabajo se mantuvo vigente hasta el dieciséis de noviembre de dos mil catorce, fecha en que venció el año adicional de garantía sindical; es decir, subsisten los derechos, obligaciones como las prohibiciones estipuladas para el empleador y el trabajador.

La interpretación de la frase "durante el período de su elección y mandato"; empleada por el legislador en el art. 248 CT nos lleva a concluir que al período a que se refiere la ley, es aquel en que ejerce sus funciones de directivo sindical, es decir, se refiere al tiempo de vigencia del fuero sindical, lapso en el que existe la prohibición de despedir, trasladar, desmejorar en las condiciones de trabajo y suspender disciplinariamente al directivo sindical.

3.18 Con relación a las excepciones opuestas por la demandada, debe tenerse en cuenta que, si bien el 577 del CT, habilita para que en segunda instancia puedan alegarse nuevas excepciones y probarse estas, se impone también, que las mismas estén fundadas en hechos, acaecimientos o causas que tuvieren lugar después del cierre del proceso en primera instancia, o aquellas respecto de las cuales la parte estuvo justificadamente imposibilitada de aducir la prueba respectiva en el tiempo oportuno. Sentencia de casación de las diez horas veinticuatro minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, con referencia 444-CAL-2016.

Lo anterior resulta aplicable en el caso analizado, a pesar de haberse alegado como excepciones la terminación del contrato por el cumplimiento del plazo, y por ende la no renovación por reestructuración institucional organizativa para el año 2013, de conformidad al art. 48 fracción 1ª; así como, el abandono por parte del trabajador, del lugar de trabajo, de conformidad al art. 50 causal 12.a CT, por no haberse reincorporado a las labores en los siguientes días al presunto despido, acontecido el veintiuno de diciembre de dos mil doce.

Al respecto debe advertirse que las excepciones alegadas por la demandada, no están fundadas en hechos que tengan lugar después del cierre del proceso en primera instancia, tampoco fueron opuestas, ni alegadas ante el Juzgado de lo Civil de la Unión. Más bien fueron opuestas, al margen de la regulación

establecida en el art. 577 CT; por tanto, el ad quem procedió conforme a derecho al declararlas sin lugar.

3.19 En consecuencia, en el caso analizado, al haberse probado el despido alegado en la demanda, y que el trabajador demandante era miembro de una junta directiva sindical, deberá condenarse a la demandada, al pago de los salarios no devengados por causa imputable al patrono, conforme al art. 464 del Código de Trabajo, desde el uno de enero de dos mil trece hasta el dieciséis de noviembre de dos mil catorce; siendo esta la única pretensión del trabajador demandante, según los términos de la demanda. El cálculo se hará por el salario de quinientos cinco dólares mensuales, según modificación de la demanda, que consta a folios [...].

3.20 Por otra parte, dado que los recurrentes expresaron en el escrito de casación, que no se probó la permanencia del trabajador, pues el contrato de trabajo fue suscrito por el señor JB para un año.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el art. 25 CT, prescribe lo siguiente: "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa, se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se señale plazo para su terminación. La estipulación de plazo solo tendrá validez en los casos siguientes: "a) cuando por las circunstancias objetivas que motivaron el contrato, las labores a realizarse puedan ser calificadas de transitorias, temporales o eventuales; y b) siempre que para contratar se haya tomado en cuenta circunstancias o acontecimientos que traigan como consecuencia la terminación total o parcial de las labores, de manera integral o sucesiva. A falta de estimación en el caso de los literales anteriores el contrato se s resume celebrado por tiempo indefinido.

La disposición que se comenta establece los casos en que, excepcionalmente resulta válida la estipulación del plazo en un contrato de trabajo; caso contrario, el plazo no tiene validez alguna.

Para concluir, en el caso concreto no se puede haber producido la terminación del contrato por el vencimiento del plazo ya que el trabajador demandante gozaba de fuero sindical, en virtud del cargo que desempeñaba, es decir, era secretario general en la junta directiva Seccional por Empresa […], durante el período comprendido entre el 17/11/2012 al 16/11/2013.

3.21 Por último, en virtud que el ad quem confirmó la condena de vacación y aguinaldo completo, aun cuando dichas prestaciones no fueron solicitadas por el trabajador en la demanda, es necesario referirnos a las razones por las cuales este tribunal no accede a las mismas, así: 1) el reclamo de la demanda se circunscribe a los salarios no devengados por causa imputable al patrono desde el uno de enero de dos mil trece hasta la conclusión de la garantía sindical, por tanto es la única pretensión del trabajador demandante; 2) el derecho de vacaciones completas, así como el de aguinaldo completo, son derechos autónomos, que no pueden entenderse coligados o unidos al derecho de salarios no devengados por causa imputable al patrono, pues las causas que los generan son diferentes.

Por lo anterior se concluye, que la Cámara no actuó apegada a derecho, dado que, inobservó el principio de congruencia al sentenciar, pues confirmó la

sentencia de primera instancia que concedió más de lo que el actor solicitó en la demanda".

Sala de lo Civil, número de referencia: 241-CAL-2019, fecha de la resolución: 31/01/2020

DOCTRINA LEGAL

CÁMARA APLICÓ DE FORMA INDEBIDA LOS PRESUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LA DOCTRINA LEGAL, SUSTENTADA POR ESTA SALA EN SENTENCIA CON REFERENCIA 57-CAL-2016

"Aplicación indebida de doctrina legal, sentencia con referencia 57- Cal-2016. de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete

Cabe señalar, que en cuanto a la aplicación indebida de ley, como motivo específico de casación, esta Sala ha sostenido que consiste en una infracción que resulta al subsumir indebidamente los hechos que constituyen el caso concreto, en la hipótesis contenida en la norma, es decir, al circunscribirlos dentro de ella. Este submotivo es el resultado del proceso lógico-jurídico que verifica el juzgador, a fin de establecer si el caso particular está o no contenido en la norma, concluyendo que lo está a pesar de que la norma que fue aplicada no era relevante para resolver el caso y sin embargo fue aplicada. (Sentencia 471-CAL-2018 de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve).

La doctrina legal, que la recurrente invoca como indebidamente aplicada, se refiere, en lo pertinente a: "Que un instrumento privado que provenga de hechos atribuibles contra sí mismo; no es idóneo y pertinente pues de darle el valor probatorio de plena prueba, se estaría en presencia de una confesión provocada conforme a la ley tal acto deviene en ilegal". (Sentencia 57-Cal-2016, de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete).

Con relación al submotivo en análisis, la recurrente expresó que en el caso de autos se ha aplicado indebidamente la doctrina sentada por medio de la sentencia 57-Cal-2016, pues, aunque en la misma se determinó que ciertos documentos privados no hacen plena prueba, tal regla no es aplicable de forma automática y generalizada, sino que debe adecuarse a supuestos reconocidos por la doctrina legal. Que los medios probatorios ofrecidos por su mandante no corresponden a los que se refiere la doctrina mencionada, pues la misma se refiere a aquellos documentos privados obtenidos de forma ilegal, bajo procedimientos encaminados a incriminar al suscriptor, de los hechos que se le puedan atribuir. Mientras, su mandante presentó una carta compromiso suscrita por el trabajador demandante que nace del principio de libre contratación y la autonomía de la voluntad de las partes; y además, el informe de auditoría.

Continúa argumentando que la Cámara cometió el error alegado porque lo depuesto por los testigos presentados por la demandada, no se origina en el contenido de la carta mencionada, sino que son medios de prueba independientes. Alego, además, que la Cámara decidió aplicar indebidamente la doctrina

legal establecida, quitándole valor probatorio a toda la prueba a la que le sirva de sustento la carta suscrita por el trabajador; sin identificar, ni individualizar los medios probatorios, y omitiendo, además, que la doctrina sentada en el precedente calificado bajo el número de referencia 57-Cal-2016, se refiere a prueba documental únicamente, mientras que el ad quem en este caso lo ha aplicado también a la prueba testimonial.

Sobre este punto, el ad quem, sostuvo lo siguiente: « (...) Ahora bien, es cierto que esta, carta de compromiso suscrita por el señor […] la ignoró por completo la a quo, al punto que ni siquiera la menciona en los ANTECEDENTES DE HECHO de su sentencia, no obstante haberlo recibido como evidencia (F. […]). También es cierto que por sana crítica, esta carta valorada en conjunto con las demás pruebas de descargo (testimonial e informe de auditoría de fs. […]), establece un reconocimiento implícito de la falta cometida, lo que podría llevarnos al convencimiento de que sí hay hechos constitutivos de un deterioro justificado de confianza, y situarnos en el predicado de la causal 3° del Art. 50 Tr. Sin embargo hay un impedimento legal para ello, y es la doctrina legal que sentó la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia 57-CAL-2016 del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en casación laboral (Art. 588 No 1 inc. 2° Tr). En esta jurisprudencia se lee textualmente en su apartado VI. DECLARATORIA DE DOCTRINA LEGAL, lo siguiente: “b) Que un instrumento privado que provenga de hechos atribuibles contra sí mismo; no es idóneo y pertinente pues de darle el valor probatorio de plena prueba, se estaría en presencia de una confesión provocada, y conforme a la ley tal acto deviene en ilegal”. Como si esto fuese poco, al final del citado FUNDAMENTOS DE DERECHO, se previene así: “finalmente, esta Sala advierte, a los tribunales jurisdiccionales pertinentes, que en los sucesivos casos, se observe el contenido de la doctrina legal, que ha sido relacionada en este sentencia, cuyo efecto jurídico, tiene fuerza normativa dentro del ordenamiento legal, la que debe ser considerada por los tribunales de instancia, así igual que las partes, al ubicar el caso concreto a la hipótesis que ha sido descrita”.

Y concluye la Cámara “(...) Está claro entonces que sí por lo dicho se cae el valor como prueba de esta Carta de Compromiso suscrita por el trabajador también se caen las otras evidencias a las cuales les sirve de sustentación decisiva, y por lo tanto no se establece en el juicio la causal justificativa de despido del Art..50 No 3° Tr (...)” (sic).

Para esta Sala los puntos controvertidos consisten en el hecho que la Cámara estimó que la “carta de compromiso” suscrita por el trabajador demandante, señor […], agregada a folios […] de la pieza principal, es de aquellos documentos privados que se incluyen en la doctrina legal que este tribunal estableció en sentencia 57-Cal-2016, de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

Asimismo, consideró que, una vez descartada la carta mencionada, bajo los supuestos de la doctrina legal, automáticamente se desvirtuaban las demás pruebas, para el caso, la prueba testimonial y el informe de auditoría, por ser estos referentes probatorios de la primera prueba.

En consecuencia, resulta conveniente analizar el documento denominado carta de compromiso, para determinar si la Cámara ha cometido el vicio denunciado.

Así, se advierte que a folios [...] de la pieza principal consta un instrumento privado en papel membretado que dice: "SANTILLANA Y CARTA DE COMPROMISO POR PRESTAMOS PERSONALES; A EMPLEADOS DE EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V., y en la parte inicial del mismo se puede leer: "Yo, […] por la presente Hago Constar que apliqué indebidamente a mi cuenta de EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V. La cantidad de un mil cuatrocientos cincuenta y dos con 21/100 dólares ($1452,21)".

Además, se expresa lo siguiente: "El cual me comprometo a cancelar de la siguiente manera: Otra Formas de pago Especifique aguinaldo y vacaciones que serán descontadas de planillas de sueldo, durante el período comprendido entre 01 de de enero 2018 y el 31 de Diciembre 2018, al mismo tiempo AUTORIZO A EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V. para descontar el Saldo insoluto en un SOLO PAGO de mi I NDEMNIZACIÓN FINAL EN CASO DE DESPIDO".

De la lectura del documento anterior, se puede colegir que, está redactado en un formato que la demandada proporcionó para que en él se consignen hechos, tales como, en el caso analizado, que el trabajador aplicó indebidamente una cantidad de dinero indebidamente en su cuenta, y que por lo mismo, se comprometió a pagarlas con el dinero correspondiente a su aguinaldo y vacaciones.

Dicho lo anterior, es oportuno señalar que el art. 134 del Código de Trabajo, establece que *"cuando el trabajador sea deudor de su patrono, por hechos ocurridos con ocasión o motivo de la relación de trabajo, el patrono sólo podrá exigir el pago de tales deudas promoviéndose el juicio correspondiente".*

De la transcripción anterior se advierte que, el documento en referencia, dista mucho de ser el medio idóneo para reclamar la supuesta deuda del trabajador con relación a la demandada, producto del erróneo cargo en su cuenta de empleado; ya que el empleador debió seguir un juicio laboral para tal efecto, y no pretender que el demandante pague la deuda en mención a través del documento supra.

Ahora bien, en relación al hecho de que la Cámara estimó que la "carta de compromiso" suscrita por el trabajador demandante, es de aquellos documentos privados que se incluyen en la doctrina legal; cabe señalar que esta Sala considera que se trata de un documento privado mediante el cual el trabajador se comprometió **voluntariamente** a pagar una cantidad de dinero como resultado de una indebida aplicación realizada de una cuenta de préstamos personales a empleados de Editorial Santillana; es decir, el trabajador a través de dicho documento, únicamente está reconociendo una deuda respecto de su empleador y se compromete a pagarla.

En ese sentido el referido documento no se enmarca en la doctrina legal, ya que la misma se refiere a aquellos documentos privados que se obtengan a través de coacción por parte de quien redacta el instrumento, con el fin de incriminar de forma directa en algún hecho a quien lo suscribe; y que dicha situación haya sido acredita en el juicio; es decir, debe constar en el proceso que la

aceptación de determinados hechos por parte del trabajador haya sido en contra de su voluntad. Deben de haber indicios de la ausencia de la libre voluntad del trabajador al firmar el documento.

En consecuencia, la Cámara aplicó de forma indebida los presupuestos establecidos en la doctrina legal sustentada por esta Sala en sentencia con referencia 57-Cal-2016; por tanto, cometió el vicio que se le atribuye, respecto al documento en mención.

Finalmente, respecto del argumento de la recurrente en cuanto a que la Cámara aplicó de forma generalizada y automática la doctrina legal respecto de la prueba testimonial y el informe de auditoría aludido; esta Sala considera necesario aclarar que la doctrina legal sentada en el recurso de casación con referencia 57-Cal-2016, se suscribió a aquellos instrumentos privados que provengan de hechos atribuibles contra sí mismo.

En este sentido, la Cámara se equivocó al aplicar la doctrina legal referida a la prueba testimonial y al informe de auditoría, cuando tenía el deber de analizarlos de forma independiente, tal como lo expresó la recurrente.

Por tanto, la Cámara aplicó indebidamente la doctrina legal referida, por lo que este tribunal le hace un llamado, para que en lo sucesivo analice los presupuestos de la misma, para que posteriormente considere su aplicación.

Consecuentemente, esta Sala casará la sentencia por el motivo de aplicación indebida de la doctrina legal".

Sala de lo Civil, número de referencia: 118-CAL-2019, fecha de la resolución: 29/10/2020

DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD CUANDO DE LO EXPUESTO POR EL RECURRENTE SE ADVIERTE QUE CITA ÚNICAMENTE DOS SENTENCIAS DEFINITIVAS, CON LO QUE NO SE CUMPLE EL NÚMERO DE SENTENCIAS QUE LA NORMATIVA DETERMINA PARA QUE SE CONSTITUYA DOCTRINA LEGAL

"Infracción de ley por el submotivo de aplicación indebida de doctrina legal

1. Sobre el concepto del vicio expuesto inicialmente, se debe tener presente que en el auto de las once horas dieciocho minutos del tres de octubre de dos mil dieciocho, en el recurso de casación con referencia 241-CAL-2018, esta Sala estableció, que la aplicación indebida es el resultado del proceso lógico-jurídico que verifica el juzgador, a fin de establecer si el caso particular está o no contenido en la norma, concluyendo que lo está a pesar de que la norma que fue aplicada no era relevante para resolver el caso y sin embargo fue aplicada.

2. Con relación a este vicio, los recurrentes argumentaron, en síntesis, que en la doctrina legal contenida en las sentencias de casación con referencias 346-2012, de las diez horas y cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil quince, y 137-CAL-2010, de las nueve horas y veinticinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil quince; se estableció que cuando se alega la causal justificativa de despido, causal 3° del art. 50 del Código de Trabajo, la prestación de servicios y el despido se reconocen de manera implícita por el

patrono, siendo innecesario acreditar la identificación y la calidad de representante patronal de la persona a quien se le atribuyó la realización del despido; y bajo esa circunstancia, lo que corresponde a quien alega la causal referida es comprobar los actos constitutivos de la pérdida de la confianza; y si la misma no se comprueba, se entiende que existió un despido injustificado.

3. Así mismo, manifestaron que la Cámara incurrió en la aplicación indebida de la doctrina legal mencionada al darle un alcance que no tiene, ya que la misma se ha dictaminado por la Sala de lo Civil únicamente para la causal tercera del artículo 50 del Código de Trabajo. Que, no obstante, el ad quem la ha generalizado en la sentencia para todas las otras causales de terminación de contrato sin responsabilidad patronal, argumentando que "[...] cuando se trate de una excepción que busque justificar un despido, el reconocimiento explícito en caso de probarse ésta, estará presente, puesto que no tendría sentido pensar que solo ocurre con una causal (pérdida de confianza), sino que cuando los mismos parámetros de razonabilidad son aplicables a las demás causales, como la de negligencia y desobediencia que son precisamente las que en el caso sub-iudice se han invocado[...]" (sic).

4. Finalmente expusieron, que al no ser aplicable la doctrina legal invocada, y con la cual se condenó injustamente a su mandante al pago de lo reclamado en la demanda, consideraron que debió ser aplicada la lógica jurídica, en virtud que no se estableció el despido alegado, ni de forma directa ni por las presunciones legales establecidas en el Código de Trabajo, por lo que resultaba inoficioso entrar a conocer y valorar las excepciones alegadas como mecanismo de defensa procesal.

5. Retomando lo expuesto por los recurrentes, según su criterio, la Cámara Segunda de lo Laboral cometió la infracción de aplicación indebida de doctrina legal, al haberla ampliado, lo que se determina al haber generalizado el ad quem, que la prestación de servicios y el despido se reconocen de manera implícita al haberse alegado cualquiera de las otras causales de despido injustificado por negligencia y desobediencia, y no únicamente cuando se alega la causal 3° del art. 50 CT, como se estableció en las sentencias con referencias 346-2012, de las diez horas y cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil quince, y 137-CAL-2010, de las nueve horas y veinticinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil quince,

6. Cabe señalar que el inciso segundo del ordinal 1° del art. 588 CT, consigna que la doctrina legal se conforma con la jurisprudencia establecida por los tribunales de casación, en cinco sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas en casos semejantes; no obstante, esta sala advierte, que los recurrentes citan únicamente dos sentencias definitivas, dictadas en los recursos de casación con referencias 137-CAL-2010 y 346-2012, con lo que no se cumple el número de sentencias que la disposición referida determina para que se constituya doctrina legal.

7. Así mismo debe aclararse que esta Sala, aún no ha declarado doctrina legal respecto de la causal 3ª del art. 50 CT, tal y como lo expresan los impetran-

tes, por lo que debieron de enmarcar su inconformidad en un submotivo de los contenidos en el art. 588 CT, pero distinto al invocado.

8. Por las razones expuestas, no es posible admitir el recurso de Casación y así se declarará".

Sala de lo Civil, número de referencia: 60-CAL-2020, fecha de la resolución: 02/03/2020

DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO DE RENUNCIA

EL VICIO ALEGADO NO SE CONFIGURA, CUANDO EL RECURRENTE NO ATACA EL VALOR PROBATORIO QUE SE LE OTORGÓ, NO SE CENTRA EN EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EN SÍ, SINO EN CÓMO ÉSTE FUE CERTIFICADO

"Error de derecho en la apreciación de la prueba documental, art. 402 inciso 2° del Código de Trabajo y art. 9 de la Lev del Notariado

Con relación al vicio en análisis el licenciado [...] expresó lo siguiente: "(...) Consta en el proceso copia certificada por Notario del documento privado autenticado de Renuncia suscrito por mi mandante en fecha 18 de diciembre de 2017 y reconocido en esa misma fecha ante notario [...], dicha certificación fue realizada por el Notario [...], mismo que se mostró parte en el Proceso como Apoderado General Judicial con Cláusula Especial de Asociación [...], y contestó la demanda en nombre de su representada y no ha sido sustituido en todo el proceso e instancias, por lo que la acción de certificar notarialmente el mencionado documento fue realizada estando prohibido por ley expresa (Art. 9 de LN), y es que además, resulta curioso que convenientemente para [...] ese documento es la prueba más relevante de su oposición a las pretensiones de mi mandante, y siendo tan relevante en el proceso por qué no presentaron el original de dicho documento---La Cámara comete el error de derecho en la apreciación de la prueba documental consistente en la copia certificada por Notario del documento privado autenticado de renuncia, suscrito por mi mandante en fecha 18 de diciembre de 2017 y reconocido en esa misma fecha ante el Notario [...], al otorgarle valor probatorio a dicho documento en la sentencia impugnada, no teniéndolo, ya que el mismo fue otorgado (su certificación notarial) en franca contravención a la prohibición establecida en el Art. 9 de la LN (...)" (sic).

Además, el recurrente expresó: "(...) al respecto es importante traer a colación la sentencia pronunciada a las diez horas y veintidós minutos del día 22 de mayo de 2013, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el Proceso de Amparo de referencia 97-2011, en la cual expone la interpretación y sentido que dio a las copias certificadas por el Notario que a su vez era parte procesal en el proceso Judicial: "(...) la prohibición a los notarios, contenida en el art. 9 de la ley de Notariado, de autorizar instrumentos en que resulte o pueda resultar algún provecho directo para ellos mismos y otras personas que se detallan en el mismo artículo, por extensión, se aplica a las diligencias de jurisdicción voluntaria. Dentro de las cuales se encuentran las copias fidedignas

de documentos a que se refiere el art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. Por ello, la documentación presentada por parte actora no hace fe (...)" (...)" (sic).

Respecto a este punto el ad quem, en su sentencia, estableció: "(...) el centro y meollo de la disputa, -según agravios-, esta Cámara se centra en la susodicha prueba instrumental, y concluye lo siguiente: 1°) Al margen del sistema de liquidar año con año que emplea el patrono con sus trabajadores en general, de forma particularizada, en el caso de la trabajadora [...], este documento privado de renuncia y finiquito debidamente autenticado,-y que en ningún momento es redargüido de falso en el juicio-, entra en los instrumentos de descargo a que alude el Art. 402 Tr., y por ello da fe. El a quo deslegitima esa prueba porque, según razona en su sentencia, en dicha renuncia "no se relacionó la fecha de ingreso (de la trabajadora) a la institución"; y, porque al alegar el patrono la respectiva excepción "esta no fue específica contra la trabajadora demandante". 2°) A criterio del ad quem estos argumentos empleados por el juzgador y deslegitimar el citado instrumento, son totalmente irrelevantes. Primero porque a fs. 43 él admite la excepción dentro de un legítimo esquema de oposición, sin hacer reparos o prevenciones de ningún tipo a quien lo opone; y, segundo porque la falta de fecha de ingreso al trabajo como dato, no es un pre requisito legal de solemnidad para que valga como evidencia, situación que no se sabe de dónde la deduce el jugador, (...) 3°) El apelado por su parte aduce en esta instancia "....consta en el proceso copia certificada por notario del documento privado autenticado de renuncia, sin embargo, dicha certificación fue realizado por el notario [...], mismo que se mostró parte como Apoderado General Judicial con Cláusula Especial de [...], por lo que incurría en él la prohibición de otorgar dicha certificación notarial, en este sentido dicho documento NO HACE FE para acreditar la excepción de pago que alegó [...] en la contestación de la demanda...", y cita el Art. 9 de la Ley de Notariado. Sin embargo, a fs. [...] tal instrumento se autentica ante el notario [...] (18/12/17), pero en todo caso obsérvese que dicha auténtica se hace cuando todavía no se había presentado la demandada por la parte actora, y la mera certificación posterior (02/04/19) no origina un conflicto de intereses. Por ello se descarta esto último aun cuando quien al certifica después tuviere que ver de una u otra manera con la eventual causa que se levanta (...) consecuente con todo lo antes dicho, ha lugar a la excepción de pago alegada, constando que la señora NE otorgó el más amplio y total finiquito a su patrono en documento privado debidamente autenticado (...)". (sic).

El vicio invocado supone por un lado, la existencia de una regla específica que indique el valor de una determinada prueba, y por otra, que el juzgador le atribuya un valor probatorio diferente al aplicarla.

El art. 402 del Código de Trabajo, establece que la renuncia del trabajador a su empleo, terminación de contrato de trabajo por mutuo consentimiento de las partes o recibo de pago de prestaciones por la vía notarial solo tiene valor si son

realizados a través de documento autenticado conforme el art. 52 de la Ley de Notariado.

Para el caso en análisis se advierte que, el agravio del recurrente consiste, principalmente, en que la Cámara no debió de otorgarle valor probatorio al documento privado autenticado de renuncia, suscrito por su representada, el 18 de diciembre de 2017, ya que, la posterior certificación notarial de dicho documento fue realizada por el licenciado [...], quien es apoderado general judicial de la demandada; incurriendo de esa forma en la prohibición establecida en el art. 9 de la Ley del Notariado, en el sentido que los notarios no pueden autorizar instrumentos en que resulte o pueda resultar algún provecho directo para ellos. Para tal efecto, el recurrente cita la sentencia de amparo con referencia 97-2011 en la cual expone la interpretación y sentido que dio la Sala de lo Constitucional a las copias certificadas por notario.

Del análisis de lo expuesto por el recurrente y lo dicho por la Cámara sentenciadora, se advierte que, el recurrente no ataca el valor probatorio que el ad quem le otorgó al documento privado autenticado de renuncia presentado por la demandada en copia certificada por notario; es decir, no se centra en el contenido del documento en sí, sino en cómo éste fue certificado; en ese sentido, la Cámara no comete el error alegado, dado que conforme al art. 402 del Código de Trabajo, el documento referido, tiene el valor que el ad quem le dio pues consideró en su sentencia que son de aquellos "instrumentos de descargo que alude el art. 402 del Código de Trabajo, por ello da fe". De tal manera que esta Sala no casará la sentencia de mérito".

Sala de lo Civil, número de referencia: 360-CAL-2019, fecha de la resolución: 23/03/2020

ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD, CUANDO EL RECURRENTE NO LOGRA DETERMINAR EN QUÉ CONSISTE LA VULNERACIÓN RESPECTO AL ART. 461 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, YA QUE NO EXPONE CÓMO EL AD QUEM DEJÓ DE APLICAR EL SISTEMA DE LA SANA CRÍTICA EN SU FUNDAMENTACIÓN

"Error de derecho, en la apreciación de prueba testimonial Precepto infringido, art. 461 CT

El recurrente al respecto expuso: "[...] Al respecto, la Cámara considera que "el propio apoderado en agravios lo admite como indicio de prueba, y esto sumado a que no desconoce la relación laboral que existió entre partes, al punto de señalar que solo se debe condenar al demandado y no a la demandada, [...] es más que suficiente para presumir dicha relación laboral. La Cámara no es congruente en resolver lo solicitado, utilizando, contrario al principio de parcialidad, mecanismos para dar credibilidad al único elemento de prueba aportado en primera instancia, consistente en prueba testimonial (...) la Cámara únicamente hace una conclusión de alegato efectuado en apelación, la cual no conlleva la

debida suficiente motivación para dar Fé a la declaración del Testigo declarante en primera instancia, existiendo por tanto una clara deficiencia al no exponer de conformidad a la lógica las razones valederas para estimar como prueba la declaración de la testigo de cargo, en contravención a lo dispuesto en el art. 461 del Código de Trabajo; por consiguiente, es procedente casar la sentencia dictada y pronunciar la que conforme a derecho corresponde, de conformidad al art. 537 CPCM. [...]" (sic).

Con relación al vicio en análisis, esta Sala ha sostenido a través de su jurisprudencia (sentencia 216-CAL-2018), que el error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, únicamente se puede dar, cuando se valora la prueba con un sistema distinto al de la sana crítica, o cuando la valoración de la prueba desarrollada "supuestamente" al amparo de dicho sistema de apreciación, en realidad se ha realizado en forma irracional, abusiva o arbitraria.

La valoración de una prueba es irracional o absurda, cuando el juzgador analiza el medio probatorio mediante un argumento que adolece de sentido o que es contrario a la razón; es abusiva, cuando la apreciación es excesiva o indebida; y arbitraria, al actuar siguiendo su voluntad o capricho, sin ajustarse a las leyes o a la razón.

A juicio de esta Sala, el recurrente, en el desarrollo del concepto no logra determinar en qué consiste el error de derecho respecto del art. 461 CT, pues no expone cómo la Cámara sentenciadora dejó de aplicar el sistema de la sana crítica en su fundamentación, vicio que sólo se produce cuando el juzgador de modo flagrante y notorio, ha faltado a las reglas de dicho criterio de valoración; estimando irracional, arbitraria y abusivamente la prueba aportada.

En consecuencia, el vicio no fue correctamente planteado por el licenciado […], de conformidad a la legislación aplicable. En consecuencia el recurso deviene en inadmisible conforme a lo establecido en el art. 528 CPCM".

Sala de lo Civil, número de referencia: 158-CAL-2020, fecha de la resolución: 30/11/2020

EL AD QUEM NO COMETE EL VICIO CUANDO NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR, NI VALORAR LA SUPUESTA CONTRADICCIÓN DEL TESTIGO DE CARGO EN EL CONTRAINTERROGATORIO, EN CUANTO AL LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ EL DESPIDO, POR UNA INCONFORMIDAD DEL DEMANDADO

"FUNDAMENTOS DE DERECHO.

MOTIVO GENÉRICO DE INFRACCIÓN DE LEY POR EL SUBMOTIVO DE ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, ART. 461 CT

1. En cuanto al vicio alegado, el recurrente fundamentalmente expuso: "[...] en la demanda se dijo que el supuesto despido ocurrió en Avenida Olímpica y Pasaje tres, Edificio Plaza Olimpica, San Salvador, lugar que se denomina [...] y que el edificio [...] se encuentra a cuadra y media del edificio de [...], cerca del restaurante SubWay. Es decir, que el testigo de cargo, ubicó el hecho del su-

puesto despido, en un lugar completamente diferente al que se mencionó dentro de la demanda de mérito y por lo tanto es contradictorio. No obstante ello, La Cámara, considera que el testigo es suficiente para tener por establecidos los hechos descritos en la demanda, por exponer el lugar donde ocurrió el despido, excluyendo por completo que el mismo testigo, en el contrainterrogatorio, estableció un lugar diferente del que se plasmó dentro de la demanda, lo cual conlleva un análisis sesgado y por ende arbitrario de la deposición del testigo de cargo. Siendo así las cosas, se puede concluir que la Cámara arbitrariamente valorará la declaración del testigo, pues le dio pleno valor probatorio a su disposición, no obstante que dentro del contenido de la misma, fue evidentemente contradictorio en el lugar donde supuestamente ocurrió el hecho que describe, lo que a todas luces debió desacreditar por completo su dicho en relación a ese punto específico, y debiendo por lo tanto, confirmar la sentencia de Juez Tercero de lo Laboral [...]" (sic).

2. En lo relativo a la valoración de la prueba testimonial aludida por el recurrente, el ad quem estableció en su sentencia: "[...] III) Aunado a esto último, el despido impetrado se encuentra acreditado directamente por medio de la declaración del testigo de cargo señor RAGA, quien merece fe, puesto que fue compañero de trabajo de la demandante y se vuelve testigo idóneo para declarar en el presente proceso, y expresa con detalle todo lo relacionado con el despido impetrado, en hora, fecha y lugar del suceso, lo cual le consta porque estaba presente y pudo ver y oír lo ocurrido. Asimismo, tanto el testigo de cargo y descargo de Fs. […], en armonía con el principio de comunidad de la prueba, terminan probando la calidad de representante patronal del señor JASM, como persona que ejecutó el despido según la demanda de mérito, y quien ostenta según lo declarado por el primer declarante, el cargo de Jefe de Piso, y el segundo declarante, con el cargo de Coordinador de Cuenta de la sociedad demandada, por lo que no hay duda que era un representante patronal en actividades laborales y que sus facultades se encuentran imbíbitas en cualquiera de los cargos, según lo estipulado en el artículo 3 del Código de Trabajo [...]" (sic).

3. Con relación al vicio de error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, esta Sala ha sostenido (v.g., sentencia de las once horas ocho minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve con referencia 216-CAL-2018, entre otras) que el mismo se presenta cuando se valora la prueba con un sistema distinto al de la sana crítica, o cuando la valoración de la prueba realizada "supuestamente" al amparo de dicho sistema de apreciación, en realidad se ha realizado en forma irracional, abusiva o arbitraria. La valoración de una prueba es irracional o absurda, cuando el juzgador analiza el medio probatorio mediante un argumento que adolece de sentido, o que es contrario a la razón; es abusiva, cuando la apreciación es excesiva o indebida; y arbitraria, al actuar siguiendo su voluntad o capricho, sin ajustarse a las leyes o a la razón.

4. El sistema de valoración de la sana crítica consiste en una valoración conjunta de la prueba, conforme a las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, mediante las que el juzgador otorga a cada medio probatorio un determinado valor, así como al conjunto de ellos. Esta labor judicial importa porque

deberán darse las razones que inducen a otorgar ese determinado valor probatorio de omitirse plasmar las razones por las que se tomó determinada decisión, la sentencia podrá considerarse como arbitraria, al no poseer la fundamentación mínima necesaria para ilustrar a las partes que motivó el fallo en tal sentido, porque no se tuvieron por comprobados tales hechos o porque determinada prueba fue desestimada, o considerada como impertinente o inútil, entre otros casos. (Sentencia de las once horas diecisiete minutos del veinte de diciembre de dos mil diecinueve, con referencia 253-CAL-2019).

5 . Debe tenerse en cuenta que la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, implica la libertad del juzgador de valorar los distintos medios practicados, sin sujeción a una regla legal específica. Pero, tal como lo han estimado los doctrinarios procesalistas, la libre valoración no significa libérrimo u omnímoda apreciación de la prueba, sino que ha de ser interpretada, como valoración conforme a las llamadas reglas de la sana crítica, las que no son reglas legales, sino normas comunes a todo ser humano, no exclusivas de los juzgadores, basadas en la razón, la lógica y en definitiva, en las máximas de la experiencia.

Sentencia de casación, de las once horas veintidós minutos del once de agosto de dos mil diecisiete, con referencia 465-CAC-2016.

6. La norma que se cita como infringida en el caso de autos, establece que: "[...] Al valorar la prueba el juez usará la sana crítica, siempre que no haya norma que establezca un modo diferente" (Art. 461 CT).

7. Para determinar la existencia de la contradicción alegada por el recurrente, la cual es el fundamento del vicio alegado, es imperioso analizar, tanto lo expuesto en la demanda, como lo dicho por el testigo de cargo, en lo pertinente al despido. Así tenemos que a folio […] de la pieza principal, en el párrafo tercero, la defensora pública expuso que el despido ocurrió en el lugar señalado para el emplazamiento, el cual, relacionó en el párrafo segundo, era la avenida Olímpica y pasaje tres, edificio Plaza Olímpica, San Salvador.

8. A folio […] de la pieza principal, consta disco compacto de audio y video, en el que fue registrada la declaración del testigo de cargo señor RAGA, quien en el minuto once con veinticinco segundos, al ser contrainterrogado por el licenciado […], apoderado de la sociedad demandada, confirmó que trabaja en la avenida Olímpica, en la Compañía […]., y que en esa avenida hay dos edificios de dicha Compañía; que en el edificio ubicado en avenida Olímpica […], conocido como […], que es el edificio que queda más cerca del redondel, es en donde ocurrió el hecho del despido.

9. Cabe señalar, que en la demanda se estableció como lugar en donde se realizó el despido la avenida Olímpica y pasaje tres, […], en San Salvador, y no se especificó un edificio de manera particular, elemento fundamental para realizar las consideraciones siguientes:

10. Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, (Pág. 331, Tomo II, 25ª Edición, 1997, Editorial Heliasta) una contra-

dicción es la incompatibilidad de dos proposiciones, que no pueden ser a la vez verdaderas, por cuanto una de ellas afirma y otra niega lo mismo.

11. Bajo ese contexto, no es posible que se haya configurado la contradicción alegada por el licenciado […], dado que, con relación al lugar donde ocurrió el despido, según lo relacionado en la demanda, no se expresó la identificación de edificio alguno; omisión que impide a este tribunal pronunciarse sobre una contradicción en la declaración del testigo de cargo con respecto a lo establecido en la demanda.

12. En otras palabras, este tribunal se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre una contradicción, ante la falta de los elementos esenciales mínimos para determinar la existencia de la misma. Así para un caso hipotético, si el representante del trabajador hubiese establecido en la demanda de manera categórica, que el hecho del despido ocurrió en el edificio "El", y el testigo de cargo hubiese manifestado que el mismo ocurrió en el edificio "B2", ambos ubicados en la calle la mascota de esta ciudad, este tribunal, si contaría con elementos suficientes para determinar tal defecto.

13. Caso contrario, y tal como sucede en el sublite, al no existir elementos disconformes en la demanda con lo dicho por el testigo de cargo, por no haberse determinado en la demanda en que edificio aconteció el despido alegado, no existe la posibilidad que se genere una contradicción.

14. En conclusión, al no ser posible determinar la contradicción alegada por el recurrente, en cuanto al lugar en el que ocurrió el despido alegado en la demanda, y el lugar señalado por el testigo RAGA al ser contrainterrogado, ya que en la demanda no fueron relacionados los edificios identificados como [...] ni [...]; el error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial alegado no tiene un fundamento jurídico válido, ya que el ad quem, no tenía la obligación de haber considerado, ni valorado, la supuesta contradicción del testigo de cargo en el contrainterrogatorio, por ser la misma, una mera inconformidad del apoderado de la sociedad demandada, que no gozaba de respaldo por las razones expresadas en los párrafos anteriores.

15. Ante tales circunstancias, y al ser valorada de manera favorable para el actor, la declaración del testigo de cargo, no es posible que se haya violentado el sistema de valoración de la sana crítica y cometido tal arbitrariedad,

16. En consecuencia la sentencia no será casada".

Sala de lo Civil, número de referencia: 335-CAL-2019, fecha de la resolución: 13/01/2020

EL VICIO ALEGADO NO SE CONFIGURA CUANDO EL AD QUEM NO HA VALORADO LA PRUEBA TESTIMONIAL, POR LO QUE NO HAY FORMA DE DETERMINAR SI EXISTIÓ UNA VALORACIÓN ABUSIVA, EXCESIVA O INDEBIDA

"Error de derecho en la apreciación de la prueba, con infracción de las reglas de la sana crítica

18. En cuanto a esta causal casacional el recurrente expuso, que el ad quem no analizó, valoró, ni tomó en cuenta la prueba testimonial de descargo; siendo que, conforme a las reglas de la sana crítica, dicho tribunal debió otorgar un valor determinado a cada prueba que obra en autos, y expresar las razones correspondientes, en aras de que las partes en contienda, comprendan los fundamentos que tuvo para fallar en el sentido en que lo hizo.

19.El tribunal de segunda instancia, en lo pertinente a este submotivo, en su resolución sostuvo: "[...] Y para este Tribunal, queda claro que el apoderado patronal omitió cumplir con esta formalidad, lo cual no puede ser, porque se contrarían importantes principios constitucionales en el proceso, como son el de defensa y contradicción, ya que dicho profesional, no podía pretender presentar prueba, sin primero haber alegado en tiempo una excepción, para que la parte actora, en este caso en particular, tuviera las oportunidades suficientes para debatir los hechos que se le pretendían atribuir, por lo tanto no queda otro camino que rechazar todos sus argumentos a este respecto, visto que como se ha expuesto, no cumplió con estos parámetros legales para su interposición. De lo anterior, es necesario aclarar, que la prueba de descargo presentada de Fs. […] (prueba documental), la prueba testimonial de Fs. […], y la prueba grafotécnica de Fs. […], no pueden ser analizadas, ni tomados en cuenta en esta instancia, para poder probar sus argumentos, y es que como ya se dijo, la parte demandada no alegó ni opuso ninguna excepción en la etapa procesal **OPORTUNA** [...]" (sic).

20. Esta Sala ha sostenido en su jurisprudencia, v.gr., sentencia 76-CAL-2018, de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, entre otras, que "el error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, únicamente se puede dar cuando se valora la prueba con un sistema distinto al de la sana crítica, o cuando la prueba valorada "supuestamente" al amparo de dicho sistema de apreciación, se hace de forma absurda, irracional o arbitraria. La valoración de una prueba es absurda, cuando el juzgador analiza el medio probatorio mediante un argumento que adolece de sentido o Que es contrario a la razón; es abusiva, cuando la apreciación es excesiva o indebida; y arbitraria, al actuar siguiendo su voluntad o capricho, sin ajustarse a las leyes o a la razón".

21. Para que exista el error alegado, el juzgador debe analizar las deposiciones de los testigos que obran en el proceso, ya que únicamente de esta forma podrá apreciar el testimonio y reconocerle la eficacia o no, a dicho medio de prueba.

22. Sin embargo, se advierte que, en el caso analizado, la Cámara no analizó la prueba testimonial. Por tanto, no hay forma de determinar si existió una valoración abusiva, excesiva o indebida por parte del ad quem.

23. En consecuencia, resulta imposible que el mencionado tribunal haya incurrido en el vicio que el recurrente le atribuye. Por lo que resulta procedente declarar no haber lugar a casar la sentencia por este submotivo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 359-CAL-2019, fecha de la resolución: 02/03/2020

EL VICIO ALEGADO NO SE CONFIGURA CUANDO EL RECURRENTE ALEGA QUE EL AD QUEM NO EXPUSO POR QUÉ LA ÚNICA TESTIGO DE CARGO LE MERECE PLENA FE, PERO SE ADVIERTE QUE SÍ ANALIZÓ EL CONTENIDO DE LO EXPUESTO POR LOS TESTIGOS

"Error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, con infracción del art. 461 CT.

7. En cuanto a la infracción del art. 461 CT, el recurrente expuso que, el ad quem, de forma genérica, argumentó que los testigos de descargo, no le merecen fe, debido a que ni siquiera pudieron identificar correctamente a la trabajadora demandante, razonamiento que, a juicio del recurrente, no se basa en la ley, ni en las máximas de la lógica, la psicología y la experiencia, pues no especifica si se refiere a que no se identificó a la trabajadora por su nombre completo, o a la certeza de ser la misma persona de quien se declara. Así también manifestó el impetrante, que la Cámara no argumentó adecuadamente en su sentencia, por qué le merece fe lo depuesto por la única testigo de cargo, en detrimento del dicho de los tres testigos de cargo presentados, y que únicamente se basó en el dicho de la testigo de cargo, sin tener otra fuente probatoria.

8. El tribunal de segunda instancia, en lo pertinente a la prueba testimonial de descargo, en su resolución, sostuvo: "[...] se considera importante entrar a conocer si está o no probada la excepción ya relacionada, para delimitar el curso de esta sentencia con los testigos de descargo señores ARHG, DARA y AEAV de fs. [...], y al análisis de sus declaraciones tenemos que ninguno merece fe en lo declarado, y es que ni tan siquiera son capaces de identificar correctamente a la trabajadora demandante, y mucho menos fueron capaces de demostrar el hecho que no se presentó dentro de los tres días laborales siguientes a reanudar sus labores, y es que sus declaraciones tenían que ir encaminadas a establecer la voluntad de abandono de labores que regula el Art. 50 causal 13° Tr

9. Esta Sala ha sostenido en su jurisprudencia, v.gr., sentencia 76-CAL2018, de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, entre otras, que "el error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, únicamente se puede dar cuando se valora la prueba con un sistema distinto al de la sana crítica, o cuando la prueba valorada "supuestamente" al amparo de dicho sistema de apreciación, se hace de forma absurda, irracional o arbitraria. La valoración de una prueba es absurda, cuando el juzgador analiza el medio probatorio mediante un argumento que adolece de sentido o que es contrario a la razón; es abusiva, cuando la apreciación es excesiva o indebida; y arbitraria, al actuar siguiendo su voluntad o capricho, sin ajustarse a las leyes o a la razón "

10. La cita anterior nos permite colegir la relevancia de los argumentos y fundamentos del tribunal, cuando analiza la prueba. La sana crítica implica que el administrador de justicia debe plasmar en su resolución, los motivos que le condujeron a la conclusión a la que arribó, pues de esa forma deja constancia del proceso cognitivo de valoración de la prueba y su análisis con relación a las acciones y excepciones que obran en el caso de que se trate.

11. A la luz de tales consideraciones se advierte, que en el caso de autos, el tribunal de segunda instancia concluyó que lo depuesto por los testigos no le merecía fe, inmediatamente después expresó su análisis respecto de lo que los testigos de descargo expusieron, con relación a la excepción planteada por la parte demandada. A juicio de la Cámara, los mencionados testigos no lograron demostrar que la trabajadora no se presentó a laborar dentro de los tres días siguientes a la reanudación de las labores; ya que sus declaraciones, debido a la excepción interpuesta, debieron ser encaminadas a probar la voluntad de abandono de labores.

12. En esa línea de pensamiento es menester tener en cuenta lo dicho por esta Sala en la sentencia de referencia 189-CAL-2019, en la que se definió el abandono de labores de la siguiente manera: "El abandono consiste en que el trabajador, iniciada la prestación del servicio, renuncia a su derecho a seguir ocupando su puesto y lo deja definitivamente, lo que supone una decisión libre de su voluntad a la que sigue un estado de separación definitiva de sus labores"; y es precisamente ese hecho voluntario de la trabajadora, de no regresar definitivamente a su trabajo, lo que no lograron probar los testigos de descargo.

13. En cuanto a lo argumentado por el impetrante, en relación a que el ad quem, no expuso por qué la única testigo de cargo, le merece plena fe, y no así los tres testigos de descargo, es menester acotar, que en el sistema valorativo basado en la sana crítica, el dicho de un solo testigo puede hacer plena prueba, siempre y cuando genere convicción en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esto debido a que no se trata de prueba tasada, sino que es valorada conforme a las máximas de la razón y la experiencia del administrador de justicia, si bien, exige una motivación sólida de parte del juzgador, en la que se manifieste el examen valorativo del testimonio de que se trate y el contraste intelectivo del mismo, con relación a los demás elementos probatorios que obren en el juicio; ello obedece, además, a que el legislador no ha establecido, características o condiciones que deba reunir la declaración de un testigo único, para que genere convicción. Además, la libertad probatoria implica, que los hechos pueden probarse por medio de una variada cantidad de elementos probatorios, o por un único elemento de juicio, siempre que éste sea suficiente, conducente y pertinente (véase también la sentencia de referencia 373-CAL-2018, de las nueve horas treinta y tres minutos del diez de junio de dos mil diecinueve).

14. En virtud de lo anterior esta Sala colige, que la Cámara no incurrió en el vicio alegado por el impetrante, pues aunque expresó que los testigos no pudieron ni siquiera identificar adecuadamente a la trabajadora demandante; no fue ese el motivo por el que desestimó lo depuesto por los testigos de descargo; ya que inmediatamente después de realizar tal aseveración, se advierte que analizó el contenido de lo expuesto por los mismos, con relación a lo dicho por el empleador en la declaración de parte contraria, y los argumentos correspondientes a la excepción planteada por el recurrente; y de tal análisis concluyó, que con los testimonios de los testigos de descargo, no se logró probar la voluntad de la

trabajadora demandante, de abandonar sus labores. Por lo tanto, se declarará no haber lugar a casar la sentencia por este submotivo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 43-CAL-2020, fecha de la resolución: 06/10/2020

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 55-CAL-2020, fecha de la resolución: 13/10/2020

ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL

INEXISTENCIA DEL VICIO ALEGADO

"Error de hecho en la apreciación de la prueba documental, en contravención a lo dispuesto en el art. 402 CT

1. Sobre la infracción alegada, el impetrante, en resumen, expresó que, la compañera de vida de su representado, el día veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, tuvo que cerrar temporalmente el restaurante de aquél, debido a la suspensión de contrato conforme al art. 37 ordinal 6° del Código de Trabajo. Que posteriormente convocaron a una reunión a todo el personal para informarles que reanudarían labores, sin embargo, la trabajadora demandante, a pesar de haber sido convocada a dicha reunión, nunca regresó al lugar de trabajo, de tal modo que se originó la causal de terminación de contrato sin responsabilidad patronal, 13° del art. 50 CT. Para acreditar tal circunstancia, presentó una constancia hospitalaria emitida por el Centro Médico Quirúrgico 25 Av., en la cual se consignó que su poderdante estuvo hospitalizado del dieciséis de mayo, al dos de junio de dos mil diecinueve. Sin embargo, la Cámara vio prueba donde no la había, ya que de la referida constancia deduce el buen estado de salud de su mandante, a pesar de que el documento no fue elaborado por un médico.

2. La Cámara Segunda de lo Laboral, en lo que respecta a la constancia mencionada, sostuvo: "[...]se verifica que para comprobar dicha suspensión se presentó la documentación de fs. 89 a 93, en especial la que constituye una constancia hospitalaria donde efectivamente se confirma que el señor [:..] estuvo internado de emergencia en el Centro Médico Quirúrgico para brindarle tratamiento médico el día dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, que se cumplió con el tratamiento médico, y se le brindó el alta del centro hospitalario ya recuperado, sin complicaciones a ese momento el día dos de junio del corriente año. Dejando entrevisto el incumpliendo a lo regulado en el Art. 45 Tr., y es que [...] en el presente caso la causa desapareció el DOS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, por lo que era obligación del patrono informar inmediatamente a los trabajadores por cualquier medio formal que se iban a reanudar las labores, y aquellos tenían que acudir a su centro de trabajo dentro de los tres días siguientes a reanudar sus labores, por tanto no es posible que se haya convocado a los empleados del centro de trabajo del demandado hasta el día catorce de junio del mismo año, para informarles que reanudarían labores hasta el veintiocho de junio del presen-

te año, lo que hace que se ponga en duda, de lo aseverado por el apoderado del empleador en su escrito respectivo" (sic).

3. Se advierte, que el argumento principal del impugnante radica en que, la Cámara vio prueba donde no la había, pues del contenido de la constancia hospitalaria mencionada, dedujo, que después de habérsele dado el alta de dicho nosocomio, su representado "se encontraba ya en buen estado de salud".

4. Esta Sala en reiterada jurisprudencia, v.g., la sentencia pronunciada en el proceso con referencia 30-CAL-2018, de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, ha sostenido, que el vicio invocado tiene lugar, cuando el juzgador no ve prueba donde la hay, o ve prueba donde no la hay; y puede ocurrir también al equivocarse en la apreciación del contenido de un documento, tergiversándolo o simplemente omitiéndolo como si no constara en el. Es decir, el juzgador tiene por demostrado un hecho, sin existir en autos la prueba que lo acredite; o no tiene por acreditado un hecho, a pesar de existir en el proceso prueba pertinente e idónea.

5. En esa línea de pensamiento cabe advertir, que en la sentencia impugnada, el tribunal de segunda instancia, acotó que, "en el presente caso la causa desapareció el DOS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, por lo que era obligación del patrono informar inmediatamente a los trabajadores por cualquier medio formal que se iban a reanudar las labores, y aquellos tenían que acudir a su centro de trabajo dentro de los tres días siguientes a reanudar sus labores, por tanto no es posible que se haya convocado a los empleados del centro de trabajo del demandado hasta el día catorce de junio del mismo año, para informarles que reanudarían labores hasta el veintiocho de junio del presente año[...]"; de tal modo que, el tribunal de segunda instancia apreció el contenido del documento mencionado, sin alterarlo, puesto que de dicho instrumento se obtiene, que el señor JBC, fue dado de alta del hospital Centro Médico Quirúrgico, el dos de junio de dos mil diecinueve "[...] ya recuperado sin complicaciones [...]". Es decir, que tal y como lo interpretó la Cámara, había desaparecido el motivo de la suspensión de labores que tuvo lugar en el sub lite. Y es que, en caso de haber persistido la existencia de la causa de la suspensión, es decir, si el empleador hubiera seguido enfermo e incapacitado después del dos de junio de dos mil diecinueve, cuando fue dado de alta sin complicaciones, era su obligación brindar la prueba contundente, pertinente e idónea respecto a tal circunstancia; ya que la referida constancia hospitalaria no contiene información alguna que exprese que, el sujeto pasivo de la pretensión, continuaba enfermo al ser dado de alta, por el contrario, en el documento bajo análisis quedó plasmado que la Dra. B, le dio de alta al demandado, estando ya recuperado y sin presentar complicaciones.

6. En tal sentido la Cámara sentenciadora no cometió el error de hecho en la apreciación de la prueba documental, alegado por el licenciado [...]".

Sala de lo Civil, número de referencia: 43-CAL-2020, fecha de la resolución: 06/10/2020

ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA INSTRUMENTAL

EL AD QUEM OMITIÓ INCORPORAR CERTIFICACIÓN DE LAS DILIGENCIAS REALIZADAS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EMPLEADOR NO HIZO EFECTIVO EL PAGO DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA

"Error de hecho en la apreciación de la prueba documental, art. 402 del Código de Trabajo

Este tribunal considera necesario señalar, que el vicio alegado no necesariamente tiene lugar cuando el juzgador aprecia erróneamente la prueba,, según el particular punto de vista de cada quien y la eficacia probatoria de la misma; sino que también se produce cuando el juzgador al valorar la prueba, se forma un criterio distinto a lo que el documento establece o un juicio contrario a , lo que la realidad indica, dado que en ocasiones existe mutilación en el contenido de la prueba, por restricción del alcance de la misma. Este yerro también ocurre cuando no se tiene por probado un hecho, en razón de no distinguir la prueba que demuestra su existencia, es decir, dicho error recae sobre la apreciación de la existencia o inexistencia del medio de prueba, en su aspecto material, objetivo o físico, por ejemplo: no ver prueba donde sí la hay, (sentencia Ref. 436-CAL-2017, de fecha once de julio de dos mil dieciocho).

En el caso de autos, la licenciada […], en su escrito de interposición del recurso argumentó, que la Cámara Primera de lo Laboral cometió el error alegado, al omitir valorar la certificación extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, presentada junto con la demanda, por medio de la cual, la recurrente, pretendió establecer que el empleador incumplió el plazo para hacer efectivo el pago de la prestación económica por renuncia voluntaria que alude el art. 8 de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria en adelante (LRPERV).

Sobre este punto, el ad quem, sostuvo lo siguiente: «[...] el agravio relativo al plazo de interposición del aviso de renuncia, a fs. […] de la pieza principal, la abogada Morán en representación de la patronal demandada sostuvo que el trabajador incumplió el plazo de quince días de aviso previo a hacer efectiva la renuncia; por lo cual no se configuraron los supuestos determinados por la ley. Para acreditar dicha situación a fs. […] de la misma pieza, corren agregados copias confrontadas con su original por el Juzgado Primero de lo Laboral de San Salvador del preaviso y renuncia del trabajador presentados a la sociedad demandada, las cuales -según los mismos documentos-fueron recibidos el día catorce de mayo de dos mil dieciocho, y la renuncia surtiría efectos el día veintitrés de mayo del mismo año, por lo que al realizar esta Cámara el computo de los días existentes entre la presentación de documentación y el día de renuncia señalado por el trabajador se advierte un plazo de diez días incumpliendo en consecuencia el Art. 2 inc. 2° de la Ley de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. (...) Es importante señalar que la parte actora no obstante habérsele notificado el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el auto por medio

del cual se tenía por opuesta y alegada la excepción y la agregación de los documentos no realizó ningún acto procesal orientado a desvirtuar los instrumentos supra relacionados a pesar de contar con más de quince días antes del cierre del proceso; y el hecho que el representante legal de la sociedad demandada, manifestara que no ha cancelado la prestación económica de la renuncia del trabajador, no implica la emisión de una condena-de forma automática -, pues debe verificarse que la prueba vertida por la actora haya logrado establecer todos los hechos consignados en su demanda; y habiéndose alegado en la misma que tanto el preaviso como la renuncia habían sido presentados el día siete de mayo de dos mil dieciocho, el trabajador demandante por medio de su Defensor Público, se encontraban en la obligación de acreditar tal situación de conformidad al Art. 7 Inc. 2° CPCM; y dado que en autos tal hecho no fue conocido por ningún medio de prueba es conducente absolver a la sociedad demandada de la pretensión incoada en su contra [...]" (sic).

Debe tenerse en cuenta que el art. 2 LRPERV, en sus incisos primero y segundo: "Para tener derecho a la prestación económica regulada en la presente Ley, será obligación dar un preaviso al patrono, con una antelación de treinta días a la fecha en que se hará efectiva la renuncia, en el caso de directores, gerentes, administradores, jefaturas y trabajadores especializados (...) Las y los trabajadores que no estén contemplados en el inciso anterior, deberán dar el preaviso con una antelación de quince días (...)".

Asimismo, el art. 3 de la citada ley, establece que, para tener el derecho a la prestación económica por renuncia voluntaria, el trabajador tiene la obligación de presentar la renuncia por escrito, y que la misma produce sus efectos, sin necesidad de la aceptación del empleador.

Según esa misma disposición la negativa del patrono a pagar la correspondiente prestación, constituye presunción de despido injusto.

Por su parte, el art. 4 de la ley en referencia, determina que: "(...) En caso que el empleador se negare a recibir la renuncia o entregar la constancia referida, el renunciante acudirá a la sección respectiva del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La sección citará con señalamiento de día y hora al empleador para notificarles la decisión del trabajador de renunciar; de esta diligencia se levantará acta que firmará el trabajador y el empleador, (...) y se tendrá por interpuesta la renuncia a partir de la fecha de la comparecencia del trabajador" (lo resaltado es de esta Sala).

Esta Sala advierte que el fundamento principal de la Cámara, para desestimar la pretensión del trabajador, se basó en el análisis de las copias debidamente confrontadas con su original que presentó la demandada, con los cuales pretendió establecer, que el trabajador incumplió el requisito exigido por el , legislador para tener derecho a la prestación económica regulado en el art. 2 inciso 2° LRPERV; ya que, entre la presentación del pre aviso (catorce de mayo de dos mil dieciocho) y la fecha de la renuncia interpuesta por el trabajador (veintitrés de mayo de dos mil dieciocho) existió un plazo de diez días.

No obstante lo anterior, se advierte que, según demanda de folios […] de la pieza principal, el licenciado […], argumentó, que el trabajador demandante

presentó el preaviso y la renuncia voluntaria a la sociedad demandada, el siete de mayo de dos mil dieciocho; sin embargo, dicha sociedad, no le entregó constancia de que los documentos fueron recibidos; ante tal negativa, el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el trabajador acudió al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a iniciar diligencias de notificación de renuncia, en cumplimiento del art. 4 de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria.

Asimismo, a folios […] de la pieza principal consta que, la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, señaló como fecha de audiencia de notificación de renuncia del trabajador, el veintiocho de mayo de dos *mil* dieciocho.

Dicha audiencia de notificación de renuncia no se realizó, debido a la incomparecencia de la demandada, tal y como consta en el acta de folios […] de la pieza principal; por lo que, el trabajador demandante reiteró su decisión de renunciar voluntariamente a su empleo.

Ante los hechos descritos en los párrafos que preceden, a juicio de esta Sala, la Cámara incurrió en el error alegado, al no incorporar en el análisis de la sentencia, la certificación de las diligencias realizadas por el trabajador demandante ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante la cual pretendió comprobar, que el empleador incumplió la obligación de hacer efectivo el pago de la prestación económica por renuncia voluntaria, en el plazo establecido en el art. 8 inciso tercero de LRPERV. Por lo tanto, la sentencia será casada por el error de hecho en la apreciación de la prueba.

VI. JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

Al proceder la casación de la sentencia recurrida, esta Sala con base al art. 537 del Código Procesal Civil y Mercantil, procederá al pronunciamiento de la que corresponde, el cual se hará con base en las disposiciones consideradas vulneradas y las infracciones planteadas por la apelante en la exposición de agravios, agregados al recurso de apelación ante la Cámara.

Tal pronunciamiento se hace en los términos siguientes:

Se advierte que, la licenciada […], en calidad de apelante, fundamentó su agravio en dos aspectos, el primero, en el hecho de que el a quo no debió desestimar la excepción de terminación de contrato por renuncia del trabajador, en virtud de que esta se alegó el último día del término probatorio.

El segundo punto que planteó es el relativo a que, el trabajador OVRG, no presentó con la debida antelación, el preaviso como requisito para acceder a la prestación económica por renuncia voluntaria, dado que, según la apelante, fue presentado nueve días antes de hacerse efectiva la renuncia, incumpliendo así lo establecido en el art. 2 LRPERV.

Respecto al primer punto de agravio alegado por la recurrente, cabe señalar que, en sentencia con referencia 359-Cal-2019, pronunciada a las diez horas veintisiete minutos del dos de marzo del corriente año, este Tribunal sentó el criterio respecto al momento oportuno de interponer las excepciones, tomando como base el art. 394 del Código de Trabajo, y sostuvo que: “[...] En razón del vacío legal que existe en el Código de Trabajo, en cuanto al momento procesal oportuno para la interposición de todas aquellas excepciones que no se refieran

a la competencia jurisdiccional, es dable afirmar que conforme a lo dispuesto en el art. 602 de dicho cuerpo de ley, debe aplicarse supletoriamente el derecho adjetivo común para determinar cuándo pueden los demandados, interponer las excepciones que no se refieran a la incompetencia de jurisdicción (...) debe tenerse en cuenta que el art. 284 CPCM, en su inciso primero a la letra reza: "En la contestación a la demanda, que se redactará en la forma establecida para ésta, el demandado expondrá las excepciones procesales y demás alegaciones referidas a lo que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo"; y, en su inciso tercero estipula: "En la contestación, en su caso, el demandado podrá negar los hechos aducidos por el demandante, exponiendo los fundamentos de su oposición a las pretensiones del que demanda y alegando las excepciones que considere convenientes" (...) se colige que el Código Procesal Civil y Mercantil, prescribe que las excepciones deberán interponerse en la contestación de la demanda.. Tal y como se expresó con anterioridad, la norma mencionada es de aplicación supletoria en el caso de autos, debido al vacío de ley antes planteado [...]". (sic).

De igual forma en la sentencia supra se estableció: "(...) El proceso está diseñado de tal manera que no haya lugar para que las partes utilicen artimañas para dilatar el proceso o para sorprender a la otra parte con pruebas de último momento: En concordancia con ello la ley establece que las excepciones-salvo la de incompetencia de jurisdicción por razón del territorio-deberán ser alegadas expresamente y cuando, de acuerdo al Código resultare "oportuno". Esta oportunidad no debe ser confundida con la "conveniencia" de la parte (a quien beneficiaria dicha excepción) no es oportunidad para la parte, sino oportunidad en el sentido de que debe ser en el momento procesal que corresponda, congruente con los Principios de Contradicción e Igualdad de armas en el proceso. Los hechos primero se alegan y luego se prueban (...)". Pues bien, el admitir excepciones después de la apertura a pruebas, cuando éstas se hacen sobre la base de la atribución o imputación de hechos constitutivos de faltas que pueden al final - en caso de probarse- eximir a la parte demandada de su responsabilidad frente al trabajador, es violatorio de lo dispuesto en el art. 394 CT (...)"

Tomando en consideración el criterio jurisprudencial citado, esta Sala advierte que, en el caso de autos, específicamente a folios […] de la pieza principal, consta el auto por medio del cual el juicio fue abierto a prueba el *treinta* de agosto de dos mii dieciocho, y que a la demandada se notificó dicho auto, **el diez de septiembre de dos mil dieciocho,** por tanto, el termino probatorio vencía el **veintidós de ese mes y año,** ya que conforme al art. 396 CT, el término legal de prueba es de ocho días hábiles contados a partir de la notificación respectiva.

La excepción de terminación de contrato por renuncia voluntaria del trabajador, fue interpuesta por la demandada el **veintiuno de septiembre de ese año;** bajo el fundamento que el trabajador demandante presentó el preaviso con nueve días de anticipación a la fecha de renuncia, incumpliendo así con los quince días establecidos en la ley para gozar de la prestación económica.

De lo planteado en líneas anteriores se advierte que, la demandada alegó la excepción de terminación de contrato por renuncia voluntaria del trabajador,

un día antes del vencimiento del termino probatorio (folios […] de la pieza principal), sumado al hecho que, la excepción se fundamentó en el incumplimiento de requisitos por parte del trabajador, para optar a la prestación económica por renuncia voluntaria; argumento con el que, la demandada, pretendía eximirse de responsabilidad.

En este sentido, es evidente que la excepción no fue alegada de forma oportuna, tal y como lo prescribe el art. 394 CT en relación al art. 284 CPCM, ya que se han vulnerado los Principios de Contradicción e Igualdad, tal y como se indicó en los párrafos que preceden; por lo tanto, conocer del segundo punto planteado por la licenciada Morán, respecto a que el trabajador no cumplió con el requisito de presentar el preaviso con la debida antelación, para gozar de la prestación económica, a juicio de esta Sala, resulta inoficioso, dado que la misma, tiene relación directa con la prueba que sustentaba la excepción supra, la cual se declarará no ha lugar.

Finalmente queda por establecer, si en el caso de autos se dieron los presupuestos para presumir el despido injusto alegado por el trabajador en la demanda.

Así se advierte que, en la demanda el Defensor Púbico Laboral, manifestó que su representado compareció a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que se le notificara al empleador demandado, la decisión del trabajador de renunciar, en vista de que no le dieron la constancia pertinente; acta que se le hizo saber al empleador el veinte de junio de dos mil dieciocho, en cumplimiento al art. 4 LRPERV; y habiendo transcurrido el plazo que establece el art. 8 de la mencionada ley, sin que el empleador realizara el pago de la respectiva prestación económica, se constituye la presunción legal de despido.

Con la finalidad de acreditar los hechos expuestos supra, el actor presentó certificación extendida por el Ministerio de Trabajo, de las diligencias promovidas en la Dirección General de Trabajo, en las que consta la notificación realizada al empleador, de la decisión del trabajador demandante de renunciar.

La demandada debió cancelar la prestación correspondiente dentro de los quince días posteriores a partir de la notificación de la renuncia interpuesta.

Sin embargo, la negativa de la demandada al pago de la prestación económica correspondiente constituye presunción de despido injusto de conformidad al inciso 2° del art. 3 LRPERV. Dicho extremo procesal es respaldado con la declaración de parte contraria rendida por el representante legal de la demandada, quien al minuto 4:20, al ser cuestionado si le ha sido pagado al trabajador demandante el reclamo correspondiente a la prestación económica, respondió de forma negativa.

La parte demandada, con el fin de desvirtuar las pretensiones del trabajador, opuso y alegó la excepción de falta de requisitos de la renuncia del trabajador, bajo el argumento que el trabajador no presentó el preaviso y la renuncia con la debida antelación, tal y como lo señala el art. 2 LRPRV; sin embargo, cabe

mencionar, que este tribunal ya se pronunció respecto de dicha excepción, en el romano VI párrafo diez de este proveído.

En consecuencia de lo expuesto anteriormente, para esta Sala es procedente condenar a la sociedad Rivas Protección Salvadoreña, Sociedad Anónima de Capital Variable, a pagar al trabajador OVRR, las cantidades que bajo concepto de indemnización por despido injusto y demás prestaciones laborales por despido injusto reclama.

En ese sentido, se deberá cancelar el equivalente al salario básico de treinta días y no de quince, por cada año de servicio y proporcionales por fracciones de año, conforme al art. 58 inciso primero del Código de Trabajo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 220-CAL-2019, fecha de la resolución: 21/07/2020

EXCEPCIONES

MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA LA INTERPOSICIÓN DE TODAS AQUELLAS EXCEPCIONES QUE NO SE REFIERAN A LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL

"Interpretación errónea del art. 394 CT

1. Sobre esta infracción, el impetrante expresó: "[...] el tribunal ad quem ha considerado erróneamente que: "...*no es atendible tampoco que el apelante traiga como agravio la idea que plasmó el a quo en su sentencia, de que las excepciones idealmente deben de alegarse en la contestación de la demanda y de que tal aseveración no es en un sentido "imperativo" sino que "facultativo", puesto que claramente en el presente proceso verificamos que* ***por el tipo de excepciones que deseaba plantear como mecanismo de defensa la parte demandada, no eran del tipo de excepciones que en el ámbito laboral se pueden alegar en el momento procesal que el abogado […], estimara oportuno para él"*** puesto que con ese análisis el Tribunal Ad Quem hace una interpretación errónea y extensiva del artículo 394 C.T. el cual en ningún momento excluye o separa ningún tipo de excepción, debiendo aplicar el principio de ubi lex non distinguit nec nos distinguiré debemus (si la leu no diferencia, tampoco deberíamos diferenciar nosotros) [-] De la lectura de lo resuelto por el Tribunal Ad Quem, no se hace ningún análisis ni fundamentación referentes al tipo de excepción que fue planteada por mi persona y por qué razón **no es del tipo** de excepciones que en el ámbito laboral se pueden alegar en el momento procesal que se estime oportuno ya que como se ha expresado, de la lectura del artículo 394 del Código de Trabajo el cual tiene por título **Oportunidad para interponer otras excepciones,** dice lo siguiente: "Las demás excepciones de cualquier clase podrán oponerse en el momento en que, de acuerdo con este Código, resultare oportuno, en cualquier estado del juicio y en cualquiera de las instancias; y su oposición deberá hacerse en forma expresa", se colige que las demás excepciones son **TODAS,** excepto la excepciones que establece el artículo 393 del código de trabajo "Excepción de incompetencia de jurisdicción", por ser la única que literalmente se manifiesta

deberá oponerse dentro del término comprendido entre la fecha de la citación a conciliación y la fecha de la audiencia conciliatoria. [--]Así las cosas, considero que si el Tribunal Ad Quem hubiese hecho una interpretación literal del artículo 394 del Código de Trabajo, éste hubiera revocado la sentencia venida en apelación y habría declarado ha lugar las excepciones planteadas pues como se ha manifestado ampliamente, el demandante tuvo por lo menos dos días hábiles para ejercer su derecho de defensa pero contrario a lo anterior, voluntariamente optó por desistir de elementos de prueba que fueron ofrecidos por el mismo y los cuales le habrían permitido controvertir las excepciones alegadas y así pido que sea declarado [...]"

2. La Cámara Segunda de lo Laboral, en lo que respecta a las excepciones interpuestas por la parte demandada, sostuvo: "[...] debemos estudiar si las excepciones reguladas en el Art. 50 causales 3ª y 9ª Tr., opuestas por el licenciado […] en sus escritos de Fs. […], fueron oportunas, y logramos concluir que éstas, es decir, la causal 3ª del Art. 50 Tr., fue alegada y opuesta en el **SEXTO DÍA HABIL** del término probatorio[...] y la causal novena del artículo ya citado, fue alegada y opuesta en el **OCTAVO DÍA HABIL** del término probatorio[...] Y según jurisprudencia [...] las excepciones no sólo deben alegarse en forma expresa, sino también de manera **OPORTUNA,** en el momento idóneo para que pueda producir el efecto deseado. Y para este Tribunal, queda claro que el apoderado patronal omitió cumplir con esta formalidad, lo cual no puede ser, porque se contrarían importantes principios constitucionales en el proceso, como son el de defensa y contradicción, ya que dicho profesional, no podía pretender presentar prueba, sin primero haber alegado en tiempo una excepción, para que la parte actora, en este caso en particular, tuviera las oportunidades suficientes para debatir los hechos que se le pretendían atribuir, por lo tanto, no queda otro camino que rechazar todos sus argumentos al respecto, visto que como se ha expuesto, no cumplió con estos parámetros legales para su interposición. De lo anterior, es necesario aclarar, que la prueba de descargo presentada de Fs. […] (prueba documental), la prueba testimonial de Fs. […], y la prueba grafotécnica de Fs. […], no pueden ser analizadas, ni tomadas en cuenta en esta instancia para poder probar sus argumentos, y es que como ya se dijo, la parte demandada, no alegó ni opuso ninguna excepción en la etapa procesal **OPORTUNA** del juicio [...]" (sic).

3. Se advierte que el argumento principal del impugnante radica en afirmar que la Cámara debió analizar las excepciones interpuestas por su parte y la prueba presentada a efecto de comprobarlas, debido a que estima que de acuerdo a lo prescrito en el art. 394 CT, las excepciones, excepto la relativa a la incompetencia jurisdiccional, pueden oponerse en cualquier estado del juicio, sin existir exclusiones.

4. Esta Sala en reiterada jurisprudencia, v.g., la sentencia pronunciada en el proceso con referencia 304-CAL-2018, de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, ha sostenido, que para que exista interpretación errónea de ley, deben darse tres presupuestos: 1) que la norma infringida, haya sido aplicada en la sentencia por el juzgador; 2) que la norma sea aplicable al caso, es decir, que

contemple el supuesto de hecho respectivo; y, 3) que no obstante haber aplicado la norma que correspondía aplicar, le haya dado un sentido o alcance que no es el verdadero.

5. El artículo 394 del Código de Trabajo, norma que de acuerdo al recurrente ha sido interpretada erróneamente, establece: "Las demás excepciones de cualquier clase podrán oponerse en el momento en que, de acuerdo con este Código, resultare oportuno, en cualquier estado del juicio y en cualquiera de las instancias; y su oposición deberá hacerse en forma expresa".

6. En aras de determinar si el tribunal de segunda instancia incurrió en interpretación errónea del art. 394 CT, resulta pertinente analizar, el alcance de la referida disposición, cuando hace alusión al momento que resultare oportuno.

7. Y es que, el artículo citado dispone que las demás excepciones – refiriéndose a aquellas que no se relacionen a la competencia en cuanto al territorio– se interpondrán en el momento que resulte oportuno conforme a lo estipulado en el mismo, sin embargo, en lo sucesivo no detalla cuál será el momento oportuno para hacerlo.

8. Ante tal circunstancia cabe afirmar que existe un vacío en la normativa mencionada, el cual causa confusión a los demandados en cuanto a cuándo pueden alegar los mecanismos de defensa que estimen pertinentes. Así mismo perjudica a los demandantes, quienes no pueden rebatir adecuadamente las excepciones interpuestas por su contraparte; pues la diversidad de criterios existente entre los administradores de justicia de las diferentes instancias, en cuanto al tema, impide que se defiendan de forma eficaz en todos los casos.

9. En ese sentido, con base en el principio de legalidad se vuelve imperioso realizar una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico vigente, para garantizar que los justiciables tengan acceso a un juicio laboral que se encuentre apegado a derecho, y que evolucione conforme a las tendencias modernas, en lo que se refiere al respeto de principios constitucionales, como el de defensa y contradicción que debe imperar en todos los procesos judiciales.

10. Dado que la parte demandante, que por lo general es el trabajador, expone sus pretensiones en la demanda; y su contraparte tiene la oportunidad de considerar los aspectos pertinentes a su defensa desde que es emplazado; de concluirse que la parte demandada puede interponer sus excepciones en cualquier momento del proceso, la parte actora se encontraría en situación de desventaja, ya que ve truncadas sus posibilidades de defenderse, según el momento en el que el demandado decida plantear sus excepciones.

11. En razón del vacío legal que existe en el Código de Trabajo, en cuanto al momento procesal oportuno para la interposición de todas aquellas excepciones que no se refieran a la competencia jurisdiccional, es dable afirmar que conforme a lo dispuesto en el art. 602 de dicho cuerpo de ley, debe aplicarse supletoriamente el derecho adjetivo común para determinar cuándo pueden los demandados, interponer las excepciones que no se refieran a la incompetencia de jurisdicción.

12. En esa línea de pensamiento debe tenerse en cuenta que el art. 284 CPCM, en su inciso primero a la letra reza: "En la contestación a la demanda,

que se redactará en la forma establecida para ésta, el demandado expondrá las excepciones procesales y demás alegaciones referidas a lo que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo"; y, en su inciso tercero estipula: "En la contestación, en su caso, el demandado podrá negar los hechos aducidos por el demandante, exponiendo los fundamentos de su oposición a las pretensiones del que demanda y alegando las excepciones que considere convenientes".

13. De las normas citadas en el párrafo anterior, se colige que el Código Procesal Civil y Mercantil, prescribe que las excepciones deberán interponerse en la contestación de la demanda. Tal como se expresó con (anterioridad, la norma mencionada es de aplicación supletoria en el caso de autos, debido al vacío de ley antes planteado.

14. Cabe considerar, que la aplicación supletoria del art. 284 CPCM, en casos de materia laboral, responde, además a los razonamientos expuestos por esta Sala en su sentencia de referencia 225-C-2007, criterio retomado además en las sentencias 334-CAL-2012, de las once horas cincuenta y tres minutos del nueve de marzo de dos mil dieciséis y 268-CAL-2019, de las once horas cincuenta minutos del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Puesto que, aunque en la misma no se abordó el problema jurídico desde la perspectiva planteada en esta resolución, sí se hizo referencia a los principios y derechos de la parte demandante, que se vulnerarían si se permite la oposición de excepciones, luego de que el juicio se haya abierto a pruebas.

15. En la sentencia 225-C-2007 mencionada anteriormente, en lo pertinente se expuso: "El proceso está diseñado de tal manera que no haya lugar para que las partes utilicen artimañas para dilatar el proceso o para sorprender a la otra parte con pruebas de último momento. En concordancia con ello la ley establece que las excepciones –salvo la de incompetencia de jurisdicción por razón del territorio– deberán ser alegados expresamente y cuando, de acuerdo al Código resultare "oportuno". Esta "oportunidad" no debe ser confundida con la "conveniencia" de la parte a quien (I beneficiaría dicha excepción, no es oportunidad para la parte, sino oportunidad en el sentido de que debe ser en el momento procesal que corresponda, congruente con los Principios de Contradicción e Igualdad de armas en el proceso. Los hechos primero se alegan y luego se prueban [...] Pues bien, el admitir excepciones después de la apertura a pruebas, cuando éstas se hacen sobre la base de atribución o imputación de hechos constitutivos de faltas que pueden al final –en caso de probarse- eximir a la parte demandada de su responsabilidad frente al trabajador, es violatorio de lo dispuesto en el Art. 394 C. 71 La referida disposición se refiere, como ya se dijo, al "momento procesal oportuno", no al momento que convenga a las partes como en este caso y otros se ha hecho en una errónea interpretación de lo que ésta preceptúa. La "oportunidad" a la que dicha norma se refiere, debe entenderse en los términos señalados; es decir, antes de la apertura a pruebas, a fin de darle la oportunidad a la contraparte, de controvertir los hechos que

se le atribuyen y preparar su defensa conforme a ellos [---] El juzgador debe estar atento a las actuaciones “aparentemente legales” de las que hacen uso algunos litigantes, como en el presente caso en el cual, la parte demandada, “al parecer”, esperó hasta el último momento para alegar y oponer excepciones, las cuales obviamente sería imposible rebatir para la parte actora, como ya se señaló. El demandado haciendo uso “supuestamente” en su entender y al parecer en el de los señores Jueces que intervinieron en el proceso, de la posibilidad de alegar las excepciones en el “momento oportuno”, oportuno para quién?, evidentemente para los intereses de la parte demandada, tergiversa el contenido de la norma, pues al hacerlo así (en el sexto día del período probatorio) la parte actora no tendría ninguna posibilidad para presentar prueba en defensa de los hechos que se le estaban atribuyendo, conducta totalmente contraria a los Principios de Lealtad Procesal, Buena Fe y de Contradicción e Igualdad de armas, conforme a los cuales éstas deben conocer con antelación a la apertura a pruebas, las posiciones que una tiene frente a la otra, para el efecto de que puedan preparar su defensa y controvertir los hechos que se atribuyen mutuamente. Los Principios mencionados exigen que las partes planteen sus defensas en forma clara, precisa y oportuna, no les es permitido guardarse pruebas o defensas de último momento, que tiendan a sorprender a la contraria. Ante tales actuaciones se vuelve de imperiosa necesidad que los Jueces cumplan con su rol de velar por las garantías del debido proceso, dándole plena vigencia a los principios que de siempre han inspirado al proceso laboral y que tienen la función de orientar la interpretación y la aplicación de las normas procesales laborales dirigidos todos a un mismo fin, la protección de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en sendos instrumentos internacionales -Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 8; Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 10; y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 14, para mencionar algunos-, como es el derecho de defensa y de igualdad de armas, bajo los cuales no es permitido a ninguna de las partes, valerse de este tipo de tácticas poniendo en desventaja a la contraria [...]” (sic).

16. En tal sentido, debe concluirse que, en el caso de autos, la Cámara no interpretó erróneamente la disposición que el recurrente cita como infringida, pues tal interpretación responde a la finalidad del derecho laboral de colocar a ambas partes en posiciones equiparables, desde las cuales puedan controvertir los hechos que su contraparte pretenda dejar por sentados en el proceso. Todo ello en virtud de los principios de defensa y contradicción, igualdad procesal y buena fe.

17. Debido a las razones expuestas es dable afirmar, que el ad quem no ha incurrido en la interpretación errónea del art. 394 CT, por lo tanto, se declarará no haber lugar a casar la sentencia en virtud de este submotivo”.

Sala de lo Civil, número de referencia: 359-CAL-2019, fecha de la resolución: 02/03/2020

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LEY

EL VICIO ALEGADO NO TIENE LUGAR CUANDO EL AD QUEM NO APLICÓ LA NORMA QUE EL IMPETRANTE CITÓ COMO INFRINGIDA

"Interpretación errónea del art. 2 Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria (LRPERV)

1. Esta Sala, en reiterada jurisprudencia, v.g., sentencia pronunciada en el proceso de referencia 304-CAL-2018, de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, ha sostenido, que para que exista interpretación errónea de ley, deben darse tres presupuestos: 1)que la norma infringida, haya sido aplicada en la sentencia por el juzgador; 2) que la norma sea aplicable al caso, es decir, que contemple el supuesto de hecho respectivo; y, 3) que no obstante haber aplicado la norma que correspondía aplicar, le haya dado un sentido o alcance que no es el que corresponde.

2. Sobre la infracción alegada, el impetrante, en resumen, expresó que, el tribunal de segunda instancia interpretó de forma abusiva la norma, pues exigió más requisitos que los que contempla el tenor del art. 2 LRPERV, cuando estimó en su fallo que, ni siquiera se probó la relación laboral, de modo que no era dable condenar a la sociedad demandada al pago de la prestación económica por la renuncia voluntaria. Mientras que, de acuerdo al recurrente, dicho cuerpo de ley únicamente impone al trabajador la obligación de presentar el preaviso y la renuncia, pero no exige que se pruebe la relación de trabajo, ya que, es inherente al reclamo judicial, de modo que se asume; más aún, considerando que su contraparte no controvirtió que su mandante haya laborado para y bajo sus órdenes, sino que, en su contestación, solamente dijo, que la fecha de constitución de la sociedad demandada difiere en cuarenta y tres días, respecto de la fecha de ingreso de su representada a laborar para la misma.

3. La Cámara Primera de lo Laboral, circunscribió los fundamentos de derecho de su sentencia, a los dos puntos de agravio planteados por el licenciado […], en su recurso de apelación, el primero referente a que, el juez a quo, tuvo por evacuada la declaración de parte contraria de la señora […], por considerar que dicha señora tenía justo impedimento para no rendirla y no le corría el término, cuando en realidad dicha diligencia era viable y seguía siendo realizable, de tal suerte, que a su juicio, el proceso adolecía de nulidad; y, el segundo relativo a que, el adeudo de los salarios por comisión, reclamados en la demanda, fueron debidamente comprobados mediante la declaración de propia parte realizada por la trabajadora.

4. Con relación a este segundo punto, el ad quem, en su sentencia razonó así: "En ese sentido, no habiendo prueba que dé certeza de la vinculación laboral que existió entre las partes, ni mucho menos prueba de las ventas efectuadas por la trabajadora demandante que dieron lugar a la pretensión de salarios adeudados en concepto de comisión, la sentencia venida en apelación deberá confirmarse".

5. De la lectura de la sentencia dictada por la Cámara Primera de lo Laboral, se colige que, dicho tribunal no expresó ningún argumento relativo a la prestación económica por renuncia voluntaria, y mucho menos, se advierte la aplicación del art. 2 LRPERV, citado como norma infringida por el recurrente. No debe perderse de vista que los argumentos de la recurrente se refirieron a dos puntos, el primero con relación a la valoración, por parte del a quo, del medio de prueba consistente en declaración de parte contraria; y, el segundo, relativo a que con la declaración de propia parte, rendida por la trabajadora demandante, por sí sola, sin ser robustecida y fortalecida por otros medios de prueba, no se comprobó el adeudo de la cantidad reclamada por la actora, en concepto de comisiones.

6. Por ende, debido a que, del análisis expuesto por el ad quem, en su sentencia, se advierte que no aplicó la norma que el impetrante citó como infringida; no siendo por ello posible, que dicho tribunal haya incurrido en el vicio invocado, pues la interpretación errónea de ley presupone, indispensablemente, la aplicación de la norma que se alega como infringida, y que además, se le dé un sentido restringido, amplio, o simplemente alterando los efectos jurídicos previamente establecidos por el legislador.

7. En tal sentido, la Cámara sentenciadora no incurrió en la interpretación errónea del art. 2 LRPERV, alegada por el licenciado […]. En consecuencia, se declarará no haber lugar a casar la sentencia en virtud de este submotivo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 66-CAL-2020, fecha de la resolución: 22/10/2020

PRESUNCIÓN DE DESPIDO

EL AD QUEM NO COMETE LA INFRACCIÓN ALEGADA AL EXISTIR PRUEBA EN CONTRARIO, ES DECIR, LA PRUEBA TESTIMONIAL DE DESCARGO, LO CUAL ES UNA LIMITANTE PARA APLICAR LA PRERROGATIVA AL TRABAJADOR

"Violación de ley, art. 414 del Código de Trabajo en adelante CT

2.1 Con relación al vicio alegado la recurrente, al desarrollar el concepto de la infracción, expresó lo siguiente: "(...) El vicio alegado se evidencia En el Numeral 4.6 de los fundamentos de derecho de tu sentencia cuando expresaste "Ahora bien, de la lectura de la demanda, así como les escrito de fs. […]de la pieza principal, se solicitó la declaración de parte contraria, suscrito por la Defensa Publica Laboral, se advierte que los hechos y la pregunta respecto al despido ejecutado por el señor UM, en calidad de Jefe de Recursos Humanos, de conformidad al Art. 347 CPCM., no es un hecho personal del declarante; sin embargo el mismo se presume por haber cumplido con los requisitos que señala el Art. 414 del Código de Trabajo, entre ellos: a) la demanda se presentó dentro de los quince días hábiles al hecho que la motivo, según se aprecia en la demanda y la boleta de presentación de la misma de Fs. […] (veintidós de marzo de dos mil diecinueve- despido- veintisiete de marzo de dos mil diecinueve); b) la parte demandada no ofreció ningún tipo de arreglo conciliatorio tal como consta en el acta de fs.

[…] de la pieza principal; c) se probó al menos la relación laboral que vinculo a las partes; y d) se probó la representación patronal atribuida en la demanda al señor UM, en los términos expuestos en el párrafo 4 de estos fundamentos"“ (...) *Ahora bien para* que la *presunción opere, jurisprudencialmente la Honorable Sala de Lo Civil* de *La Corte Suprema de Justicia ha establecido* un enlace *del artículo 55 del Código de Trabajo, siendo necesaria para la operatividad de la misma, que se pruebe la calidad de representante patronal de quien efectuó el despido; este extremo quedo plenamente probado pues tal hecho se le atribuye a un representante patronal* de la *sociedad demandada es decir el señor UM. (...)* Es decir y acertadamente al no concurrir la representante legal a rendir la declaración de parte no puede tenerse por cierto el despido por no ser un hecho cometido por el obligado a declarar, pero si debe tenerse por cierta **la representación patronal** que es algo diferente al despido mismo, y que en el caso de marras es atribuida a UM, como Jefe de Recursos Humanos de la sociedad impetrada y en ese orden de idea se complementaba el requisito de operatividad de la presunción del artículo 414 C.T. en relación al art. 55 del mismo cuerpo normativo, aquí se evidencia la otra violación de ley que habéis cometido pues el Art. 3 del Código de trabajo dice: "Se presume de derecho que son representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores: los directores, gerentes, administradores, caporales y, en general, las personas que ejercen funciones de dirección o de administración en la empresa, establecimiento o centro de trabajo. Los representantes patronales en sus relaciones con el patrono, están ligados por un contrato de trabajo"-, es decir que efectivamente los actos cometidos por el Jefe de Recursos Humanos, comprometían a la sociedad por tener ese carácter de representante patronal, sin embargo tu Cámara, no obstante lo anterior dejaste de aplicar la presunción del despido y ello fue evidente cuando decidiste absolver a la impetrada del pago de la indemnización revocando el fallo, si hubieses aplicado la presunción tu sentencia hubiese sido confirmando la condena impuesta en primera instancia. (...) De haberse valorado estas circunstancias tú sentencia hubiese sido distinta y por lógica jurídica hubieses aplicado el art. 414 del C.T. en relación al 55 C.T. y el art. 3 C.T. con base a lo dispuesto en el art. 347 Inc 2° del CPCM. Por haberse probado la representación patronal atribuida en la demanda conforme a los efectos de la incomparecencia del representante legal a rendir la declaración de parte contraria. (...)" (sic).

2.2 Con relación al vicio invocado, la Cámara, en las consideraciones de la sentencia expresó lo siguiente: "(...) 4. Para esta Cámara con la incomparecencia de la Representante Legal de la sociedad demandada, señora MLOB, a la declaración de parte contraria, según acta que corre agregada a fs, […] de la pieza principal, únicamente se ha probado la representación patronal atribuida en la demanda al señor UM, en su calidad de JEFE DE RECURSOS HUMANOS, más no el despido por no ser un hecho personal de la declarante, por las razones siguientes: 4.1. En lo concerniente a los efectos del Art. 347 del Código Procesal Civil y Mercantil, se aclara que el medio de prueba denominado declaración de parte contraria, es un elemento probatorio regulado en el cuerpo legal antes citado, utilizado por las partes, que por sí mismo puede generar prueba de

la pretensión o de la excepción, no requiere de otro medio para que el juzgador tenga certeza de los hechos que se pretende establecer con el mismo. [...] 4.3. Esta Cámara en abundante jurisprudencia, ha explicado los efectos del Art. 347 Código Procesal Civil y Mercantil, e incluso ha reforzado la línea argumentativa con sentencias de la Sala de lo Constitucional y Sala de lo Civil, ambas arriban a la conclusión, que -tal como lo señala la norma- únicamente puede tenerse por ciertos aquellos aspectos o fácticos que sean de índole personal del declarante. [...] 4.6. Ahora bien, de la lectura de la demanda, así como del escrito de fs. […] de la pieza principal, se solicitó la declaración de parte contraria, suscrito por la Defensa Pública Laboral, se advierte que los hechos y la pregunta respecto al despido ejecutado por el señor UM, en calidad de Jefe de Recursos Humanos, de conformidad al Art. 347 CPCM., no es un hecho personal del declarante; sin embargo el mismo se presume por haberse cumplido con los requisitos que señala el Art. 414 del Código de Trabajo, entre ellos: a) la demanda se presentó dentro de los quince días hábiles al hecho que la motivó, según se aprecia de la demanda y la boleta de presentación de la misma de fs. […] (veintidós de marzo de dos mil diecinueve -despido- veintisiete del mes y año citado); b) la parte demandada no ofreció ninguna tipo de arreglo conciliatorio tal como consta en el acta de fs.[…] de la pieza principal, c) se probó al menos la relación laboral que vinculó a las partes; y, d) se probó la representación patronal atribuida en la demanda al señor UM, en los términos expuestos en el párrafo 4 de estos fundamentos. Habiendo la parte demandada alegado excepciones para justificar el despido, es procedente entrar a su análisis. [...] 7. Al observar y escucharlas de forma minuciosa las declaraciones de los testigos de descargo señores SCL y NMC, incorporadas en formato digital de audio y video (DVD) de fs. […] de la pieza principal, esta Cámara advierte que éstos basan sus dichos en que el trabajador demandante no se presentó a laborar los días once, dieciséis y veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, al valorar las declaraciones conforme a las reglas de la sana crítica, al testigo señor CL le consta que el trabajador no se presentó a trabajar porque él es supervisor del área de trabajo y al pasar la revisión de inicio de jornada no lo encontró en su puesto de trabajo, tuvo que utilizar otro recurso para cubrir el puesto del trabajador, sin que éste haya presentado justificación, siendo el testigo el encargado de tramitar los permisos. Con respecto a la declaración del testigo MC, quien tiene el cargo de Coordinador de Producción, también afirma que el trabajador demandante faltó a sus labores en los días antes relacionados, sin justificación alguna, lo que le consta porque en el proceso de producción se les asigna un puesto de trabajo y cada quien ejerce esa función, vieron un cuello de botella donde se pararon los proceso porque hacía falta el puesto del trabajador, sin solicitar permiso alguno o que haya justificado sus inasistencia. No se advierte que la Defensa Pública haya controvertido las excepciones opuestas y alegadas por la parte demandada, ni cuestionado las declaraciones de los testigos, al contrario con las intervenciones realizadas aclaró los cargos de los testigos y las fechas en que el trabajador incumplió el deber de estar a disposición de su

empleador en él tiempo convenido, por lo que las declaraciones de los testigos de descargo previamente analizadas generen suficiente convicción respecto a los hechos que narran al constarles de forma directa los mismos y dar las razones suficientes de como los obtuvieron; consecuentemente los agravios planteados por el recurrente tienen asidero legal, siendo procedente revocar la sentencia venida en apelación en lo concerniente a la pretensión de indemnización por despido injusto, vacación, aguinaldo proporcional y los salarios caídos. [...]" (sic).

2.3 En el caso de autos, la recurrente argumenta que, en el proceso operaba la presunción de despido del art. 414 CT, por haberse cumplido los presupuestos para ello, sin embargo la Cámara no la aplicó.

2.4 Este tribunal al verificar la sentencia del ad quem advierte, que en el párrafo 4.6 de la misma, relacionó que se cumplían los requisitos que señala el art. 414 CT, entre ellos: que la demanda se presentó dentro de los quince días hábiles al hecho que la motivó, según la demanda y la boleta de presentación de la misma, la parte demandada no ofreció ningún tipo de arreglo conciliatorio tal como consta en el acta de fs. […] de la pieza principal, que se probó la relación laboral que vinculó a las partes y también la representación patronal atribuida en la demanda al señor UM.

2.5 No obstante, a continuación efectuó el análisis de las excepciones alegadas para justificar el despido; y de ello concluyó que los agravios planteados por el recurrente -apelante- tenían asidero legal, por lo que procedió a revocar la sentencia de primera instancia en lo concerniente a la pretensión de indemnización por despido injusto, vacación, aguinaldo proporcional y salarios caídos.

2.6 La anterior decisión en virtud que la prueba testimonial de descargo le generó suficiente convicción respecto a los hechos narrados al constarles de forma directa los mismos y haber dado razones suficientes de cómo los obtuvieron; en consecuencia estimó las excepciones contenidas en las causales 12.ª y 20.ª del art. 50 CT, en relación a la obligación 3.° del art. 31 CT, alegadas y opuestas por el apoderado de la sociedad demandada, y la absolvió del reclamo de indemnización por despido injusto, vacación, aguinaldo proporcional y salarios caídos.

2.7 A juicio de este tribunal, claramente puede advertirse, de la sentencia de la Cámara, la razón por la cual no se aplicó la presunción de despido contenida en el art. 414 CT, al existir prueba en contrario, es decir, la prueba testimonial de descargo, lo cual es una limitante para aplicar la prerrogativa a los trabajadores, así lo determina el inciso primero de la referida disposición legal.

2.8 Por consiguiente, este tribunal concluye, que el ad quem no cometió la infracción señalada por la recurrente, es decir violación del art. **414** CT, al haber revocado la sentencia de primera instancia dado que estimó las excepciones alegadas por el apoderado de la sociedad demandada; por tanto, la Cámara justificó debidamente su sentencia y procede declarar no ha lugar a casar la sentencia de mérito".

Sala de lo Civil, número de referencia: 396-CAL-2019, fecha de la resolución: 23/03/2020

NO OPERA CUANDO NO SE ACEPTA EL REINSTALO POR PARTE DEL TRABAJADOR O SU REPRESENTANTE

"Violación de ley, respecto del art. 414 CT.

2.1. Se procede al análisis del motivo de casación admitido a efecto de establecer si existe el vicio denunciado.

2.2. Esta Sala, en reiterada jurisprudencia -sentencia con referencia 238-CAL-2018, de fecha 12-12-2018- entre otras, ha determinado, que existe violación de ley, cuando se elige para la solución del caso concreto, determinada norma y se deja de aplicar la que a derecho corresponde, produciéndose en este caso el vicio denunciado, es decir, que el vicio consiste en la inaplicación de la norma jurídica que resolvía el caso sometido a juzgamiento.

2.3. La recurrente en el concepto de la infracción, particularmente reclamó lo siguiente: "(...) Habéis cometido violación de ley del artículo 414 C.T., al no aplicarlo al caso concreto por tratarse de una norma vigente que si era aplicable y el cual te establecía los presupuestos legales que únicamente debía reunir mi representada para gozar de la presunción de despido; y los cuales ya se demostró que estaban reunidos en el presente juicio. El legislador únicamente señala para que opere la presunción de despido, los presupuestos legales que ya fueron señalados en párrafos anteriores, y de los cuales goza el demandante. Sin embargo decidiste no aplicar la norma por considerar que el trabajador no acepto el reinstalo ofrecido tal como lo establece la ley, no obstante el reinstalo se encontraba condicionado, carecía de seriedad y buena fe, y dijiste en tu sentencia en el numeral siete de los considerando que a pesar que el ofrecimiento no fue aceptado por la parte actora por no acceder la apoderada del patrono a pagar la vacación completa, prestación que es independiente a la indemnización por despido, por lo que el trabajador tuvo la oportunidad de aceptar el reinstalo y continuar con el reclamo de la prestación en comento, sin embargo como ya indique el reinstalo no es cualquier ofrecimiento el reinstalo debe cumplir con algunas expectativas es decir una propuesta seria y de buena fe, en los mismos términos y condiciones, o mejores que no afecten los derechos del trabajador, y reafirmasteis la violación de ley en el numeral diez de tu sentencia(...)"(sic).

2.4. Respecto al punto discutido, la Cámara sentenciadora, expresó: "(...) 7. Del ofrecimiento de reinstalo supra relacionado, debemos decir que efectivamente existió una condición tal como menciona la recurrente, refiriéndose a que se le solicitó al trabajador que manejara como la ley establece, sin embargo, dicha petición no se encuentra fuera del marco legal a fin de considerar el menoscabo a los derechos planteados por la apelante, pues no se le estaba pidiendo más que respetar la ley. A pesar de lo anterior, el ofrecimiento no fue aceptado por la parte actora, por no acceder la apoderada del patrono a cancelar la prestación de la vacación completa, prestación que debemos decir, es independiente a la indemnización por despido, por lo que si la parte patronal no accedía a dicho pago, el trabajador tuvo la posibilidad de aceptar el reinstalo y continuar el proce-

so respecto a la prestación de vacación completa, entendiéndose por tanto que el trabajador no tuvo el ánimo de aceptar dicho ofrecimiento.

8. Siguiendo con este orden de ideas, es importante determinar que la figura del reinstalo, la encontramos regulada en el Art. 414 C. Tr., y consiste en la propuesta que realiza el empleador demandado al trabajador en un juicio laboral por despido injustificado proponiéndole la reincorporación a sus labores. Pero la anterior disposición legal no supone cualquier ofrecimiento, pues la oferta debe cumplir algunas expectativas que la califique como una propuesta sería y de buena fe. Sobre este último elemento, diremos que el ofrecimiento del reinstalo se realiza con buena fe cuando se hace en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñándose el trabajador, o incluso mejores, siempre y cuando éstos nuevos términos o condiciones no impliquen afectación a los derechos del trabajador y se encuentren regulados por la Constitución, leyes o contratos individuales o colectivos de trabajo.

9. Analizado lo anterior, se determina que la presunción del artículo en estudio es una de las garantías que el legislador regula con el objetivo de equilibrar e igualar las condiciones procesales del trabajador y del empleador. La inasistencia del empleador, su desinterés por conciliar, y el ofrecimiento que carezca de seriedad o equidad son causales que operan a favor del trabajador, salvo prueba en contrario, para presumir ciertas las acciones que se le imputan en la demanda. Sin embargo, el empleador tiene la oportunidad procesal de sortear dicha presunción presentando pruebas en contrario que demuestren que no son ciertas las acciones que se le imputan; y también, en la audiencia de conciliación tiene la oportunidad de que la presunción no opere si el trabajador no se presenta a la audiencia, rechace el ofrecimiento de reinstalo del patrono, o no acepte la medida que proponga el juez y que comparta el empleador. Así lo establece el inciso final del art. 414 C.T.-

En el caso sub judice, del análisis del acta conciliatoria de fs. […], a criterio de los suscritos Magistrados, el reinstalo ofrecido por la Licenciada […], en su calidad de Apoderada General Judicial con Cláusula Especial del demandado señor JFRH, quien la facultó para: "(...) transar, conciliar, desistir, allanarse y las actuaciones que comporten la finalización anticipada del proceso según consta en el Testimonio de Escritura Pública que corre agregado de fs. […]; es una medida de arreglo serio, pues se realizó en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñándose el trabajador, se estableció el día, hora y la persona encargada de ejecutar el reinstalo, el cual no fue aceptado por el trabajador GAMR, quien no obstante habérsele explicado las consecuencias de no aceptar dicha medida, insistió en no aceptarla, según se constata en el acta citada.

10.1. Así mismo, es de aclarar que tal como lo sostiene la recurrente, la Apoderada patronal en el escrito de fs. […] de la pieza principal, reconoció la relación laboral qué vínculo a las partes contendientes desde el veinte de agosto de dos mil diecisiete al veintiséis de julio de dos mil dieciocho, argumentando que anteriormente el actor prestaba servicios para el señor POT, persona diferente al demandado, dichos extremos están sujetos a prueba, es decir que deben ser acreditados dentro del proceso, en ese contexto su

dicho no le resta seriedad, ni credibilidad al reinstalo ofrecido en la audiencia conciliatoria (...)" (sic).

2.5. De la lectura de la sentencia y del libelo del recurso, se colige, que la Cámara sentenciadora no aplicó la presunción de despido contenida en el inciso 2° del art. 414 CT.

2.6. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Cámara adoptó dicha decisión, debido a que, al analizar los presupuestos legales, establecidos en el precepto señalado como infringido, para la aplicación de la presunción de despido, dicho tribunal concluyó que esta no era aplicable, por el hecho que el trabajador demandante no aceptó el reinstalo ofrecido por la apoderada del demandado, propuesta que, a criterio del tribunal relacionado, fue una propuesta seria; pues se realizó en los mismos términos, condiciones y estableciendo las condiciones en que se verificaría la readmisión en el empleo.

2.7. La Cámara sentenciadora al fundamentar su decisión, claramente señala que la condición solicitada al demandante para proceder al reinstalo, relativa a que condujera el vehículo propiedad del demandado con respeto a las leyes de tránsito; no era una condición ajena al desempeño de su trabajo; y que además, se trata de una exigencia impuesta por la ley.

Por tanto, la condición invocada por el patrono para el reinstalo, no justifica el rechazo manifestado, por el señor GAMR.

Por otra parte, el ad quem acertadamente señaló que el reclamo hecho en la demanda del pago de vacación completa del período comprendido del once de marzo de dos mil diecisiete al diez de marzo de dos mil dieciocho, era una pretensión independiente a la indemnización por despido injusto, que era por la que procedía aceptar el reinstalo; debiendo continuar el proceso en lo concerniente a la otra pretensión.

También esta Sala, no pasa por inadvertido que la recurrente atribuyó falta de seriedad y buena fe de parte de la apoderada del demandado al ofrecerle el reinstalo a su representado; sin embargo, dichas circunstancias no constituyen razones suficientes para deslegitimar dicho ofrecimiento; pues si el trabajador lo hubiere aceptado y el mismo no se hubiere cumplido por parte del empleador, habría operado la presunción de despido, establecida en el art, 414 CT; por lo que el ofrecimiento del reinstalo, habría producido efectos.

De acuerdo a las consideraciones anteriores y ante el evidente rechazo al reinstalo sin causa legal por parte del demandante, la Cámara no estaba obligada a aplicar la presunción relacionada, establecida en el precepto señalado como infringido.

2.8. En este sentido, es evidente que la Cámara sentenciadora actuó legalmente al no aplicar la presunción de despido establecida en el precepto señalado como infringido, ya que tomó tal decisión, por falta de concurrencia de presupuestos legales; y no por error u olvido, pues el trabajador no aceptó el reinstalo ofrecido por el demandado por medio de su apoderada, licenciada […], lo cual consta a folio […]; circunstancia que limitó la aplicación de la presunción relacionada.

2.9. En consecuencia, no existe lugar a dudas que el ad quem no cometió la violación de ley atribuida, pues legalmente no debía aplicar dicha presunción por

las razones relacionadas anteriormente; por tanto, es procedente declarar no ha lugar a casar la sentencia controvertida".
Sala de lo Civil, número de referencia: 327-CAL-2019, fecha de la resolución: 13/01/2020

PRESUNCIONES

IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LA PRESUNCIÓN DEL ART. 414 CT, POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

"MOTIVO GENÉRICO DE INFRACCIÓN DE LEY POR EL SUBMOTIVO DE VIOLACION DE LEY DEL ART. 414 CT

En cuanto al vicio alegado, la recurrente fundamentalmente expuso, que la Cámara no tuvo por comprobado el despido del que fue objeto su representado, a pesar de haberse establecido en el juicio, la relación laboral entre las partes y haber aceptado el representante legal de la demandada, que el representante patronal EG, laboró para la referida sociedad durante todo el tiempo en que el demandante fue despedido.

Con respecto a la no aplicación de la presunción contenida en el art. 414 del Código de Trabajo, el ad quem estableció en su sentencia: "[...] esta Cámara centra su atención en la presunción contenida en el artículo 414 del Código de Trabajo y la calidad de representante patronal que en la demanda se le atribuye al señor EG, como Jefe de Seguridad y supuesto ejecutor del despido y concluye que dicha presunción ha sido aplicada indebidamente por la Jueza de la causa, puesto que independientemente que los demás presupuestos de operatividad de esa presunción se hubieran cumplido, es de advertir, como se agravia la recurrente, que la representación patronal no se ha logrado acreditar por ningún medio probatorio. En efecto, véase que el único esfuerzo que hizo el actor para establecer dicha representación patronal, fue la declaración de parte contraria que el representante legal de la sociedad rindió, según acta y DVD de folios [...], sin embargo al examinar detenidamente la referida prueba, se constata que el representante legal fue categórico no sólo al negar el despido, sino también el cargo del supuesto representante patronal, es decir, que si bien es cierto reconoció que esta persona (EG) trabaja para su empresa, él no labora como Jefe de Seguridad. En este sentido, el ad quem no encuentra méritos en la prueba de cargo, discrepando totalmente con las afirmaciones de la a quo en su sentencia, quien sin fundamentación alguna tiene por probada la representación patronal por el sólo hecho que esa persona laboraba también para la demandada, sin que ni siquiera se hubiera acreditado su cargo (...) En resumen, como la representación patronal que se cita en la demanda, no se ha podido probar, tampoco puede aplicarse la presunción del artículo 414 del Código de Trabajo, ya que el cargo de la persona que se dice haber ejecutado el supuesto despido, según los términos de la demanda, no se acreditó [...]" (sic).

Cabe señalar que la violación de ley se configura cuando se omite aplicar la norma jurídica que debió ser aplicada. Es una infracción que no debe confundirse con cualquier preterición u omisión de normas jurídicas resultantes de una causa distinta de la falsa elección realizada; es decir, que la violación de ley constituye un vicio cometido sobre la norma objetivamente considerada, y no puede versar sobre la valoración que debió concederse a determinado medio probatorio. (auto con referencia 26-CAL-2020 3 de febrero de 2020).

El art. 414, disposición señalada como vulnerada, en lo pertinente establece: "(...) Si el patrono fuere el demandado y no concurriere a la audiencia conciliatoria sin justa causa o concurriendo manifestare que no está dispuesto a conciliar, se presumirán ciertas, salvo pruebas en contrario, las acciones u omisiones que se le imputen en la demanda. Se considerará que el patrono no está dispuesto a conciliar, cuando su propuesta de arreglo careciere de seriedad o equidad, lo cual el juez apreciará prudencialmente. ---- En los juicios de reclamo de indemnización por despido de hecho, también tendrá lugar la presunción a que se refiere el inciso anterior cuando, concurriendo el patrono a la audiencia conciliatoria, se limitare a negar el despido o no se aviniere al reinstalo que el trabajador le solicite o que, con anuencia de éste, le proponga el juez. (...) Para que tenga lugar lo dispuesto en los incisos primero y segundo de este artículo, será necesario que la demanda se presente dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que ocurrieron los hechos que la hubieren motivado y que en autos llegue a establecerse, por lo menos, la relación de trabajo (...)" (sic).

5. De igual forma, y en consideración de la integración normativa que reviste al Código de Trabajo y de manera general al derecho laboral, y para mejor proveer en el sublite, se debe citar lo consignado en el art. 55 CT: (...) El contrato de trabajo termina por despido de hecho, salvo los casos que resulten exceptuados por este Código. ---- El despido que fuere comunicado al trabajador por persona distinta del patrono o de sus representantes patronales, no produce el efecto de dar por terminado el contrato de trabajo, salvo que dicha comunicación fuese por escrito y firmada por el patrono o alguno de dichos representantes (...)" (sic).

En cuanto a la presunción establecida en el art. 414 CT, se debe tener en cuenta, que para que el juzgador la aplique a favor del trabajador, deben concurrir los requisitos siguientes: que la demanda haya sido presentada dentro de los quince días hábiles siguientes de acontecido el hecho que la motivo; que no se haya logrado la finalidad de la audiencia conciliatoria, ya sea por la no concurrencia injustificada del empleador demandado o porque sus propuestas de arreglo carecieren de seriedad o equidad, que se logre establecer en autos la relación de trabajo y que se compruebe la calidad de representante patronal de la persona que realizó el despido.

En ese contexto, esta Sala en sentencia de las nueve horas treinta y tres minutos del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la Casación con referencia 46-CAL-2018, estableció lo siguiente: "[...] Ahora bien, de las líneas que preceden, se establecieron los presupuestos del art. 414 del Código de

Trabajo, referentes a la relación laboral, el horario, el salario y subordinación del trabajador demandante con la demandada; así mismo, el Representante Legal de la demanda no se presentó a la audiencia conciliatoria; sin embargo, es de indicar que, por integración de las normas, uno de los presupuestos de operatividad para que tenga efectos la presunción del despido conforme a dicha norma, es que debe constar en el proceso, prueba que acredite la calidad de la persona a quien se le atribuye el despido, requisito sine qua non, para que éste produzca sus efectos jurídicos, pues resultaría ilógico que se presumiera un despido, que no podría serlo, por haberlo realizado una persona distinta a las que enuncia el inciso segundo del art. 55 del Código de Trabajo [...]"(sic).

8. Ahora bien, sobre la situación planteada por la licenciada [...] y lo expuesto en la sentencia impugnada, se advierte que para el ad quem, la presunción establecida en el art. 414 CT fue aplicada indebidamente por la a quo, puesto que independientemente se hubieran cumplido los demás presupuestos de operatividad de esa presunción, resaltó, que tal como lo expuso la apelante, la representación patronal no se logró acreditar por ningún medio probatorio. En consideración de ese aspecto, la Cámara no realizó en su sentencia, una valoración para determinar si se cumplía con los requisitos para que operaran a favor del trabajador, la presunción contenida en el art. 414 CT.

9. Decisión que resulta lógica para esta Sala, y que es clara y enfática en la sentencia del ad quem al haber plasmado en la misma, que a su juicio no eran aplicable la presunción establecida en el art. 414 CT a favor del trabajador, dado que el actor no logró comprobar la representación patronal de la persona que efectuó el despido según fue consignado en la demanda.

10. En tal sentido, y al no haberse cumplido con los requisitos para aplicar la presunción del art. 414 CT, por no haberse comprobado la calidad de representante patronal de la persona que efectuó el despido, de la forma en que se estableció en la demanda, la Cámara no tenía por qué aplicarla a favor del trabajador DSV.

11. En consecuencia la sentencia no será casada".

Sala de lo Civil, número de referencia: 26-CAL-2020, fecha de la resolución: 12/05/2020

LA PRESUNCIÓN CONTENIDA EN EL ART. 414 DEL CT. NO OPERA CUANDO SE ESTABLECE QUE HUBO ABANDONO DEL TRABAJADOR A SUS LABORES, AL NO ASISTIR A LA DECLARACIÓN DE PARTE CONTRARIA SOLICITADA POR LA PATRONAL, POR LO QUE EL VICIO ALEGADO NO SE CONFIGURA

"Infracción de ley por el submotivo de violación de ley del art. 414 CT 1. Para la licenciada […], el vicio alegado se evidencia en el numeral 8 de los fundamentos de derecho de la sentencia del ad quem al expresar: "(...) En síntesis, esta Cámara concluye que con la inasistencia del trabajador demandante a la audiencia de declaración de parte contraria solicitada por la parte patronal, se

acredito el abandono del trabajador a sus labores, haciendo imposible tener por establecida la presunción del art. 414 del Código de Trabajo (...)" (sic). De igual forma expuso, que se cometió violación de ley del art. 414 CT, al no haber sido aplicado, no obstante, haberse demostrado que se establecieron todos los presupuestos legales para que su representado gozara de la presunción de despido que la norma referida establece; y en lo fundamental agregó: "(...) La violación de ley se produce por haber considerado que había prueba en contrario que impedía aplicar la presunción de despido, sin embargo como se explica en el primer sub motivo de este recurso, la confesión estipulada en el Art. 347 CPRCM fue valorada erradamente y por consecuencia debió aplicar la presunción que nos trata, es decir Art. 414 Código de Trabajo (...)" (sic).

2. Cabe señalar que la violación de ley se configura cuando se omite aplicar la norma jurídica que debió ser aplicada. Es una infracción que no debe confundirse con cualquier preterición u omisión de normas jurídicas resultantes de una causa distinta de la falsa elección realizada; es decir, que la violación de ley constituye un vicio cometido sobre la norma objetivamente considerada, y no puede versar sobre la valoración que debió concederse a determinado medio probatorio. (auto con referencia 26-CAL-2020 3 de febrero de 2020).

3. Sobre lo sostenido por la recurrente, a juicio de esta Sala, no logra determinarse de qué forma el ad quem cometió la violación de ley alegada, ya que en el concepto del submotivo no se relacionó la manera en que se cumplió con los requisitos que establece el art. 414 CT, para que fuera aplicada la presunción de despido que contempla la misma; por el contrario, la impetrante se limitó a relacionar que se cumplió con los presupuestos legales para que operara la presunción del art. 414 CT, argumento que no es suficiente para determinar las razones por las que el ad quem tenía que aplicar la disposición considerada como vulnerada y no obstante ello, no la aplicó (auto de las diez horas veinte minutos del veinte de septiembre de dos mil diecisiete pronunciado en la Casación con referencia 109-CAL-2017).

4. Cabe señalar que aunque la recurrente hubiera aclarado los presupuestos legales para que opere la presunción del art. 414 CT, del concepto de la infracción dado por la recurrente, se advierte la razón por la cual no se aplicó la presunción de despido contenida en el art. 414 CT, al existir, a juicio de la Cámara, prueba en contrario, es decir, se estableció, según ese Tribunal, el abandono del trabajador a sus labores, al no asistir a la audiencia de declaración de parte contraria solicitada por la parte patronal; y siendo legal la referida presunción, admite prueba en contrario, lo cual es una limitante para que opere la presunción del art. 414 CT, tal como lo establece el inciso 1° de esa disposición legal.

5. En ese sentido, a juicio de esta Sala, el concepto del submotivo no tiene una fundamentación jurídica válida y por tal razón, no puede ser objeto de análisis en sentencia".

Sala de lo Civil, número de referencia: 75-CAL-2020, fecha de la resolución: 23/03/2020

NO ES POSIBLE APLICAR LAS PRESUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 414 CT, POR AUSENCIA DE PRUEBA RESPECTO A LA RELACIÓN LABORAL DEL DEMANDANTE CON LOS DEMANDADOS

"Violación de ley, respecto del art. 414 CT

2.1. Esta Sala, en reiterada jurisprudencia –sentencia con referencia 238-CAL-2018, de fecha 12-12-2018– entre otras, ha determinado, que existe violación de ley, cuando se elige para la solución del caso concreto, determinada norma y se deja de aplicar la que a derecho corresponde, produciéndose en este caso el vicio denunciado, es decir, que el vicio consiste en la inaplicación de la norma jurídica que resolvía el caso sometido a juzgamiento.

2.2. El recurrente en el concepto de la infracción, particularmente reclamó lo siguiente: "(…) Habéis cometido violación de ley del artículo 414 C.T., al no aplicarlo al caso concreto por tratarse de una norma positiva que si es aplicable al caso concreto respecto de mi patrocinado con la parte empleadora, siendo que se incumplió el reinstalo el proceso por parte de la empleadora se reduce a probar únicamente el incumplimiento del reinstalo por causa imputable al patrono tal y como se establece el artículo 414 del Código de Trabajo de lo cual se comprobó con los medios probatorios idóneos y conducentes es decir con los testigos de cargo presentados por el presente defensor público específicamente con la declaración del testigo MM donde la deposición del referido testigo fue sin lugar a dudas claro respecto de los hechos objeto del proceso acreditando el incumplimiento del modo, forma y lugar del reinstalo en comento imputable al patrono, así mismo con la declaración de PROPIA PARTE (…)----sería contraproducente plantear que sería incongruente condenar a uno y absolver a otro cuando hubo como he recalcado una aceptación formal de la litis respecto de la empleadora demandada KSRS en su contra al haber ofrecido el reinstalo, aunado a que en el devenir del proceso a criterio del presente defensor público hubo una desintegración del litis consorcio pasivo en virtud del principio de la supremacía de la realidad(...) "(sic).

2.3. Respecto al punto discutido, la Cámara sentenciadora, expresó lo siguiente: "(...) de la simple revisión de autos advierte: i) al leer cuidadosamente la demanda de fs. [...], puede observarse que la misma fue entablada en contra de dos personas, siendo los señores KSRS y JLA: ii) el nexo causal deviene necesariamente de un grupo de personas que conforman lo que se llama un litisconsorcio pasivo necesario, tal como lo estipula el Art. 76 CPCM., y lo dispuesto por los Art. 17, 384, 459 todos del Código de Trabajo, en el cual el actor demanda por un motivo común a un núcleo patronal, por ser solidariamente responsables; y, iii) El poder que corre agregado de fs. [...] de la pieza citada, a favor del Licenciado [...], fue únicamente otorgado y suscrito por la señora KSRS. 2. En casos como el presente, la parte actora está obligada a acreditar las condiciones y estipulaciones alegadas por el trabajador MAPG, entre estas, la prestación efectiva de servicios para ambos demandados en su conjunto, pues dicho extremo es el que le da origen a la pretensión reclamada. 3. Si bien es cierto, consta intervención de la señora KSRS por medio de su apoderado Licenciado René William

Peraza, y que éste ofreció un reinstalo; del análisis minucioso de autos, se constata que no consta incorporado al proceso, ningún medio probatorio tendiente a demostrar la existencia de una relación laboral que de igual forma lo vinculara al actor con el señor JUA, en las mismas condiciones (...)" (sic).

2.4. De la lectura de la sentencia y del libelo del recurso, se colige, que la Cámara sentenciadora no aplicó la presunción de despido contenida en el inciso 3° del art. 414 CT.

2.5. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Cámara adoptó dicha decisión, debido a que, al analizar los autos, determinó que el actor demandó a dos personas, conformando un litis consorcio pasivo necesario, conforme al art. 76 CPCM; por lo que, consideró que el trabajador estaba obligado a probar la prestación efectiva de servicios para ambos demandados, señores KSRS y JUA; lo cual, a criterio del ad quem, no fue acreditado en el proceso. A juicio del tribunal, únicamente se estableció que la demandada, señora RS, por medio de su apoderado, ofreció el reinstalo al demandante; pero conforme a la verificación de la prueba vertida en el proceso, relativa a la prueba testimonial, declaración de propia parte del demandante y declaración de parte contraria rendida por la señora RS, no existió evidencia alguna de la existencia de la relación laboral del demandante con el otro demandado, señor JUA.

2.6. La Cámara sentenciadora al fundamentar su decisión, claramente señala que la omisión de la parte actora de acreditar la relación laboral en forma conjunta con los demandados, limitó el posible triunfo de las pretensiones alegadas en la demanda. En tal sentido, no era posible, para dicho tribunal, aplicar la presunción establecida en el art, 414 CT.

A criterio de esta Sala, la conclusión expresada, surgió de la aplicación indebida del art. 76 CPCM, que regula el litisconsorcio en el proceso civil y mercantil; cuando lo que legalmente procedía era determinar las consecuencias jurídicas del cumplimiento o no del reinstalo del trabajador demandante. En ese sentido este tribunal aclara, que la Cámara determinó ausencia de prueba, respecto a la relación laboral del demandante con los demandados; por lo que, concluyó, no era posible la aplicación de las presunciones establecidas en el art. 414 CT.

Ante la situación descrita, quedaba al actor la posibilidad de invocar un error en la apreciación de la prueba testimonial o documental respecto a la relación laboral entre las partes.

2.7. En consecuencia, no existe lugar a dudas que el ad quem no cometió la violación de ley atribuida, pues a su juicio, al no haberse acreditado la prestación efectiva del servicio para ambos demandados, tal como se estableció en la demanda, no era posible presumir los hechos alegados por el actor; por tanto, es procedente declarar no ha lugar a casar la sentencia controvertida por este submotivo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 352-CAL-2019, fecha de la resolución: 24/02/2020

PRUEBA DOCUMENTAL

DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD POR FALTA DE CONGRUENCIA ENTRE EL CONCEPTO DESARROLLADO Y EL VICIO SEÑALADO

"Error de hecho en la apreciación de la prueba documental, art. 402 CT

Al desarrollar el concepto de la infracción el recurrente manifiesta lo siguiente: "[...] Nótese que dicho poder lo otorga el señor OELS [...] PERO es otorgado a título personal ya que dicho poder no se relaciona personería alguna para que se legitime su calidad como representante legal de la caja única de la ruta […]. Nótese que el poder no ha sido otorgado por el señor LS, en calidad de representante legal de la Caja Única de la ruta […], demandada, pues de haberse conferido en tal calidad, el notario debía haber relacionado en dicho instrumento, que tuvo a la vista la documentación con la cual dicho señor legitimaba su personería como representante legal. El error de hecho que habéis cometido, es en el poder con el cual, a los Licenciados […], se les permitió le intervención legal en el juicio, como apoderados generales judiciales con cláusula administrativa especial de la demandada. [...] No hay lugar a dudas, que habéis cometido error de hecho en la apreciación del poder antes relacionado, pues viste prueba donde no la hay, específicamente, avalaste la intervención ilegal de los licenciados […], pues en ningún momento estaban interviniendo como apoderados de la Caja Única demandada [...]"(sic).

6. El error de hecho tiene lugar, cuando el juzgador no ve prueba donde la hay, o ve prueba donde no la hay; y puede ocurrir también al equivocarse en la apreciación del contenido de un documento, tergiversándolo o simplemente omitiéndolo como si no constara en él. Es decir, el juzgador tiene por demostrado un hecho, sin existir en autos la prueba que lo acredite; o no tiene por acreditado un hecho, a pesar de existir en el proceso prueba pertinente e idónea.

8. Del concepto proporcionado, primordialmente se advierte que, el recurrente alega que la Cámara avaló la intervención ilegal de los apoderados de la sociedad demanda, al habérseles conferido un poder por parte del señor OELS, a título personal; y no como representante legal de la Caja Única de la Ruta […], pues no se relacionó en el mismo, la personería que acreditara la representación legal de la sociedad; por tal motivo, dice que el ad quem, vio prueba donde no había.

No obstante lo anterior, en el escrito también se menciona que se acreditó el nombramiento de la junta directiva de la ruta ciento trece, y que como presidente aparece el señor OELS; en consecuencia, se advierte que existe contradicción en el alegato del defensor público laboral, pues expresa que la Cámara vio prueba donde no había al haber avalado la intervención de los abogados de la demandada y por otra parte se relaciona que se acreditó la calidad de presidente de la ruta ciento trece(demandada) quien fue el otorgante del poder, documento sobre el cual se invoca la infracción.

9. Por consiguiente, ante la falta de congruencia entre el concepto desarrollado y el vicio señalado, el submotivo es inadmisible y así se declarará".

Sala de lo Civil, número de referencia: 136-CAL-2020, fecha de la resolución: 22/10/2020

EI AD QUEM NO COMETE EL VICIO ALEGADO CUANDO SE CONCLUYE QUE HA HECHO UNA CORRECTA VALORACIÓN DEL DOCUMENTO OBJETO DE RECLAMO

"Error de hecho en la apreciación de la prueba con relación a la prueba documental, art. 402 CT

5. Al exponer el concepto de la infracción la recurrente alega lo siguiente: "[...] Tu Honorable Cámara, habéis cometido error de hecho en la valoración de la prueba documental en el presente caso, lo cual se evidencia en tu sentencia pronunciada en Apelación, cuando en los fundamentos de derecho de tu sentencia, específicamente en el número 6 decís lo siguiente: """"Ahora bien, llama la atención a los suscritos que en la constancia relacionada en el párrafo supra se consignó que el trabajador demandante trabajó en la institución desde el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve v se dejó sin efecto su nombramiento el día uno de julio de dos mil diecinueve, es decir, la misma parte actora incorporo documentación en la que se acredita que su representado continuo laborando después del treinta y uno del presente año- día del supuesto despido aludido en el líbelo de Fs.[…] de la pieza principal-, no existiendo congruencia entre lo reclamado en la demanda y lo acreditado mediante el desfile probatorio al que se ha hecho alusión. """" " El documento denominado como "Constancia" sobre el cual recae El vicio alegado está identificado en la pieza principal del proceso de la siguiente manera: CONSTANCIA EXTENDIA POR JEFE SECCION DE ATENCION AL PUBLICO-DEPTO. DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DIVISION DE TALENTO HUMANO, Licenciada YEVM, de fecha veintinueve de julio de dos mil diecinueve, a nombre del trabajador demandante, agregado a folios […] de la pieza principal del proceso. El Documento fue presentado para demostrar la relación laboral con la institución demandada, [...] Ahora bien el error de hecho que habéis cometido sobre el documento antes indicado ha radicado cuando tergiversas el contenido del mismo, pues has presumido y aducido que el trabajador demandante ha laborado hasta la fecha uno de julio del dos mil diecinueve, es decir después de la fecha del despido invocado en la demanda, y por ese error te ha llevado a la convicción que no existe congruencia entre lo reclamado en la demanda y lo acreditado mediante el desfile probatorio (llámese el mismo en este caso la constancia que nos ocupa), y es que tergiversas el contenido pues el documento lo que te indica es desde cuando trabajo el demandante a las órdenes de la Institución y hasta cuando se dejó sin efecto el nombramiento, mencionado es decir en fecha uno de julio del dos mil diecinueve, tu error es tener acreditada una relación laboral hasta esa fecha, cuando lo que el documento demuestra es otra cosa, es decir la fecha en que administrativamente la Institución deja sin efecto el nombramiento por una supuesta renuncia voluntaria, es decir has tenido por acredi-

tada una prestación de servicios posterior al despido cuando el documento no demuestra lo antes explicado. [...] y no hubieses supuesto una relación laboral posterior al despido invocado, confundiendo el concepto de "dejar sin efecto el nombramiento" con el concepto de la "relación laboral" prolongada hasta el uno de julio del 2019 según tu entender en esta valoración que habéis hecho y que como resultado decidiste absolver a la impetrada. De no haber cometido el yerro, la sentencia hubiese sido confirmando la condena impuesta por el juez de primera instancia. [...]"(sic).

6. Al verificar la sentencia de la Cámara, en relación a la prueba documental, se advierte lo siguiente: "[...]Respecto al primer agravio expuesto por la impetrante, la misma plantea que el juzgador A quo, admitió y valoró la constancia de folios […] de la pieza principal, en la que se consigna el tiempo de servicio del señor […], nombre que para la recurrente difiere con el del trabajador demandado, máxime cuando en el caso sub lite no consta el procedimiento establecido en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias, para establecer la identidad personal en caso se trate de una palabra homónima. [...] Ahora bien, llama la atención a los suscritos que en la constancia relacionada en el párrafo supra, se consignó que el trabajador demandante trabajó en la institución desde el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve y se dejó sin efecto su nombramiento el día uno de julio de dos mil diecinueve, es decir, la misma parte actora incorporó documentación en la que se acredita que su representado continuó laborando después del treinta y uno de mayo del presente año -día del supuesto despido aludido en el libelo de Fs. […] de la pieza principal, no existiendo congruencia entre lo reclamado en la demanda y lo acreditado mediante el desfile probatorio al que se ha hecho alusión. [...]" (sic).

7. Esta Sala en reiterada jurisprudencia, v.g., la sentencia pronunciada en el proceso con referencia 30-CAL-2018, de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, ha sostenido, que el vicio invocado tiene lugar, cuando el juzgador no ve prueba donde la hay, o ve prueba donde no la hay; y puede ocurrir también, cuando se equivoca en la apreciación del contenido de un documento, tergiversándolo o simplemente omitiéndolo como si no constara en él. Es decir, el juzgador tiene por demostrado un hecho, sin existir en autos la prueba que lo acredite; o no tiene por acreditado un hecho, a pesar de existir en el proceso prueba pertinente e idónea.

8. La recurrente sostiene que la Cámara tergiversó el contenido de la constancia de folios […] de la pieza principal, debido a que presumió que el trabajador demandante había laborado hasta el uno de julio de dos mil diecinueve, es decir, después de la fecha del despido invocado en la demanda.

9. Afirma la recurrente que el documento demuestra, desde cuándo trabajó el demandante a las órdenes de la institución y hasta cuándo se dejó sin efecto el nombramiento mencionado, es decir, el uno de julio de dos mil diecinueve, y que el error radica en tener por, acreditada la relación laboral hasta esa fecha, pues lo que el documento, demuestra es otra cosa, vale decir, la fecha en que administrativamente la institución dejó sin efecto el nombramiento por una supuesta renuncia, voluntaria; en síntesis expresa, que el ad quem, tuvo por acreditada

una prestación de servicios posterior al despido a pesar que el documento no lo demuestra, por tanto confundió el concepto "dejar sin efecto el nombramiento" con el de "relación laboral" hasta el uno de julio de dos mil diecinueve.

10. El ad quem, en el párrafo 6 de la sentencia, expresa que según la constancia relacionada, el trabajador laboró para la institución demandada a partir del uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y "se dejó sin efecto su nombramiento el **día uno de julio** de dos mil diecinueve". De ello advirtió que el trabajador continuó trabajando después del treinta y uno de mayo del mismo año, día del supuesto despido aludido en la demanda, en consecuencia sostiene que no hay congruencia entre lo reclamado y lo acreditado en el desfile probatorio.

11. A folios […] de la pieza principal, está agregada la constancia en referencia, de la que efectivamente se advierte que, la institución demandada hizo constar que dejó sin efecto el nombramiento del trabajador a partir del uno de julio de dos mil diecinueve; por tanto, a juicio de este tribunal no existe tergiversación del documento por parte de la Cámara, pues el análisis tiene como base el contenido del mismo. En ese sentido, le asiste la razón al ad quem, al concluir que el trabajador continuó laborando después de la fecha que se relacionó en la demanda como día del supuesto despido, es decir el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.

12. Para que el error de hecho se produzca en el análisis de la prueba, entre otros, es indispensable que el juzgador tenga por demostrado un hecho, sin existir en autos la prueba que lo acredite, es decir, que se equivoque en la apreciación del contenido del documento. Sin embargo, en el caso de autos no ha ocurrido, en virtud que la apreciación del ad quem, está conforme a lo que el documento indica. En consecuencia, se concluye que la Cámara no cometió la infracción señalada por la recurrente, por lo que procede declarar no ha lugar a casar la sentencia de que se ha hecho mérito".

Sala de lo Civil, número de referencia: 52-CAL-2020, fecha de la resolución: 06/10/2020

INEXISTENCIA DE ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, DADO QUE LA CÁMARA NO LE OTORGÓ NI LE NEGÓ VALOR ALGUNO A LA PRUEBA DOCUMENTAL

"Error de derecho en la apreciación de la prueba documental, art. 402 del Código de Trabajo

En cuanto a este submotivo, la licenciada […] argumentó, que la Cámara al valorar la carta de compromiso, la prueba testimonial y el informe de auditoría ofrecido por su mandante, reconoció que de tales medios de prueba, se podría determinar que el despido fue realizado conforme a la causal tercera del art. 50 CT. Pero que la doctrina legal que sentó la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 57cal-2016 del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, hace que pierda valor la carta compromiso agregada y junto con ella, todas las evidencias que le sirven de base. De tal modo, que el ad quem incurrió

en error de derecho en la apreciación de la prueba, al haberle negado el valor probatorio a la carta de compromiso suscrita por el trabajador y al informe de auditoría rendido en el caso de fraude y jineteo de fondo de caja chica por parte del demandante; así también incurrió en la causal casacional invocada, al no haber valorado el acta notarial de las once horas treinta minutos del catorce de agosto de dos mil dieciocho, el procedimiento para el manejo del fondo fijo de la caja chica de la sociedad a la que representa, impresión de correos electrónicos y diecisiete vales de caja chica emitidos por el trabajador demandante.

Respecto a este punto, el fundamento del ad quem en su sentencia fue el mismo que se señaló con relación al vicio anterior (párrafo seis de los fundamentos de derecho).

Cabe mencionar que el vicio invocado supone por un lado, la existencia de una regla especifica que indique el valor de una determinada prueba, y por otra, que el juzgador le atribuya un valor probatorio diferente al aplicarla.

Asimismo, el error de derecho se produce cuando existe en la sentencia, la apreciación o valoración errónea por el juzgador de la prueba, es decir, que se le dé un valor distinto al que la ley le establece, pero, si no hay "valoración" o "examen" de las pruebas, no podría entonces ocurrir tal error". (Sentencia con referencia 64-CAL-2018, de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho).

Partiendo de lo expuesto por la recurrente y lo expresado por la Cámara sentenciadora en el caso en análisis, esta Sala advierte, que no le otorgó ni le negó valor alguno a la prueba documental que alude la recurrente, es más, únicamente hace alusión al "informe de auditoría", sin realizar ningún esfuerzo por valorarlo, dado que aglutinó el mismo en los presupuestos de la doctrina legal ya citada.

En ese sentido, no existió valor probatorio de los documentos relacionados, que según la impetrante los tiene conforme al art. 402 del Código de Trabajo; por lo tanto, este tribunal no casará la sentencia por este sub motivo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 118-CAL-2019, fecha de la resolución: 29/10/2020

PRUEBA TESTIMONIAL

DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD CUANDO NO SE FUNDAMENTA DE FORMA VIABLE LA INFRACCIÓN ALEGADA

"Error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, en contravención de lo dispuesto en el art. 461 CT, relacionado al art. 410 inciso 2° del mismo cuerpo de ley

11. En cuanto a este submotivo argumenta el recurrente, que la Cámara se limitó a exponer respecto de lo depuesto por los testigos de descargo, señores ARHDG, DARA y AEAV, que: "[...] ninguno merece fe en lo declarado, y es que ni tan siquiera son capaces de identificar correctamente a la trabajadora demandante, y mucho menos fueron capaces de demostrar el hecho que no se

presentó dentro de los tres días laborales siguientes a reanudar sus labores, y es que su declaraciones tenían que ir encaminadas a establecer la voluntad de abandono de labores que regula el Art. 50 causal 13º Tr. [...]" (Sic).

12. Continuó aseverando, que el ad quem no expresó un argumento, concreto, ni justificación de porqué lo atestiguado por los señores mencionados, en conjunto con la prueba documental que obra en autos, no le mereció fe, pues no expuso porque considera que dichos testigos no identifican correctamente a la trabajadora demandante, es decir, de acuerdo al recurrente, no es posible colegir si el ad quem se refiere al nombre completo de la actora, o a la certeza de que se trata de la misma persona respecto de la cual declaran. De modo que, la interpretación del tribunal de segunda instancia, con relación a las declaraciones hechas por los testigos de descargo es arbitraria, yo que no da un argumento legal o racional que fundamente porqué los mismos no le merecen fe.

13. Así también arguye, que el ad quem omitió considerar si lo dicho por los testigos mencionados, se enmarcaba o no en "alguna de las hipótesis normativas" establecidas en el art. 410 inciso 2° CT, norma que estipula que el testigo vario o contradictorio en lo principal de su deposición no hará fe.

14. Sobre lo planteado por el recurrente se advierte en primer lugar, que aunque el art. 410 inciso 2° CT, constituye una norma de contenido valorativo, de sus argumentos únicamente se colige que estima que la Cámara omitió analizar si los testigos fueron varios o contradictorios.

15. En virtud de tal circunstancio es dable afirmar que el impetrante no ha conceptualizado el error de derecho que aduce, con relación a lo dispuesto en el art. 410 inciso 2° CT, conforme a lo establecido en el art. 528 CPCM; ya que no ilustra cómo, a su juicio, el ad quem, al apreciar la prueba testimonial a la que hace referencia consideró, de forma errada, a los testigos como varios o contradictorios; cuando sus deposiciones no lo fueron, o viceversa; sino que en su argumento se limitó a afirmar que la Cámara no analizó si los testigos no le merecían fe con base en lo dispuesto en el art. 410 inciso 2° CT, cuando dicho tribunal no encontró variaciones en lo principal de lo depuesto por los mismos.

16. Al respecto, debe tenerse en cuenta, que no basta con la mera afirmación de parte del recurrente de que el tribunal de segunda instancia no consideró si los testigos fueron varios o contradictorios. Sino que es menester que delimite, cómo de la decisión impugnada, se advierte el vicio invocado, de forma directa.

17. Lo sostenido por el recurrente se enmarca más bien en una falta de razonamientos justificativos por parte del ad quem, circunstancia que no fundamenta de forma viable la infracción alegada con relación al art. 410 inciso 2° CT. Debido a tal falencia, en los términos expuestos, el recurso será declarado inadmisible en lo que respecta al error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, con relación a dicha norma".

Sala de lo Civil, número de referencia: 43-CAL-2020, fecha de la resolución: 09/03/2020

INEXISTENCIA DE ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, YA QUE NO HAY FORMA DE DETERMINAR SI EXISTIÓ UNA VALORACIÓN ABUSIVA, EXCESIVA O INDEBIDA

"Error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, art. 461 del Código de Trabajo

Con relación a este vicio, la licenciada […] fundamentalmente expresó: (...) La infracción del art. 461 del CT, resulta del error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial presentada por mi mandante. Y es que, si bien es cierto la Cámara sentenciadora valora las declaraciones de los testigos propuestos por mi mandante, para establecer que el cargo que ostentó el señor […], era de confianza, en las consideraciones hechas en el numeral 7° de la sentencia hoy recurrida, decide negarle valor respecto a las declaraciones hechas en torno a los hechos que acreditan la causa justificativa del despido conforme al art. 50 no. 3° del CT (...). Dicha valoración va más allá de la ley, y de lo que la lógica, psicología y experiencia podía llevar a concluir a la Cámara sentenciadora, dado que como podrá observar la presente Sala del contenido de la sentencia hoy recurrida y del audio y video de la audiencia de testigo (...) los testigos fueron contestes y uniformes en decir que el señor […], ostentó el cargo de Contador General, cuyas funciones implicaban un puesto de confianza y no solo comprendía los reconocidos por la Cámara sentenciadora (...) la infracciones aquí denunciada se verificaron al no haberse aplicado por Cámara sentenciadora lo dispuesto por el art. 461 CT, irrespetando las reglas de valoración legal, en especial omitiendo valorar la prueba en base a la sana crítica y la totalidad de las declaraciones hechos por los testigos, a pesar que consta en sus declaraciones la forma y circunstancias en que tuvieron conocimiento de los hechos declarados, y despojándoles del valor probatorio al que legalmente le correspondían, de forma deliberada, lo cual, coloca a su valoración más allá de lo lógica, la psicología y la experiencia (...)" (sic).

Sobre este punto, la Cámara en su sentencia expresó: "(...) También es cierto que por sana crítica, esta carta valorada en conjunto con las demás pruebas de descargo (testimonial e informe de auditoría de fs.[…]), se establece un reconocimiento implícito de la falta cometida, lo que podría llevarnos al convencimiento de Que sí hay hechos constitutivos de un deterioro justificado de confianza, y situarnos en el predicado de la causal 3° del Art. 50 Tr (...) está claro entonces que si por lo dicho se cae el valor como prueba de esta Carta de Compromiso suscrita por el trabajador también se caen las otras evidencias a las cuales les sirve de sustentación decisiva, y por lo tanto no se establece en el juicio la causal justificativa de despido del Art. 50 No. 3 Tr. (...)" (sic). (Lo subrayado esta fuera del texto).

El artículo 461 del Código de Trabajo, invocado como disposición vulnerada, establece lo siguiente: ***"Al valorar la prueba*** el juez usará la sana crítica, siempre que no haya norma que establezca un modo diferente".

Esta Sala ha sostenido en su jurisprudencia, *v.gr.,* sentencia 76-CAL2018, de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, entre otras, que "el error de

derecho en la apreciación de la prueba testimonial, únicamente se puede dar cuando se valora la prueba con un sistema distinto al de la sana crítica, o cuando la prueba valorada "supuestamente" al amparo de dicho sistema de apreciación, se hace de forma **absurda, irracional o arbitraria.** La valoración de una prueba es absurda, cuando el juzgador analiza el medio probatorio mediante un argumento que adolece de sentido o que es contrario a la razón; es abusiva, cuando la apreciación es excesiva o indebida; y arbitraria, al actuar siguiendo su voluntad o capricho, sin ajustarse a las leyes o a la razón".

Para que exista el error alegado el juzgador debe analizar las deposiciones de los testigos que obran en el proceso, ya que únicamente de esta forma podrá apreciar el testimonio y reconocerle la eficacia o no, a dicho medio de prueba.

Sin embargo, se advierte que, al igual que el anterior vicio, la Cámara no analizó la prueba testimonial, por lo que no hay forma de determinar si existió una valoración abusiva, excesiva o indebida por parte del ad quem.

Consecuentemente, no procede casar la sentencia por el error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial".

Sala de lo Civil, número de referencia: 118-CAL-2019, fecha de la resolución: 29/10/2020

RECURSO DE CASACIÓN

ASPECTOS GENERALES

"Análisis de la improcedencia del recurso extraordinario de casación contra autos definitivos dictados en apelación

Los recursos como medios estipulados en la ley para impugnar resoluciones judiciales, pueden ser ordinarios o extraordinarios, dicha clasificación responde a la naturaleza y finalidad de los mismos. Dentro de dicha clasificación, el recurso de casación pertenece a los recursos extraordinarios, puesto que su existencia, no es consecuencia de la necesidad de que existan múltiples instancias en un juicio y que constituya una garantía constitucional, sino que, sus fines y naturaleza, trascienden el derecho de las partes a que, en el debido proceso, tal y como ha sido configurado en la normativa vigente, se puedan alegar agravios ante un tribunal superior.

El recurso extraordinario de casación, ha sido definido por el autor procesalista Jaime Guasp, como "(...) el proceso de impugnación de una resolución judicial, ante el grado supremo de la jerarquía judicial, por razones inmanentes al proceso en que dicha resolución fue dictada. Es, pues, un recurso de carácter extraordinario (...) donde las partes no pueden acudir a ella en base a su simple interés, sino que tiene que contar con una base legalmente determinada, (...) esto es, con un motivo (...)" (Citado por Manuel Taboada Roca, en su obra "La Casación Civil española en algunas de sus complejidades").

La casación como instituto jurídico consagrado en la normativa adjetiva, tiene en la actualidad tres funciones que se han venido configurando a lo largo

de su existencia: la nomofiláctica: que implica la defensa del cumplimiento de la ley y proviene del derecho romano, la unificadora: que pretende la uniformidad de la jurisprudencia, misma que nació en la revolución francesa; y, la dikelógica: la cual busca justicia del caso, siendo la más moderna de dichas finalidades. Tales funciones, de acuerdo al jurista Juan Carlos Hitters, en su obra "Recursos Extraordinarios y Casación", deben cumplirse de forma armoniosa, para evitar que se genere un excesivo formalismo (si se le da preeminencia a la función nomofiláctica) o una llana tercera instancia (si se le da prioridad a la función dikelógica).

Es así, que cuando se afirma que el recurso extraordinario de casación es de estricto derecho, no se hace referencia únicamente, al hecho de que su correcta interposición exige el conocimiento de la técnica casacional inherente a los submotivos que franquea la ley, sino que se pretende hacer énfasis, en que la infracción invocada debe suponer una desviación por parte del administrador de justicia, de la correcta aplicación de las normas de derecho, en cuanto al fondo del asunto en concreto de que se trate, en aras de que el tribunal casacional, mediante el análisis en sentencia, del recurso que se haya interpuesto, cumpla todos los fines de la casación, los cuales son, garantizar la observancia de las normas jurídicas, mantener la uniformidad de la jurisprudencia y administrar justicia, funciones con las que, en última instancia se promueve la seguridad jurídica.

Lo anterior nos lleva a la interrogante de por qué la Casación no es una tercera instancia:

Nuestro ordenamiento jurídico, garantiza el derecho de los demandantes y demandados, a que sus litigios sean dirimidos en múltiples instancias, en el proceso debidamente configurado. Es en tales instancias, que se conoce en amplitud el caso que haya sido sometido al órgano jurisdiccional, a través del planteamiento de las pretensiones correspondientes, la exposición de los hechos y la presentación de la prueba. En ese orden de ideas, se advierte que, en la segunda instancia, conforme a lo dispuesto en los arts. 575, 577 y 578 CT, se pueden oponer y probar, nuevas excepciones. Tales circunstancias diferencian al recurso extraordinario de casación, de una tercera instancia, pues dicho medio de impugnación, implica motivos de fondo y de forma debidamente estipulados en la ley, mediante los cuales se controla lo decidido en la sentencia que resuelve el fondo del caso, sin que en el curso del incidente se puedan invocar hechos nuevos, ni tampoco pruebas posteriores".

QUE SE PERMITA LA IMPUGNACIÓN DE AUTOS PRONUNCIADOS EN APELACIÓN, POR MEDIO DEL RECURSO DE CASACIÓN EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, NO IMPLICA QUE ESTÉ AUTORIZADA LA CASACIÓN PER SALTUM

"Requisito objetivo dispuesto en el art. 586 CT y retomado en el art. 519 ord. 3o CPCM.

Avanzando en el tema, es menester contemplar que el requisito objetivo contemplado en el art. 586 inciso 1° CT, relativo a que únicamente se pueden im-

pugnar mediante el recurso extraordinario de casación, las sentencias dictadas en apelación, fue retomado en el Código Procesal Civil y Mercantil que entró en vigencia en el año dos mil diez.

Dicha circunstancia responde a la naturaleza misma del derecho laboral, el cual es una rama del derecho social, y en esa línea de pensamiento, debido a que el derecho de trabajo tiene una preponderante función social, existe la necesidad de que los juicios laborales sean expeditos, en aras de que, por una parte, los trabajadores que hayan visto estimadas sus pretensiones en las dos instancias que franquea la ley, logren tener acceso al cumplimiento de las sentencias dictadas en sus casos, con prontitud, puesto que sus reclamos, relativos a salarios adeudados, indemnizaciones por despidos injustos, pagos de vacaciones y aguinaldos, tanto completos como proporcionales, se transforman, en muchos casos, en el sustento de sus familias. Por otra parte, existe la posibilidad de que los empleadores hayan visto estimadas sus excepciones en las instancias contempladas en el Código de Trabajo, en tales casos, el que exista un proceso laboral que se limite a las dos instancias que configuran el debido proceso en la actualidad, favorece a que los patronos puedan reincorporarse a la actividad económica generadora de trabajo, sin permanecer litigando, largos procesos laborales que entorpezcan los medios de producción.

En ese orden de ideas, cabe analizar, que aunque el carácter restrictivo del recurso de casación en materia laboral, limita el acceso a dicho medio impugnativo a unos pocos, favorece los intereses de muchos justiciables en cuyos casos se ha administrado justicia por las dos instancias estipuladas en la ley y cuyos juicios han finalizado con un auto con fuerza de definitivo emitido por las Cámaras de segunda instancia.

Tal es la función social del derecho laboral, la cual debe entenderse como la imperiosa necesidad de que el bien común prevalezca por sobre los intereses individuales. Es dicha naturaleza, la que diferencia al recurso de casación en materia laboral, de aquel contemplado para unificar la jurisprudencia en materia civil y mercantil, pues dichas ramas corresponden al derecho privado, y buscan regular las relaciones jurídicas existentes entre los particulares, en aras de que se protejan sus intereses meramente patrimoniales, de tal forma que carece de relevancia que los procesos se extiendan por largos períodos de tiempo, puesto que no se encuentra en juego el sustento de una persona y su familia (salario o indemnización), sino capitales destinados a la inversión y a la producción de más recursos económicos.

Es por tal motivo que, el Código Procesal Civil y Mercantil contempla la posibilidad de que se impugne mediante el recurso de casación, autos dictados en segunda instancia, en materia civil y mercantil, mientras que en materia laboral restringe tal posibilidad al estipular que solamente se podrán recurrir en casación, de las sentencias definitivas dictadas en apelación.

Cabe destacar además, que el hecho de que se permita la impugnación de autos pronunciados en apelación, por medio del recurso de casación en materia civil y mercantil, no implica que esté autorizada la casación per saltum, lo cual no es permitido en ninguna materia, en nuestro ordenamiento jurídico, incluso, cuando en materia civil o mercantil se impugna un auto definitivo, el recurso de

casación se limitará a lo resuelto por la Cámara, respecto del mismo, y no a lo dilucidado por el tribunal de primera instancia .

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN EN MATERIA LABORAL

En cuanto a la procedencia del recurso de Casación en materia laboral, es necesario precisar, que este debe cumplir con los requisitos del artículo 586 CT, actualmente los referentes a que se recurra de las sentencias pronunciadas en apelación, en las que se decida un asunto en el que lo reclamado directa o indirectamente ascienda a más de cinco mil colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América.

Con respecto al requisito de que se recurra de las sentencias dictadas en apelación, se debe resaltar que tal aspecto no es antojadizo por parte del legislador, ya que es indispensable que el juzgador se haya pronunciado sobre el aspecto principal del asunto, ya sea confirmando la condena o la absolución, o revocando la misma, y fallando en sentido contrario, entre otros casos, decisión en la que se podría generar cualquiera de los vicios establecidos en el art. 588 CT; dado que, resultaría jurídicamente innecesario, que se conociera en casación, de autos o de autos con carácter de definitivos, en los que no se puedan enmarcar vicios, como , los relativos a apreciación de prueba, aplicación o interpretación de leyes, por mencionar algunos ejemplos, debido a que no se recurre de una sentencia definitiva.

Es por esta razón, que el legislador estableció que el recurso de casación, únicamente podría interponerse en contra de las sentencias definitivas, ya que las mismas contienen una decisión sobre el aspecto principal debatido, las pruebas presentadas y analizadas, y las normas aplicadas al caso concreto.

IMPROCEDENCIAS NO VULNERAN PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

Bajo ese contexto, y con base a las razones antes expuestas, con la aplicación de tal restricción, no cabe la posibilidad que esta Sala pueda vulnerar derechos constitucionales como el de defensa, audiencia o debido proceso, por apegarse a lo establecido en la ley y mantener la postura de las resoluciones dictadas en ese sentido; en primer lugar, porque se actuaría en contra del derecho positivo, por el hecho que los tribunales de justicia no tienen más atribuciones que los que la ley y la Constitución les otorga; y como segundo aspecto, porque el tribunal casacional estaría imposibilitado para analizar el auto que se impugna, con respecto a los vicios establecidos en el art 588 CT, por no estar contenidos en una resolución de trascendencia indiscutible para las resultas del proceso, como lo es, por su propia naturaleza, la sentencia definitiva.

Con relación a lo anterior, cabe señalar, que en sentencia con referencia 5-2012/78-2012/138-2013 AC, proveída en el proceso de inconstitucional de la Sala de lo Constitucional, de este máximo tribunal, de las diez horas y treinta minutos del nueve de julio de dos mil catorce determinó que “(...) en los casos expresamente señalados por la ley y configurados los presupuestos procesales, la casación se rige como último recurso dentro de la jurisdicción ordinaria, por

tanto su finalidad de corrección funcional - en general - trasciende de la idea de reparación del agravio subjetivo sufrido por la una de las parte, ya que al contener una dimensión objetiva, procura el control integral las de las actuaciones judiciales a través de la unificación y depuración de los criterios interpretativos relativos a la disposiciones legales con base en las cuales los tribunales de instancia resuelven los procesos bajo su conocimiento, es decir, asegura el respeto de la ley mantiene la unidad de la jurisprudencia " (sic).

Finalmente, se debe tener presente además, que si una de las partes considera haber sido objeto de una arbitrariedad o actuación ilegal, por parte de un tribunal de segunda instancia a través de un auto simple o de uno con carácter de definitivo, y tal aspecto no puede ser controvertido por los medios de impugnación ordinarios, nada le impide a la parte afectada, interponer la respectiva demanda de amparo, no así la de un recurso de casación, ello en razón de los requisitos establecidos para su procedencia".

IMPROCEDENCIA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA DESIERTA LA APELACIÓN INTENTADA

"2. Análisis de la procedencia del recurso interpuesto

En ese orden de ideas, se colige, que la resolución recurrida es de aquellas cuya impugnación, de acuerdo a la ley, es improcedente por la vía casacional, pues de conformidad a los arts. 519 ordinal 3° CPCM y 586 inciso 1° CT, sólo puede interponerse recurso de casación en contra de las sentencias que se pronuncien en apelación; sin embargo, la resolución impugnada es un auto definitivo, tal como lo califica el inciso segundo del art. 212 CPCM.

Es de suma trascendencia advertir que, con base al citado ordinal 3° del artículo 519 CPCM, se ha establecido ese criterio, es decir, de declarar la improcedencia del recurso de casación contra autos definitivos dictados por Cámaras de Segunda Instancia, mismo que ha sido sostenido en las resoluciones, vgr, entre otros, referencias números: 364-CAL-2018, 358-CAL-2018, 264-CAL-2019 y 398-CAL-2019, las cuales cabe remarcar, fueron suscritas y emitidas, en forma unánime por los tres magistrados titulares de esta Sala, es decir, por los magistrados Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, Ovidio Bonilla Flores y Oscar Alberto López Jerez.

En consecuencia, debido a los razonamientos expuestos, el recurso deberá declararse improcedente.

Cabe destacar, que en el caso de autos, no se le entregará, a la trabajadora demandante, la suma de dinero que refiere el inciso 2° del art. 591 del Código de Trabajo, ya que la Cámara remitió, a esta Sala, el recurso de casación, sin que el licenciado [...] cumpliera con el requisito de agregar al escrito de interposición del recurso, el comprobante de haber depositado la suma equivalente a un diez por ciento de la cantidad establecida en el inciso 1° del art. 586 del Código de Trabajo".
Sala de lo Civil, número de referencia: 169-CAL-2020, fecha de la resolución: 17/12/2020

Relaciones:
Sala de lo Civil, número de referencia: 226-CAL-2019, fecha de la resolución: 17/12/2020

IMPROCEDENCIA, CUANDO NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 586 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, REFERENTE A LA CUANTÍA

"En segunda instancia la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, y agregó a la misma, la condena de trescientos cuarenta y seis dólares con setenta y dos centavos de dólar, en concepto de salarios caídos. Efectuado el estudio del escrito de interposición del recurso se advierte lo siguiente: el art. 586 CT establece los requisitos de procedencia para la interposición del recurso de casación: "Sólo podrá interponerse recurso de casación contra las sentencias definitivas que se pronunciaren en apelación, **decidiendo un asunto en que lo reclamado directa o indirectamente en la demanda, ascendiere a más de cinco mil colones"**. (Lo resaltado es nuestro).

En el caso de que se trata, lo reclamado en la demanda, por la indemnización de despido injusto, es de quinientos cuarenta y tres dólares con quince centavos de dólar, ya que el referido trabajador devengaba un salario mensual de seiscientos cincuenta dólares exactos; y soló laboró en el período del once de mayo de dos mil dieciocho al once de marzo de dos mil diecinueve. Por tanto, que la cuantía no alcanza lo necesario para la interposición del recurso de casación. Por lo tanto se constata, que el recurso no reúne uno de los requisitos de procedencia establecidos en el referido artículo.

Como consecuencia de lo expuesto, no es dable examinar los requisitos de forma que requiere el art. 528 del Código Procesal Civil y Mercantil".

Sala de lo Civil, número de referencia: 53-CAL-2020, fecha de la resolución: 09/03/2020

IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECURRE DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROPONIBLE LA DEMANDA

"4. Efectuado el estudio del escrito de interposición del recurso, se constata que la providencia recurrida no es una sentencia, debido a que la misma no decidió el fondo de la pretensión planteada, pues la Cámara Primera de lo Laboral, confirmó por medio del auto impugnado, la declaratoria de improponibilidad de la demanda interpuesta por el defensor público laboral, licenciado […], en nombre y representación de la trabajadora, KGAC, por carecer de **competencia objetiva;** por lo que, dicha resolución corresponde a un auto definitivo.

5. En ese sentido, ya no es necesario examinar los demás requisitos a que se refieren los arts. 586 del Código de Trabajo (CT), y 528 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), en virtud que la providencia no es impugnable por medio del recurso extraordinario de casación, por no ser una sentencia, es decir, aquella decisión, pronunciada por un tribunal superior, en la que se resuelve el fondo de la cuestión demandada, pues se reclamó indemnización por despido injustificado y otras prestaciones laborales, y dicha pretensión no fue resuelta.

6. Por lo anterior, se estima, que la referida resolución judicial es de aquellas que la ley califica improcedente por la vía casacional, pues de conformidad a

los arts. 519 ordinal 3° y 586 inciso 1° del Código de Trabajo, **sólo** puede interponerse recurso de casación en contra de las sentencias que se pronuncien en apelación; sin embargo, la resolución impugnada, así como se ha mencionado, es un auto definitivo tal como lo prescribe el inciso segundo del art. 212 CPCM. Por consiguiente, el recurso deberá declararse improcedente.

7. Este tribunal estima necesario aclarar, que la declaratoria de improponibilidad de este recurso no limita ni perjudica el derecho a recurrir, puesto que no implica el desaparecimiento de la garantía, es decir, el acceso a los medios impugnativos; esto, en el sentido que, no se limita totalmente el derecho a interponer el recurso de casación, en virtud que el proceso aún no está sentenciado en primera instancia; por tanto, a las partes les queda a salvo tal prerrogativa una vez se decida sobre el fondo de la pretensión".

Sala de lo Civil, número de referencia: 398-CAL-2019, fecha de la resolución: 10/02/2020

SANA CRÍTICA

INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN

"Error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial Precepto infringido art. 461 CT

2.1. En jurisprudencia reiterada, esta Sala ha expresado que el submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, es aplicable al sistema de valoración de la sana crítica, y que tal error se produce, cuando el juzgador de modo flagrante y notorio, ha faltado a dicho sistema, estimando absurda, arbitraria y abusivamente la prueba aportada, en discrepancia completa con los criterios establecidos. (Sentencia con referencia 703-CAL-207 8, pronunciada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho).

2.2. En el caso en análisis, el recurrente reclama que la Cámara sentenciadora, vulneró el precepto señalado como infringido, al realizar una valoración absurda de las declaraciones de los testigos de descargo, señores RR y GA, ya que en principio consideró que sus testimonios no le generaron convicción respecto a las faltas cometidas por el trabajador demandante, pues las declaraciones fueron analizadas a la luz de la excepción de ausencias injustificadas, cuando la alegada fue, la excepción de abandono de labores desde el quince de agosto de dos mil dieciocho; y en ese sentido, a juicio del recurrente, al existir prueba en contra, no era posible presumir el despido conforme al art. 414 CT.

2.3. Respecto a este punto la Cámara sentenciadora, en su sentencia estableció: "(...) En el proceso constan las declaraciones de los testigos de cargo y descargo señores KOLR, JMGM, DJRR y MEGA y la declaración de parte contraria del trabajador demandante, todas registradas en formato digital de audio y video (DVD) de fs. [...] de la pieza principal, al escuchar las declaraciones de

forma conjunta estas no arrojan elementos convincentes que puedan reforzar o potenciar la declaración de la representante legal de la demandada o que constituyan prueba en contrario para destruir la presunción legal de despido (...). En cuanto a los testigos de descargo señores RR y GA, con respecto al primero el licenciado [...], no logró extraer información pertinente y útil que establezca que el trabajador no se ha presentado a prestar sus servicios al centro de trabajo y en cuanto a la segunda testigo al preguntársele si el trabajador sigue laborando para la empresa contesto: "(el ya no se presentó el ya no está laborando(...) el catorce de agosto a partir de esa fecha hasta hoy no se ha vuelto a presentar y a partir del día quince ya no se hizo presente(...)", en el contrainterrogatorio dijo: "(...) que no sabía los motivos por lo que el trabajador se ausentó a partir del quince de agosto(...)". Las declaraciones no generan convicción respecto a las faltas que se le atribuyen al trabajador demandante (...)" (sic).

2.4. Considerando lo expresado en el libelo del recurso y la sentencia controvertida, este tribunal es del criterio que no existe evidencia de que la Cámara sentenciadora haya confundido la excepción de abandono por la de inasistencia, tal y como lo quiere hacer ver el recurrente; es más, dicho tribunal ni siquiera hace relación a la excepción alegada, sino únicamente se refiere a que la prueba de descargo, no fue suficiente para generar convicción sobre la existencia de las faltas atribuidas al trabajador demandante; es más, de los fundamentos de la sentencia de dicha Cámara puede determinarse que los testigos de descargo únicamente hacen referencia a que el trabajador no se presentó a partir del quince de agosto, sin aportar ningún elemento adicional que haya dejado claro la intención del trabajador de abandonar su empleo.

Se vuelve indispensable establecer, que para que se configure la excepción de abandono del empleo, el trabajador, después de iniciada la prestación del servicio, renuncia a su derecho a seguir ocupando su puesto y lo deja definitivamente. El acto de abandono supone por parte del trabajador una decisión libre de su voluntad que sigue un estado de separación definitiva de sus labores. (sentencia con referencia 304-CAL-2018 del cuatro de marzo de dos mil diecinueve).

2.5. A criterio de esta Sala, la decisión de la Cámara sentenciadora no puede considerarse absurda o contraria a la ley ni a la razón; ya que, con las declaraciones de los testigos de descargo no se establecieron los presupuestos del abandono; en este sentido, no era posible exigirle al ad quem, que de por acreditado la existencia de la libre voluntad del trabajador de abandonar del empleo; y por lo tanto, no infringió la sana critica como sistema de valoración de prueba, establecido en el art. 461 CT.

2.6. En consecuencia, se impone declara no ha lugar a casar la sentencia controvertida por este submotivo"

Sala de lo Civil, número de referencia: 355-CAL-2019, fecha de la resolución: 12/05/2020

TRÁMITE DE REMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN AL TRIBUNAL DE GRADO

MERA INCONFORMIDAD CON ESTE TRÁMITE REGULADO EN EL ART. 575 CT, JURIDICAMENTE NO SE PUEDE FUNDAMENTAR UNA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA

"Interpretación errónea del art. 575 del Código de Trabajo

1. El doctor [...] fundamentó este submotivo en los siguientes términos: "[...] Ahora bien, el Capítulo IV Arts. 19 al 24 del Código Civil (CC) imponen las reglas de interpretación de expresiones oscuras y de las palabras que contiene una ley. En ese sentido, es necesario aplicar estos argumentos legales a los hechos que promueven este recurso de impugnación. Entonces, es importante manifestar que la autoridad juzgadora que dictó la sentencia que se impugna, en el número "3. FUNDAMENTACION DE DERECHO DE LA SENTENCIA." Párrafo segundo, únicamente se basó en que "hacer uso de su derecho" establecido en el Art. 575 CT, debe interpretarse como presentar expresión de agravios. Más grave aún, determinan que la parte apelada tendrá CINCO DÍAS hábiles para presentar su oposición ---- Asimismo, exponen que "...al momento de expresar agravios el recurrente debió alegar claramente el actuar del Juez A quo que le perjudican y fundamentar su inconformidad con argumentaciones jurídicas válidas...". Tales argumentos, son explícitamente inválidos y tal como exponen que el recurrente debió plantear argumentos jurídicos válidos, ésta representación considera que también la autoridad juzgadora tiene la obligación de plantear argumentos jurídicos válidos no vanos y sin razonamiento ni fundamentaciones como los expuestos. Véase que, para decir que "uso del derecho" del Art. 575 CT es el momento procesal para expresión de agravios, tenían la obligación de razonar con las reglas de interpretación las normas jurídicas e íntima convicción que los condujeron a dicha conclusión (...)" (sic).

Continúa expresando el recurrente: "(...) Tal consideración para esta procuración es equívoca, porque tampoco razona y argumenta las razones por las cuales considera que uso del derecho es el momento de la expresión de agravios, desconociendo el principio supletorio para aplicar las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil que regulan el modo de proceder en apelación. ---- Más grave aún, no justifican que norma jurídica le otorga cinco días a la apelada para oponerse a expresión de agravios. Esto porque, extienden ese plazo posterior a presentar agravios el apelante, Como ya se dijo, se atribuyen facultades que la ley expresamente no otorga, violando el Art. 86 Cn. Esto es grave, porque los funcionarios responderán de los daños y perjuicios que causaren por violar la Constitución. Art. 235 Cn (...)" (sic).

Además argumentó: "(...) Lo anterior, potencia y fundamenta que "uso del derecho" del Art. 575 CT no requiere manifestar expresión de agravios. Sino que la Cámara Superior en grado debe pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso, notificarla y posterior el apelante presentar su expresión de agravios y la apelada oponerse. Esto porque al interpretar el término, existe oscuridad en cuanto a lo que regula. Por un lado si debe interpretarse únicamente

a mostrarse parte y señalar lugar para notificaciones y por otro lado imperativamente a expresar agravios, tal como lo sugiere la sentencia que se impugna. En tal sentido, al término "uso del derecho" del Art. 575 CT, deberá interpretársele como el momento procesal de acreditarse como parte e indicar dirección para notificaciones. Esto porque, el Art. 24 CC impone la norma que, los pasajes oscuros o contradictorios se interpretarán del modo que más se acerquen al espíritu general de la legislación y equidad natural (...)" (sic).

4. Asimismo expresó: "(...)la tesis antes planteada, debido a que la oscuridad al término "uso del derecho" contenido en el Art. 575 CT, se genera debido a que dicha norma legal no contiene un modo de proceder en la legislación laboral, se fundamenta aplicando el principio de supletoriedad, contenidos en los Arts. 602 CT y 20 CPCM. De tal suerte, para la forma de proceder, debe aplicarse el Art. 513 CPCM. Es que, tal norma jurídica regula que al recibir el recuso el tribunal superior, examinará su admisibilidad o inadmisibilidad. Si lo admite, expone dicha norma legal, convocará a una audiencia. Aplicado al proceso laboral, que no es oral, se debe notificar a las partes para expresar agravios dentro de los tres días siguientes y. por igualdad procesal presentada la expresión de agravios, darle audiencia por tres días a la parte apelada para que presente su oposición (...)" (sic).

En cuanto al vicio invocado se debe aclarar, que este ocurre cuando el juzgador aplica la norma debida al caso, pero lo realiza dándole una interpretación equivocada, ya sea porque esta no es clara o porque no comprendió el espíritu o motivación de la misma, desatendiendo el tenor literal cuando su sentido es claro.

Se debe considerar además, que pueden ser objeto de interpretación errónea tanto la norma sustantiva, como la doctrina legal, y las disposiciones procedimentales. Estas últimas, cuando su vínculo e interpretación con normas sustantivas sean determinantes para resolver el caso en concreto. (Sentencia con referencia 423-CAL-2016, de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete).

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que el impetrante centró su agravio en la expresión del art. 575 CT, del contenido siguiente: "hacer uso de su derecho"; sin especificar, cómo el ad quem aplicó e interpretó de forma amplia o restringida la norma; es decir, que no argumentó de qué manera la Cámara dio un sentido o alcance distinto al texto del art. 575 CT, que es lo que conlleva a cometer el vicio alegado, dado que se trata de una norma de carácter procesal.

Por otra parte, lo que se evidencia en el concepto expuesto por el recurrente, es una mera inconformidad con el trámite regulado en el art. 575 CT, es decir, con el trámite de remisión del recurso de apelación al tribunal de grado; aspectos con los que, jurídicamente no se puede fundamentar una interpretación errónea.

9. En conclusión y considerando los yerros en el planteamiento del concepto de la interpretación errónea, a juicio de esta Sala, el recurso no reúne los requisitos contenidos en al art. 528 CPCM, por lo que será inadmitido por este submotivo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 31-CAL-2020, fecha de la resolución: 17/02/2020

ULTRA PETITA

CUANDO LA CÁMARA CONCEDE MÁS DE LO PEDIDO POR EL ACTOR EN SU DEMANDA SE PRODUCE UNA CLARA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

"Violación de ley, art. 419 del Código de Trabajo en adelante CT

2.1 Los recurrentes sostienen que la Cámara emitió una sentencia extra petita al otorgar más de lo pedido por el actor; y ultra petita al otorgar lo que nunca se le pidió. Al respecto manifiesta, que la parte actora en la demanda planteó como pretensión única el pago de salarios no devengados por causa imputable al patrono, desde el uno de enero de dos mil trece, hasta que concluyera el año de garantía sindical; por ello, los recurrentes interpretan literalmente, que lo único que se pidió fue que se pagara un año de salarios por gozar de garantía sindical; no obstante, el ad quem condenó a su mandante a pagar salarios no devengados desde el uno de enero de dos mil trece al veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, por la cantidad de treinta y siete mil trescientos dos dólares con sesenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América, en concepto de salarios dejados de percibir por el trabajador; por tanto, concedió más de lo pedido al haber otorgado pretensiones o derechos que no formaron parte de la demanda; pues al trabajador se le eligió como directivo sindical en el período comprendido del 17 de noviembre de 2012 al 16 de noviembre de 2013, y no para el plazo al que se condenó en la sentencia.

2.2 Agregan, que la Cámara resolvió ultra petita al condenar al pago de mil novecientos sesenta y nueve dólares con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América en concepto de vacación completa, del uno de enero de dos mil trece al veintidós de febrero de dos mil diecinueve; y al pago de mil ochocientos ochenta y cinco dólares con treinta y dos centavos de dólar, en concepto de aguinaldo completo del período del uno de enero de dos mil trece al veintidós de febrero de dos mil diecinueve; a pesar que éstos jamás fueron solicitados en la demanda.

2.3 Así también sostienen que no existe prueba testimonial, ni documental, que justifique la condena de salarios dejados de percibir por causa imputable al patrono, durante el periodo comprendido entre los días uno de enero de dos mil trece al veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, al haberse otorgado salarios, vacaciones y aguinaldos por un plazo de seis años, los que no fueron alegados en la demanda.

Por las razones expresadas los recurrentes consideran que la Cámara incurrió en violación de ley del art. 419 CT.

2.4 La Cámara en las consideraciones de la sentencia expresó lo siguiente: "[...] Resumidos los motivos de agravios y su argumentación, se procederá a analizar dichos motivos consistentes en que dicen los recurrentes que se ha violentado el principio de congruencia procesal, en virtud de que el Juez de lo Civil de La Unión en la sentencia recurrida otorgó más de lo pedido y también lo que no fue pedido por el demandante señor […] en su demanda y que además

no se establecieron los extremos del despido de hecho, porque realmente el referido trabajador no fue despedido, que lo que ocurrió fue que el contrato finalizó por su plazo y no fue renovado por la corporación demandada; de la manera siguiente: Esta Cámara ha analizado minuciosamente la sentencia recurrida, y considera que lo otorgado por el Juez sentenciador en la misma, es acorde a lo pedido en la demanda y a lo acreditado con las pruebas ofertadas en el proceso por la parte demandante, y esto es respecto a: La condena de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS DÓLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en concepto de Salarios dejados de percibir por causa imputable al patrono, durante el período comprendido entre los días uno de enero de dos mil trece al día veinticinco de febrero de dos mil diecinueve; cantidad a la que se deberán aplicar las retenciones de ley. UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en concepto de vacación completa correspondiente al período comprendido entre los días uno de enero de dos mil trece al día veintidós de febrero de dos mil diecinueve. UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNDIOS DE AMERICA, en concepto de Aguinaldo completo correspondiente al periodo comprendido entre los días uno de enero de dos mil trece al día veintidós de febrero de dos mil diecinueve. b) Aclárase que el contrato de trabajo que vincula a la “CORPORACIÓN […]” que se abrevia […] -en calidad de patrono-, con el señor […]-en calidad de trabajador-, se encuentra vigente; por lo tanto, todos los derechos, obligaciones y prohibiciones de las partes deben cumplirse.” […] en el presente caso tenemos que la parte demandante sí probó los extremos de su demanda, siendo éstos la relación laboral y el despido de hecho sin causa justificada. Y por otra parte probó que el demandante era el secretario general de la seccional por empresa de […] del sindicato […], por lo tanto gozaba de la garantía de inamovilidad laboral devenida del fuero sindical, al momento del despido. Por consiguiente, razón tuvo el Juez de lo Civil de La Unión al resolver que habiéndose establecido los extremos de la demanda y siendo que el actor, a la fecha del despido era directivo sindical, dicho despido no produce efecto, por lo que lo procedente es ordenar de conformidad al Art, 464 CT el reintegro de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta aquella en la que vence su garantía sindical. [...] El Art. 251 C.T., regula lo concerniente a la imposición de la referida multa al patrono. Y los Arts. 627, 628 y siguientes del mismo código regulan el procedimiento para hacerla efectiva; disposiciones de las cuales se desprende que dicha imposición de la multa le corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por medio del Departamento respectivo de la Dirección General de Inspección de Trabajo. En virtud de lo anterior, la imposición de la referida multa por parte del Juez de lo Civil de La Unión, no está adoptada conforme a derecho; por no ser el ente facultado para hacerlo; por lo que, esta decisión será revocada, pero no por los argumentos vertidos por los apelantes. [...] Por lo que, es procedente en el presente caso

confirmar parcialmente la sentencia del juez de lo Civil de La Unión, por estar apegada a derecho en parte, y revocarla únicamente respecto de los literales "e y d" del fallo, los cuales se refieren a: "c) Impónganse sanción de la multa correspondiente al monto de veinticinco veces el salario mínimo mensual correspondiente al sector Industria, a la "CORPORACIÓ […]" que se abrevia […] representada legalmente por la señora […], por ejercer actos discriminatorios antisindicales contra los miembros de la junta directiva de la Seccional por empresa […] del Sindicato de Trabajadores de […], mismo que asciende a la cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. d) Dicha multa deberá ser cancelada a más tardar treinta días después de la declaratoria de firmeza de esta sentencia." [...]" (sic).

2.5 Con relación a la infracción alegada, este tribunal estima necesario referirse al principio de congruencia, que en el ámbito laboral se encuentra regulado en el art. 419 CT; y al respecto, este tribunal, en fallos anteriores, ha considerado lo siguiente: "[...] La congruencia está vinculada directamente con el derecho a la protección jurisdiccional y el principio dispositivo, pues la tutela judicial efectiva viene a reconocer de manera expresa, la posibilidad que tiene toda persona de acudir al órgano estatal competente para plantearle, vía pretensión procesal, cualquier vulneración inconstitucional en la conservación, defensa, mantenimiento y titularidad de sus derechos, siendo, que la falta de respuesta evidencia una clara denegación de justicia por la vía de omitir la protección solicitada; y en relación a la facultad de disposición que tienen las partes de la relación jurídico procesal, su inobservancia se da cuando por exceso la sentencia concede más de lo que el actor solicitó (ultra petita); así mismo cuando concede una cosa distinta a lo pedido, es decir, se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citra petita)". Sentencia de casación de las once horas un minuto del veintiséis de abril de dos mil diecisiete, con referencia 63-CAL-2015.

2.6 Iniciando con los reclamos de los recurrentes en relación a la falta de congruencia de la sentencia del ad quem, por haber otorgado más de lo pedido en la demanda; se advierte lo siguiente:

2.7 En la demanda de folios [...], se reclamó el pago de salarios no devengados por causa imputable al patrono desde el uno de enero de dos mil trece hasta la conclusión del año de garantía sindical; esto de conformidad a los arts. 48 inciso 4° Cn, 248, 29 ordinal 2° y 464 del Código de Trabajo.

2.8 Lo anterior, en virtud de que el despido del trabajador demandante, JBM, no surtía efectos por ser miembro de la Junta Directiva Seccional por Empresa […], del Sindicato […], pues desempeñaba el cargo de secretario general del sindicato.

2.9 La Cámara confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, en virtud que únicamente revocó los literales "c y d" del fallo; el primero referente a la sanción de multa impuesta a la demandada, Corporación Salvadore-

ña de Inversiones, por ejercer actos discriminatorios antisindicales contra los miembros de la junta directiva de la seccional por empresa […], por un monto de siete mil seiscientos cuatro dólares con veinticinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y el segundo, en cuanto al pago de la mencionada multa en el plazo de treinta días después de la declaratoria de firmeza de la sentencia.

2.10 Por tanto, confirmó la sentencia de primera instancia en lo relativo a los literales "a y b"; en virtud de los cuales, por su orden, decidió estimar la pretensión del demandante y condenar a la sociedad demandada a pagarle al trabajador la cantidad de cuarenta y un mil ciento cincuenta y siete dólares con cuarenta y nueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por los siguientes rubros: treinta y siete mil trescientos dos dólares con sesenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América, en concepto de salarios dejados de causa imputable al patrono, durante el período comprendido entre el uno de enero de dos mil trece al veinticinco de febrero de dos mil diecinueve; un mil novecientos sesenta y nueve dólares con cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, en concepto de vacación completa del período del uno de enero de dos mil trece al veintidós de febrero de dos mil diecinueve; y, un mil ochocientos ochenta y cinco dólares con treinta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América, en concepto de aguinaldo completo correspondiente al período del uno de enero de dos mil trece al veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Así también, aclaró que el contrato de trabajo entre la Corporación […], el señor […], trabajador, se encontraba vigente; por lo tanto, todos los derechos, obligaciones y prohibiciones de las partes debían cumplirse.

2.11 De lo anterior se advierte, que la condena impuesta a la sociedad demandada, con relación a los salarios no devengados por causa imputable al patrono, vacación y aguinaldo completo; fue, desde el uno de enero de dos mil trece al veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en concepto de salarios no devengados. Sin embargo, el trabajador los reclamó desde el uno de enero de dos mil trece hasta el año de garantía sindical.

2.12 Para aclarar el término de tiempo que comprende el reclamo, se verifica la credencial original del demandante, señor […], agregada a folios [...], en la que consta que ostentaba el cargo de secretario general de la junta directiva SECCIONAL POR EMPRESA […], del sindicato de Trabajadores […], durante el período comprendido entre el 17/11/2012 al 16/11/2013.

2.13 En consecuencia, el año de garantía sindical tenía vigencia hasta el 16/11/2014, es decir un año después de haber cesado en sus funciones como directivo sindical. No obstante, el ad quem confirmó la condena impuesta, desde el uno de enero de dos mil trece al veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en concepto de salarios no devengados por causa imputable al patrono; por tanto, la Cámara se excedió al conceder más de lo que el actor solicitó.

2.14 Así también se advierte, que confirmó la sentencia en cuanto al pago de vacación y aguinaldo completo del período comprendido del uno de enero

de dos mil trece al veintidós de febrero de dos mil diecinueve; por ende, dicha condena también excedió en lo relativo a la garantía sindical cuya vigencia era hasta el 16/11/2014.

2.15 Lo anterior, hace concluir a este tribunal, que la Cámara concedió más de lo pedido por el actor en su demanda, lo que produjo una clara violación al principio de congruencia.

En consecuencia, el ad quem cometió la infracción de violación de ley en relación al art. 419 del Código de Trabajo; por lo que corresponde declarar haber lugar a casar la sentencia, y pronunciar la que conforme a derecho corresponde, art. 537 CPCM".

Sala de lo Civil, número de referencia: 241-CAL-2019, fecha de la resolución: 31/01/2020

VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL

DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD CUANDO LA QUEJA DEL RECURRENTE SE REFIERE A UNA INCONFORMIDAD CON LA VALORACIÓN DE PRUEBA, SIN QUE EL ARGUMENTO TENGA RELACIÓN CON EL VICIO ALEGADO

"Violación del art. 414 CT

Al desarrollar el concepto de la infracción la recurrente expone lo siguiente: "(...)Vos Honorable Cámara cometéis el vicio dé VIOLACIÓN DE LEY cuando en el numeral nueve de la sentencia afirmáis: "No habiéndose probado el despido de forma directa y no poderse presumir de conformidad al Art 414 del Código de Trabajo, tal como lo señala la juzgadora de primera instancia en su pronunciamiento por no haberse acreditado por ningún modo de prueba la calidad de representante patronal que se le atribuye al Señor CMEL dentro de la sociedad demandada: así mismo haber resultado desestimados los agravios, tal como ha quedado expuesto en párrafos anteriores resulta procedente confirmar la sentencia de alzada" Precisamente VOS cometéis el vicio de violación de ley, porque en la alzada se presentó documentación consistente en un diploma otorgado por la demandada al trabajador demandante JCAD documentación que de acuerdo al Arts. 318 y 319 CPCM es atinente, conducente y pertinente CON LO QUE SE PRUEBA LA REPRESENTACIÓN PATRONAL ejercida por el Señor CMEL y las facultades de contratar y despedir, dirigir y administrar trabajadores dentro de la demandada, y además es la persona a quien en la demanda de mérito se le atribuye el despido del trabajador demandante. Es por eso que considero que la documentación presentada a Fs [...] del incidente de apelación es atinente, conducente y pertinente para probar el despido ya que en la demanda se manifestó que la persona que realizo el despido es el Señor CMEL en concepto de DIRECTOR DE OPERACIONES de la demandada. Por lo que al encontrarnos ante la duda de una aplicación de

la norma se le está violentando al trabajador el PRINCIPIO DE INDUBIO PRO OPERARIO ya que al ocurrir un conflicto de aplicación de la norma tal como el prevalece la más favorable al trabajador, no hay que perder de vista que en este conflicto el trabajador demandante es quien está en desventaja frente al empleador. Por lo que con la documentación presentada se cumplen los presupuestos del Art 414 C.T. Y ES PROCEDENTE DARLE APLICABILIDAD A LA PRESUNCION DE DESPIDO, porque se cumple con el presupuesto de operatividad que establece el Art 55 inciso segundo del Código de Trabajo, al tenerse por probada la representación patronal, por lo que vos honorable Cámara debisteis haber aplicado las presunción establecida en el Art 414 C.T. Y debisteis haber condenado a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas en la demanda. (...)"(sic).

En el caso descrito, el recurrente sostiene que el ad quem cometió la infracción al no haber aplicado la presunción de despido del art. 414 CT, bajo el argumento que no se probó la calidad de representante patronal que se le atribuyó al señor CMEL; a pesar de tratarse de una norma que resultaba aplicable, y de cumplir con los presupuestos legales que debían reunirse para gozar de la presunción.

Asimismo manifestó que, en relación a la prueba de la calidad de representante patronal, se presentó un diploma otorgado por la sociedad demandada al trabajador demandante, con el que se acreditaba tal circunstancia, y por ende las facultades de contratar, despedir, dirigir y administrar personal en la sociedad; al respecto, el recurrente afirma que dicha prueba era "atinente, conducente y pertinente" para probar la calidad de representante patronal, sin mencionar quién firmó el referido diploma.

En virtud de lo anterior, afirma el recurrente, que se ha violentado el principio de indubio pro operario, pues al ocurrir un conflicto de aplicación de la norma, prevalece la más favorable al trabajador.

Se advierte, que la queja se refiere a la disconformidad en la valoración de la prueba documental presentada a efecto de acreditar la calidad de representante patronal de la persona a quien se le atribuye el despido. Sin embargo, dicho argumento no tiene relación con la violación de ley que es el vicio alegado; dado que esta es una infracción que tiene lugar cuando el juzgador no aplica la norma que resolvía el caso, es decir, es una infracción directa a la ley, ya que es la negación o desconocimiento del precepto legal correspondiente; incide directamente sobre la norma, no a través del examen de los hechos.

En consecuencia, lo descrito por el recurrente no es suficiente para la admisión del recurso por el submotivo que se analiza; por ende, el recurso es inadmisible por violación del art. 414 CT, y así se declarará".

Sala de lo Civil, número de referencia: 67-CAL-2020, fecha de la resolución: 09/03/2020

VIOLACIÓN DE LEY

EL VICIO ALEGADO NO SE CONFIGURA EN RELACIÓN AL ART. 414 CT, CUANDO SE EVIDENCIA CON LA PRUEBA APORTADA AL PROCESO, QUE EL TRABAJADOR HABÍA CONTINUADO LABORANDO DESPUÉS DE LA FECHA DEL SUPUESTO DESPIDO, LO QUE VOLVÍA INCONGRUENTE LO RECLAMADO

"FUNDAMENTOS DE DERECHO

Violación de ley, art. 414 del Código de Trabajo en adelante CT

1. Con relación al vicio alegado, la recurrente expresó lo siguiente: "[...] El vicio alegado se evidencia cuando decís en tu sentencia en el Numeral 7 de los fundamentos de derecho lo siguiente: """""""""Valorando lo anterior, advertimos que el señor Juez A quo condeno a la institución demandada, basado en la presunción contenida en el Art. 414 C.Tr., al considerar que si cumplían con los requisitos para su aplicación, sin embargo, tampoco debemos olvidar que la presunción contenida en dicha disposición legal admite prueba en contrario, y paradójicamente esta prueba en contrario ha sido incorporada por la misma parte actora, como se hizo referencia en el párrafo que precede, **por lo que no tiene cabida la aplicación de la presunción en mención".** (Sub rayado y negrita fuera de texto). Con el párrafo supra citado quedo demostrado que dejaste de aplicar la presunción del despido contenida en el art.414 del C.T. y que era la norma que resolvía éste caso en concreto ya que con la dispensa probatoria instaurada por la ley el despido se podía perfectamente presumir, tal como lo había realizado el juez de primera instancia. El despido señalado en la demanda se presume por haber cumplido con los requisitos que señala el Art. 414 del Código de Trabajo, entre ellos: a) la demanda se presentó dentro de los quince días hábiles al hecho que la motivo, [...] b) la parte demandada, en la audiencia conciliatoria señalada por el juez de Primera Instancia, no ofreció ningún tipo de arreglo, [...] c) se probó la relación laboral que vinculó a las partes; [...] y d) se probó la representación patronal atribuida en la demanda a la señora IASR, quien se desempeña como Jefe de la Unidad de Personalidades Importantes, dentro de la institución demandada. [...] Apreciar que lo único que el inciso cuarto del Art. 414 referido establece es que se enuncia en la sentencia de la Sala mencionada es, probar la relación laboral y la calidad de representante patronal de la persona que efectuó el despido. [...] Habéis cometido violación de ley del Art. 414 C.T., al no aplicarlo al caso concreto por tratarse de una norma vigente que si era aplicable y el cual establecía los presupuestos legales que únicamente debía reunir mi representado para gozar de la presunción de despido; y los cuales ya se demostró que estaban reunidos en el presente juicio. [...] De haberse aplicado la presunción tú sentencia hubiese sido distinta y por lógica hubieses aplicado en relación al 55 C.T. y el art. 3 C.T., por haberse probado la representación patronal atribuida en la demanda. Y los demás requisitos. [...]"(sic).

2. Con relación al vicio invocado, la Cámara, en las consideraciones de la sentencia, manifestó lo siguiente: "[...] 6. Ahora bien, llama la atención a

los suscritos que en la constancia relacionada en el párrafo supra, se consignó que el trabajador demandante trabajó en la institución desde el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve y se dejó sin efecto su nombramiento el **día uno de julio** de dos mil diecinueve, es decir, la misma parte actora incorporó documentación en la que se acredita que su representado continuó laborando después del treinta y uno de mayo del presente año -día del supuesto despido aludido en el líbelo de Fs. […] de la pieza principal-, no existiendo congruencia entre lo reclamado en la demanda y lo acreditado mediante el desfile probatorio al que se ha hecho alusión. 7. Valorando lo anterior, advertimos que el señor Juez A quo condenó a la institución demandada, basado en la presunción contenida en el art. 414 C.Tr., al considerar que se cumplían con los requisitos para su aplicación, sin embargo, tampoco debemos olvidar que la presunción contenida en dicha disposición legal admite prueba en contrario, y paradójicamente ésta prueba en contrario ha sido incorporada por la misma parte actora, como se hizo referencia en el párrafo que precede, por lo que no tiene cabida la aplicación de la presunción en mención. [...]"(sic).

3. En el caso de autos, la recurrente argumenta que, en el proceso operó la presunción de despido del art. 414 CT, por haberse cumplido los presupuestos para ello, y que sin embargo la Cámara no la aplicó.

Al verificar la sentencia del ad quem, se advierte que, en los párrafos 6 y 7, sostuvo que la presunción de despido contenida en el art. 414 CT, admite prueba en contrario; y que a folios […] de la pieza principal consta una constancia, incorporada por la parte actora, en la cual se consignó que, el trabajador demandante, trabajó en la institución demandada, desde el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y que y se dejó sin efecto su nombramiento, el uno de julio de dos mil diecinueve. En ese sentido, el ad quem, argumentó que la parte actora incorporó prueba en la que se acreditó que el trabajador continuó laborando después del treinta y uno de mayo del mismo año, posterior al despido aludido en la demanda; por ello sostuvo que no había congruencia entre lo alegado en la demanda y lo acreditado mediante la referida prueba.

Como consecuencia de lo anterior, concluyó que la presunción de despido no tenía cabida.

4. Este tribunal concluye, que el ad quem no cometió la violación del art. 414 CT, al haber revocado la sentencia de primera instancia, dado que estimó que existía prueba en contrario que acreditaba que el trabajador había continuado laborando después de la fecha del supuesto despido invocado en la demanda, lo que volvía incongruente lo reclamado, con el desfile probatorio aludido. Por tanto, la Cámara justificó debidamente su sentencia y procede declarar no ha lugar a casar la misma por el submotivo de mérito".

Sala de lo Civil, número de referencia: 52-CAL-2020, fecha de la resolución: 06/10/2020

EL VICIO ALEGADO NO SE CONFIGURA RESPECTO AL ART. 50 CAUSAL 3 CT, CUANDO NO SE EVIDENCIA UN ARGUMENTO SÓLIDO QUE DEMUESTRE QUE LAS ACTUACIONES QUE SE LE ATRIBUYEN AL TRABAJADOR ACREDITEN LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE LA CONFIANZA

"Violación de ley, art. 50 causal tercera del Código de Trabajo

Esta Sala en sentencia con referencia 37-Cal-2017, de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, estableció que el vicio alegado, "parte del supuesto de que se ha omitido, en la sentencia, la aplicación de una norma que era la indicada para resolver el caso concreto".

Respecto del vicio en análisis, la licenciada […] expresó, que el ad quem cometió el vicio alegado, pues a su juicio, se demostró en el proceso que el trabajador ostentaba un cargo de confianza, ya que en la empresa existe políticas y procedimientos para el manejo y control de la caja chica, y que, el demandante realizó aplicaciones contables indebidas en la cuenta Santillana, además del uso inadecuadamente que hizo de la caja chica.

Argumentó además, que consta en el proceso, que el demandante reconoció por medio de una carta compromiso por préstamo personal, que adeuda a su mandante un mil cuatrocientos cincuenta y dos dólares veintiún centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por haber aplicado inadecuadamente tal monto a su cuenta de Editorial [...] De tal modo, que la Cámara estaba obligada a aplicar el art. 50 causal tercera CT y, en consecuencia, debió estimar la excepción de terminación del contrato sin responsabilidad patronal, por pérdida de confianza.

De las líneas que preceden se advierte que, el agravio de la recurrente estriba en que la Cámara sentenciadora no aplicó la causal tercera del art. 50 del Código de Trabajo, a pesar de existir prueba que acreditaba que el señor [...] realizó aplicaciones contables indebidas en la cuenta Santillana y que él reconoció a través de una carta compromiso por préstamo personal, y que además, hizo uso indebido de la caja chica.

Inicialmente debe tenerse en cuenta lo que al tenor literal establece la causal justificativa de despido contenida en el art. 50 causal tercera del Código de Trabajo: "Por la pérdida de confianza del patrono en el trabajador, cuando éste desempeñe un cargo de dirección, vigilancia, fiscalización u otro de igual importancia y responsabilidad, El Juez respectivo apreciará prudencialmente los hechos que el patrono estableciere para justificar la pérdida de la confianza". (Lo subrayado esta fuera de texto).

Por otra parte, es oportuno indicar, que la causal de despido que se comenta, es la consecuencia de actos y omisiones que el trabajador realiza en el desempeño del cargo, va sea este, de dirección, fiscalización, vigilancia o en otro de igual o mayor importancia v responsabilidad, dentro de la empresa; de tal manera, que genera en el empleador un convencimiento para no continuar la relación laboral con el trabajador. Es por ello, que el legislador dejó a criterio del juzgador, la apreciación prudencial de los hechos que el patrono estableciere para justificar la pérdida de la confianza.

En el caso de autos, en primer término se advierte que, según demanda agregada a folios uno de la pieza principal, el trabajador […] desempeñaba el cargo de contador general en la sociedad demandada, y entre sus atribuciones se encontraba la elaboración de estados financieros así mismo, la recurrente argumentó que el trabajador incurrió en la causal aludida ya que realizó aplicaciones indebidas en la cuenta de Santillana, así como un uso indebido de la caja chica.

En ese sentido a juicio de esta Sala la acreditación de la causal de pérdida de confianza, debió versar sobre el desempeño y responsabilidad del trabajador respecto de la elaboración de los estados financieros o establecer que la custodia y manejo de la caja chica era responsabilidad del trabajador demandante, y que el uso indebido de la misma provocara la ruptura de la relación laboral sin responsabilidad patronal.

Por tanto, este tribunal no evidencia un argumento sólido que demuestre que las actuaciones que se le atribuyen al trabajador tengan relación directa al cargo -de confianza- y funciones que desempeñaba dentro de la empresa como contador general. Por tanto la sentencia no será casada por este submotivo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 118-CAL-2019, fecha de la resolución: 29/10/2020

LOS ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE SON INCONGRUENTES RESPECTO DE LA SENTENCIA QUE PRETENDE IMPUGNAR

"**Violación del art. 414 CT**

En cuanto a este submotivo la licenciada […] manifestó que la Cámara no aplicó la presunción de despido, a pesar de cumplirse todos los presupuestos del artículo 414 CT; pues consideró que no se probó la relación laboral en un período específico. Sin embargo, dicha norma dispone como presupuesto -entre otros- únicamente probar la existencia de la relación laboral, no así que se pruebe en un lapso de tiempo delimitado.

La causal casacional de violación de ley se da, cuando el tribunal de segunda instancia, omite aplicar la norma pertinente para resolver el fondo del asunto en concreto; aunque dentro del caso se cumplan los presupuestos necesarios para la aplicación de la misma.

De la lectura de la sentencia dictada por el ad quem, específicamente en los fundamentos de derecho contenidos en el romano III, se advierte que dicho tribunal en ningún momento emitió un pronunciamiento respecto a que en el caso bajo estudio, no se cumplieran los requisitos para la aplicación de la presunción de despido estipulada en el art. 414 CT, sino que el único punto que desarrolló la Cámara, se refiere a la valoración de la prueba de descargo que obra en autos, con la que se tuvo por acreditada la excepción de terminación de contrato sin responsabilidad patronal.

En esa línea de pensamiento es imperioso advertir, que los argumentos de la recurrente son incongruentes respecto de la sentencia que pretende impugnar, y debido a tal circunstancia, es dable afirmar que la Cámara no incurrió en la

violación del art. 414, por ende, la sentencia dictada por su parte no será casada con relación a dicho submotivo".

Sala de lo Civil, número de referencia: 347-CAL-2019, fecha de la resolución: 27/01/2020

VOTO RAZONADO DE LA MAGISTRADA DOCTORA DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ

RECURSO DE CASACIÓN

EN MATERIA LABORAL ES PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN RESPECTO DE AUTOS DEFINITIVOS

"Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, en mi calidad de magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, a continuación, expongo mi voto razonado, por no estar de acuerdo con las motivaciones y decisiones del auto definitivo en el recurso de mérito.

Esta Sala en la providencia que precede, ha estimado que la impugnación objetiva del auto del cual se recurre, deviene improcedente en razón de que se recurre de un auto definitivo que declaró desierto el recurso de apelación, y consecuentemente, ejecutoriada la resolución de la cual recurrió. En tal virtud, el recurso resulta improcedente por no cumplirse con el requisito establecido en el art. 586 del Código de Trabajo, referente a que se recurra de una sentencia pronunciada en apelación.

Al respecto debo expresar, en primer término, que soy del criterio que, en materia laboral, es procedente el recurso de casación respecto de autos definitivos, igual que en materia civil y mercantil; en consecuencia, la cualidad del acto que se ha impugnado en el presente caso, relativa a que se trata de un auto definitivo; no constituye un obstáculo para la tramitación del recurso; afirmación que tiene su base, en los razonamientos que expongo a continuación".

LA REGULACIÓN SOBRE LA IMPUGNACIÓN EN MATERIA LABORAL NO SE AJUSTA A LOS PARÁMETROS CONSTITUCIONALES

"No comparto la resolución antes mencionada por las razones que expongo a continuación.

En cuanto a los actos recurribles, dispone el art. 586 del Código de Trabajo, que "Sólo podrá interponerse recurso de casación contra las sentencias definitivas que se pronunciaren en apelación, decidiendo un asunto en que lo reclamado directa o indirectamente en la demanda, ascendiere a más de cinco mil colones (...)"«

Para mayor claridad, debe tenerse presente que el requisito que establecía la parte final del inciso transcrito, en el sentido siguiente: "(...) y con tal que dichas sentencias no sean conformes en lo principal con las pronunciadas en primera

instancia", fue declarado inconstitucional mediante sentencia pronunciada a las diez horas y treinta minutos, del 9 de julio de 2014, en los juicios con referencias 5-2012, 78-2012 y 138-2013.

Debe tomarse en cuenta, además que el Código de Trabajo es una norma preconstitucional. No obstante, el Código Procesal Civil y Mercantil, que fue promulgado en 2009, y entró en vigencia en 2010, retomó la regulación antes mencionada, en lo concerniente a material laboral, ya que el art. 519 CPCM, determina que admiten recurso de casación "(...) 3°. En materia de trabajo, las sentencias definitivas que se pronunciaren en apelación, de conformidad a lo regulado en el Código de Trabajo".

Es así como ambos cuerpos normativos coinciden en limitar el recurso de casación en materia de trabajo, a las sentencias (art. 212 CPCM) que se pronunciaren en apelación, decidiendo un asunto en que lo reclamado directa o indirectamente en la demanda, ascendiere a más de cinco mil colones.

No obstante, el CPCM, para materia civil y mercantil, establece que "Admiten recurso de casación: (...) las sentencias y los autos pronunciados en apelación en procesos comunes y en los ejecutivos mercantiles cuyo documento base de la pretensión sea un título valor; asimismo las sentencias pronunciadas en apelación, en los procesos abreviados, cuando produzcan efectos de cosa juzgada sustancial" (art. 519 n.° 3).

Por tanto, puede advertirse que, en materia civil y mercantil es más amplia la cobertura para la procedencia del recurso de casación, en lo concerniente a las clases de resoluciones (art. 212 CPCM) que admiten recurso, ya que no solo es permitido por el legislador respecto de sentencias, sino también respecto de autos.

Al analizarse ese trato diferenciado que ha hecho el legislador entre las materias civil y mercantil, y la materia laboral, no tiene ninguna justificación razonable. Esa reducción del ámbito de conocimiento de la casación en material laboral, respecto de la civil y mercantil, no encuentra ninguna explicación que la justifique, en los términos que exige el principio de igualdad proclamado por nuestro Constituyente en el art. 3 de la Constitución de la República.

La disposición constitucional antes mencionada es del contenido siguiente: "Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios".

Si bien, los recursos son de configuración legal, no puede el legislador hacer una diferenciación que no tenga justificación, sobre todo que se trata de posibilitar el ejercicio del derecho de defensa, a través de la interposición de recursos judiciales (art. 3 Cn).

La exclusión injustificada de los autos, en el recurso de casación en materia laboral resulta más evidente en aquellos casos en que el proceso ni siquiera llega al conocimiento de una segunda instancia, tal como sucede cuando el recurso

de apelación no se admite a trámite. En tales situaciones se niega el derecho a una segunda instancia, con la consecuente vulneración constitucional al derecho a recurrir, audiencia, defensa y al principio de igualdad.

En la sentencia de inconstitucionalidad, pronunciada a las diez horas con nueve minutos del día doce de noviembre de dos mil diez, en el juicio con referencia 40-2009/41-2009, la Sala hizo los siguientes pronunciamientos, con relación a la garantía de acceso a los medios impugnativos legalmente contemplados: "(...) Según sentencia de 28-V-2001, pronunciada en la Inconstitucionalidad 4-99, la garantía de acceso a los medios impugnativos legalmente contemplados, que comúnmente se denomina "derecho a recurrir", se conjuga con el derecho a la protección jurisdiccional y con el debido proceso e implica que, al consagrarse en la ley un determinado medio impugnativo, debe permitirse a la parte el acceso a la posibilidad de un segundo examen de la cuestión —otro grado de conocimiento-. El fundamento de los recursos radica en el reconocimiento de la falibilidad humana y en la conveniencia de que el propio juez o tribunal pueda reconsiderar y rectificar una decisión antes de que se convierta en firme, así como en la garantía que supone someter a un tribunal distinto la corrección de un posible error en la interpretación y aplicación de la ley o en la valoración de las pruebas practicadas o en la observancia de las normas procesales atinentes a la decisión. En este contexto, el derecho a recurrir implica que: 14 a. Una vez instituido el recurso o medio impugnativo en la ley procesal adquiere connotación constitucional por lo que los presupuestos de su admisión deberán ser interpretados de modo favorable a su procedencia, criterio adoptado por la referida sentencia de Inconstitucionalidad 4-99 y el Amparo 704-2004. Lo anterior implica que un tribunal puede válidamente declarar la inadmisibilidad o improcedencia de un medio impugnativo, pero las mismas pueden ser examinadas por esta Sala cuando el motivo de dicha declaratoria parezca no motivada, formalista e incompatible con la más favorable efectividad del derecho de defensa, o si la resolución se ha basado en un norma que pueda arrojar subjetivismo a la hora de la limitación de parte del legislador y no en un criterio concreto atendible jurisprudencialmente. b. El legislador no podrá regular el recurso en contra de los derechos y principios constitucionales,, por ejemplo, no podrá disponer que el recurso queda abierto sólo para alguna de las partes, pues ello iría en contra de la igualdad procesal, ni podrá poner tales obstáculos a la admisión del recurso que lo hagan imposible para cualquiera de las dos partes. c. Por otro lado, si la ley configura el proceso como de única instancia, la inexistencia legal de recurrir, en modo alguno vulneraría preceptos constitucionales, siempre y cuando esta limitación sea evidentemente objetiva, esto es, proporcional y razonable en relación con la naturaleza del caso, la urgencia del objeto del proceso, las posibilidades de dispendio jurisdiccional y la menor complejidad del asunto. Y es que, lo proporcional y razonable alude a una limitación alejada de la arbitrariedad, relacionada con la justicia material y con la inalterabilidad de los derechos que regula; es el caso de la garantía

de acceso a los medios impugnativos, que importa cómo se ha dicho el acceso a una segunda instancia cuando el caso lo amerite en abstracto o porque así lo ha previsto el legislador; es decir, que no podría haber una limitación que implique desaparecimiento de tal garantía, sino que esa limitación tiene que ser coherente con el fin que se persigue. La necesidad de seleccionar los asuntos más importantes para hacer posible su reconsideración en un grado superior de la jurisdicción, provoca que el legislador utilice distintos criterios selectivos, algunos directos como puede ser la naturaleza del asunto. Por ello, el derecho de defensa y la consecuente garantía de equivalencia de armas procesales no quedan agotados con una respuesta única de instancia, sino que comprende, además del acceso a ésta, la posibilidad eventual de aniquilar tal decisión en un segundo o tercer grado de conocimiento, v. gr. apelación y casación" (negritas propias).

En esa misma sentencia, la Sala sostuvo lo siguiente: "(...) como se apuntó previamente, el derecho a recurrir es aquel que tiene toda persona a hacer uso de los recursos que el ordenamiento jurídico expresamente consagra dentro del derecho al proceso constitucionalmente configurado que se conjuga con el derecho de audiencia y defensa. Por consiguiente, el referido derecho es de aquellos respecto de los cuales el legislativo dispone de un cierto margen de conformación, en virtud de su libertad de modular las posibilidades de impugnación en cada materia sometida a regulación: ampliarlas en unas y reducirlas en otras. Por ejemplo, en algunos casos podrá sólo establecer el recurso de revocatoria; en otros contemplar, además, el recurso de apelación; pero en otros negar toda posibilidad de un segundo examen de la cuestión. Ahora bien, el margen de configuración referido no es, en modo alguno, ilimitado, porque el legislador no recibe de la Constitución un cheque en blanco para convertir cualquier trámite en "debido proceso", sino que debe respetar las garantías esenciales del mismo, tales como el derecho de audiencia, defensa y el principio de igualdad de armas. En ese sentido, cualquier restricción o flexibilización de dichas garantías, debe estar objetivamente justificada, proporcional y razonablemente según corresponda al caso particular, la urgencia del objeto del proceso, las posibilidades de dispendio jurisdiccional y la menor complejidad del asunto" (negritas propias).

Por tanto, la Sala de lo Constitucional ha determinado que cualquier restricción o flexibilización que haga el legislador al regular la posibilidad de impugnación, debe ser "objetivamente justificada, proporcional y razonablemente según corresponda al caso particular, la urgencia del objeto del proceso, las posibilidades de dispendio jurisdiccional y la menor complejidad del asunto".

Sin embargo, tal como se ha expuesto con anterioridad, la reducción que ha realizado el legislador en cuanto a la posibilidad de impugnación en materia laboral, que se comenta en el presente voto razonado, no está objetivamente justificada, ni razonable. Por tanto, tal regulación, no se ajusta a los parámetros constitucionales que deben fundamentar la regulación de los recursos".

VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, AL EXISTIR DIFERENCIACIÓN ENTRE LA IMPUGNABILIDAD DE SENTENCIAS Y DE AUTOS DEFINITIVOS, EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, CON RELACIÓN A LA MATERIA LABORAL

"El trato diferenciado que se ha expuesto, se configura también como una violación al principio de igualdad, pues no está justificada la diferencia de tratamiento legal entre una y otra materia (art. 3 Cn).

Respecto del principio de igualdad, en la sentencia de amparo constitucional, pronunciada a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día tres de noviembre de dos mil diecisiete, en el juicio con referencia 492-2015, se determinaron los alcances del principio de igualdad, en los siguientes términos: "(...) En la Sentencia de fecha 4-V-2011, emitida en el proceso de Inc. 18-2010, se sostuvo que la igualdad es uno de los valores constitucionales —junto con el de libertad— en los que se concreta la justicia (art. 1 inc. 1° de la Cn.), entendida esta clásicamente como "dar a cada quien lo suyo". Además, la igualdad es un principio constitucional y un derecho fundamental, reconocido en el art. 3 inc. 1° de la Cn. De la igualdad, como principio constitucional, se deducen las siguientes obligaciones: (i) tratar de manera idéntica las situaciones jurídicas idénticas; (ii) tratar de manera diferente las situaciones jurídicas que no comparten ninguna característica, (iii) tratar de manera igual aquellas situaciones jurídicas en las cuales las similitudes son más relevantes que las diferencias y (iv) tratar de manera diferente aquellas situaciones jurídicas en las cuales las diferencias son más relevantes que las similitudes. De lo anterior se colige que, si bien la igualdad se presenta como un mandato de carácter predominante formal, su correcta aplicación requiere del intérprete la valoración de las circunstancias concretas de las situaciones jurídicas comparadas, a efecto de determinar si procede equiparar o diferenciar. Inclusive, existen casos en los cuales se puede justificar constitucionalmente el nato diferenciado, por medio de acciones positivas, a fin de lograr la igualdad formal en el plano real; se habla, en ese sentido, de "igualdad material". La igualdad, como principio constitucional, irradia hacia todo el ordenamiento jurídico, en su creación y aplicación. Así, el legislador, al momento de expedir la normativa secundaria, debe tratar de manera paritaria a los ciudadanos que se encuentran en situaciones equiparables (igualdad en la formulación de la ley). Por su parte, los funcionarios de la Administración y del Órgano Judicial deben resolver de modo idéntico los supuestos idénticos (igualdad en la aplicación de la ley). Más aun, es posible afirmar que la igualdad alcanza a las relaciones jurídicas que se entablan entre los particulares; es decir, su eficacia no es solo vertical, sino también horizontal. Por ejemplo, en el ámbito laboral, la contratación o la remuneración discriminatorias constituyen vulneraciones del principio de igualdad. Con base en el art. 3 inc. 1° de la Cn., toda persona tiene derecho a exigir al Estado y, en su caso, a los particulares que se les brinde un trato igual frente a situaciones jurídicas idénticas o equiparables y a exigir que se les brinde un trato desigual frente a situaciones totalmente diferentes o que no sean equiparables. B. En ese orden, es pertinente aclarar que, cuando se dice que dos personas, cosas o situaciones son iguales, ello no significa que sean

idénticas, sino que comparten por lo menos una característica. Incluso, un juicio de igualdad parte de la idea de que existen diferencias entre las personas, cosas o situaciones comparadas. Asimismo, al tratarse de un concepto relacional, la igualdad no puede predicarse en abstracto de las personas o cosas, sino que se es igual respecto a otra persona o cosa y con respecto a cierta o ciertas características. Para formular un juicio de igualdad debe contarse por lo menos con dos personas, cosas o situaciones (las que se comparan) y una o varias características comunes (el término de comparación). Además, los juicios de igualdad no describen la naturaleza ni la realidad de las personas o cosas comparadas. Más bien, descansan en la elección de una o más propiedades comunes — decisión libre de quien formula el juicio— respecto de las cuales se afirma o niega la igualdad. Por último, para que un juicio sobre igualdad tenga relevancia jurídica no basta con el establecimiento del término de comparación. Es necesaria la imputación de consecuencias jurídicas a los sujetos comparados, como consecuencia de la igualdad o desigualdad encontradas. En términos más concretos, la afirmación de que dos situaciones jurídicas son iguales o diferentes servirá de justificación para formular una regla de trato igual o desigual, según sea el caso" (sic) (negritas propias).

Es así como la Sala de lo Constitucional, ha establecido que "De la igualdad, como principio constitucional, se deducen las siguientes obligaciones: (i) tratar de manera idéntica las situaciones jurídicas idénticas; (ii) tratar de manera diferente las situaciones jurídicas que no comparten ninguna característica, (iii) tratar de manera igual aquellas situaciones jurídicas en las cuales las similitudes son más relevantes que las diferencias y (iv) tratar de manera diferente aquellas situaciones jurídicas en las cuales las diferencias son más relevantes que las similitudes (...) La igualdad, como principio constitucional, irradia hacia todo el ordenamiento jurídico, en su creación y aplicación. Así, el legislador, al momento de expedir la normativa secundaria, debe tratar de manera paritaria a los ciudadanos que se encuentran en situaciones equiparables (igualdad en la formulación de la ley)".

En el caso analizado se advierte que, la regulación que ha realizado el legislador en cuanto a la diferenciación entre la impugnabilidad de sentencias, y la de autos definitivos, en materia civil y mercantil, con relación a la materia laboral, es decir, ese trato "diferente", se aleja de la obligación que le impone la Constitución, de "tratar de manera idéntica las situaciones jurídicas idénticas", pues, aun cuando se trata de situaciones idénticas, han sido reguladas de manera distinta.

La anterior afirmación se hace precisamente, debido a que, en cuanto a la naturaleza de las decisiones recurribles, es decir, que se trate de sentencias o de autos, no existe razón para que se reduzca la posibilidad de impugnación en materia laboral, solo a las sentencias; si la misma se extiende hasta decisiones que constituyen autos, en materia civil y mercantil.

En esa orientación, cabe destacar que la casación civil y mercantil admite la impugnación de decisiones pronunciadas por la Cámara de segunda instancia, cuando tenga carácter definitivo -ya sea por medio de sentencia o auto-, dados los efectos materiales que se despliegan en estos, y obviamente, sin

perjuicio de las respectivas limitaciones que representan cada tipo de proceso en particular.

En el ámbito del derecho laboral, debe tomarse en cuenta esas mismas consideraciones, en cuanto a que las decisiones impugnables en apelación, generalmente, revisten las mismas características objetivas de la casación civil.

Así, por ejemplo, cuando ambas instancias rechazan la pretensión por medio de autos definitivos, por considerar defectos materiales que inciden en la misma, conlleva a la imposibilidad del particular para continuar con la discusión de su reclamo. Precisamente, se habilitan los medios recursivos, ordinario y extraordinario, para confrontar la decisión de aquellas, tal como se ha sostenido en el caso 348- CAM-2017, dictado por esta Sala el veintidós de junio de dos mil dieciocho.

De ahí que, no existe una justificación razonable para excluir en materia laboral esta clase de autos que pueden producir un menoscabo a las garantías del derecho de defensa y de igualdad procesal a las partes, que se ven restringidas en la impugnación al limitarla únicamente a sentencias, sin considerar los efectos jurídicos que pueden ocasionar los autos definitivos.

En consecuencia, esa regulación diferenciada, es contraria al principio de igualdad proclamado por nuestra Constitución.

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de modificación de los precedentes jurisprudenciales, la Sala de lo Constitucional, ha sostenido lo siguiente: “IV. No obstante, la afirmación antes realizada no puede entenderse en forma absoluta. Si bien existe una obligación constitucional de respetar los precedentes, derivada de la igualdad y la seguridad jurídica y del sometimiento de los jueces al ordenamiento jurídico, lo cierto es que existe la posibilidad de modificarlos con base en dos razones: (i) la Constitución contiene disposiciones concentradas, por lo que no predetermina la solución a todos los conflictos que pueden presentarse por su aplicación; y (ii) el dinamismo de la realidad obliga a una interpretación actualizada de la Constitución (sentencia de 25-VIII2010, Inc. 1-2010). Aunque el auto precedente posibilita la pre comprensión jurídica de la que parte toda interpretación, la continuidad de la jurisprudencia puede flexibilizarse en determinados supuestos. Para ello se exige que la modificación de los precedentes esté especialmente justificada con un análisis crítico de la antigua jurisprudencia. Debe reconocerse que los auto precedentes no son definitivos ni válidos para todos los tiempos. No son definitivos porque la amplia variedad y el continuo cambio de la realidad normada pueden producir nuevas situaciones que los juzgadores deben resolver ineludiblemente. Además, la renovación subjetiva de los tribunales puede traer aparejada la diversidad del pensamiento de los juzgadores; y siempre es posible la relectura de las disposiciones jurídicas y de los precedentes que las han aplicado. Tampoco ellos son válidos para todos los tiempos pues la interpretación siempre tiene una referencia de actualidad sobre el orden jurídico, de modo que no puede sostenerse la inmutabilidad de la jurisprudencia. Y resulta de mayor conformidad con la Constitución entender que, no obstante exista un pronunciamiento desestimatorio en un proceso de inconstitucionalidad, ello no impide que esta sala emita un criterio jurisprudencia) innovador, al plantearse una pretensión

similar a la desestimada, cuando circunstancias especiales y justificadas obliguen a reinterpretar la normativa (resoluciones de 23-VII-2004 y de 7-VII-2005, emitidas en los procesos de Inc. 202004 y 31-2005). 11 Se han considerado como circunstancias válidas para modificar un precedente: (i) estar en presencia de un pronunciamiento cuyos fundamentos normativos son incompletos o erróneamente interpretados; (ii) el cambio en la conformación subjetiva del tribunal; y (iii) cuando los fundamentos fácticos que le motivaron han variado sustancialmente al grado de volver incoherente el pronunciamiento originario con la realidad normada. Es importante reiterar que los supuestos habilitantes para la modificación de un autoprecedente siempre requieren de una justificación especial (sentencia de Inc. 1-2010, ya citada). Para esta decisión interesa profundizar en el supuesto concerniente a pronunciamientos cuyos fundamentos normativos sean incompletos o contengan una interpretación errónea de alguna disposición jurídica, porque es el que permitirá determinar si es necesario modificar la interpretación que con anterioridad se hizo del art. 133 ord. 3° Cn. y, con base en ello, analizar si la iniciativa que diputados de la Asamblea Legislativa dieron a la LP constituye un vicio de forma por infracción del art. 133 ord. 3° Cn. La modificación del precedente exige señalar el error interpretativo en que ha incurrido la decisión que se presenta como precedente. En estos casos, la delimitación del grado del error pasa por analizar si la decisión previa o precedente ha tomado o no en consideración la eventual concurrencia de otra disposición constitucional que varíe el contexto normativo con arreglo al cual se emitió el pronunciamiento" (sentencia de Inconstitucionalidad, de las catorce horas con once minutos del día nueve de febrero de dos mil dieciocho, pronunciada en el juicio con referencia número 6-2016/2-2016).

En el presente caso, se ha razonado suficientemente la vulneración al derecho a recurrir, audiencia, defensa, así como al principio de igualdad, que se produce con el diferente e injustificado tratamiento que ha dado el legislador a la materia laboral, respecto de las materias civil y mercantil; así como el perjuicio que se llega a causar en casos en que, al negarse la casación, ni siquiera se logró discutir el asunto en una segunda instancia".

LOS ARTS. 586 CT Y 519 CPCM, RESULTAN CONTRARIOS AL DERECHO A RECURRIR Y AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCLAMADOS EN LA CONSTITUCIÓN, POR TANTO, NO DEBEN SER APLICADOS POR ESTA SALA

"Respecto de los requisitos para declarar la inaplicabilidad de una norma, la Ley de Procedimientos Constitucionales establece las siguientes regulaciones:

Art. 77 -B: "LOS JUECES AL MOMENTO DE INAPLICAR UNA LEY, DISPOSICIÓN O ACTO, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 185 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBERÁN TOMAR EN CUENTA AL MENOS LOS SIGUIENTES CRITERIOS: A) LA LEY, DISPOSICIÓN O ACTO A INAPLICARSE DEBE TENER UNA RELACIÓN DIRECTA Y PRINCIPAL CON LA RESOLUCIÓNDEL CASO, ES DECIR, ELLA DEBE SER RELEVANTE PARA LA RESOLUCIÓN QUE DEBA DICTARSE; Y, B) LA NORMA A INAPLICARSE DEBE RESULTAR

INCOMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN, AUN LUEGO DE HABERSE ACUDIDO A INTERPRETARLA DE CONFORMIDAD CON ELLA".

Y el art. 77-C de esa misma ley, dispone que "LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE LA INAPLICABILIDAD DE CUALQUIER DISPOSICIÓN, DEBERÁ EXPRESAR AL MENOS: LAS RAZONES QUE LA FUNDAMENTAN, LA LEY, DISPOSICIÓN O ACTO CUYA INAPLICABILIDAD SE DECLARA Y LA NORMA O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE CONSIDERE VULNERADO POR AQUÉLLOS".

La Sala de lo Constitucional, con relación a los anteriores requisitos ha sentado los siguientes criterios: "(...) el art. 77-B letra a LPC establece que la disposición que se somete al control difuso "debe tener una relación directa y principal con la resolución del caso, es decir, ella debe ser relevante para la resolución que deba dictarse". Esta exigencia tiene fundamento en el art. 185 Cn., en el sentido que los jueces han de ejercer el control difuso en los casos en que tengan que emitir autos o pronunciar sentencia, tal como lo señala el art. 77-A inc. 1° parte final LPC o en todo acto jurisdiccional en el que se depure el ordenamiento jurídico dado que este mecanismo de control de constitucionalidad puede tener lugar en cualquier etapa del proceso (sentencia de 5-VI-2012, Inc. 192012). La relación directa y principal con la resolución del caso o relevancia está vinculada con el sometimiento de los magistrados y jueces al Derecho. Lo que se quiere decir con ello es que el juez o tribunal que ejerce el control difuso debe identificar la disposición que considera contraria a la Constitución. Además, es necesario que los jueces hagan un análisis de relevancia en virtud del cual se argumente que la resolución a emitir depende de la norma cuestionada. En otras palabras: el control difuso presupone dos juicios: el de pertinencia y relevancia de la norma para resolver el caso. En cuanto al juicio de relevancia (art. 77-C LPC) la resolución que declare la inaplicabilidad deberá expresar el esquema argumenta) que demuestre que el fallo o decisión del proceso judicial ordinario depende de la validez de la norma cuestionada. El juicio de relevancia se integra por tres elementos: la aplicabilidad o pertinencia de la norma, relevancia "en sentido estricto" para el juicio principal y concreción del examen. La aplicabilidad o pertinencia consiste en que la norma legal inaplicada por el juez o tribunal ordinario debe regular el caso que constituye la controversia o petición principal del proceso. Esto significa que debe existir cierta correlación entre el caso genérico que la norma describe y al que se atribuye una consecuencia normativa, y las circunstancias concretas de las partes del proceso. La relevancia "en sentido estricto" de la norma legal para el juicio principal implica que la decisión del proceso ordinario dependa de la validez formal o material de la norma legal inaplicada. En otros términos, implica el hecho de que la norma cuestionada sea determinante para el resultado del proceso, a la vista del tipo de procedimiento y de lo pedido por las partes. De modo que debe existir una conexión directa entre la eventual expulsión del ordenamiento jurídico de la norma legal cuya constitucionalidad se cuestiona y la satisfacción de pretensiones objeto de petición por las partes en el proceso ordinario. El juicio de relevancia exige que el juez no se limite a afirmar que el fallo o decisión depende de la validez de las disposiciones legales

inaplicadas en el caso específico. En realidad se requiere que razone suficientemente por qué la validez de la norma que cuestiona puede ser determinante para la decisión del caso. Esto garantiza que la autoridad judicial requirente no trate de formular un proceso de inconstitucionalidad abstracto, desconectado de la resolución del proceso que conoce. La argumentación debe ser consistente y razonable, por lo que no se tendrá cumplido el requisito cuando la autoridad requirente haya forzado los términos de la conexión entre la validez de la norma y la decisión del proceso con el objeto de poder cuestionar una norma que él considera inconstitucional. Solo si efectivamente la relevancia puesta de manifiesto por el juez resulta coherente, podrá tenerse por observado este elemento. La concreción del examen implica que el juez o tribunal indique con claridad cuál resolución debe dictar en el proceso ordinario y hasta qué punto su contenido resulta afectado por la validez de la norma inaplicada y cuya constitucionalidad somete a examen de esta sala" (inconstitucionalidad 20-1018, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las doce horas con treinta y dos minutos del día dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en el juicio con referencia 20-2018).

En el presente caso, se ha razonado suficientemente la vulneración al derecho a recurrir, audiencia, defensa, así como al principio de igualdad, que se produce con el diferente e injustificado tratamiento que ha dado el legislador a la materia laboral, respecto de las materias civil y mercantil; así como el perjuicio que se llega a causar en casos en que, al negarse la casación, ni siquiera se logró discutir el asunto en una segunda instancia.

Como consecuencia de los razonamientos expuestos, se concluye claramente que los arts. 586 CT, y 519 CPCM, resultan contrarios al derecho a recurrir y al principio de igualdad proclamados por nuestra Constitución, por tanto, no deben ser aplicados por esta Sala, al pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, respecto de resoluciones laborales, que constituyen autos. Por lo que debe ser declarada su inaplicabilidad, y resolverse partiendo de la base de que no existe la restricción que los mismos establecen, por ser contrarios a la Constitución de la República. Así mi voto razonado. San Salvador, diecisiete de diciembre de dos mil veinte".

Sala de lo Civil, número de referencia: 169-CAL-2020, fecha de la resolución: 17/12/2020

Relaciones:

Sala de lo Civil, número de referencia: 226-CAL-2019, fecha de la resolución: 17/12/2020

MATERIA: MERCANTIL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CUANDO SE SUSCITEN CONFLICTOS POR IMPAGO DE UNA MUNICIPALIDAD, SERÁN DIRIMIDAS DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LA LEY ESPECIAL QUE LE RIGE Y, SEGÚN LO PREVISTO CONTRACTUALMENTE

"Análisis del quebrantamiento de las formas esenciales del proceso.

II) Esta clase de vicio requiere haberse denunciado por parte de quien lo alega en el momento oportuno, es decir, durante la sustanciación de la causa y en los recursos de la instancia superior próxima, conforme a lo previsto en el art. 7 de la Ley de Casación.

En este sentido, se advierte que el recurrente ha denunciado la falta de competencia antes expuesta, tanto en primera como en segunda instancia.

De ese modo, esta Sala procederá a analizar si tal como lo ha sostenido el impetrante, el proceso mediante el cual se ha dirimido el incumplimiento contractual entre el Municipio de Chirilagua del departamento de San Miguel y, la sociedad recurrente Z M Constructores, S.A. de C.V., se encuentra viciada de nulidad por falta de competencia objetiva y en razón de la materia, por parte del tribunal ante quien se interpuso la demanda.

Para poder obtener un estudio consecuente al vicio de forma invocado, esta Sala considera necesario hacer una distinción entre ambos sectores de competencia de la jurisdicción; debiendo partir del análisis de competencia objetiva del tribunal de lo Civil ahora de Familia de San Miguel, con referencia a la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes y, en virtud del carácter mercantil de los actos emanados por la sociedad accionante.

-Del ámbito *objetivo de la jurisdicción civil*

Al respecto, es necesario tomar en cuenta la definición del ámbito objetivo de la jurisdicción civil, que consiste en precisar qué tipo de litigios deben resolver los órganos judiciales del orden civil y cuáles, por el contrario, deben ser planteados o decididos por tribunales de otros órdenes de la jurisdicción ordinaria, o por otros órganos jurisdiccionales.

Así pues, como regla general, los tribunales civiles tienen jurisdicción para tramitar y decidir los procesos que tengan por objeto situaciones jurídicas reguladas por el derecho civil y mercantil.

La demanda interpuesta por la sociedad [...], a través de su procurador licenciado [...], versa fundamentalmente en reclamar la cantidad de treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve con setenta y nueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América, en razón de incumplimiento de pago por parte de la Alcaldía Municipal de [...], en la ejecución de la obra denominada [...].

Respecto a la obra objeto de contratación, ésta puede enmarcarse dentro la calificación de una obra pública de acuerdo a lo regulado en el art. 22 literal "A"

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, (en adelante LACAP) con relación a la definición prevista en el art. 104 de la misma ley.

De la regulación especial de dicha contratación, también se desprende que las obligaciones derivadas de un contrato de obra pública se regirán por las cláusulas del mismo contrato, la documentación contractual, las disposiciones de la citada ley y las contenidas en el derecho común, art. 104 *in fine* LACAP.

En esa línea de pensamiento, la declaratoria de incumplimiento por falta de pago de la referida obra, que no esté comprendido dentro de una declaración de voluntad de la administración pública como acto propiamente administrativo, podrá dirimirse ante los tribunales comunes si de esa forma lo han estipulado las partes.

A pesar que, el reclamo de pago por la construcción de la obra, se constituyó mediante un proceso de licitación pública y se adjudicó a través de un acto administrativo, cuando se suscitan conflictos en razón de un impago por parte de la municipalidad, serán dirimidas de conformidad a lo previsto en la ley especial que le rige y, según lo previsto contractualmente.

Al respecto, cabe señalar que la municipalidad y la contratista en el caso que nos ocupa, acordaron que, en caso de una controversia surgida a raíz de la ejecución del contrato de obra antes relacionado, se dirimirá de la siguiente forma: 1) discusión del problema y 2) en caso de no llegar a una solución plausible, acudirían a la vía jurisdiccional.

La forma de estipulación antes referida, es contraria a lo que discurre el impugnante, respecto a que debía haberse impulsado previamente el trato directo y posteriormente el arbitraje, pues debe tenerse en consideración que cualquier solución alterna a las controversias entre las partes contratantes, como el trato directo o el arbitraje previsto en el título VIII, capítulo I, sección I y 2 de LACAP, esto debió haberse pactado como alternativa en los documentos contractuales y las bases de la licitación.

Debe traerse a cuenta que la demanda de reclamo de pago fue interpuesta por la sociedad accionante el treinta de junio de dos mil diez; pero el contrato de obra de introducción de agua potable, en el caserío Mundo Nuevo, del municipio de [...] , se constituyó en febrero de dos mil seis.

En ese orden de ideas, el art. 161 LACAP vigente en la época de celebración del contrato de mérito, aún no había sido reformado por el decreto 725 de fecha dieciocho de mayo de dos mil once, en el cual expresamente se dispone acudir directamente a la vía judicial de los tribunales comunes en caso de litigio; pero aun sin haberse reformado, cabe destacar, que la citada disposición tampoco establecía de forma imperativa la vía del arbitraje o el trato directo.

Textualmente el art. 161 y 162 LACAP del decreto legislativo 868 de fecha cinco de abril del año dos mil, publicado en el diario oficial número 88, del quince de mayo del mismo año, regulaba lo siguiente: “Art. 161.- Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de los contratos, se observará el procedimiento establecido en este capítulo, en particular el arreglo directo y el arbitraje de árbitros arbitradores”. Y continua expresando el art. 162

lo siguiente: “Agotado el procedimiento de arreglo directo, si el litigio o controversia persistiere, las partes **podrán** recurrir al arbitraje”. (sic)

Del tenor literal de las normas antes transcritas, se infiere que estas no disponen de forma imperativa el sometimiento a los medios alternos de solución de conflictos. La interpretación de los preceptos legales en referencia, debe hacerse a la luz de la forma establecida en el art. 19 CC que en general determina: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.

Por consiguiente, debe desestimarse el alegato referente a la incompetencia objetiva, en virtud de que debía considerarse como presupuesto procesal, acudir preliminarmente al arbitraje para la solución alterna de los conflictos surgidos entre la municipalidad y la sociedad accionante, dado que en las bases de la licitación y, el documento contractual que corren agregados de folios [...] de la pieza principal, esta Sala constata que se ha estipulado únicamente el trato directo o discusión, excluyéndose el pacto de arbitraje de forma convencional.

Es así que, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, rige estos medios alternos en el art. 161 y 162 como solución de controversias, previendo que los contratantes han optado por este conducto.

Tal circunstancia, se confirma en el contrato de obra pública del caso que nos ocupa, denominado [...] en el que se estipuló en la cláusula décima cuarta, solución de controversias, lo siguiente: “Cualquier diferencia, cuestión o disputa que se suscite o exista entre las partes con motivo de la vigencia del presente contrato, su interpretación o ejercicio, serán primeramente aclaradas o definidas entre las partes en discusión; pero si no se llegare a un acuerdo razonable después de agotar los medios pertinentes, la disputa será sometida a los tribunales comunes”. [...].

LAS VÍAS ALTERNAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, COMO EL ARBITRAJE O EL TRATO DIRECTO, PROCEDEN CUANDO HA SIDO CONVENCIONAL ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA

“Con respecto a las vías alternas de solución de conflictos, la misma sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia marcada con referencia 473/2007 del tres de febrero de dos mil catorce, estableció que el sometimiento a un arbitraje o trato directo, procede cuando ha sido convencional entre la Administración contratante y el contratista, al manifestar lo siguiente: “[...] El contrato de servicios No. BS 001/2005 prescribe, en la cláusula décima sexta: solución de conflictos: “Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren entre las partes, y antes de hacer efectivas las garantías presentadas o las cláusulas relativas a la caducidad o terminación del contrato, nos sometemos a: a) Arreglo Directo: Las partes contratantes procuraremos solucionar las diferencias a través de nuestros representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en Acta de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso, y b) Después de haberse intentado el Arreglo Directo sin solución a algunas diferencias se recurrirá a los Tribunales Comunes”. **De la cláusula**

anterior puede inferirse una sujeción de las partes contratantes a los medios alternos de solución de conflictos, previo a la ejecución de las garantías presentadas y las cláusulas relativas a la caducidad o la terminación del contrato. El Arreglo o Trato Directo constituye una forma alterna de solución de las controversias contractuales, previsto en los artículos 163 y 164 de la LACAP. [..3 Si bien es cierto dicho mecanismo coadyuva a una posible solución de conflicto, ello no constituye una obligación para la Administración Pública de acceder a las peticiones de la contratista. Para el caso de autos, las partes acordaron sujetarse, en virtud de la cláusula décima sexta, a este mecanismo alterno de solución de conflicto, previo hacer efectivas las garantías presentadas".

Nótese que la jurisdicción contencioso administrativa, ha determinado dicho criterio en un proceso en el que se resuelve la ilegalidad de un acto administrativo, respecto de un contrato suscrito antes de la vigencia de las reformas del art. 161 y 162 LACAP que modificó el mismo; en el sentido de remitir la controversia, directamente a los tribunales comunes. Sin embargo, antes de su vigencia, la referida Sala contemplaba la solución alterna de los conflictos, de forma potestativa según lo estipularán los contratantes.

Dicho criterio, se confirma en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que ha interpretado, asimismo, que el sometimiento al arbitraje regulado en el art. 161 y 162 LACAP, es una disposición derivada de la autonomía de la voluntad de las partes, lo que estableció en la sentencia Inc. 11-2010 de fecha treinta de noviembre de dos mil once, según la cual el arbitraje entre un ente estatal y el contratista se deberá cumplir siempre que se haya pactado entre éstos.

Dicha jurisprudencia estableció lo siguiente: "Al respecto, los artículos impugnados pueden ser interpretados en relación con el art. 162 del mismo marco legal. Así, de conformidad con el art. 161 LACAP, para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de los contratos se observará lo que en particular establezca dicha normativa sobre el arreglo directo y el arbitraje en derecho. Luego, según el art. 162 LACAP, agotado el procedimiento de arreglo directo, si el litigio o controversia persistiere, las partes podrán recurrir al arbitraje. Nótese que la modalidad deóntico establecida en la disposición legal citada en último término -"podrá"- confiere una libertad a las partes -dentro de las cuales se encuentra el Estado- para elegir el mecanismo heterocompositivo que habrá de dirimir el conflicto que surgiere con respecto a la ejecución de los contratos. A partir de lo anterior, la regla que se deriva de lo expuesto precedentemente es la siguiente: el mecanismo adjudicativo mediante el cual habrán de resolverse los conflictos que surjan como consecuencia de la ejecución de los contratos en que intervenga el Estado puede ser o bien el arbitraje o bien la jurisdicción; sin embargo, elegido el arbitraje, este tendrá que ser de derecho. [...] En definitiva, se trata de la posibilidad de que el Estado se someta a la decisión de un tercero, en relación con el cual se despojará de su imperium y, por ello, actuará como un privado más. [...]"

En este contexto, tal como se ha relacionado en párrafos anteriores, en la contratación celebrada entre la municipalidad y la sociedad accionante, no se ha determinado convencionalmente el sometimiento al arbitraje en caso de litigio,

sino que únicamente se acordó la "discusión" previa en virtud de alguna diferencia que se suscitara entre ambas."

EL RECLAMO DE UNA CANTIDAD DE DINERO PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, QUE DEVIENE DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL BILATERAL, DEBE DIRIMIRSE EN LOS TRIBUNALES COMUNES

"Ahora bien, respecto a la competencia objetiva de los tribunales comunes de primera instancia, se ha establecido en la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, la forma en que debe entenderse la contratación de carácter administrativa y, la competencia de dicho ente jurisdiccional, para dirimir la legalidad de la actuación de la administración.

En consonancia a la competencia administrativa en materia de contratos, la sentencia marcada con referencia 473/2007 del tres de febrero de dos mil catorce, la Sala en referencia, sostuvo en el numeral 3.1 de la misma que: T..] En el acto administrativo la emanación y el contenido de toda declaración depende de la voluntad de un solo sujeto de derecho, llámese Administración Pública. Se excluye entonces del concepto de acto administrativo a los contratos -acuerdo de voluntades-, ya que, como se dijo con anterioridad, el acto administrativo tiene como característica esencial la unilateralidad. Es así que la facultad de juzgar de este tribunal no comprende los contratos administrativos, por lo que enjuiciar el fondo de la petición planteada por la parte actora en el escrito de folios [...], respecto de ordenar a la autoridad demandada el pago del monto que le adeuda, en virtud de la prórroga del contrato No. BS 001/2005, resulta improcedente [...]" (sic) [...]

Continúa manifestando la misma sentencia lo siguiente: [...] es necesario reinterpretar el alcance de la competencia de esta Sala en materia de contratos administrativos regidos por la LACAP. En materia de contratación pública la línea jurisprudencial está fundada en la teoría de los actos separables, que consiste en atribuir a la jurisdicción contencioso administrativa las controversias relativas **a los** actos que son tanto preparatorios a la celebración de un contrato **(todos los comprendidos en el procedimiento de licitación que culminan con la adjudicación misma),** que implican terminaciones unilaterales, como a las sanciones ocurridas después de firmado el contrato. Entendidas estas, tanto las multas como algunas causas de extinción de los contratos". (sic)

En correspondencia a la jurisprudencia sostenida en la sentencia relacionada, esta Sala estima que el reclamo planteado por la sociedad [...] , en contra del Municipio de [...], por el incumplimiento de pago de cantidades de dinero por la obra contratada, es viable dirimirse a través de los tribunales comunes, ya que los montos insolutos reclamados por la ejecución del contrato, son hechos independientes a los actos preparatorios a que se refiere la citada sentencia; tratándose más bien, de un asunto de fondo que emerge de las relaciones contractuales entre las partes.

La demora en el pago del precio del contrato por parte de la municipalidad, es un hecho que de acuerdo a la doctrina en derecho administrativo, concede

al contratista el derecho a la indemnización por los costes de cobro de la deuda en los términos fijados en la legislación comercial. Debe tomarse en cuenta que en la relación bilateral, si bien existen actos unilaterales de la administración, que atañen a su autotutela administrativa, esas potestades conciernen esencialmente a la interpretación, modificación o resolución del contrato, exclusivamente conferidas a la referida administración. (Derecho Administrativo, el fin, los medio y el control; David Blanquer, Tirant lo Blanch, Valencia 2010, pag. 776 y 790 in fine)

En consecuencia de lo antes relacionado, esta Sala considera que el reclamo planteado por la sociedad actora en contra del Municipio de [...], no pretende discutir ningún aspecto que concierne a la jurisdicción administrativa sobre actos de su propia naturaleza, tal como la constitución, modificación, interpretación o resolución del contrato; sino más bien, el reclamo de una cantidad de dinero pendiente de pago por parte de la municipalidad, deviene de la relación contractual bilateral suscrita entre ambas partes, que debe dirimirse por los tribunales comunes ya que dicho asunto es separable de los actos propiamente administrativos que conformaron la referida contratación.

Lo anterior se basa también en lo dispuesto en el art. 94 literal b) de la LACAP que establece: "Los contratos también se extinguen por cualquiera de las causales de caducidad, sin perjuicio de *las* responsabilidades contractuales por *incumplimiento* de las *obligaciones".*

LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA CIVIL O MERCANTIL, ENTRE UN PARTICULAR Y LA MUNICIPALIDAD, SIEMPRE QUE NO VERSE SOBRE LA LEGALIDAD DE ACTOS ESTRICTAMENTE DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, CORRESPONDERÁ A LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA

"Por otra parte, con relación a la competencia objetiva de los tribunales comunes, esta Sala considera necesario dejar establecido que la referida competencia para conocer de una demanda civil o mercantil entre un particular y la municipalidad, en esta clase de contrataciones, siempre que no verse sobre la legalidad de actos estrictamente de carácter administrativo, corresponderá a los tribunales de primera instancia.

Ello es así, debido a que las municipalidades son un gobierno autónomo de acuerdo a lo que el Código Municipal estableció a partir del art. 157, lo que implica que no forma parte del gobierno central o los órganos estatales que conforman propiamente al Estado.

Al respecto, la Sala de lo Constitucional en la sentencia de amparo 498-2005 del cinco de diciembre de dos mil seis, con relación al sistema de gobierno autónomo de las municipalidades ha sostenido en lo atinente que: "[...] En adición a lo anterior, arguyó que la Ley del Ramo Municipal, normativa reguladora del régimen jurídico de las municipalidades antes de la entrada en vigencia del Código Municipal, le otorgaba competencia al Órgano Ejecutivo como el superior jerárquico de las municipalidades; pero en virtud del artículo 157 del Código

Municipal, dicha normativa quedó derogada, por lo que -como \ corolario- el artículo 42 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales en la parte que establece la posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas conozca en apelación de lo resuelto por el Alcalde Municipal no es más que un resabio histórico. [...] En este caso concreto, el asunto está vinculado con la temática de las vías públicas de comunicación terrestre y más concretamente a un conflicto relativo al de la propiedad de los impetrantes y su deslinde con un camino vecinal. Al respecto, a partir de la autonomía que la Constitución le otorga a las Municipalidades, el Código Municipal, vigente desde el uno de marzo de mil novecientos ochenta y seis, se perfila como la estructura normativa que debe regir todos aquellos asuntos que la misma determina como objeto de regulación y decisión de las autoridades municipales -Alcaldes y Concejos Municipales-. Así, dicha estructura normativa otorga al Concejo Municipal las atribuciones contenidas en el artículo 30 del Código Municipal, dentro de las que se extrae la dispuesta en el numeral 15: "Conocer en apelación de las resoluciones pronunciadas por el Alcalde y en revisión de los acuerdos propios". En consecuencia, esta Sala estima que no existe la incompetencia objetiva denunciada por el recurrente, relativa a que el litigio debía resolverse a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, razón por la que dicho alegato se desestimará."

A PARTIR DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA QUE POSEEN LAS MUNICIPALIDADES, SE COLIGE QUE ÉSTAS NO FORMAN PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL, POR SU AUTONOMÍA, TENDRÁN COMPETENCIA LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA

"A partir de la estructura orgánica que poseen las municipalidades, se colige que éstas no forman parte del gobierno central, y que, por su autonomía, tendrán competencia los tribunales de primera instancia, de conformidad a lo previsto en el art. 49 inciso 2° del Código de Procedimiento Civiles, cuerpo legal aplicable al caso que nos ocupa, por ser la normativa vigente al momento de incoarse la presente acción de incumplimiento y, que en lo conducente regula:

"Art. 49.- Las demandas civiles contra el Estado se presentarán a la Cámara de lo Civil de la Primera Sección del Centro, las que conocerán en primera instancia, a prevención. **Los Municipios, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y entes descentralizados del Estado serán demandados ante los tribunales comunes."**

Dicha competencia, ha sido asimismo dirimida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el conflicto de competencia con referencia 69-D-2006 de fecha veinticinco de enero de dos mil siete, en la que se estableció que el tribunal de lo mercantil de aquella época, era competente para conocer de la terminación de un contrato administrativo celebrado entre una sociedad y la municipalidad de San Marcos, misma en la que se manifestó lo siguiente: *"[...]* Y *es que el* acto *reiterado y constante constituye la actividad* cotidiana *del sujeto que* lo *hace. Esa repetición justamente es la que determina la diferencia entre el* acto *civil y mercantil. El primero es aislado, el segundo es sistemático,* producido en masa; y *esa producción masiva, está íntimamente ligada al* concepto *de empresa: una*

cosa *mercantil, un instrumento de comercio en manos* de *su titular. Sus características esenciales son: perseverancia,* realidad de *destino de sus componentes, y móvil* de *lucro que informa su actividad [...] En definitiva, pues, conforme a* lo relacionado *en las disposiciones transcritas, el Juez competente para ventilar y sentenciar* el proceso en examen, es *el Juez Quinto de lo Mercantil y así se declarará".*

Asimismo, el pleno de la Corte en la competencia con referencia 123-COM2019 del once de julio de dos mil diecinueve, dirimió competencia en un caso sobre el establecimiento de una obligación de pago suscitado entre una sociedad mercantil y una municipalidad, en la que se resolvió: "[...] el reclamo de la demandante no se dirige a controvertir actuaciones u omisiones de la administración pública, o la inactividad de esta o de sus concesionarios conforme al art. 3 LJCA [...] por el contrario la peticionaria exige que se declare la existencia de una obligación dineraria a cargo del Concejo Municipal de Turín quien está en deberle las cantidades consignadas en los quedan; no siendo esta una pretensión que deba ser ventilada ante la jurisdicción contencioso administrativa [...]"

En conclusión, de lo antes expuesto, la sociedad [...], estaba facultada para incoar su reclamo ante la jurisdicción ordinaria de primera instancia, respecto del incumplimiento de pago pendiente por los trabajos de construcción que pretendía de parte de la municipalidad demandada y de conformidad a lo pactado. A su vez, esta Sala advierte que la cláusula referente a la solución de controversias del contrato de mérito, requería que se procediera a discusión previo a un eventual litigio, lo que así se dio según consta a fs. 234 de la 2° pieza.

-Ámbito de competencia en razón de la materia

Ahora bien, es preciso también analizar la falta de competencia por razón de la materia como vicio de forma invocado por el impugnante, en el sentido que, a su juicio, el contrato cuyo cumplimiento se exigió en sede civil está comprendido dentro de las finalidades contenidas en la cláusula III de la escritura de constitución de la misma (sociedad contratista), siendo evidente también que una de las partes que lo otorgó, es un comerciante social.

En cuanto al punto relacionado, el recurrente concluye que la acción que debió ejercerse es una acción mercantil, en un juzgado de lo mercantil, y en un procedimiento mercantil, por ser actos mercantiles propios de su giro comercial, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 1, 2, 3 y 4 CCom."

LA RELACIÓN CONTRACTUAL DEVIENE DE UN ACTO DE COMERCIO RELATIVO Y MIXTO, EN TANTO QUE LA SOCIEDAD DEMANDANTE, SIENDO COMERCIANTE SOCIAL, AL CONTRATAR ACTUÓ EN LA EXPLOTACIÓN DE SUS FINALIDADES COMERCIALES, ES DECIR, ACTOS EN MASA

"En cuanto a las alegaciones planteadas, es pertinente señalar que el proceso mediante el cual se discute un litigio debe discurrir por los cauces procedimentales y la normativa sustantiva determinados en la ley especial, de acuerdo a la naturaleza y relevancia del asunto.

Particularmente, la competencia por razón de la materia, en algunos procesos se introducen especialidades procedimentales, siendo normas de derecho insoslayables. Contra su infracción puede la parte perjudicada pedir la declaratoria de nulidad de las actuaciones sino se ha observado, conforme lo dispone el art. 1130 CPrC.

Para deslindar la naturaleza jurídica del derecho que se pretende hacer valer, es preciso establecer que en el caso sub lite el contrato de ejecución de obra suscrito entre [...] y la municipalidad demandada, puede considerarse de naturaleza mercantil en razón de la calidad de los actos que realiza una de las partes.

En este sentido, los arts. 1, 2, 3 y 4 CCom, en lo pertinente regulan lo siguiente: "art. 1.- Los Comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones contenidas en este Código y en las demás leyes mercantiles U.]: el art. 2.- "Son comerciantes: II. Las sociedades, que se llaman comerciantes sociales"; art. 3.- "Son actos de comercio: I- Los que tengan por objeto la organización, transformación o disolución de empresas comerciales o industriales y los actos realizados en masa por estas mismas empresas [...]; y el art. 4.- "Los actos que sean mercantiles para una de las partes, lo serán para todas las personas que intervengan en ellos".

Las disposiciones relacionadas, prescriben de forma general, lo concerniente a los comerciantes y sus relaciones dentro de las actividades mercantiles ejercidas mediante publicidad o establecimiento. Asimismo, aquellas normas que los regirán y, las cosas que típicamente pertenecen al ámbito del comercio.

De este modo, se establece la naturaleza mercantil de un acto cuando se realiza una actividad económica de parte de un comerciante, ya sea individual o social, que es realizado por una empresa en la explotación de los factores económicos de la producción y del trabajo, o cuando el acto recae sobre una cosa mercantil.

Partiendo de la premisa anterior, es de tener en cuenta que el objeto del contrato denominado [...] celebrado entre la sociedad demandante y la municipalidad demandada, según cláusula tercera fue: "construir para el Contratante la obra descrita en la Cláusula Primera, de acuerdo a los documentos contractuales definidos en la cláusula segunda, siendo los alcances: Captación, Cisterna con Bomba Sumergible, Subestación Eléctrica, Tanque de Almacenamiento, trescientos cincuenta y cinco punto doce metros de tubería hierro galvanizado tipo liviano de dos y media pulgada, ciento veinte punto veinte metros de tubería hierro galvanizado tipo liviano de tres pulgadas.".

De la estipulación de la cláusula en referencia, se desprende que la sociedad contratista, tenía por objeto la ejecución de una obra de construcción y los alcances de la misma, de acuerdo a las bases de licitación pública número 01/ 2006 código 012006.LPI, que al efecto requirió la Alcaldía Municipal de [...]

A su vez, cabe advertir en los documentos que acreditan la constitución de la sociedad accionante, que la finalidad principal establecida para su actividad en la cláusula III del pacto social ha sido la siguiente: "La sociedad tiene por finalidad y destinará su capital a toda clase de actividades lícitas, especialmente para: a) El diseño, la construcción y supervisión de construcciones de bienes inmuebles

ya sean estos propios o ajenos; b) Asesoría de proyectos de construcción; c) La compraventa de bienes inmuebles rústicos o urbanos, para el desarrollo urbanístico o lotificaciones; d) La Compra y venta de bienes inmuebles así como la edificación de los mismos, para la venta al público, arrendamientos y subarrendamientos; e) La constitución, organización y participación en toda clase de sociedades, ya sean éstas nacionales o extranjeras, empresas industriales, financieras, turísticas, de servicios, comerciales, de la construcción y en todas las permitidas por la ley y también, constituir sociedades de cualquier naturaleza, con personas naturales o jurídicas; Prestar servicios y asistencias técnicas especializada, en los ramos de electricidad, arquitectura, ingeniería, construcción y diseño ya sea que las explote o no la Sociedad y la representación de casas extranjeras o nacionales de cualquier actividad económica, la administración y promoción de negocios, la compraventa de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o conexos para el funcionamiento de los objetivos de la Sociedad y todas clase de artículos de consumo, acciones, bonos, títulos valores de toda clase, derechos de participaciones sociales; g) Servir de fiadora y codeudora a terceras personas ya sean naturales o jurídicas; [...j j) La realización de toda clase de operaciones mercantiles y de toda clase de actos, accesorios y complementarios lícitos conducentes a su finalidad social, pudiendo realizar cualquier acto jurídico que conlleve al cumplimiento de cualesquiera de sus finalidades sociales. La anterior relación de finalidades es únicamente de carácter enunciativo, no siendo *taxativo, por lo cual la* sociedad podrá *realizar cualquier otra actividad de carácter lícito" (SIC).*

Claramente la descripción de finalidades propias de la sociedad [...], incluye la construcción y servicios especializados de ingeniería, que denotan la masificación de estos para la consecución de sus fines y, que precisamente por cuyos servicios fue contratada por la municipalidad demandada.

De esta finalidad, el impetrante argumenta que la construcción del referido proyecto, constituye un acto de comercio para la sociedad demandada, pues a su entender, siendo parte de sus finalidades que hace en masa como actos mercantiles, deberá serlo para todas las partes que intervengan con esta, conforme a lo previsto en el art. 4 CCom, y por ende, el tribunal de segunda instancia debió estimar como mercantil la naturaleza del proceso para ambas partes.

De las acotadas normas, se desprende la clasificación de los actos considerados de comercio y, que de acuerdo a la doctrina, en el ámbito mercantil, son conocidos como actos absolutamente y relativamente mercantiles, así como actos mixtos. Los primeros, se estiman absolutos siempre que se ejecuten en cualquier forma y con cualquier propósito, v.gr., las cosas típicamente mercantiles como los títulos valores.

Los actos relativos, son aquellos que pueden serlo y dejar de serlo, según concurran ciertas circunstancias, tales como: 1) que respondan a la noción económica de comercio; 2) actos que emanen de empresas; 3) actos accesorios o conexos a otros actos de comercio y 4) actos que se refieren al ejercicio del comercio.

Finalmente, los actos mixtos son actos de comercio para una de las partes que en ellos interviene, pero no para otra; lo que básicamente, hace que todos los actos de comercio, en ese sentido, sean mixtos puesto que se realizan habitualmente entre una empresa y el público, que no ve en ellos sino actos de su vida civil ordinaria.

Desde esta perspectiva, al realizarse un análisis sistemático de los actos mercantiles, esta Sala de casación considera que la relación contractual objeto de estudio, deviene de un acto de comercio relativo y mixto, en tanto que la sociedad demandante, siendo comerciante social, al contratar, actuó en la explotación de sus finalidades comerciales, es decir, mediante actos en masa.

Sin perjuicio que el ente público contratante no pertenezca a su esfera comercial, no por ello escinde la naturaleza del acto mercantil que ejecutó la referida sociedad como comerciante social, conforme a lo establecido en el art. 4 CCom; y es por tal razón, que el acto de la referida sociedad actora dentro de su esfera de acción se considera de comercio, del que nuestra legislación mercantil ha establecido el orden procesal en caso de controversia, que es el proceso sumario mercantil previsto en el art. 2 de la Ley de Procedimientos Mercantiles derogada."

SE CONFIGURA NULIDAD ABSOLUTA, AL SUSTANCIARSE LA DEMANDA DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN MATERIA CIVIL, NO MERCANTIL, INCURRIÉNDOSE EN EL QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA

"Delimitado así el ámbito del acto en cuestión, esta Sala considera que la demanda de incumplimiento por falta de pago del contrato planteado, que como se expuso era viable ventilarse a través de la jurisdicción ordinaria, debía por consiguiente tramitarse mediante el proceso sumario mercantil que le corresponde y, la Cámara sentenciadora, al dirimirlo por medio de un juicio civil ordinario, efectivamente ha incurrido en el quebrantamiento de forma invocado, por incompetencia en razón de la materia.

En consecuencia, en el caso sub judice, deviene una casual de incompetencia que no puede prorrogarse, en virtud de haberse sustanciado el mismo por un orden procedimental en materia civil y no mercantil y, tal como se ha establecido en los párrafos precedentes, tal incompetencia impone la sanción de declarar la nulidad absoluta del proceso de mérito, de conformidad a lo regulado en el art. 18 LC en relación al art. 1130 CPrC, lo que así se declarará."

Sala de lo Civil, número de referencia: 473-CAC-2018, fecha de la resolución: 29/10/2020

MATERIA: MEDIO AMBIENTE

MEDIDAS CAUTELARES AMBIENTALES

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, AL NO SER POSIBLE EL ACCESO A ESTA VÍA RECURSIVA EXTRAORDINARIA, DEBIDO A QUE LA LEY RESTRINGE SU CONOCIMIENTO EN RAZÓN DE LOS EFECTOS Y CARACTERES DE LA MISMA

"Tal como se ha sostenido en reiterada jurisprudencia, el recurso de casación contra una determinada resolución, resulta improcedente cuando la providencia no es de aquellas contra las que la ley concede esta clase de impugnación. En ese caso, no se procede examinar si el escrito impugnatorio reúne o no los requisitos, que la ley exige para su admisión, desde que el examen de estos presupone que el asunto puede ser sometido a la decisión del tribunal de casación.

Partiendo de tal premisa, esta Sala debe analizar inicialmente, la providencia sobre la que recae esta impugnación.

En ese sentido, se advierte que, en el caso analizado el recurso de casación es contra la resolución definitiva dictada por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, que declara firme el literal b) de la resolución proveída a las ocho horas tres minutos del diez de julio de dos mil veinte por el Juzgado Ambiental de San Salvador; que desestima el recurso de apelación, en contra del numeral uno de la parte resolutiva del auto proveído a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del veintidós de abril de dos mil veinte, en lo relativo al primer y segundo punto de apelación planteado en el respectivo recurso; y confirma el numeral uno de la parte resolutiva del auto proveído a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del veintidós de abril de dos mil veinte.

Respecto a la resolución impugnada en la diligencia de medida cautelar, cabe advertir que la normativa procesal vigente, ha contemplado de forma taxativa las decisiones judiciales que pueden ser objeto de examen por vía casacional. En esa orientación, dicho medio recursivo se encuentra delimitado por el tipo de providencia impugnable y por ciertos tipos de procesos, tal como lo disponen los arts. 519 y 520 CPCM.

A priori, es importante destacar, que las medidas cautelares o precautorias tienen como finalidad prevenir un daño y así evitarlo, mientras se entabla un proceso; o durante la tramitación del mismo que asegure el eventual cumplimiento de una condena.

Dichas medidas, tienen sus propias características, de las que podemos indicar dos de gran relevancia: a) la provisionalidad, que implica que la medida pueda ser revocada o modificada en cualquier momento, si cambian las circunstancias que se tuvieron en cuenta para decretarlas arts. 455 y 456 CPCM; y b) accesoriedad, porque se ordenan y se hacen efectivas, por un lado, como diligencia previa para la incoación de un proceso principal, o bien, como garantía de las resultas o ejecución del mismo. De tal suerte, que atendiendo a su

carácter secundario, su existencia depende de las circunstancias que le dieron origen, así como también, de las contingencias en el proceso principal.

En esa orientación, es necesario tomar en cuenta tales características, en tanto que los efectos de la decisión jurisdiccional de la medida adoptada previo a un proceso principal, como en el caso en análisis, no alcanza los efectos de cosa juzgada material Art. 434 CPCM. En consecuencia, carecen de un medio impugnativo extraordinario, en razón de la naturaleza de ésta y, de conformidad a los caracteres antes expuestos.

En concordancia a lo expuesto y a los precedentes dictados por esta Sala en los casos con referencias 160-CAA-2018, de fecha 30-VII-2018 y 73- CAA-2020, de fecha 04-VI-2020, no es posible el acceso a esta vía recursiva extraordinaria, en los casos de *diligencias* de *medidas cautelares,* debido a que la ley restringe su conocimiento en razón de los efectos y caracteres de la misma; de acuerdo a lo regulado en el art. 102-C inciso 5° de la Ley del Medio Ambiente, en relación con lo regulado en los arts. 255, 434 y 453 inc. 4° CPCM, mismos que habilitan únicamente la vía recursiva ordinaria, ya que en materia de casación no se concibe el examen de estas diligencias a causa del ámbito teleológico y fundamental del recurso, art. 519 y 520 CPCM.

Tomando en cuenta dicha situación, es imprescindible no perder de vista que en el caso objeto de estudio, estamos frente a una decisión judicial que, de acuerdo a nuestro orden jurídico procesal, no puede ser examinada mediante este recurso y, por tanto, se encuentra fuera del alcance de conocimiento de esta Sala de casación, por ser jurídicamente improcedente, lo que así se resolverá."

Sala de lo Civil, número de referencia: 183-CAA-2020, fecha de la resolución: 19/11/2020

ÍNDICE
LÍNEAS Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SALA DE LO CIVIL 2020

MATERIA: CIVIL MERCANTIL

Acción reivindicatoria 1

Prescripción extraordinaria de dominio 1

Reconvención de acción reivindicatoria de dominio 4

La certificación registral presentada no puede ser considerada como prueba idónea del dominio que se pretende reivindicar 4

La cámara ha incurrido en la omisión que se le atribuye, al no haber aplicado los incisos 4° y 5° del art. 35 de la Ley Relativa a las Tarifas y otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 5

La falta de incorporación al proceso del documento con el que se establezca la propiedad sobre el bien a reivindicar, presupuesto esencial para la pretensión reivindicatoria, deviene en una falta de legitimación activa que constituye una de las causas de improponibilidad de la demanda 7

Aclaración de la sentencia 8

No constituye un recurso, dado que no impide que la resolución Adquiera firmeza, sino una facultad de corrección y rectificación de errores materiales o aclaraciones de conceptos oscuros en la sentencia o auto definitivo 8

Definición de “error material” y “concepto oscuro” 9

No puede aceptarse la pretensión de utilizar “la aclaración” como un medio para controvertir el auto definitivo, y mucho menos, sin ser específica, de acuerdo a las formalidades exigidas por la ley 10

La aclaración solicitada no cumple con los supuestos señalados en el art. 225 CPCM 10

Habiendo precluido el momento procesal para alegar nulidades, y considerando que no puede ser alegada en esta etapa, debido a que la sentencia ha adquirido firmeza, deviene en improcedencia 12

Aplicación errónea de ley 12

Dentro de los requisitos de admisión de un recurso, por regla general, se hace la distinción entre los de forma y de fondo 12

Exigir una “resolución que se pretende”, en el recurso de apelación, constituye un requisito no provisto por el legislador para dicho medio impugnativo..... 14

Configuración del error in iudicando por aplicación errónea..... 15

Cierre temporal de establecimiento..... 15

Este procedimiento no reúne los requisitos de un “proceso” en su auténtico significado, pues son meras “diligencias”, no es posible ubicarlo como un verdadero proceso abreviado 15

Conflicto de competencia..... 16

Improcedencia de la denuncia de conflicto de competencia..... 16

Copias simples 17

Valor probatorio..... 17

La Sala advierte que la parte demandada, tanto en primera como en segunda instancia, no impugnó las fotocopias, sino a *contrario sensu*, dichos documentos fueron ofertados en original por la misma parte demandada..... 18

Declaratoria de herederos 18

La copia certificada por notario de la declaratoria, aunque no esté inscrita en el registro respectivo, es el documento idóneo para probar que la parte actora es heredera legítima del causante y, por lo tanto, está legitimada para intervenir como parte en el proceso 18

Declaratoria indebida de la improcedencia de la apelación..... 20

Diferencia entre capacidad para ser parte y postulación procesal 20

La legitimación de la personería aparece entonces como un presupuesto procesal para el válido planteamiento de la demanda; es decir, aparece como una condición de admisibilidad que posibilita entrar posteriormente al examen de la pretensión..... 22

Tratándose de un presupuesto subjetivo que encuadra en un defecto procesal subsanable, es procedente asimilar tal situación a lo prescrito en el art. 278 CPCM, como una causa para prevenir; por tanto, es procedente casar el auto impugnado por haberse configurado el motivo invocado..... 23

En la providencia objeto de apelación se ha rechazado indebidamente el recurso en forma liminar, consecuentemente es procedente casar el auto definitivo y ordenar el trámite de la alzada de mérito..... 25

Los juzgadores a fin de potenciar el derecho de defensa y contradicción, al momento de analizar un recurso, deben hacer caso omiso a rigorismos formales excesivos. 27

Declaratoria indebida de la inadmisibilidad de una apelación 27

Esta Sala considera que el apelante fundamenta sus agravios en la valoración de la prueba, alegando que fue admitida, pero no valorada por el a quo..... 27

Denegación indebida del recurso de apelación 29

Procede casar el auto recurrido, la exposición del agravio constituye uno de los presupuestos de ley que determinan la procedencia del recurso, no de su admisión, como lo ha exigido el ad quem. 29

Diligencias de pago sujeto a condición 31

Por su naturaleza representa un procedimiento en el que no existe contención de partes 31

Existencia de una improponibilidad de carácter subjetivo, es un requisito de ley que el pago deba ser hecho de forma pura y simple, pues si está sujeto a plazo o bajo condición suspensiva, debe haber expirado dicho plazo o debe haberse cumplido la condición 31

Diligencias de remedición de inmueble 32

Improcedencia del recurso de casación, puesto que la sentencia pronunciada en apelación, en los casos de oposición a la remedición, aun bajo los trámites de un proceso común, no produce los efectos de cosa juzgada sustancial 32

Enriquecimiento ilícito de funcionario público 33

Se cometió la infracción procesal de falta de congruencia, por lo cual esta Sala estima el punto impugnado, debido a que la demandada no ostentó ningún cargo público, siendo improcedente aplicarle la sanción de inhabilitación 33

Es inadmisible la prueba propuesta fuera de la etapa procesal establecida para su proposición y/o admisión..... 34

Se presume enriquecimiento ilícito cuando se da un aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo, hasta aquélla en que haya cesado en sus funciones 38

La carga de la prueba corresponde al demandado, quien tiene la obligación de justificar la procedencia de los fondos que ingresan a su grupo familiar 40

Inexistencia de litispendencia, en razón de la especialización del proceso civil de enriquecimiento ilícito..... 43

La excepción de prescripción es improcedente, dado que el proceso se inició antes de transcurrir diez años del cese en su cargo del funcionario público..... 45

Procedente modificar la cuantía de la condena impuesta, al realizar la integración del peritaje contable 47

El funcionario o persona acusada carga con la obligación de probar que, aún sin manejo de fondos públicos, el incremento patrimonial detectado no tiene como fuente el cargo que ha desempeñado 50

La configuración del litisconsorcio pasivo necesario, en los supuestos de enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público, está determinado por la ley 54

La acción de restitución de bienes al erario público debe promoverse en sede civil, no penal, puesto que en este proceso el demandado debe justificar el incremento patrimonial, lo cual es distinto a la responsabilidad civil a la que alude la Sala de lo Constitucional, y también es diferente a la responsabilidad civil que proviene de la comisión de un delito 56

Condiciones que subyacen en cuanto a la simultaneidad de los procesos de enriquecimiento ilícito y extinción de dominio 59

La culpa extracontractual o *aquiliana,* es la que subyace en la elaboración de la responsabilidad civil derivada por la comisión de un delito 61

El término «restitución» presupone la devolución a favor del damnificado de la cosa que fue desposeído, o su valor 62

La pretensión «indemnizatoria», comprende el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por el comportamiento que se reputa delictivo 63

Configuración de la violación al principio constitucional de non bis in ídem, se conculcó el derecho que tiene toda persona a no ser objeto de dos decisiones que afecten de modo definitivo su esfera jurídica por una misma causa. 67

Imposibilidad que los bienes sujetos al proceso civil de enriquecimiento ilícito pasen a la orden de los juzgados de extinción de dominio 68

Falta de fundamentación jurídica de la sentencia 70

Procede casar la sentencia al no citar las normas de derecho que resuelven los casos, ni justificar la aplicación e interpretación de las mismas 70

Improcedencia del recurso de casación 74

Tratándose de procesos ejecutivos, el recurso solo será admitido cuando su naturaleza atañe a la materia mercantil y, el documento base de la pretensión sea un título valor 74

Inadmisibilidad del recurso de casación 74

Procede cuando no se cumple con el requisito relativo al plazo de interposición 74

Procede al denunciar la infracción de un conjunto de normas jurídicas distintas entre sí, fundamentando el motivo en argumentos comunes y no individualizados 75

Se origina cuando el recurrente invoca una expresión que no comprende un submotivo tipificado en la Ley de Casación 76

Inaplicación de ley..... 77

Ausencia de la infracción alegada 77

Incongruencia de la sentencia 77

Ausencia de la infracción alegada, la referencia al principio de congruencia en el auto objeto de impugnación no constituye parte del fundamento jurídico del mismo..... 77

Infracción de doctrina legal..... 79

Imposibilidad de admitir el recurso de casación, al no tener claridad bajo qué circunstancia se fijó axioma de la máxima invocada..... 79

Para invocar esta infracción, no basta con señalar remotamente una sentencia en que se aborde el tema particular, sino que debe cumplir con el requisito de concurrir las tres providencias que hacen la doctrina legal, conforme al tema al que se alude..... 79

Imposibilidad de casar la sentencia por este submotivo, las sentencias relacionadas tratan sobre las certificaciones registrales, cuando no se cuenta con los originales y, dentro del proceso no se ha pretendido hacer valer ninguna de ellas en sustitución del título original..... 80

Infracción de requisitos internos y externos de la sentencia..... 81

El recurso de casación debe declararse improcedente por este submotivo, cuando la falta de fundamentación denunciada no recae en una sentencia, sino en el auto definitivo de improponibilidad la pretensión 81

Interpretación errónea de ley 83

Procede admitir el recurso por interpretación errónea del art. 2253 CC..... 83

Letra de cambio..... 83

Procede declarar no ha lugar a casar la sentencia, la cámara aplicó de forma correcta la disposición denunciada, en cuanto a tener por inobservados los requisitos esenciales de constitución de la letra de cambio como base de la acción cambiaría iniciada . 83

Nulidad de título municipal..... 86

Requisito para que el juzgador declare la nulidad de oficio 86

La demanda es improponible por falta de legitimidad para intervenir como parte en el proceso 87

Se configura el vicio de aplicación indebida de las disposiciones de Código Civil invocadas, en virtud que el título municipal es un acto sujeto al derecho administrativo, ya que es producto de una declaración unilateral del alcalde municipal que lo expide, previo procedimiento administrativo..... 88

El título municipal es un instrumento público de conformidad al art. 331 CPCM..... 90

El artículo 1329 CC no es aplicable a un título municipal, es procedente casar la sentencia por aplicación indebida de esta disposición 90

Inexistencia de la infracción alegada cuando el tribunal ad quem resuelve la nulidad solicitada 90

Petición de herencia..... 92

La previa declaratoria de heredero es un requisito esencial para que, posteriormente y comprobado un mejor derecho, se decida sobre la pretensión 92

Para iniciar la acción no es necesaria la calidad de heredero, sino comprobar tenerla, es decir, que el actor demuestre su vocación sucesoral..... 92

Postulación preceptiva 94

Ausencia de la infracción alegada por falta de postulación del abogado recurrente 94

El mandato, es un contrato preparatorio que tiene por objeto habilitar a una persona llamada mandatario para que celebre uno o más actos jurídicos en representación del mandante 96

La representación judicial y la defensa jurídica de las partes, ambas deben ser confiada y ejercidas por un abogado..... 97

La postulación es una facultad de los abogados para realizar peticiones jurídicamente relevantes, como representante de las partes o asistiendo a éstas 97

Prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio..... 98

No ha sido aplicada erróneamente la norma legal invocada, la posesión fue ejercida en cierto lapso del tiempo por personas que aún no tenían la capacidad para ejercer derechos, ni adquirir obligaciones por sí mismas 98

El derecho a adquirir por la figura de la prescripción, se relaciona con los elementos constitutivos de la posesión 99

Capacidad legal de las personas naturales 99

Prescripción 100

Interrupción civil de la prescripción 100

La presentación de la demanda interrumpe la prescripción, con la aclaración de que la notificación de la admisión de la demanda debe realizarse en forma legal 102

Pretensión procesal 103

El artículo 90 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando menciona otra clase de situaciones jurídicas, se refiere a cualquier otra situación jurídica en relación con las pretensiones de mera declaración de la existencia o alcance de un derecho o una obligación 103

Prevenciones 104

Frente a la inexistente regulación de las prevenciones en materia recursiva, no se transgrede el acceso al recurso por parte de los tribunales de segunda instancia, ya que no obstaculizan con ello el ejercicio del derecho 104

Principio iura novit curia 105

Sin modificar los hechos planteados como presupuestos normativos, alegaciones o interpretaciones expuestos en el recurso; el juzgador debe valerse del conocimiento en el derecho para modificar o subsanar aquellas omisiones en la fundamentación jurídica, inclusive, en la corrección de errores jurídicos 105

Proceso de autorización de destitución del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 107

La sentencia dictada en los procesos tramitados conforme a la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa, no admite recurso de casación 107

Proceso de terminación de contrato de arrendamiento 108

Ausencia de interpretación errónea de ley, considerando que no se trata de una terminación unilateral del contrato, pues la parte arrendataria al suscribirlo consintió la terminación con el preaviso de la no prórroga del mismo 108

Contrato de “ejecución sucesiva” 110

Ausencia de la infracción alegada respecto de la inaplicación del artículo 1435 inciso 1º del Código Civil, puesto que la cámara hizo una correcta interpretación de lo pactado por las partes contratantes 111

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 113

Las recomendaciones dadas en los procesos que conoce esta institución no generan el rigor requerido para hacerlas valer en un proceso cuya pretensión sea indemnizatoria 113

Recurso de apelación 115

Ausencia de las infracciones alegadas 115

Imposibilidad de configurarse la violación en el derecho aplicado por el juez, cuando del análisis no se especifica el tipo de infracción cometida en la sentencia para su respectiva revisión 117

Procede su admisión al constatarse que los recurrentes pidieron que se revisara la falta de valoración respecto de los elementos probatorios en su conjunto, siendo que la posesión no fue desvirtuada con los otros medios de prueba presentados 117

Recurso de casación 118

Imposibilidad de casar la sentencia, al no demostrar un error de interpretación, sino de un supuesto que atañe a un motivo distinto del invocado 118

Resoluciones de los tribunales colegiados 120

Método para la adopción de decisiones 120

Revisión de sentencia firme 122

Requisitos de procedencia y de interposición 122

Servidumbre de electroducto 124

Analogía jurídica 124

La Ley de Constitución de Servidumbres para las Obras de Electrificación Nacional habilita el establecimiento de dicho gravamen, aún sin el consentimiento del propietario, en beneficio de los servicios eléctricos, que son de interés público; se concluye que la naturaleza de la servidumbre que se intenta adquirir por prescripción, es de tipo legal 125

Voto disidente de la magistrada doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz 126

Infracción de requisitos internos y externos de la sentencia 126

El control en casación de la motivación jurídica no puede restringirse únicamente a las sentencias 126

Voto razonado concurrente de la magistrada doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz 128

Cierre temporal de establecimiento 128

El recurso de casación es improcedente por falta de competencia material de la Sala de lo Civil, ya que el conocimiento sobre la legalidad de los actos impugnados debe ser ventilada en la jurisdicción contencioso administrativa 128

Voto razonado de la magistrada doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz 136

Proceso de autorización de destitución del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer..... 136

En vista que la solicitud fue promovida el uno de noviembre de dos mil quince es aplicable la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 136

Voto razonado de la magistrada doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz 143

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 143

Omisión en la fundamentación jurídica de la sentencia, al no citar las disposiciones legales que determinan el alcance de las decisiones pronunciadas por la institución 143

Posibilidad que la Sala de lo Civil, conociendo en apelación, corrija la motivación jurídica de la sentencia que hubiere pronunciado el tribunal inferior..... 146

Voto razonado..... 147

En los votos razonados el magistrado no tiene por qué pronunciarse sobre aspectos de la resolución con los que está de acuerdo..... 147

MATERIA: FAMILIA

Aplicación errónea de ley..... 149

Declaratoria de inadmisibilidad, se advierte una simple insatisfacción con la valoración de los medios probatorios, con los que pretendieron demostrar la proporción de los recursos económicos aportados por cada cónyuge dentro del matrimonio 149

Inaplicabilidad de la ley 152

Los recurrentes no han desarrollado un concepto de inaplicación de ley, específicamente del art. 56 LPF 152

Requisitos a considerar para que proceda el vicio alegado..... 153

El vicio alegado no se configura respecto al art. 357 CPCM, cuando la prueba testimonial en controversia no es la única fuente de prueba, por lo que en nada modifica la decisión, no siendo la disposición esencial para resolver la controversia 155

Nulidad por inobservancia de disposiciones aplicables según los hechos controvertidos..... 157

Ejecución de sentencia de homologación del acuerdo de divorcio debe tramitarse conforme a la ley con la que se inició y sentenció el caso, aun cuando la ley se encuentre derogada..... 157

Recurso de casación..... 160

Improcedencia contra resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de sentencia en la modalidad de embargo, relacionado a cuota de alimentos impuesta en sentencia proveída en proceso de divorcio..... 160

Sentencia firme..... 161

Improcedencia de la revisión al advertirse un defecto en la pretensión, ya que no se puede alegar fraude argumentando que se obtuvo una sentencia favorable mediante engaños, cuando se ha tenido acceso a toda la información contenida en la demanda . 161

Violencia intrafamiliar 164

Improcedencia del recurso de casación cuando se interpone contra resoluciones pronunciadas en estos procesos 164

Voto disidente de la doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz..... 165

Sentencia firme..... 165

Procede la revisión cuando las partes incurren en una conducta fraudulenta durante el desarrollo del proceso, actuando mediante engaño, lo que genera una afectación en el pronunciamiento de la sentencia..... 165

Voto razonado del magistrado doctor Ovidio Bonilla Flores 168

Recurso de casación..... 168

Límites de la cognición del tribunal casacional y los efectos de sus decisiones 168

Finalidad 169

La función propiamente casacional es la de verificar la existencia o no del posible vicio, en cuanto a la norma de derecho, sin entrar a los hechos..... 173

MATERIA: LABORAL

Abandono de labores..... 179

El trabajador, iniciada la prestación del servicio, renuncia a su derecho a seguir ocupando su puesto de trabajo y lo deja definitivamente, lo que supone una decisión libre de su voluntad, sigue un estado de separación definitiva de sus labores 179

Dado que el despido se presume, en consecuencia, es procedente condenar a la demandada al pago de indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional 181

Aplicación indebida de ley 182

El vicio alegado no se configura cuando no se logra establecer que el ad quem haya enmarcado los hechos del caso concreto en la hipótesis contenida en la norma, es decir, que haya aplicado el art. 414 del Código de Trabajo 182

Asistentes de grupos parlamentarios 183

Código deTrabajo aplicable a estos trabajadores 183

Conciliación 186

Declaratoria de inadmisibilidad cuando el recurrente no reclamó la subsanación de la falta de citación legal, haciendo uso oportuno y en todos sus grados de los recursos establecidos por la ley 186

Confesión 187

La presunción establecida en el art. 347 CPCM, que opera al no haber comparecido la persona que debió de realizar la declaración de parte contraria, no se puede enmarcar dentro de la figura de confesión, por lo que el vicio alegado no se configura 187

Contrato individual de trabajo 189

Presupuestos normativos para su existencia 189

Procede casar la sentencia, la camara sentenciadora amplió el contenido del art. 17 CT 191

Establecido el incumplimiento del reinstalo del trabajador, conforme las pruebas aportadas, se presume el despido de acuerdo al inciso 3° del art. 414 CT 191

Cuando el fallo omitiere resolver puntos planteados 195

El vicio alegado no tiene lugar, cuando el ad quem estaba imposibilitado de conocer de una prestación que no fue reclamada en la demanda 195

Procede cuando el ad quem omite analizar parte de la prueba testimonial, en virtud que no hizo pronunciamiento alguno sobre la falta de credibilidad alegada por el nexo filial del testigo con el trabajador demandante 197

Debido proceso 205

Declaratoria de inadmisibilidad cuando el recurrente no desarrolla de qué manera los derechos de audiencia y de defensa fueron vulnerados por el ad quem 205

Declaración de parte contraria 207

Inexistencia de arbitrariedad al realizar su valoración 207

Despido de hecho 209

Procedencia 209

Directivos sindicales 211

Derecho a la estabilidad laboral mientras dure el fuero sindical 211

Doctrina legal 216

Cámara aplicó de forma indebida los presupuestos establecidos en la doctrina legal, sustentada por esta Sala en sentencia con referencia 57-cal-2016 216

Declaratoria de inadmisibilidad cuando de lo expuesto por el recurrente se advierte que cita únicamente dos sentencias definitivas, con lo que no se cumple el número de sentencias que la normativa determina para que se constituya doctrina legal 219

Documento privado autenticado de renuncia 221

El vicio alegado no se configura, cuando el recurrente no ataca el valor probatorio que se le otorgó, no se centra en el contenido del documento en sí, sino en cómo éste fue certificado 221

Error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial 223

Declaratoria de inadmisibilidad, cuando el recurrente no logra determinar en qué consiste la vulneración respecto al art. 461 del Código deTrabajo, ya que no expone cómo el ad quem dejó de aplicar el sistema de la sana crítica en su fundamentación 223

El ad quem no comete el vicio cuando no tiene la obligación de considerar, ni valorar la supuesta contradicción del testigo de cargo en el contrainterrogatorio, en cuanto al lugar en que se efectuó el despido, por una inconformidad del demandado..... 224

El vicio alegado no se configura cuando el ad quem no ha valorado la prueba testimonial, por lo que no hay forma de determinar si existió una valoración abusiva, excesiva o indebida 227

El vicio alegado no se configura cuando el recurrente alega que el ad quem no expuso por qué la única testigo de cargo le merece plena fe, pero se advierte que sí analizó el contenido de lo expuesto por los testigos 229

Error de hecho en la apreciación de la prueba documental 231

Inexistencia del vicio alegado 231

Error de hecho en la apreciación de la prueba instrumental 233

El ad quem omitió incorporar certificación de las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde se evidencia que el empleador no hizo efectivo el pago de la prestación económica por renuncia voluntaria..... 233

Excepciones 238

Momento procesal oportuno para la interposición de todas aquellas excepciones que no se refieran a la competencia jurisdiccional 238

Interpretación errónea de ley 243

El vicio alegado no tiene lugar cuando el ad quem no aplicó la norma que el impetrante citó como infringida 243

Presunción de despido 244

El ad quem no comete la infracción alegada al existir prueba en contrario, es decir, la prueba testimonial de descargo, lo cual es una limitante para aplicar la prerrogativa al trabajador 244

No opera cuando no se acepta el reinstalo por parte del trabajador o su representante..... 248

Presunciones 251

Imposibilidad de aplicar la presunción del art. 414 CT, por no cumplir con los requisitos 251

La presunción contenida en el art. 414 del CT. No opera cuando se establece que hubo abandono del trabajador a sus labores, al no asistir a la declaración de parte contraria solicitada por la patronal, por lo que el vicio alegado no se configura..... 253

No es posible aplicar las presunciones establecidas en el art. 414 CT, por ausencia de prueba respecto a la relación laboral del demandante con los demandados 255

Prueba documental 257

Declaratoria de inadmisibilidad por falta de congruencia entre el concepto desarrollado y el vicio señalado..... 257

El ad quem no comete el vicio alegado cuando se concluye que ha hecho una correcta valoración del documento objeto de reclamo..... 258

Inexistencia de error de derecho en la apreciación de la prueba, dado que la cámara no le otorgó ni le negó valor alguno a la prueba documental 260

Prueba testimonial 261

Declaratoria de inadmisibilidad cuando no se fundamenta de forma viable la infracción alegada 261

Inexistencia de error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, ya que no hay forma de determinar si existió una valoración abusiva, excesiva o indebida..... 263

Recurso de casación..... 264

Aspectos generales 264

Que se permita la impugnación de autos pronunciados en apelación, por medio del recurso de casación en materia civil y mercantil, no implica que esté autorizada la casación per saltum 265

Improcedencia en contra de la resolución que declara desierta la apelación intentada .. 268

Improcedencia, cuando no se cumple con el requisito que establece el artículo 586 del Código de Trabajo, referente a la cuantía 269

Improcedencia cuando se recurre de la resolución que declara improponible la demanda 269

Sana crítica 270

Inexistencia de infracción 270

Trámite de remisión del recurso de apelación al tribunal de grado 272

Mera inconformidad con este trámite regulado en el art. 575 CT, juridicamente no se puede fundamentar una interpretación errónea 272

Ultra petita 274

Cuando la cámara concede más de lo pedido por el actor en su demanda se produce una clara violación al principio de congruencia 274

Valoración de la prueba documental 278

Declaratoria de inadmisibilidad cuando la queja del recurrente se refiere a una inconformidad con la valoración de prueba, sin que el argumento tenga relación con el vicio alegado 278

Violación de ley 280

El vicio alegado no se configura en relación al art. 414 CT, cuando se evidencia con la prueba aportada al proceso, que el trabajador había continuado laborando después de la fecha del supuesto despido, lo que volvía incongruente lo reclamado 280

El vicio alegado no se configura respecto al art. 50 causal 3 CT, cuando no se evidencia un argumento sólido que demuestre que las actuaciones que se le atribuyen al trabajador acrediten la causal de pérdida de la confianza 282

Los argumentos de la recurrente son incongruentes respecto de la sentencia que pretende impugnar 283

Voto razonado de la magistrada doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz 284

Recurso de casación 284

En materia laboral es procedente el recurso de casación respecto de autos definitivos 284

La regulación sobre la impugnación en materia laboral no se ajusta a los parámetros constitucionales 284

Vulneración al principio de igualdad, al existir diferenciación entre la impugnabilidad de sentencias y de autos definitivos, en materia civil y mercantil, con relación a la materia laboral 288

Los arts. 586 CT y 519 CPCM, resultan contrarios al derecho a recurrir y al principio de igualdad proclamados en la Constitución, por tanto, no deben ser aplicados por esta Sala . 291

MATERIA: MERCANTIL

Contrato de obra pública 295

Cuando se susciten conflictos por impago de una municipalidad serán dirimidas de conformidad a lo previsto en la ley especial que le rige y, según lo previsto contractualmente 295

Las vías alternas de solución de conflictos, como el arbitraje o el trato directo, proceden cuando ha sido convencional entre la administración contratante y el contratista 297

El reclamo de una cantidad de dinero pendiente de pago por parte de la municipalidad, que deviene de la relación contractual bilateral, debe dirimirse en los tribunales comunes 299

La competencia para conocer de una demanda civil o mercantil, entre un particular y la municipalidad, siempre que no verse sobre la legalidad de actos estrictamente de carácter administrativo, corresponderá a los tribunales de primera instancia 300

A partir de la estructura orgánica que poseen las municipalidades, se colige que éstas no forman parte del gobierno central, por su autonomía, tendrán competencia los tribunales de primera instancia 301

La relación contractual deviene de un acto de comercio relativo y mixto, en tanto que la sociedad demandante, siendo comerciante social, al contratar actuó en la explotación de sus finalidades comerciales, es decir, actos en masa..... 302

Se configura nulidad absoluta, al sustanciarse la demanda de incumplimiento de contrato en materia civil, no mercantil, incurriéndose en el quebrantamiento de forma por incompetencia en razón de la materia 305

MATERIA: MEDIO AMBIENTE

Medidas cautelares ambientales..... 307

Improcedencia del recurso de casación, al no ser posible el acceso a esta vía recursiva extraordinaria, debido a que la ley restringe su conocimiento en razón de los efectos y caracteres de la misma..... 307